



CODIGO PENAL CONCORDADO

EJEMPLAR

2053

IMPRESO EN LA ARGENTINA

Queda hecho el depósito que previene la ley Nº 11.723

Copyright by Editorial "MOR"

Calle Lavalle 1525 - Buenos Aires

**JURISPRUDENCIA
ANTECEDENTES
BIBLIOGRAFIA
LEGISLACION
FUENTES**

RELIGION	19-101	E-237
COUNTRY		
NAME		
DATE		
FILE NAME		

EDITORIAL MOR
1942



PALABRAS PRELIMINARES



LA Editorial Mor al difundir su Repertorio Jurídico, nueva forma de clasificación jurisprudencial en fichas, ha procurado primordialmente, entregar a la práctica de la profesión jurídica un medio de consulta rápido y eficaz de la doctrina de nuestros tribunales que, al par de su conocimiento científico, aportara una facilitación efectiva para su consideración y aplicación más útil.

Esas finalidades no se cumplirían integralmente, si la Editorial Mor no abordase en forma concordante la difusión de publicaciones jurídicas, que concurrieran, asimismo, a la consecución de aquéllas. [REDACTED]

Por eso, edita hoy la Editorial Mor, la presente obra del Dr. H. M. Pinto Bouquet que con igual sentido de colaboración práctica para el mejor conocimiento y aplicación de la legislación penal del país, ordena bajo cada artículo del Código de la materia, la jurisprudencia, la bibliografía, las referencias legislativas concordantes, los antecedentes y fuentes del Código.

Inspirada la obra, en el sistema que hicieron imprescindible en Francia las que con igual criterio difundieron Sirey, Dalloz y Carpentier; en Italia Fada, Porro y Raimondi; y en Bélgica Pertjens - Mechelynk; la publicación que abordamos y entregamos a los estudiosos del Derecho, viene a llenar un vacío, que era de impostergable deber científico cubrir perentoriamente.

Título pleno de la importancia y sentido práctico de la publicación que editamos, lo constituye indiscutiblemente la autoridad jurídica en la materia penal de quien la prologa; y es bajo tan auspiciosa advocación, que entregamos la obra del Dr. Pinto Bouquet al conocimiento público.

LOS EDITORES.



PROLOGO

Del doctor EUSEBIO GOMEZ

Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires



Difícil tarea es la de anotar un código. Difícil e ingrata, porque, generalmente, se olvida que su realización exige conocimiento efectivo de la materia sobre que versa el código anotado.

Nadie se detiene a pensar que tarea semejante reclama investigaciones prolijas y gran capacidad para el análisis. Por ello no es susceptible de llevarse a cabo sino por los que saben trabajar con desinterés, sin la preocupación del aplauso y sin otro anhelo que el de hacer obra útil.

Un código anotado escrupulosa y metódicamente como éste, facilita en grado sumo la tarea del intérprete. La indicación de las fuentes y concordancias de cada artículo, hecha en la nota respectiva, constituye poderoso auxiliar, máxime cuando, además, como en el presente caso, la jurisprudencia respectiva es prolijamente catalogada luego en un extenso índice analítico. La eficacia

de tal auxiliar no puede ser discutida. No la niegan, por cierto, los que, por una u otra razón, se ven precisados al manejo de los códigos.

El doctor Pinto Bouquet ha cumplido una labor encomiable con sus notas al Código Penal Argentino. No vacilo en afirmarlo. Hay en esas notas precisión y claridad. Informan en la medida de lo necesario. De ahí que no sea aventurado predecir el éxito del libro que las consigna. Se impondrá este, porque basta una simple ojeada para convencerse de su utilidad.

Buenos Aires, enero de 1942.



CUADRO DE ABREVIATURAS



- Art.** — Artículo.
Bibl. — Bibliografía.
C. Apel. Azul. — Cámara de Apelaciones de Azul, B. A.
C. Apel. Bahía Blanca. — Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca.
C. Apel. en lo Crim. Córdoba. — Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Córdoba.
C. Apel. Dolores. — Cámara de Apelaciones de Dolores, B. A.
C. 1º de Ap. La Plata. — Cámara Primera de Apelaciones de La Plata.
C. 2º de Ap. La Plata. — Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata.
C. Ap. Com. y Crim. Mendoza. — Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Criminal de Mendoza.
C. Apel. Rosario. — Cámara de Apelaciones de Rosario, Sala en lo Criminal.
C. Apel. Tuc. — Cámara de Apelaciones de Tucumán.
C. Civil 1º de la Cap. — Cámara Civil Primera de la Capital.
C. Civil 2º de la Cap. — Cámara Civil Segunda de la Capital.
C. Com. de la Cap. — Cámara Comercial de la Capital.
C. C. C. — Cámara Criminal y Correccional de la Capital.
C. Correc. Córdoba. — Cámara Correccional de Córdoba.
C. Fed. Bahía Blanca. — Cámara Federal de Bahía Blanca.
C. Fed. Cap. — Cámara Federal de la Capital.
C. Fed. Córdoba. — Cámara Federal de Córdoba.
C. Fed. La Plata. — Cámara Federal de La Plata.
C. Fed. Mendoza. — Cámara Federal de Mendoza.
C. Fed. Paraná. — Cámara Federal de Paraná.
C. Fed. Rosario. — Cámara Federal de Rosario.
C. Fed. de Tuc. — Cámara Federal de Tucumán.
C. de Paz Letrada. — Cámara de Paz Letrada de la Capital.
C. P. — Código Penal.
C. de Pr. Cr. — Código de Procedimientos en lo Criminal.
Corte Suprema. — Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fallos. — Fallos de la Corte Suprema de la Nación (Publicación Oficial).
Fallos. — Fallos de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital (Publicación Oficial).
G. del Foro. — Gaceta del Foro.
J. A. — Jurisprudencia Argentina, Revista Jurídica de la Capital.
La Ley. — Revista Jurídica "La Ley" de la Capital.
P. — Proyecto de Código Penal.
Parry. — Recopilación de los fallos de la Corte, hecha por el Dr. Parry.
Primera Inst. Cap. — Fallo de Primera Instancia en lo criminal de la Capital.
Recop. Ord. — "Recopilación Ordenada", Revista Jurídica de la Capital.
Rep. Jurid. — "Repertorio Juridico" (Jurisprudencia Clasificada en fichas). Buenos Aires.
Sup. Corte Bs. As. — Suprema Corte de Buenos Aires.
Sup. Corte de San Juan. — Suprema Corte de San Juan.
Sup. Corte Tuc. — Suprema Corte de Tucumán.
Sup. Trib. Entre Ríos. — Superior Tribunal de Entre Ríos.
Sup. Trib. San Luis. — Superior Tribunal de San Luis.
Sup. Trib. Santa Fe. — Superior Tribunal de Santa Fe.
Trib. Sup. Córdoba. — Tribunal Superior de Córdoba.



**TRATADISTAS ARGENTINOS Y SUS OBRAS MAS
CITADAS (1)**

- Aguirre Julián L.* — Código Penal de la República Argentina, Buenos Aires, 1887.
- Bunge Carlos Octavio.* — Curso de Derecho Penal. Buenos Aires, 1911.
- Coll Jorge Eduardo.* — La Acción Pública y el Derecho Penal, Bs. Aires, 1920.— Legislación y Tribunales para Menores, Bs. Aires, 1931. — Proyecto de Código Penal (en colaboración con Eusebio Gómez), Bs. Aires, 1937.
- Díaz Emilio.* — El Código Penal para la República Argentina, Bs. As. 1925. — Internamiento de seguridad., Bs. As. 1923.
- Gómez Eusebio.* — Criminología Argentina, Bs. As. 1912. — Pasión y Delito, Bs. As. 1917. — La Mala Vida en Bs. As., 1913. — La Reforma del Código Penal italiano, Bs. As. 1926. — Doctrina Penal y Penitenciaria, Bs. As. 1929. — Delincuencia Político Social, Bs. As. 1933. — Tratado de Derecho Penal, Bs. As. 1939-1941. — Proyecto de Código Penal (en colaboración con J. E. Coll), Bs. As. 1937.
- González Roura O.* — Derecho Penal, Bs. As. 1927.
- González Juan F.* — El Código Penal y la Jurisprudencia, Bs. As. 1936.
- Herrera Julio.* — La Reforma Penal, Bs. As. 1911.
- Jofré Tomás.* — El Código Penal de 1922, Bs. As. 1923.
- Moreno Rodolfo.* — El Código Penal y sus antecedentes, Bs. As. 1923. — La Ley Penal Argentina, La Plata 1903. — El Problema Penal, Bs. Aires 1933.
- Malagarrija Carlos.* — Código Penal Argentino, Bs. As. 1927. — Instituciones Penales Argentinas, Bs. As. 1929.
- Moyano Gacitúa Cornelio.* — Curso de Ciencia Criminal, Bs. As. 1899. — Delincuencia Argentina, Córdoba 1905.
- Molinario Alfredo J.* — Condena de Ejecución Condicional, Bs. As. 1925.

- El Delito de Lesiones (Compilación Terza y Decoud. Bs. As. 1838).
 — Derecho Penal (Compilación R. Albarracín), Bs. As. 1937.
- Obarrio Manuel.** — Curso de Derecho Penal, Bs. As. 1884.
- Peco José.** — La Reforma Penal Argentina 1917-20, Bs. As. 1921. — La Reforma Penal en el Senado de 1933, Bs. As. 1936. — El Uxoricidio por Adulterio, Bs. As. 1929.
- Ramos Juan P.** — La Codificación Penal Argentina, Bs. As. 1917. — Concordancias del Proyecto de Código Penal de 1917, Bs. As. 1921. — Curso de Derecho Penal (Compilación Argüello y Frutos), Bs. Aires 1929. — El Juicio Penal y el Delincuente. (Ver notas sobre "estado peligroso" en la bibliografía del artículo 41.)
- Raffo de la Reta J. C.** — Código Penal Argentino, Bs. As. 1921.
- Rivarola Rodolfo.** — Exposición y Crítica del Derecho Penal Argentino, Bs. As. 1890. — Derecho Penal Argentino, Madrid 1910. — Proyecto de Código Penal para la República Argentina (en colaboración con José Nicolás Matienzo y Norberto Piñero), 2ª edición, Bs. As. 1898.
- Soler Sebastián.** — Exposición y Crítica del Estado Peligroso, Córdoba 1926. — Elemento Político de la Fórmula del Estado Peligroso, Bs. As. 1934. — Derecho Penal Argentino, Córdoba 1940. — Observaciones Críticas del Positivismo Penal, Santa Fe 1932. — El Proyecto Kryienko, Córdoba 1934. — Anteproyecto de Código de Faltas para la Prov. de Santa Fe, Córdoba 1936.
- Tejedor Carlos.** — Curso de Derecho Criminal, Bs. As. 1860. — Proyecto de Código Penal para la Rep. Arg., Buenos Aires 1866-7.

(1) La bibliografía especial nacional y extranjera, va en cada caso, al pie del artículo correspondiente.

DISPOSICIONES PENALES ANTERIORES AL CODIGO VIGENTE ⁽¹⁾

(Breve reseña histórica)

Leyes que rigieron durante la Colonia

Fuero Juzgo o Código Visigótico o "Liber Iudiciorum".
Partidas de Alfonso El Sabio (1448). (Pda. VII, Título VII a XXIX.)
Leyes de Toro, año 1502 (83 Leyes).
Leyes de Indias año 1661.

Disposiciones penales de los primeros gobiernos patrios

- 1810 — Resolución sobre duelos (penándolos).
- 1811 — (4 Octubre) Bando contra los ladrones (en nombre de Fernando VII).
- 1812 — (Abril) Sobre robos y asesinatos (complementa el anterior).
- 1812 — (Marzo 11) Bando sobre juego y riñas.
- 1814 — (Dic. 30) El Director Posadas pena con la muerte a due-
listas y padrinos.
- 1815 — (Marzo 28) Decreto de Alvear sobre conspiración, traición,
etcétera.
- 1817 — (Set. 23) Decreto de Pueyrredón sobre contrabando.
- 1820 — Bando de la Junta de Representantes sobre anarquía, al-
teraciones del orden, etc.
- 1821 — (Nov. 27) Ley prohibiendo el uso de armas y señalando
penas para autores de lesiones.
- 1823 — (Junio 5) Ley de la Junta de Representantes aboliendo el
Fuero Personal.
- 1824 — (Nov. 15) Declarando piratería la trata de negros.

Gobierno de Rosas

- 1830 — (Enero 5) Reprimiendo el abuso de armas.
- 1830 — (Enero 27) Sobre marcas en animales del Estado y penas
a quienes las alterasen.
- 1837 — (Enero 19) Prohibiendo los velorios.

(1) **BIBLIOGRAFIA:** EUSEBIO GOMEZ: Criminología Argentina; Bs. As. 1912.
— JOSE PECO: La Reforma Penal Argentina 1917-20; Bs. As. 1921. — Id.: La Reforma Penal en el Senado de 1933; Bs. As. 1936. — RODOLFO RIVAROLA: Origen y Evolución del Derecho Penal Argentino; Bs. As. 1900. — Id.: Derecho Penal Argentino. (parte general), Madrid 1910. — JUAN P. RAMOS: Conferencias sobre el Derecho Penal Argentino; Bs. As. 1929. — Id.: Curso de Derecho Penal (Comp. Argüello y Frutos); Bs. As. 1929. — RODOLFO MORENO: El Código Penal y sus antecedentes; Bs. As. 1923. — FRANCISCO P. LAPLAZA: Los Estudios Penales en la Argentina (Boletín mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales) 1938, Nos. 67 y 68. — AURELIO PRADO y ROJAS: Recopilación de Leyes y Decretos Promulgados en la Provincia de Buenos Aires.



- 1840 — (Oct. 31) Penando el robo y las heridas, aún leves, con la muerte.
1844 — (Feb. 22) Prohibiendo el juego con agua en Carnaval (3 años de trabajos públicos a los infractores).

Decretos del general Urquiza

- 1852 — (Agosto 7) Dejando sin efecto la confiscación de los bienes de Rosas.
1852 — (Agosto 7) Aboliendo la pena de muerte para delitos políticos.
1852 — (Agosto 24) Nombrando una comisión redactora de los Códigos Civil, Comercial y Penal.

Era Constitucional

(Principales leyes penales)

- Ley 36 — (6 de Junio 1863) Autorizando al P. E. a nombrar comisiones redactoras de los Códigos.
Ley 94 — (Agosto de 1864) Prohibiendo la Pena de Azotes.
Ley 514 — (Agosto de 1864) Suprimiendo la prisión por deudas.

Proyecto Tejedor

Nombrado por el P. E. para redactar el Código Penal, de acuerdo al inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional y a lo dispuesto por la Ley N° 36, el doctor Carlos Tejedor, presentó su proyecto en 1865 (parte general) y en 1867 la parte especial. Inspirado en el Código de Baviera, las notas que trae al pie de cada artículo son de gran importancia como base de interpretación. No legisla sobre los delitos que penaba la Ley 49, método que fué seguido por el proyecto de Villegas, Ugarriza y García.

Proyecto Villegas, Ugarriza y García

En cumplimiento de la Ley N° 250, el P. E. nombra una Comisión de tres juriconsultos para examinar el código Tejedor. Por renunciaciones sucesivas, formaron parte de ella, los doctores José Roque Pérez, Marcelino Ugarte, Manuel Quintana, Vicente Fidel López y Antonio Malaver, quedando últimamente constituida por los doctores Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García, quienes elevaron el informe requerido en 1881. Este Proyecto no ha tenido gran influencia porque, cuando se trató de dictar el Código derogado, el Congreso tomó como base directa el Proyecto Tejedor.

Ley N° 49 de 14 de septiembre de 1863

Hasta esta fecha, seguían rigiendo en el país, con ligeras modificaciones, las leyes españolas. Era necesario entonces, y de

acuerdo a la Const. Nacional, reglamentar lo referente a Tratados con Naciones Extranjeras, Cónsules, asuntos en que la Nación fuere parte, etc. En material penal, los delitos contra el Estado traición, sedición, falsificación de moneda, piratería, rebelión), no podían preverse en las leyes españolas. Por eso se dictó la Ley 49 que legislaba sobre delitos cuyo juzgamiento correspondía a los Tribunales Federales y establecía las penalidades consiguientes.

Código derogado

Promulgado el 7 de diciembre de 1886, rigió desde el 1º de marzo de 1887 hasta la entrada en vigencia del Código actual. Tiene por base el Proyecto del Dr. Tejedor (que ya había sido adoptado por casi todas las provincias) con modificaciones introducidas por una Comisión de Diputados compuesta por los doctores Isaías Gil, Filemón Posse, Mariano Demaría, Bernardo Solveyra, Félix M. Gómez y Ernesto Colombres.

Proyecto de 1891

El 7 de junio de 1890, el P. E. Nacional nombra a los doctores Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo para que proyecten las reformas necesarias al Código de 1886. Esta Comisión presenta su proyecto en junio de 1891. Se trata de un Código completo, precedido de una exposición de motivos. Quedan incluidos en el mismo, las disposiciones de la Ley N° 49, sobre delitos del fuero federal, realizando en tal forma la unidad en materia penal.

Ley de reformas (4189)

Tiene su origen en el Proyecto de 1891 del cual toma la casi totalidad de su articulado. Tiene también en cuenta, dos leyes reformativas del Código Penal: la N° 3335 de 26 de Dic. de 1895 sobre reincidencia y la N° 3972 de 17 de Nov. de 1900 sobre represión de la falsificación de moneda.

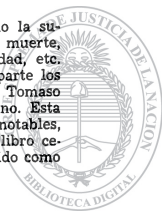
Proyecto de 1906

El 19 de diciembre de 1904 el P. E., designa una Comisión compuesta por los Dres. Francisco Beazley, Rodolfo Rivarola, Diego Saavedra, Cornelio Moyano Gacitúa, Norberto Piñero y José María Ramos Mejía, para que formule un Proyecto de Reformas al Código de 1886. La Comisión presentó el 10 de marzo de 1910 un proyecto de Código que unificaba toda la legislación penal. El proyecto pasó a la Comisión de Códigos del Senado donde nunca fué tratado. (Sobre éste proyecto ver "La Reforma Penal" del doctor Julio Herrera. Bs. As., 1911.)

Proyecto de 1916

Su autor, el doctor Rodolfo Moreno, tomó como base el pro-

yecto de 1906, introduciéndole modificaciones, tales como la supresión del Libro sobre Faltas, supresión de la pena de muerte, aumento, de penalidad en los delitos contra la honestidad, etc. La Cámara nombró una Comisión de la que formaban parte los Dres. Gerónimo del Barco, Delfor del Valle, Antonio De Tomaso y Carlos Pradere presidida por el doctor Rodolfo Moreno. Esta Comisión, previa una encuesta entre los juristas más notables, presentó a la Cámara el Proyecto que fué sancionado a libro cerrado en la sesión del 21 de agosto de 1917 y que es conocido como Proyecto de 1917.



Código vigente

El Proyecto sancionado por la Cámara de Diputados a libro cerrado, pasó a la de Senadores cuya Comisión de Códigos formada por los Dres. Joaquín V. González, E. del Valle Iberlucea y Pedro A. Garro, presentó su informe introduciéndole varias reformas. Se tuvo en cuenta nuevamente la opinión de los juriconsultos más notables que fueron oídos por indicación del doctor Joaquín V. González. El 30 de septiembre de 1921 quedó sancionado por el Senado. Fué promulgado el 29 de octubre de 1921 y rige desde el 29 de abril de 1922.

PROYECTOS POSTERIORES AL CODIGO VIGENTE

Proyecto de 1932

En dicho año el P. E. envía al Congreso un proyecto de reformas al Código Penal vigente. Las principales versan sobre régimen de la pena, tentativa, reincidencia, extinción de acciones y de penas, delitos contra las personas, delitos contra la honestidad, delitos contra la propiedad, contra el orden público, contra la seguridad de la Nación, etc. Este proyecto con algunas modificaciones tenía por base los proyectos de 1926 y 1928 sobre estado peligroso. Fué sancionado por el Senado pero nunca fué tratado en Diputados.

Proyecto Coll-Gómez (1937)

Por Decretos del 28 de agosto y 18 de septiembre de 1936, el P. E. nombra a los Dres. Jorge Eduardo Coll y Eusebio Gómez para formular un anteproyecto de reformas al Código Penal.

El 8 de julio de 1937 los nombrados, presentan un proyecto de Código Penal que consta de 393 artículos y un Título de Disposiciones Supletorias, precedido de una extensa exposición de motivos. Acerca de este Proyecto, transcribimos algunos párrafos del estudio crítico del eminente penalista Eugenio Florián, publicado en "La Scuola Positiva", Milán, 1938, fasc. 1-2, p. 25:

"1. Quizá nunca el positivismo criminológico tuvo en Améri-

"ca Latina una manifestación legislativa semejante a este proyecto, que se pone atrevidamente a la cabeza de cuantos códigos o proyectos ha elaborado la América Latina en los últimos tiempos, esto es, después del advenimiento del proyecto Ferri. El proyecto enarbola una bandera, sinceramente y sin ficciones o restricciones mentales, y permanece constantemente fiel a ella. Se puede agregar que está bien próximo al proyecto Ferri. Sea dicho de inmediato que supera el dualismo de los códigos eclecticos hoy prevalente, y lo hace plenamente en el ámbito de la imputabilidad y de las sanciones. De donde: peligrosidad, responsabilidad legal, clasificación de los delinquentes, unificación por concepto y nomenclatura de las sanciones. Y encierra también otro notable valor: el de orientarse en una buena directiva jurídica y adoptar con frecuencia fórmulas técnicamente apropiadas.

"Los autores del Proyecto —los ilustres doctores Jorge E. Coll y Eusebio Gómez— no solamente lo han compilado cuidadosamente, sino que lo han hecho preceder por una clara, sucinta y eficaz *Exposición de motivos*, que demuestra bellamente los criterios en los cuales se ha inspirado la reforma, criterios que son los de nuestra escuela gloriosa: concepción del delito como fenómeno natural y social, defensa social como base de la lucha del Estado contra la delincuencia, sustitución por el criterio subjetivo del criterio objetivo de las antiguas leyes, y de ahí que el juicio esencial recaiga sobre el delincuente; y finalmente, peligrosidad y sanciones unificadas."

Este Proyecto se encuentra a consideración del Congreso.

Proyecto Peco (1941)

El 25 de septiembre de 1941, el profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata, diputado nacional doctor José Peco, presentó a la Cámara de que forma parte, un proyecto de Código Penal. No habiendo sido publicado aún, carecemos de datos sobre el referido Proyecto, salvo las elogiosas referencias de Jiménez de Asúa en "La Ley", octubre 8 de 1941, p. 5.

LEYES POSTERIORES A LA SANCION DEL CODIGO PENAL

En el período Legislativo de 1933, se sancionaron las importantes leyes siguientes: N° 11723 (26 Set.) sobre Propiedad Intelectual que contiene disposiciones penales equiparando a la estafa, ciertas trasgresiones a la misma. La Ley 11738 (13 Set.) modificatoria de las leyes 8871 y 11387, sobre exclusión del padrón electoral de los condenados; la ley 11752 de octubre 9, sobre creación del Registro Nacional de Reincidentes y la ley 11833 de igual fecha sobre Organización Carcelaria y Régimen Penal. Con anterioridad, fueron sancionadas las leyes 11210 sobre Represión de la Especulación y Monopolios, cuyo art. 10 ordena incorporarlas al

Código Penal; las leyes 11309 y 11.331, modificatorias y ampliatorias de los artículos 204 y 205 del C. Penal. En el período legislativo de 1936, fué sancionada la ley 12.331, sobre Profilaxis de las Enfermedades Venéreas.

PROYECTOS PENDIENTES DE SANCION

Además de los proyectos del P. E. de 1932 y de 1937 (Proyecto Coll-Gómez) se hallan sometidos a la consideración del Congreso, un proyecto de trascendencia por cuanto amplía la interrupción de la prescripción de la acción penal, modificando los arts. 63, 64, 66 y 67 del Código Penal y que ya ha sido considerado por el Senado el 18 de septiembre de 1941 (verlo al pie del art. 63 de esta obra); dos proyectos del P. E. modificando los artículos 219 y 221 del C. P. (ambos de fecha enero 8/41) y un proyecto penando el enriquecimiento ilegal de los funcionarios públicos que ya ha sido sancionado por el Senado el 17 de junio de 1941 (verlo al pie del art. 259).



Indice Analítico de la Jurisprudencia Citada

(Los Números Corresponden a los Sumarios)



A

ABANDONO

- De bienes por depositario (malversación) 2744
- De servicio por empleado de transportes 2395/8

ABANDONO DE PERSONA

- Persona mayor enferma 1362 a 1365
- Falta de asistencia a la concubina 1362
- De niño de pocos días 1363
- 1364

"ABERRATIO ICTUS" 1032 a 1034

ABOGADO (Ver Prevaricato).

ABORTO

- Causado por la propia mujer 1239 a 1243
- Causado por accidente de tráfico 1237/8
- Con consentimiento de la mujer 1236
- Sin consentimiento de la mujer 1232 a 1235

ABUSO DE AUTORIDAD 2670 a 2675

ABUSO DE ARMAS 1344 a 1368

ABUSO DE CONFIANZA

- En la usurpación 2315 a 2330
- Defraudación por 2005/8

ABUSO DESHONESTO

- Concepto 1670/74/5/6/7/8
- Contagio venéreo 1671/2
- Y lesiones 1673
- Mediante seducción de mayor de 12 años 1680

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

- Defraudación por 2128 a 2136
- Prescripción 2137
- Tentativa 2136

ABUSO DE PASIONES O NECESIDADES DE UN MENOR O INCAPAZ

—Defraudación 2222 a 2225

ABSOLUCION

—Del acusado en lo criminal — Su influencia en lo Civil 307 a 323
—Del acusado en lo criminal — Resarcimiento de daños
y perjuicios 307 a 323
—Del acusado en lo criminal—Cosa juzgada para lo Civil 307 a 323

ACCESORIAS DE RECLUSION

—Aplicada de oficio 718 a 746
—Como medida de seguridad 734 a 742
720/5/6/8
724/733
—Delinquentes menores 736/7
—Delitos cometidos en la minoridad 704 a 717
—Libertad condicional 725
—Mayores de 60 años condenados 722
—Reclusión por el tiempo de la condena 704 a 717
—Reclusión por tiempo indeterminado 718 a 746
—Requisitos 718 a 746

ACCIDENTE DE TRAFICO

—Aborto causado por 1237/8

ACCION CRIMINAL

—Contemporánea con la civil en los daños y perjuicios 302 a 306

ACCIONES DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA

—Averiguación policial en delito de estupro 986 a 1004
—Equiparación del concubino al padre del menor 1004
—Procedimiento de oficio 996/7
987/990/
1/4
—Violación denunciada por la madre 986
—Violación denunciada por el guardador 995

ACCIONES PRIVADAS

—Aparente contradicción de los arts. 73 y 76 del Código
Penal 1005 a 1008
—Reparación del daño moral y material 1005/11/13
—Competencia en caso de injuria 1006
—Intervención del Ministerio Público 1007
1008

ACCION POR DELITO DE ADULTERIO

—Entre esposos divorciados 1010
—Iniciada por cónyuge ofendido 1009

ACCION PENAL (Prescripción de la)

—(Prescripción de la) 875 a 928
—Desde cuando corre 875 a 928
—Efectos 948
—En las multas 921 a 924
—En la tentativa 909 a 911
—En la pluralidad de infracciones 925 a 928
912 a 920

ACEPTACION DE CHEQUE CON FECHA POSTERIOR O EN BLANCO

2251/7

ACUMULACION

—De acciones 810
—De causas 818
—De penas 799/816/
817/820
—De términos de prescripción 819

ACTOS JURIDICOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO

3

ACTIVIDADES ATENTATORIAS A LA TRANQUILIDAD DEL PAIS	1
ACTUACIONES Y DILIGENCIAS JUDICIALES	
—(Falsificación de)	2889 a 2891
ADOQUINADO	
—(Daños en el)	2334 a 2347
ADMINISTRACION PUBLICA	
—(Defraudación en perjuicio de la)	2228 a 2230
ADMINISTRADORA DE SUCESION	
—(Malv. de caudales)	2731/2
ADULTERACION	
—De cheque	2887
—De billete de lotería	2889 a 2891
—De aguas potables, etc.	2409/10
ADULTERIO	1567 a 1571
ALCALOIDES	
—“Codex Medicamentarius”	2430 a 2434
—Dosis máximas	2430 a 2434
—Receta en dosis mayores	2430 a 2434
—Tenencia por particulares	2438 a 2440
ALAMBRADOS DE VIAS DE FERROCARRIL	
—Destrucción	2372
ALEVOSIA	1063 a 1075
ALZAMIENTO	
—Sedicioso para impedir elecciones	2532
—Sedicioso para impedir resoluciones judiciales	2534
AGRAVANTES	
—Alevosia	1063 a 1075
—Ensañamiento y sevicias graves	1076 a 1083
—Parentesco	1043 a 1049
—Perversidad Brutal	1084 a 1092
—Premeditación	1056 a 1062
AMENAZAS DE IMPUTACIONES CONTRA EL HONOR	1987/91
AMENAZAS DE DIVULGACION DE SECRETOS	
—(Extorsión)	1988 a 1990
AMNESIA LACUNARIA	
—(Eximente de)	435 a 438
AMNISTIA	
—Concepto	861/5/6/7/
	8/9/870/2
—A quienes comprende	862/3/871
	a 874
—Delitos políticos-militares	860 a 864
—Ciudadanía argentina. Pérdida	863/871
—Límites de la amnistia	867 a 871
—Infractores a las leyes de enrolamiento	863
—Infractores a la ley de servicio militar	863
ANIMALES EN VIA FERROVIARIA	2383
ANONIMA, SOCIEDAD	
—(Quiebra)	2301/3
APARATOS ORTOPEDICOS	2411



APARATOS CONTRA INCENDIOS

—(No utilización de) 2372

APLICACION

—De la ley penal argentina 2/3/5
 —De la pena de prisión por falta de pago de multa 127/139
 —De la indemnización civil por los jueces del crimen .. 207 y sgts.

APOLOGIA DEL CRIMEN

—Concepto 2493 a 2496
 —En artículo periodístico 2494 a 2498

ARCHIVO

—(Daño en) 2347

ARBOLES

—(Daño) 2334 a 2337

ASOCIACION ILITICA

—Concepto de "banda" 2473/5/7
 —Características del delito 2474/6/2484
 —Diferencia entre "banda y complot" 2479/80
 —Miembros no participantes 2482
 —Propaganda comunista y anarquista 2483

ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

Atentado. Concepto 2541 a 2544
 " contra agente de policía 2545/50
 " " cadete de seguridad 2546
 " " particular que asiste a policía 2551
 " " guardia municipal 2552
 " " inspector municipal 2553
 " cometido por ebrio 2554

RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA

—Desobediencia a disposición policial 2548/9
 —Requisitos de la desobediencia 2555
 —Quebrantamiento de pena 2558/2563
 —Quebrantamiento de clausura de establecimiento 2559
 —Negativa a cumplir resolución judicial 2560
 " 2561/2/4/5/
 " 8/9
 —Violación de incomunicación de procesado 2566
 —Ocultamiento de hijo contra resolución judicial 2570
 —Resistencia a orden de guardián de cárcel 2571

DESOBEDIENCIA EN EL CASO DE LA LEY 4144

—Extranjero expulsado que vuelve al país 2573/6/7/8
 —Prescripción de la acción 2574/5/8

ATENTADOS CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION

—Alambrados que protegen las vías 2382/5/7
 —Animales introducidos en las vías 2383
 —Derogación de la ley de ff. cc. por el C. P. 2385/2392
 —Entorpecimiento de tráfico por huelguistas 2388/9
 —Detención o interrupción de tren 2390
 —Proyectiles contra tren en marcha 2393/4
 —Abandono de servicio por empleados de buque o ferrocarril 2395/2398
 —Descarrilamiento o naufragio culposos 2399/2400

ATENTADOS CONTRA COMUNICACIONES TELEGRAFICAS O TELEFONICAS

—Concepto 2401/2/6/7
 —Injurias por teléfono 2403/5
 —Bromas por teléfono 2404
 —Responsabilidad penal de las compañías telefónicas 2408



ATENUANTES

—Ebrriedad	628/832
—Estado de necesidad	629 a 631

AUTOPSIA

1040 a 1042

AUTORIDAD

—(Usurpación de)	2649 a 2653
------------------------	-------------

AVES DE CORRAL

—(Daño)	2338
---------------	------

B**BANCO**

—Hipotecario Nacional (malversación por empleados del)	2708/18
—Municipal de Préstamos (falsificación de pólizas del)	2891

BALANCES FALSOS

3051

BANDA. Ver asociación ilícita.**BIENES**

—Ajenos. Venta como propios	2163 a 2211
—Afectados con prenda agraria. Su venta como libres ..	2212 a 2221
—Depositados judicialmente. Malversación	2721 a 2728
	y
	2735 a 2741
—Litigiosos o embargados. Su venta (defraudación)	2163 a 2211
—Robados. Venta o pignoración como propios	2163 a 2211

BIGAMIA

—Cuestión prejudicial	1714 a 1742
—Por segundo matrimonio en el extranjero	1728 a 1738
	1/3/6/1716/
	7/8/9/1725/8
—Prescripción del delito	1721

BIGAMO UXORICIDA (agravante de parentesco)

1049

BILLETES DE LOTERIA. Alteración de

2889 a 2891

BOLETA DE DEPOSITO BANCARIO. Falsificación

2968

C**CADAVER — Robo de**

1993

CALAMITOSO — Hurto

1895

CALUMNIAS

—Calificación errónea del delito	1366 a 1436
—Por teléfono — telégrafo — carta, etc.	1368/1382
—Por carta abierta	1378
—Por diputado nacional	1379
—Por ligereza indisculpable	1290
	1399/1401/
	2/8/1418/9/20
—Contra funcionario público	1381/6
—Acusación calumniosa ante la justicia	1393 a 1442
—Equivoca o encubierta	1498 a 1501
—Calumnia reproducida por la prensa	1502 a 1512
—Calumnia reproducida por la prensa en la Cap. Fed.	
y Territorios Nacionales	1519 a 1522
—La calumnia ante las leyes de imprenta provinciales ..	1513 a 1518
—Indemnización del daño moral causado	1393/94/1403



—Indemnización de los daños y perjuicios provenientes de la calumnia	1412/13/18
—Retractación	1394/1398/
—Procedimiento especial en el juicio por calumnia	1403/1412/
—Prescripción de la acción	13/15/16/21
	1549 a 1566
	1342 a 1436
	939/943
CANTIDAD, CALIDAD, ETC. DE COSAS QUE DEBAN ENTREGARSE (defraudación)	2064/5
CARNET DE CONDUCTOR DE AUTOMOVIL (falsificación)	2961
CARTAS, TELEGRAMAS, TELEFONOS (violación de secretos)	1804 a 1808
CEDULA	
—De identidad (falsificación)	2971/83/93
—De identidad (falsedad ideológica)	3005
—Militar de identificación	2969/70
CERCOS (Hurto con destrucción de)	1880
CERTIFICADO	
—De buena conducta (falsificación de)	2943
—De domicilio (falsificación de)	2973
—Médico conteniendo falsedades	3015/16
—Médico (falsificación)	2990
CHEQUES (Falsificación de)	2869 a 2886
—Con fecha posterior o en blanco	2251 a 2257
CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS (Pago verificado con)	
—Características del delito	3054/7/8/9/
	3064/5/6/8/
	3083
—Protestado después de presentación del librador ...	3055/81
—Entregado en garantía de obligación no vencida	3056/62/3
—Responsabilidad del endosante	3058
—Quiebra del firmante, anterior al protesto	3060/3085
—Quiebra del firmante después del protesto	3061/3072
—Con fecha en blanco	3067
—Dado en pago de deuda preexistente	3073
—Restitución del importe del cheque doloso	3074/5
—Reparación del daño	3075
—Reparación del daño moral	3075
—Extendido en formulario ajeno	3076/80
—Depósito del importe después de protestado	3077
—Pago a cuenta del cheque sin fondos	3086
—Falta de protesto	3078
—Falta de algunos requisitos del protesto	3079/3088
—Falta de aviso al librador	3069/70
CIRCUNSTANCIAS	
—Agravantes por peligrosidad	641/4/7/8
—Atenuantes	642
—Eximentes	412 a 603
CIRUJIA ESTETICA (Ejercicio ilegal)	2446
COAUTOR	686
CODIGO PENAL	
—Entrada en vigencia	3089

—Leyes que deroga	3090 a 3093
—Derogado por la ley de quiebras	407
COHECHO	
—Concepto del delito	2696/2701
—Diferencia con las exacciones ilegales	2694
—Ofrecimiento de dádiva a funcionario	2692/2709
—Cohecho judicial — Competencia	2697
—Cohecho legislativo	2698
—Cohecho militar — Excepciones falsas	2700
—Testigo falso sobornado	2814 a 2816
—Sindico de concurso	2695
CONCAUSAS EN EL HOMICIDIO	1174 a 1206
CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO	2304 a 2314
CONCURSO IDEAL DE DELITOS	
—Requisitos	759/60/61
—Prescripción de la acción penal	/66
—En falsificación de medicamentos y sellos fiscales	884/5/6 y
—En atentado a la autoridad y lesiones	912 a 920
—En calumnias e injurias	762
—En encubrimiento y defraudación	777
—En estafa y falsificación de documentos	778
—En extorsión	783
—En falsificación de cheque	792
—En homicidio y lesiones	790
—En hurto y estafa	791
—En lesiones	765
—En lesiones y abuso deshonesto	779/781
—En malversación de caudales públicos	764/5/780
—Concurso ideal de delitos ante la cosa juzgada	787
CONCURSO REAL DE DELITOS	782/3
—Requisitos	784
—En acumulación de acciones	799/82
—En acumulación de penas	810
—En calumnias	799
—En hurto y violación de domicilio	809
—En hurto y defraudación	801
—En hurto y pignoración de lo hurtado	804/808
—En homicidio y lesiones	812
—En violación de domicilio y lesiones	814/815
—En resistencia a la autoridad y lesiones	811
—Castigado con penas divisibles	807
—Castigado con penas alternativas	824
—Castigado con penas de diferente naturaleza	825
—Castigado con penas indivisibles	821 a 825
—Castigado con penas de multa y prisión	821 a 823
—Prescripción de la acción	821 a 823
CONDENACION CONDICIONAL	884/5 y 912
—Requisitos	a 920
—Objeto del beneficio	164 a 190
—Influencia de la personalidad moral del beneficiado	173
—En las infracciones castigadas por leyes no penales	167/8/9/182
—En las penas complementarias o accesorias	62/3
—En las faltas de carácter municipal	183/4
—En la tenencia de alcaloides	190
—En el ejercicio de la prostitución	165
	164/8/9



—En la interrupción de comunicaciones telefónicas	175
—En las lesiones culposas	174/8
—En el concurso civil fraudulento	176
—En el homicidio por imprudencia	177
CONDENACION EN LO CRIMINAL — SU INFLUENCIA SOBRE LO CIVIL	351 a 358
CONDICION ECONOMICA EN EL MONTO DE LAS MUL- TAS	142
CONOCIMIENTO “DE VISU” DEL REO POR EL JUEZ ..	627/633
CONSULADO EXTRANJERO (daño en)	2340
CONTINUADO (delito continuo)	195 a 798
—Hurto continuo	1875 a 1877
CONTAGIO O PROPAGACION DE EPIDEMIA	2412 a 2429
—De vicio (morfina)	2425
—Venéreo (Ley 12331)	2412 a 2426
—Venéreo en el abuso deshonesto	2422/4/7
—Venéreo culposo	2426 a 2429
CONTRATO SIMULADO (defraudación por medio de) ...	2146 a 2159
COMPANIA TELEFONICA (Responsabilidad penal de) ...	2408
COMPETENCIA de los Tribunales argentinos	1 a 6
—Federal en juicio contra ex-presidente de la nación ..	2583
COMPETENCIA DESLEAL	1824 a 1835
COMPLICIDAD	687/8/692/4 y 2524/5/7
COMPUTO	
—De la prisión preventiva	157 a 163
—De la detención a los efectos de la pena	160
—Del exceso de detención	157/8/9/162
—Del arresto impuesto subsidiariamente	163
COOPERACION CRIMINAL	689/90/93
COMUNICACIONES DE NOMBRAMIENTOS (Falsificacio- nes de)	2950
COMUNICACION (medios de)	
—Atentados contra los medios de	2382/2408
—Telefónica	2401 a 2408
—Ferroviaria	2382 a 2400
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS JUDICIALES A MIEMBROS DEL CONGRESO	2586
CORRUPCION DE MENORES	1635 a 1656
—Concepto	1637/8/41/2 /4/5/50/1/2 /5
—Abuso deshonesto	1669 a 1680
—Corrupción por pederastia	1643/54
—Relaciones incestuosas	1636/9/40/8
CORRUPCION DE MAYORES	
—Concepto	1657/8
—Prostitución de la concubina	1659
—Prostitución de la madre	1657

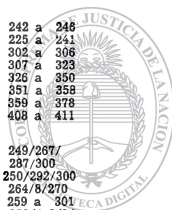


—Uso de medios coercitivos	1660/1
—Ley de Profilaxis Social	1664 a 1668
CORREOS Y TELEGRAFOS (Malversación por empleados de)	2712/3
COSA	
—Ajena (defraudación por apropiación)	2246 a 2249
—Ajena (encubrimiento)	2827 a 2843
—Obtenida por el delito — Restitución	379 a 388
—Obtenida por el delito y pignorada	380/384
—Mueble sustraído por su dueño (defraudación)	2138 a 2145
—Perdida (defraudación por apropiación)	2231/2245
—Recibida en prenda (defraudación por pignoración)	2250
COSTAS	
—Casuísticas	70/71
—En causa sobreseída por prescripción	389/398
—Del proceso a cargo del condenado	390/391
—Del proceso en caso de absolución	392/6/400
—Impuestas al querellante	393/4/5/8
—Por su orden	392/4/7/400
—Solidaridad en el pago de costas	402
—Gastos conceptuados como costas	395/6/9
—Prescripción de las costas impuestas al procesado	400
CUASI DELITOS	
—Daño moral en los	254/6/9/261
	/3/271/2/4/283/297
—Responsabilidad	410
CULPOSO (delito)	
—Incendio	2373 a 2381
—Derrumbe de edificio	2380
CULPABLES DEL DELITO	
—Descarrilamiento	2399/2400
—Solidaridad en el pago del daño	408 a 411
CULPA CONCURRENTES	
—Solidaridad en el pago del daño	408 a 411
CUERPOS COLEGIADOS (retardo de Justicia)	2764
CUESTIONES AJENAS AL PODER JUDICIAL	
—Cuestión prejudicial en malversación de caudales públicos	2707/9
CUMPLIMIENTO DEL DEBER (eximente de)	510 a 514
CUOTAS . Multa pagadera en	126 a 145
CURADOR	
—De penado	77/84/90/92/93
—Al penado para juicio por cobro de honorarios	90/1

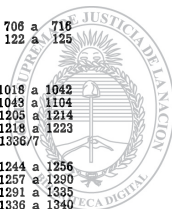
D

DAÑO CAUSADO POR EL DELITO	
—Su reparación	207 a 378
—Facultad del Juez en lo criminal para establecerlo	207 a 218
—Ejercicio de la acción	220 a 223

—Indemnización fijada de oficio	242 a 248
—Indemnización fijada a solicitud de parte	225 a 241
—Acción criminal y acción civil	302 a 306
—Absolución y su influencia sobre lo civil	307 a 323
—Sobreseimiento del acusado	326 a 350
—Condena del acusado	351 a 358
—Condena del acusado y su influencia sobre terceros ..	359 a 378
—Solidaridad en la reparación del daño	408 a 411
DAÑO MORAL	
—Carácter de la indemnización del mismo	249/267/ 287/300
—Requisitos para su procedencia	250/292/300
—En causa sobreseída por prescripción	264/8/270
—Causado por delitos	259 a 301
—Causado por delitos culposos o cuasi delitos	253/4/6/9/ 261/3/271/ 2/4/291/7
—Causado por cosas inanimadas	260
—Causado por sufrimientos físicos	286
—Causado por calumnias e injurias	257/275
—Causado por privación indebida de la libertad	298/299
—Causado por delito de cheque sin provisión de fondos	290
DAÑOS (delito de)	
—Concepto	2334/7
—Diferencia con el hurto	1864/5 y 2337/8
—Diferencia con el robo	2342
—En despoblado y en banda	2343
—En consulado extranjero	2340
—En embajada extranjera	2341
—En archivo o registros	2347
—En panteón	2344
—En adoquinado de vía pública	2346
—En árboles	2334 a 2337
—En aves de corral	2338
DECLARACION FALSA EN INSTRUMENTO PUBLICO ..	2994 a 3009
DECOMISO	
—De cosa defraudada	146
—De objetos con que se consumó el delito	146 a 156
—De objetos que ocasionalmente sirvieron para el delito	147
—De objetos que son elementos de trabajo	150
—De armas con que se cometió el delito	151
—De arma en causa por suicidio	152
—De billetes de loterías no autorizadas	153/6
—De dinero "expuesto" al juego	154
—De dinero "producto" del juego	155
DEFENSA	
—Legítima	516 a 603
—Legítima de tercero	599 a 603
—Exceso en la legítima defensa	604 a 620
DELITO	
—Apología del	2493 a 2498
—Concurso ideal de	759 a 784
—Concurso real	799 a 811
—Complicidad	667/8 692/4 y 2524 a 2527
—Cometido en territorio argentino o lugares sometidos a su jurisdicción	2 a 6
—Continuado	795 a 798
—Cometido durante la vigencia de la condena condicional	191 a 206



—Cometido durante la minoridad	706 a 718
—Cometido en el ejercicio de profesión	122 a 125
I.—DELITOS CONTRA LAS PERSONAS	
HOMICIDIO	
—Simple	1018 a 1042
—Calificado	1043 a 1104
—Atenuado	1205 a 1214
—Culposo	1218 a 1223
—En riña	1336/7
LESIONES	
—Leves	1244 a 1256
—Graves	1257 a 1290
—Culposas	1291 a 1335
—En riña	1336 a 1340
DUELO	1341 a 1343
ABUSO DE ARMAS	1344 a 1361
ABANDONO DE PERSONAS	1362 a 1364
II.—DELITOS CONTRA EL HONOR	
—Calumnias	1366 a 1438
—Injurias	1437 a 1566
III.—DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD	
—Adulterio	1572 a 1609
—Violación	1572 a 1634
—Estupro	1610 a 1634
—Corrupción	1635 a 1680
—Ultrajes al pudor	1685 a 1706
—Exhibiciones obscenas	1704 a 1706
—Rapto	1707 a 1711
IV.—DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL	
—Matrimonios ilegales	1714 a 1742
—Supresión y suposición de estado civil	1743 a 1752
V.—DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL	
—Realizados por particulares	1753 a 1768
—Realizados por funcionarios públicos	1769 a 1778
VIOLACIÓN DE "DOMICILIO"	
—Realizado por funcionario público	1796 a 1798
—"necesidad"	1799 a 1803
VIOLACIÓN DE "SECRETOS"	
—Contenidos en cartas, telegramas, etc.	1804 a 1808
—Cometidos por empleados de Correos	1809 a 1813
—Secreto profesional	1814 a 1821
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO Y ASOCIACION	
—Contra la libertad de trabajo	1822/3
—Competencia desleal	1824 a 1835
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE REUNION	1836 a 1838
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA	1839
VI.—DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD	
HURTO	
—Simple	1842 a 1879
—Calificado	1880 a 1902
ROBO	
—Simple	1903 a 1933
—Calificado	1934 a 1979
EXTORSION	
—Simulando autoridad pública	1980 a 1986
—Chantage	1987 a 1992
ESTAFA	1944 a 2003
DEFRAUDACION (ver además "Estafa" en la letra correspondiente).	



—En la cantidad, calidad, etc. de las cosas que deban entregarse	2084/5
—Por negativa o restituir lo que deba destituirse	2068 a 2127
—Por abuso de firma en blanco	2128 a 2137
" " " " " " prescripción	2137
(tentativa)	2136
—Por sustracción de cosa mueble por el propietario	2138 2145
—Por medio de contrato simulado o falsos recibos	2146 a 2159
—Por medio de ocultación, mutilación, etc., de expediente o documento	2160/1
—Abuso de necesidades o pasiones de menor o incapaz ..	2222 a 2225
—Venta o gravamen de bienes litigiosos o embargados ..	2163 a 2211
—Venta o gravamen de bienes ajenos como propios ..	2163 a 2211
—Venta o gravamen de bienes robados como propios ..	2163 a 2211
—Venta de bienes afectados con prenda agraria	2212 a 2221
—Por medio de pesas o medidas falsas	2226/7
—En perjuicio de la administración pública	2228 a 2230
—Por apropiación de cosa perdida	2231 a 2245
—Por apropiación de cosa ajena habida por error	2246 a 2249
—Por pignoración de cosa recibida en prenda	2250
—Por aceptación de documento con fecha posterior o en blanco	2251/2257
QUEBRADOS PUNIBLES	
—Fraudulentos	2258 a 2294
—Culpables	2295 a 2300
—De sociedad anónima o persona jurídica	2301 a 2303
CONCURSADOS FRAUDULENTOS	2304 a 2314
USURFACION	2315 a 2333
DANOS	2334 a 2348
CASOS DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD POR PARENTESCO	2349 a 2359
VII. — DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA	
INCENDIO	2360 a 2368
	2372 a 2375
	y 2381
	2369 a 2381
ESTRAGOS	
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	
—Detención o interrupción de tren	2390
—Proyectiles contra tren en marcha	2394
—Descarrilamiento culposo	2399/2400
—Comunicaciones telegráficas, telefónicas, etc.	2401 a 2408
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA	
—Propagación de enfermedades	2414 a 2425
—Productos alimenticios o medicinales adulterados o envenenados	2409/10
—Contagio venéreo (Ley 12.331)	2412 a 2425
—Propagación culposa de enfermedad	2426 a 2429
—Recetas de alcaloides o narcóticos	2430/2/3/4
—Despacho de recetas de alcaloides	2430 a 2434
—Dosis máximas de alcaloides	2430 a 2434
—"Codex Medicamentarius"	2430 a 2434
—Venta de sustancias distintas de las recetas	2435/7
—Tenencia de alcaloides por particulares	2438 a 2440
—Violación de medidas para prevenir epidemia	2441
—Violación de leyes de policía sanitaria animal	2442 a 2445
—Ejercicio ilegal de la medicina	2447 a 2458
—Promesas de curación a término fijo o por medios infalibles	2459/60
VIII.—DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO	
INSTIGACION A COMETER DELITOS	2461 a 2472



ASOCIACION ILICITA	2473 a 2485
INTIMIDAD PUBLICA	2486 a 2492
APOLOGIA DEL CRIMEN	2493 a 2498
IX.—DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION	
TRAICION	2499 a 2501
DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ O DIGNIDAD DE LA NACION	2502 a 2511
X.—DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL	
REBELION	2519 a 2531
SEDICION	2532 a 2535
DISPOSICIONES REFERENTES A LOS CAPITULOS PRECEDENTES	2537 a 2540
XI.—DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	
ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD	2541 a 2554
—Desobediencia a la autoridad	2555
—Desobediencia en el caso de la ley 4144	2573/8
—Causa contra miembros de los poderes públicos	2580 a 2588
DESACATO	2590 a 2648
USURPACION DE AUTORIDAD, TITULOS U HONORES	2649 a 2669
ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE DEBERES DE PUBLICOS	2670 a 2682
VIOLACION DE SELLOS Y DOCUMENTOS	2683 a 2691
COHECHO	2692 a 2701
MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS	2702 a 2747
NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS	2748
EXACCIONES ILEGALES	2749 a 2755
PREVARICATO	2756 a 2763
DENEGACION O RETARDO DE JUSTICIA	2764 a 2767
FALSO TESTIMONIO	2768 a 2816
ENCUBRIMIENTO	2817 a 2849
EVASION	2849 a 2861
XII.—DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	
FALSIFICACION DE MONEDA, BILLETES DE BANCO, ETCETERA	2862 a 2891
FALSIFICACION DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS ..	2892 a 2929
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL	2930 a 3027
FRAUDES AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA	3028 a 3053
PAGO CON CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS	3054 a 3088
DELINCUENTES (Ocultación habitual de)	2822/3
DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA	
—Demora en resolución de cuerpos colegiados	2764
—Cometido por alcalde de la Pcia. de Buenos Aires	2765
—Omisión de persecución de delincuentes	2767
DEMENCIA (eximente)	481 a 491
DEPOSITARIO JUDICIAL	
—Malversación del depósito	2721/7/8/ 2735 a 2741
—Abandono del depósito	2744
DERECHO DEL PENADO A PEDIR CURADOR	77
DESACATO	
—Configuración del delito	2590/2627 a 2630



—Concepto de "funcionario público"	2594 a 2598
—"A causa del ejercicio de sus funciones"	2599 a 2611
—Inadmisión de la prueba sobre lo aseverado	2646 a 2648
—Contra miembros del P. Ejecutivo	2614/7/9/20
— " " " Legislativo	22/25
— " " gobernador de provincia	2621/6
— " " miembros del P. Judicial	2615/24
— " " funcionarios municipales	2631 a 2645
	2633
DESPOJO	
—Diferencia con la usurpación	2317/2333
—De cosa alquilada	2322
—De obra en construcción	2328
—Por abuso de confianza	2315
DESTRUCCION O SUPRESION DE DOCUMENTOS	
—Cédula de notificación	3010
—Escritura pública	3011
—Recibo (obtenido con engaño)	3013
DEVOLUCION	
—Del instrumento empleado para delinquir	152
—Del dinero secuestrado al sobreseido por hurto	148/9
DOCUMENTOS	
—Falsos, en general (uso de)	3017 a 3026
—Falsificación de documentos públicos	2937 a 2965
—Falsificación de documentos privados	2969 a 2993
DOMICILIO (violación de)	
—Concepto	1784 a 1795
—Violación efectuada por funcionario público	1796 a 1798
—Violación efectuada por necesidad	1799 a 1803
E	
EBRIDEDAD	
—Eximente	453 a 474
—Atenuante	632
Completa y voluntaria	461 a 464
—Completa e involuntaria	453 a 474
—Completas e involuntarias	463 a 474
—Incompleta	455/8/470
—Voluntaria	453a 458
—Accidental	y 462/3/471
EDIFICIO DE EMBAJADA	
—Daño en	469
	2341
EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA	
—Odontología	2447
—Venta de aparatos ortopédicos	2449
—Análisis químicos	2450
—Optometristas	2453
—Idóneo en farmacia	2454
—Iriscopea	2456
—Partera extranjera sin reválida de título	2455
—Gratuidad del tratamiento	2459
—Procedimientos secretos	2460
—Inhabilitación especial	2446/51
EMPLEADO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	
—Malversación	2712/3

EMPLEADOS DE BANCO

—Nación	1015
—Hipotecario (malversación)	2708
—Municipal de Préstamos	2714/7

ENCUBRIMIENTO

—Características del delito	2817 a 2821
—Ocultación del delincuente	2822/3
—Procurar hacer desaparecer pruebas	2824
—Guardar, recibir, comprar o vender cosas ajenas	2827 a 2843
—Obsequio de cosa hurtada	2827 a 2842
—De hurto — Prescripción de la acción	933/4
—Comunicación de noticias sobre delitos a la autoridad ..	2843 a 2845
—Exención de pena por razón de parentesco o amistad ..	2847 a 2849

ENROLAMIENTO

—Libreta falsificada de	2939
-------------------------------	------

ENSANAMIENTO (Agravante) 1076 a 1083**EPILEPSIA (Eximente)** 439 a 441**EQUIVOCAS O ENCUBIERTAS (injurias)** 1498 a 1501**ERROR O INORANCIA (eximente)** 475 a 480**ESCALAMIENTO (Hurto con)** 1900/1/2**ESCRITURA PUBLICA**

—Destrucción o supresión	3010
—Falsedad en	2999/3000/8
—Falsificación	2945/8

ESCRITO JUDICIAL (Falsificación de firma en) 2591**ESTADO CIVIL (supresión o suposición de)** 1743 a 1742**ESTADO PELIGROSO** 634/5/8/
643/4/8**ESTADO DE INCONSCIENCIA** 429 a 438**ESTADO DE NECESIDAD (Eximente)** 475 a 480

— " " " (Atenuante)	y 498 a 509
— " " " (Hurto en)	629 a 631
	1878

ESTABA

—Características del delito	1994 - 2004
—Abuso de confianza	2005/6
—Nombre supuesto	2008 a 2011
—Calidad simulada	2012
—Influencia mentida	2013
—Maniobras engañosas	2007
—Apariencia de bienes	2015 a 2019
—Ardid o engaño	2020 a 2034
—Cuestión prejudicial	2014
—Mendicidad fraudulenta	2035 a 2037
—Mediante demanda judicial	2045 - 2057
—En concurso de delitos	2041 a 2044
—Mediante cheques	2058 a 2068
—Mediante cheques para documentar deudas	2065 a 2068
—En la ley de Propiedad Intelectual	2069 a 2074
—Tentativa	2075 a 2083

ESTIGMAS DEGENERATIVOS 451/2**ESTRAGOS**

—Concepto	2369/2376/9
-----------------	-------------



—Derrumbe de edificio	2370/1
—Derrumbe de edificio, culposo	2380
—Accidente de ferrocarril por culpa del guardabarreras	2377
ESTUPRO	
—No hay estupro de varón	1611
—Virginidad física	1612
—Honestidad	1612 a 1616
—El estupro y la instancia privada	y 1620/1 1623
EVASION	
—Personas “legalmente detenidas”	2851 a 2854
—Fuerza en las cosas	2855 a 2857
—Violencia en las personas	2856
—Evasión sin violencia	2859
—Negligencia de celador	2860
—Fuga de menor asilado	2851
—Confidente del evadido. — (Situación del)	2858
—Competencia Federal	2861
EXACCIONES ILEGALES	
—Diferencia con el cohecho	2753
—Funcionario público	2752
—Empleados de policía	2749/51
—Vicecónsul extranjero — Competencia	2750
EXAMENES ESCRITOS (Falsificación de)	2966
EXHIBICIONES OBSCENAS	1704 a 1706
EXIMIENTOS DE PENALIDAD	
—Amnesia lacunaria	435 a 438
—Cumplimiento del deber o ejercicio del derecho	510 a 514
—Demencia	481 a 491
—Ebriedad completa e involuntaria	453 a 474
—Estados de inconsciencia	429 a 434
—Estigmas degenerativos	451/2
—Epilepsia	439 a 441
—Estado de necesidad	498 a 509
—Error o ignorancia de hecho	475 a 480
—Insuficiencia de facultades	423 a 428
—Obediencia debida	515
—Temor irresistible	492 a 497
—Legítima defensa	516 a 598
—Legítima defensa de la persona o derechos de otro	599 a 603
EXENCION de pena en el encubrimiento	2966
EXENCION DE RESPONSABILIDAD POR PARENTESCO	
—Es limitativa al hurto, defraudación y daños	2351
—En robo	2349/50/3
—En usurpación	/7/8
—En defraudación por la hija natural	2352
—Reivindicación de lo hurtado	2355
—Situación de los coparticipes	2356
EXCESO EN LA DEFENSA	
—Por error de cálculo	604/619
—Por temor excesivo	604/619
—Por temor excesivo — golpes innecesarios	605
—Cuando media agresión ilegítima	607/8
—Racionalidad del medio empleado	610/15
—Equiparación al delito culposo	13/15 617



EXCESO DE DETENCION NO COMPUTABLE EN NUEVA CAUSA

157 a 162

EXTORSION

- Caracteres específicos del delito 1980 a 1986
- Amenazas de imputaciones contra el honor 1987/91
- Amenazas de divulgación de secretos 1988 a 1990
- Prescripción de la acción 932
- Robo de cadáver 1993

EXTRANJERO EXPULSADO DEL PAIS

2573 a 2578

F

FACULTAD

- Del Juez para acordar el pago de la multa en cuotas ... 133 a 135
- Del Juez en lo criminal para ordenar reparaciones civiles 207 y sigts.
- Del Juez en lo criminal para ordenar reparaciones de oficio 242 a 248
- Del Juez en lo criminal para ordenar reparaciones a solicitud de parte 225 a 241

FACTURA COMERCIAL

- Falsificación 2985

FALSEDADE EN INSTRUMENTO PUBLICO (ideológica)

- Configuración del delito 2994/6/7/3003
- En protesto de documento 2995
- En acta judicial (antidatación) 2998
- En escritura pública 2999/3000/3008
- En cesión simulada 3001
- En acta de defunción 3002
- En facturas consulares 3004
- En cédula de identidad 3005
- En reconocimiento de hija natural 3006
- En poder para actuar judicialmente 3007

FALSEDADE SOBRE CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DEL TESTIGO

2798 a 2806

FALSIFICACION

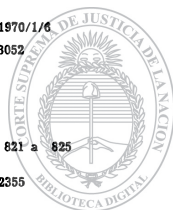
- De billetes de lotería 2889
- De cheques 2869 a 2886
- De documentos en general 2930 a 2936
- De documentos públicos 2937 a 2965
- De documentos privados 2969 a 2993
- De marcas de fábrica, comercio, etc. 2903 a 2904
- De marcas usadas en las oficinas públicas 2899/2901
- De moneda 2862 a 2868
- De papel sellado 2894
- De pólizas del Bco. Municipal 2891
- De sellos oficiales 2892/3/5/6/7/8

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS

- "Documento e instrumento" 2930 a 2932
- Falsificación de actuaciones judiciales 2960
- Falsificación de escrito judicial 2951
- Falsificación de certificado de buena conducta 2943
- Falsificación de comunicaciones de nombramientos 2950
- Falsificación de escrituras públicas 2945/8
- Falsificación de formulario de pasaportes consulares .. 2957



—Robo de	1970/1/6
GERENTE (de banco). Defraudación	3052
GIROS. Ver cheques.	
H	
HECHOS INDEPENDIENTES REPRIMIDOS CON PENAS DE DIFERENTE NATURALEZA	821 a 825
HIJA NATURAL QUE DEFRAUDA A LA MADRE. PUNIBILIDAD	2355
HIPEREMATIVOS Y SUS REACCIONES	
—(Eximente)	448 a 450
HOMICIDIO	
—Emoción violenta	1105 a 1148
—Por "aberratio ictus"	1032 a 1034
—Preterintencional	1149 a 1173
—Concausal	1174 a 1208
—Infanticidio	1207 a 1211
—Homicidio para preparar u ocultar delitos	1093 a 1104
—Homicidio en ocasión o con motivo de robo	1934 a 1940
—Agravante de parentesco	1043 a 1049
—Prueba de parentesco	1043 a 1047
—Bigamo uxoricida	1049
—Agravante de premeditación	1056 a 1062
—Agravante de alevosía	1063 a 1075
—Agravante de ensañamiento y sevicias graves	1076 a 1083
—Agravante de perversidad brutal	1084 a 1092
—En riña	1336
—En ocasión de rebelión o sedición	2537 a 2540
HOMICIDIO CULPOSO	
—Elementos del delito culposo	1220/2/678
—Por imprudencia de enfermera	1218
" " " estudiante de farmacia	1219
—Por imprudencia de conductor de automóvil	1221/7
—Por imprudencia de capataz de obra	1224
—Por imprudencia de médico	1230
" " " motorman de tranvía	1229
—En match " de box	1223
HONOR	
—Amenaza contra el (extorsión)	1987/91
HURTO SIMPLE	
—Caracteres específicos	1842 a 1847
—Diferencia con el daño	2337/8 y 1864/5
" " " robo	1857 a 1860
" " " la defraudación	1861 a 1864
—Casos generales	1848 a 1856
—Hurto de uso y de energía eléctrica	1866 a 1872
—Hurto y derecho de retención	1873
—Hurto entre parientes	2349 a 2359
" en concurso de delitos	1874
" continuado	1875 a 1877
" en estado de necesidad	1878
—Reintegro de lo hurtado	1879
HURTO CALIFICADO	
—Destrucción de cercos	1880
	a 1894



—De ganado	1883/4/7
—De cosecha	1885/6
—Calamitoso	1895
—Con escalamiento	1900/1/2
—Uso de llave substraída	1897/8
—Uso de llave ganzúa	1898/9



IDENTIDAD

—Cédula de (falsedad en)	3005
--------------------------------	------

INCAPACIDAD

—De penado	78 a 83
------------------	---------

INCENDIO

—Objeto de la tutela penal	2360
—Pruebas directas e inmediatas	2361/2
—Prueba de peritos	2363
—Incendio con peligro común para los bienes	2363/6
—Incendio en parvas	2365/6/8
—Incendio intencional de alfalfares	2367
—Incendio de gallinero	2368
—Incendio culposo	2373/4/5/ 2381

INCOMPARENCIA DE TESTIGO

2589

INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS VICTIMAS DEL DELITO

207/8/259/
261/6/279/
80
209

—Jurisdicción del juez	
------------------------------	--

INDEMNIZACION DEL DAÑO MORAL

—Causado por cuasi delitos	253/4/6/ 261/3/272/ 7/297
" " cosas inanimadas	260
" " calumnias e injurias	257/275
—En causa sobreseída por prescripción	264/8/70

INDULTO

—Del tiempo que falta cumplir	979
—De procesado	980 a 982
—De condenado	980/1
—Efectos del indulto sobre la inhabilitación absoluta	120

INDUSTRIA

—(Fraudes al comercio y a la)	2028 a 3049
-------------------------------------	-------------

INFANTICIDIO

1207 a 1211

INFLUENCIA

—De la absolución en lo criminal sobre lo civil	307 a 323
—Del sobreseimiento en lo criminal sobre lo civil	324 a 350
—De la condena en lo criminal sobre lo civil	351 a 356
—De la condena en lo criminal sobre los terceros responsables	359 a 378

INHABILIDAD DEL CONDENADO

—Inhabilidad del condenado respecto a la administración de sus bienes	72/8/9/80 /1/2/3
—Inhabilidad del condenado para el goce de la jubilación	73

- Inhabilidad del condenado para el ejercicio de los derechos civiles
- Inhabilidad del condenado para estar en juicio
- Inhabilidad del condenado para el ejercicio de la patria potestad
- Desde cuando se computa la inhabilidad

80/87
92 a 93
89
83/5/6

INHABILITACION ABSOLUTA

- Como accesoria
- Duración
- Derecho del penado a la jubilación
- Derecho de los parientes a la jubilación
- La inhabilitación absoluta y el indulto
- La inhabilitación absoluta del empleado bancario ante la ley 11575
- La inhabilitación absoluta y el Código de Justicia Militar
- Comienzo y duración
- Perpetua

115 a 120
115 a 116
120
113/4/7/8/9
120
114
118
74
75

INHABILITACION ESPECIAL

- Requisitos para su aplicación
- Profesión reglamentada
- En lesiones por imprudencia
- Imposición de pena única
- Inhabilitación especial improcedente

122 a 125
122 a 125
124
191 a 197
y 200 a 204
123

INJURIAS

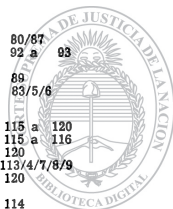
- “Animus injuriandi”
- Falta de “animus injuriandi”
- De palabra
- De hecho (bofetadas)
- Por carta
- Por teléfono
- Por radiotelefonía
- Por resolución de Comisión de Club
- Por imputación de comunismo
- Por uso de fotografía
- Equívocas o encubiertas
- Por medio de la prensa
- Por medio de la prensa en la Capital Federal y Territorios Nacionales
- Por medio de la prensa en las provincias
- Por litigantes en juicio
- Procedimiento especial en este delito
- Prueba de la verdad de la imputación
- Recíprocas
- Retractación

1442/7/8/50
/1/2/3/4/5/
6/7/8/60/1/
3/4/5/7
1474 a 1481
1437/1447
/8/1450/52
1438
1439/45
2403/5
1473
1440/3/9
1444
1446
1498 a 1501
1502 a 1512
1519 a 1524
1513 a 1518
1525 a 1538
1482 a 1488
1489 a 1497
1539 a 1548
1549 a 1566

INIMPUTABILIDAD

- Amnesia lacunaria
- Cumplimiento de deber o ejercicio de derecho
- Demencia
- Ebriedad
- Epilepsia
- Error o ignorancia de hecho
- Estados de inconsciencia
- Estado de necesidad
- Estigmas degenerativos
- Insuficiencia de facultades
- Legítima defensa

435 a 438
510 a 514
481 a 491
453 a 474
439 a 441
475 a 480
429 a 434
498 a 509
451/2
423 a 428
516 a 598



—Obediencia debida	515
—Reacciones de hiperemotivos	448 a 450
—Temos de sufrir mal grave	492 a 497
INMUNIDAD PARLAMENTARIA	
—En juicio por calumnias	2580/7/8
—Desafuero previo	2585
—Detención de Senador Nacional	2582
—Correcciones disciplinarias judiciales	2586
—Iniciación de acciones criminales	2581
INSTIGACION A COMETER DELITOS	
—Instigación punible y participación	2461/2/9/70
—Instigación y participación criminal	668/7
—Por la prensa	2464/6/71
—Por el teatro	2465
—Por propaganda comunista	2467
—Complicidad en	2472
—De falso testimonio	2814/16
—De suicidio	1213 a 1218
INSTRUMENTO PUBLICO	
—Falsedad en	2994 a 3009
—Equiparación a	3027
INTIMIDACION PUBLICA	
—Características del delito	2486/7
—Amenazas	2486 a 2488
—Amenazas en periódicos	2488
—Explosión de bomba	2490
—Fabricación de explosivos	2491
—Tenencia de liquido inflamable	2492
J	
JUEGO	
—Dinero producto del juego	154/5
—Dinero expuesto al juego	154/5
—Loterías no autorizadas. Secuestro de billetes	153
—Loterías no autorizadas. Destrucción de billetes	156
JUBILACION. Pérdida de la	113/4/7/9
	/120
JURISDICCION. Extranjera ficticia	
—Jurisdicción argentina en delitos cometidos en el extranjero	2
—Jurisdicción del Juez en lo criminal en la rep. de daños causados por el delito	1/3/6
	207/8/9
L	
LEGITIMA DEFENSA	
—Concepto	516 a 529
—Agresión ilegítima	530 a 562
—Racionalidad del medio con que se repele	563 a 582
—Falta de provocación suficiente	583 a 593
—Presunción legal de defensa legítima	594 a 598
—De la persona o derecho de un tercero	599 a 603
—Exceso en la defensa	604 a 620
LESIONES	
—Leves	1244 a 1256



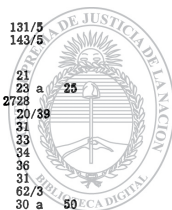
—Graves	1257 a 1283
—Gravísimas	1284 a 1286
—Calificadas por vínculo de parentesco	1289/1290
—Para procurar la impunidad	1287 a 1288
—Culposas	1291
—Causalidad	1292
—Compensación de culpa	1329
—Preterintención	1337 a 1340
—En riña	
LEYES	
—11210 Represiva de Monopolios y Trusts	3028 a 3049
—Ley de Fe de Erratas del C. Penal	3094 a 3096
—Derogadas por el Código Penal	3090 a 3093
—Que contienen disposiciones penales	18 a 63
—Provinciales frente al art. 29 del C. Penal	207 a 215
—Provinciales de Procedimiento	207 a 215
—Retroactivas	7
—“Ex post facto”	7
—Ley más benigna (recurso de revisión por)	9/10/11/12/
	15/16
—Impositivas (multa de)	18/19
” prescripción de la acción penal	30 a 50
” prescripción de la pena	51 a 54
” condena condicional	62/3/190
—Ley de Quiebras y el Código Penal	407
LIBERTAD	
—(Privación legal de la)	1753 a 1783
LIBERTAD CONDICIONAL	
—Ante el indulto parcial	96/105/107/
	108
—Ante la sanción del art. 52 del Código Penal	94/95
—Ante la reclusión por tiempo indeterminado	95
—Ante la reincidencia del art. 50	100
—Condiciones que se imponen al liberado	98 a 100
—No se concede al reincidente	108
—Peligrosidad del solicitante	101/4/7
—Revocación	109 a 112
—Prescripción	111/2
LITIGANTES	
—(Injurias entre)	1525 a 1528
LOCURA	
—(Como eximente)	481 a 491
LOTERIAS NO AUTORIZADAS	
—Secuestro de billetes	153
—Destrucción de billetes	156

M

MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS	
—Concepto	2722
—Distinto destino dado a los fondos	2704/7
—Cuestión administrativa prejudicial	2707/9
—Prescripción	2703
—Malversación por representante de los acreedores en adjudicación de bienes	2702
—De síndico de concurso	2706
—De martillero público	2703/5
—Por empleado del Bco. Hipotecario Nacional	2708

—Por empleado del Bco. de Mendoza	2711
—Por empleado de Correos y Telégrafos	2712/13
—Por Gerente del Bco. Hipotecario Nacional	2718
—Por depositario judicial	2721/7/8/
— " " cuasi delitos	253/4/261/3
— " " "	2735/2740
—Por Juez de Paz	2716
—Por cobrador de impuestos municipales	2714/7
—Por administradora de sucesión	2731/2
—De bienes de la curatela	2746
" " propios como dep. judicial	2743/5
" " por el depositario	2744
—Reintegro ulterior de la suma malversada	2730
—Multa al funcionario culpable por negligencia	2723 a 2726
MARCAS	
—Falsificación de marcas usadas en oficinas públicas	2899/2901
—De fábrica, comercio y agricultura	2903 a 2924
MARTILLERO PUBLICO	
—Malversación de caudales. Prescripción	2703/5
MATANZA DE AVES DE CORRAL	
—(Daño)	2338
MATRIMONIOS ILEGALES	
—Dolo de ambos contrayentes	1714 a 1738
—Dolo de uno de los contrayentes	1739 a 1742
—Cuestión pre-judicial	1728 a 1738
—Prescripción de la acción	944
MATRIMONIO POSTERIOR A ESTUPRO, VIOLACION, ETCETERA	
.....	1712 a 1713
MEDICINA	
—Ejercicio ilegal	2447 a 2460
MEDICO	
—Certificado falso dado por	3015/6
—Recetas médicas y "Codex Medicamentarius"	2430/40
" " de alcaloides	2430/40
MENORES	
—Punibilidad	621 a 625
—Fuga del domicilio paterno	621
—Homicida	622
—Reincidente	623/4
—Delincuente. Pérdida de la patria potestad del padre	625/6
—Delincuente ante la reclusión	704 a 717
—Corrupción de	1635 a 1656
MONEDA	
—Falsificación de	2862 a 2868
—Alteración de	2887
—Circulación de moneda falsa	2888
MONOPOLIOS Y TRUSTS	
—(Ley 11210)	3028 a 3049
MULTA	
—Que se transforma en prisión	127/138/9
—En concurso de delitos	821 a 825
—Acumulación con la pena de prisión	821 a 825
—Condena condicional de la	174/5
—Pago de la multa en cuotas	128 a 145
—Requisitos para acordarla	129/132
	a 135

—Reducción de la cuota	131/5
—Prescripción	143/5
MULTAS DE LEYES NO PENALES	
—Multas que derivan del poder financiero dele Estado	21
—Multas en causas de carácter fiscal	23 a 25
—Impuesta por el Dpto. Nacional de Higiene	2728
—Por la ley de Impuestos Internos	20/39
—Por la ley de impuestos a las alhajas	31
—Por la ley 3959	33
" " " 3975	34
" " " 4363	36
" " " 11252	31
—Condena condicional	62/3
—Prescripción de la acción	30 a 50
" " " pena	51 a 54
—Interrupción de la prescripción	55 a 61
MUTILACION DE EXPEDIENTE	2060/61



N

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS	2748
NEGATIVA A CUMPLIR RESOLUCION JUDICIAL	2561/2/4/5 /8/9
NEGOCIACIONES FINGIDAS (trusts y monopolios)	3028 a 3049

O

OBLIGACION DE INDEMNIZAR	408/407
OBEDIENCIA DEBIDA (eximente)	515
OBSCENIDAD (libros, imágenes, etc.)	1685 a 1703
OCULTACION DE BIENES DE LA MASA EN QUIEBRA FRAUDULENTA	2277 a 2284

P

PAGARE (falsificación de)	2949/62
PAGO CON CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS	3054 a 3088
PANTEON. Daño causado en	2344
PASAJE. Falsificación de	2987
PASAPORTE (falsificación de)	2942/4
PARTIDOS POLITICOS EXTRANJEROS	1
PARTIDA DE NACIMIENTO. Falsedad en	3009
PARTICIPACION CRIMINAL	
—Por omisión de auxilio	668
—Por temor	669/671
—Por instigación	666/7
—En delito de prensa	675
—En delito de edición de libro obsceno	676/696/7

—En delito de violación	678
—En delito de envenenamiento	682
—En delito de hurto	684
—En delito de falsificación de escritura	677
—En delito de quiebra	685
—En delito de lesiones	686
PATRIA POTESTAD. (Pérdida de la) sobre menor delin- cuenta	625/6
—Privación durante la condena	72 a 93
PELIGROSIDAD	634/5/8/9/ 641/3/4
PELIGROSIDAD MAXIMA	639/644
PENA	
—De reclusión como accesoria por el tiempo de la condena como accesoria por tiempo indeterminado	704 a 717 705 a 746
—De multa	127 a 145
—De multa que se transforma en prisión	127/138/9
—De multa de leyes no penales	21 a 61
—De inhabilitación por el tiempo de la condena	72 a 89
—De inhabilitación absoluta como accesoria	74/75 y 115 a 120
—De inhabilitación especial	122 a 125
—En caso de procesado mayor de 60 años	67 a 69
—Irrita, encausado fallecido	985
—Única en caso de dos o más condenas	191 a 206
—En caso de varios delitos	826 a 854
—Mecanismo de su aplicación	830/842/ 849/851/2/4
—Condena en distintas provincias	830/842
—Ante la reincidencia	836
—Ante la libertad condicional	841/2/8
—Ante la cosa juzgada	845
—Casos de nulidad	829/833
—Cuando una de las penas es de multa	829/831/2
—Cuando no media pedido de parte	833
—Competencia	830/842/ 849/851/2/4
PENAS	
—Divisible e indivisibles en concurso de delitos	821 a 825
—De multa en concurso con pena de prisión	821 a 825
—De distinta naturaleza en concurso de delitos	826 a 854
PERSONAS	
—Abandono de	1382 a 1365
—Legalmente detenidas (evasión de)	2851/4
PERSONAS JURIDICAS	
—Responsabilidad por delitos	3050
—Represión de sus dirigentes	3050/3
PERSECUCION DE DELINCUENTES (omisión de)	2767
PERVERSIDAD BRUTAL (agravante)	1084 a 1092
PODER JUDICIAL (mandato) falsedad en	3007
POLICIA SANITARIA ANIMAL (violación de las leyes de)	2442 a 2445
POLIZAS DEL Bco. MUNICIPAL DE PRESTAMOS (alte- ración)	2891
PRENDA AGRARIA	2212 a 2221



PRENSA

- Facultad de las provincias para legislar sobre
- Delitos de calumnia e injuria por medio de

1513 a 1518

1519 a 1522

PREMEDITACION

1056 a 1062

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

- Concepto

875 a 948

879/880/882

/4/8/893

876/890/1/

5/7/9/900/3

876/890/1/

5/9/900/3

- Es de orden público

- Debe ser declarada aún de oficio

- Articulación de la defensa

875/7

878

881

892

- En las faltas

- En caso de desconocerse el autor del delito

- En caso de penas paralelas

- En caso de ausencia del procesado

891/5

- Solicitada por la esposa del prófugo

891/895

- En las leyes de enrolamiento

889

- En los delitos dependientes de instancia privada

900

- En las multas penales

909 a 911

- En las multas no penales

30 a 50

- En los casos de pluralidad de infracciones

912 a 920

- En el concurso de delitos

884 a 886

y

- Obligaciones del fiador ante la prescripción

912 a 920

- En la tentativa

906

- En los Códigos de Procedimientos Provinciales

925 a 927

928

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (comienzo de la)

- En la defraudación

930/6/7/8/

41/45/6

- „ „ usurpación de título

2660

- „ „ quiebra fraudulenta

931/942/8

- „ „ ley 11386

929

- „ „ tentativa de extorsión

932

- „ „ el encubrimiento de hurto

933/4

- „ „ la desobediencia a la autoridad

935

- „ „ calumnia

939/943

- „ „ malversación de caudales públicos

940

- „ „ malversación de caudales públicos por martillero

2703

- „ „ el delito de matrimonio ilegal

944

- „ „ la falsificación de documento

947

PRESCRIPCION DE LA PENA

- Pluralidad de infracciones

949 a 984

- Arresto

955/7

- Multa

949

- Multa en cuotas

950/1/4

- Multa de leyes no penales

137/140

- Condenado prófugo

51 a 54

- En la ley 4097

953

- En la condena condicional

956/961

- En infracción a la ley electoral

191 a 206

- En la ley 11585

958

- Ante el sobreseimiento definitivo

53

- De inhabilitación especial

959/60

- De la reincidencia de un menor

960

- De la ley 11672

624

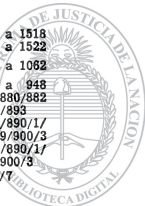
- Simultánea de dos penas privativas de libertad

961

964

PRESCRIPCION DE LA PENA — CUANDO COMIENZA A CORRER

- Cuando comienza a correr para el condenado no noti-



ficado	966 a 969
—Cuando comienza a correr para el liberado condicional	965
PRESCRIPCION DE LA PENA — CUANDO Y COMO SE INTERRUMPE	
PRESCRIPCION DE LA REINCIDENCIA	
—A los efectos de la reclusión accesoria	55 a 61
" " " " " excarcelación	970 a 978
" " " " " condena condicional	738 y 747
" " " " " libertad condicional	a 758
—Múltiple	747/8/52/4/6
—Modo de contar los plazos	758
—En los delitos de la ley 4097	755
	753
	746
	750/1
	757
PRESCRIPCION DE LAS COSTAS. Impuestas al procesado	401
PRESTACION DE SERVICIOS A REBELDES	2520/1/2531
—Prestación de servicios a rebeldes por fuerza	2529
PREVARICATO	
—Juez que dicta resolución contraria a la ley	2756
—Abogado que ejerce representaciones sucesivas	2758/60
—Abogados contrarios que pertenecen al mismo estudio ..	2761
—Mandatario que consiente actos contrarios al mandante ..	2762/3
PRETERINTENCIONAL (homicidio)	1149 a 1173
PRISION PREVENTIVA. Cómputo de la	157 a 163
—Cómputo del exceso de prisión sufrido	157 a 159
	y 162
PRIVACION DE LOS DERECHOS CIVILES DEL PENADO	81/84
PRIVILEGIO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR ..	406/7
PRODUCTOS TOXICOS O ADULTERADOS	2409/2410
PROMESA DE CURACION POR MEDIOS INFALIBLES O A TERMINO FIJO	2459/60
PROMOTOR DE REBELION	2528
PROPAGACION DE ENFERMEDAD PELIGROSA Y CONTAGIOSA	2414 a 2425
—Culposa de enfermedad	2426 a 2429
—De epidemia. Violación de medidas sanitarias marítimas ..	2441
PROTOCOLO DE ESCRIBANO (falsificación en)	2937
PRUEBAS	
—Substracción u ocultación de objetos destinados a probar alguna cosa	2685 a 2688
—Hacer desaparecer pruebas del delito (encubrimiento) ..	2824
PUBLICACIONES INJURIOSAS CONTRA GOBIERNO EXTRANJERO	2508
—Contra jefe de Estado extranjero	2512/3
—Contra miembro de casa reinante	2510

Q

QUEBRANTAMIENTO DEL PAGO POR CUOTA DE LAS MULTAS	139/40
---	--------



QUEBRADOS CULPABLES	2295 a 2300
QUEBRADOS FRAUDULENTOS	
—Cuestión prejudicial	2258 a 2279
—Concesión de ventajas indebidas a acreedor	2285 a 2289
—Ocultación de bienes de la masa	2277 a 2284
—Simulación de deudas, pérdidas, etc.	2272 a 2276
—La ley de quiebras y el Código Penal	2274
—Prescripción	931/942/948
	y
	2290 a 2294
QUIEBRA DE SOCIEDAD ANONIMA	2301 a 2303

R

RAPTO	1707 a 1711
REBELION	
—Concepto	2526
—Complicidad	2524/5/7
—Cooperación	2536
—Empleo a sueldo de los rebeldes	2524
—Oficial de los rebeldes	2522/3
—Prestación de servicios a los rebeldes	2520/1/31
—Prestación de servicios a los rebeldes por fuerza	2529
—Promotor de rebelión	2528
—Homicidio cometido en ocasión de	2537/8/9/40
RECETA MEDICA (falsificación de)	2977
RECONOCIMIENTO DE HIJA NATURAL (falsedad en escritura de)	3006
RECLUSION (como accesoria)	
—Medida de seguridad	720/5/6/8/ 733
—Requisitos para su aplicación	718 a 746
—En un paraje de los Territorios del Sur	704 a 746
—“Reclusión” y “relegación”	728/735
—De mayor de 60 años	722/744
—En el concurso de delitos	718
—Ante la libertad condicional	94/95/y 725
—Reclusión del reincidente y del reiterante	723
—Por el tiempo de la condena	704 a 717
—Por tiempo indeterminado	705/7/9/14/ 15 y 718 a 746
—Por tiempo indeterminado fijada de oficio	734/742
—Recurso de revisión	740
RECTIFICACION DE FALSO TESTIMONIO	2811 a 2813
REGULACION DE HONORARIOS SUBSTANCIADA CON EL CONDENADO	90/1
REINCIDENCIA	
—Reincidencia y reiteración	699/700
— “ y excarcelación	703
— “ de menores	623/4
— “ y libertad condicional	108
— “ por segunda vez	704 a 717
— “ por segunda vez ante la reclusión	704 a 715

—Prescripción	738 y 747
— " a los efectos de la reclusión accesoria	758
— " modo de contar los plazos	747/8/752/
— " de reincidencia múltiple	4/6
	750/1
	749
REINTEGRACION DE LO MALVERSADO	2730
REGISTROS (daño en)	2347
REDUCCION DEL MONTO DE LA CUOTA EN LAS MUL- TAS	131
RENUNCIA A LA ACCION PENAL	
—Requisitos	855/8/9
—Hecha por padre de la víctima	856
—Hecha por el damnificado	857
—En delitos de acción pública	859
—En delitos dependientes de instancia privada	859
REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR DELITOS	
—Ejercicio de la acción-personería	220 a 223
	y 240
—Ejercicio de la personería del ministerio público	221
—Jurisdicción	207 a 215
—Fijada de oficio	243 a 248
—Fijada a solicitud de parte	225 a 241
—Monto de la indemnización	228/236
—Oportunidad para requerirla	228/231/
	232/233
—En los delitos dependientes de acción privada	226/235
REPARACION DEL DAÑO MORAL	
—Causado por los delitos	259/261/266
	279/280
	/272/7/297
— " " cosas inanimadas	260
—Por parte de los terceros responsables	267/9/293
—En causa sobreseída por prescripción	264/8/270
—En la jurisdicción civil	273/4
—Causado por calumnias e injurias	257/275
— " " sufrimientos físicos	286
— " " lesiones por imprudencia	282/8
— " " acusación criminal desestimada	284
— " " privación indebida de la libertad	298/299
— " " desacato contra funcionario público	300
—Influencia de la absolución criminal sobre lo civil	300 a 323
— " de la condena criminal sobre lo civil	351 a 378
— " del sobreseimiento criminal sobre lo civil	326 a 350
REPRESION DE MONOPOLIOS Y TRUSTS (ley 11.210)	3028 a 3049
RESIDENCIA (Ley 4.144 sobre)	
—Extranjero expulsado que vuelve al país	2573/6/7/8
—Prescripción en caso de vuelta al país	2574/5/8
RESPONSABILIDAD	
—De Gerente y Sub-Gerente de Banco (defraudación) ..	2302
—De socio comanditario en la quiebra culpable	2303
—Del Presidente del Directorio de Banco en quiebra frau- dulenta	2301
—Responsabilidad penal de las Compañías Telefónicas ..	2408



RESTITUCION DE LA COSA OBTENIDA POR EL DELITO	379 a 388
—Caso de objetos pignorados	380/4
RETRACTACION de injurias y calumnias	1549 a 1566
REVELACION DE SECRETOS	
—Amenazas de (extorsión)	1987 a 1992
—Políticos o militares	2514 a 2518
REVOCACION	
—De libertad condicional	109 a 112
—De condena condicional	191 a 206
—Por comisión de nuevo delito	191 a 206
—Por comisión de nuevo delito penado con multa	191 a 194
—Sentencia incluyendo el nuevo delito	198
RIÑA	
—Lesiones en	1337 a 1340
—Homicidio en	1336
ROBO	
—Apoderamiento ilegítimo de cosa mueble	1903 a 1905
—Fuerza en las cosas	1919 a 1931
—Violencia en las personas	1906 a 1918
—En despoblado y en banda	1943 a 1950
—En despoblado y con armas	1951
—En lugares poblados y en banda	1952 a 1954
—Con perforación y fractura	1955 a 1966
—Con escalamiento	1967/72
—Con destrucción de alambrados	1968/9
—Con uso de llave igual o ganzúa	1975
—De ganado	1970/1/6
—Tentativa	1977 a 1979

S

SECRETOS (Violación de)	
—Contenidos en carta, telegrama, etc.	1804 a 1808
—Cometido por empleado de Correos y Telégrafos	1809 a 1813
—Extorsión por amenazas de revelar secretos	1988 a 1990
—Políticos o militares (revelación de)	2514 a 2518
SECRETO PROFESIONAL	
—Concepto	1814 a 1821
—Del médico citado como testigo	1816/18/19/ 21
—De las reparticiones públicas	1815
—De los asesores legales del Bco. Nación	1817
SECUESTRO DE COSA DEFRAUDADA	146
SECUESTRO de efectos que se suponen hurtados	149
SESION	
—Alzamiento para impedir elecciones	2532
—Alzamiento para impedir cumplimiento de resoluciones judiciales	2534
—Sublevación y disolución de contingente militar	2533
—Suscripción para tropa sublevada	2535
—Delitos conexos	2537 a 2540
SENADOR NACIONAL (detención de)	2582

SENTENCIA ABSOLUTORIA. Su influencia sobre lo Civil	307 a 323
SENTENCIA CONDENATORIA. Su influencia sobre lo Civil	351 a 358
SENTENCIA UNICA	
—Mecanismo de su aplicación	843/5/853
—En caso de alegarse prescripción de pena	828/844/850
—En caso de condena en distintas provincias	830/842
—Ante la cosa juzgada	845
—Ante la libertad condicional	841/2/8
—Ante la reincidencia	836
—Casos de nulidad	829/833
—Cuando una de las penas es de multa	829/31/32
— " no media pedido de parte	833
— " existe condena anterior consentida	837
—Competencia	830/42/49/ 51/2/4
SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO	1014 a 1017
SINDICO DE CONCURSO (malversación de caudales por)	2706
SOBRESEIMIENTO	
Provisorio. Su influencia sobre lo civil	331/5/42/4 /9/50
Definitivo. Su influencia sobre lo civil	326 a 350
SOCIEDAD ANONIMA (quiebra de)	2301 a 2303
SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE DAÑO	
—En caso de culpa concurrente	409
—En los cuasi delitos	410
SUBLEVACION	
—De buques de la escuadra	2530
—Y disolución de tropas	2535
SUBSTRACCION	
—De objetos destinados a servir de prueba	2685 a 2688
—De cosa mueble por su dueño (defraudación)	2138 a 2145
SUICIDIO	1213 a 1216
—Decomiso del arma empleada	152
SUPRESION O DESTRUCCION DE DOCUMENTOS	
—Cédula de notificación	3010
—Escritura pública de mandato	3011
—Recibo obtenido con engaño	3013
SUPRESION Y SUPOSICION DE ESTADO CIVIL	
—Falsas declaraciones insertas en partidas	1748/9/552
—Simulación de embarazo	1750
—Cuestión prejudicial	1751
—Adulteración de pasaporte	1744
" " cédula de identidad	1745/7
" " libreta de familia	1746
SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA	
—Requisitos para acordar el beneficio	164 a 190
—Personalidad moral del procesado	167/8/9/182
—Objeto de la susp. condicional de la pena	173
—Comisión de nuevo delito	191 a 193
—Susp. condicional de la inhabilitación como accesoria ..	166
—En el caso de penas complementarias o accesorias	183/4
—En el caso de una falta y un delito conexo	187
—En el caso de una falta de carácter municipal	190

—En la tenencia de alcaloides	165
—En el caso de ejercicio de la prostitución	164/8/9
" " " " interrupción de comunicación telefónica	172
" " " " concurso civil fraudulento	176
" " " " homicidio por imprudencia	177
" " " " multa e inhabilitación por lesiones	174/5



T

TELEGRAFOS Y TELEFONOS (atentado contra comunicaciones)	2401 a 2408
—Empleado de — Violación de correspondencia	1809 a 1813
—Interrupción de comunicación telefónica	2401 a 2408
TENENCIA DE ALCALOIDES POR PARTICULARES	2438 a 2440
TENTATIVA	
—Actos preparatorios	654/618
—Intención	655/8/9
—Comienzo de ejecución	653/4/5/8
—Punible	652/7/660
—Desistida	661 y 662
—De delito imposible	663/4
—De abuso de firma en blanco	2136
—De abuso deshonesto	1647
—De estafa	2075 a 2083
—De extorsión — prescripción de la acción	932
—De homicidio	651 y 1035
	a 1039
—De rapto	1707
—Prescripción de la acción	925 a 927
TEMIBILIDAD DEL AGENTE. Peligrosidad	634/5/8/9/ 641/3/4
TEMOR de sufrir daño grave e inminente (eximente)	492 a 497
TESTIGO. Incomparencia a citación	2589
TESTIMONIO FALSO	
—Concepto	2768 a 2792
—Declaración ante autoridad competente	2793 a 2797
—Falsedad sobre circunstancias personales	2798 a 2806
—Falsedad de testimonio, no punible	2807 a 2810
—En instrumento público	2491
—Instigación al falso testimonio por cohecho	2814/15
—Rectificación de la falsedad	2811 a 2813
TESTIMONIO DE ACTA DE DEFUNCION (Falsedad en) ..	3002
TERCEROS RESPONSABLES	
—Por el hecho de sus dependientes	359 a 378
—Por cosas inanimadas	362 a 364
TITULO PROFESIONAL (Usurpación de)	2657/8/9/ 2662 a 2689
TURBACION VIOLENTA DEL DERECHO DE HABITACION	2323
TRANQUILIDAD DEL PAIS (Actividades contrarias a la),	1
TRAICION	
—Ayuda al enemigo en caso de necesidad apremiante ...	2500/1
—Imputada a General de la Nación	2499



TRENES

—Entorpecimiento de marcha de tren	2388 a 2392
—Alambres que protegen las vías (destrucción de)	2382/5/7
—Introducción de animales en vía férrea	2383
—El C. Penal deroga la ley de ferrocarriles	2386/2392
—Arrojo de proyectiles contra tren en marcha	2393/4
—Abandono de tren por empleados	2396 a 2398
—Descarrilamiento culposo	2399/400

TRUSTS Y MONOPOLIOS. (Ley 11.210)	3028 a 3049
--	--------------------

U

ULTRAJES AL PUDOR	1685 a 1706
—Concepto de inmoral	1685
—Concepto de ultraje al pudor	1681/2/3/4/ 5/9/95/ 6/1703
—Autor de ilustraciones obscenas	1694
—Exhibiciones obscenas	1704 a 1706
—Tarjetas postales	1699
—Libros inmorales	1686/7/90 /1/2/3
—Películas cinematográficas inmorales	1681 a 1685 y 1698

UNIFORME. Uso indebido de	2261
USO	
—De documento o certificados falsos	3017 a 3026
„ estampillas inutilizadas	2925 a 2928
„ valores fiscales inutilizados	2929

USURPACION. De autoridad	2649/51/2/3
—De funciones	2654/5/6
„ títulos profesionales	2657/8/9/ 2662 a 2669
—Uso indebido de uniforme	2661
—Prescripción del delito de usurpación de título	2660

USURPACION DE INMUEBLES, DERECHO REAL, ETC.	
—“Usurpación” y “despojo”	2333
—Abuso de confianza	2315/2330
—Entrada clandestina al inmueble	2317/8
—Con violencia	2325/2331
—Usurpación de inmueble del padre por un hijo	2319
—Despojo al inquilino	2322
„ „ constructor de obra	2320
—Turbación violenta del derecho de habitación	2323

UTILIZACION DE APARATOS CONTRA INCENDIO	2372
---	-------------

UXORICIDIO	1043/6/7/8/9
-------------------------	---------------------

V

VENTA	
—De bienes robados	2163 a 2211
—De bienes afectados con prenda agraria	2212 a 2221
—O gravamen de bienes litigiosos o embargados	2163 a 2211
—O gravamen de cosa ajena como propia	2163 a 2211
VIGENCIA del Código Penal (entrada en)	3089

VIOLACION

—Agravante de parentesco	1624/8/9/30
—Agravante de daño en la salud	1626/31
—Aprovechamiento en común de una menor	1582
—Asimilación del concubino de la madre a padrastro ...	1578
—Coito vulvar con menor de 12 años	1573
—Coito vestibular con empleo de violencia	1572
—Consumación del acto sexual	1593 a 1598
—Introducción incompleta del miembro viril	1574/5/85/6
	/7
—Sodomía violenta como violación	1576
—Tentativa	1600 a 1609

VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

—Abandono del cargo	2681/2
—Extralimitación u omisión de deberes	2680
—Omisión de formalidades administrativas	2678
—Violación de texto legal expreso	2677

VIOLACION DE LAS LEYES DE POLICIA SANITARIA ANIMAL

2442 a 2445

VIOLACION, OCULTACION O SUBSTRACCION DE SELLOS O DOCUMENTOS

—Destrucción de escritura pública	2686
—Ocultación de documentos	2688
—Ocultación de cédula de notificación	2683/4/3010
—Substracción de prontuarios	2685

VIOLACION DE SECRETOS

—Contenidos en carta, telegrama, etc.	1804 a 1808
—Cometido por empleado de Correos	1809 a 1813
—Profesional	1814 a 1821
—Políticos o militares	2514 a 2518







LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

Aplicación de la ley penal

ART. 1. — Este código se aplicará:

- 1º Por delitos ⁽¹⁾ cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción; ⁽²⁾
- 2º Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. ⁽³⁾

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título I; Libro II, arts. 1 y 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 44 y 45. — Proyecto 1891; arts. 1, 2 y 3. — Proyecto 1906; art. 1. — Proyecto 1916; art. 1. — Ley 48; art. 3. — Concordancias: Ley 1612 (de extradición) arts. 1, 2, 3, 4, 5. — Código Civil, art. 1. — Código de Proc. Crim. para la Cap. Fed. y Terr. Nac., arts. 23, inc. 1º, 25, inc. 1º y 669. — Tratado de Montevideo (Ley 3192), arts. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14. — Ley 12159 (Adhiriendo a la Convención Aeronáutica de París). — Ley 12272 (Convención Aérea con el Brasil).

FUENTE: El Proyecto 1891 (arts. 1, 2 y 3) de donde pasó al art. 1 del Proyecto 1906. De éste lo tomó el Proyecto 1916, teniendo en cuenta la crítica al mismo hecha por Herrera en "La Reforma Penal", págs. 1 y siguientes.

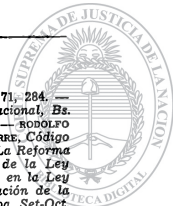
BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-178. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-135, 141, 143, 146, 155. — RODOLFO MORENO, *El Cód. Penal y sus antecedentes*, 1-224. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal Arg. de 1917/20*, p. 129. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 31. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 49. — J. C.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Artículo 1º Este Código se aplicará:

- 1º Por delito cometido, en todo o parte, en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción o que en el territorio o en esos lugares deba producir sus efectos.
- 2º Por delito cometido en el extranjero por funcionario o empleado de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo o comisión.
- 3º Por delito cometido en el extranjero cuando lo estatuyan los tratados o las normas del derecho internacional.



RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-62 y 2-81, 169, 171, 284. — CARLOS ALBERTO ALCORTA, *Principios de Derecho Penal Internacional*, Bs. As., 1931, 1-9. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-57. — RODOLFO RIVAROLA, *El Derecho Penal Argentino*, p. 192. — JULIÁN L. AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 49 (en nota). — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, ps. 1 y sgts. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *Interpretación de la Ley Penal (La Ley, t. 15, p. 1251)*. Id. *El Problema de la Analogía en la Ley Penal (La Ley, t. 15, p. 1269)*. — SEBASTIÁN SOLER, *Interpretación de la Ley Penal (Boletín de la Fac. de Derecho y C. Sociales. Córdoba, Set-Oct. 1937, p. 49)*. — JOSÉ PECO, *La analogía como fuente de norma penal (La Ley, t. 2, sec. doct., p. 54)*. — CARLOS J. RODRÍGUEZ, *La Redacción de los Códigos - necesidad de la indicación de las fuentes de sus artículos*. (Boletín de la Facultad de Derecho y C. Sociales. Córdoba, Marzo-Abril 1938, p. 122.) — LORENZO CARNELLI, *Carácter Legalista de las Leyes Penales. (La Ley, t. 14, sec. doct., p. 1.)*

JURISPRUDENCIA

1. — En el estado actual de nuestra legislación, las perturbaciones que pueden ocasionar a la tranquilidad del país y el peligro que signifique para la soberanía nacional y la eficacia de nuestras instituciones, la existencia en la República de partidos políticos extranjeros que responden en su organización, funcionamiento y métodos de lucha y propaganda, a organismos que los rigen desde el exterior, son cuestiones ajenas al Poder Judicial. (*Cámara Federal de la Cap.*, junio 26/39 — *La Ley*, 15-34.)

2. — En caso de bigamia por segundo matrimonio realizado en el extranjero en fraude de la ley argentina, por argentinos, domiciliados y residentes en la Argentina, que se someten ficticiamente a una jurisdicción extranjera, sin poder invocar para tal someti-

(1) Salvo los delitos de prensa sobre los que legisla cada provincia para sí, de acuerdo a la Constitución Nacional; tampoco legisla sobre faltas y represión del juego por igual razón. En cuanto a las personas, escapan a su aplicación, los menores de 14 años (art. 36 C. P.) los diplomáticos extranjeros, su familia y servidumbre (art. 101 de la Const. Nac. y arts. 1 y 3 de la Ley N°48) y los Jefes de Estados Extranjeros (art. 221 del C. P.).

(2) *Mar Territorial* (art. 2340 C. Civil). Hasta cuatro leguas marinas medidas desde la línea de la más baja marea. El Tratado de Derecho Penal de Montevideo, tiene por aguas territoriales a los efectos penales, las comprendidas en una extensión de cinco millas marinas, desde la tierra firme e islas que forman parte de la Nación. Están igualmente sometidos a la jurisdicción de este código, los buques de guerra de la Nación, por los delitos cometidos en ellos en cualquier lugar donde se encuentren, como así también los buques mercantes argentinos o extranjeros en aguas argentinas. Sobre soberanía del espacio aéreo, ver leyes 12152 adhiriendo a la Convención de París de 1919, y ley 12272 (Conv. con el Brasil sobre soberanía del espacio aéreo). La Argentina está adherida igualmente a las Convenciones de Madrid (1926) y la Habana (1928), sobre soberanía de cada país sobre su espacio aéreo. Sobre delitos a bordo de aeronaves, ver Eusebio Gómez ob. cit. 1-178 y Gonzalo A. García "Contribución al estudio del régimen legal de la aeronáutica argentina" Bs. As., 1936, pág. 76.

(3) De acuerdo al artículo 2 de la ley 27 y los principios generales del Derecho Internacional. (Ver, Carlos Alberto Alcorta", *Rev. Penal Arg.*", t. 3, p. 7 y sgts.



miento ni su nacionalidad, ni su domicilio, ni su residencia, ni su simple estada en ese país extranjero a título de viajeros, es aplicable la ley argentina y los tribunales del país son competentes. (C. C. C., julio 3/38 — J. A., 63-303.)

3. — El respeto internacional que se debe a las relaciones judiciales extranjeras, o a los actos jurídicos realizados en el extranjero, tiene sus límites y no impide que los tribunales argentinos, aplicando la ley argentina, investiguen el delito de bigamia por segundo matrimonio, realizado en el extranjero, porque es indispensable evitar que el derecho extranjero predomine sobre el derecho nacional, haciéndolo ilusorio, sobre todo, en cuestiones de orden público. (C. C. C., julio 5/38 — J. A., 63-303.)

4. — Compete a la justicia argentina la causa por falso testimonio incoada contra una persona a quien se le imputa haberlo cometido al prestar declaración en el extranjero en ocasión del diligenciamiento de un exhorto librado por un juez argentino. (C. C. C., mayo 15/36 — J. A., 54-575.)

5. — Si bien el art. 1 del C. P. se refiere a la aplicación de la ley y no a la jurisdicción cuando preceptúa que el código se aplicará por delitos cuyos efectos deban producirse en el territorio de la República, sienta un principio general, que no puede perderse de vista, cuando se trata de establecer la jurisdicción competente en el caso en que los diferentes actos constitutivos del hecho integral delictuoso, se habrían llevado a cabo en distintas jurisdicciones. (Tribunal Pleno C. C. C., diciembre 13/35 — J. A., 52-926.)

6. — En el delito de matrimonio ilegal por segundo matrimonio realizado en el extranjero, es de aplicación la ley argentina y por lo tanto corresponde a la jurisdicción de los tribunales nacionales. (C. C. C., Tribunal Pleno, agosto 28/28 — Fallos, 2-479.)

ART. 2. — Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.



Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho. (1)

ANTECEDENTES: Const. Nac., art. 18. — Proyecto Tejedor. Libro II; Título I, artículo 7. — Proyecto 1891; art. 7. — Proyecto 1906; art. 3. — Código derogado; art. 48. — C. de Pr. Crim. para la Cap. y Terr. Nac.; art. 551, inc. 4.º. — Proyecto 1917; art. 2.

FUENTE: El proyecto 1906 (art. 3).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-152. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-121, 122, 172, 181. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-78 y sgts. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, 34. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, 149. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 1-285. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, 43. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, 35. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 52. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-62, 315. — LEONIDAS ANASTASI, *La retroactividad de la ley penal más benigna y la autoridad de la cosa juzgada* (J. A., 33-13). — RAQUEL T. DEL PINO, *Retroactividad de la ley penal* (Boletín Mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Marzo-Abril 1939, p. 395).

JURISPRUDENCIA

7. — La Constitución Nacional no prohíbe sancionar leyes retroactivas sino "leyes ex post facto" y esto no se aplica a las leyes civiles o administrativas sino puramente a las de carácter penal. (*Cámara Fed. de la Cap.*, octubre 14/36 — J. A., 56-33.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

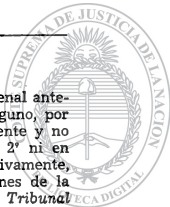
Art. 2º — Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al tiempo de pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la sanción se limitará a la establecida por esa ley.

En el cómputo de la prisión preventiva se observará, separadamente, la ley más favorable al procesado.

Los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho, desde el día en que se inicie su vigencia.

(1) Indudablemente que el legislador quiso decir con ello, que, ante la ley más benigna, habría una revisión general de causas, de oficio. Sin embargo, sabemos que el recurso de revisión por ley nueva, no está previsto en todos los códigos de procedimientos provinciales. En la justicia federal, el caso fué simple porque existía la disposición legal del artículo 551 inciso 4º que autoriza la revisión del proceso "cuando una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que antes se "consideraba como tal o haya disminuido su penalidad" (Ver Tomás Jofré: "El Código Penal de 1922, Bs. As. 1923, comentario al art. 2º).



8. — La disposición legal del artículo 73 del código penal anterior, no puede ser aplicada actualmente en supuesto alguno, por haber sido derogada, a la sanción del código penal vigente y no encuadra en las previsiones de excepción del artículo 2° ni en las de el 3° de este último código que, expresa y taxativamente, limitan la retroactividad o ultraactividad de disposiciones de la ley penal actual o anterior respectivamente. (C. C. C., Tribunal pleno, junio 9/33 — Fallos, 2-478.)

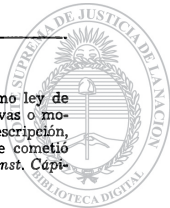
9. — 1°) Aunque la ley vigente al cometerse la infracción fije como pena principal una multa de máximun menor que la prevista por la ley existente, al pronunciarse el fallo, debe aplicarse ésta, si al mismo tiempo establece una pena subsidiaria privativa de la libertad, más limitada que aquella.

2°) La ley 11672 que reprime las loterías clandestinas, es más benigna que la ley anterior número 4097, porque la pena subsidiaria privativa de la libertad fijada por ésta, es más grave que la de aquella, aún cuando la multa tiene máximun menor. (C. C. C., febrero 24/33 — Fallos, 2-56.)

10. — Si la infracción sobre loterías clandestinas se cometió cuando regía la ley 4097 y la prescripción se alega durante la vigencia de la número 11672, debe aplicarse aquella, en razón de ser más benigna en cuanto a la extinción de la acción, puesto que fija como pena principal una multa más reducida que la nueva ley. (C. C. C., marzo 24/33 — Fallos, 2-58.)

11. — Siendo más benigno el nuevo código penal para los falsificadores de moneda, corresponde revisar el proceso del condenado por ese delito y deducir la diferencia entre la condena que sufre y la que se le impondría según la nueva ley. (Cám. Fed. de la Cap. — G. del Foro, 68-111.)

12. — El recurso de revisión en razón de una ley más benigna, no importa volver a juzgar de nuevo el delito, sino tan solo determinar la pena que debe imponerse al reo, de acuerdo a la nueva ley; en el caso, 11 años de reclusión en vez de 12 años de presidio a que había sido condenado por el homicidio perpetrado. (Corte Suprema — G. del Foro, 51-149.)



13. — La ley de fe de erratas debe considerarse como ley de reformas al C. Penal cuando establece disposiciones nuevas o modifica las anteriores. La primitiva disposición sobre prescripción, siendo más benigna al reo, debe aplicarse al delito que cometió antes de la sanción de la ley de fe de erratas. (*Primera Inst. Capital — G. del Foro*, 49-288.)

14. — Procede el recurso de revisión interpuesto por el condenado a 17 años y seis meses de presidio, desde que el nuevo código penal castiga el mismo delito con prisión de 8 a 25 años, pena que, por su naturaleza y la elasticidad de sus términos, es más benigna. (*Primera Inst. Cap. — G. del Foro*, 49-288.)

16. — La primitiva disposición sobre prescripción siendo más benigna al reo, debe aplicarse al delito que cometió antes de la sanción de la ley de fe de erratas. (*Primera Inst. Cap., — G. del Foro*, 49-288.)

17. — La disposición del artículo 65, inc. 3º del código penal vigente, es más favorable al reo que la del artículo 90 inc. 1º del código derogado. (*Sup. Tribunal de Santa Fe*, abril 6/34 — *J. A.*, 46-442.)

ART. 3. — *En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.*

ANTECEDENTES: Proyecto de 1891; art. 7. — Proyecto de 1906; art. 3. — Proyecto de 1917; art. 2. — Código derogado; art. 48.

FUENTE: El proyecto de 1891 (art. 7).

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-179. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-298. — JOSÉ FEJO, *La Reforma Penal Argentina de 1917-20*, p. 164. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*,



p. 40. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53.

ART. 4. — *Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto estas no dispusieran lo contrario.*

ANTECEDENTES: Proyecto de 1891 (art. 8).

FUENTE: Art. 8 del Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-165. — RODOLFO MORENO, *La Ley Penal Argentina*, p. 40. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-86, 172, 284. — LEONARDO A. COLOMBO, *Multas civiles y multas penales*. (*La Ley*, t. 14, sec. doct., p. 57.) — ALBERTO G. SPOTA, *Prescripción de las multas administrativas*. (*La Ley*, 18-413.) — VÍCTOR E. ORTIZ, *La multa administrativa y la multa penal*. (*J. A.*, 51-734.) — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-301. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 40.

LEYES QUE CONTIENEN DISPOSICIONES PENALES

3975 — Ley de marcas de fábrica.
4097 — Ley de juegos de azar. (Ver Ley 11.672.)
4144 — Ley de residencia.
4661 — Ley de descanso dominical.
8871 — Ley de elecciones nacionales.
10983 — Ley sobre alcaloides.
11221 — Ley de fe de erratas del C. Penal.
11271 — Ley de identificación de mercaderías.
11281 — Ley sobre contrabando.
11309 — Ley modificatoria del art. 204 del C. Penal.
11331 — Ley modificatoria del art. 204 del C. Penal.
11317 — Ley sobre trabajo de mujeres y niños.
11627 — Ley de arrendamientos agrícolas.
11585 — Leyes sobre impuestos.
11723 — Ley de propiedad intelectual.
11752 — Ley Registro Nacional de Reincidentes.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 2º — (Párrafo tercero) En el cómputo de la prisión preventiva se observará, separadamente, la ley más favorable al procesado.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 3º — Las disposiciones generales del presente Código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto fuere posible.

11833 — Ley Organización Carcelaria y Régimen de la Pena.
12331 — Ley sobre profilaxis social.

Ver "in extenso" la lista de las leyes que contienen disposiciones penales, en "Instituciones Penales Argentinas". Bs. As., 1939; del Dr. Carlos Malagarriga.



JURISPRUDENCIA

Multas penales de leyes no penales — Concepto

18. — La infracción a una ley impositiva, castigada con multa, no reviste el carácter de delito; no cabe pues, oponer en tales casos el término que el C. P. señala para la prescripción de las acciones penales o de las penas; tanto más cuanto que con arreglo a la ley de apremio, las multas fiscales como accesorias del impuesto, se hallan sujetas a la prescripción de diez años. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, diciembre 31/40 — *La Ley*, 21-520.)

19. — Son de naturaleza penal las multas que tienen carácter sancionador para prevenir la violación de la ley y no carácter reparatorio a fin de resarcir un daño. (*Corte Suprema*, diciembre 27/40 — *La Ley*, 21-341.)

20. — La multa impuesta por infracción a la ley de Impuestos Internos, es de carácter penal y en los casos de coparticipación, no debe ser aplicada en forma solidaria, sino personal. (*Corte Suprema — Fallos*, 183, 216 y 383, marzo 22/39 — *Parry*, V. 27-82.)

21. — Las multas que no derivan del poder financiero del Estado, sino del ejercicio de un poder de policía acerca de la seguridad, higiene y moralidad públicas, no tienen carácter de una indemnización, sino de un verdadero castigo, de una penalidad de las previstas en la primera parte del artículo 18 de la Constitución Nacional. (*Sup. Trib. de Santa Fe en pleno*, diciembre 9/38 — *La Ley*, 12-1085.)

22. — La distinción de la naturaleza de las multas establecidas por las leyes que no son de carácter penal —multa de naturaleza reparatoria y multas de carácter penal—, ha sido establecida

reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema. (Corte Suprema, diciembre 6/39 — *La Ley*, 16-1013.)

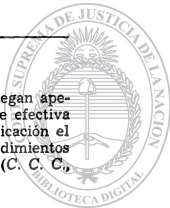
23. — La resolución administrativa condenatoria que reviste carácter penal y solo se halla fundada en una presunción de mala fe, admitida por la autoridad, con prescindencia de toda prueba, no se ajusta a los principios que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º del Código Penal, autorizan regular la responsabilidad penal en las causas de carácter fiscal, por los principios adoptados por el C. Penal. (Cám. Fed. de la Cap., junio 23/39 — *La Ley*, 14-1090.)

24. — Las multas establecidas en las leyes especiales tienen siempre carácter penal, siéndoles aplicables las disposiciones del Código Penal, de acuerdo al artículo 4º de éste. (Cám. Fed. de la Cap. — *J. A.*, 55-419.)

25. — Las multas establecidas para asegurar la percepción de los derechos fiscales, se dividen en dos categorías: a) en materia de aduana, sisas e impuestos internos, contribución personal y patentes, las multas deben ser aplicadas por los tribunales correccionales y no existen sino en virtud de juicio contradictorio; son penas, en el sentido del derecho penal y b) las multas cuya percepción está confiada a la Administración, por las leyes relativas a los derechos de registro, de hipotecas, de escribanía, de timbre, de sucesión y de mutación por deceso, son extrañas al derecho penal y exigible en la misma forma que los impuestos cuya percepción garantizan, es decir, ante los tribunales civiles. (Cám. Civil Primera de la Cap., Id. Corte Suprema de la Nación, junio 21/37 — *J. A.*, 58-713.)

26. — Para que las multas tengan carácter penal, es necesario que se encuentren establecidas en leyes de carácter repressivo y es a éstas que se refiere el código penal, al establecer en su artículo 4º que sus disposiciones generales se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario. (Corte Suprema, junio 21/37 — *J. A.*, 58-713.)

27. — Las multas impuestas por el Departamento Nacional de



Higiene en virtud de la ley 4687 y su reglamentación, llegan apeladas ante el Juez del Crimen al solo objeto de hacerse efectiva la sanción por vía ejecutiva. En consecuencia, es de aplicación el procedimiento común establecido en el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales y no el procedimiento criminal. (C. C. C., noviembre 8/38 — *La Ley*, 13-547.)

28. — Ninguna de las disposiciones del Código Penal, es aplicable a las multas impuestas por el Departamento Nacional de Higiene, en virtud de la ley 4687. La acción judicial que se ejercita para su cobro y cuyos procedimientos están regidos por la ley de forma en lo civil y comercial, emerge de la condición administrativa de la repartición nacional que acciona, que no puede confundirse con la acción penal ejercitada y condicionada por los jueces de la jurisdicción criminal, de acuerdo a normas distintas. (C. C. C., noviembre 8/38 — *La Ley*, 13-547.)

29. — El artículo 66 de la ley 3975, instituye una acción en todo asimilable a las dependientes de instancia privada del artículo 72 del Código Penal, y muy especialmente en su efecto de que debe continuar de oficio una vez iniciada, no obstante el apartamiento del agraviado. (Cám. Fed. de Bahía Blanca, octubre 19/39 — *La Ley*, 18-834.)

Prescripción de la acción penal en las leyes especiales

30. — A los efectos de la prescripción de la acción penal, las infracciones a la ley de marcas, no constituyen un delito continuo. (Corte Suprema — Fallos, 160-190. — *Parry V.* 22-642.)

31. — La prescripción de la acción por fraude del impuesto a las alhajas establecido por el artículo 14 de la ley 11252, corre desde que se ha cometido la infracción —venta al público— puesto que no se trata de un delito continuado. (Cám. Federal de Bahía Blanca, junio 28/39 — *La Ley*, 17-8.)

32. — No puede alegar la prescripción, el infractor que ha oblado la multa en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 11226, como requisito imprescindible para promover el



juicio contencioso - administrativo. (Cám. Fed. de la Cap., agosto 7/39 — *La Ley*, 15-586.)

33. — La prescripción de la acción penal cuando se trata de una infracción penada por el artículo 29 de la ley 3959, debe considerarse en relación a la pena corporal que dicha disposición legal establece y no con respecto a la multa. (Cám. Federal La Plata, mayo 12/39 — *La Ley*, 15-20.)

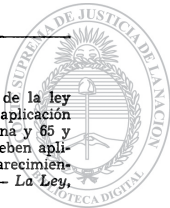
34. — La prescripción del artículo 55 de la ley 3975 debe considerarse operada, si desde la fecha del llamamiento de autos en segunda instancia o desde la del informe "in voce" hasta el pedido de pronto despacho por el querellante, ha transcurrido el término que fija dicha disposición legal; no siendo impedimento para la efectividad de la prescripción, la circunstancia de estar cerrado el juicio por las condiciones procesales premencionadas. (Corte Suprema, diciembre 23/38 — *La Ley*, 13-490.)

35. — La prescripción del artículo 55 de la ley 3975, no se ha operado, aún cuando haya transcurrido más de un año desde la fecha en que la actora tuvo conocimiento del uso que de su marca hacía el demandado, como se prueba mediante el telegrama colacionado que le remitió, si con posterioridad a esa fecha y al tiempo de interponerse la demanda, el emplazado ha seguido en ese uso pues la demanda la origina este hecho y no aquél y se trata de la repetición del mismo y no de su ejecución continuada. (Cám. Fed. de la Cap., septiembre 11/39 — *La Ley*, 16-67.)

36. — La acción penal emergente de las infracciones a la ley 4363, se prescribe en los términos del Código Penal. (Cám. Fed. La Plata, marzo 3/39 — *La Ley*, 13-669.)

37. — Para las infracciones a la ley de sanidad del vino, no rigen en punto a la prescripción de las multas las disposiciones de la ley 11585 sino las generales del Código Penal. (Cám. Fed. B. Blanca, diciembre 15/38 — *La Ley* 14-1113.)

38. — Las causas que —sobre la base de la infracción imputa-



tada a los artículos 13 y 16 del decreto reglamentario de la ley 11281— persiguen la imposición de dobles derechos, por aplicación de los artículos 1025 y 1026 de las Ordenanzas de Aduana y 65 y 76 de la ley 11281, son de naturaleza penal; por tanto, deben aplicarse los principios del Código en la materia para el esclarecimiento de la ley aplicable al caso. (*Corte Sup.*, junio 23/39 — *La Ley*, 15-263.)

39. — La prescripción del derecho de acusar por infracción a la ley de Impuestos Internos, debe computarse desde el día que se descubre la respectiva trasgresión. (*Cám. Fed. Cap.*, octubre 27/39 — *La Ley*, 16-595.)

40. — La prescripción de la acción penal fundada en la infracción a la ley sobre marcas de fábrica, se opera por la paralización de los procedimientos judiciales, aun cuando ésta se haya producido después del llamamiento de autos para sentencia. (*Corte Sup.* — *Fallos*, 182-495 — *Parry V.* 26-565.)

41. — La prescripción de la acción penal de los delitos de contrabando, se opera a los tres años, de acuerdo al Código Penal. (*Cám. Federal La Plata*, octubre 5/36 — *J. A.*, 56-61.)

42. — La prescripción de la acción penal en el delito de contrabando reprimido con pena corporal y multa, corre aisladamente para cada una de éstas; no es admisible su acumulación. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 5/36 — *J. A.*, 56-61.)

43. — La prescripción estatuida por el artículo 55 de la ley de marcas (3975) se refiere a la acción civil o criminal fundada en un delito; presupone la existencia de alguno de los hechos delictuosos considerados en el artículo 48 de la misma ley; mientras que el artículo 44 se refiere a la acción meramente civil que corresponde al damnificado por el uso que otro haga de su nombre, a fin de obligarlo a abstenerse de dicho uso. (*Corte Suprema*, julio 23/37 — *J. A.*, 59-35.)

44. — Las infracciones previstas en la ley 11275 de identifica-



ción de mercaderías, prescriben en el término señalado en el artículo 62 inc. 6° del C. Penal. No es aplicable al caso la ley 11585, por no ser aquella como ésta, una ley de impuestos. (*Cám. Fed. de Rosario*, marzo 16/37 — *J. A.* 58-79.)

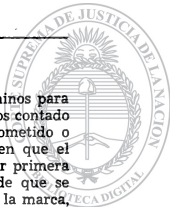
45. — Mediando acusación criminal por el delito de usurpación de marca, la prescripción se rige por el artículo 55 y no por el 44 de la ley 3975. (*Cám. Fed. Cap.*, julio 21/37 — *J. A.* 59-77.)

46. — La prescripción de diez años que establece el artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana, rige para las sanciones de carácter pecuniario que ellas establecían mas no para los casos de pena corporal instituída por la ley 11281 para el delito de contrabando. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 5/36 — *J. A.*, 56-61.)

47. — La ley 11585, respondió al propósito de extender en beneficio del fisco, el plazo para las prescripciones breves que en las infracciones penadas con multas determinaba el Código Penal; pero no se le puede atribuir implícitamente el propósito de reducir a la mitad el término de prescripción que para los derechos aduaneros establecen las Ordenanzas de Aduana. (*Cám. Fed. Rosario*, septiembre 5/36 — *J. A.*, 55-831.)

48. — El término de 5 años que establece el artículo primero de la ley 11585 para la prescripción de las multas por infracción a las leyes de impuestos internos, se refiere no sólo a la pena sino también a la acción penal. Esa interpretación aclara el artículo 3 de la misma ley según el cual los actos de procedimientos judiciales interrumpen el término de la prescripción, de la acción y de la pena. (*Corte Suprema*, septiembre 7/36 — *J. A.*, 55-719.)

49. — El artículo 44 de la ley de marcas número 3975 rige el cómputo de la prescripción de la acción civil cuando no se imputa delito al demandado, mientras que el artículo 55 de la misma ley, se aplica a los casos en que la acción se funda en la existencia de un hecho punible. (*Cám. Fed. Cap.*, septiembre 23/36 — *J. A.*, 55-817.)



50. — El artículo 55 de la ley 3975 estatuye dos términos para la prescripción de la acción penal o civil: uno de tres años contado desde que el delito de uso indebido de la marca fué cometido o repetido y otro de un año contado desde el momento en que el propietario de la marca, tuvo conocimiento del hecho por primera vez. El primer término se cumple a los tres años desde que se cometió o repitió el delito, a menos que el propietario de la marca, después de conocer la comisión del delito, haya dejado pasar un año sin accionar en cuyo caso la prescripción se produce al año. (*Corte Suprema*, junio 5/36 — *J. A.*, 54-654.)

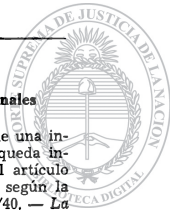
Prescripción de la pena en las leyes especiales no penales

51. — En ausencia de una disposición de la ley 11585 o de otra de impuestos internos que determine el momento desde el cual comienza a correr el término de la prescripción de las multas que ella determina, es de aplicación el artículo 66 del C. Penal. (*Corte Suprema*, abril 10/40 — *La Ley*, 18-396.)

52. — La prescripción de las penas corporales establecidas en las leyes de impuestos, se opera en los plazos fijados por el artículo 62 del C. Penal, que no ha sido modificado ni derogado por los artículos primero y tercero de la ley 11585 (Disidencia del doctor Terán). (*Cám. Fed. de Tucumán*, abril 21/39 — *La Ley*, 14-618.)

53. — Las disposiciones del artículo tercero de la ley 11585, por ser esta ley especial y posterior al Código Penal, deben ser aplicadas con preferencia a las de este cuerpo de leyes en las causas que se susciten por infracción a las leyes impositivas de la Nación. (*Cám. Fed. de Tucumán*, abril 21/39. — *La Ley*, 14-618.)

54. — La prescripción de una multa impuesta por infracción a la ley 4687 de farmacia, no está regida por el artículo 65 del Código Penal sino por el título respectivo del Código Civil y particularmente por el artículo 4023 del mismo, que señala el término de prescripción común, desde que no existe ninguna otra disposición legal que le sea aplicable. (C. C. C., noviembre 8/38 — *La Ley*, 13-547.)



Interrupción de la prescripción en las leyes no penales

55. — La prescripción de la acción cuando se trata de una infracción reprimida con multa, prisión e inhabilitación, queda interrumpida por los actos de procedimiento conforme al artículo tercero de la ley 11.585, sin que deba hacerse distingos según la clase de pena. (*Cámara Federal de Mendoza*, febrero 10/40. — *La Ley*, 18-678.)

56. — Los actos de procedimiento practicados dentro del año de deducida la querella, interrumpen la prescripción de la acción con respecto a los delitos reprimidos por la ley de marcas de fábrica. (*Cám. Fed. Cap.*, mayo 17/40. — *La Ley*, 18-898.)

57. — La prescripción de las multas de carácter penal —derivadas del ejercicio del poder de policía municipal— no se interrumpe con las actuaciones llevadas a efecto mientras no haya sentencia firme. (*Sup. Trib. de Santa Fe*, en pleno, diciembre 9 de 1938. — *La Ley*, 18-414.)

58. — El artículo tercero de la ley 11.585, al establecer los actos interruptivos de la prescripción, se refiere únicamente a la pena de multa y no a las penas privativas de la libertad. (*Corte Suprema*, abril 17/39. — *La Ley*, 14-272.)

59. — La naturaleza penal de las multas derivadas del ejercicio del poder de policía municipal, no se modifica por el procedimiento de carácter civil que se emplee con arreglo a las leyes, para hacerlas efectivas, ni la prescripción se interrumpe con las actuaciones llevadas a cabo mientras no haya sentencia firme. (*Superior Tribunal de Santa Fe*, en pleno; diciembre 9/38. — *La Ley*, 12-1085.)

60. — Cuando se trata de infracciones a la ley de marcas de fábrica, la deducción de la acción penal interrumpe la prescripción, siendo por consiguiente inaplicable el sistema del Código Penal sobre la no interrupción de la prescripción por los procedimien-



tos judiciales. (*Corte Suprema; Fallos, 159-372. — Parry, V. 22-642.*)

61. — La prescripción de la acción por cobro de multa por infracción a la ley de impuestos internos, se opera por el transcurso del tiempo, sin que la tramitación judicial pueda interrumpirla. (*Corte Suprema; Fallos, 160-13. — Parry, V. 22-642.*)

Condena condicional de las infracciones de leyes no penales

62. — Las disposiciones del Código Penal sobre condena condicional, no pueden aplicarse a los delitos o infracciones de las leyes especiales, cuando éstas contengan disposiciones en contrario. (*Corte Suprema; Fallos, 160-370. — Parry, V. 22-625.*)

63. — No procede el beneficio de la condena condicional en las infracciones previstas por la ley 11.317 sobre trabajo de mujeres y niños. (*Corte Suprema; Fallos, 161-372. — Parry, V. 22-372.*)

TITULO II

De las penas

ART. 5. — *Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891; art. 9. — Código Derogado; art. 54. — Ley de Reformas (4189); art. 7. — Proyecto 1906; art. 4.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-576. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-332, 371, 376, 438, 439. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-315. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 42. — JOSÉ PECCO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 179. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 295. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 45. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Arg.*, p. 50. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-175 y sgts. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53. — J. C. RAFFO DE LA RETA, 1-56 y 2-100, 178, 285. — C. BERNALDO DE QUIRÓS, *La evolución de la pena*. (*La Ley*, t. 22, sec. doct., p. 21.) — ALFREDO J. MOLINARIO, *Las penas privativas de la libertad, de corta duración*. (*Rev. Penal y Penitenciaria. Bs. As., Enero-Febrero 1941*, p. 13.)



JURISPRUDENCIA

64. — No existiendo en el Código penas de prisión y penitenciaría, han de ser consideradas a lo sumo como de reclusión, a los efectos de los artículos 690, 691 y 692 del C. de Pr. Cr., cuando estén establecidas en leyes especiales, no derogadas por el Código. (C. C. C.; junio 7/29. — J. A., 30-240).

65. — El Código Penal vigente, ha suprimido el término medio entre el máximo y el mínimo como pena ordinaria del delito, de modo que los jueces no están obligados a aplicar matemáticamente ese promedio. (Cám. Fed. La Plata; marzo 28/30. — J. A., 32-788.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 30. — Las sanciones establecidas para los delitos cometidos por mayores de diez y ocho años, son:

- 1º Reclusión.
- 2º Prisión.
- 3º Internación en un manicomio o en un establecimiento oficial adecuado para la curación o tratamiento.
- 4º Expulsión del país.
- 5º Inhabilitación.
- 6º Multa.

Ley 11833 (Oct. 9 de 1933) sobre Organización Carcelaria y Régimen Penal.

“Art. 1º — Créase la Dirección General de Institutos Penales que tendrá a su cargo todos los institutos penales de la Nación. La Dirección estará compuesta por un Director General, un Consejo Asesor y el personal técnico administrativo indispensable. Art. 2º — El Consejo Asesor, estará formado por el Director General de Institutos Penales, que será su Presidente y por cuatro vocales que serán: un profesor de Derecho Penal de la facultad de Derecho de Bs. As., que designará el P. E. por el término de tres años, siendo reelegible; el Presidente del Patronato de Liberados excarcelados, el Director del Anexo Psiquiátrico y el Jefe del Registro Nacional de Reincidencia. Los dos primeros vocales percibirán el viático que la ley de presupuesto les asigne. Art. 3º — El Consejo asesorará a la Dirección General sobre la forma de cumplir lo dispuesto en esta ley, de acuerdo con las normas generales de ella y del código penal, en concordancia con los adelantos de la ciencia penitenciaria. Art. 4º — La Dirección General podrá requerir de todas las oficinas públicas, el asesoramiento técnico que le sea necesario. Art. 5º — Dependerá de la Dirección General, el Instituto de Clasificación que estará integrado por el Jefe del Anexo Psiquiátrico, el profesor de derecho penal que desempeñe las funciones de vocal del Consejo Asesor y un representante del Patronato de Liberados y Excrcelados. Este último será designado por el P. E. por un término de tres años, siendo reelegible y gozando del viático que determine el presupuesto. Art. 6º — Corresponde al Instituto de Clasificación: a) asesorar a la Dirección General respecto al régimen de la pena; b) estudiar la personalidad de cada penado y su grado de readaptación social, llevando la ficha individual de cada uno; c) producir informes en los pedidos de libertad condicional. Art. 7º — Será una sección del Instituto de Clasificación el Anexo Psiquiátrico encargado de formular el diagnóstico psicofisiológico de cada delincuente. Art. 8º — En el Anexo Psiquiátrico, serán tratados los reclusos que padezcan de psicosis aguda o simples episodios psicopáticos y los que comprende el art. 34 inc. 1º del C. P. Arts. 9º y 10. — (Verlos al pie del artículo 13). Art. 11. — En los establecimientos penales de la Nación, cualquiera que sea la pena y siempre que ésta fuere de tres años o más, se aplicará un régimen progresivo dividido en los cinco grados siguientes: 1) Un grado A, de observación; 2) un grado B de reclusión, durante el cual el condenado deberá trabajar en el interior del establecimiento; 3) un grado C de orientación en una colonia penal o cárcel industrial, en el cual el condenado podrá ser empleado en trabajos al exterior; 4) un grado D de prueba, en campos de semilibertad, los que podrán ser organizados como secciones de los establecimientos



ART. 6. — La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título II; Libro II; Capítulo II, artículos 7, 15, 24, 28. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 61, 64, 69, 71. — Proyecto 1891; arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20. — Código derogado; arts. 60, 65, 68. — Ley 4189; arts. 8 y 10. — Proyecto 1906; arts. 11, 12, 14, 23.

FUENTE: El Proyecto del Dr. Moreno de 1916.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-583. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-375, 376, 379, 389, 416. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-114. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-375. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 43. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 45. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts.

JURISPRUDENCIA

66. — La accesoria de reclusión, prevista por el artículo 52 del Código Penal, no puede considerarse como pena de relegación y debe cumplirse en la forma prescripta por el artículo 6º del mismo Código. (C. C. C.; diciembre 12/24. — Fallos, 2-320.)

"de que trata el art. 18, incisos 1º y 2º de esta ley: 5) un grado E de reintegración, en libertad vigilada, sometido al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados, en los casos de liberación condicional. Art. 12. — Cuando la pena fuere menor de tres años, cumplido el período de observación, la Dirección General de Institutos Penales, determinará el establecimiento donde aquella deba cumplirse. Art. 13. — La organización de los establecimientos penales debe consultar: a) un régimen de educación moral e instrucción práctica; b) un régimen de aprendizaje técnico de oficio, concordante con las condiciones individuales del condenado y con su actividad postcarcelaria; c) un régimen disciplinario que tenga por fin readaptar e inculcar hábitos de disciplina y de orden y, en especial, desenvolver la personalidad social del condenado. Art. 14. — En las cárceles de encausados, los primarios se alojarán en secciones separadas e independiente de los reincidentes. Art. 15. — (Verlo al pie del artículo 11). Art. 16. — Autorízase al P. E. para construir y organizar los siguientes establecimientos, de acuerdo con el régimen progresivo creado por la ley: 1) colonias y granjas penales; 2) cárceles industriales; 3) campos de semilibertad; 4) cárcel de mujeres adultas; 5) cárcel de encausados de la Cap., conjuntamente con los Tribunales del Crimen; 6) cárceles de encausados en cada territorio; 7) sección para infecciosos; 8) anexos psiquiátricos. Art. 18. — Queda autorizado el P. E. para convenir con las provincias, la creación de los establecimientos penitenciarios o cárceles regionales que sean necesarias, a fin de dar unidad al régimen de cumplimiento de la pena. Los establecimientos que así se creen, quedarán bajo la dirección y administración de la Nación. Art. 19. — Autorízase al P. E. para trasladar la Penitenciaría Nacional y los demás establecimientos carcelarios que, por razones de orden moral, y de técnica carcelaria, deben estar situados en zonas no céntricas y para enagenar los inmuebles que hayan ocupado aquellos. (Siguen tres artículos con disposiciones generales).



ART. 7. — Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieran reclusión, sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del establecimiento.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Título II; Capítulo II, art. 19. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 58. — Proyecto 1891; arts. 31 y 59 inciso 4.º. — Código derogado; art. 62. — Proyecto 1906; arts. 13 y 41 inciso 2.º.

FUENTE: Código derogado, art. 62.

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-380, 416. — EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-588. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-425. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 44. — JOSÉ PEÇO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 208. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 32. — Las sanciones de reclusión y prisión comportan la obligación del trabajo. Los condenados, después del segundo año del cumplimiento de la sanción y según sus condiciones personales, podrán ser empleados en obras públicas del Estado, nacional o provincial, a condición de que no sean contratadas por particulares.

Art. 33. — Los condenados a reclusión y prisión están obligados:

- 1º A concurrir a la escuela que debe funcionar en todo establecimiento destinado a hacer efectivas dichas sanciones. Cuando, por razones de salud o de edad, sea imposible o inconveniente la asistencia de un condenado a la escuela, o cuando su preparación intelectual la haga innecesaria, la dirección del establecimiento podrá eximirle de esta obligación.
- 2º A vestir el uniforme que establezca la autoridad administrativa y a someterse a todas las medidas higiénicas y sanitarias impuestas por la misma. Los establecimientos en que se deban hacer efectivas las sanciones tendrán las dependencias necesarias para el tratamiento médico de los condenados que lo requieran.
- 3º A someterse a los reglamentos administrativos que se dicten. Estos no podrán alterar las características que el presente código determina para cada una de las sanciones, ni autorizar medidas que, a título de correcciones disciplinarias, afecten la dignidad o la salud del condenado o graviten sobre la remuneración que por su trabajo le corresponda.

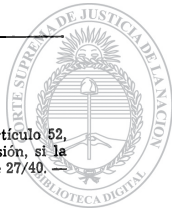
Art. 34. — Los reglamentos administrativos podrán autorizar, con el carácter de corrección disciplinaria, la reclusión celular absoluta del condenado, por no más de treinta días, durante los cuales no será eximido del trabajo, si hubiere posibilidad de efectuarlo dentro de la celda.

Art. 35. — Los mismos reglamentos establecerán las condiciones a que haya de someterse la correspondencia epistolar de los condenados y la dirección de los establecimientos podrá intervenirla a fin de asegurar la estricta observancia de dichas condiciones.

Art. 36. — Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que fueren condenados a reclusión, la sufrirán en un establecimiento destinado al cumplimiento de la prisión.

Art. 38. — El trabajo a que deben ser sometidos los condenados se organizará, no solamente con fines educativos e higiénicos, sino, también, de habilidad, técnica y rendimiento económico.

Art. 39. — La duración del trabajo será de cuarenta y cuatro horas semanales, de acuerdo a los horarios que imponga la autoridad administrativa. La duración establecida podrá ser aumentada cuando necesidades perentorias, a juicio de la dirección del establecimiento, lo justifiquen con carácter extraordinario.



JURISPRUDENCIA

67. — La accesoria de reclusión que determina el artículo 52, incisos 3º y 4º del C. P., debe hacerse efectiva como prisión, si la edad del procesado excede de 60 años. (C. C. C.; diciembre 27/40. — *La Ley*, 21-241.)

68. — El condenado mayor de 60 años debe cumplir como prisión la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en un paraje de los Territorios del Sud. (C. C. C., mayo 31/38 — *J. A.*, 62-575.)

69. — La accesoria del artículo 52, inciso 4º del C. Penal, debe hacerse efectiva como prisión si la edad del prevenido excede del límite fijado en el artículo 7º del C. Penal. (C. C. C., mayo 31/38 — *La Ley*, 10-1159.)

ART. 8. — *Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Título II; Capítulo II, art. 19. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 58. — Proyecto 1891; arts. 31 y 59 inciso 4.º. — Código derogado; art. 62. — Proyecto 1906, arts. 13 y 41 inciso 2.º.

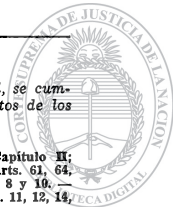
FUENTE: Código derogado (art. 62).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-586. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-379. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-425. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 44. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 208. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-102, 180.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 37. — Las mujeres sufrirán la condena a una u otra de las sanciones privativas de la libertad, en el establecimiento destinado al efecto, con obligación de trabajar dentro de los mismos en labores adecuados y, siempre que fuere posible, en las de jardinería, horticultura y granja. La ejecución de las sanciones privativas de la libertad, impuestas a mujeres, será suspendida en el caso de que la condenada se encuentre encinta o no hayan transcurrido cuarenta días desde el alumbramiento. Este plazo podrá ser ampliado en caso de necesidad establecida por informe de peritos oficiales. En todo lo demás, las condenadas quedarán sometidas a las normas que se establecen para los hombres.



ART. 9. — *La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Título II; Capítulo II; arts. 7, 15, 24, 28. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 61, 64, 69, 71. — Código derogado; arts. 60, 65, 68. — Ley 4183; arts. 8 y 10. — Proyecto 1891; arts. 15, 16, 17, 18, 19, 20. — Proyecto 1906; arts. 11, 12, 14, 23.

FUENTE: El Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-587. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-375, 376, 379, 384. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-375. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-114 y sgts. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 44. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 66. — RODOLFO MORENO, *La Ley Penal Argentina*, p. 101. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-89, 96, 101, 179, 288, 291, 337. — (Ver la Ley 11833 al pie del artículo 6.)

ART. 10. — *Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II Sección II; Capítulo II, art. 28. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 72. — Código derogado; art. 70. — Proyecto 1906; art. 15.

FUENTE: Código derogado, artículo 70.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-585. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-375 y 380. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 1-429. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 54. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 208. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 67. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-101, 338.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 31. — *La reclusión y la prisión se cumplirán en establecimientos distintos, con aislamiento celular nocturno.*



ART. 11. — El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:

- 1° A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos;
- 2° A la prestación de alimentos según el Código Civil;
- 3° A costear los gastos que causare en el establecimiento;
- 4° A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Sección II, artículos 7 y 15. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 65 y 66. — Proyecto 1891; art. 38. — Código derogado; art. 65. — Ley 4189; arts. 8, 9 y 10. — Proyecto 1906; art. 16.

FUENTE: Proyecto 1891 (art. 38).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-590. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-348, 397 y 475. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-52. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 55. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 201. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-184.

JURISPRUDENCIA

70. — El artículo 11 del Código Penal, no dispone la aplicación del producto del trabajo del condenado, a costear los gastos del proceso, cual lo hacía el artículo 38 del Proyecto de 1891 no seguido en esta parte por los sucesivos, ni por el código actual. (C. C. C.; mayo 21/40. — *La Ley*, 18-987.)

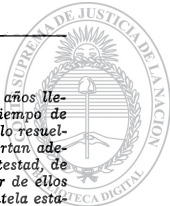
71. — Las costas causídicas, no revisten la condición prevista en el art. 11 inciso 1° del Código Penal. (C. C. C.; mayo 21/40. — *La Ley*, 18-987.)

(1) *Ley 11833* (Octubre 9 de 1933) Art. 15: "El Estado asegurará a los penados "contra los accidentes del trabajo y las indemnizaciones que éstos puedan percibir, "formaran parte de su peculio y se registrarán por las disposiciones de las leyes de "accidentes del trabajo".

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 40. — El trabajo de los condenados será remunerado y el producto del mismo se aplicará simultáneamente:

- 1° A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos.
- 2° A la prestación de alimentos según el Código Civil.
- 3° A costear los gastos que causare en el establecimiento.
- 4° A formar un fondo propio que se le entregará a su salida.



ART. 12. — La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el Tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Sección II, artículos 12, 18, 27. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 63, 68, 70. — Proyecto 1891; arts. 17 y 32. — Código derogado; arts. 63, 67 y 69. — Ley 4189; art. 11. — Proyecto 1917; art. 12.

FUENTE: El Proyecto del Dr. Moreno, inspirado en el Proyecto de 1906, con modificaciones introducidas por la Comisión de Códigos del Senado.

BIBLIOGRAFIA

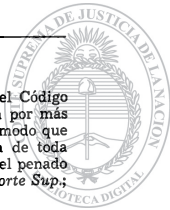
EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-592. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-371, 388, 399, 400, 402, 463. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-41. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 55. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 96. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 203. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-322. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — ALFREDO ORGAZ, *Incapacidad Civil de los Penados* (edición, 1939) p. 93. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-182. — JUAN AGUSTÍN MOYANO, *Incapacidad Civil de los Penados*. (J. A., t. 63, sec. doct., p. 37.) — HORACIO VALDÉS, *Incapacidad Civil de los Penados*. (Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año 1928, p. 485.)

JURISPRUDENCIA

72. — El otorgamiento de la libertad condicional, hace desaparecer la inhabilitación establecida por el art. 12 del C. P. para el condenado, respecto a la administración de sus bienes. La única accesoria que subsiste, hasta el transcurso del término de la condena, es la de inhabilitación absoluta. (C. C. C.; marzo 18/41. — *La Ley*, 22-29).

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 41. — La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherentes la inhabilitación absoluta, durante el tiempo de la condena, pudiendo el Tribunal extenderla hasta tres años más, de acuerdo con la índole del delito. Importan, además, la privación, por el tiempo de la condena, del ejercicio de la autoridad marital y de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho a disponer de ellos por actos entre vivos. El condenado quedará sometido a la curatela que el Código Civil establece para los incapaces.



73. — La inhabilitación establecida por el art. 12 del Código Penal, como inherente a las penas de reclusión o prisión por más de tres años, no ha sido modificada por la ley 11.575. De modo que tal inhabilitación, importa, entre otras cosas, la pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío de que disfrutase el penado como lo dispone el artículo 19 inc. 2° del mismo código. (*Corte Sup.*; julio 31/40. — *La Ley*, 19-768.)

74. — La inhabilitación absoluta, como pena accesoria, comienza, dura y termina, desde que empieza y hasta que se extingue la pena. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*; abril 30/38. — *La Ley*, 12-613.)

75. — La mayor gravedad de la pena de inhabilitación absoluta perpetua, en relación a la de tres años de prisión, surge de la disposición del artículo 19 del Código Penal y del régimen de la prescripción. (*Sup. Corte Bs. As.*; marzo 18/38. — *La Ley*, 10-1004.)

76. — Es improcedente la nulidad que se funda en que el demandado se encuentra en la situación prevista por el art. 12 del Código Penal, si la sentencia dictada en autos es anterior a la fecha de la condena definitiva del juicio criminal. Habiéndose el demandado hecho parte en el presente juicio, contestando personalmente la demanda. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, abril 30/38 — *La Ley*, 12-613.)

77. — El derecho del penado a pedir que se lo provea de curador, en resguardo de sus intereses, si bien no se encuentra expresamente reconocido por nuestro código, surge de las disposiciones del código civil, relativas a la curatela y se halla implícito en el de peticionar a las autoridades, acordado por la Constitución Nacional. (*Cám. Comercial de la Capital*, julio 29/38. — *La Ley*, 11-384.)

78. — La interdicción legal que importa la condena criminal, en el terreno del derecho privado, no puede equipararse a la incapacidad del demente, ni del sordo-mudo, desde que se halla circunscripta a la privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre



vivos. (*Cám. Comercial de la Capital*, julio 29/38. — *La Ley*, 11-384.)

79. — El penado queda sujeto a la curatela de los incapaces, establecida en el Código Civil, dentro de límites que señala el art. 12 del Código Penal, en cuanto circunscribe la interdicción legal a la privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. (*Cám. Comercial de la Capital*, julio 29/38. — *La Ley*, 11-384.)

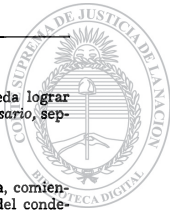
80. — Las inhabilitaciones que afectan a un penado a 10 años de prisión, según el artículo 12 del Código Penal, están limitadas a los cuatro incisos del artículo 19 del mismo Código y a los casos que el propio artículo 12 indica. (*Sup. Corte de Tucumán*, agosto 11/37. — *La Ley*, 13-30.)

81. — La privación de los derechos civiles del que se encuentra recluso (art. 12 del Código Penal) tiende a evitar perjuicios en los bienes y personas de la familia del condenado, a quienes no deben alcanzar las consecuencias de la condenación. (*Cám. Apel. Com. y Crim. Mendoza*, abril 20/38 — *La Ley*, 12-613.)

82. — El penado queda sujeto a la curatela de los incapaces establecidas en el Código Civil, dentro de los límites que señala el artículo 12 del Código Penal, en cuanto circunscribe la interdicción legal a la privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. (*Cám. Apel. Rosario*, septiembre 13/38 — *La Ley*, 12-281.)

83. — Normalmente la incapacidad, empieza a producir efecto desde la condena firme. El procesado deja de ser tal, para entrar en la categoría de penado, como lo requiere el art. 12 del Código Penal. Desde entonces, queda sujeto a curatela. Con anterioridad, no puede hablarse de incapacidad ni corresponde que tome su representación la curadora. (*Cám. Apel. Com. y Crim. Mendoza*, abril 20/38 — *La Ley*, 12-613.)

84. — La interdicción que pesa sobre el reo, no le impide estar



en juicio por medio de su representante legal, ni le veda lograr representación que supla su incapacidad. (*Cám. Apel. Rosario*, septiembre 13/38 — *La Ley*, 12-282.)

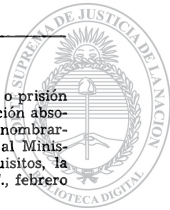
85. — La inhabilitación absoluta como pena accesorias, comienza y termina con la pena y desaparece con la libertad del condenado. (*Cám. de Apel. Com. y Crim. Mendoza*, marzo 21/36 — *J. A.*, 56-691.)

86. — La inhabilitación que establece el artículo 12 del Código Penal para los condenados a tres o más años de reclusión o prisión, es justo computarla desde el día en que el penado fué privado de la libertad definitivamente. (*Cám. Apel. Com. y Crim. Mendoza*, marzo 28/36 — *J. A.*, 56-691.)

87. — La inhabilitación para el ejercicio de los derechos civiles que prescribe el art. 12 del Código Penal, para lo que sean condenados a reclusión o prisión por más de tres años, tiende a evitar perjuicios en los bienes y personas de la familia del condenado. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, marzo 26/36 — *J. A.*, 56-691.)

88. — Atenta la condición de necesaria atribuida por la ley a la inhabilitación a que se refiere el art. 12 del Código Penal que la declara inherente, esto es, inseparable por su naturaleza a la cación de la pena en la hipótesis allí prevista, el Tribunal de Apelación está obligado a corregir la omisión en que pueda haber incurrido en ese sentido la sentencia recurrida, aún cuando no medie recurso acusatorio, pero solamente aplicando dicha accesorias por el tiempo de la condena. (*C. C. C.*, diciembre 20/35 — *J. A.*, 53-238.)

89. — No corresponde privar de la patria potestad al padre de la menor que ha sido condenado por delito grave, si han transcurrido dos años de la sentencia criminal que lo había privado automáticamente de aquella y está demostrado que se halla en situación de ejercer convenientemente sus obligaciones. (*Cám. Civil 2ª*, mayo 10/33 — *J. A.*, 42-216.)



90. — Si el condenado lo ha sido a pena de reclusión o prisión por más de tres años y afectado por lo tanto de inhabilitación absoluta, para el juicio de honorarios que deba pagar, debe nombrarse un curador y darse la intervención que corresponde al Ministerio de Menores, Incapaces y Ausentes. Sin estos requisitos, la substanciación del juicio de honorarios es nula. (C. C. C., febrero 27/34 — Fallos, 1-521.)

91. — No procede substanciar la regulación de honorarios con el condenado, cuando la pena aplicada a éste lleva aparejada inhabilitación absoluta. (C. C. C., junio 12/25 — Fallos, 1-517.)

92. — No tratándose de un condenado sino de un procesado, no procede el nombramiento de curador para que lo represente en juicio. (Cám. Civil Prim. de la Cap., — G. del Foro, 87-115.)

93. — Si bien procede el nombramiento de curador al condenado a más de tres años de prisión, —sin la previa declaración de incapacidad—, dicho nombramiento es privativo del juez, y debe esa designación hacerse saber al incapaz. (Cám. Civil Prim. — G. del Foro, 87-134.)

ART. 13. — *El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, y el condenado a reclusión o prisión por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones:*

- 1º *Residir en el lugar que determine el auto de soltura;*
- 2º *Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas;*
- 3º *Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;*
- 4º *No cometer nuevos delitos;*



5° Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y en las perpetuas hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Sección II, arts. 10, 11, 16. — Proyecto 1891; arts. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35. — Código derogado; arts. 73 y 74. — Proyecto de 1906; arts. 18, 19, 20, 21, 22.

FUENTE: En el Proyecto del Dr. Tejedor, como en el Proyecto de 1906, y en el Código derogado, existía como una gracia concedida al penado de buena conducta. Es recién en el Código Vigente, que la libertad condicional aparece como un derecho.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-617. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-376, 378, 384. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-63. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 56. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 225. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 207. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 59. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-51 y 2-183, 293, 338. — R. CHAO LAURENTI, *Libertad anticipada de conde-*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 42. — El condenado a reclusión perpetua que hubiere cumplido veinticinco años de condena, contados desde el día en que quedó sometido al régimen de dicha sanción, y el condenado a reclusión por tiempo determinado que hubiere cumplido las tres cuartas partes de la condena, contadas en igual forma, podrán obtener la libertad condicional, por resolución judicial, previo informe del director del establecimiento, en el que se establezca que el condenado observó buena conducta, revelada, no sólo por el cumplimiento regular y constante de los reglamentos, sino, también, por el aprendizaje de un oficio y por haber demostrado aptitud para el trabajo, cualquiera que sea su condición económica. El informe se basará en la observación asidua del condenado en todos los aspectos de su vida, de la que se llevará constancia detallada en registros especiales.

Art. 43. — El condenado a prisión por tres años o más, que hubiere cumplido las tres cuartas partes de la condena, contadas en la forma que establece el artículo anterior, podrá obtener la libertad condicional, previo informe del director del establecimiento, que establezca la circunstancia exigida por ese mismo artículo. El informe se ajustará al requisito que dicho artículo exige.

Art. 44. — Para el otorgamiento de la libertad condicional será necesario, además, que el condenado haya cumplido las obligaciones civiles derivadas del delito e impuestas en la sentencia, salvo que demuestre que se encuentra en la imposibilidad de cumplirlas.

Art. 45. — Las condiciones bajo las cuales se otorgará la libertad son:

- 1° Residir en el lugar que determine la resolución respectiva.
- 2° Observar las reglas de conducta que fije la misma resolución.
- 3° Adoptar, en el plazo que se le imponga, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
- 4° No cometer nuevos delitos.
- 5° Someterse al cuidado de un patronato indicado por el tribunal. Si en el lugar donde el liberado hubiere de residir, conforme al inciso 1°, no hubiere una institución de patronato, se someterá al cuidado de la autoridad policial de ese lugar o al de la persona que indique el tribunal.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las conde-



nados y procesados. Montevideo 1932. — F. GARICOITO, *La Libertad Condicional*. Montevideo 1932. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-344. — PEDRO J. ALEGRE, *Libertad provisoria y liberación condicional*. La Plata 1929. — FELIPE PONFERRADA, *La existencia del Patronato de Liberados y la Libertad Condicional*. (J. A. t. 69, sec. doct., p. 8.) — EUGENIO FLORIÁN, *El ambiente hostil y la transgresión del que se halla sometido a la libertad vigilada*. (La Ley, t. 19, sec. rev. de rev., p. 14.) — E. DÍAZ DE GUIJARRO, *Capacidad civil del liberado condicional*. (J. A., t. 67, p. 712.) — TOMÁS JOFRE, *El beneficio de la libertad condicional*. (J. A., 12-923.) — LADISLAW THOT, *La libertad condicional en el Proyecto de Código Penal Italiano*. (J. A., t. 14, sec. doct., p. 18.) — JOSÉ VALDIVIESO, *Libertad condicional*. (Revista Penal y Penitenciaria. Buenos Aires, Enero-Marzo 1941, p. 49.) — O. GONZÁLEZ ROURA (h.), *La cuestión de la libertad condicional*. (G. del Foro, N° 1868, p. 321.) — JUAN P. RAMOS, *Competencia de los jueces de 1ª Instancia en la revisión de procesos por libertad condicional*. (Rev. Penal Argentina, año 1922, p. 83.) — DIEGO DE JUJAZOR, *La libertad condicional en la jurisprudencia*. (J. A., 28-572.) — LADISLAW THOT, *La libertad condicional en el Proyecto oficial definitivo del Código Penal Alemán*. (J. A., t. 14, sec. doct., p. 60.)

JURISPRUDENCIA

94. — Siendo la sanción del art. 52 una medida de seguridad, no procede acordar a quien la está sufriendo, el beneficio de la libertad condicional. (C. C. C., mayo 13/41 — *Rep. Jurid.*, 5-1698.)

95. — El art. 13 del C. P., al establecer las condiciones bajo

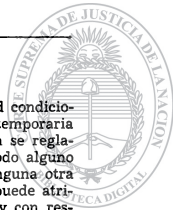
nas temporales y si éstas fueran a perpetuidad hasta cinco años más, a contar desde el día de la libertad condicional.

Art. 73. — El que hubiere sido objeto de alguna de las sanciones establecidas en los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 podrá ser liberado condicionalmente, por resolución judicial, vencido que sea el plazo mínimo de la indeterminación. En cuanto a las demás condiciones requeridas para el otorgamiento de la libertad condicional y a las que debe someterse el liberado, así como en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de tales condiciones, se observará lo dispuesto en los artículos pertinentes del Título y, siendo necesario, además, que, en caso de la sanción estatuida por el artículo 64 se establezca, por informe de peritos oficiales, que el delincuente ya no es peligroso para sí ni para terceros. La limitación del número de veces que puede ser solicitada la libertad condicional, que establece la última parte del artículo 47, no rige para los que fueron sometidos a la sanción que estatuye el artículo 64, si ellos han permanecido, durante todo el tiempo, bajo el régimen de la internación.

Las condiciones bajo las cuales se otorgue la libertad condicional en los casos del presente artículo, regirán por el término de cinco años.

Art. 74. — Cuando la sanción impuesta en virtud de los artículos 64, 65, 66 y 69 inciso 3º, fuera la de reclusión perpetua, el tribunal decidirá, después de veinticinco años, si ha de concederse, o no, la libertad condicional que, en tal caso, se regirá por las disposiciones del artículo anterior.

Ley 11833 del 9 de octubre de 1933. — "Art. 9. — Los Patronatos de Liberados y Excarcerados funcionarán como Asociaciones Privadas. Tendrán a su cargo la "protección y la asistencia moral y material de los liberados, ejerciendo la función que establece el artículo 13 inc. 5º del Código Penal. Art. 10. — El Estado "contribuirá al sostenimiento de esos Patronatos, con un subsidio anual, el que "será distribuido conforme a las necesidades de cada uno de ellos, por la Dirección "General de Institutos Penales, la que ejercerá el contralor sobre su inversión".



las cuales se hace procedente el beneficio de la libertad condicional, solo se refiere a las penas de reclusión y prisión temporaria y perpetua, únicas privativas de libertad cuyo régimen se reglamenta en el Título II del Libro 1, que no alude en modo alguno ni a las medidas de seguridad del artículo 52, ni a ninguna otra sanción de análoga naturaleza, de tal modo que no se puede atribuir al citado artículo un alcance no previsto por la ley con respecto a la reclusión por tiempo indeterminado. (C. C. C., mayo 13/1941 — *Rep. Jurid.*, 5-1698.)

96. — La pena que ha de tenerse en cuenta para acordar el beneficio de la libertad condicional en caso en que el penado haya sido beneficiado con un indulto parcial por el P. Ejecutivo, no es la originariamente impuesta, sino la reducida por el acto de gracia concedido. (C. Fed. B. Blanca, febrero 13/41 — *La Ley*, 22-645.)

97. — La libertad condicional, es un modo de ser de la pena, inherente a su desarrollo y compatible con el concepto de la pena misma. La libertad condicional y la pena no son institutos autónomos, sino íntimamente conexos. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 15/40 — *La Ley*, 19-572.)

98. — El condenado en estado de libertad condicional, es siempre un condenado que debe sufrir aún parte de la pena, y que la sufre, en cierto modo, en libertad. (Disidencia del Dr. García Zavallía). (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 15/40 — *La Ley*, 19-572.)

99. — Las condiciones impuestas al liberado regirán hasta el vencimiento de la pena temporal impuesta en sentencia definitiva, debiendo observarse el cómputo de la prisión preventiva. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 15/40 — *La Ley*, 19-572.)

100. — La violación por el condenado bajo el régimen de la libertad condicional de la condición prevista en el inciso 4º del art. 13 del Cód. Penal, reviste el mismo significado que el quebrantamiento de la condena considerado en la última parte del artículo 66 del mismo, para los efectos de la prescripción de la pena, que empieza a correr desde la fecha en la cual cesó su ac-



ción delictuosa en el último de los delitos cometidos por el liberado. (C. C. C., febrero 8/38 — *La Ley*, 9-599.)

101. — Los Tribunales Federales y los de Justicia Letrada, antes de otorgar el beneficio de condena o de libertad condicional, deben requerir informes acerca de las condiciones de peligrosidad del procesado. (*Corte Suprema — Fallos*, 183-9 — *Parry*, V. 27-588.)

102. — Corresponde exclusivamente a la Cámara, resolver las solicitudes de libertad condicional. (C. C. C., mayo 5/22 — *Fallos*, 2-122.)

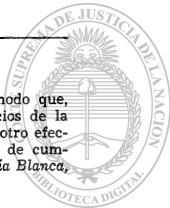
103. — Es facultativo de la Cámara conceder o negar la libertad condicional. (C. C. C., junio 6/22 — *Fallos*, 2-126.)

104. — Para conceder la libertad condicional debe tenerse en cuenta la peligrosidad del sujeto, que surge del delito mismo y demás antecedentes de la causa. (C. C. C., diciembre 30/24 — *Fallos*, 2-126.)

105. — Para conceder la libertad condicional no debe tenerse en cuenta la rebaja de pena hecha por indulto del P. E. (C. C. C., agosto 10/26 — *Fallos*, 2-128.)

106. — El cómputo de los dos tercios de la condena cuyo cumplimiento exige el artículo 13 del Código Penal, para que pueda acordarse la libertad condicional, debe hacerse teniendo en cuenta la condena judicial y no la cuantía de la pena reducida por el P. E. en ejercicio del derecho que le acuerda el artículo 132, inc. 4° de la Const. de la Provincia. (*Cám. Apel. de Bahía Blanca*, febrero 17/40 — *La Ley*, 20-753.)

107. — La conmutación de la pena a que se refiere el artículo 132 inc. 4° de la Constitución de Bs. As., no tiene el alcance de modificar el índice de la peligrosidad del reo, que es de exclusiva



apreciación judicial y se concreta en la condena, de modo que, mientras la conmutación no sea inferior a los dos tercios de la cuantía de pena establecida en la condena, ella no surte otro efecto que el de acortar el encarcelamiento del reo, luego de cumplidos los dos tercios de su condena. (Cám. Apel. de Bahía Blanca, febrero 27/40 — *La Ley*, 20-753.)

ART. 14. — *La libertad condicional no se concederá a los reincidentes.*

ANTECEDENTES: Los del artículo 13.

FUENTE: La del artículo 13.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-615 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-378, 389, 430. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-64 y 79. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 66. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 60. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-183.

JURISPRUDENCIA

108. — La condena a pena de multa, posteriormente convertida en la de prisión por falta de pago, no autoriza a considerar a quien fué objeto de ella, como reincidente, de conformidad al art. 50 del C. P., por lo que corresponde hacer lugar a la libertad condicional solicitada pues de lo contrario se lo colocaría en inferioridad de situación con respecto a los condenados solventes, que, como en el caso, fueron objeto de sentencias condenándolos a penas privativas de la libertad. Fuera de que la pena originaria no es privativa de libertad aunque por la falta de pago, la misma sea susceptible de convertirse en prisión. (Cámara Fed. de Mendoza, abril 17/40 — *Rep. Jurid.* 3-918.)

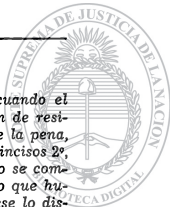
PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 47. — La libertad condicional no será concedida:

1º Al reincidente, cuando lo sea en delitos no culposos para los cuales se halle establecida sanción privativa de la libertad y salvo el caso del artículo 73.

2º A aquel a quien le hubiera sido revocada la libertad condicional.

En caso de denegación, el pedido podrá ser reiterado por una sola vez en el plazo que prudencialmente fije el tribunal teniendo en cuenta el tiempo que falte para la extinción de la condena.



ART. 15. — *La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de restitución. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2º, 3º y 5º del artículo 13, el Tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliera lo dispuesto en dichos incisos.*

ANTECEDENTES: Los del artículo 13.

FUENTE: La del artículo 13.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-615. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-388. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-64. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 64. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 61. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-183. — TOMÁS JOFRE, *El beneficio de la libertad condicional*. (J. A., 12-923.) — JUAN P. RAMOS, *Competencia de los jueces de 1ª Instancia en la revisión de procesos por libertad condicional*. (Revista Penal Argentina, año 1922, p. 83.) — O. GÓNZÁLEZ ROURA (h.), *La cuestión de la libertad condicional*. (G. del Foro, N° 1868, p. 321.)

JURISPRUDENCIA

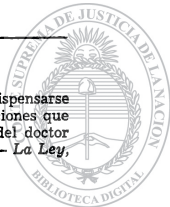
109. — Revocada la libertad condicional, en mérito de un nuevo procesamiento, sin mención alguna sobre el descuento en el término de la pena del período de libertad, se revocó el beneficio exclusivamente. (Sup. Corte de Tuc., junio 15/40 — Rep. Jurid., 4-1276.)

110. — Antes de pronunciarse por la libertad lisa y llana, a causa de la prescripción del nuevo delito que motivó la revoca-

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 46. — *La libertad condicional será revocada cuando el condenado cometiere un nuevo delito, no computándose el tiempo que aquella hubiere durado. La infracción a las demás condiciones establecidas en el artículo anterior podrá determinar, también, la revocación de la libertad condicional, con el efecto indicado, o la decisión de que no se compute, en el término de la condena, todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad.*

El pronunciamiento, en cualquier sentido, se fundará en las circunstancias de hecho y en el género de vida que llevó el liberado mientras estuvo en libertad condicional, que revelen si es o no apto para continuar gozando de la misma. Si se decide que la libertad condicional no debe ser revocada, se le fijará plazo para el cumplimiento de las condiciones infrinckidas, cuando ellas lo requieran. En caso de una nueva infracción, la libertad condicional será definitivamente revocada, circunstancia, ésta, que se advertirá al liberado, expresamente.



ción de la libertad condicional, el tribunal no podría dispensarse de examinar si el reo cumplió o no con todas las condiciones que le fueron impuestas en el auto de soltura. (Disidencia del doctor García Zavala). (Sup. Corte de Tucumán, junio 15/40 — La Ley, 19-572.)

111. — Siempre que no haya vencido el término de la pena impuesta, el tribunal tiene facultad discrecional para apreciar el comportamiento del liberado cuando cae en nuevo delito y observa conducta antisocial, lo que traería la revocatoria del beneficio y permitiría descontar del cómputo de la pena, el tiempo correlativo en libertad, tanto por nuevo delito, como por conducta deshonesta. (Sup. Corte de Tucumán, junio 15/40 — La Ley, 19-572.)

112. — No puede revocarse la libertad condicional mientras no exista sentencia firme condenatoria por un nuevo delito; pero ello no impide, que la revocatoria se dicte después de transcurrido el plazo que el artículo 16 del Código Penal establece para la extinción de la pena, caso en que esa revocatoria se funda en la violación de algunas de las condiciones fijadas en la primera parte del artículo 15 y en que la condena por el nuevo delito tiene la virtud de reconocer su existencia para sancionar dicha violación. Si desde que el liberado cesó en su nueva actividad delictuosa ha transcurrido un plazo igual al de la condena, queda extinguida por prescripción la pena que cumplía con el beneficio de la libertad condicional. (C. C. C., febrero 8/38 — J. A., 61-486.)

ART. 16. — *Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12.*

ANTECEDENTES: Los del artículo 13.

FUENTE: La del artículo 13.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-615 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-378, 388, 400. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-65 y 80. — TOMÁS JOFRE, *El Código*

Penal de 1922, p. 64. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 61. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-105.



ART. 17. — Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.

ANTECEDENTES: Los del artículo 13.

FUENTE: La del artículo 13.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-615, y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-378, 389. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-65 y 80. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 64. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 60.

ART. 18. — Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias podrán mandarlos siempre que no tuvieren establecimientos adecuados.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891; art. 15. — Proyecto 1906; art. 25.

FUENTE: Los proyectos arriba indicados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-594. — SEBASTIÁN SOLER,

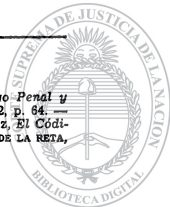
PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 48. — Transcurrido el tiempo de la condena o el plazo de cinco años fijado en el artículo 45, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida lo mismo que la inhabilitación absoluta y las demás privaciones que impone el artículo 41, con excepción de la inhabilitación suplementaria, en caso de haberse impuesto en la sentencia.

Art. 47. — La libertad condicional no será concedida:

2º A aquel a quien le hubiese sido revocada la libertad condicional.

En caso de denegación, el pedido podrá ser reiterado por una sola vez en el plazo que prudencialmente fije el tribunal teniendo en cuenta el tiempo que falte para la extinción de la condena.



Derecho Penal Argentino, 2-380. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-83. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 64. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 239. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-179.

ART. 19. — La inhabilitación absoluta importa:

- 1° *La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular;*
- 2° *La privación del derecho electoral; (1)*
- 3° *La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;*
- 4° *La pérdida de toda jubilación, pensión o goce de montepío que disfrutase. Si el penado tuviese esposa, hijos menores, de cualquier clase, o padres ancianos y desvalidos, corresponderá a éstos el importe de la jubilación, pensión o goce de montepío. En caso contrario, su importe se destinará a aumentar los fondos provenientes de la aplicación del art. 11.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Libro II; Sección II. — Proyecto 1891; arts. 42, 43, 44. — Proyecto 1906; arts. 26, 27. — Código derogado; arts. 75, 76, 77, 78. — Ley 4189; arts. 7 y 14. — Proyecto 1917; art. 12.

FUENTE: El Proyecto del Dr. Tejedor, salvo el inciso 4° que pertenece al Proyecto del Dr. Moreno.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-599. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-396, 397, 400. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-23. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 64. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 208. — JULIO HERRERA,

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

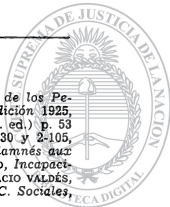
Art. 49. — Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o a prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias podrán mandarlos, siempre que no tuvieran establecimientos adecuados.

(1) Ver ley 11738 de septiembre 13 de 1933 sobre exclusión del padrón electoral, modificatoria de las leyes 8871 y 11387.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 54. — La inhabilitación absoluta importa:

- 1° *La privación del empleo o cargo público que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular.*
- 2° *La privación del derecho electoral.*
- 3° *La incapacidad para obtener cargos, empleos o comisiones públicas.*



La Reforma Penal, p. 99. — ALFREDO ORGAZ, *Incapacidad Civil de los Penados*; Edición 1939. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*; Edición 1925, 2-322. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-30 y 2-105, 185, 342. — ERNEST MUSSE, *Étude sur les droits civils des condamnés aux peines du grand criminel*. Paris 1876. — JUAN AGUSTÍN MOYANO, *Incapacidad Civil de los Penados*. (J. A., t. 63, sec. doct., p. 37.) — HORACIO VALDÉS, *Incapacidad Civil de los Penados*. (Rev. de la Fac. de Der. y C. Sociales, 1928, p. 485.)

JURISPRUDENCIA

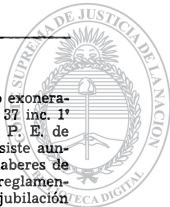
113. — Para que exista el derecho a reclamar la pensión o retiro por parte de los parientes, en el supuesto del artículo 19 inciso 4º del C. P., es requisito necesario que el penado se halle en el goce efectivo del beneficio reclamado. No basta que exista el mero derecho en expectativa, haciéndose necesaria su efectividad real. (Cám. Fed. Capital, marzo 14/41 — *La Ley*, 21-853.)

114. — Aunque el empleado bancario haya sido condenado a pena de prisión por un término mayor de tres años y accesorias de ley (arts. 12 y 19 del C. P.), lo que implicaría de acuerdo a las disposiciones penales, la pérdida al derecho de jubilación por el término de la condena, el artículo 67 de la ley 11575 al referirse a la jubilación posterior acordada, dispone imperativamente que se liquide al titular la diferencia entre el importe de la jubilación y la pensión que haya gozado su familia, por lo que, tratándose de una ley posterior al Código Penal, debe primar sobre éste. (C. Fed. de la Cap., junio 5/40 — *Rep. Jurid.*, 1-194.)

115. — La inhabilitación absoluta, como pena accesoria, comienza dura y termina, desde que empieza y hasta que se extingue la pena. (Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza, abril 30/38 — *La Ley*, 12-613.)

116. — La mayor gravedad de la pena de inhabilitación absoluta perpetua, en relación a la de tres años de prisión, surge de la disposición del artículo 19 del Código Penal y del régimen de la prescripción. (Sup. Corte de Bs. As., marzo 18/38 — *La Ley*, 10-1004.)

117. — Carece de derecho a pensión, la viuda del empleado, que



perdió su derecho a la jubilación en virtud de haber sido exonerado de su cargo por mal desempeño de sus deberes (art. 37 inc. 1° Ly 4349) por las siguientes razones: a) el decreto del P. E. de mayo 22 de 1936 según el cual el derecho a pensión subsiste aunque el causante hubiere perdido su derecho a percibir haberes de jubilación en el caso previsto en el art. 55 del decreto reglamentario de las leyes 4349 y 11923, se refiere al caso de jubilación acordada; lo que significa que ha excluido el caso —antes contemplado— del artículo 54 de dicha reglamentación cuyo inciso “a” se refiere al caso de quien perdió el derecho a la jubilación por mal desempeño de su cargo (supuesto de autos); b) el artículo 41 de la ley 4349, según la cual la pensión se concede solo en los casos en “que haya derecho a gozar de jubilación” y c) porque no es aplicable al caso el art. 19 inciso 4° del Código Penal, dado que el causante no disfrutaba de jubilación ni al ser exonerado ni al fallecer. (*Cám. Fed. de la Cap.*, septiembre 13/39 — *J. A.*, 67-939.)

118. — El artículo 19 inciso 4° del Código Penal, no tiene aplicación en los casos en que un militar procesado sea declarado de baja por rebeldía; se trata en este caso de una simple medida procesal, que no importa de manera alguna la imposición de la pena de inhabilitación absoluta a que se refiere dicho artículo; por ello el P. E., sin violar el art. 86 inciso 2° de la Constitución Nacional, pudo por medio de un decreto dejar sin efecto otro anterior que, fundado en la baja por rebeldía y en el artículo 19 inciso 4° del Código Penal acordó el traspaso de la pensión militar a su esposa e hijo, máxime si con anterioridad a ese decreto derogatorio el Ministro de Guerra había declarado prescripta la acción penal contra dicho militar. (Fundamento del voto en disidencia del Dr. Repetto.) (*Corte Suprema*, noviembre 23/38 — *J. A.*, 64-375.)

119. — Tanto por lo que dispone el texto del artículo 19, inciso 4° del código penal, como por lo establecido en el artículo 540 del Código Militar, la esposa de un ex-sargento condenado y destituido por la justicia militar, no tiene derecho a solicitar la pensión que hubiera correspondido a su esposo por sus años de servicio; dicha disposición del Código Penal se refiere al caso en que el condenado estuviera ya disfrutando del beneficio. (*Cám. Fed. Cap.*, junio 17/38 — *J. A.*, 62-635.)

120. — El indulto extingue la pena y sus efectos a partir del

día en que el P. E. lo decreta; en consecuencia, el indultado no puede exigir a la Caja de Jubilaciones respectiva el pago de haberes jubilatorios de que fué privado mientras sufría su condena. (Cám. Fed. Cap., septiembre 28/38 — J. A., 66-46.)

ART. 20. — *La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre el que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena, aquellos sobre que recayere.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Libro II; Sección II; Capítulo III, arts. 1, 2 y 5. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86. — Proyecto 1891; arts. 42, 43 y 44. — Proyecto 1906; arts. 26 y 27. — Código derogado; arts. 75, 76, 77 y 78. — Ley 4189; arts. 7 y 14.

FUENTE: Proyecto Tejedor, artículos arriba citados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-600. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-396. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-87. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 66. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 96. — ALFREDO ORGAZ, *Incapacidad Civil de los Penados*; Edición 1939, p. 92. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-185, 342. — JUAN AGUSTÍN MOYANO, *Incapacidad Civil de los Penados*. (J. A., t. 63, sec. doct., p. 37.) — HORACIO VALUÉS, *Incapacidad Civil de los Penados*. (Revista de la Fac. de Der. y C. Sociales de Córdoba, 1928, p. 485.) — AUGUSTO MORISOT, *La suspensión de la inhabilitación especial*. (Rev. del C. de Abogados. Santa Fe, Mayo-Agosto 1941, p. 10.)

JURISPRUDENCIA

121. — La inhabilitación especial como sanción penal con sentido jurídico, es la prohibición temporal del ejercicio de un arte, profesión o cargo en el cual se cometió la imprudencia o se

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 55. — La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otros del mismo género durante la condena.

La inhabilitación especial por derechos políticos, importa la incapacidad de ejercer, durante la condena, aquellos sobre que recayere.

Al condenado a inhabilitación que infringiera las prohibiciones que ella comporta, se le impondrá prisión hasta un año y medio.



incurrió en impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos. (C. C. C., mayo 10/38 — *La Ley*, 10-1096.)

122. — Para la aplicación de la pena complementaria de inhabilitación especial, si bien no es requisito indispensable que se trate de una profesión reglamentada, es esencial en cambio que el delito se haya cometido en el ejercicio de un cargo, un arte o una profesión, lo que no ocurre cuando se trata de lesiones inferidas por el procesado mientras transitaba montado en una bicicleta. (C. C. C., febrero 15/38 — *La Ley*, 9-571.)

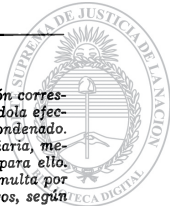
123. — La pena de inhabilitación especial es improcedente, si el procesado ha embestido a su víctima, conduciendo una bicicleta, medio de locomoción que no constituye arte o profesión alguna, no está reglamentado ni es objeto de permiso especial, en virtud de la aptitud personal. (C. C. C., mayo 10/38 — *La Ley*, 10-1096.)

124. — Al condenado como autor de lesiones por imprudencia, causadas al embestir con la bicicleta que manejaba a un transeúnte, no corresponde imponerle inhabilitación especial, pues para que pueda ser aplicable esa pena complementaria, es menester que el delito se cometa en el ejercicio de un cargo, arte o profesión. (C. C. C., febrero 15/38 — *J. A.*, 61-489.)

125. — En los casos de delitos reprimidos con pena que llevan aparejada la accesoria o complementaria de inhabilitación, procede imponer ésta, aún cuando el procesado carezca del respectivo documento habilitante. También procede imponérsela cuando haya ejercido sin autorización, funciones reglamentadas. (C. C. C., Trib. en pleno, julio 16/25 — *Fallos*, 2-477.)

ART. 21. — *La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.*

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.



El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizar al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello.

También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Libro II; Sección II, arts. 1, 2, 3, 4. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 73, 74, 75. — Proyecto 1891; arts. 39 y 40. — Proyecto 1906; art. 28. — Código derogado; art. 79.

FUENTE: El Proyecto 1906, inspirado en el Proyecto Villegas, Ugarriza y García, modificado por la Comisión de Códigos del Senado.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-602. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-321, 391, 393. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-87, 102. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 67. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 211. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 170. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 53 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-317 y 2-135, 296. — LEONARDO A. COLOMBO, *Multas Civiles y Multas Penales*. (*La Ley*, t. 14, sec. doct., p. 57.) — VÍCTOR E. ORTIZ, *La Multa Administrativa y la Multa Penal*. (*J. A.*, 51-734.) — (Sobre multas penales de leyes no penales, ver art. 4.)

JURISPRUDENCIA

126. — El tercer apartado del artículo 21 del C. Penal, establece un procedimiento previo del que el Juez no puede en nin-

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

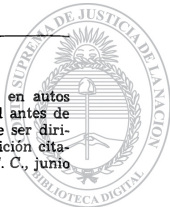
Art. 56. — La multa obliga a pagar al Estado la cantidad de dinero que determine la sentencia, dentro del plazo que ésta fije. Si el pago no se efectuare, el condenado sufrirá prisión que no excederá de un año y medio.

El tribunal, antes de transformar la multa en prisión, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre bienes, sueldos u otras entradas del condenado, con excepción de los muebles de su morada, ropas e instrumentos de trabajo, cualquiera que sea su calidad. Podrá autorizarse al condenado a amortizar la multa mediante el trabajo libre.

También se le podrá autorizar a pagar la multa por cuotas, cuyo monto, así como los periodos dentro de los cuales deban satisfacerse, los establecerá el tribunal teniendo en cuenta la condición económica del condenado. Dichos periodos, en conjunto, no podrán tener una duración mayor de un año y medio.

Art. 80. — Para la imposición de la multa, el tribunal tendrá en cuenta la condición económica del delincuente y de la familia a su cargo.

Art. 81. — Cuando el delito haya sido cometido por motivos de lucro, el tribunal podrá agregar a la sanción una multa adecuada a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del condenado, aunque dicha multa no estuviere establecida para ese delito. Esta multa no podrá exceder de cinco mil pesos.



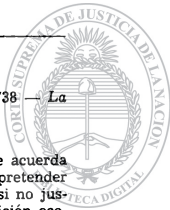
gún caso prescindir y del cual debe quedar constancia en autos para procurar la satisfacción de la multa, pena principal antes de transformarla en la de prisión y ese procedimiento debe ser dirigido expresamente como lo determina también la disposición citada, a establecer la situación económica del penado. (C. C. C., junio 23/39 — *La Ley*, 16-557.)

127. — La infracción al procedimiento que señala el art. 21, tercer apartado del C. Penal, consiste en haberse transformado en prisión la pena de multa impuesta y denegarse posteriormente el pedido de pago de ésta en cuotas, sin más fundamento que el de haberse ausentado el penado del domicilio constituido, causa de nulidad de lo actuado, toda vez que importa una violación de reglas expresas que hacen al cumplimiento de la pena y dada su naturaleza, corresponde al tribunal decretarla de oficio. (C. C. C., junio 23/39 — *La Ley*, 16-558.)

128. — Si bien la concesión de pago por cuotas de la multa impuesta, es facultativa del Juez, ella se halla regulada no solo por la condición económica del reo, sino también por los antecedentes del mismo que lo hagan digno de tal beneficio, el que importa tanto como la condena condicional y la libertad condicional, uno de los medios de la individualización de la pena. (C. C. C., marzo 29/38 — *La Ley*, 10-199.)

129. — La facultad acordada a los jueces de autorizar el pago por cuotas de la multa impuesta, debe ejercerse como tal, no solo teniendo en cuenta la situación económica del condenado, sino subordinando el otorgamiento del beneficio a la personalidad del infractor que lo haga acreedor a la ventaja o protección. (C. C. C., julio 5/38 — *La Ley*, 12-487.)

130. — La circunstancia de que el recurrente, haya sido pasible de dos condenas anteriores, una de ellas condicionalmente y la otra no cumplida, no impide que se le facilite el pago por cuotas adecuadas de la multa impuesta, máxime si se aprecia que la particularidad de haber sido condenado también a cumplir arresto, crea seguridades de que no se sustraerá a la acción de la justicia en orden a la efectividad de las penas aplicadas, lo que depen-



de del plazo que le fije el juzgado. (C. C. C., agosto 5/38 — *La Ley*, 11-1011.)

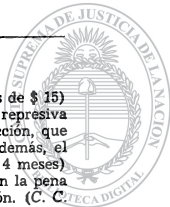
131. — El condenado a pena de multa a quien se le acuerda el beneficio de abonarla en cuotas mensuales, no puede pretender la reducción del importe mensual que se ordena pagar, si no justiprecia ni invoca que sea excesiva en relación a su posición económica. (C. C. C., abril 28/39 — *La Ley*, 14-550.)

132. — La autora de la infracción prevista por el art. 17 de la ley 12331, que carece de bienes con que hacer efectiva la multa impuesta, siendo su única fuente de ingresos, según resulta de autos, el ejercicio de la prostitución, no puede pretender que se le autorice a amortizar la multa mediante pagos parciales, desde que ello importaría sancionar una inmoralidad, mientras no acredite otras entradas. (C. C. C., julio 5/38 — *La Ley*, 12-487.)

133. — Si no resultaren debidamente establecidos profesión, ocupación o medios de vida lícitos de la persona condenada, corresponde que el juzgado le señale un plazo prudencial dentro del cual, debe justificar que se halla en condiciones, mediante una ocupación honesta, de efectuar el pago de la multa impuesta, en la forma de cuotas que propone. (C. C. C., junio 23/39 — *La Ley*, 16-557.)

134. — La supresión del plazo de seis meses que la Cámara de Diputados establecía como término dentro del cual debía ser satisfecha la multa, no debe interpretarse en el sentido de ilimitación en el tiempo porque lo contrario surge de los antecedentes en que esa medida se inspiró (proyectos Suizo y Sueco y anteproyecto Alemán). Esa supresión, ha tendido a dejar al prudente arbitrio judicial —como elemento integrante de la facultad acordada para conceder el pago de multas en cuotas, de acuerdo con la situación económica y personalidad moral del condenado— la determinación de ese término y del monto de las cuotas, dentro de los límites racionales adecuados al concepto de pena, de la naturaleza de la multa, de la necesidad de que sea efectiva y de su influencia como sanción represiva. (C. C. C., mayo 14/37 — *J. A.* 58-608.)

135. — No procede conceder el beneficio de pagar en cuotas



mensuales de \$ 5 (se le había acordado el pago en cuotas de \$ 15) la multa de \$ 2.000 impuesta por infracción a la ley 4097, represiva de los juegos de azar, al reincidente en la misma infracción, que por sus antecedentes, no es acreedor a tal beneficio. Además, el otorgamiento del larguísimo plazo solicitado (33 años y 4 meses) haría ilusorio el efecto y la penalidad que se persigue con la pena y consagraria una maniobra tendiente a burlar la sanción. (C. C., mayo 14/37 — J. A., 58-608.)

136. — El beneficio que acuerda el art. 21 del C. P. a los condenados a penas pecuniarias, no puede ser acordado a quien, a raíz de otra infracción anterior, hubiere eludido el pago por cuotas intencionalmente, obteniendo así la prescripción de la pena. (C. C. C., abril 29/32 — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-76.)

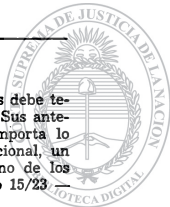
137. — No se prescribe la pena mientras el condenado está pagando la multa por cuotas. (C. C. C., marzo 23/26 — *Fallos*, 2-158.)

138. — La circunstancia de que el condenado a pagar multa o sufrir arresto en su defecto, optara por la pena corporal, no obsta para que pueda concedérsele después el beneficio de pagar aquella por cuotas. (C. C. C., marzo 2/34 — *Fallos*, 2-161.)

139. — Si por haber quebrantado el cumplimiento de la pena de multa que pagaba por cuotas, se aplicó al reo el arresto subsidiario, no debe acordársele nuevamente el beneficio de pagar aquella por cantidades mensuales. (C. C. C., octubre 30/34 — *Fallos*, 2-162.)

140. — La presentación del condenado ofreciendo reanudar el pago de las cuotas de la multa, no implica la interrupción de la prescripción. (C. C. C., mayo 4/26 — *Fallos*, 2-246.)

141. — Estando consentido el auto en que se fija la cuota, si el condenado no ha dejado de cumplir la obligación de pagarla, no puede dejarse sin efecto esa resolución. (C. C. C., mayo 22/23 — *Fallos*, 2-155.)



142. — Para acordarse el pago de la multa en cuotas debe tenerse en cuenta no solo la condición económica del reo. Sus antecedentes deben hacerlo digno de ese beneficio que importa lo mismo que la condena condicional y la libertad condicional, un favor cuyo otorgamiento es facultativo y constituye uno de los medios de individualización de la pena. (C. C. C., junio 15/23 — Fallos, 2-156.)

143. — La pena de multa que se paga por cuotas, se prescribe contándose el tiempo desde el día en que se hace efectivo el apercibimiento de aplicarse prisión por quebrantamiento de la condena. (C. C. C., agosto 19/24 — Fallos, 2-157.)

144. — 1º) Para la procedencia del pago en cuotas de la multa impuesta, no es indispensable abonar previamente las costas procesales. 2º) Impuestos conjuntamente las penas de arresto y multa, no puede diferirse el pago de ésta, en cuotas, para después de cumplido el arresto. (C. C. C., diciembre 25/25 — Fallos, 2-158.)

145. — No debe subordinarse el plazo para el pago total de la multa en cuotas, al término de la prescripción de la pena. (C. C. C., julio 23/26 — Fallos, 2-159.)

ART. 22. — *En cualquier tiempo que se satisficiera la multa, el reo quedará en libertad.*

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

ANTECEDENTES: Ver art. 21.

FUENTE: Ver art. 21.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 57. — *En cualquier tiempo que pagare la multa, el condenado quedará en libertad. Se descontará del importe la parte proporcional al tiempo de prisión que hubiere sufrido, fijándose entre cuatro y diez pesos por día, la equivalencia a cada día de prisión.*



Artículos 22 y 23.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-603. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-321, 393, 394, 454. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 67. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 53. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-63. — (Ver además bibliog. del artículo anterior.)

JURISPRUDENCIA

(Ver la del art. 58, cuando se trata de concurso de delitos, uno penado con multa y otro penado con prisión.)

ART. 23. — *La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, los que, con los efectos provenientes del mismo, serán decomisados, a no ser que pertenecieren a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse. Pueden aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia o el arsenal de guerra de la nación.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Sección II; Cap. IV, art. 6. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 87. — Proyecto 1891; art. 46. — Proyecto 1906; art. 29. — Código derogado; art. 80.

FUENTE: Proyecto Tejedor, art. arriba indicado.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-603. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-399, 400. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-103. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 69. — JOSÉ PECO, *La reforma Penal de 1917-20*, p. 237. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-187.

JURISPRUDENCIA

146. — *La persona que poseía la cosa defraudada, al cumplirse el secuestro, tiene derecho a que se le entregue provisoriamente en*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 58. — *La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, los que, en los efectos provenientes del mismo, caerán en comiso, a no ser que pertenecieran a terceros no responsables. Los instrumentos caídos en comiso no podrán venderse y serán destruidos, a menos que su aprovechamiento por el Estado fuera posible o conveniente.*



calidad de depósito, si está probado que fué recibido en alquiler por el procesado, quien confiesa que la vendió a dicho poseedor, cuya buena fe no ha sido cuestionada. En consecuencia, es aplicable lo que dispone el C. Civil en el art. 2412. (C. C. C., noviembre 10/39. — J. A., 68-556.)

147. — El decomiso de aquellos objetos que ocasionalmente han servido para la ejecución del delito, no debe estimarse autorizado por la disposición del artículo 23 del C. Penal. (C. C. C., noviembre 10/39. — *La Ley*, 16-1011.)

148. — El acusado por delito de hurto que ha sido sobreseído en virtud de haberse prescrito la acción, no tiene derecho a que se le devuelva el dinero que se supone hurtado, si según la prueba obrante en autos, no reúne la calidad de dueño conocido que exige el art. 440 del C. de Pr. Cr., ni resulta "prima facie" poseedor de buena fe. (*Cám. Fed. B. Blanca*, mayo 7/36. — J. A., 54-371.)

149. — Si no se ha establecido que los efectos que fueron secuestrados a la acusada por hurto hayan procedido de la ejecución de un delito, nada autoriza a despojarla de los mismos, máxime si se ha pronunciado sobreseimiento provisional a su favor. (C. C. C., diciembre 30/36. — J. A., 56-959.)

150. — No corresponde el decomiso de instrumentos que hayan servido para cometer un delito, si, a la vez, pueden ser elementos de trabajo. (C. C. C., septiembre 22/31. — J. A., 36-1147.)

151. — No procede el decomiso de aquellos objetos que ocasionalmente han servido para la comisión del delito, siempre que no se trate de armas o instrumentos especialmente fabricadas para delinquir. (C. C. C., septiembre 22/31. — *Fallos*, 2-36.)

152. — Si la causa se sobreseyó definitivamente por no constituir delito el hecho denunciado, procede la devolución a su dueño, del instrumento empleado para realizar aquel. (C. C. C., abril 20/34. — *Fallos*, 2-37. (Se trata de un revólver en causa por suicidio.)



153. — Deben ser decomisados los billetes de lotería no autorizados, aunque resulten premiados. (C. C. C., agosto 26/24. — Fallos, 2-47.)

154. — En los casos de condena por infracción a la ley 4097, el dinero secuestrado, si no se hallaba expuesto al juego, debe devolverse a su dueño previo pago de las costas. (C. C. C., septiembre 29/31. — Fallos, 2-53.)

155. — No procede el secuestro del dinero "producto" del juego sino del "expuesto" al juego. (C. C. C., abril 4/33. — Fallos, 2-58.)

156. — No corresponde ordenar la destrucción de los billetes de loterías prohibidas secuestradas al infractor, por cuanto los premios o valores que pudiera representar, deben ingresar al fondo de Asistencia Social. (C. C. C., septiembre, 22/33. — Fallos, 2-62.)

ART. 24. — *La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre cuatro y diez pesos.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título IV; art. 9. — Proyecto 1891; art. 45. — Código derogado; art. 49. — Ley 4189; art. 12.

FUENTE: Redactado por la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados. En los proyectos del Dr. Tejedor y de 1891, y en el Código derogado, el cómputo se refería a penas de penitenciaría, prisión, deportación, etc.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-604. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-321, 376, 379, 393. — RODOLFO MORENO, *El Có-*

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 59. — *La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fije entre cuatro y diez pesos.*

digo Penal y sus antecedentes, 2-109. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 69. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 237. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-188.

JURISPRUDENCIA

157. — La regla del artículo 24 del C. P., para determinar el cómputo de la prisión preventiva, se refiere a la sufrida en el proceso mismo en que ha sido dictada condena por sentencia firme. (Cám. Fed. Cap., diciembre 20/40. — *La Ley*, 21-730.)

158. — La prisión preventiva sufrida por el procesado en la causa por violación terminada con sentencia absolutoria, no puede computarse en el proceso en que se le condenó por robo cometido con anterioridad, que no tuvo influencia alguna en aquella detención, pues lo contrario importaría una compensación improcedente no autorizada por la ley. (Cám. Fed. Cap., diciembre 20/40. — *La Ley*, 21-730.)

159. — Absuelto el prevenido en un proceso en que sufriera prisión preventiva, no corresponde se compute ésta en otro proceso por delito distinto, dado que ello importaría una compensación improcedente. (Cám. Fed. La Plata, diciembre 20/40. — *Rep. Juríd.*, 3-1253.)

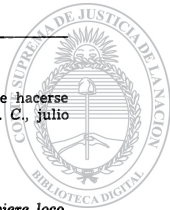
160. — La simple detención, a los efectos de la pena, debe considerarse como prisión preventiva. (C. C. C., octubre 1/26. — *Fallos*, 1-142.)

161. — En todos los casos la prisión preventiva debe computarse hasta la sentencia de segunda instancia. (C. C. C., agosto 14/28. — *Fallos*, 1-142.)

162. — No es computable el exceso de detención que pueda haber sufrido el penado en causas anteriores y ajenas a su condena actual. C. C. C., abril 12/32. — *Fallos*, 1-144.)

163. — El cómputo del arresto impuesto como pena subsidiaria





o complementaria a los infractores de la ley 4097, debe hacerse conforme al art. 49 del Código Penal derogado. (C. C. C., julio 21/25. — Fallos, 1-141.)

ART. 25. — *Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado 3º del inciso 1º del art. 34.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Título I, art. 13. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 48. — Código derogado; art. 50. — Proyecto 1891, art. 57. — Proyecto 1906, art. 31.

FUENTE: El Proyecto de 1891 (art. 57), modificado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-606. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-380. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 2-115. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 70. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 239.

TITULO III

CONDENACION CONDICIONAL

ART. 26. — *En los casos de primera condena a pena de reclusión o prisión que no exceda de dos años, o de multa, los tribunales podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad moral del condenado, la naturaleza del delito y*

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 60. — *Si durante la condena el condenado se volviere alienado o le sobreviniere otra enfermedad psíquica que implida la elección de la condena, el tiempo de la alienación o de la enfermedad se computará para el cumplimiento de la sanción, sin que ello obste a la internación del condenado en un manicomio u otro establecimiento oficial adecuado, hasta que se establezca, con audiencia del ministerio público, por medio de informes expedidos por peritos oficiales, que no es peligroso para sí o para terceros.*

La existencia de la alienación o de la enfermedad se establecerá por informes de peritos oficiales.



las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones que crea pertinentes para formar criterio.

En los casos de concurso de delitos procederá la condenación condicional, si la pena impuesta al reo no excediese de dos años de prisión o fuese de multa.

ANTECEDENTES: Proyecto de 1906; art. 32.

FUENTE: Proyecto del diputado Dr. Moreno, teniendo como base el Proyecto 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-627. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-389, 426, 427, 430. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 2-122. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 71. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 241. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 153. — ALFREDO J. MOLINARIO, *Condena de ejecución condicional (tesis)*, Bs. As. 1925. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-191. — E. SAYAGUES LASO, *Suspensión condicional de la ejecución de la pena*, Montevideo 1932. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-184. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 61. — T. CHIARONTI, *La condanno condizionale*, Treviso, 1897. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-45 y 2-108, 191. — RICARDO C. NÚÑEZ, *La influencia de la condenación condicional en la libertad condicional y en la unificación de penas*. ("Boletín de la Fac. de Derecho y C. Sociales de Córdoba, set.-oct. de 1939.") — REGLAMENTACIÓN DE LA CONDENA CONDICIONAL EN LA PROV. DE BUENOS AIRES, (*Nota de La Ley*, 6-781.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 82. — Con las excepciones previstas en el artículo 85 el tribunal, en los casos de primera condena, cuando se impusiere prisión que no exceda de dos años o multa no mayor de dos mil pesos, podrá disponer, en la misma sentencia, que se deje en suspenso, en forma condicional, el cumplimiento de la sanción.

Cuando para el delito, además de las sanciones de prisión o multa, existiere establecida la de inhabilitación, el tribunal podrá disponer que ésta sea cumplida, si por la naturaleza del delito o por otras circunstancias considerare conveniente no suspender su ejecución en forma condicional.

Art. 83. — La comisión de un delito anterior no obstará al pronunciamiento de la condena de ejecución condicional, si dicho delito fuera culposo y no concurriera la circunstancia de mayor peligrosidad prevista en el inciso 9.º del artículo 17.

Art. 84. — El tribunal no podrá disponer que el cumplimiento de la sanción sea suspendido condicionalmente, cuando mediere concurso real de delitos, a menos que la sanción a imponer sea la de multa que no exceda del límite fijado en el artículo 82.

Art. 85. — La ejecución de la condena no podrá suspenderse en forma condicional, sino en favor de los delinquentes a cuyo respecto se hubiera establecido que procedieron en las situaciones previstas en los incisos a) o b) del artículo 20. Será necesario, además, que concurran circunstancias reveladoras de menor peligrosidad, conforme a los artículos 18 y 19 de este Código.

Art. 86. — El tribunal podrá imponer al condenado la observancia de disposiciones referentes a conducta y lugar de residencia. En tal caso, encomendará la inspección correspondiente a un delegado o a un patronato, por el tiempo que se estime necesario, durante un término que será de prueba.

Art. 87. — El tribunal fijará el término de prueba entre dos y seis años. Durante el mismo la prescripción de la sanción no seguirá su curso.



JURISPRUDENCIA

164. — Las circunstancias en que aparece cometida la infracción al artículo 17 de la ley 12331 —reconocido por la misma procesada— de no alcanzarle lo que gana en el lavado de ropas, para alimentar a sus dos hijitos de ocho y seis años de edad, por lo que y para reunir los recursos indispensables, se dedicó a la prostitución en la pieza alquilada a tal efecto, fuera de su domicilio, lo que corrobora la siguiente información de la policía: “Trabaja como lavandera en su casa; vive en la casa desde un año antes; viuda con dos niños a quienes atiende dándoles instrucción; de carácter reposado, mereciendo buen concepto y observando buena conducta”, autorizan a acordarle el beneficio del art. 26 del C. Penal. (C. C. C., abril 12/40. — *La Ley*, 18-320.)

165. — La naturaleza del hecho (tenencia de alcaloides) en violación a la ley 11338, no impide dejar en suspenso la pena, pues según la disposición legal citada, ello es tan solo uno de los elementos que contribuyen a la apreciación de la personalidad moral del delincuente. (C. C. C., diciembre 15/39 — *La Ley*, 16-168.)

166. — Nada se opone a que la inhabilitación como pena accesoría, siga la suerte de la principal en cuanto a su suspensión. (Cám. Fed. La Plata, agosto 4/39. — *La Ley*, 15-622.)

167. — Los tribunales federales y los de justicia letrada, antes de otorgar el beneficio de condena o de libertad condicional, deben requerir informes acerca de las condiciones de peligrosidad del procesado. (Corte Suprema; Fallos, 183-9. — *Parry*, V. 27-588.)

168. — La personalidad moral del procesado queda revelada por la actividad comprendida dentro de lo prescripto por el art. 17 de la ley 12331 a que se dedicaba, alquilando un departamento para subalquilar las habitaciones a diversas mujeres para que ejercieran la prostitución, percibiendo una suma determinada por cada cliente que recibían, todo lo cual hace impropio acordar el beneficio de la condena condicional, no obstante tratarse de la primera condena. (C. C. C., noviembre 4/38. — *La Ley*, 12-1115.)

169. — La naturaleza de la acción (art. 17 de la ley 12331) y



la mala personalidad moral de su autora, conforme a los datos de las planillas adjuntas, no la hacen acreedora al beneficio previsto por el artículo 26 del C. P., aunque se trate de una primera condena. (C. C. C., julio 5/38. — *La Ley*, 12-487.)

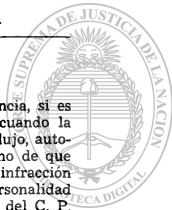
170. — La condena condicional no es sino una forma de la individualización de las penas en que la privación de la libertad, deja de ser actual para convertirse en potencial, actuando sobre el sujeto como una amenaza. De modo que lo que varía es simplemente el régimen de cumplimiento de la condena. No puede decirse entonces, que no se esté cumpliendo la pena como lo exige el art. 58 del C. P. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

171. — El beneficio de la condena condicional otorgado por el juez de primera instancia, en virtud de que la pena impuesta en la sentencia, no excedería de dos años, pierde toda su eficacia al cambiarse por la Cámara la calificación del delito y aplicar una pena mayor. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37. — *La Ley*, 9-646.)

172. — Corresponde reprimir severamente el uso anormal e ilícito de un medio de comunicación tan útil como el teléfono por parte de personas que se escudan en el secreto casi absoluto que aseguran los teléfonos automáticos, para satisfacer propósitos innobles o dar rienda suelta a morbosos estados de ánimo. En estos casos, aunque la procesada no registre antecedentes judicial ni policial y aunque su mentalidad sea débil, no procede dejar en suspenso la pena, en atención a su capacidad intelectual y a la índole y modalidades del delito cometido, a la cobardía de la ocultación y a la saña puesta de manifiesto. (*Cám. Fed. Cap.*, noviembre 3/37. — *J. A.*, 60-380.)

173. — El objeto de la condena condicional, es dar al delincuente primario la oportunidad de reaccionar, librándose por la ulterior conducta de la sanción que se le impuso. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 30/36. — *J. A.*, 56-73.)

174. — Procede dejar en suspenso la condena de multa e in-



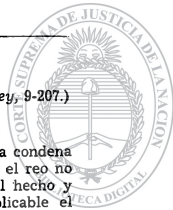
habilitación impuesta al autor de lesiones por imprudencia, si es persona de buena conducta, honesta y trabajadora y cuando la naturaleza del hecho y las circunstancias en que se produjo, autorizan a acordarle este beneficio. No obsta a ello el hecho de que fuera anteriormente condenado a pagar una multa por infracción a la ley de Descanso Dominical, porque no afecta su personalidad moral y por cuanto debe entenderse que el artículo 26 del C. P. se refiere a primera condena "por delito". (C. C. C., mayo 21/37. — J. A., 58-614.)

175. — Procede dejar en suspenso la condena por lesiones culposas del art. 94 del C. P. (multa e inhabilitación) en caso de primera condena al procesado de buenos antecedentes, concepto y conducta, que ha sido pasible de una sanción por infracción a disposiciones de carácter contravencional (estacionamiento indebido) y registra un sobreseimiento definitivo en causa análoga, pues la naturaleza del hecho y su realización (choque contra un árbol) no revelan circunstancias particulares que afecten su concepto como para negarle ese beneficio. (C. C. C., octubre 29/37. — J. A., 60-1008.)

176. — Procede dejar en suspenso la condena a dos años de prisión por el delito del art. 179 del C. P. aunque el procesado hubiere sido sobreseído provisionalmente en una causa por lesiones del art. 94 del C. P., si han transcurrido más de cuatro años y medio desde que se dictó el sobreseimiento y se trata de una persona que, según los informes policiales, observa buena conducta, trabaja y goza de buen concepto. (C. C. C., diciembre 7/37. — J. A., 60-1017.)

177. — Procede dejar en suspenso la condena a dos años de prisión por homicidio por imprudencia, si el condenado, de 51 años de edad, empleado jubilado del estado, no registra antecedentes policiales ni judiciales y merece buen concepto; y en atención a la naturaleza del delito (culposo) y los especiales caracteres que ofrece. (C. C. C., diciembre 7/37. — J. A., 60-1008.)

178. — A pesar del antecedente de un delito culposo —cometido años atrás— puede otorgarse condena condicional, por el delito culposo posterior, si no concurren circunstancias de mayor peli-



grosidad. (*Sup. Corte de Tuc.*, noviembre 11/37. — *La Ley*, 9-207.)

179. — Si han quedado prescriptos los efectos de una condena anterior, en orden al lapso transcurrido, durante el cual el reo no ha incurrido en ninguna acción punible, el carácter del hecho y las condiciones personales del autor, pueden hacer aplicable el artículo 26 del C. Penal. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, junio 10/37. — *La Ley*, 10-39.)

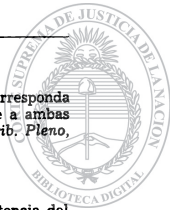
180. — Cuando la personalidad moral del reo, apreciada a través del propio hecho del proceso y de la información de abono, revela inclinación al mal, y hace necesario el efecto monitorio de la pena corporal, aquel no es acreedor al beneficio de suspensión del cumplimiento de la pena. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, mayo 12/1937. — *La Ley*, 9-118.)

181. — No ampara el beneficio de la condena condicional, al delincuente habitual, aún cuando carezca de antecedentes judiciales, si de su planilla de antecedentes resulta ser un vago. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 30/36. — *J. A.*, 56-73.)

182. — Para que proceda el beneficio de suspensión del cumplimiento de la pena, si bien es requisito indispensable que se trate de primera condena, la medida ha de fundarse además en la personalidad moral del condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para apreciar esa personalidad. Por ello, no corresponde acordar tal beneficio al autor de un robo en pleno día con empleo de fuerza en cierre de lugar habitado, que no trabaja ni se le conocen medios de vida, usa dos nombres, registra varias contravenciones policiales y pedidos de antecedentes y merece mal concepto. (*C. C. C.*, noviembre 20/36. — *J. A.*, 56-610.)

183. — Las penas complementarias o accesorias pueden imponerse en forma condicional, en los casos previstos por el art. 26 del C. P. (*C. C. C., Trib. Pleno*, agosto 7/23. — *Fallos*, 2-476.)

184. — No procede suspender la pena principal y hacer efec-



tiva la complementaria de inhabilitación. Cuando corresponda otorgar el beneficio del art. 26 del C. P., debe aplicarse a ambas penas y no separadamente a una de ellas. (C. C. C., Trib. Pleno, noviembre 28/24. — *Fallos*, 2-476.)

185. — Es apelable por el Ministerio Público la sentencia del juez en cuanto deja en suspenso la pena impuesta. (C. C. C., junio 10/24. — *Fallos*, 1-159.)

186. — Si el procesado fué condenado condicionalmente por el segundo delito que cometió y después se le impone pena a cumplir por el primero, procede la acumulación para dictar sentencia única, y en su caso, acordarle el beneficio de la condicionalidad de la condena por ambos delitos. (C. C. C., octubre 4/32. — *Fallos*, 1-160.)

187. — Si el reo procesado antes dos jueces de diferente jurisdicción (correccional y sentencia) por una falta y un delito conexo, respectivamente, cuya distinta naturaleza hace inaplicable las reglas del concurso de los artículos 55 y 56 del C. P., cabe la condena condicional en las dos sentencias. (C. C. C., diciembre 8/33. — *Fallos*, 1-161.)

188. — No existe concurso de delitos y procede por tanto la condena condicional, cuando casi simultáneamente se han cometido una falta y un delito. (C. C. C., diciembre 6/33. (*Rec. Ord.*, Cuad. 7-36.)

189. — Para que proceda la condena condicional, debe tenerse en cuenta la pena fijada en la sentencia, y no el máximo señalado para el delito por el Código. (C. C. C., agosto 7/23. — *Fallos*, 1-533.)

190. — El beneficio de la condena condicional previsto por el artículo 26 del C. P., es aplicable a las faltas de carácter municipal. (C. C. C., septiembre 30/24. — *Fallos*, 1-533.)



ART. 27. — La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término para la prescripción de la pena, el condenado no cometiere un nuevo delito.

Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas.

ANTECEDENTES: Proyecto de 1906, art. 33.

CONCORDANCIAS: Artículos 21 y 58 (C. P.).

FUENTE: Ver art. 26.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-627 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-325, 425, 434. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-148. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 165. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 78. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 65. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-193, 344.

JURISPRUDENCIA

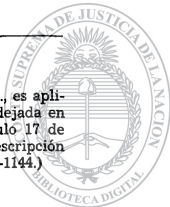
191. — Los artículos 27 y 58 del C. P. son aplicables cuando después de la condena condicional y antes de transcurrida la prescripción de esta pena, la condenada incurrió en infracción al art. 17 de la ley 12331 por lo cual se le aplicó § 100 de multa; pero en tal situación, el juez que impuso la pena más grave, debe intimar el pago de la multa y en caso de no ser esta satisfecha, convertirla en prisión, de acuerdo al art. 21 del C. P. hecho lo cual, procederá la acumulación jurídica que establecen los artículos 27 y 58. (C. C. C., septiembre 8/39. — J. A., 68-123.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 88. — En caso de cometer otro u otros delitos, estando en vigor el término de prueba, el condenado será sometido al cumplimiento de las sanciones que correspondan a todos, observándose lo dispuesto para el concurso real; pero, si el delito cometido ulteriormente fuere uno y lo hubiere sido por culpa, concurriendo, además, circunstancias de menor peligrosidad, el tribunal podrá no revocar la suspensión de la ejecución de la condena, e imponer, en cambio, una nueva condena, también de ejecución condicional, por ambos delitos. En tal caso, ampliará el término de prueba en la medida que considere conveniente o necesaria.

Art. 89. — Si el condenado infringiere, sin causa justificada, las obligaciones de conducta o residencia que lo hubieren sido impuestas, procederá la ejecución de la sanción.

Art. 90. — Si durante el término de prueba se descubriera la existencia de una condena anterior, en cualquier forma extinguida, la sanción cuyo cumplimiento se dejó en suspenso no será ejecutada.



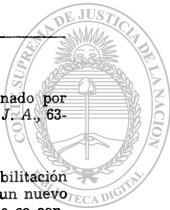
192. — Lo dispuesto por los artículos 27 y 58 del C. P., es aplicable al supuesto de una primera condena por cohecho, dejada en suspenso y la comisión del hecho que reprime el artículo 17 de la ley 12331, antes de transcurrido el término para la prescripción de aquella pena. (C. C. C., septiembre 8/39. — *La Ley*, 15-1144.)

193. — La comisión de un nuevo delito antes de vencer el término de la pena de prisión anterior, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, hace aplicable en principio el art. 58 del C. P.; pero esa aplicación no corresponde cuando la segunda pena es de multa y no se halla en el estado de convertirla en prisión por no haberse observado previamente, los trámites establecidos por el art. 21 del C. P. (C. C. C., septiembre 5/39. — *La Ley*, 16-174.)

194. — Cuando se trata de una condena por cohecho y otra por un delito penado con multa de \$ 1.000, el absurdo jurídico de tener que imponer como pena única la de multa, dado su carácter de indivisible, dejando impune el delito de cohecho, lo que podría resultar de la aplicación de los artículos 27 y 58 del C. P. en combinación con el segundo apartado del art. 56 del Código citado y el 557 del C. de Pr. Cr., convirtiéndola en prisión en caso de no ser aquella satisfecha, de acuerdo a lo prescripto en el art. 21, hecho lo cual, procederá la acumulación que establecen los artículos 27 y 55 del mismo Código. (C. C. C., septiembre 8/39. — *La Ley*, 15-1144.)

195. — El juez que impone pena única, no se limita a aplicar sanción por el hecho último, sino que debe examinar la situación de conjunto: vigencia de la pena anterior, procedencia de la sanción única, monto final de la acumulación. Por ello es apelable la sentencia, aunque el hecho último juzgado no sea de consulta (art. 690 del C. de Pr. Cr. de Tucumán y haya consentimiento del reo. (*Sup. Corte de Tuc.*, abril 29/39. — *La Ley*, 15-1124.)

196. — Si cuando el procesado cometió los delitos que se juzgan en la causa, no había recaído sentencia en el proceso que se le seguía por un delito anterior (en que fué condenado en forma condicional) la situación debe resolverse imponiéndole una pena única de acuerdo al artículo 58 del C. P. No es aplicable al caso el artículo 27 del C. P. porque este precepto requiere que al come-



ter el o los nuevos delitos, el procesado se halle condenado por otro en forma condicional. (C. C. C., septiembre 9/38. — J. A., 63-1069.)

197. — Cuando el fallido condenado a prisión e inhabilitación especial bajo el régimen de la ley 4156, no ha cometido un nuevo delito durante el término de prescripción de la pena, ésta se considera inexistente (art. 27 del C. Penal); esta solución debe tenerse en cuenta, al computar el término para la rehabilitación del fallido. (Cám. Com. de la Cap., agosto 18/37. — J. A., 67-510.)

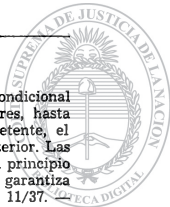
198. — La decisión revocando la libertad condicional no puede pronunciarse hasta que exista sentencia firme condenatoria por el nuevo delito, pero ello no impide al tribunal, dictar la primera, aún después de vencido el término de la pena que el condenado cumplía en libertad. (C. C. C., febrero 8/38. — La Ley, 9-599.)

199. — Si el condenado en forma condicional, interrumpe la prescripción de la pena cometiendo un nuevo delito, debe revocar-se la sentencia correspondiente en cuanto a la suspensión de la pena y mandar que esta sea cumplida (arts. 27, 63 y 67 C. P.) aunque no medie recurso acusatorio contra la sentencia de Primera Instancia que omitió resolver el punto, expresamente considerado en la acusación fiscal. (C. C. C., diciembre 7/37. — J. A., 60-1018.)

200. — Corresponde aplicar pena única al procesado que delinquiró, mientras gozaba de libertad condicional, si el tribunal que dictó la primera condena revoca el beneficio de suspensión de la pena por haberse cometido un nuevo delito. (C. C. C., mayo 28/37. — J. A., 58-622.)

201. — No corresponde la imposición de pena única, si desde la comisión del segundo delito que interrumpió la prescripción de la pena condicional, impuesta al procesado en una causa anterior, ha corrido nuevamente y se extinguió, el plazo de dicha condena. (C. C. C., agosto 6/37. — J. A., 59-646.)

202. — No corresponde la imposición de pena única a quien de-



linque en la Capital Federal mientras goza de libertad condicional por un delito cometido en la provincia de Buenos Aires, hasta tanto no sea revocado previamente, por el juez competente, el beneficio de suspensión del cumplimiento de la pena anterior. Las normas del C. Penal rigen siempre que no se opongan al principio del artículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional, que garantiza el respeto de las jurisdicciones locales. (C. C. C., junio 11/37. — *J. A.*, 58-937.)

203. — Si el tribunal que impuso la condena por la cual el procesado se encontraba en libertad condicional al cometer el nuevo delito, no ha revocado a raíz de este, aquel beneficio, no procede aplicar pena única por los dos delitos, dado que para ello habría sido necesario que se revocara la libertad condicional. (C. C. C., octubre 6/36. — *J. A.*, 56-310.)

204. — Si la condena condicional por delito anterior se halla prescripta a la fecha de la sentencia condenatoria de autos, sin que en el intervalo entre ambas se haya cometido un nuevo delito, no procede dictar pena única que comprenda la condena condicional. (C. C. C., octubre 19/34. — *Fallos*, 1-157.)

205. — Aún cuando no medie recurso acusatorio, el tribunal debe mandar cumplir la pena impuesta anteriormente cuando fuere de aplicación el art. 27, segundo apartado del C. Penal. (C. C. C., diciembre 7/27. — *Fallos*, 1-533.)

206. — La pena por una infracción a la ley 4097 y además el cumplimiento de la anterior, dejada en suspenso por virtud del artículo 27 del C. Penal, por análoga infracción, solo se prescribe a los tres años pues ha de considerarse que la pena impuesta, es de cuatro mil pesos de multa. (C. C. C., febrero 25/27. — *Fallos*, 2-50.)

ART. 28. — *La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.*



ANTECEDENTES: Proyecto 1906, art. 34.

FUENTE: Proyecto 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-627. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-426, 427. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-149. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 78. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 169. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-194, 297.

TITULO IV

REPARACION DE PERJUICIOS

ART. 29. — *La sentencia condenatoria podrá ordenar:*

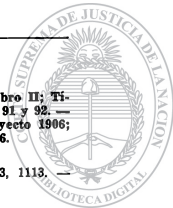
- 1º) *La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba;*
- 2º) *La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente de la cosa, más el de estimación si lo tuviere;*
- 3º) *El pago de costas;*
- 4º) *Cuando la reparación civil no se hubiese cumplido durante la condena, o cuando se hubiese establecido a favor del ofendido o de su familia una pena de indemnización, el juez, en caso de insolvencia señalará la parte de los salarios del responsable que debe ser aplicada a esas obligaciones, antes de proceder a concederle la libertad condicional.*

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 91. — *La condena de ejecución condicional no comprende las prestaciones a cargo del condenado que se especifican en el Título VIII y el Tribunal establecerá el término dentro del cual deben cumplirse. La falta de restitución y la de pago de las sumas fijadas por tales conceptos, mediante el empleo de maniobras para eludirlo, o el incumplimiento de la obligación, sin causa justificada, darán lugar a la ejecución de la sanción, condicionalmente suspendida.*

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 92. — *De todo delito nace la obligación de reparar el daño moral y material causado a la víctima o a un tercero, y el tribunal, en su sentencia, aun sin que el damnificado lo requiera, establecerá el monto de la indemnización, prudencialmente, en defecto de plena prueba. Si el damnificado estimara que la indemnización fijada prudencialmente por no haber mediado plena prueba, no alcanza a resar-*



ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro I; Título VII y Libro II; Título II. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; arts. 88, 89, 90, 91 y 92. — Proyecto 1891, arts. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55. — Proyecto 1906; arts. 35, 36, 37, 38 y 39. — Código derogado; arts. 47, 139 y 176.

CONCORDANCIAS: Código Civil; arts. 1096, 1101, 1102, 1103, 1113. — Cód. Pr. Cr.; art. 496, inciso 1°.

FUENTE: Proyecto de 1906 (arts. 35 al 39).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-641. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-127 y 2-472, 473, 474, 475. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 79. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 259. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 249. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-156 y 178. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 1-254. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-149. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 65 y sgts. — E. GALLI, *Culpa penal y culpa civil*. La Plata, 1937. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-63 y 2-108, 300. — R. GARÓFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*. Torino, 1887. — HENOCH D. AGUIAR, *Cómo y cuándo nace la obligación de indemnizar*. (La Ley, 5-861.) — LEONIDAS ANASTASI, *Imprudencia de la condenación al resarcimiento del daño en juicio criminal si no se ha ejercido acción a su respecto*. (J. A., 37-429.) — ENRIQUE V. GALLI, *Culpa civil y culpa penal*. (La Ley, 8. sec. bibl., 9.) — ENRIQUE V. GALLI, *Culpa civil y culpa penal en la jurisprudencia civil*. (La Ley, 10-312.) — DANTE ANGELOTTI, *La Acción del daño "ex-delicto" y título para el ejercicio de la misma en juicio civil*. (La Scuola Positiva. Milán, ene.-feb. 1940), p. 43. — JUAN PICHON-RIVIERE, *Aspecto jurídico de la distinción entre delitos penales y civiles. Responsabilidad civil y responsabilidad criminal*. (J. A., t. 59, sec. doct., p. 33.) — DANIEL OVEJERO, *Daño civil y daño moral*. (J. A., t. 53, sec. doct., p. 65.) — NOTA DE LA LEY, *Indemnización del daño moral*, 10-1089. — JULIO DASSEN, *Daño causado por la muerte; quienes tienen derecho a reparación*. (La Ley, 1-687.) — RENÉ SAVATIER, *Las relaciones de la responsabilidad por el hecho de las cosas y de la responsabilidad por el hecho de otro*. (Recueil periodique Dalloz), 1937, 1-5. — ACDEEL ERNESTO SALAS, *Interpretación jurisprudencial de los antece-*

cir los perjuicios sufridos, podrá reclamar, ante la jurisdicción civil, el aumento que considere que corresponde, sin que en el nuevo juicio pueda discutirse el derecho a la indemnización establecida en la sentencia condenatoria.

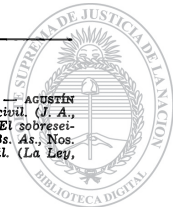
Art. 93. — Sin perjuicio de la indemnización estatuida por el artículo anterior, el condenado, cuando la víctima o sus herederos lo solicitaren, deberá costear los gastos de publicación de la sentencia, en todo o en parte, y el tribunal ordenará esa publicación, en un diario del lugar donde funcionare, si considera que ella constituye un medio para reparar el daño no patrimonial ocasionado por el delito. El tribunal dispondrá lo necesario para que la publicación sea hecha en forma que responda al fin que la motiva.

La publicación podrá ordenarse, aun sin pedido de la víctima o sus herederos, y a costa del condenado, cuando el tribunal juzgue que ella es conveniente.

La publicación no se ordenará, por ninguna razón, cuando se trate de delitos dependientes de instancia privada o cometidos por menores, así como en el caso de que pueda afectar a menores o a terceros.

Art. 94. — La sentencia condenatoria ordenará:

- 1° La restitución de la cosa obtenida por el delito y, si no fuera posible la restitución, el pago, por el condenado, del precio corriente de la cosa.
- 2° El pago de las costas procesales.



dentes legales del art. 1113 del Código Civil (J. A., 69-210.) — AGUSTÍN TABOADA, Influencia de la sentencia absolutoria sobre la acción civil. (J. A., 31-431.) — JORGE H. FRÍAS y JULIO H. ESCLAPEZ, Cosa juzgada. El sobreseimiento definitivo y la acción civil. (Ed. Cuadernos Forenses, Bs. As., Nos. 25 y 26.) — A. ACUÑA ANZORENA, Indemnización del daño moral. (La Ley, 10-904.)

EL ARTICULO 29 DEL C. P. FRENTE A LAS LEYES DE FORMA PROVINCIALES Y AL ARTICULO 1096 DEL CODIGO CIVIL

207. — Las disposiciones del C. P. (art. 29 y concordantes) que consignan la indemnización civil a las víctimas del delito, como parte integrante de la sanción punitiva, no pueden ser modificadas por leyes o decretos o jurisprudencia provinciales, los cuales están obligados a conformarse con ellas, de acuerdo al art. 31 de la Constitución Nacional. (*Sup. Corte de Bs. As., diciembre 12/39. — La Ley, 17-74.*)

208. — La disposición del artículo 29 del C. P. relativa a la vinculación de la acción penal y la acción emergente del delito estableciendo la unidad de examen y decisión en ambos aspectos, no involucra una simple cuestión de procedimiento, sino que se refiere a la efectividad de la pena; y la unidad de jurisdicciones en materia de reparación civil de los daños emergentes de delitos, tiene el propósito de evitar posibles contradicciones en los pronunciamientos judiciales y la pérdida de tiempo que ocasiona la división de procesos. (*Sup. Corte de Bs. As., diciembre 12/39. — La Ley, 17-74.*)

209. — El juez en lo criminal, tiene jurisdicción para pronunciarse acerca de la responsabilidad civil de los autores del hecho incriminado, cualquiera sean los preceptos de las leyes locales que organizan los procedimientos y rigen la competencia criminal, pues en ningún caso podría acordarse prevalencia a estos preceptos sobre el art. 29 del C. P. (*Sup. Corte de Bs. As., diciembre 12/39. — La Ley, 17-74.*)

210. — No se interpretaría correctamente la ley, si una disposición de la trascendencia del artículo 29 del C. P., no fuese tomada en relación con el conjunto de disposiciones referibles al caso,



para resolver que ello importa derogar solamente el artículo 1096 del C. C. Es preciso buscar en la interpretación sistemática, criterio para los casos en los cuales la nueva concepción pública de las reparaciones por los daños delictuales derivado de aquel precepto, pueda funcionar unitaria y coherentemente. (*Cám. Apel. de Rosario*, julio 24/37. — *La Ley*, 10-889.)

211. — El sistema de reparación de los daños causados por el delito, que sanciona el C. Penal, parte de principios según los cuales la indemnización a las víctimas del delito, no debe ser entendida exclusivamente bajo el aspecto de negocio privado, sino que en ello existe un interés social preponderante que hace que, aún de oficio, la condena pueda pronunciarse. (*Cám. Apel. de Rosario*, julio 24/37. — *La Ley*, 10-889.)

212. — En materia de reparación de los daños causados por el delito, con la sanción del actual código penal, la legislación se orienta en el sentido opuesto a la concepción estrictamente privada de ese instituto, derivada del sistema sancionado por el Código Civil. (*Cám. Apel. de Rosario*, julio 24/37. — *La Ley*, 10-889.)

213. — Los artículos 29 y concordantes del C. Penal que consagran la indemnización civil a las víctimas del delito como parte integrante de la sanción punitiva, no pueden ser modificados por ley, decreto o jurisprudencia provinciales. (*Corte Suprema*, julio 14/33. — *J. A.*, 42-961.)

214. — El artículo 29 del C. Penal, ha derogado el artículo 1096 del código civil y la acción civil puede ser ejercida ante el mismo juez y al mismo tiempo o conjuntamente con la acción penal. (*C. C.*, septiembre 7/23. — *J. A.*, 11-662.)

215. — La indemnización del perjuicio causado por el delito, no es cuestión que deba regirse por las leyes de forma, por cuanto, tanto ella como la sanción penal, tienen un solo e igual carácter: ambas son consecuencias del delito y tienden a hacer cesar y reponer ese quebrantamiento del orden jurídico. (*Cám. Crim. y Correc. 3ª de La Plata*, septiembre 7/28. — *J. A.*, 28-502.)



INTERPRETACION DE LA EXPRESION "PODRA ORDENAR"

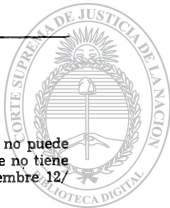
216. — Al sancionarse el artículo 29 del C. P., se substituyó la expresión "ordenará" que contenía el proyecto de la Cámara de Diputados por la de "podrá ordenar" y esta reforma evidencia que el pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la indemnización, ha quedado subordinado al principio general de que toda acción derivada de un hecho que, como los delitos cause perjuicio, debe ser ejercida para provocar una decisión al respecto; con este criterio concuerdan, los preceptos de los artículos 495 inc. 4º, regla 4ª y 496, inc. 1º del C. de Pr. Cr. Confirma esta conclusión, la no aceptación del agregado de la cláusula "a petición de parte" que se proponía, que debe entenderse rechazada por supérflua. (C. C. C., mayo 21/37. — J. A., 58-611.)

217. — Las palabras "podrá ordenar" que usa el artículo 29 del C. Penal, supone la opción del juez, sólo en los casos en que no exista reclamo del damnificado; existiendo reclamo, la facultad del juez desaparece, porque a toda petición, corresponde, como es natural, una resolución que la admita o la desestime. (Sup. Corte de Bs. As., diciembre 28/37. — *La Ley*, 9-525.)

218. — En virtud de lo dispuesto por el artículo 29 del C. Penal, la víctima no pierde su derecho de concurrir a la jurisdicción civil para reclamar la indemnización del daño moral y material causado por el delito pero solo cuando el juez del crimen se ha abstenido de resolver al respecto. (Cám. 2ª de La Plata, Sala 1ª, junio 11/37. — *La Ley*, 9-637.)

EXCEPCION AL PRINCIPIO DEL ARTICULO 29: LEY 11723

219. — La Ley 11723, crea una excepción a la regla del artículo 29 del C. Penal, que permite al juez del crimen fijar la indemnización del daño material y moral, pues viene a prohibir la acumulación de las acciones civil y penal, estableciéndose esta prohibición en punto a la propiedad intelectual y que estaba prevista en el art. 1096 del C. Civil. (Cám. Civil 1ª de la Capital, mayo 19/1939. — *La Ley*, 16-533.)



EJERCICIO DE LA ACCION - PERSONERIA

220. — La indemnización por daño moral y material no puede reclamarse ante el juez del crimen, si la parte que la pide no tiene personería para ejercer la acción penal. (C. C. C., septiembre 12/1932. — *Fallos*, 1-24.)

221. — El Ministerio Público no tiene personería para solicitar la indemnización de daños y perjuicios emergentes del delito. (C. C. C., octubre 1/26. — *Fallos*, 2-9.)

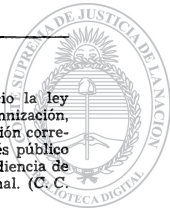
222. — Aún en presencia de la disposición del artículo 29 del C. Penal, el miembro de la familia o tercero damnificado, no puede ser tenido en el juicio criminal como parte únicamente civil a los efectos de la reparación del perjuicio. (C. C. C. Trib. Pleno, mayo 21/26. — *Fallos*, 2-475.)

223. — La acción civil para reparar el perjuicio causado por el delito, puede ser ejercitada ante el juez del fuero criminal y correccional y al mismo tiempo o conjuntamente con la acción penal. (C. C. C., Tribunal Pleno, septiembre 7/23. — *Fallos*, 2-475.)

INDEMNIZACION FIJADA A SOLICITUD DE PARTE

224. — La resolución de la Cámara que fija prudencialmente el monto del daño material causado por el delito, por aplicación del art. 29 inc. 1° del C. P., no viola la garantía de la defensa en juicio, si el querellante, en el escrito de demanda, solicitó la indemnización, habiendo tenido el querellado durante la tramitación de la causa, oportunidad de producir la prueba conveniente a su derecho. (Trib. Sup. de Córdoba, abril 30/41 — *La Ley*, 22-577.)

225. — La indemnización del daño emergente de un delito del derecho criminal, así como las excepciones que se opongan a la acción respectiva, aún deducidas simultáneamente con la querella, se rigen por la Ley Civil. (C. C. C., noviembre 8/40. — *La Ley*, 20-997.)



226. — El particular damnificado en cuyo beneficio la ley penal ha establecido el derecho de reclamar una indemnización, puede hacer renuncia o reserva de tal derecho, y de la acción correlativa, toda vez que aquella no tiene en mira un interés público pero esa renuncia o reserva, una vez formulada en la audiencia de acusación y defensa, es definitiva en la jurisdicción criminal. (C. C., septiembre 30/38. — *La Ley*, 12-429.)

227. — En la jurisdicción criminal solo puede condenarse a indemnización por daño moral causado por el delito, si en la audiencia de acusación y defensa, el particular damnificado se reservó la vía civil para las indemnizaciones inherentes al lucro cesante y al daño emergente, aún cuando en la audiencia de alegar sobre la prueba, vuelva a solicitar un resarcimiento material y moral. (C. C. C., septiembre 30/38. — *La Ley*, 12-429.)

228. — La cuestión relativa al monto de la indemnización del daño causado por el delito, en el juicio criminal, debe ser formulada por el querellante en su oportunidad legal, de modo que la defensa pueda conocerla y contestarla, es decir, que haya sido o podido ser objeto de juicio y discusión entre las partes, para que el juzgado esté obligado a decidir al respecto. (C. C. C., junio 10/1938. — *La Ley*, 11-446.)

229. — Cuando la justicia del crimen ha resuelto, a petición de parte, sobre la indemnización de los daños morales y materiales causados por el delito, su pronunciamiento hace cosa juzgada, no pudiendo la víctima pretender que se le de otra indemnización porque aquella no la estima justa. (Cám. 2ª La Plata, Sala 1ª, junio 11/37. — *La Ley*, 9-637.)

230. — Es facultativo de los interesados requerir que el juez del crimen fije el resarcimiento del daño causado por el delito o acudir a ese efecto a la jurisdicción civil. (Cám. Civil 1ª de la Capital, septiembre 28/37. — *J. A.*, 59-862.)

231. — No corresponde pronunciamiento sobre indemnización civil por el delito, si ésta no fué pedida por la querrela en la oportu-



tunidad de la acusación. (*Sup. Corte de Tucumán*, mayo 9/36. — *J. A.*, 55-358.)

232. — No corresponde pronunciamiento sobre indemnización civil por el delito, si esta no fué pedida por la querella en la oportunidad de la acusación. *ASup. Corte de Tucumán*, mayo 9/36. — *J. A.*, 55-358.)

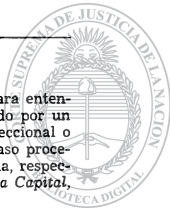
233. — Si el querellante solicitó oportunamente el resarcimiento del daño moral, no es un obstáculo a su fijación, la circunstancia de que aquel lo estimara en una suma ínfima, lo que solo puede interpretarse como que no quiere, en realidad, sino la sanción moral. (*C. C. C.*, marzo 12/35. — *Fallos*, 2-16.)

234. — El pronunciamiento sobre daño civil debe ser solicitado en la querella de acusación. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 9/36. — *J. A.*, 55-358.)

235. — La reparación del daño moral y material en los delitos de acción privada, debe ser reclamada en el escrito de querella o en el de su ampliación. Si se la pide con posterioridad a esas oportunidades, aún antes de la sentencia, procede su rechazo por no haber sido objeto del juicio. (*C. C. C.*, octubre 19/33. — *Fallos*, 2-14.)

236. — Si el querellante solicitó la indemnización del daño y el juez condenó a su pago, pero omitió fijar su monto, la sentencia es nula. (*C. C. C.*, diciembre 15/31. — *Fallos*, 2-159.)

237. — De los antecedentes del art. 29 y de su texto se desprende: Que ejercida la acción civil, es obligatorio imponer indemnización, cuando el delito, aunque fuese culposo, cause un daño, por acordarse a la reparación una función pública; que esa reparación comprende, sin distinciones, el agravio material y moral; que zanjando las dificultades para la graduación de ese daño, él debe ser prudencialmente fijado por el juez en defecto de plena prueba. (*C. Apel. Rosario*, mayo 24/35. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-85.)



238. — El juez de lo civil solo estaría inhabilitado para entender en una demanda por indemnización del daño causado por un delito, si se hubiera reclamado aquella ante el juez correccional o del crimen, o este la hubiera fijado de oficio, en cuyo caso procederían las excepciones de “litis pendencia” o cosa juzgada, respectivamente y no la de incompetencia. (Cám. Civil 1° de la Capital, julio 20/28. — J. A., 27-1170.)

239. — El titular de la acción penal puede demandar juntamente con la pena, el resarcimiento de los daños que haya sufrido por el delito. (C. C. C., mayo 21/26. — J. A., 20-491.)

240. — No pudiendo el Poder Judicial suplir la falta de leyes procesales apropiadas al C. Penal, solo cabe admitir la acción civil, cuando es ejercida por los que pueden asumir el rol de querellantes. (C. C. C., mayo 21/26. — J. A., 20-491.)

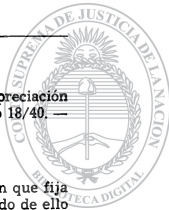
241. — No procede la condena al resarcimiento del daño en el juicio criminal, si no se ha ejercido acción a su respecto. (C. C. C., diciembre 26/23. — J. A., 11-1382.)

INDEMNIZACION FIJADA DE OFICIO

242. — No corresponde al juez en lo penal fijar de oficio el monto de los daños causados por el delito. (C. de Ap. Com. y Crim. Mendoza, mayo 22/41. — *La Ley*, 22-859.)

243. — El artículo 29 del C. P. autoriza al juez a fijar de oficio, la indemnización del daño moral y material causado a la víctima del delito (Doctrina de 1° instancia). (Cám. Apel. de Rosario, Sala Crim., mayo 20/40. — *La Ley*, 18-1032.)

244. — La condena en el juicio criminal a la indemnización del daño, no puede anular el derecho del damnificado a entablar el juicio civil, porque ha sido dictado sin su reclamación y sin que



haya podido rendir prueba a los efectos de la debida apreciación del daño a reparar. (Cám. 2° Apel. La Plata, Sala 1°, julio 18/40. — *La Ley*, 20-947.)

245. — Si bien el pronunciamiento del juez del crimen que fija una indemnización puede obligar al acusado que, notificado de ello la ha consentido, no puede coartar el derecho del damnificado a demandar a tercera persona, ajena a la responsabilidad penal y de demostrar en juicio civil cuál es la magnitud del daño que se le ha ocasionado para requerir la justa indemnización. (Cám. 2° Apel. La Plata, Sala 1°, julio 18/40. — *La Ley*, 20-947.)

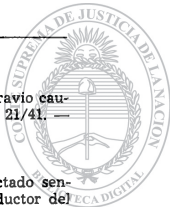
246. — No corresponde ordenar de oficio la indemnización del daño causado por el delito. Solo cuando en la estación oportuna del juicio ha sido solicitada por el damnificado, puede el juez condenar al pago de la misma. (C. C. C., mayo 21/37. — *J. A.*, 58-615.)

247. — La fijación de oficio, del daño causado por el delito, contraría principios de orden público relativos a la defensa en juicio; en cuanto al procesado, porque se le priva de hacer valer su derecho, tanto en lo que respecta a la procedencia de la indemnización, como a su monto; y en cuanto al damnificado, porque se le impone una decisión que no solicitó y porque mediante demanda formal, podría quizá obtener en otra jurisdicción una reparación acorde con el daño que acredite, bajo el control del condenado, quien podría también defenderse. (C. C. C., mayo 21/37. — *J. A.*, 58-615.)

248. — Es facultativo del juez del crimen el fijar o no de oficio, en la sentencia, la indemnización del daño causado por el delito, a menos que medie requerimiento de parte, en cuyo caso está obligado a hacerlo. (C. Civil 1° de la Capital, junio 20/28. — *J. A.*, 27-1169.)

DAÑO MORAL

249. — La indemnización del daño moral no tiene el carácter



de una pena, sino el de una satisfacción debida por el agravio causado. (C. Segunda de Apel. en lo Crim. Córdoba, mayo 21/41. — La Ley, 22-997.)

250. — El daño moral es indemnizable si se ha dictado sentencia condenatoria en el juicio criminal contra el conductor del vehículo causante del hecho. (C. Segunda de Apel. en lo Crim. de Córdoba, mayo 21/41. — La Ley, 22-997.)

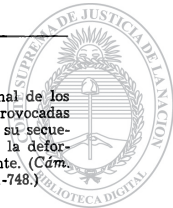
251. — El civilmente responsable está obligado a indemnizar el daño moral causado por el delito cometido por su dependiente, siempre que esté obligado a satisfacer el daño material. (C. Apel. Segunda en lo Crim. de Córdoba, mayo 21/41. — La Ley, 22-997.)

252. — Cuando el querellante limita expresamente su reclamo a la indemnización del daño moral, es insanablemente nula la sentencia que fija una suma de dinero en concepto de reparación de todo daño, por cuanto se omite el pronunciamiento expreso sobre el daño moral que es lo único que se ha requerido, y se decide sobre el daño material que no ha sido reclamado. Con lo que se viola el art. 29 del C. P. y se incurre en la nulidad del art. 509 del C. de Pr. Cr. (C. C. C., octubre 29/40. — Rep. Jurid., 2-746.)

253. — Es un delito del derecho criminal el delito culposo, cuyo resultado deriva de imprudencia, negligencia o impericia, en oposición al delito civil, que consiste en el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar. Y en el caso del cuasi delito civil, debe indemnizarse el daño moral, en cuanto aquel es delito contemplado también en la ley penal, desde que no se excluye la aplicación del art. 1078, a los hechos ilícitos que fueran también delitos del derecho criminal. (C. 2ª de Ap. de La Plata, junio 18/40. — Rep. Jurid., 3-966.)

254. — El daño moral es indemnizable, aún tratándose de cuasi delitos (en el caso, se trata de lesiones por imprudencia). (Cám. Civil Primera de la Capital, febrero 18/41. — La Ley, 21-651.)

255. — El daño moral puede consistir en la molestia que el



accidente de tránsito ha causado en la seguridad personal de los afectados y en la lesión de sus legítimas afecciones, provocadas por las consecuencias físicas inmediatas del accidente y su secuela respecto de la esposa e hijo del actor que presentan la deformación de una rótula y una cicatriz frontal, respectivamente. (Cám. Civil Primera de la Capital, febrero 21/41. — *La Ley*, 21-748.)

256. — El daño moral no es indemnizable si no hay delito del derecho criminal. (Cámara Civil Primera de la Capital, diciembre 26/40. — *La Ley*, 21-418.)

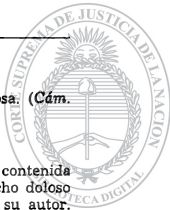
257. — Es indemnizable el daño moral emergente de los delitos de calumnia e injurias (el Dr. Fernández Valdez vota en disidencia, sosteniendo que no corresponde la indemnización en tal concepto, atento lo dispuesto por el artículo 1089 del C. Civil). (Doctrina de la Cámara Crim. de Córdoba, Corte Suprema, diciembre 11/40. — *La Ley*, 21-875.)

258. — La condenación dictada en el fuero criminal contra el conductor del automóvil causante del hecho, impide alegar en el juicio civil la irresponsabilidad del culpable, pero no la concurrencia de culpa a los efectos de graduar el importe de los daños y perjuicios. (Cámara Civil Segunda de la Capital, diciembre 30/40. — *La Ley*, 21-6.)

259. — La víctima del accidente de tránsito debe ser resarcida de acuerdo a la gravedad y extensión del daño, contemplando todas las circunstancias perjudiciales del hecho, inclusive el daño moral. Si hay culpa concurrente, corresponde determinar proporcionalmente, de acuerdo a las respectivas culpas, el monto de la indemnización. (Cám. Apel. de Rosario, noviembre 19/40. — *La Ley*, 20-850.)

260. — La indemnización del agravio moral, procede también aunque se trate de daños causados por cosas inanimadas, pues

Código Civil: Art. 1078. — Si el hecho fuese un delito de derecho criminal, la obligación que de él nace, no sólo comprende la indemnización de pérdidas e intereses, sino también del agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir a la persona, molestándole en su seguridad personal, o en el goce de sus bienes, o hirviendo sus afecciones legítimas.



siempre hay un hecho ilícito imputable al dueño de la cosa. (Cám. Civil 1° de la Capital, octubre 30/40. — *La Ley*, 20-829.)

261. — La expresión “delito del derecho criminal” contenida en el artículo 1078 del Código Civil, abarca tanto el hecho doloso cuanto a los que obedezcan a culpa o imprudencia de su autor. (Sup. Corte de Bs. As., septiembre 3/40. — *La Ley*, 20-336.)

262. — La calificación hecha en el fuero criminal a los fines de declarar prescripta la acción penal, basta para tener por definitivamente establecida la existencia de un delito del derecho criminal, en los términos del artículo 1078 del Código Civil, a los efectos de la indemnización del daño moral. (Sup. Corte de Bs. As., septiembre 3/40. — *La Ley*, 20-336.)

263. — El resarcimiento del daño moral es procedente cuando se trata de un delito del derecho criminal y ha de considerarse así, toda infracción, (delitos culposos en el caso), definida y castigada por la ley penal. (Cám. 2° de Apel. de La Plata, Sala 1°, junio 18/40. — *La Ley*, 20-947.)

264. — El daño moral no es indemnizable si la causa criminal fué sobreseída por prescripción. (Sup. Trib. de Santa Fe, Sala 2°, mayo 7/40. — *La Ley*, 18-872.)

265. — La obligación de resarcir el daño moral, solo existe en el caso de delitos del derecho criminal. (Cám. Fed. de Mendoza, abril 5/40. — *La Ley*, 18-839.)

266. — El daño moral es indemnizable solo cuando existe delito del derecho criminal. (Cám. Civil 1° de la Capital, marzo 27/40. — *J. A.*, 69-912.)

267. — La indemnización del daño moral no constituye una pena, sino una parte de la reparación, por lo que también, a su respecto, funciona la responsabilidad refleja del patrón, estableci-



da en el artículo 1113 del Código Civil. (*Cám. Apel. de Rosario*, junio 16/39. — *J. A.*, 69-901.)

268. — El daño moral sólo es indemnizable en los delitos del derecho criminal; pero la circunstancia de que no haya mediado condena en el proceso instruido con motivo de un accidente de tránsito, por haberse operado la prescripción de la acción penal, no impide que en la jurisdicción civil se califique el hecho a fin de resolver si corresponde la reparación del daño moral. (*Cám. Apel. de Rosario*, junio 16/39. — *J. A.*, 69-901.)

269. — La obligación de resarcir el daño moral por un accidente de tránsito, pesa por igual sobre el condenado, como sobre la persona en quien recae civilmente la responsabilidad indirecta, dado su carácter de propietario del vehículo. (*Cám. Apel. de Rosario, Sala 3ª*, diciembre 7/39. — *La Ley*, 16-1088.)

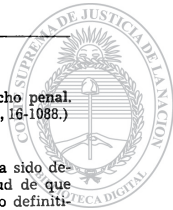
270. — El daño moral no es indemnizable en la jurisdicción civil, si se ha declarado prescripta la acción nacida del delito criminal. (*Cám. Apel. La Plata, Sala 1ª*, julio 21/39. — *La Ley*, 15-948.)

271. — El daño moral no es indemnizable en los cuasi delitos; la indemnización en ese concepto sólo se concede en los delitos del derecho criminal. (*Cám. de Paz Letrada, Sala 3ª*, mayo 17/39. — *La Ley*, 15-30.)

272. — Los hechos que motivan una condena criminal por delitos culposos, solo son cuasi delitos para la ley civil, por faltar en el autor la intención dolosa que los caracteriza. (*Cám. Civil 2ª de la Capital*, diciembre 2/38. — *La Ley*, 13-377.)

273. — El daño moral no es indemnizable en la jurisdicción civil si no ha sido reclamado en la demanda. (*Cám. Civil 2ª de la Capital*, diciembre 2/38. — *La Ley*, 13-377.)

274. — Es indemnizable el daño moral, en el caso de los cuasi



delitos que a la vez importan delitos culposos del derecho penal. (Cám. Apel. de Rosario, Sala 2°, diciembre 7/39. — *La Ley*, 16-1088.)

275. — La circunstancia de que la acusación no haya sido declarada calumniosa en la jurisdicción criminal, en virtud de que el asunto no pasara a plenario, recayendo sobreseimiento definitivo, no puede beneficiar al acusador privando al damnificado del derecho a la indemnización al daño moral. (Cám. Civil 2° de la Capital, septiembre 28/39. — *La Ley*, 16-250.)

276. — Es indemnizable el daño moral, si el conductor del vehículo causante del accidente fué condenado en la jurisdicción criminal. (Cám. Civil 1° de la Capital, mayo 11/38. — *La Ley*, 10-692. *Id.*, diciembre 14/37. — *La Ley*, 9-45. Cám. Civil Cap., noviembre 28/39. — *La Ley*, 16-857. Cám. 2° Apel. La Plata, Sala 1°, julio 21/39. — *La Ley*, 15-948.)

277. — Es indemnizable el daño moral, si el conductor del automóvil del demandado, causante del accidente de tránsito, que motiva la demanda, ha sido condenado por delito por imprudencia. (Cám. Civil 2° de la Capital, diciembre 21/38. — *La Ley*, 13-20. — *Id.*, junio 27/39. — *La Ley*, 15-235.)

278. — La Ley 11723, excluye la aplicación de las disposiciones de los artículos 1101, 1102 y 1103 del Código Civil al establecer que la condenación o absolución en lo criminal no hará prueba en lo civil, pero no modifica la disposición del artículo 1078 del código citado sobre daño moral. (Cám. Civil Primera de la Cap., mayo 19/39. — *La Ley*, 16-532.)

279. — La obligación de reparar el daño moral que establece el artículo 1078 del Código Civil para los hechos que constituyen delitos del derecho criminal, debe entenderse, —por estar situado el artículo en el capítulo de los delitos del derecho civil—, siempre que el hecho constituya a su vez un delito de esa naturaleza, o sea según lo define el artículo 1072: “un acto ilícito, ejecutado a sabiendas y con la intención de dañar”. (Cám. Civil 2° de la Capital, diciembre 2/38. — *La Ley*, 13-377.)



280. — La indemnización del perjuicio causado por el delito comprende siempre, no solo la reparación civil y material del daño, sino también la del agravio moral, traducida en una reparación pecuniaria. (C. C. C., abril 1/38. — *La Ley*, 10-119.)

281. — Ni el artículo 1113 del Código Civil que establece la responsabilidad por el hecho de otro, ni el 1122 que da acción para reclamar directamente de los primeros la reparación del perjuicio, han hecho salvedad o excepción alguna respecto del daño moral que en definitiva y en los casos autorizados por la ley, forma parte integrante de aquellos. (*Corte Sup.*, septiembre 25/39. — *La Ley*, 16-550.)

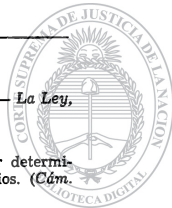
282. — Es indemnizable el daño moral en los delitos de homicidio y de lesiones por imprudencia. (*Cám. Civil 2° de la Capital*, diciembre 2/38. — *La Ley*, 13-377.)

283. — Es indemnizable el daño moral si el conductor del vehículo causante del accidente, ha sido condenado a la pena de multa por la justicia correccional. (*Cám. Civil 2° de la Cap.*, abril 8/38. — *La Ley*, 10-354.)

284. — Es indemnizable el daño moral causado por una acusación criminal, desestimada mediante sobreseimiento provisional, que había sido formulada por el gerente de la demandada, incurriendo en culpa o negligencia al hacerlo. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, septiembre 7/38. — *La Ley*, 11-1190.)

285. — El monto de la reparación del agravio moral debe fijarse teniendo en cuenta que la actora y la víctima del accidente llevaban muchos años de matrimonio, y que no tenían hijos, lo que hace que el desconsuelo por la pérdida sufrida, se presume más intenso. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, diciembre 14/37. — *La Ley*, 9-45.)

286. — Los sufrimientos físicos forman parte del daño moral; por lo tanto si la actora ha renunciado expresamente al daño moral, no cabe tenerlos en cuenta para la fijación del monto del resar-



cimiento. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, agosto 25/37. — *La Ley*, 9-551.)

287. — La indemnización del daño moral debe ser determinada según la condición de los que soportan los perjuicios. (*Cám. Civil 2° de la Capital*, abril 8/38. — *La Ley*, 10-354.)

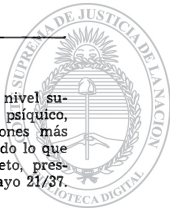
288. — La naturaleza de las lesiones por imprudencia, excluye toda indemnización por daño moral, aún cuando proceda reparar pecuniariamente los perjuicios materiales sufridos por la víctima. (*Cám. Fed. La Plata*, junio 25/37. — *J. A.*, 58-777.)

289. — La indemnización del daño causado por el delito establecida imperativamente por el artículo 1077 del Código Civil como una norma necesaria para reparar en lo posible el quebrantamiento de la armonía jurídica, comprende no sólo la reparación civil o material del daño, sino también el agravio moral irrogado por el acto ilícito, apreciado en lo que pudiera afectar la seguridad personal, el goce de los bienes o las afecciones legítimas del damnificado. (*C. C. C.*, mayo 12/37. — *J. A.*, 58-606.)

290. — La reparación del daño causado por el delito del artículo 302 del C. P., no puede traducirse en la restitución del importe del cheque doloso, pues se trata de un delito contra la fe pública y no contra la propiedad; consiste en las pérdidas e intereses y en el agravio moral, cuyo importe a falta de plena prueba, debe fijarse prudencialmente en la sentencia (en este caso, el cheque era por \$ 900.— y la indemnización moral se fijó en pesos 200.—). (*C. C. C.*, mayo 12/37. — *J. A.*, 58-606.)

291. — La circunstancia de que el conductor del vehículo causante del accidente, haya sido condenado como autor de homicidio por imprudencia, hace aplicable el principio de la reparación del daño moral. (*C. C. C.*, mayo 21/37. — *J. A.*, 58-532.)

292. — No puede sostenerse que para que el daño moral sea indemnizable deba producir una repercusión económica. No obstante las dificultades para fijar la cuantía pecuniaria, la ley no se re-



fiere a las circunstancias patrimoniales; se coloca en un nivel superior y lo aprecia desde un punto de vista puramente psíquico, al considerar como daño moral el ataque a las afecciones más íntimas, a las facultades y afecciones personales, o sea todo lo que importe un agravio o conmoción en el espíritu del sujeto, prescindiendo de sus bienes. (*Cám. Civil 2° de la Capital*, mayo 21/37. — *J. A.*, 58-532.)

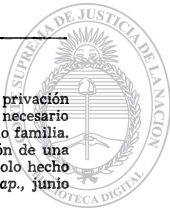
293. — Si el conductor del vehículo causante del accidente, fué condenado como autor de homicidio por imprudencia, procede responsabilizar al propietario del automóvil, patrón del conductor, por la indemnización del daño moral, pues la responsabilidad del comitente, deriva de la imprudencia y no del dolo criminal del conductor, aunque aparezca agravada por haber éste incurrido en un delito del derecho criminal. (*Cám. Civil 2° de la Cap.*, mayo 31/1937. — *J. A.*, 58-532.)

294. — Las demandadas, una empresa de ómnibus y una cervecería, cuyos vehículos tuvieron una colisión a causa de la cual, falleció el guarda del ómnibus, condenándose criminalmente a ambos conductores como homicidas por imprudencia, deben pagar a la actora, madre del guarda, la cantidad de pesos 2.000 a título de daño moral, teniendo en cuenta el dolor y la conmoción que origina la muerte violenta de un hijo. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, septiembre 21/37. — *J. A.*, 59-851.)

295. — Procede la indemnización del daño moral causado a la esposa de la víctima del accidente de tránsito, si el demandado fué condenado por la justicia del crimen por homicidio culposo. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, abril 27/36. — *J. A.*, 55-216.)

296. — Procede la indemnización del daño moral sufrido por la víctima de un accidente de tránsito, si el conductor del vehículo que la embistió, ha sido condenado en el fuero criminal. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, octubre 29/36. — *J. A.*, 56-201.)

297. — Procede la indemnización del daño moral, no solo respecto de los delitos sino también respecto de los cuasi delitos. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, octubre 29/36. — *J. A.*, 56-201.)



298. — Para establecer si la víctima del delito de privación indebida de libertad ha experimentado daño moral, no es necesario distinguir si la persona es soltera o casada, ni si tiene o no familia. Esos extremos solo pueden agravar el daño, pero la lesión de una de las afecciones más íntimas del hombre, existe por el solo hecho de no poder obrar con libertad. (*Cám. Civil 2° de la Cap.*, junio 8/36. — *J. A.* 54-830.)

299. — Debe estimarse en \$ 500.— el daño moral causado por el delito de privación indebida de la libertad originado por un arresto aplicado como medida disciplinaria por un juez de paz sin ajustarse a la ley; delito que fué objeto de una condena en lo criminal, si la detención duró sólo dos días, fué cumplida en la oficina de guardia de investigaciones y no en pabellones destinados a otra clase de detenidos y cuando el hecho no trascendió al círculo de las amistades del detenido, ni le impidió desempeñar altos cargos administrativos que le fueron ofrecidos con posterioridad. (*Cám. Civil 2° de la Capital*, junio 8/36. — *J. A.*, 54-830.)

300. — 1°) Para fijar el monto de la indemnización por daño moral debe tenerse presente que este no es un perjuicio que daña al individuo en su patrimonio ni en su cuerpo y que por lo tanto no puede ser fuente de un beneficio inesperado, ni de un enriquecimiento injusto. 2°) Igual concepto debe aplicarse para fijar el monto de la indemnización por daño moral, en los casos de desacato contra funcionarios públicos, cuando la injuria no ha sido publicada ni ha tenido mayor difusión, ni aparece peligro de mayor descrédito para el funcionario desacatado, ni le ha producido molestias en el desempeño de sus funciones que lo hayan afectado moralmente. (*C. C. C.*, septiembre 15/35. — *Fallos*, 2-17.)

301. — Si el juicio tenía por objeto la indemnización de los daños y perjuicios causados por un delito, no puede condenarse al demandado, a falta de prueba de aquellos, a la indemnización del daño moral. (*Cám. Com. de la Cap.*, mayo 9/28. — *J. A.*, 27-810.)

ACCION CRIMINAL ANTERIOR O CONTEMPORANEA A LA CIVIL (1)

BIBLIOGRAFIA

MIGUEL AVALLE, *Ejercicio conjunto de la acción civil con el de la penal correlativa ante la jurisdicción criminal.* (*J. A.*, 17-21.) — E. DÍAZ

DE GULJARRO, *Facultades del juez del crimen para determinar la reparación civil por los daños causados por el delito.* (J. A., 27-1169.)

JURISPRUDENCIA

302. — Existen cuasi delitos civiles que son delitos del derecho criminal. Cuando en estos casos, se trata de hacer efectiva la responsabilidad civil, independientemente de la criminal, tanto la acción como la prescripción aplicable deben apreciarse conforme a las reglas del derecho civil que es el que legisla sobre la responsabilidad civil cuando las personas dañadas no han sometido el asunto a la jurisdicción penal que entendió en la fase criminal del hecho. (C. Civil 2° de la Cap., abril 17/41. — *Rep. Jurid.*, 4-1676.)

303. — El artículo 1101 del Código Civil no impide la iniciación del juicio civil, sino únicamente, que recaiga condena en el juicio civil, antes de que sea condenado el acusado en el juicio criminal. (Cám. Civil 2° de la Cap., agosto 3/39. — *La Ley*, 15-788.)

304. — Para la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por actos ilícitos, no se requiere calificación especial previa del hecho que motivó la acción, aunque no medie delito criminal, pues el artículo 1101 del Código Civil, es aplicable a todos los supuestos y la ilicitud no nace de la sentencia sino del acto mismo. (Cám. Fed. de Mendoza, agosto 9/39. — *La Ley*, 15-1137.)

305. — El artículo 1101 del C. Civil que subordina la condena en el juicio civil a la sentencia recaída en el juicio criminal, sólo rige para las acciones de indemnización de daños causados por delitos. (Cám. Civil Primera de la Cap., octubre 18/35. — *J. A.*, 53-85.)

306. — La querella por falso testimonio, en cumplimiento de los deberes de funcionario público, no paraliza el curso de la acción civil por nulidad de matrimonio. (Cám. Civil Primera de la Cap., noviembre 27/39. — *La Ley*, 16-1002.)

(1) Art. 1101 del Código Civil: "Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente esta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos siguientes: 1º) Si hubiere fallecido el acusado antes de ser juzgada la acción criminal, en cuyo caso la acción civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos herederos; 2º) En caso de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede ser intentada o continuada".



INFLUENCIA DE LA ABSOLUCION CRIMINAL EN EL JUICIO CIVIL (1)

BIBLIOGRAFIA

AGUSTÍN TABOADA, *Influencia de la sentencia absolutoria sobre la acción civil.* (J. A., 31-431.) — DÍAZ ALBERTO M., *El proceso y la cosa juzgada en lo criminal en sus relaciones con la acción civil.* (J. A., 53-459.) — *Ver sentencia del juez Dr. Cermesoni (estudio de los arts. 1102 y 1103 del C. Civil en J. A., 56-580.*

JURISPRUDENCIA

307. — Negada la existencia de culpa en la causa criminal, no cabe detenerse a examinar nuevamente el hecho y las circunstancias en que se produjo: la culpa penal y la civil tienen iguales grados y dan margen a una apreciación de idéntica intensidad. (Cám. de Apel. de Rosario, junio 6/41. — *Rep. Jurid.* 5-1737.)

308. — Lo único que no se puede alegar en el juicio civil después de la absolución en el criminal, es el hecho principal, sobre el cual hubiere recaído ésta. (Cám. 2ª Apel. La Plata, Sala Primera, abril 5/40. — *La Ley*, 18-1076.)

309. — Cuando no se reclama ninguna indemnización por un hecho delictuoso, ni las consecuencias civiles por culpa o negligencia, la absolución criminal, no hace cosa juzgada para volver sobre su otro aspecto, la reparación pecuniaria a tenor del artículo 1109 del Código Civil. (Cám. Fed. La Plata, junio 16/39. — *La Ley*, 17-302.)

310. — Cuando el artículo 29 del código penal faculta a los jueces del crimen para ordenar la indemnización del daño material y moral, lo hace en la hipótesis de sentencia condenatoria; cuando la sentencia es absolutoria, la justicia civil recobra toda la plenitud de jurisdicción que el Código Civil le acuerda para pronunciarse sobre la acción resarcitoria. (Cám. Civil 2ª de la Cap., junio 30/39. — *La Ley*, 15-202.)

311. — La absolución en el juicio criminal no es obstáculo

(1) Código Civil, artículo 1103. — "Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución".



para que la víctima reclame en el juicio civil, la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un cuasi delito, dado que sin existir delito o negligencia susceptible de fundar una condena criminal, puede mediar responsabilidad civil. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, septiembre 16/36. — *J. A.*, 57-118.)

312. — La absolución en el juicio criminal, no obsta para que en el juicio civil se decida si el hecho o la omisión comprobada, constituye o no un delito civil o cuasi-delito. (*Cám. Fed. de la Cap.*, agosto 28/36. — *J. A.*, 55-445.)

313. — La sentencia penal hace cosa juzgada en el juicio civil sobre la subsistencia o insubsistencia del hecho admitido o rechazado, sólo cuando sobre tal hecho se haya decidido en términos precisos e incontrovertibles. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, junio 30/38. — *La Ley*, 11-125.)

314. — La jurisprudencia que ha declarado que la absolución en el proceso por lesiones culposas hace cosa juzgada a los efectos de la acción civil por indemnización del daño causado, se funda en que esta figura delictual requiere para su subsistencia, los mismos hechos que deben concurrir para que sea viable la obligación civil emergente del hecho ilícito. No puede pues, extenderse su aplicación a otras medidas delictuosas u otros supuestos en que, el concepto de delito o cuasi delito civil, no concuerda con el de delito de fuero criminal. (*Cám. Apel. Civil y Minas de Mendoza*, noviembre 14/38. — *La Ley*, 12-1041.)

315. — La absolución en la querrela por calumnias seguida contra los firmantes de los escritos presentados en el juicio por responsabilidad profesional, seguido contra el querrellante, ante la justicia civil, no hace cosa juzgada a los efectos de este último juicio, si se limita a declarar que las imputaciones emitidas en dichos escritos, constituyen diferentes modos de apreciación de hechos ciertos que constan en un expediente judicial y que implican una argumentación hecha "animus defendendi". (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, junio 30/38. — *La Ley*, 11-125.)

316. — La resolución de la Cámara en lo Criminal, que al ab-



solver al acusado por considerar que no existía delito revocó la del inferior que condenaba al pago del daño material y moral causado a la víctima, no hace cosa juzgada a los efectos del juicio civil en lo que se refiere a la existencia o no de perjuicios indemnizables. (*Cámara Civil 2ª de la Capital*, septiembre 5/39. (*La Ley*, 15-1089.)

317. — No es aplicable el art. 1103 del Código Civil en el juicio de indemnización de daños y perjuicios, si lo declarado en el auto de sobreseimiento dictado en el expediente criminal, es que en el accidente ferroviario que determinó la muerte de la víctima no ha mediado la comisión de un delito. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, agosto 31/37. — *La Ley*, 10-247.)

318. — La absolución emanada de la justicia del crimen respecto al procesado, por falsedad de un documento, pronunciada a mérito de falta de prueba de la imputación de falsedad, hace cosa juzgada en el fuero mercantil donde se articula la tacha de falsedad para tratar de invalidar la fuerza probatoria del documento. (*Cám. Com. Cap.*, noviembre 16/36. — *J. A.*, 56-580.)

319. — La excepción de cosa juzgada puede fundarse en la sentencia criminal recaída en el plenario, absolviendo por falta de prueba al procesado que posteriormente es demandado ante la justicia civil en base a los mismos hechos considerados en la causa criminal. (*Cám. Civil Primera de la Cap.*, febrero 25/37. — *J. A.*, 57-436.)

320. — Si la justicia del crimen absolvió al acusado de la imputación del delito de abuso de firma en blanco, respecto del documento que motiva el juicio, hay cosa juzgada y no puede en la justicia civil alegarse la nulidad del mismo. (*Cám. 1ª de Ap. Civiles y Comer. Córdoba*, diciembre 10/35. — *J. A.*, 53-459.)

321. — La pérdida del derecho a custodiar los restos, por parte de la esposa que ha dado muerte en defensa propia a su cónyuge, no vulnera el valor de cosa juzgada de que goza el fallo criminal que la absolvió, porque la caducidad dispuesta, no implica más que condicionar el derecho que le puede asistir a los supuestos

de hechos anteriores, a que está naturalmente supeditado. (Cám. Civil Primera de la Capital, agosto 25/36. — J. A., 55-521.)

322. — Si la mujer ha sido absuelta en una causa criminal por bigamia, ella puede oponer la excepción de cosa juzgada contra una demanda por nulidad de matrimonio, fundada en la subsistencia de un matrimonio anterior. (Cám. Civil Urimer de la Cap., febrero 25/37. — J. A., 57-436.)

323. — La sentencia criminal absolutoria, fundada en la falta de prueba de que el imputado haya sido el que dirigía el vehículo que embistió a la víctima del accidente de tránsito, hace cosa juzgada respecto a la acción civil por reparación del daño. (Cám. Civil Primera de la Cap., noviembre 5/36. — J. A., 56-453.)

INFLUENCIA DEL SOBRESEIMIENTO CRIMINAL EN LO CIVIL

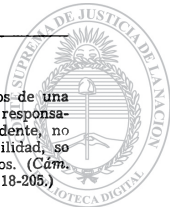
BIBLIOGRAFIA

A. TUOZZI, *Influencia del sobreseimiento definitivo en el juicio criminal, sobre la acción civil por daños y perjuicios.* (J. A., 54-803.) — MIGUEL AVALLI, *El sobreseimiento definitivo en el juicio criminal no impide que el Tribunal Civil se pronuncie sobre la responsabilidad del demandado.* (J. A., 14-160.)

JURISPRUDENCIA

324. — El sobreseimiento cuenta como la absolución a los fines del art. 1103 del Código Civil, porque también cierra de manera definitiva el proceso, después de reunido todo el material probatorio vinculado al hecho que lo ha originado. (C. Apel. Rosario, junio 6/41. — La Ley, 22-994.)

325. — No establecida culpa alguna en la causa criminal que terminó por sobreseimiento del conductor del vehículo, que produjo el accidente, es improcedente la invocación de culpa en el juicio civil, pues tanto aquella como esta tienen iguales grados y dan margen a una apreciación idéntica de intensidad. (C. Apel. Rosario, junio 6/41. — La Ley, 22-994.)



326. — El sobreseimiento definitivo, tiene los efectos de una sentencia absolutoria y pone fin a la discusión sobre la responsabilidad del conductor del automóvil causante del accidente, no siendo posible reabrir la causa respecto a su imputabilidad, so pretexto de tratarse de una acción de daños y perjuicios. (Cám. Primera Apel. La Plata, Sala 2°, marzo 26/40. — *La Ley*, 18-205.)

327. — El sobreseimiento del acusado en el juicio criminal, no es obstáculo para que la víctima reclame en juicio civil la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un cuasi delito, pues puede ocurrir que no exista delito o negligencia culpable como para dar lugar al ejercicio de la acción pública represiva, pero si existir bastante responsabilidad civil en el sujeto causante del hecho generador como para fundar una condenación sobre reparación de los consiguientes daños y perjuicios ocasionados, aún cuando la resolución del juicio criminal contenga el agregado de que el hecho se produjo por negligencia o culpa exclusiva de la víctima. (Sup. Trib. de San Luis, julio 20/40. — *Rep. Jurid.*, 4-1293.)

328. — El sobreseimiento definitivo por no haberse comprobado la responsabilidad penal del acusado ni que se condujera con imprudencia, negligencia, o con contravención con las disposiciones de tránsito, no hace cosa juzgada a los efectos de la indemnización civil del daño sufrido por la víctima. Lo único que no se puede alegar en el juicio civil después de la absolución en el criminal, es el hecho principal en el cual hubiera recaído este. (C. 2° de Ap. de La Plata, abril 5/40. — *Rep. Jurid.*, 5-1742.)

329. — El sobreseimiento definitivo por no haberse comprobado la responsabilidad penal del acusado, ni que se condujera con imprudencia, negligencia o con contravención a los reglamentos de tránsito, no hace cosa juzgada a los efectos de la acción civil por indemnización del daño sufrido por la víctima. (Cám. Apel. La Plata, Sala 1°, abril 5/40. — *La Ley*, 18-1076.)

330. — El sobreseimiento definitivo, tiene igual carácter que la sentencia absolutoria, a los efectos de la cosa juzgada en lo civil, porque también decide sobre el fondo, declara agotada la acción penal y cierra definitivamente el juicio. Ello no obsta al ejercicio



de la acción civil proveniente de responsabilidad refleja o de carácter contractual. (*Cám. Apel. de Rosario, Sala 3ª, mayo 10/40. — La Ley, 18-888.*)

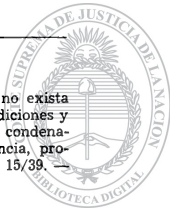
331. — El sobreseimiento provisional dictado a favor del conductor del vehículo causante del accidente, constituye una presunción contraria a la reclamación de la actora en el juicio civil por indemnización del daño causado. (*Cám. Civil Primera de la Cap., diciembre 13/39. — La Ley, 17-491.*)

332. — El sobreseimiento hace cosa juzgada en la misma medida que la sentencia de absolución, porque como ésta, decide sobre el fondo, declara agotada la acción penal y cierra definitivamente el proceso; máxime cuando se trata de una causa, en que hubo parte querellante. (*Cám. Apel. de Rosario Sala 3ª, marzo 31/39. — La Ley, 17-291.*)

333. — Las circunstancias capaces de generar culpa penal (exceso de velocidad; violación de ordenanza de tránsito y otras particularidades del hecho, que motivara el procesamiento) desechada en la jurisdicción criminal, donde recayó sobreseimiento, no pueden hacerse valer en el juicio de indemnización a fin de demostrar la culpa civil. (*Cám. Apel. de Rosario, marzo 31/39. — La Ley, 17-291.*)

334. — El sobreseimiento que establece la inexistencia de un delito culposo, esto es, la falta de culpa penal, no impide afirmar en la jurisdicción civil, la existencia de un cuasi delito y condenar a la consiguiente reparación del daño; pero el respeto a la regla del artículo 1103 del Código Civil, impone la necesidad de apreciar circunstancias en que la justicia en lo criminal lo dió por ocurrido. La culpa penal involucra la civil, pero ésta no abarca aquella. (*Cám. Apel. de Rosario, Sala 3ª, marzo 31/39. — La Ley, 17-291.*)

335. — El sobreseimiento provisional convertido en definitivo por el transcurso del tiempo necesario para la prescripción, no impide el ejercicio de la acción, civil, desde que, aparte de que el sobreseimiento no equivale a la absolución en los términos del



artículo 1103 del Código Civil, bien puede ocurrir que no exista el hecho como producido exactamente en las mismas condiciones y delito del fuero criminal como para imponer allí una condena-
ción, pero sí, que medie culpa, imprudencia o negligencia, pro-
pias del cuasi delito. (Cám. Civil 2° de la Capital, junio 15/39. —
La Ley, 15-269.)

336. — Un juicio que no llega al estado de contradicción, no
puede ejercer influencia en lo civil. (Cám. Apel. de Rosario, Sala 1°,
mayo 20/38. — *La Ley*, 10-951.)

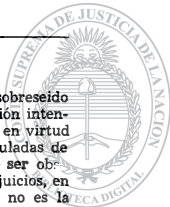
337. — El sobreseimiento definitivo, no hace cosa juzgada en
el juicio civil por indemnización de daños y perjuicios. (Cám.
Civil 2° Cap., diciembre 20/37. - *La Ley*, 9-363. — *Id.*, abril 8/38. -
La Ley, 10-272. — *Id.* agosto 3/38. - *La Ley*, 11-593. — Cám. Apel.
de Rosario, Sala 1°, mayo 20/38. - *La Ley*, 10-951. — Cám. Fed.
Bahía Blanca, agosto 31/37. - *La Ley*, 10-247.)

338. — El sobreseimiento definitivo, hace cosa juzgada. (Cám.
Apel. Civil y Minas de Mendoza, agosto 22/35. — *La Ley*, 10-312.)

339. — El sobreseimiento definitivo tratándose de la imputa-
ción de lesiones culposas, implica la declaración de que no existe
acto ilícito civil ni penal (voto del Dr. Touza). (Cám. Apel. Civil
y Minas de Mendoza, agosto 22/35. — *La Ley*, 10-313.)

340. — El sobreseimiento definitivo dictado en el proceso cri-
minal a favor del conductor del vehículo causante del accidente,
basta para declararlo exento de responsabilidad civil. (Cám. 2°
Apel. La Plata, Sala 2°, diciembre 6/37. — *La Ley*, 9-148.)

341. — El sobreseimiento definitivo dictado en el sumario cri-
minal declarando que el accidente se produjo por circunstancias
casuales, impide el ejercicio de la acción civil por indemnización
del daño sufrido por la víctima. (Cám. de Apel. Civ. y de Minas de
Mendoza, agosto 22/35. — *La Ley*, 10-312.)



342. — La circunstancia de que el demandado fuera sobreseído provisionalmente de la acusación criminal por defraudación intentada contra él y otros imputados que fueron condenados, en virtud de haber intervenido en las distintas transferencias simuladas de las mercaderías falsificadas, vendidas al actor, no puede ser óbáculo legal para reclamarle la indemnización de los perjuicios, en base a su responsabilidad civil, pues el sobreseimiento no es la absolución que prevee el artículo 1103 del Código Civil. (*Cám. Civil 2° Cap.*, diciembre 1/38. — *La Ley*, 13-723.)

343. — La prescripción de la acción penal no implica cosa juzgada en el juicio civil por indemnización. (*Cám. Apel. Rosario, Sala 3°*, junio 11/37. — *La Ley*, 10-381.)

344. — Para que actúe el artículo 1103 del Código Civil, es necesario que se trate de una sentencia absolutoria y no de un acto de sobreseimiento. (*Cám. Civil Primera Cap.*, septiembre 30/36. — *J. A.*, 57-129.)

345. — El sobreseimiento definitivo no equivale a la absolución de que habla el artículo 1103 del Código Civil. (*Justicia de Paz de la Capital*, mayo 28/37. — *J. A.*, 58-626.)

346. — El sobreseimiento del acusado en la jurisdicción criminal, no equivale a su absolución y en consecuencia, aquel no hace cosa juzgada en el juicio civil sobre su culpabilidad. (*Justicia de Paz de la Capital*, diciembre 9/37. — *J. A.*, 60-1049.)

347. — El sobreseimiento definitivo pronunciado en el juicio criminal a raíz del accidente de tránsito, no hace cosa juzgada respecto a la acción civil por indemnización del daño, aunque haya sido fundado en que el accidente es imputable exclusivamente a la víctima. El juez civil está facultado para apreciar por sí, el caso, y determinar si ha mediado o no culpa de la víctima y del autor del hecho. (*Cám. Civil 2° Cap.*, junio 1/36. — *J. A.*, 54-803.)

348. — El sobreseimiento por prescripción de la acción penal o



de la pena o por amnistía, no obsta al ejercicio de la acción civil por indemnización del daño, sin que importe lesión al principio de la cosa juzgada. (Cám. Apel. Civ. y Minas de Mendoza, agosto 22/35. — *La Ley*, 10-313.)

349. — El sobreseimiento provisional, no obsta a la iniciación del juicio civil por indemnización de daños y perjuicios. (Cám. Civil 1° Cap., febrero 24/26. — *J. A.*, 29-42.)

350. — El sobreseimiento provisional en el proceso criminal, deja el asunto en la misma situación en que se encontraba antes de ponerse en movimiento la acción penal, correspondiendo en consecuencia, dictar sentencia en el juicio civil por daños y perjuicios. (Cámaras Civiles de la Cap. en pleno, noviembre 24/24. — *J. A.*, 14-857.)

INFLUENCIA DE LA CONDENA CRIMINAL SOBRE LO CIVIL ⁽¹⁾

351. — La sentencia condenatoria en lo criminal, contra la presunta compradora, por la defraudación cometida con motivo de la venta de las propiedades, tiene importancia decisiva para la solución de este pleito por nulidad de escrituras, ya que no puede discutirse la existencia del mismo. (C. Civil Primera de la Cap., mayo 7/41. — *La Ley*, 22-983.)

352. — La condena del conductor del vehículo del demandado en la jurisdicción criminal, hace inadmisibile en el juicio civil la discusión con respecto a la responsabilidad que a este incumbe de afrontar las consecuencias originadas por el accidente. (Cám. Civil Primera de la Cap., mayo 11/38. — *La Ley*, 10-692.)

353. — La culpa del guarda del ómnibus causante del hecho, establecida en el fallo condenatorio de la justicia del crimen, no

(1) Artículo 1102 del Código Civil: "Después de la condenación del acusado en "juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho "principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado".



impide sostener que la víctima también incurrió en culpa desde el punto de vista civil. (Cám. Civil 2° de la Capital, noviembre 30/39. — *La Ley*, 16-961.)

354. — Si en el choque producido entre un automóvil y un ómnibus, los ocupantes del primero quedaron lesionados, no obstante lo cual en la justicia del crimen sólo se condenó al conductor del ómnibus, la concurrencia de culpa que se pretende en el juicio civil, debe ser descartada. (Cám. de Apel. de Rosario, diciembre 7/39. — *La Ley*, 16-1088.)

355. — Declarada en el juicio criminal la culpabilidad de los conductores de los vehículos que determinaron la muerte del hijo de la actora, no puede el demandado, dueño de uno de los vehículos, discutir su responsabilidad dentro del juicio civil por indemnización de daños y perjuicios. (Cám. Civil 2° de la Cap., agosto 6/37. — *J. A.*, 59-502.)

356. — Si bien el artículo 1102 del Código Civil no permite que en el juicio civil que persigue la indemnización por la muerte de la víctima del accidente de tránsito, se desconozca la existencia del hecho y la culpabilidad del conductor que fué condenado por la justicia del crimen, lo que implica que al respecto existe cosa juzgada, ello no obsta para que la justicia civil examine la causa a fin de establecer si en el hecho medió culpa concurrente. (Cám. Civil Primera de la Cap., mayo 17/37. — *J. A.*, 58-435.)

357. — Si no se ha dictado sentencia condenatoria, no procede ordenar la reparación del perjuicio ocasionado por el delito. (C. C., noviembre 7/33. — *Fallos*, 2-346.)

358. — El Código Penal al legislar sobre la acción civil de daños y perjuicios emergentes del delito, se refiere únicamente al caso en que se pronuncie sentencia condenatoria. (C. C. C., marzo 16/26. — *J. A.*, 29-557.)

EFFECTOS DE LA CONDENA CRIMINAL SOBRE LOS TERCEROS RESPONSABLES

BIBLIOGRAFIA

ALBERTO G. SPOTA, *La presunción de responsabilidad que pesa sobre*

el dueño de la cosa inanimada según el art. 1113 del C. Civil. (La Ley, 15-50. — ALBERTO G. SPOTA, *Distinción entre los daños causados por o con la cosa.* (La Ley, 14-913.)

JURISPRUDENCIA

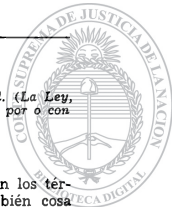
359. — Para los terceros civilmente responsables, en los términos de los arts. 1113 y sgts. del C. Civil, hace también cosa juzgada en lo civil la absolución o condena dictada en la jurisdicción penal. No obstante, puede alegar, siempre que no hubieran intervenido en el proceso, todas aquellas circunstancias que hagan improcedentes, extingan o limiten la responsabilidad indirecta que se les imputa. (C. Civil 2ª de la Cap., junio 24/41. — Rep. Jurid. 5-1863.)

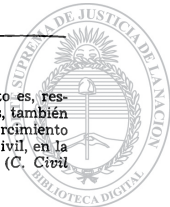
360. — La responsabilidad civil indirecta, no puede juzgarse por el juez del crimen, que solo tiene jurisdicción para pronunciarse acerca de la responsabilidad penal del autor o autores del hecho inculminado, pero no de un tercero a quien ninguna participación se atribuye en aquel, pues para que el juez en lo criminal pueda ordenar la reparación civil, es menester que haya condena de carácter penal. (C. Civil 2ª de la Cap., junio 24/41. — Rep. Jurid., 5-1863.)

361. — El damnificado, si pretende ser resarcido por un tercero civilmente responsable, debe iniciar el juicio civil correspondiente y no puede reclamar en él mayor indemnización que la fijada en la sentencia criminal. El demandado, puede negar su responsabilidad indirecta, la existencia de los perjuicios y hasta la del monto establecido. (C. Civil 2ª de la Cap., junio 24/41. — Rep. Jurid., 5-1863.)

362. — Cuando el daño proviene de cosas inanimadas, no hay posibilidad de invocación de los arts. 1102 y 1103 del C. Civil, porque las cosas que ocasionan el daño no pueden ser sujeto de derecho para el juez del crimen. La situación prevista en el art. 1113 es de otra índole. Es mucho más lata. Al imponer la responsabilidad patronal por el daño causado por las cosas de que uno se sirve o tiene a su cuidado, extiende el concepto de la culpa, a campos ajenos a la jurisdicción penal. (C. de Ap. en lo Civil y Minas de Mendoza, octubre 22/40. — Rep. Jurid., 2-818.)

363. — Cuando la responsabilidad por los daños y perjuicios





encuadra en el caso del art. 1133 inc. 7° del C. Civil, esto es, responsabilidad por daños causados por las cosas inanimadas, también procede la reparación del agravio moral. Procede el resarcimiento por daño moral desde que él surge de la doctrina del C. Civil, en la consideración armónica de los arts. 1068, 1078 y 1109. (C. Civil 1° de la Cap., octubre 30/40. — *Rep. Jurid.*, 3-968.)

364. — La responsabilidad patronal se funda en la aplicación del art. 1113 del Código Civil, concepto legal que no tiene nada de común con la culpa penal en cuanto se refiere al daño causado por las cosas de que el patrón se sirve o tiene a su cuidado. Si el daño cuya indemnización se reclama no es consecuencia de una acción u omisión de un ser humano, sino debido a que el principal o patrón fué negligente en la vigilancia de las condiciones de seguridad de las cosas que podríamos llamar inanimadas y de que se sirve, el daño y los perjuicios deben ser satisfechos. (C. de Ap. en lo Civil y Minas de Mendoza, octubre 22/40. — *Rep. Jurid.*, 2-818.)

365. — En el caso de una sentencia condenatoria dictada en juicio penal, y en la que se fija el monto de la indemnización civil, el interesado puede ocurrir a la justicia civil para reclamar de un tercero civilmente responsable, la indemnización pertinente, y la justicia civil puede modificar la indemnización establecido en la sentencia criminal. (Cám. 2° de Ap. de La Plata, junio 18/40. — *Rep. Jurid.*, 3-966.)

366. — La circunstancia de que la acción de daños y perjuicios haya sido dirigida contra el patrón del conductor del automóvil causante del accidente en virtud de lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Civil, no enerva los efectos absolutorios del sobreseimiento definitivo, dictado en jurisdicción criminal a favor del citado chófer, de acuerdo al artículo 1103 del Código Civil. (Cám. 1° Ap. La Plata, Sala 2°, marzo 20/40. — *La Ley*, 18-205.)

367. — La responsabilidad de los patrones por el hecho de sus dependientes tiene carácter civil; comprende el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la parte ofendida, incluso el agravio moral, que no es en nuestro derecho una pena, sino una parte de la reparación civil. Ni el artículo 1113 del C. Civil que establece la responsabilidad por el hecho de otro, ni el 1122 C. Civil, que

faculta para reclamar directamente contra el principal la reparación del perjuicio, han hecho salvedad alguna respecto del daño moral. Solo se excluye de la responsabilidad patronal, las condenaciones personales aplicadas al dependiente, como ser las multas impuestas por razón del delito. (*Corte Suprema*, septiembre 25/39. *J. A.*, 69-303.)

368. — La regla del artículo 1102 del Código Civil se aplica tanto en los casos en que la acción civil se dirija contra el propio autor del delito, como en el de dirigirse contra las personas que por él eran responsables, es decir, en los casos de responsabilidad indirecta. (*C. Civil 2° Cap.*, abril 26/39. — *La Ley*, 14-396.)

369. — La sentencia condenatoria contra uno de los acusados por defraudación, no impide que otro de ellos, sobreseído provisionalmente, sea demandado en juicio civil por indemnización del daño, y colocado en situación de deudor solidario, siempre que se acredite la existencia de un delito civil. La responsabilidad del primero provendría de la sentencia criminal y la del segundo, de la sentencia civil, importando poco que con relación a este último no se hubiese probado culpa de naturaleza penal. (*C. Civil 2° Cap.*, diciembre 1/38. — *La Ley*, 13-723.)

370. — La sentencia de la Cámara Criminal por la que se confirma la condena impuesta por el juez correccional al conductor del camión perteneciente al demandado, en el juicio civil, tiene en éste autoridad de cosa juzgada en cuanto al hecho principal y a la culpa de su autor (art. 1102 Código Civil) no solo en cuanto al conductor del camión, sino también respecto al dueño del mismo, demandado por su responsabilidad indirecta (art. 1113 del Código Civil) pues el artículo 1102, no hace distinción alguna sobre el particular; además la base de la acción civil de indemnización, es siempre el hecho juzgado en lo criminal y la existencia o inexistencia de culpa del autor. (*C. Civil 2° Cap.*, julio 28/37. — *J. A.*, 59-210.)

371. — El auto que ha sobreseído a un individuo en un sumario levantado por homicidio o lesiones involuntarias, no hace cosa juzgada a los efectos civiles de la acción por resarcimiento de daños y perjuicios iniciada contra él o contra su comitente en razón de los hechos que han servido de base al proceso. (*C. Fed.*



de Bahía Blanca, agosto 21/37. — *La Ley*, 10-247.)

372. — La justicia criminal no puede establecer la responsabilidad civil del patrón, al condenar al oficial de peluquería por lesiones culposas en razón de las quemaduras que produjera al cliente al aplicarle fomentos; dicho patrón es un tercero en la causa criminal y el artículo 29 del C. P. solo es aplicable para condenar a indemnizar al que resulte responsable personalmente por el hecho. (C. C. C., marzo 31/36. — J. A., 53-804.)

373. — La responsabilidad del dueño del automóvil por el accidente causado por el conductor, no puede ser juzgada en la jurisdicción criminal, la cual solo debe pronunciarse sobre la responsabilidad penal del autor del hecho, pero no respecto de la del dueño del automóvil, a quien ninguna responsabilidad penal se atribuye. (Cám. Civil Primera de la Cap., febrero 27/36. — J. A., 53-332.)

374. — No puede cuestionarse en el juicio civil la responsabilidad del dueño del automóvil cuando se ha condenado criminalmente al conductor que causó el accidente. Pero en cambio, no hace cosa juzgada la sentencia del juez del crimen, en cuanto fija la indemnización que se debe pagar a la víctima. (Cám. Civil Primera de la Cap., febrero 27/36. — J. A., 53-332.)

375. — Cuando en el juicio criminal motivado por un accidente ferroviario se ha condenado al guarda-barrera, la responsabilidad indirecta de la empresa no puede cuestionarse en el respectivo juicio civil. En cambio, la absolución del guarda-barrera no impide que se establezca en el juicio civil su responsabilidad y la indirecta de la empresa. (Cám. Fed. Cap., noviembre 4/36. — J. A., 56-383.)

376. — La sentencia condenatoria en juicio criminal contra el dependiente de la demandada, hace cosa juzgada e impide discutir en el juicio civil la responsabilidad de la misma, como asimismo alegar culpa concurrente. (Cám. Civil 2ª Cap., junio 28/35. — *La Ley*, 10-904.)



377. — Para que proceda la condena a pagar indemnización, debe ser pedida contra el autor del hecho y no contra el patrón responsable civilmente del perjuicio ocasionado por el delito. (C. C., julio 27/28. — *Fallos*, 2-10.)

378. — La sentencia solo es ejecutable contra la persona que ha sido condenada y por lo tanto no corresponde trabar embargo en los bienes de un tercero, responsable civilmente, para ejecutar la condena por indemnización del daño, impuesta al autor del delito. (C. C. C., noviembre 7/33. — *Fallos*, 1-353.)

INCISO 2°

379. — La máquina obtenida por el condenado, a cambio de objetos hurtados, entregados con engaño, como si fueran propios, no debe ser considerada parte del precio de compra, de los efectos substraídos, pues se hallaba en poder de aquél, no en virtud de un acto jurídico sino de un delito, como cuerpo y efecto del mismo, es decir, comprendida dentro de la previsión del artículo 29 inc. 2° del C. Penal. (C. C. C., septiembre 6/40. — *La Ley*, 20-758.)

380. — El que adquiere pólizas del Banco Municipal, regularmente está a cubierto de cualquier vicio que afecte el acto de que emana su título. En consecuencia, procede que se entregue al comprador de buena fe de una póliza, el objeto pignorado en el Banco. (C. C. C., julio 15/24. — *Fallos*, 1-309. (Incluimos la doctrina de este fallo en el inc. 2° de este artículo, por tener atinencia con el mismo en cuanto a la imposibilidad de devolución de la cosa robada.) Ver sobre lo mismo, C. C. C., marzo 31/33. — *Fallos*, 1-315.)

381. — Si el dinero reclamado por su legítimo dueño se halla retenido en instituciones bancarias a la orden del juez de la causa y provienen del hecho que motivó el proceso, no procede exigir fianza para su entrega. (C. C. C., noviembre 20/34. — *Fallos*, 1-360.)

382. — La circunstancia de hallarse prófugo el presunto autor del delito, no es obstáculo para que el juez devuelva a su legiti-



mo dueño la mercadería secuestrada como consecuencia de aquél. (C. C. C., noviembre 7/33. — *Fallos*, 1-316.)

383. — Procede resarcir el perjuicio material sufrido por el damnificado, con el precio obtenido por el condenado en la venta de las mercaderías producto de delitos. (C. C. C., abril 29/33. — *Fallos*, 2-345.)

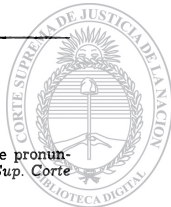
384. — El propietario de un objeto pignorado en el Banco Municipal de Préstamos que reclama su entrega, debe reembolsar previamente al tercero tenedor de la boleta de empeño, el valor de lo que por ella hubiera pagado, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer contra el autor del delito. (C. C. C., marzo 31/33. — *Fallos*, 1-315.)

385. — Si el objeto hurtado no ha sido adquirido por el actual poseedor en los casos de excepción del artículo 2768 del Código Civil, corresponde la devolución a su dueño. (C. C. C., abril 17/31. — *Fallos*, 1-313.)

386. — Si el objeto hurtado ha sido adquirido por su actual poseedor en las condiciones de excepción del artículo 2768 del C. Civil, corresponde al mismo la devolución sin perjuicio de la acción civil que pueda ejercitar el propietario. (C. C. C., marzo 28/30. — *Fallos*, 1-312.)

387. — Los efectos que constituyen el cuerpo del delito solo deben ser entregados a su propietario al dictarse sentencia definitiva. Antes de esa oportunidad, solo en los casos de excepción puede ordenarse la entrega de los efectos del delito a su propietario; cuando media confesión del acusado y no se opone a la devolución o cuando no aduce ningún derecho sobre lo secuestrado. (C. C. C., septiembre 13/27. — *Fallos*, 1-311.)

388. — Estando el objeto estafado en poder de un tercero que lo adquirió del procesado y por tratarse de cosa estafada y no hurtada, corresponde su entrega a dicho tercero poseedor. (C. C. C., septiembre 7/26. — *Fallos*, 1-311.)



INCISO 3°

389. — Sobreseída la causa por prescripción, no cabe pronunciarse sobre costas ni sobre la calidad de la querella. (Sup. Corte de Tucumán, diciembre 10/40. — *La Ley*, 20-1075.)

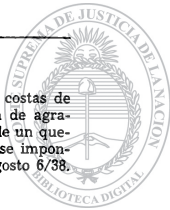
390. — El condenado en juicio criminal, que con su acción delictuosa determinó la instrucción de la causa en la cual se le ha impuesto las costas, corresponde que cargue también con la reposición del sellado en las actuaciones a que dió lugar el procesamiento de oficio y bajo la sospecha de tratarse de un partícipe en el mismo hecho del otro procesado, a cuyo respecto se sobreseyó definitivamente en el curso de aquella. (C. C. C., octubre 29/40. — *La Ley*, 20-513.)

391. — El pago del impuesto del sellado, corresponde únicamente al acusado en caso de condena o cuando promovido por él algún incidente al margen del proceso, lo hubiere perdido con costas. Si es absuelto, intervenga o no parte querellante, está exento del pago del sellado, aunque medie imposición de costas por su orden. (C. C. C., diciembre 29/39. — *La Ley*, 17-374.)

392. — Las costas del proceso deben abonarse en el orden causado, cuando el querellado es absuelto por aplicación del artículo 13 del C. de Procedimientos en lo Criminal. (C. C. C., diciembre 5/39. — *La Ley*, 17-105.)

393. — Las costas impuestas al querellante en el auto de sobreseimiento definitivo, no comprende los honorarios por escritos presentados por el letrado patrocinante del querellado, dado que no corresponden al único concepto por el cual podrían devengarse en el juicio criminal, o sea el que determina el artículo 9° del Código de Procedimientos Criminales, pues, por no haber sido procesado el querellado ni tenido por parte a la presentación de tales escritos, dicho letrado no ha podido actuar como defensor. (C. C. C., marzo 24/39. — *La Ley*, 15-672.)

394. — El querellado que no dedujo apelación contra la sen-



tencia absolutoria, no puede pedir la imposición de las costas de primera instancia al acusador al contestar la expresión de agravios, agregando que si no apeló, lo fué porque se trataba de un querellante insolvente y que si ahora las pide, es para que se imponga una sanción moral. (*Cám. Com. y Crim. Mendoza*, agosto 6/38. — *La Ley*, 11-761.)

395. — El apoderado del querellante condenado en costas, que actuó desde el comienzo de la querella desestimada, está obligado a la reposición del sellado ordenada, so pena de lo que establece el artículo 567 del Código de Procedimientos, relacionado con el artículo 23 de la ley 4128. (*C. C. C.*, junio 24/38. — *La Ley*, 11-106.)

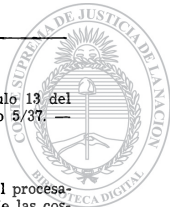
396. — No procede la reposición del sellado de actuación cuando la sentencia absolutoria dictada en la querella, ha eximido de las costas a las partes. (*C. C. C.*, septiembre 29/39. — *La Ley*, 16-409.)

397. — La absolución del querellado determina la imposición de costas por su orden, cuando ha mediado acusación fiscal, sin que sea óbice a ello, la opinión posterior a la sentencia emitida por el fiscal, puesto que no borra la existencia de la acusación, ni hace desaparecer sus efectos. (*C. C. C.*, septiembre 12/39. — *La Ley*, 16-236.)

398. — Procede imponer las costas al querellante, si la prescripción de la acción penal se ha operado antes de la iniciación de la causa y no durante el procedimiento. (*C. C. C.*, febrero 19/39. — *La Ley*, 17-848.)

399. — Los gastos ocasionados por el protesto del cheque girado sin provisión de fondos y por el telegrama remitido al librador, encuadran en el concepto de costas que procede imponer al condenado en el juicio criminal respectivo. (*C. C. C.*, agosto 27/37. — *J. A.*, 59-671.)

400. — Las costas de la querella por malversación de caudales públicos, deben correr por su orden y no a cargo del querellante,



cuando el procesado ha sido absuelto en base al artículo 13 del Código de Procedimientos Criminales. (C. C. C., marzo 5/37. — J. A., 57-829.)

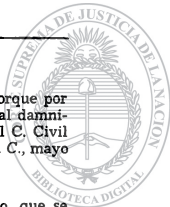
401. — 1°) La prescripción de las costas impuestas al procesado no puede ser dictada de oficio. 2°) La prescripción de las costas en materia criminal, se opera de acuerdo al Código Civil (art. 3964) con independencia de la prescripción de la acción penal o de la pena impuesta. 3°) Cuando hay fondo de propiedad del condenado sin que este haya opuesto la prescripción respecto a su obligación de abonar las costas impuestas por la sentencia definitiva, los fondos deben aplicarse al pago del sellado, como lo pide el fiscal. Encontrándose embargado ese dinero en garantía de la responsabilidad civil del procesado, que comprende las costas, el pago de estas sería prevalente, aún respecto a créditos declarados privilegiados, situación en que no se encuentra la Caja de Jubilaciones que pretende los fondos invocando la ley 11584. (C. C. C., agosto 12/36. — J. A., 55-617.)

402. — Aun cuando la obligación de pagar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito, no lo es la de pagar las costas del juicio. (C. C. C., diciembre 7/34. — Fallos, 1-191.)

403. — Procede la transferencia a la Caja de Jubilaciones y al Consejo de Educación, de los fondos provenientes de secuestros que es práctica realizar en las comisarias a los detenidos y que en su oportunidad no fueron reclamados, o no se les afectó al pago de las costas, llegando a prescribirse la acción a este respecto. (C. C. C., septiembre 22/33. — Fallos, 1-296.) (Ver artículo 29 de la ley 11584; art. 1° ley 11672 y art. 68 inciso "a" de la ley 11290.)

INCISO 4°

404. — La indemnización del daño causado por el delito, no importa una pena, ni principal ni complementaria, ni accesoria, aun cuando el inciso 4° del artículo 29 C. Penal le de incidentalmente ese nombre. No sólo por no aparecer en la enumeración



que de las penas hace el artículo 5º del C. citado, sino porque por su objeto y carácter tiende a la reparación que se debe al damnificado, con la significación que le da el artículo 1078 del C. Civil y sujeta a las normas establecidas por este Código. (C. C. C., mayo 21/37. — J. A., 58-315.)

405. — La reparación del daño causado por el delito, que se resuelve en una indemnización pecuniaria salvo el caso en que hubiere lugar a la restitución del objeto materia del mismo, consiste únicamente en el monto de las pérdidas e intereses. (C. C. C., mayo 12/37. — J. A., 58-606.)

ART. 30. — *La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito y al pago de la multa.*

Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

- 1º *La indemnización de los daños y perjuicios;*
- 2º *El resarcimiento de los gastos del juicio.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro I; Título VII y Libro II; Título II. — Proyecto 1906; artículo 36.

FUENTE: El Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-641. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-475. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-182. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 79. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 250. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 370. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 66. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-63 y 2-194.

JURISPRUDENCIA

406. — El privilegio acordado por el artículo 30 del Código Penal a la indemnización de daños y perjuicios, tan solo se refiere

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 95. — *La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el condenado después de cometido el delito y al pago de la multa, pero no al de las costas procesales. Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfará, en primer término, las costas procesales y, después, la indemnización por el daño causado.*



a las obligaciones emergentes del proceso y dentro del campo de la ley penal. (Cám. Comercial de la Cap., junio 10/38. — J. A., 62-817.)

407. — La ley de quiebras, sancionada con posterioridad al Código Penal, deroga a este con todas las disposiciones incompatibles con los preceptos de aquella. La indemnización de los daños y perjuicios resultante de un delito y establecida en el fuero criminal, carece de todo privilegio en la quiebra del procesado, a pesar de lo establecido por el artículo 30 del C. Penal. (Cám. Com. de la Cap., junio 10/38. — J. A., 62-817.)

(Ver jurisprudencia de los incisos 3º y 4º del artículo anterior.)

ART. 31. — *La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro I; Título VII y Libro II; Título II. — Proyecto 1906; art. 37.

FUENTE: El Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-661. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-476. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-183. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 82. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 250. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Arg.*, p. 350. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 67.

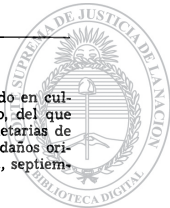
JURISPRUDENCIA

408. — La responsabilidad solidaria por los perjuicios causados que pesa sobre los autores, cómplices y consejeros, no comprende a los encubridores. (C. C. C., septiembre 24/39. — J. A., 71-330.)

409. — Si en el proceso criminal se juzgó que los conductores

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 96. — La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los partícipes del delito.



del camión y del ómnibus que chocaron, habían incurrido en culpa concurrente y se los condenó por homicidio culposo, del que fué víctima el guarda del ómnibus, las compañías propietarias de ambos vehículos deben responder solidariamente de los daños originados por el accidente. (*Cám. Civ. Primera de la Cap.*, septiembre 21/37. — *J. A.*, 59-851.)

410. — La solidaridad respecto a la obligación de reparar el daño, funciona tanto en los casos de delito civil o criminal como en los de cuasidelitos. (*Cám. Civ. Primera de la Cap.*, agosto 25/37. — *J. A.*, 59-482.)

411. — Aun cuando la obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito, no lo es la de pagar las costas del juicio. (*C. C. C.*, diciembre 7/34. — *Fallos*, 1-191.)



ART. 32. — *El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro I; Título VII y Libro II; Título II. — Proyecto 1891; art. 54. — Proyecto 1906; art. 38.

FUENTE: El Proyecto del Dr. Tejedor, quien lo tomó del Código Español de 1850.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-662. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-476. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-184. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 82. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 250. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 370. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 67.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 97. — *El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación del daño hasta la cuantía en que hubiere participado.*



ART. 33. — *En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:*

- 1° *Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11;*
- 2° *Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro I; Título VII y Libro II; Título II. — Proyecto 1891; art. 55. — Proyecto 1906; art. 39.

FUENTE: El artículo citado del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-662. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Arg.*, 2-475. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-185. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 82. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 250. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 370. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3a. ed.), p. 67.

TÍTULO V

Imputabilidad

Art. 34. — *No son punibles:*

1° — *El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.*

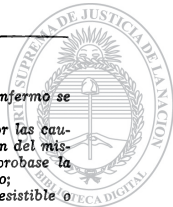
En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del ministerio público y previo dictamen de

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 98. — *En caso de que el condenado carezca en absoluto de recursos para satisfacer las prestaciones que, de conformidad a este título le son impuestas, se observarán las siguientes reglas:*

- 1° *Si se tratare de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 40.*
- 2° *Si se tratare de condenados a multa, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deba depositar periódicamente hasta el pago total. La fijación de las cuotas se hará teniendo en cuenta el monto de las entradas o emolumentos y las obligaciones de familia que el condenado tenga a su cargo.*

El tribunal fijará prudencialmente la periodicidad de los pagos.



peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En los casos en que se absolviere a un procesado por las causas del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobare la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso;

2° — El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente;

3° — El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;

4° — El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;

5° — El que obrare en virtud de obediencia debida;

6° — El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:

a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia.

7° — El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurren las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

Artículo 34, inciso 1°

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III, art. 2°, incisos 2°, 3°, 4°, 5°. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 93, inciso 3°. — Proyecto 1891, art. 59, incisos 1°, 2°, 3°. — Proyecto 1906, art. 41, inciso 1°. — Código derogado, art. 81, inciso 1°.

FUENTE: El art. 39 del Código Ruso de 1903, traducido por el Dr. Herrera en su obra "La reforma Penal" (pág. 418).

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL INCISO

EUSABIO GÓMEZ, Tratado de Derecho Penal, 1-289 y 545 y sgts. — se-



BASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-311 y 2-38, 48, 55, 68, 81, 95, 98 y 380. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-221. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 84. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 277. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 340. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3a. ed.) p. 68. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, (3a. ed.) p. 2-5. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-251. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *El Nuevo Código Penal Argentino*, p. 231. — B. ALIMENA, *Imputabilità e causalità. Módena 1904*. — B. ALIMENA, *Limite e modificatori dell'imputabilità*. Torino, 1894-9. — ERNEST CABADÉ, *De la responsabilitè criminelle*. Paris 1893. — NICOLO PINERO, *Nouvi studi sul problema della responsabilitè penale*. Torino 1894. — AIMÉ RIANT, *Les irresponsables devant la loi. Epileptiques, histeriques, alcooliques*. Paris 1888. — A. DRAPKIN SHENDEREY, *Jurisprudencia de las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal*. (La Ley, 5 sec. bibl., p. 14). — JORGE COLL, *Consideraciones sobre la responsabilidad en el Código Penal argentino* (Revista Penal Argentina, 1-121.) — SEBASTIÁN SOLER, *Imputabilidad y Culpabilidad*. (Revista Penal de La Habana, año 1939, p. 155.) — MARIANO RUIZ FUNES, *Las fórmulas legales de imputabilidad*. (Revista de Psiquiatría y Criminología. Bs. As., Sept.-Oct. 1940.) — LEONARDO GALLI, *Relaciones entre imputabilidad y con referencia a los hechos cometidos en estado de enfermedad mental*. (La Scuola Positiva. Milán 1940. N° 5 y 6 p. 106.)

JURISPRUDENCIA

Generalidades

412. — En la actualidad no se discute, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, la necesidad imprescindible del dictamen pericial para fundar la responsabilidad o la inimputabilidad de los sujetos a quienes se les inculpa de un hecho delictuoso. (*Superior Tribunal de Santa Fe en pleno*, marzo 11/41. — *La Ley*, 21-891.)

413. — Si ni la embriaguez, ni el estado pasional, ni la actitud del procesado, ni el "raptus irae" pueden ser eximentes, es evidente que el agente obró con conciencia y voluntad y por consiguiente es autor del delito de homicidio simple que se le imputa, puesto que aún suponiendo su inconsciencia, habría obrado en el estado que caracteriza la "actio liberae in causa" y la imputabilidad existiría en la relación causal entre el acto voluntario y su resultado y existiría también en la decisión de cometer el crimen. (*Suprema Corte de Tucumán*, marzo 31/41. — *Rep. Jurid.*, 4-1548.)

414. — El art. 34 del Código Penal proviene del Código Ruso tomado a través de la incompleta traducción del Dr. Julio Herrera. Este texto originario enuncia una exigencia justificada y que pre-



cisa su alcance: Que la imposibilidad de comprender en el momento del hecho la criminalidad del acto, o dirigir sus acciones por insuficiencia de sus facultades, provenga de una enfermedad o de una tara física. Aunque nuestra ley no exprese el requisito, debe considerárselo incorporado, porque de lo contrario no podría constituir causal de inimputabilidad. Tanto las alteraciones como las insuficiencias de que habla el artículo, deben ser morbosas. (C. C. C., abril 25/39. — *La Ley*, 15-539.)

415. — En cuanto a las causas de inimputabilidad (art. 34 del C. P.), el Código no adopta escuelas clínicas, sino el criterio psicológico; de allí que toda pericia psiquiátrica debe ser orientada exclusivamente en relación a la imputabilidad jurídica, y limitarla a averiguar si el agente del delito, encontrábase en el momento del hecho, en condiciones psíquicas suficientes para comprender la criminalidad del acto, obrando libremente y con conciencia de lo que hacía. (*Sup. Corte de Tucumán*, agosto 5/39. — *La Ley*, 17-27.)

416. — El art. 34 del Código Penal vigente prescinde del elemento moral del delito, resolviendo la cuestión con criterio objetivo. Si el acto cometido u omitido recae en los preceptos del Código, constituye delito, y su autor debe ser objeto de una sanción. La única forma de eludirla, es probar que se halla amparado por una causal de inimputabilidad. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, junio 3/38. — *La Ley*, 11-244.)

417. — El informe de los peritos médicos acerca del estado de las facultades mentales, y de la capacidad para delinquir, establecidas en el art. 5° de la ley 11177, tiene por objeto conocer si se dan en el procesado las condiciones generales de imputabilidad penal indispensables y no para medir la sanción, pues en el caso de no concurrir aquélla, esto es, de aparecer inimputable el procesado, no puede aplicársele ninguna pena. (C. C. C., octubre 31/39. — *La Ley*, 16-716.)

418. — Si el reo detalla al tribunal con coherente lucidez todo el proceso psicológico, pero llegado el momento preciso de la acción, cuida perfectamente de recordar ciertos hechos importantes, negándose a reconstruir la última parte del suceso, se pone de manifiesto que no hubo la simple representación de la acción, a la conciencia, sino el conocimiento de la misma y de sus fines, la

apreciación jurídica y moral, o sea, la capacidad de querer y comprender la criminalidad del acto que exige la ley. (*Sup. Corte de Tuc.*, agosto 5/39. — *La Ley*, 17-27.)

419. — La prueba de la involuntariedad del acto, de la eventualidad de la consecuencia, y de la incomprensión de la criminalidad del hecho, o de la omisión, incumbe a quién la alegue; no bastan las meras afirmaciones. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 3/38. — *La Ley*, 11-244.)

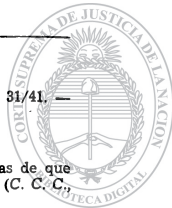
420. — La intención criminosa se presume al igual que la capacidad, porque la intencionalidad de los actos humanos constituyen la regla de la vida y porque la habilidad psíquica es lo normal. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 3/38. — *La Ley*, 11-244.)

421. — No es causal de inimputabilidad, la falta de freno ante el impulso ciego de matar que acomete a una persona, ni encuadra en el estado de emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. (*C. C. C.*, noviembre 13/36. — *J. A.*, 57-620.)

422. — El art. 34, inciso 1° del C. P., contempla varias causas de inimputabilidad, todas ellas de orden psíquico: la insuficiencia de las facultades mentales; las alteraciones morbosas de las mismas; los estados de inconsciencia transitorios; la ignorancia y el error de hecho. No procede, pues, el recurso de inaplicabilidad de la ley, fundado en la violación del precepto citado, cuando el recurrente no concreta siquiera, en cual de los supuestos contemplados en el mismo, correspondería encuadrar el caso. (*Sup. Corte de Bs. As.*, septiembre 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

Insuficiencia de facultades

423. — No constituye causa eximente de responsabilidad, un estado pasional o emotivo, salvo cuando depende de alteraciones morbosas de las facultades, cuando es síntoma revelador o efecto de un estado patológico característico, manifestación de una capacidad insuficiente para crear la conciencia de la criminalidad del



acto y dirigir la voluntad. (*Sup. Corte de Tuc.*, marzo 31/41. — *Rep. Jurid.*, 4-1548.)

424. — Tanto las alteraciones como las insuficiencias de que habla el art. 34 del Código Penal, han de ser morbosas. (C. C. C., abril 25/39. — *La Ley*, 15-539.)

425. — Por insuficiencia de facultades ha de entenderse, con arreglo a las expresiones usadas por nuestra ley, (art. 34 del C. P.), la insuficiencia mental congénita o de la primera época de la vida, es decir, los diferentes tipos de alienación mental por detención del desarrollo cerebral. Son pues, la imbecilidad y el idiotismo de la nomenclatura clásica y más difundida, llamados también frenastenia mayor. (C. C. C., abril 25/39. — *La Ley*, 15-539.)

426. — El art. 34, inciso 1° del C. P. exige, para la inimputabilidad del agente, no solo la insuficiencia efectivo-intelectual de origen constitucional que lo toma escasamente armado para la lucha por la vida, es decir, el estancamiento del desarrollo de las facultades mentales, sino también que la deficiencia de estas haya llegado a tal extremo que no le permitan comprender la criminalidad del acto. (*Sup. Corte de Tuc.*, marzo 21/39. — *La Ley*, 15-1032.)

427. — La debilidad mental no es por si sola una causa excluyente de imputabilidad, sobre todo cuando no aparece el delito cometido en un estado álgido de perturbación motivado por esa fase degenerativa del sujeto. (*Corte Suprema*, julio 15/36. — *J. A.*, 55-18.)

428. — La debilidad mental no es por si sola, causa excluyente de imputabilidad. (*Corte Suprema*. — *Fallos*, 175-284. — *Parry*, V. 24-616.)

Estado de inconsciencia

429. — La alienación que reviste la forma particular de confusión mental, debe ser referida, en nuestras previsiones legales,

(art. 34, inc. 1°) a los estados de inconsciencia, y no a las alteraciones morbosas de las facultades. (C. C. C., abril 25/39. — *La Ley*, 15-539.)

430. — El estado de inconsciencia para ser motivo de inimputabilidad, debe ser completo, de modo que hayan desaparecido todas las facultades activas y conscientes de la psiquis. (*Sup. Corte de Tuc.*, agosto 5/39. — *La Ley*, 17-27.)

431. — La conciencia del reo que realizó el acto impúdico, se revela al sacar al niño del camino por donde transitaba, entrándolo a un sunchal, para ocultarlo y saciar su apetito. Su déficit mental, no anuló pues su conciencia, permitiéndole comprender la criminalidad del acto. (*Sup. Corte de Tuc.*, marzo 21/39. — *La Ley*, 15-1032.)

432. — El informe médico expedido en base al examen del sujeto, casi dos horas después del hecho, en cuanto expresa que se encontraba en "estado de sopor bastante profundo, del cual apenas se consigue hacerlo salir mediante fuertes estímulos exteriores", no basta para acreditar que el delito fué cometido en el "estado de inconsciencia" considerado como determinante de inimputabilidad, por el art. 34, si la indagatoria, por lo completa y detallista, revela que al cometerse el delito, no ha existido la pérdida de la memoria, que constituye el índice más seguro —según los psiquiatras— de la existencia de esos estados de inconsciencia. (C. C. C., mayo 7/40. — *La Ley*, 18-915.)

433. — No es admisible la eximente de pena por inimputabilidad del doble homicida, pese a la conclusión favorable de los peritos médicos que sostienen que no tuvo conciencia de los hechos al cometerlos, si el acusado en su declaración, refiere con toda prolijidad los pormenores, antecedentes y cada una de las circunstancias de los mismos, y aún explica su conducta afirmando que había perdido el control de sus actos. Ese perfecto recuerdo de los hechos, evidencia que tuvo plena conciencia de sus acciones, máxime si su actitud —al dar muerte a su esposa y a un vecino que intentó defenderla— si bien desproporcionada a los motivos, no presenta otra anormalidad que las ofrecidas por el delincuente en oposición al hombre adaptado a las normas de la connivencia regular y pacífica de la sociedad. (C. C. C., abril 17/37. — *J. A.*, 58-254.)



434. — El estado de inconsciencia, no se aviene con la emoción pura normal, aunque intensa. Para hallarlo, se requiere la intervención simultánea de un factor psicológico. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 5/36. — *J. A.*, 57-627.)

La amnesia como eximente

435. — La actitud del procesado, comunicativa hasta la facundia, se torna sospechosa en cuanto declara ignorar todo lo que hizo el día del hecho. Ello sucede si su silencio es tan completo que no puede saberse si la amnesia se refiere a la facultad de fijar los recuerdos o a la de evocarlos y aseméjase más al disimulo que al olvido. (*Sup. Corte Tuc.*, marzo 31/41. — *La Ley*, 22-673.)

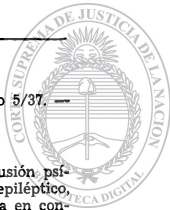
436. — En el "raptus melancólico" se halla amnesia completa. El criterio más exacto de examen es, pues, el relativo a la memoria; establecer cómo obra la memoria. (*C. C. C.*, abril 25/39. — *La Ley*, 15-539.)

437. — La versión que la propia procesada dá de los actos realizados con perfecta coordinación para asegurar el logro del propósito de eliminarse y eliminar a su hija enferma, demuestra que no hay amnesia sino a partir del momento en que la intoxicación comienza a producirse en ella. El caso no puede ser entonces de locura melancólica. (*C. C. C.*, abril 25/39. — *La Ley*, 15-539.)

438. — No puede admitirse la existencia de una amnesia lacunaria, en la cual desaparezcan todas las facultades activas y conscientes del psiquismo, cuando el reo no acusa pérdida de memoria en cuanto da detalles del drama y de la crisis sufrida. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 5/36. — *J. A.*, 57-627.)

Epilepsia

439. — Para la aplicación de la discriminante del art. 34, inc. 1° del C. P., es indispensable una alteración morbosa de las facultades, que afecte el discernimiento o la libertad de obrar, razón por la que la epilepsia no excluye por sí misma la responsabilidad



sino durante la crisis activa. (*Sup. Corte de Tuc.*, junio 5/37. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-103.)

440. — No puede negarse la influencia y la repercusión psíquica, sea de la crisis epiléptica activa, sea del carácter epiléptico, pero la cuestión de la responsabilidad ha de ser resuelta en concreto y según los numerosos y variados elementos de apreciación que deben determinar la resolución en cada caso. (*Sup. Corte de Tuc.*, junio 5/37. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-103.)

441. — Si el comportamiento del reo en el momento del hecho revela correspondencia entre la idea y la acción, capacidad de juicio y actividad coherente, no puede sostenerse que obró en un ímpetu de epilepsia psíquica. (*Sup. Corte de Tuc.*, junio 5/37. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-103.)

442. — Si el reo de lesiones confiesa detalladamente su intervención, sin que aparezcan tampoco los signos propios del delito epiléptico, ha de estimarse que el hecho —a que fué provocado— se cumpliera en un ímpetu de epilepsia psíquica, durante cuyo ataque la supresión de la conciencia, excluye todo motivo exterior y borra toda memoria consecutiva. (*Sup. Corte de Tuc.*, octubre 10/36. — *J. A.*, 57-620.)

443. — El equivalente, epiléptico, ha de manifestarse como una especial crisis psicopática, pre o post accesual; y la diagnosis ha de hacerse adquiriendo un conocimiento completo del estado mental del sujeto, muy particularmente en el momento del hecho y sus proximidades, todo lo cual, se logra apelando al método inductivo y no por conjeturas de mayor aproximación. (*Sup. Corte de Tuc.*, octubre 10/36. — *J. A.*, 57-620.)

444. — La susceptibilidad especial del sistema nervioso que ocasiona la epilepsia y disminuye los poderes inhibitorios, no basta para eliminar la responsabilidad; es preciso que se constate en el momento del hecho, una perturbación tal, que haga desaparecer todas las condiciones activas y conscientes del psiquismo. (*Sup. Corte de Tuc.*, octubre 10/36. — *J. A.*, 57-620.)



445. — Cuando el epiléptico presenta en el intervalo entre los accesos condiciones psíquicas del todo normales y el acto delictuoso se comete en estado de lúcido intervalo, no es posible sostener la aplicación de preceptos de irresponsabilidad. (*Sup. Corte de Tuc.*, octubre 10/36. — *J. A.*, 57-620.)

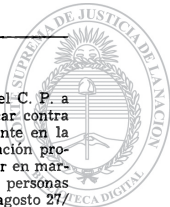
446. — Aún aceptando que el procesado sea epiléptico, no procede la eximente, si no resulta que el hecho materia del proceso fuese cometido en estado de acceso o inconsciencia. (*Corte Suprema, Fallos*, 172, 186 y 374. — *Parry*, V. 24-616.)

447. — Está exenta de pena la persona que manejando un automóvil, sufre un ataque de epilepsia que le hace perder el control del vehículo, causando lesiones a otra. (*C. C. C.* — *Fallos*, 2-110.)

Hiperemotivos y sus reacciones

448. — La circunstancia de que la procesada no sea una persona perfectamente normal y equilibrada y que los trastornos morbosos de su organismo —derivados de la extirpación de los ovarios— tengan como consecuencia llevarla en ocasiones a un grado máximo de irritabilidad y exacerbación, no constituye descargo de imputabilidad cuando el examen de las circunstancias concomitantes y posteriores al hecho, llevan a la certeza de que en todo momento ha procedido con pleno discernimiento y conciencia ajustada a la criminalidad de sus actos, de la responsabilidad que podría alcanzarle y con la posibilidad de dirigir su voluntad y gobernar sus impulsos. (*Cám. Ap. de Rosario*, octubre 20/39. — *La Ley*, 16-899.)

449. — No procede la invocación del artículo 34 del C. P. fundada en los informes médicos que establecen “el homicida es un hiperemotivo que ha obrado preso de una crisis emotiva que son posibles en esta clase de constituciones psicofísicas”, desde que, fuera del carácter conjetural de esas opiniones, es difícil que quien comete un homicidio, escape a un estado emocional más o menos intenso y si el procesado lo padeció, tuvo en cambio conciencia de sus actos, según resulta de su propia indagatoria y de las demás constancias de autos. (*C. C. C.*, diciembre 6/35. — *J. A.*, 53-234.)



450. — No puede alegarse la eximente del art. 34 del C. P. a favor de la conductora del automóvil que luego de chocar contra un árbol y cuando el coche había sido puesto nuevamente en la calzada, debido a su temperamento nervioso y a la excitación proveniente del accidente, volvió a embestir el árbol, al poner en marcha y acelerar el motor causando lesiones graves a dos personas que se encontraban junto al árbol. (C. Apel. de Dolores, agosto 27/1935. — J. A., 53-454.)

Estigmas degenerativos. — Antecedentes sífilíticos, etc.

451. — La circunstancia de tratarse de un sífilítico en actividad a predominio nervioso, no excluye su imputabilidad. Las reacciones violentas y desproporcionadas que tiene, según el informe médico, determinarían su mayor peligrosidad, por cuanto se trataría de un sujeto que llega al delito por predisposición constitucional, que son los verdaderos delinquentes. (Corte Suprema, julio 14/39. — La Ley, 15-457.)

452. — No constituyen eximentes de responsabilidad los estigmas degenerativos, antecedentes sífilíticos y blenorragicos, agravados con hábitos alcohólicos, desde que al hacer al sujeto menos resistente a los impulsos perversos, lo tornan más peligroso. (Corte Suprema, marzo 8/36. — J. A., 53-542.)

La ebriedad como eximente

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-298. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-231. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 20. — En razón de las circunstancias previstas en los artículos 17 y 18 de este Código y de las que puedan resultar por aplicación del artículo que antecede, el tribunal establecerá, de una manera fundada, la relación existente entre el delito cometido y las condiciones personales de su autor, para determinar:

- c) Si cometió el delito en estado de alienación mental, grave anomalía psíquica, inconsciencia completa o intoxicación crónica de alcohol, drogas o estupefactivos.

Art. 18. — Serán consideradas circunstancias de menor peligrosidad en el delincuente.

- 3º El haber delinquido en estado de intoxicación transitoria no provocada, ni previsible.



sus antecedentes, 2-252. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal* (3a. ed.) 2-5. — R. RIVAPOLA, *Exposición y crítica del Código Penal*, 1. Nos. 108 y 109. — JULIO HERRERA, *La reforma penal*, p. 377. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, 1-188. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *Alcoholismo y Criminalidad*. (En *El Criminalista*. Bs. As., 1941, ps. 209 y sgts.) — MANUEL ANDREZZI, *El problema del alcoholismo en Tucumán*. Tucumán 1941. — LOWELL L. SELLING, *El papel del alcoholismo en la realización de delitos sexuales*. (Archivos de Med. Legal. Bs. As., Sep.-Oct. 1940, p. 346. — ULRICH SCHWEKENDIE, *La Ebriedad en el Derecho Penal*. (Kriminalistische Monatsshefte, Berlin Oct.-Dic. 1936. — MARIANO RUIZ FUNES, *Las fórmulas legales de la inimputabilidad*. (Rev. Penal de La Habana, Julio-Agosto 1940 ps. 259 y sgts.) — ROGELIO E. CARRATALÁ, *El delito y su relación con la determinación química del alcohol*. (Anales de la Soc. Argentina de Criminología, Bs. As., 1940, p. 57.) — ALFONSO QUIROZ, *Alcoholismo y delincuencia*. (Criminalia, México, Abril 1941, p. 480.) — R. GARCÍA ZAVALÍA, *Proyecto de ley tucumana sobre represión del alcoholismo*. (La Ley, — diario, Julio 6/40.) — B. y F. FRANKEL, *Alkoholismus und Kriminalität*. (Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, año 1930, p. 705.) — JEAN VERVAEK, *L'importance des blastotoxies dans l'origine des degenerescences et leur interet en antropologie criminelle*. (Bulletin de la Société de Morphologie, Bruxelles, 1929.)

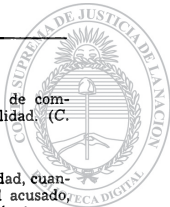
JURISPRUDENCIA

453. — La embriaguez, aunque sea completa, no constituye causal de inimputabilidad si es voluntaria, máxime si el reo se encuentra a menudo en ese estado que no le priva de conciencia y voluntad. (Sup. Corte de Tuc., marzo 31/41. — Rep. Jurid., 4-1548.)

454. — Aún en el supuesto de la inconsciencia del sujeto, admitida por los peritos, cabe considerar que habría obrado en el estado que caracteriza la "actio liberae in causa" con anticipación de dolo, pues mediante una obsesión, o con el propósito de llegar a un resultado, provocó voluntariamente ese estado de inconsciencia, aún a una mayor o tal vez total embriaguez. (Sup. Corte Tuc., marzo 31/41. — La Ley, 22-673.)

455. — Si la embriaguez no fué completa ni involuntaria, sino más bien preordenada, se afirma la imputabilidad. (Sup. Corte Tuc., marzo 31/41. — La Ley, 22-673.)

456. — La beodez, no involuntaria, no es eximente, pero puede explicar la perturbación de la inteligencia del reo que procedió bajo la impresión del miedo. (Corte Sup., Fallos, 178-251. — Parry V. 25-624.)



457. — La embriaguez debe revestir los caracteres de completa e involuntaria para constituir causa de inimputabilidad. (C. C., octubre 8/40. — *La Ley*, 20-968.)

458. — El art. 34, inc. 1° del C. P., cubre la imputabilidad, cuando la inconsciencia es efecto de causas no atribuidas al acusado, a las cuales es ajena la ebriedad que, en el caso, no fué ni completa ni involuntaria. (Sup. Corte Tuc., octubre 5/40. — *La Ley*, 22-121.)

459. — Para que el estado de ebriedad constituya causal de inimputabilidad penal, es menester que aquella sea completa e involuntaria, lo cual, por tratarse de una cuestión de hecho, debe ser considerado por los tribunales en cada caso particular. (1° Instancia, Jujuy, junio 22/40. — *La Ley*, 19-364.)

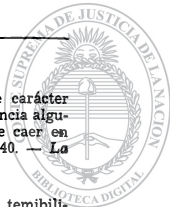
460. — La ebriedad completa y voluntaria no es causal de inimputabilidad. (Cám. 2° de Apel. Crim. de Córdoba, mayo 9/40. — *La Ley*, 18-689.)

461. — El delito cometido en estado de inconsciencia en razón de la ebriedad completa ocasionada por culpa, o voluntariamente, es punible, a título de culpa. (Cám. 2° Apel. Crim. Córdoba, mayo 9/40. — *La Ley*, 18-689.)

462. — La ebriedad de quien ha bebido sin moderación conociendo, como es lógico, los efectos perturbadores de la bebida, no es involuntaria, a los efectos de la ley penal. (Cám. 2° Apel. Crim. de Córdoba, mayo 9/40. — *La Ley*, 18-689.)

463. — La embriaguez debida a la propia y libre determinación del agente no encuadra en la causal de inimputabilidad del artículo 34, inciso 1° del Código Penal. (Cám. Apel. Bahía Blanca, febrero 27/40. — *La Ley*, 18-223.)

464. — La embriaguez como eximente de responsabilidad penal, debe ser completa e involuntaria en el sentido que no debe



ser querida, ni deseada por el sujeto. No reviste este carácter cuando el agente bebe por el placer de hacerlo, sin continencia alguna y sabiendo o pudiendo prever que al hacerlo, puede caer en estado de beodez. (*Sup. Trib. de San Luis*, febrero 20/40. — *La Ley*, 18-280.)

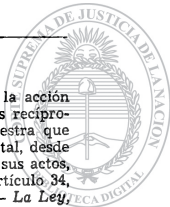
465. — En los delitos por ebriedad, ha de privar la temibilidad social del agente, antes que su responsabilidad moral, conforme al sistema adoptado por nuestra ley penal. (*Sup. Corte de Bs. As.*, noviembre 24/39. — *La Ley*, 17-62.)

466. — Para que la ebriedad constituya causal de inimputabilidad, debe ser, a la vez, completa e involuntaria. (*Sup. Corte de Bs. As.*, noviembre 24/39. — *La Ley*, 17-62.)

467. — El estado de alcoholización comprobado en el procesado, no constituye la causal de inimputabilidad, prevista en el art. 34, inc. 1° del C. P., desde que, aparte de no tratarse de estado de inconsciencia del autor no imputable, esto es, accidental, consta en el caso por informes del médico de policía que lo examinó dos horas después del hecho, que conservaba el dominio de sus actos, se expresaba coherentemente y relataba lo ocurrido en forma natural; y respecto de su conducta, los testigos refieren que, aunque algo alcoholizado, tenía conciencia de sus actos. (*C. C. C.*, mayo 17/38. — *La Ley*, 10-855.)

468. — No corresponde aceptar las conclusiones del informe fundado en presunciones basadas en el dosaje del alcohol comprobado en la orina del procesado, para deducir de ahí la causal de inimputabilidad del artículo 34 inc. 1° del C. P., precisamente por expresarse en el referido informe, que se trata de un alcohólico crónico, con episodios de alcoholismo agudo y que como todo alcohólico inveterado presenta fallas de la ética, de la voluntad y de los sentimientos, pero sin que ello haya incidido sobre su psiquismo, en forma tal que pueda anular su juicio para discernir y su capacidad para dilinguir. (*C. C. C.*, mayo 17/38. — *La Ley*, 10-855.)

469. — La ebriedad que no se produjo en forma accidental, no es causal de inimputabilidad. (*C. C. C.*, septiembre 20/38. — *La Ley*, 12-33.)



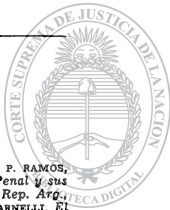
470. — Si del texto de los certificados médicos, de la acción desplegada por los contrincantes procesados por lesiones recíprocas y de las circunstancias que ellos refieren, se demuestra que ambos han obrado en estado de ebriedad parcial y no total, desde que han exteriorizado conciencia y gobierno relativos de sus actos, no corresponde la eximente de pena establecido en el artículo 34, inc. 1° del C. P. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, junio 29/37. — *La Ley*, 10-801.)

471. — La beodez, si no es involuntaria, no puede ser eximente. El hombre que toma licor más de lo que debe, responde de las consecuencias de los actos que realiza por falta de dominio de sus facultades. La defensa de la sociedad inspira esta tesis preconizada por la doctrina moderna. (*Corte Sup.*, agosto 6/37. — *J. A.*, 59-355.)

472. — La consideración de la beodez como atenuante, al graduar la pena, no es óbice para el rechazo de la eximente del artículo 34 inc. 1° del C. P., si la ebriedad le es imputable al homicida, quien además, no llegó al estado de inconsciencia, como resulta del recuerdo que conserva de detalles del hecho, no recordando solamente haber sacado en la lucha su cuchillo con el que infirió a la víctima 7 puñaladas, todas ellas mortales. (*Sup. Corte de Bs. As.*, febrero 16/37. — *J. A.*, 57-867.)

473. — La beodez completa es involuntaria, si quien se puso en ese estado, por haber bebido sin continencia en un banquete, nunca había tenido costumbre de embriagarse, desconociendo por lo tanto los efectos que el alcohol podía producir sobre su estado físico o su temperamento. (*Cám. Apel. de Dolores*, mayo 7/36. — *J. A.*, 55-330.)

474. — El delito de homicidio en estado de beodez completa e involuntaria que había producido un estado de amnesia total, debe ser considerado como un hecho puramente accidental en que el victimario ha obrado sin comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, razón por la cual el hecho no le es imputable conforme al artículo 34 inc. 1° del C. P. (*Cám. Apel. Dolores*, mayo 7/36. — *J. A.*, 55-330.)



Error o ignorancia de hecho no imputable

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-541. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-237. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-251. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, p. 72. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-5. — LORENZO CARNELLI, *El error y la legítima defensa putativa*. (*La Ley*, 20-59.)

JURISPRUDENCIA

475. — El error de hecho, alegado como causal de inimputabilidad, debe revestir las calidades de esencial e invencible. (C. C. C., octubre 8/40. — *La Ley*, 20-968.)

476. — La ignorancia de la ley no es causa de inimputabilidad; la ignorancia como el error, deben ser de hecho para reconocerles ese efecto. (C. C. C., noviembre 5/37. — *J. A.*, 60-623.)

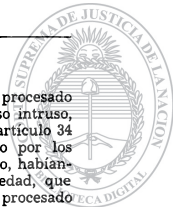
477. — La comprensión o conciencia del acto por el agente, debe buscarse en las circunstancias mismas del delito y en el comportamiento del imputado, antes, después del acto y durante su comisión. (*Sup. Corte de Tucumán*, marzo 21/39. — *La Ley*, 15-1032.)

478. — Ampara al prevenido la causal de justificación prevista en el art. 34, inc. 1° del C. P., si dominado por los golpes de un adversario más fuerte, en el cual creyó reconocer al que lo hiciera víctima de un asalto anterior, y golpeado por éste en el suelo, ve aproximarse en momentos tan apremiantes, a la víctima, y por error invencible provocado por tales circunstancias, presume que se trata del "compañero" de su agresor, y lo hiere, en la falsa convicción de que se defendía de un nuevo atacante, pues si bien no se encontraba realmente en estado de defensa legítima con respecto a éste, desde que no lo atacó, lo estaba en cambio subjetivamente por la apreciación equivocada excusable de las circunstancias mencionadas. (C. C. C., agosto 18/39. — *La Ley*, 15-993.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 15. — No existe delito cuando el agente realiza el hecho:

1° Por error substancial de hecho que no derive de culpa, aunque sea determinado por engaño de un tercero, si los medios de que éste se valió eran idóneos para sorprender la buena fe del agente.



479. — El homicidio de la esposa consumado por el procesado en la creencia de que repelía la agresión de un peligroso intruso, encuadra en el supuesto contemplado en el inciso 1° del artículo 34 del C. Penal, si el error excusante ha sido producido por los siguientes motivos: con anterioridad a la fecha del suceso, habíanse cometido en la zona, varios delitos contra la propiedad, que tenían alarmado al vecindario. La noche del hecho, el procesado había sido despertado por su esposa que, alarmada por un disparo de arma de fuego y los ladridos continuados de los perros, le rogó que cargara su revólver, en previsión de un ataque, lo que hizo, quedándose nuevamente dormido; más tarde, al despertarse súbitamente, al percibir el ruido causado por el pasador de la puerta, que le era familiar, vió, semidormido aún la figura que creyó de un hombre que penetraba en su dormitorio, haciéndole el disparo, dándose cuenta recién de que había herido a su esposa. (Cám. 2° en lo Crim. Córdoba, julio 16/40. — *La Ley*, 20-59.)

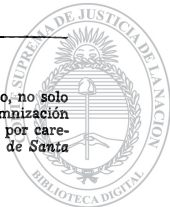
480. — El Presidente del Concejo Municipal que ordena a la Tesorería de la Comuna, el pago de una suma de dinero por un crédito aparente, presta al autor de la maniobra dolosa una cooperación sin la cual no hubiera podido cometerse el delito; pero si las explicaciones que da, resultan en cierto modo atendibles y existen elementos de juicio que permiten suponer que ha sido sorprendido en su buena fe, debe establecerse, por aplicación del principio "in dubio pro reo" que obró con ignorancia de hecho no imputable. (Cám. Fed. La Plata, septiembre 14/36. — *J. A.*, 55-823.)

Artículo 34, inciso 1°, apartados Primero y Segundo

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-289. — EMILIO C. DÍAZ, *Internamiento de seguridad*. (Rev. Penal Argentina, t. 6, p. 32.) — E. GAY, *La médecine legale des délinquants anormaux ou aliénés et leur responsabilité*. Paris 1926. — A. RATTZIN, *Las pericias médico-legales sobre alienados*, Bs. As. 1929. — JOSÉ INGENIEROS, *Criterios positivos para un estudio de los alienados delincuentes*. Bs. As. 1900. — BENITO MARIANO ANDRADE, *La locura ante las leyes penales*. Madrid 1897. — BRIERE DE BOISMONT, *De la responsabilité pénale des aliénés*. Paris 1863. — ROBERTO LEVILLIER, *Alienados delincuentes y delincuentes alienados*, Bs. As. 1908. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *Trastorno mental transitorio*. (La Ley, t. 22 sec. doct., p. 10.) — J. GRASSET, *Semilocos y semirresponsables*. Madrid 1908.

481. — El acusado de un delito que es absuelto por haberse



demostrado que era demente en el momento de cometerlo, no solo es irresponsable criminalmente, sino también por la indemnización de los daños y perjuicios que ocasionó inconscientemente por carecer de discernimiento y de voluntad. (*Superior Tribunal de Santa Fe, en pleno*, marzo 11/41. — *La Ley*, 21-891.)

482. — Comprobado un temperamento de franca constitución psicopática, se revela un semialienado de peligrosidad manifiesta. (*Sup. Corte Tuc.*, marzo 31/41. — *La Ley*, 22-673.)

483. — El juez no puede ajustarse únicamente a las aspiraciones científicas y concepciones técnicas de los peritos psiquiatras, sino buscar la discriminante en el terreno de la ley positiva que limita los supuestos de justificación. (*Sup. Corte Tuc.*, marzo 21/39. — *La Ley*, 15-1032.)

484. — La desaparición del peligro a que se refiere el artículo 34, inc. 1° in fine del C. P., debe presentar los caracteres de un hecho positivo y cierto y no eventual o condicionado a circunstancias de íntima relación con la causa generadora de la perturbación que motivó el sobreseimiento definitivo por inimputabilidad. (*C. C. C.*, abril 29/38. — *La Ley*, 10-713.)

485. — La alienación mental que funda el sobreseimiento defi-

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 62. — Si el delito se ha cometido en estado de alienación mental, el tribunal ordenará la internación del agente en un manicomio, del que no podrá salir sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público, y previo dictamen de peritos oficiales que declaren que ya no es peligroso para sí ni para terceros.

Art. 63. — Si el delito se ha cometido en estado de inconsciencia completa, el tribunal ordenará la internación del agente en un establecimiento adecuado, del que no podrá salir sino en las mismas condiciones y con las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior.

Esta sanción no será impuesta en el caso de que las condiciones personales del agente, las circunstancias de hecho y el informe de peritos oficiales autorice a declarar la ausencia de toda peligrosidad.

Art. 64. — Si el delito se ha cometido a causa de una grave anomalía psíquica, que no importe alienación, o en un estado de intoxicación crónica producida por el alcohol o el uso de drogas o estupefactivos, el tribunal ordenará la internación del agente, por tiempo indeterminado, en un establecimiento especial, con régimen curativo y de trabajo obligatorio, en cuanto lo consientan sus condiciones de salud. El tiempo de internación no será inferior al máximo de la sanción estatuida para el delito, ni menor de tres años, si dicho máximo fuera inferior a este término. Si la sanción fuere la reclusión perpetua, se impondrá ésta.

Cuando, previo informe de peritos oficiales, se juzgue que la permanencia en el establecimiento especial ha dejado de ser necesaria, el tribunal convertirá la internación en reclusión o prisión, conforme a lo establecido para el delito, pero, tanto la una como la otra serán por tiempo indeterminado, con el mínimo que se fija en el párrafo anterior.

A los fines que correspondan, se computará el tiempo de permanencia en el establecimiento especial.



nitivo a favor del procesado internado en un hospicio, al sólo efecto de una mejor observación por los médicos de los tribunales, sin encontrarse en las condiciones de recluso por aplicación del art. 34 del C. P., hace procedente su internación conforme al texto legal citado, máxime cuando la desaparición del peligro de dañarse a sí mismo o a los demás, se indica en la pericia médica condicionada a la circunstancia de no incurrir en nuevos excesos alcohólicos, que aparecen frecuentes en el sujeto que reconoce hábitos de alcoholista. (C. C. C., abril 29/38. — *La Ley*, 10-713.)

486. — Establecido en el dictamen médico que la curación del alienado que ha cometido un delito, es aparente y no real, subsistiendo su peligrosidad si se le restituye a su medio habitual, por la índole de la enfermedad que padece, procede ordenar su reclusión en el establecimiento adecuado que el P. E. señale por todo el término que sea necesario. (Cám. Fed. La Plata, agosto 26/29. — *J. A.*, 30-626.)

487. — No establecida en forma por pericia médica la curación del delincuente insano, recluso para cumplir su pena, es improcedente su libertad. (C. C. C., marzo 22/35. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-68.)

488. — Cometido el hurto por un sujeto irresponsable, dada su insuficiencia constitucional en el desarrollo de sus facultades intelectuales, debe sobreseerse definitivamente con relación al delito imputado y probado y mantenerlo recluso en la forma que dispone el art. 34 párrafo 3° del C. P. (1° Instancia, Cap. — *Gaceta del Foro*, 48-123.)

489. — En el caso del artículo 34, 2° apartado del C. P., el mismo juez de la jurisdicción criminal que intervino en la causa, es quien debe declarar oportunamente desaparecido el peligro, sin perjuicio de haber dado al juez civil la intervención que corresponde. (C. C. C., febrero 20/25. — *Fallos*, 1-41.)

490. — No procede la liberación "a prueba" del alienado recluso por aplicación del art. 34 inc. 1° del C. P. Sólo procede su liberación definitiva, cuando los peritos afirmen categóricamente que ha desaparecido la causa que motivó su internación. (C. C. C., marzo 22/35. — *Fallos*, 1-43.)



491. — En el caso del artículo 34 del C. P., para decretar la cesación de la medida de seguridad, no basta el informe del Director del Establecimiento donde se halla recluso. Deben informar los médicos de los tribunales. Si se ha resuelto la cesación de la medida de seguridad prescindiéndose de la designación de los médicos de los tribunales para que informen sobre el estado de peligrosidad del recluso, la resolución es nula. (C. C. C., abril 4/1930. — Fallos, 1-42.)

INCISO 2°

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Título III, artículo III. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, artículo 93, inciso 5°. — Proyecto 1891, artículo 59, inciso 5°. — Proyecto 1906, artículo 41, inciso 3°. — Código derogado, artículo 81, inciso 5°.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-546. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-257. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 84. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-255, 372, 374 y 2-82, 220. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 333. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 415. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 74. — AUGUSTO SETTI, *La forza irresistibile*. Torino 1884. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-243. — (Ver además la bibliografía del inciso 1°.)

JURISPRUDENCIA

492. — Constituye atenuante la perturbación psicológica intensa, derivada del temor de sufrir un mal grave e inminente. (Corte Sup. — Fallos, 168-52.)

493. — La eximente del artículo 34 inc. 2° del C. P., requiere que las amenazas que se dicen proferidas, sean de tal gravedad que obliguen al hecho; no basta la simple imputación —amenaza de quemarlo como a la víctima— que se hace al coprocesado, que la niega, para tenerla por acreditada, sobre todo, cuando de las indagatorias surge el concierto de ambos para la comisión del delito. (Cám. Fed. La Plata, mayo 6/40. — La Ley, 18-1009.)

494. — Para que proceda la eximente del artículo 34 inc. 2°



del C. P. es menester que las amenazas tuvieran un principio de ejecución y que la situación entre los coprocesados, fuera tal, que pudiera presionar la voluntad del que la invoca, para obligarlo a realizar el hecho, incumbiendo a éste la prueba respectiva. (Cám. Fed. La Plata, mayo 6/40. — *La Ley*, 18-1009.)

495. — La situación desventajosa de una mujer frente a un hombre, debe ser tenida en cuenta por la justicia para medir la responsabilidad en que incurre, cuando delinque contra el hombre que ha abusado de su debilidad. (Corte Sup., octubre 7/36. — *J. A.*, 56-7.)

496. — El inciso 2° del artículo 34 del C. P., contempla dos causas distintas de no punibilidad: la fuerza física irresistible y la fuerza o coacción moral que difieren substancialmente por el elemento volitivo del sujeto que existe en la segunda causa y no en la primera. La coacción moral, se rige por los principios de la legítima defensa en nuestro sistema jurídico penal. (C. de Ap. de Rosario, abril 2/37. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-91.)

497. — La eximente del art. 34 inc. 2°, requiere miedo insuperable producido por la amenaza de sufrir un mal inminente y grave que domine completamente al espíritu; no puede entonces alegar tal defensa quien pudo fácilmente substraerse al influjo de un temible delincuente. (C. Fed. de B. Blanca, mayo 3/34. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-44.)

INCISO 3°

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III, artículo 6, inciso 2°. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 93, inciso 4°. — Proyecto 1891; art. 59, inciso 11. — Proyecto 1906; art. 41, inciso 4°. — Código derogado; art. 81, inciso 4°.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 15. — No existe delito cuando el agente realiza el hecho:

3° Por la necesidad de conjurar el peligro inminente y grave en que se encuentre derecho, propio o ajeno, cuando no sea evitable de otro modo y no haya sido provocado por acción u omisión dolosa del agente. Si el peligro recayera sobre un derecho patrimonial será necesario que el hecho realizado importe un mal menor que el que se procuró evitar.

Estas disposiciones no rigen respecto de los que tuvieron el deber jurídico de afrontar el peligro por circunstancias especiales o por razón de oficio, profesión o cargo.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-550. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-248. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *El estado de necesidad en materia penal*. Bs. As., 1922. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-263. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 84. — JOSE PECO, *La reforma penal de 1917-20*, p. 333. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-36. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal Para la Rep. Arg.*, (3a. ed.) p. 75. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-67 y 2-210. — P. MORIAUD, *Du Delit Necessaire*, Paris 1889. — G. SERMET, *L'état de nécessité en matière criminelle*, Paris 1903. — A. ACUÑA ANZORENA, *El estado de necesidad en el Proyecto de Código Civil*. (*La Ley*, t. 11, sec. doct., p. 33.) — UBALDO PERGOLA, *Lo stato di necessità nella storia e nella legislazione comparata*. (*Rivista Penale*, año 1909, p. 129.) — J. F. PACHECO, *Código Penal Concordado*, 1-162. — VON LIZST, *Derecho Penal*, 2-132.

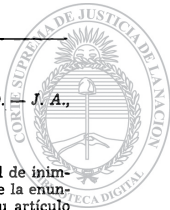
JURISPRUDENCIA

498. — La miseria o la dificultad de ganarse el sustento, no ha sido jamás eximente de responsabilidad. El Código Penal en su artículo 41, la admite como una circunstancia atenuante simplemente, que deberá contemplarse en concurrencia con otras que ilustran sobre la calidad y condición del sujeto del delito. (*Cám. Fed. de la Cap.*, abril 8/40. — *La Ley*, 18-244.)

499. — Si bien el artículo 41 del C. P. se refiere especialmente a "la miseria" como atenuante, esto no excluye en absoluto la posibilidad de que se ofrezcan casos excepcionales, que caigan en el estado de necesidad del art. 34 inc. 3°. (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 14/39. — *J. A.*, 69-873.)

500. — El estado de necesidad es una situación de peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en donde no queda otro remedio que la violación de los derechos de otro, jurídicamente protegidos. (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 14/39. — *J. A.*, 69-873.)

501. — Para que exista estado de necesidad, se requiere la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1°) un peligro actual e inminente; 2°) injusticia del peligro que se quiere evitar; 3°) necesidad del medio empleado para evitarlo. La segunda de éstas circunstancias requiere a su vez, a) que el peligro que se quiere evitar no sea ordenado por la ley; b) que el necesitado no esté obligado a sacrificarse; c) que no haya provocado dolosamente el



estado de necesidad. (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 21/39. — *J. A.*, 69-936.)

502. — La ley penal no acepta la miseria como causal de inimputabilidad, no incluyéndola en su artículo 34, donde hace la enunciación taxativa de las eximentes; por el contrario, en su artículo 41, al enunciar las bases para apreciar las penas, la menciona especialmente, como así también a la dificultad para ganarse el sustento necesario propio y de los suyos. Por lo tanto, la miseria ha de tenerse en cuenta para graduar la pena, consecuencia de la imputabilidad del agente, pero no constituye eximente; sería antieconómica una solución contraria. (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 14/39. — *J. A.*, 69-874.)

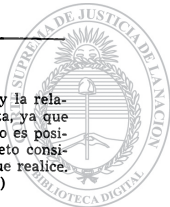
503. — La ley penal no acepta la miseria como causal de inimputabilidad; no la incluye entre las exigencias del art. 34 pero la hace figurar en el art. 41 que se refiere a la graduación de las penas. (Del voto del Dr. Schreir.) (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 14/39. — *La Ley*, 17-834.)

504. — Debe condenar por hurto y defraudación al que, aún apremiado por necesidades de familia, se apodera de una rueda de camión para venderla luego a un tercero con engaños y mayor lucro. (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 14/39. — *La Ley*, 17-834.)

505. — El estado de absoluta miseria, falta de trabajo o dificultad para ganar el sustento, no es eximente de pena, si el acusado no delinquirió en estado de inconsciencia que le impidiera darse cuenta de los actos que realizaba. (*C. C. C.*, mayo 29/34. — *Fallos*, 2-4.)

506. — Para que el estado de necesidad pueda invocarse con éxito como eximente, es necesario que exista una relación estrecha e inmediata de proporción entre el mal causado y el que se trata de evitar, entre el hecho objetivo que aquel debe comportar y la solución para conjurarlo. (*C. de Ap. de Rosario*, junio 6/36. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-80.)

507. — Para que la eximente del art. 34 inc. 3° sea posible, es



preciso establecer concretamente la situación de peligro y la relación existente entre el acto y el mal que con ello se evita, ya que la ley se refiere a un criterio concreto de proporción y no es posible que invocando una genérica necesidad, pueda el sujeto considerarse a salvo de cualquiera imputación por los actos que realice. (C. Ap. de Rosario, junio 8/36. — Rec. Ord., Cuad. 7-81.)

508. — No está exento de pena un sujeto holgazán, condenado ya dos veces por igual delito, que hurta una oveja para dar de comer a sus tres hijos menores. (*Juez Letrado de La Pampa*, noviembre 13/34. — Rec. Ord., Cuad. 7, 3ª parte-48.)

509. — El estado de necesidad —como eximente de penalidad—, presupone en el agente, un estado de verdadera coacción psíquica, o estado de peligro que fatalmente le lleva a elegir entre dos intereses en conflicto, debiendo el peligro ser inminente, efectivo, real o posible. (C. Ap. de Rosario, mayo 18/35. — Rec. Ord., Cuad. 7, 3ª parte, p. 54.)

INCISO 4°

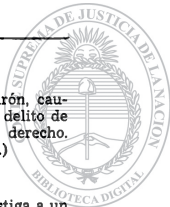
ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III, arts. 4 y 6. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 93, inciso 7°. — Proyecto 1891, art. 59, inciso 10°. — Proyecto 1906, art. 41, incisos 5° y 6°. — Código derogado, art. 81, incisos 7° y 15°.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-547. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-265. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 84. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-312, 313, 319 y 322. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 424. — JOSÉ PECCO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 339. — JUAN F. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-244. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.) p. 75. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-210. — S. BARZILAI, *Correzione paterna ed institutuli correzionali*. Bologna 1883.

JURISPRUDENCIA

510. — La facultad de corregir a los hijos que el artículo 278 del C. Civil acuerda a los padres, solo importa el ejercicio de un derecho, si se los castiga “moderadamente”. El padre que, para



enmendar a un niño de 7 años lo castiga con un cinturón, causándole lesiones curables en ocho días, es punible por el delito de lesiones causadas excediéndose en el ejercicio de un derecho. (Arts. 34 inc. 4º, 35 y 94 del C. P.) (C. C. C., junio 10/38.)

511. — No es punible (art. 34 inc. 4º) el padre que castiga a un niño de 8 años con un cinturón de cuero causándole ligeras erosiones en la piel, curables espontáneamente. Se trata de una corrección moderada y aplicada dentro de los límites necesarios para considerarla como ejercicio legítimo del derecho que le acuerda el art. 278 del C. Civil. (C. C. C., diciembre 2/38. — J. A., 65-548.)

512. — La facultad de corrección del marido hacia la esposa solo es tolerable en cuanto no afecta la mutua dignidad y no de lugar a acciones civiles o criminales. (Sup. Corte de Tuc., julio 7/36. — Rec. Ord., Cuad. 7 bis, p. 106.)

513. — En el derecho argentino no hay configuración especial de delito para el abuso en los medios de corrección o de disciplina como ocurre con el Código Italiano (art. 571), de suerte que si sobreviene daño, éste ha de medirse conforme a lo establecido en el título de los “delitos contra las personas”. (Sup. Corte de Tuc., julio 7/36. — Rec. Ord., Cuad. 7 bis, p. 106.)

514. — No cabe invocar el móvil de corrección, donde impulsa la venganza. (Sup. Corte de Tuc., julio 7/36. — Rec. Ord., Cuad. 7 bis, p. 107.)

INCISO 5º

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III, artículos 4 y 6. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, artículo 93, inciso 7º. — Proyecto 1891; art. 59, inciso 10. — Proyecto 1906; art. 41, incisos 5º y 6º. — Código derogado, art. 81, incisos 7º y 15.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 15. — No existe delito cuando el agente realiza el hecho:

2º En ejercicio de un derecho o de las funciones inherentes a un cargo o profesión, dentro de sus respectivos límites; o en cumplimiento del deber impuesto por una disposición legal o por una orden legítima de la autoridad pública competente.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-545. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-337. — RODOLFO MORENO, *El Código y sus antecedentes*, 2-265. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 424. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 84. — JOSÉ PECO, *La reforma penal de 1917-20*, p. 329. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-245. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Aep. Argentina*, (3a. ed.) p. 76. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-210. — CARLOS LOZANO Y LOZANO, *La obediencia como causal de justificación*. (Revista Jurídico-Criminal, Bogotá, Nov.-Dic. 1938, p. 110.)

JURISPRUDENCIA

515. — La orden impartida por el patrón al capataz, para que penetrara al campo ajeno y arreara hacia la vía pública los animales que ambos sabían que eran ajenos, a fin de transportarlos confundidos con otros propios, no exime al ejecutor de responsabilidad penal, desde que la obediencia debida a que se refiere el artículo 34, inc. 5° del Código Penal, exime de responsabilidad al subalterno, mientras el superior no obra fuera de los límites de su autoridad. (Cám. de Ap. de Azul, marzo 27/35. — J. A., 49-710.)

INCISO 6°

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Título III, arts. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García; art. 93, incisos 8°, 9° y 10. — Proyecto 1891; art. 59, incisos 8° y 9°. — Proyecto 1906; art. 41, incisos 7° y 8°. — Código derogado; art. 81, incisos 8°, 9°, 10, 11, 14.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-556. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-319, 321, 322, 354, 367. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-261. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-273. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 464. — JOSÉ PECO,

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

- Art. 15. — No existe delito cuando el agente realiza el hecho:
- 4° Por la necesidad de defender un derecho propio, siempre que concurren las siguientes circunstancias:
- Agresión legítima;
 - Necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo;
 - Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
- 5° entenderá que concurren estas circunstancias:
- a) Respecto de aquel que, durante la noche, rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias inmediatas.
 - b) Respecto de aquel que sorprendiera a un extraño dentro de su hogar en actitud que determine el temor fundado de un peligro para la persona.
 - c) Respecto de aquel que, residiendo en lugar despoblado, no puede impedir, de otro modo, la entrada arbitraria de un extraño a su hogar o a las dependencias inmediatas del mismo.



La Reforma Penal de 1917-20, p. 345. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 84. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-67 y 2-210. — J. FIURETTI y ZERBOGLIO A., *Sobre la legítima defensa*. Madrid 1926. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3a. ed.), p. 77 y sgts. — LORENZO CARNELLI, *Elementos que integran la figura jurídica de legítima defensa*. (La Ley 2-197.) — GIROLAMO PENSO, *Legítima Defensa Subjetiva*. (Revista Penal de La Habana, Mayo-Junio 1940, p. 175.) — LORENZO CARNELLI, *La previsibilidad del ataque en la legítima defensa*. (La Ley, 13-686.) — LORENZO CARNELLI, *Legítima defensa contra legítima defensa*. (La Ley, t. 10, sec. juris. extranj., p. 1.) — NOTA DE LA LEY, *La agresión ilegítima como requisito para la existencia de la legítima defensa*. (1-729.)

JURISPRUDENCIA

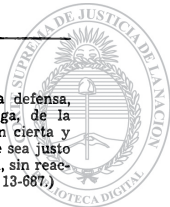
516. — El artículo 34, en su inciso 6°, no solo protege la vida, sino también los “derechos”, es decir, los que son esenciales a la dignidad de la misma y que tan afectados se vieron por la agresión a puñetazos. (Corte Suprema, marzo 13/40. — Rep. Jurid., 3-1183.)

517. — La legítima defensa, constituye más bien un estado de hecho que de derecho. De ahí que no sea posible dar reglas exactas, para su apreciación. (Sup. Corte de Bs. Aires, mayo 23/39. — La Ley, 15-275.)

518. — Las circunstancias que legitiman la defensa, deben concurrir en un solo acto; estar íntimamente vinculadas y entrelazadas entre sí; ser una la consecuencia de la otra y por último, todos y cada uno de los requisitos que la constituyen, deben probarse y no presumirse, precisamente por ser una excepción. (Primera Ins., Capital, mayo 10/38. — La Ley, 10-798.)

519. — Las razones para negar la justificante de legítima defensa, deben arraigar en la falta de uno de los requisitos enunciados en la ley: agresión, necesidad, falta de provocación. De este modo, se podrá afirmar que la previsión del ataque, destruiría en ciertos casos y según la forma que aquella asuma, la situación de necesidad, el estado de necesidad, que substancialmente, constituye la base de la legítima defensa. (Cám. Apel. Rosario, septiembre 5/38. — La Ley, 13-686.)

520. — Para que la previsión del ataque pueda destruir la



situación de necesidad, base substancial de la legítima defensa, no basta una simple previsibilidad, más o menos vaga, de la posibilidad del hecho; será preciso la completa previsión cierta y no una mera sospecha; y además, será necesario aún, que sea justo o razonable exigir que se soporte un principio de agresión, sin reaccionar. (*Cam. Apel. Rosario, septiembre 5/38. — La Ley, 13-687.*)

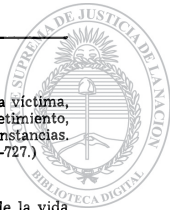
521. — Las medidas de precaución ante la eventualidad de un ataque, no constituyen "per se", un motivo suficiente para negar la legítima defensa a quien las toma. (*Cám. Apel. Rosario, septiembre 5/38. — La Ley, 13-687.*)

522. — No basta que el ataque sea previsible para eliminar la legítima defensa, sino que es preciso sea previsto y, además que la abstención de la propia actividad no importe ya de por sí la ilegítima restricción de un derecho, que no se está obligado a soportar. (*Cám. Apel. Rosario, septiembre 5/38. — La Ley, 13-687.*)

523. — Si bien es verdad que en general, el desafío aceptado, no constituye al aceptante en legítima defensa, también lo es, que ese principio no puede llevarnos a transformar la figura de la legítima defensa, incluyendo en ella un requisito más que los enunciados en la ley, cual sería la imprevisibilidad, imprevisión o subitaneidad del ataque. (*Cám. Apel. Rosario, septiembre 5/38. — La Ley, 13-686.*)

524. — Si el agresor penetró en el campo del imputado iniciando una discusión con un pariente de éste, la precaución del segundo al armarse, antes de hacerse presente en el lugar del incidente, no le priva del derecho de invocar a su favor la legítima defensa, ya que él no acometió, ni concurrió a un desafío, ni siquiera previó con seguridad que sería agredido. (*Cám. Apel. Rosario, septiembre 5/38. — La Ley, 13-687.*)

525. — Si se ha probado la existencia de la legítima defensa, no es necesario entrar al estudio de la relación de causalidad entre la acción del acusado y el resultado. (*C. C. C., agosto 21/38. — La Ley, 11-541.*)



526. — La simple posesión de un arma en manos de la víctima, no constituye por sí mismo un acto de ataque o acometimiento, máxime cuando tal posesión se explica por otras circunstancias. (Sup. Corte de Bs. As., septiembre 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

527. — La legítima defensa no se limita al amparo de la vida ni de la integridad personal, pues comprende también los derechos esenciales al individuo, y entre ellos, los relativos al decoro, la honra, el pudor, siempre que concurran, para su justificación, las circunstancias enumeradas en el artículo 34 inc. 6° del C. Penal. (Sup. Corte de Tuc., mayo 16/36. — *J. A.*, 55-710.)

528. — Para que haya legítima defensa, se requiere, en primer lugar, que se produzca un hecho actual o inminente de fuerza, que ponga en peligro la integridad personal o un derecho con ella inmediatamente relacionado; y en segundo lugar, que esa agresión no haya podido repelerse o impedirse sino con los medios o por los medios empleados. (Sup. Corte de Tuc., mayo 26/36. — *J. A.*, 55-710.)

529. — No puede invocar defensa de su honra la menor homicida que mata al amante, so pretexto de que quería raptarla, si ella descuidaba su propio decoro y estimación y sus amores íntimos eran públicos en la localidad, concurriendo además armada de cuchillo a la cita convenida. (Sup. Corte de Tuc., mayo 16/36. — *J. A.*, 55-710.)

(A) AGRESION ILEGITIMA

BIBLIOGRAFIA

JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-265. — EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-560. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-297. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Argentina*, (3a. ed.), p. 79.

JURISPRUDENCIA

530. — La actitud de la víctima al ir a buscar un arma ante la amenaza grave del procesado —con quien discutía violentamen-

te— que empuñaba su revólver, no puede constituir agresión ilegítima. (*Sup. Tribunal de Córdoba*, julio 19/40. — *La Ley*, 19-657.)

531. — Si no ha mediado agresión ilegítima de parte de la víctima, no puede existir legítima defensa, ni exceso en la defensa. (*Sup. Trib. de Córdoba*, julio 19/40. — *La Ley*, 19-657.)

532. — El temor invencible que reveló la actitud del procesado ante el ataque de su víctima constituye una circunstancia de carácter subjetivo de capital significación en la apreciación del peligro de la agresión. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 23/39. — *La Ley*, 15-275.)

533. — La existencia del peligro de la agresión cuya repulsa tutela la ley, no se limita al caso de uso de armas por el agresor. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 23/39. — *La Ley*, 15-275.)

534. — La simple idea de peligro no basta para justificar la reacción adecuada consiguiente. (*Sup. Corte Tuc.*, marzo 4/39. — *La Ley*, 15-1205.)

535. — La reacción contra un ataque o acción dañosa ya pasada, se transforma en venganza. (*Sup. Corte Tuc.*, octubre 7/39. — *La Ley*, 16-1000.)

536. — Un mismo acto de fuerza puede en unos casos constituir la agresión ilegítima que exige la ley para legitimar la defensa, y en otros no, según sea el sujeto activo del mismo, y según quien lo soporte. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 23/39. — *La Ley*, 15-275.)

537. — Es el peligro de la agresión y no el objeto con que obra, lo que valora el ataque y autoriza la defensa, vale decir, el peligro grave, cierto, actual, que determina como necesaria la acción defensiva. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 23/39. — *La Ley*, 15-275.)



538. — La huida ante la agresión ilegítima, no es un expediente que exige la ley. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 23/39. — *La Ley*, 15-275.)

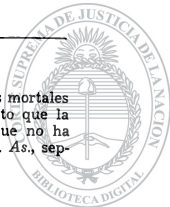
539. — El requisito que Carrara incluye en su teoría de la legítima defensa, al requerir que el ataque sea “improviso” juega ante nuestra ley, con referencia a la legitimidad o ilegitimidad del ataque, a la existencia o inexistencia de un estado de necesidad o de provocación. Así, no podremos decir que es necesaria la defensa contra la agresión que se ha determinado, no debiéndola determinar, es decir, cuando nosotros mismos, deliberadamente, creamos la situación necesaria y a ello no tenemos derecho. (*Cám. Apel. Rosario*, septiembre 5/38. — *La Ley*, 13-687.)

540. — La resolución de la prevenida que no ha derivado de ninguna situación de peligro ulterior, sino que ha sido la consecuencia de un estado de ánimo, por los castigos recientes de su esposo, —la víctima del hecho—, y la acumulación de padecimientos anteriores que refiere, no encuadrarán en la figura de la legítima defensa. (*Sup. Corte de Bs., As.*, septiembre 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

541. — La agresión ilegítima que exige la eximente de legítima defensa, no se caracteriza por las amenazas simples del sujeto activo sino que requiere, por las circunstancias, por la ocasión y por los medios de apremio que se emplean, la condición de verdadero peligro. (*Corte Suprema*, febrero 8/35. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-63.)

542. — La legítima defensa, presupone un riesgo actual o inminente, pero cierto, real, positivo. No bastan las meras sospechas. Se requiere la objetividad de la agresión materializada o, por lo menos, insinuada. La representación subjetiva del peligro, ha de ser razonable y justificada. (*Sup. Corte de Bs. As.*, septiembre 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

543. — La confesión de la uxoricida, que se limita a decir, que luego de ser castigada por su esposo se dirigió llorando a su habitación, y acordándose del lugar en que aquél tenía su revól-



ver fué en su busca y saliendo con él, le hizo los disparos mortales desde la puerta de su habitación, en el preciso momento que la víctima venía con un hacha en la mano, demuestra que no ha existido la legítima defensa alegada. (*Sup. Corte de Bs. As.*, septiembre 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

544. — La medida del peligro que determina la medida y el límite de la defensa, se fija por el injustamente agredido, según la normal y racional apreciación, atentas las circunstancias que rodean el hecho. (*Corte Sup.* junio 24/38. — *La Ley*, 11-53.)

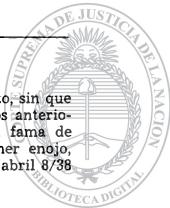
545. — La legítima defensa puede ejercerse en caso de peligro inminente no buscado y provocado, pero no por apresuramiento, nerviosidad o miedo. (*Corte Sup.*, febrero 18/38. — *La Ley*, 9-724.)

546. — La agresión ilegítima, como integrante de la legítima defensa, debe ser valorada objetiva y subjetivamente, vale decir, que el acto o los actos agresivos deben materialmente mostrar un peligro actual ante los ojos del que se defiende. (*Sup. Corte de Bs. As.*, abril 8/38 — *La Ley*, 10-361).

547. — No puede exigirse que el agredido — de noche y en estado de ebriedad — que recibe un golpe de puño, investigara si esa agresión era sólo “a mano limpia” o si el agresor podía tener arma en la otra mano o sacarla luego. (*Corte Sup.*, junio 24/38 — *La Ley*, 11-53.)

548. — La agresión ilegítima requerida para legítimar la defensa, debe ser actual, vale decir, que no sea acabada, ni que amenace en lo porvenir; contraria a derecho y que tenga vías de hecho, esto es, que deje de ser una amenaza, para pasar a los hechos, sin querer significar con ello que el agredido deba ser previamente golpeado (*1° Inst., Capital*, mayo 10/38 — *La Ley*, 10-798.)

549. — El ademán de sacar armas no constituye “agresión ilegítima” sino en circunstancias muy especiales. (*Sup. Corte de Bs. As.*, abril 8/38 — *La Ley*, 10-361.)



550. — El ademán de sacar armas seguido a un insulto, sin que entre la víctima y el victimario hubieren resentimientos anteriores, ni amenazas de muerte, y sin que aquel, tuviera fama de hombre de acción, capaz de utilizar sus armas al primer enojo, no constituye agresión ilegítima. (*Sup. Corte de Bs. As.*, abril 8/38 — *La Ley*, 10-362.)

551. — La actitud de la víctima que, hallándose en estado de ebriedad y después de pelear con armas con un hermano se dirige a la habitación en que se había encerrado el procesado, (también hermano suyo, que había intentado evitar la riña) y le exige violentamente su salida, con el propósito de pelear, derribando la puerta a golpes de hacha ante el pedido que aquel le formulara para que se retirara, revela que ha existido no una simple amenaza, sino la inminencia de una grave agresión que legitima el uso de la escopeta a que acudió el procesado para impedirla, paralizando así las vías de hecho ya iniciadas. (*Sup. Corte de Bs. As.*, febrero 28/37. — *La Ley*, 9-898.)

552. — La agresión es ilegítima, cuando no está autorizada por ninguna ley, ni por ningún derecho. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37. — *La Ley*, 9-646.)

553. — La llegada de la víctima al lugar del hecho, la circunstancia de irse sobre el procesado a "tranco apurado", el hecho de atropellarlo con el rebenque de hierro en alto, injuriándolo y luego amagándole un golpe, son actos que configuran sobradamente la vía de hecho, constituyendo la agresión ilegítima. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37 — *La Ley*, 9-646.)

554. — La amenaza no es bastante para que exista la agresión que legitima la defensa; la ley requiere algo más, o sea la vía de hecho. No es preciso, sin embargo que se llegue a la lesión corporal, no es indispensable que se toque al agredido; basta la iniciación del ataque, el que se revela generalmente por la presentación del arma. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37 — *La Ley*, 9-646.)

555. — La huída es propia del cobarde, o de quién quiera prac-

ticarla, pero nunca obligatoria para el que se defiende. (*Sup. Corte Tuc.*, noviembre 30/37 — *La Ley*, 9-785.)

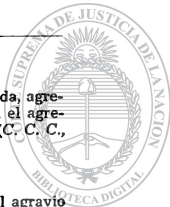
556. — No es aceptable la eximente de legítima defensa, si, el occiso que había agredido al matador, huyó ante la reacción de éste; el peligro había desaparecido y con él, la necesidad de la defensa. (*Corte Suprema*, diciembre 3/37 — *J. A.*, 60-719.)

557. — Los requisitos de la legítima defensa son: la necesidad de la defensa, la situación no buscada y la agresión no prevista o inevitable. (*Corte Suprema*, agosto 24/36 — *J. A.*, 55-392.)

558. — Ampara la eximente de legítima defensa, a la madre que da muerte a su esposo golpeándolo con un palo en la cabeza, en vista de que éste no cejaba en el propósito de tener contacto carnal con la hijastra, a quien oprimía la garganta para que no gritara y la amenazaba con un cuchillo. El hecho de que después del primer golpe y cuando el esposo estaba caído, la procesada le aplicara dos golpes más, no configura el exceso en la defensa, dado el estado emocional en que debió obrar. (*C. C. C.*, abril 22/36 — *J. A.*, 54-247.)

559. — Constituye una agresión real, peligrosa para la integridad del procesado, el hecho de que la víctima lo amenazara de muerte, colocándole el revólver al pecho, si existía entre ellos enemistad y cuando la víctima había proferido amenazas de muerte con anterioridad. (*C. C. C.*, abril 3/36 — *J. A.*, 54-234.)

560. — El hecho de que el procesado acudiera al llamado de la víctima, aunque mediara enemistad entre ambos y el que la víctima hubiera proferido amenazas de muerte, no restan carácter defensivo al disparo efectuado cuando la víctima reiteraba sus amenazas contra el procesado, — colocándole el revólver al pecho. Pudo atribuir otra significación al llamado, por cuanto no había mediado con anterioridad escena de violencia, que autorizara a suponer que sólo la lucha en ese momento dirimiría la situación. El haber acudido en tales circunstancias, no obsta a considerar, que ha obrado en defensa propia. (*C. C. C.*, abril 3/36 — *J. A.*, 54-234.)



561. — Está exenta de pena la persona que es provocada, agredida y derribada y desde el suelo hace un disparo contra el agresor, a quien posteriormente se le secuestra un cuchillo. (C. C. C., mayo 29/25 — Fallos, 1-219.)

562. — Para justificar la legítima defensa, no basta el agravio ni aún la amenaza cuando ésta no es real o producida en tal forma que el agredido deba considerarse en peligro inminente de muerte. (C. C. C., noviembre 21/24 — Fallos, 1-489.)

(B) NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO PARA REPELER LA AGRESION

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-563. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-269. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-300. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 78. — LORENZO CARNELLI, *La superioridad del arma empleada, no excluye la legitimidad de la defensa, cuando otros factores establecen la igualdad.* (La Ley, 2-200.) — LORENZO CARNELLI, *Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión.* (La Ley, 2-197.) — RAFAEL GARCÍA ZAVALÍA, *Exceso en los límites de la defensa.* (La Ley, 4-412.)

JURISPRUDENCIA

563. — La racionalidad del medio empleado para repeler la agresión, debe considerarse objetiva y subjetivamente y no en el daño que causa el agresor ni el que resulta de la defensa. El uso de armas para repeler una agresión sin ellas — pero llevada a cabo por quién supera en fuerza física al agredido, — no altera la proporcionalidad. (C. C. C., octubre 8/40 — Rep. Jurid., 2-644.)

564. — Certificada la necesidad de defenderse, la proporcionalidad de medios entre la ofensa y la defensa, no está preceptuada en la ley, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia. (Corte Suprema, marzo 15/40 — Rep. Jurid., 3-1183.)

565. — La agresión a puñetazos puede justificar la reacción



defensiva con armas. (*Corte Suprema*, marzo 13/40 — *La Ley*, 18-170.)

566. — La equivalencia de medios entre la defensa y la ofensa, no está preceptuada en la ley, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia. (*Corte Suprema*, marzo 13/40 — *La Ley*, 18-170.)

567. — La racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión, no debe ser considerada en abstracto, sino referida al caso. (*C. C. C.*, octubre 22/40 — *La Ley*, 20-624.)

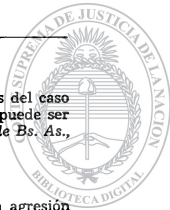
568. — La legítima defensa constituye más bien un estado de hecho que de derecho; de ahí que no sea viable dar reglas fijas para su apreciación, ya que ello depende de las circunstancias particulares del caso. (*C. C. C.*, octubre 22/40 — *La Ley*, 20-624.)

569. — Lo que la ley desea evitar cuando exige la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, es que el agredido, dueño de la situación, proceda por venganza. (*Primera Instancia Capital*, mayo 10/38 — *La Ley*, 10-798.)

570. — La racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión, debe quedar librada a la apreciación judicial, en cada caso concreto, no pudiéndose dejar de analizar los factores derivados del temperamento, fuerza, valor, situación social, moral, etc., para dictaminar en su mérito. (*Primera Inst. Cap.*, mayo 10/38 — *La Ley*, 10-798.)

571. — La necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión significa que el que se defiende, no puede ir más allá de lo racionalmente impuesto por la agresión y cuando le es absolutamente necesario, para proteger su vida. Sin embargo, este concepto no puede tomarse al pie de la letra, en el sentido de que la víctima de la agresión deba devolverla en la misma forma e intensidad. (*Prim. Inst. Cap.*, mayo 10/38 — *La Ley*, 10-798.)

572. — El uso de cuchillo ante el acometimiento reiterado, tenaz



y persistente a golpes de puño, cuando las circunstancias del caso revelan un peligro grave e inminente para el agredido, puede ser un medio racional para repeler la agresión. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 23/39 — *La Ley*, 15-275.)

573. — Es legítimo repeler en la noche la subitánea agresión de un sujeto armado con una vara de alambres retorcidos y emplomados, aún usando para ello, un arma más ofensiva. (*Cám. Apel. Rosario*, abril 30/38 — *La Ley*, 10-750.)

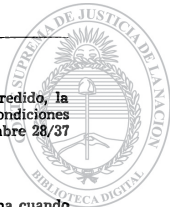
574. — La paridad de arma, no puede ser el criterio único para establecer la existencia del medio racional de defensa que exige la ley. Más decisiva que eso, puede ser la convicción del agredido, que de buena fe ha creído que su vida pasaba por inminente peligro. (*1ª Inst. Capital*, mayo 10/38 — *La Ley*, 10-798.)

575. — La necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión quiere decir, el empleo de los elementos de defensa de que se dispone con relación al ataque. La ley exige necesidad "racional", no necesidad absoluta. (*Sup. Corte de Bs. As.* diciembre 28/37 — *La Ley*, 9-947.)

576. — La ley exige que la represión del ataque sea proporcionada al ataque mismo. La defensa tiene por objeto impedir el daño personal que la agresión supone, y, por lo tanto, todo lo que exceda esos límites, debe considerarse como abuso de defensa. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37 — *La Ley*, 9-646.)

577. — La proporcionalidad de los medios empleados para repeler la agresión, no puede computarse sino desde el punto de vista del sujeto que tenga que defenderse en la situación concreta producida, con los medios de que disponía y en el estado de ánimo que la agresión normalmente podría generar. (*Cám. Apel. Rosario*, abril 30/38 — *La Ley*, 10-750.)

578. — Para establecer la existencia de la necesidad racional de repeler la agresión cuando se juzga un suceso determinado,



es preciso contemplar la situación del agresor y del agredido, la gravedad e intensidad de la agresión y las respectivas condiciones personales de uno y otro. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37 — *La Ley*, 9-647.)

579. — Acreditado que el procesado hirió a la víctima cuando ésta huía y por la espalda, aunque de parte de ella partiera la agresión, no procede la eximente de legítima defensa y el hecho debe calificarse como homicidio simple, con atenuante. (*Corte Suprema*, septiembre 14/34 — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-66.)

580. — Siendo la agresión subitánea, injustificada y grave, debe prosperar la excepción de legítima defensa, aun cuando, después del hecho, el atacante apareciera sin armas. Esta última circunstancia no será suficiente para imputar exceso de defensa mientras fuera "racional" la apreciación que hubiera hecho el agredido de la situación de peligro en que se hallaba. (*C. Ap. de Rosario*, abril 26/35 — *Rec. Ord.*, 7-84.)

581. — La justificación de la defensa, se funda en el temor y requiere la actualidad de un peligro y la necesidad de evitarlo. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 2/35 — *J. A.*, 53-525.)

582. — La legítima defensa se descarta si no hay proporción o necesidad racional entre la acción y la reacción, entre el ataque y el medio empleado para repelerlo. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 2/35 — *J. A.*, 53-535.)

(C) FALTA DE PROVOCACION SUFICIENTE

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ. *Tratado de Derecho Penal*, 1-564. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-271. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-301. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3a. ed.) p. 77.



JURISPRUDENCIA

583. — No toda provocación hace perder a la defensa su legitimidad; es necesario que exista entre la provocación y su consecuencia, una relación idónea, es necesaria la condición de suficiencia en la provocación. (*Primera Inst. Cap.*, mayo 10/38 — *La Ley*, 10-798.)

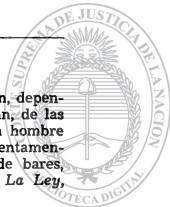
584. — Las reiteradas negativas de quién se halla con la víctima, a salir del local a conversar con sus intempestivos interpellantes, de cuyas intenciones de pelea ambos estaban prevenidos, no puede calificarse como actitud agresiva. (*Corte Sup.*, agosto 1/38 — *La Ley*, 11-566.)

585. — La búsqueda con armas y con manifiesta intención de pelea por quién era un tercero en discordia, vale decir, la actitud que en el lenguaje popular se califica con el tropo de “copar parada ajena”, se interpreta siempre como una provocación. (*Corte Sup.*, agosto 1/38 — *La Ley*, 11-566.)

586. — No existe legítima defensa si el prevenido se retiró del lugar en que acababa de tener un incidente para armarse y regresar con el arma lista para ser usada, trabándose en pelea con su anterior contendor y en el curso de la misma, al sentirse en inferioridad de condiciones, lo hiere con el cuchillo que llevaba. (*C. C. C.*, noviembre 22/38 — *La Ley*, 14-293.)

587. — No procede la eximente de legítima defensa, si el procesado con una actitud molesta para el lesionado, originó la agresión de éste (una bofetada) que fué repelida con un golpe que le ocasionó a aquél la lesión que presenta. (*Cám. Fed. de B. Blanca*, junio 29/37 — *La Ley*, 10-802.)

588. — La actitud del procesado al ordenar a la víctima que se retirara a su casa, a la vez que le daba un empujón, motivado por la insistencia con que aquella trató de imponérsele para conseguir que le siguiera vendiendo licor, no constituye la provocación suficiente a que se refiere la ley penal. (*Sup. Corte de Tuc.*, noviembre 30/37. — *La Ley*, 9-785.)



589. — La insuficiencia o suficiencia de la provocación, depende de la calidad de las personas, del medio en que actúan, de las circunstancias anteriores o concomitantes del suceso; un hombre culto, decente, moralmente disciplinado, no reacciona violentamente como un sujeto ignorante, ordinario, frecuentador de bares, almacenes y prostibulos. (*Corte Sup.*, agosto 1°/38 — *La Ley*, 11-566.)

590. — Para establecer si los insultos que se le atribuyen al procesado revisten o no el carácter de provocación suficiente que impediría invocar la legítima defensa, debe tenerse en cuenta las modalidades del suceso y la calidad de las personas que en él intervinieron. (*Sup. Corte de Bs. As.*, marzo 18/38 — *La Ley*, 10-946.)

591. — Para declarar que no ha existido el requisito de “falta de provocación suficiente” por parte de quién alega la legítima defensa, es necesario establecer cuáles son los hechos concretos que configuran la provocación, sin que ella pueda resultar acreditada porque sea incierto que la entrevista que relata el confesante, se realizara en los términos que afirma. (*Sup. Corte de Bs. As.*, marzo 18/38 — *La Ley*, 10-945.)

592. — La ley penal al exigir la falta de provocación por el que se defiende, establece que esa provocación sea suficiente, vale decir, que toma en cuenta tan sólo las ofensas que por sus caracteres sean capaces de producir una reacción violenta de las que contempla la ira del supuesto ofendido, impulsándolo al acometimiento, por venganza. (*Sup. Corte de Tuc.*, noviembre 30/37 — *La Ley*, 9-785.)

593. — No puede invocar la eximente de legítima defensa el homicida que antes de cometer el delito manifestó su intención de vengarse de la víctima, y si la presencia de aquél a la hora y en el lugar en que se cometió el crimen, excluye el elemento indispensable de falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. (*Corte Sup.*, octubre 7/36 — *J. A.*, 56-7.)

INCISO 6° (IN FINE)

(PRESUNCION LEGAL DE LEGITIMA DEFENSA)

594. — Si no hubo resistencia por parte del ladrón ni escala-



miento, no concurren los extremos de la defensa del domicilio y la persona; y cuando ésta no esté comprometida, deberá exigirse que el mal sea grave y que tenga carácter de irreparable. (Sup. Corte de Tucumán, octubre 7/39 — *La Ley*, 16-1000.)

595. — La ley — artículo 34 inc. 6° letra (C) último apartado — coloca en la situación de agresor ilegítimo, al individuo que se encuentra en un hogar ajeno, siempre que hiciera resistencia. Esta resistencia debe resultar de las circunstancias que caracterizan cada caso. (Sup. Corte de Bs. As., diciembre 6/38 — *La Ley*, 12-1008.)

596. — La eximente de legítima defensa del artículo 34 inc. 6° in fine. debe darse por acreditada, si el procesado, persona de buenos antecedentes y concepto, sorprendido en su sueño a altas horas de la noche encontró en unas de las dependencias de su domicilio a un sujeto robando mercaderías a quien interpeló sin obtener otra respuesta que la ostentación de un objeto brillante en las manos del intruso, que, efectivamente tenía un cuchillo, ante cuya actitud le efectuó un disparo de escopeta, que le produjo la muerte. (Sup. Corte de Bs. As., diciembre 6/38 — *La Ley*, 12-1008.)

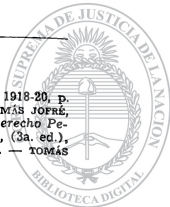
597. — Es legítimo el uso del arma empleada por el procesado para herir a la víctima durante la lucha, si ésta penetró sin consentimiento en el domicilio de aquél, con ánimo de agredirlo y sin que mediara provocación. (C. C. C., marzo 17/33 — *Fallos*, 1-220.)

598. — No procede en legítima defensa, el encargado o sereno de una casa en construcción que, al solo efecto de evitar la fuga de un intruso, le hace disparos de arma de fuego. (C. C. C., junio 16/33 — *Fallos*, 1-221.)

INCISO 7°

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-556 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-273. — JULIO HERRERA, *La*



Reforma Penal, pág. 464. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1918-20*, p. 353. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-368. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, pág. 85. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-278. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3a. ed.), p. 88. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-67. — TOMÁS JOFRÉ, *La legítima defensa de terceros*. (J. A. 10-89.)

JURISPRUDENCIA

599. — Tratándose de la defensa de un tercero, el código penal no estatuye el requisito de que el autor de la defensa conozca la falta de provocación de su defendido; tanto más cuando el agredido es hermano de quién ha salido a defenderlo. (C. C. C., octubre 8/40 — J. A., 71-963.)

600. — Quién al salir en defensa de una hermana, mientras es agredida por el esposo de ella, lesiona al agresor en riña a golpes de puño, está amparado por la eximente de legítima defensa. (C. Penal, art. 34 inc. 7°) (Cám. Apel. Rosario, agosto 22/40 — J. A., 71-708.)

601. — Si la víctima, sujeto notoriamente peligroso, se acercó de noche a la puerta de la habitación ocupada por mujeres de la finca custodiada por el procesado, situada en un lugar poco poblado y mal defendido, y, mientras profería groseros insultos contra las nombradas, pidiendo vino, daba fuertes golpes sobre la puerta, en cuyas circunstancias se aproximó el cuidador, quien fué insultado y recibió un golpe de puño, que lo derribó a tierra, por lo cual sacó su cuchillo y tiró un golpe hiriendo de muerte al agresor, debe admitirse la existencia de legítima defensa. (Corte Suprema, diciembre 22/39 — *La Ley*, 17-239.)

602. — Hay exceso en la defensa de un tercero por parte de quien al ver agredido a un hermano suyo por una persona más

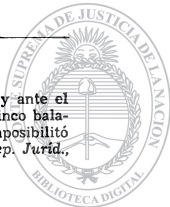
PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 15. — No existe delito cuando el agente realiza el hecho:

5° Por la necesidad de defender un derecho ajeno, siempre que concurren las condiciones requeridas para la defensa del derecho propio y que, en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, no haya participado en ella el que ejercita la defensa.

6° Para rechazar la violencia contra un representante de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones, cuando las circunstancias no permitan rechazarla de otro modo, ni vencer, en otra forma, una resistencia que importe peligro para la persona.

Esta disposición rige, también, en el caso de que la violencia o la resistencia peligrosa se ejerciten contra persona que, a su requerimiento, preste ayuda al representante de la autoridad.



vigorosa y con fama de pendenciero, intenta separarlos y ante el resultado negativo de sus esfuerzos, dispara al agresor cinco balazos, causándole la muerte, si con el primer disparo lo imposibilitó de consumar su atentado. (C. C. C., octubre 8/40 — Rep. Jurid., 2-644.)

603. — La ley penal no exige, tratándose de la defensa de la persona de un tercero, el conocimiento de la falta de provocación suficiente del que se defiende por parte del defensor, máxime cuando el vínculo de la sangre y del afecto, hacen más justificable esa intervención. (C. C. C., octubre 8/40 — Rep. Jurid., 2-644.)

ART. 35. — *El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III, artículo 12. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 96, inciso 2º. — Código derogado, art. 83, incisos 1º y 4º.

FUENTE: Fué proyectado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-556 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-382, 387. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-307. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 100. — JOSÉ PECO, *La reforma penal de 1917-20*, p. 354. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 89. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 431. — RAFAEL GARCÍA ZAVALÍA, *Exceso en los límites de la defensa*. (La Ley, 4-412 y J. A., 46-762.) — LORENZO CARNELLI, *Elementos que integran la figura jurídica de la legítima defensa*. (La Ley, 2-197.) — ID. *Legítima defensa contra legítima defensa*. (La Ley, 10, sec. jurisp. extr., p. 1.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

ART. 16. — *El que, en los casos de los incisos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo anterior excediere los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será sometido a las sanciones estatuidas para los delitos cometidos por culpa o imprudencia. No se impondrá sanción alguna cuando se demuestre que el exceso fué determinado por circunstancias de hecho que, fundadamente, hacían temer un peligro mayor.*



JURISPRUDENCIA

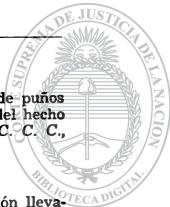
604. — Cuando a un acometimiento con un palo y una bo-tella se responde con una pala de trabajo, el exceso en la legítima defensa no puede surgir como error de cálculo o temor excesivo, desde el momento que el peligro no podía descartarse por la sola ebriedad del atacante, cuando es ella, precisamente, la que lo tornaba belicoso y agresivo. (*Sup. Corte de Tuc.*, mayo 13/41. — *Rep. Jurid.* 4-2195. — *Eximentes de pena.*)

605. — Tampoco puede decirse que el exceso provenga de dar golpes innecesarios cuando la víctima estaba caída, porque no debe confundirse exceso en los golpes con exceso en la defensa: aquel puede explicarse con el ardor de la lucha, que no permite muchas veces discernir si cesaron realmente los riesgos del ataque, mientras el último es achacable a una precipitación culposa. (*Sup. Corte de Tuc.*, mayo 13/41. — *Rep. Jurid.*, 4-2195. — *Eximentes de pena.*)

606. — La respuesta a los golpes de puño y puntapiés, sin mayor riesgo, con una cuchillada mortal y en el preciso momento que huía el agresor, descarta el eximente de legítima defensa y el exceso en la misma. (*Sup. Corte de Tuc.*, octubre 26/40. — *La Ley*, 21-874.)

607. — Después de las amenazas de la víctima, del disparo de revólver que efectúa y de su ataque armada con un cuchillo, no puede esperarse ningún desenlace pacífico por la sensación de peligro inminente, que produce la agresión. No había más solución que la defensa y ella no fué más allá del límite impuesto por la necesidad, que en este caso no puede ser medida con criterio de gabinete, sino con el que autoriza el ambiente que forma el momento del drama que impulsaba las acciones repulsorias. (*Cám. Fed. La Plata*, junio 4/38. — *J. A.*, 63-410.)

608. — 1º) Para establecer si existe exceso en la defensa, debe relacionarse el artículo 35 con el 34 inc. 6º del C. P., que requiere que medie agresión ilegítima por parte de la víctima. 2º) El homicidio cometido mediante el disparo de arma de fuego, no puede encuadrarse en el homicidio con exceso en la legítima de-



fensa, si la agresión de la víctima consistió en golpes de puños después de un cambio de palabras, desafiando al autor del hecho a pelear en otro lugar, sin mencionar arma alguna. (C. C. C., septiembre 2/36. — J. A., 55-1025.)

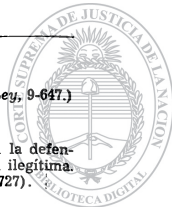
609. — El uso de un cuchillo para repeler la agresión llevada a cabo con una fusta tomada de la lonja, no llena el requisito a que se refiere el art. 34 inc. 6° apartado "b" del C. P. En tal supuesto el homicidio debe considerarse encuadrado en el art. 35 del C. P. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, diciembre 21/39. — *La Ley*, 18-513.)

610. — La absoluta irracionalidad del empleo de cuchillo para repeler la agresión, que se supone a mano abierta, y las circunstancias invocadas por el reo de haberlo hecho con el propósito de evitar que continuaran golpeándolo y en su defensa, demuestra la existencia de dolo. (C. C. C., septiembre 2/38. — *La Ley*, 12-920.)

611. — La evidente desproporción entre el golpe dado con la mano abierta que produce una contusión curable espontáneamente y sin incapacidad alguna, y el uso de un cuchillo, con el cual se infiere una herida punzo-cortante de 5 cms. de extensión en un espacio intercostal, que requiere una intervención quirúrgica y 25 días de curación, con incapacidad por igual tiempo, impide considerar que en el caso haya mediado solo un exceso en la legítima defensa. (C. C. C., septiembre 2/38. — *La Ley*, 12-919.)

612. — No ha existido la necesidad racional del empleo del cuchillo en la forma que lo hizo el procesado cuando el ataque de la víctima llevado a cabo con rebenque, se concreta al amago de un golpe después de una provocación verbal, lo que revela que careció de la intensidad y peligro indispensables para justificar la puñalada mortal que epilogó el incidente. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37. — *La ley*, 9-647.)

613. — Lo que constituye un medio racional necesario de repeler la agresión para un niño o para un individuo física o moralmente débil, frente a otro vigoroso y de acción, puede constituir un abuso de defensa en otro que no se halle en esas condi-



ciones. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 23/37. — *La Ley*, 9-647.)

614. — Las circunstancias calificantes de exceso en la defensa no pueden funcionar cuando no ha mediado agresión ilegítima. (*Sup. Corte de Bs. As.*, septiembre 23/8. — *La Ley*, 13-727.)

615. — Corresponde declarar que el procesado excedió los límites de la defensa, aunque haya sido agredido ilegítimamente, sin que mediara provocación suficiente de su parte, si no tuvo necesidad racional de emplear el cuchillo en la forma que lo hizo. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 28/37. — *La Ley*, 9-647.)

616. — El exceso en la defensa como atenuante, tiene atinencia con la necesidad racional del medio empleado, pero supone la necesidad actual de defenderse, vale decir, que el agente haya excedido los límites impuestos por la necesidad. (*Corte Suprema*, diciembre, 14/34. — *J. A.*, 49-11.)

617. — El Código Penal al equiparar el exceso en la defensa con el delito culpable, no distingue si el exceso obedeció a un terror extraordinario, a impresión súbita, o si proviene de agitación de espíritu, perturbación, miedo, etc., producido por la agresión. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, julio 3/34. — *J. A.*, 47-294.)

618. — Si se admite que medió agresión ilegítima de la víctima y falta de provocación del procesado, debe condenársele por homicidio con exceso en la defensa y no por homicidio simple, cuando falta el requisito de la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, junio 5/34. — *J. A.*, 46-1110.)

619. — El exceso en la defensa es la reacción de un peligro con exceso de temor, es un error de cálculo en la apreciación del peligro y en los medios necesarios para rechazarlo. (*Sup. Corte de Tuc.*, junio 9/34. — *J. A.*, 46-1174.)

620. — Para juzgar el exceso, debe concurrir un estado inicial de defensa legítima. (*Sup. Corte de Tuc.*, junio 9/34. — *J. A.*, 46-1174.)



ART. 36.— No es punible el menor de catorce años. Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla 18 años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores.

Si la conducta del menor en el establecimiento donde estuviere, diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estadía hasta que tuviere veintiún años.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III, artículo 2, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y Título IV, artículo 2. — Proyecto 1891, art. 59. — Proyecto 1906, art. 41, inciso "b". — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 93, incisos 1º y 2º y 96, inc. 1º. — Código derogado, art. 81, incisos 2º y 3º y art. 86, inciso 2º.

FUENTE: Proyecto del Dr. Moreno, inspirado en el proyecto Suizo de 1916, modificado por la comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-324 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-316, 342 y sigts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-38, 40, 45 y 414. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 357. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, (2a. ed.), 2-119. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 89. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 404. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 102. — ROBERTO GACHE, *La Delincuencia precoz*, Bs. Aires 1915. — CARLOS DE ARENAZA, *Menores abandonados y Delinquentes*. Bs. Aires, 1929-31. — TELMA RECA, *Delincuencia Infantil*, Bs. Aires, 1932. — RICARDO LUNA VEGAS, *Factores etiológicos de la peligrosidad en los menores*. Lima 1940.

AMLETO DONADIO, *El abandono y la vagancia de los menores*. (Archivos de Medicina Legal, Bs. As., mayo-junio 1938.) — O. GONZÁLEZ ROURA, *El Niño se halla fuera del derecho penal* (La Ley, 12, sec. doct., p. 89.) — CÉSAR VIALE, *La Infancia desamparada*. (La Ley, 7, sec. bibl., p. 7.) — ARMANDO M. RAGGI Y AGEO, *Criminalidad Juvenil y defensa social*. (La Ley, 8, sec. bibl., p. 6.) — ERNESTO NELSON, *La Delincuencia juvenil*. (La Ley, 4, sec. bibl., p. 7.) — LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, *De la vida infantil delincuente*. (La Ley 11, sec. bibl., p. 17.) — CARLOS DE ARENAZA, *Menores delinquentes —clasificación y estudio médico-psicológico—*. (Revista de Criminología, Psiquiatría y Med. legal. Bs. Aires 1923, p. 40.) — IDEM., *La readaptación social del menor delincuente*. (En la misma revista, Nov.-Dic. 1931.) — NERIO ROJAS, *La anormalidad psíquica en la delincuencia infantil*. (Archivos de Medicina legal Bs. Aires 1931.) — JOSÉ M. PAZ ANCHORENA, *Tribunales para menores*. (Revista de Crim. Psiq. y Med. legal, Nov.-Dic. 1933.)



— ERNESTO NELSON, *¿Por qué delinquen nuestros niños?* (Anales de la Soc. Arg. de Crim. Bs. Aires 1936.) — CARLOS DE ARENAZA, *Valoración de los factores biológicos y sociológicos en las reacciones antisociales de los menores.* (Rev. de Psiq. y Crim. Bs. As. Julio-Agosto 1938.) — ROBERTO BERRO, *Una magistratura tutelar debe completar la acción del Juzgado Letrado de menores.* (Rev. de Psiq. y Crim. Bs. Aires Julio-Agosto 1938.)

ART. 37. — Cuando el menor tuviese más de 14 años y menos de 18, se observarán las siguientes reglas:

- a) Si el delito cometido tuviere pena que pudiera dar lugar a la condena condicional, el tribunal quedará autorizado para disponer la colocación del menor en un establecimiento de corrección si fuese inconveniente o peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores o guardadores o de otras personas.

El tribunal podrá disponer esa colocación hasta que el menor cumpla veintiún años, pudiendo anticipar la libertad o retardarla hasta el máximo establecido cuando el término fijado fuese menor, si resultase necesario, dadas las condiciones del sujeto;

- b) Si el delito tuviese pena mayor, el tribunal queda autorizado para reducirla en la forma determinada para la tentativa.

ANTECEDENTES: (Ver los del artículo anterior.)

FUENTE: (Ver artículo anterior.)

CONCORDANCIA: Ver Ley 11.317 sobre Trabajo de menores y mujeres.

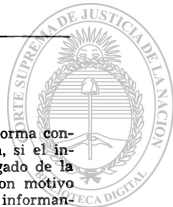
BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-324. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-46 y 376. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-346. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 102. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 92. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-347 y 2-219, 338. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 466. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-23*, p. 361. — SALTELLI CARLOS, *Asignación del menor extraviado a la casa de reeducación.* (Annali di Diritto e Procedura Penale. Turin 1938, p. 120.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 21. — Cuando el delito sea cometido por un menor de menos de diez y ocho años de edad, se aplicarán las siguientes disposiciones:

- a) Si los motivos que determinaron el delito, las circunstancias del mismo y las condiciones personales del menor evidencian que éste no acusa peligrosidad, el tribunal podrá dejarlo con sus padres o confiárselo a un tutor o guardador. Esta disposición será siempre revocable en interés del menor.
- b) Si no fuera conveniente dejarlo con sus padres o confiárselo a un tutor o guardador; si el menor se hallare moralmente abandonado, o si por las circunstancias previstas en el inciso anterior revelare peligrosidad, será internado en un establecimiento educativo adecuado, público o dependiente



JURISPRUDENCIA

621. — Procede mantener al menor condenado en forma condicional, internado en un establecimiento de corrección, si el informe que obra en autos establece que aquel se ha fugado de la casa de sus padres en tres oportunidades, la última con motivo del hecho por el que se le condena, estando a juicio del informante, propenso a delinquir, pues si bien el ambiente es serio e impresionante favorablemente, cree que los progenitores no sabrían imponerse al menor en forma de lograr su enmienda, dada la libertad de acción con que hasta ahora se desenvuelve. (C. C. C., noviembre 8/40. — *La Ley*, 20-982.)

622. — Cuando el delito cometido por el menor encuadra en el artículo 80 inciso 3° del C. P. corresponde aplicar la reclusión

de una institución privada, hasta los veintún años de edad. Pero, visto lo informado por el director del establecimiento, el tribunal podrá anticipar su salida, fundando la resolución en la desaparición de las causas que motivaron la internación o en la reforma moral del menor, la capacidad de las personas que lo tendrán a su cargo para dirigir su educación y la situación de ambiente donde vivirá, si de todo ello resulta conveniente la salida para su salud y adaptación social.

- c) Si el menor, al tiempo de intervenir el tribunal, hubiere cumplido quince años de edad y revelare una mayor peligrosidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 18; o si acusare perversión, impulsividad o tendencia a delinquir, será internado en un reformatorio o en sección especial de un establecimiento educativo público, por tiempo indeterminado.

Cuando el menor haya cumplido diez y ocho años de edad y siempre que hubiera transcurrido, por lo menos, un año desde su ingreso, si su conducta pusiere de manifiesto una reforma moral positiva o una modificación favorable de su personalidad, visto el informe del director del reformatorio, será trasladado a un establecimiento educativo o eximido del régimen de la sección especial, y permanecerá en él hasta los veintún años de edad. En caso de inadaptación al ambiente de este establecimiento, se procederá conforme a lo estatuido en la disposición siguiente.

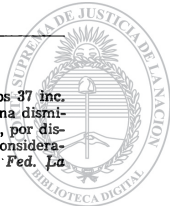
Si al cumplirse la edad y tiempo establecidos en el párrafo anterior no hubiere modificado su estado peligroso, el tribunal determinará la sanción conforme a lo dispuesto para los delinquentes mayores, y será trasladado al establecimiento que corresponda. En ningún caso, si la sanción estatuida para el delito fuera inferior a tres años de prisión, se acordará su salida antes de haber cumplido veintún años de edad.

Art. 22. — En los casos de los incisos a) y b) del artículo 21, el tribunal podrá disponer la libertad vigilada por intermedio de un delegado, en la oportunidad y por el tiempo que considere necesario.

Si el menor no observare las reglas de conducta que le fueren impuestas o si, posteriormente, sus hábitos de indisciplina, inmoralidad o perversión revelaren peligrosidad, será internado en un establecimiento educativo o habiendo cumplido quince años de edad, sometido al régimen disciplinario estatuido en el inciso c) del artículo anterior, pudiendo ordenarse su permanencia hasta que cumpla veintún años de edad.

Art. 23. — La dirección de un establecimiento público educativo podrá trasladar a un reformatorio o a la sección especial al menor que, habiendo cumplido quince años, sea conveniente, por motivos de conducta o inmoralidad, que permanezca en aquel establecimiento. En tal caso, si la internación en el reformatorio o sección especial durara más de un año o el traslado se dispusiera por tercera vez, deberá requerirse la autorización respectiva del tribunal, que ordenó la internación.

Art. 24. — Si cometido el delito antes de cumplir el menor diez y ocho años de edad, se le procesara o sentenciara definitivamente, después de haberlos cumplido, el tribunal podrá aplicar las disposiciones anteriores, referentes a la misma



de 15 a 20 años en mérito a lo dispuesto por los artículos 37 inc. "b" y 44 del citado código, pues no procede en el caso una disminución de pena por razones de edad, dado que este factor, por disposición legal, es calificativo y no puede ser tomado en consideración dos veces, respecto de la misma finalidad. (Cám. Fed. La Plata, mayo 20/40. — *La Ley*, 19-94.)

riedad, o las sanciones estatuidas para los delinquentes mayores.

Art. 25. — Si el menor necesita ser sometido a un tratamiento especial por deficiencia de sus sentidos o porque fuera retardado biológico o padeciera enfermedades mentales, nerviosas o infecto-contagiosas será internado en el establecimiento que corresponda, cuando no sea posible o conveniente dejarlo con sus padres, tutor o guardador.

En caso de retardo biológico o enfermedad mental o nerviosa, si al tiempo de cumplir el menor veintitún años de edad persistiera el estado peligroso, permanecerá internado conforme a lo dispuesto en el artículo 62.

Art. 26. — En todos los casos el tribunal estudiará la personalidad del menor y apreciará las condiciones familiares y de ambiente en que ha vivido, tomando conocimiento directo del menor y haciendo practicar las informaciones y pericias necesarias para aplicar las sanciones que convengan a su educación y tratamiento.

Art. 27. — La internación en un establecimiento educativo, público o dependiente de una institución privada, consiste en un régimen psicopedagógico adecuado a la formación del carácter, instrucción primaria elemental, cultura física y enseñanza de un oficio o profesión.

Art. 28. — La internación en un reformatorio o en sección especial de un establecimiento adecuado, público, consiste en un régimen disciplinario con aislamiento nocturno, instrucción elemental y trabajo obligatorio.

LEY DE PATRONATOS DE MENORES Nº 10903

(Los artículos 1 a 13 se refieren a cuestiones civiles. Insertamos solamente los artículos 14 y siguientes que regulan el procedimiento penal en las causas en que intervienen menores. La aplicación de estos artículos ha sido reglamentada por una Acordada de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de fecha 24 de octubre de 1919.)

Art. 14. — Los jueces de la jurisdicción criminal y correccional de la Capital de la República y en las provincias y territorios nacionales, ante quienes comparezca un menor de dieciocho años acusado de un delito o como víctima de un delito, podrán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo a una persona honesta, parente o no, o a un establecimiento de beneficencia privado o público, o a un reformatorio público de menores. A ese efecto no registrarán en los Tribunales Federales, ordinarios de la Capital y de los Territorios Nacionales, las disposiciones legales sobre prisión preventiva, la que sólo será decretada cuando el juez lo juzgue necesario y se cumplirá dónde y cómo él mismo lo indique. Podrán también dejarlos a sus padres, tutores o guardadores bajo la vigilancia del Tribunal.

La resolución judicial será susceptible de los recursos de revocación y apelación en las mismas condiciones prescriptas en el artículo 19.

Art. 15. — Los mismos jueces cuando sobresean provisoria o definitivamente respecto a un menor de diez y ocho años, o cuando lo absuelvan, o cuando resucivan definitivamente en un proceso en que un menor de dieciocho años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los veintitún años si se hallare material o moralmente abandonado, o en peligro moral y en la misma forma establecido en el artículo anterior.

Art. 16. — Los jueces correccionales en la justicia nacional de la Capital y en los Territorios Nacionales, entenderán en primera y única instancia, en todos los casos de faltas y contravenciones imputadas a menores de dieciocho años y aplicarán las disposiciones de los artículos anteriores.

Art. 17. — Todo menor de que hayan dispuesto los jueces indicados en los tres artículos anteriores, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria.

Art. 18. — Los mismos jueces en los procesos a que se refiere el artículo 14 podrán imponer en cada caso a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que no importen delitos del derecho penal, multas hasta la suma de doscientos pesos o arresto hasta un mes, o ambas penas a la vez.

Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieran seguridades de reforma quedando prescriptas en el plazo de dos años si no incurrieren en hecho de la misma naturaleza.

Art. 19. — Los padres o tutores de los menores de quienes hayan dispuesto



ART. 38. — El menor que no ha cumplido diez y ocho años no puede ser declarado reincidente.

ANTECEDENTES: Ver los del artículo 36.

FUENTE: Ver la del artículo 36.

BIBLIOGRAFIA

J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-220. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-348. — EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-327. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-435. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 449. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), p. 92 y sgts. — JOSÉ L. ARAYA, *La Protección de los menores* (Revista del Colegio de Abogados de Rosario, enero-abril 1937, p. 14. — JOSÉ L. ARAYA, *La doctrina y la jurisprudencia sobre inaplicabilidad de pena en los delitos cometidos por menores de 18 años.* (*La Ley*, 24 de agosto de 1941.) — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 102.

JURISPRUDENCIA

623. — Las condenas sufridas por el reo antes de cumplir los 18 años de edad, deben computarse para la aplicación de la medida de seguridad determinada por el artículo 52 del C. P. (C. C. C., abril 26/27. — Fallos, 2-325.)

definitivamente los jueces de la jurisdicción criminal o correccional, o que hayan sido condenados en virtud del artículo anterior, podrán solicitar revocatoria de esas resoluciones, dentro de cinco días de la notificación de las mismas. Esta oposición se substanciará en una audiencia verbal, con las pruebas que ordene el juez o indique el recurrente, si el Juez lo juzgare pertinente.

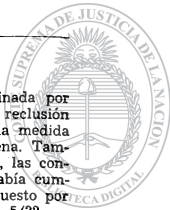
La resolución será apelable en relación.

Art. 20. — Los tribunales de apelación en lo criminal y correccional de la justicia nacional ordinaria de la Capital y Territorios Nacionales, designarán al lo juzgan conveniente, uno o más jueces para que entienda exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones en los procesos en que se acusa a menores de dieciocho años, reglamentarán la forma de la cooperación policial en los sumarios e informaciones respectivas la cooperación de los particulares o establecimientos particulares o públicos que se avengan a coadyuvar gratuitamente en la investigación, y en la dirección y educación de los menores; así como también la forma de la vigilancia que corresponda a los jueces en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 17.

Art. 21. — A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral, o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido dieciocho años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres, guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo presentará el plan general para la construcción, en la Capital y en las Provincias y Territorios Nacionales, de escuelas especiales para los menores expuestos o abandonados y para la detención preventiva de los menores delincuentes o de mala conducta, y la construcción de reformatorios para menores delincuentes o de mala conducta, con imputación a la presente ley.

En estas escuelas y reformatorios registrará el trabajo de talleres y agrícola



624. — La prescripción de la reincidencia determinada por el artículo 53 del C. P., no obsta a la aplicación de la reclusión accesoria prevista por el artículo 52 porque ésta es una medida de seguridad, que se aplica independientemente de la pena. También son computables para la ejecución de esa medida, las condenas anteriores sufridas por el reo cuando aún no había cumplido veintiún años inclusive la que se le hubiere impuesto por primera vez en forma condicional. (C. C. C., febrero 5/32. — Fallos, 2-326.)

ART. 39. — *En todos los casos de delito cometido por un menor, el tribunal puede privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela. Podrá también disponer el cambio de guardadores. Para tomar esas medidas se tendrán en cuenta las situaciones respectivas del menor, sus padres, tutores o guardadores y lo que convenga al desenvolvimiento moral y educacional del primero.*

ANTECEDENTES: Ver los artículos anteriores y la Ley de Patronato de Menores.

FUENTE: Ver la del artículo 36.

como principal elemento educativo de los menores reclusos, quienes serán parte en el beneficio pecuniario de esos trabajos.

Las colonias-escuelas y las colonias reformativas ubicadas cerca de las ciudades o en pleno campo serán el tipo preferido de estas casas de prevención y reforma de los menores.

Art. 23. — Los asilos, escuelas primarias gratuitas generales y especiales y particularmente las de práctica técnica, como los demás establecimientos de beneficencia privados, que reciben niños, subvencionados por el Estado, están obligados a recibir en secciones que podrán ser especiales, un número determinado de menores, remitidos por los jueces en virtud de esta ley, de acuerdo con la subvención recibida, la naturaleza del establecimiento y la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 24. — Los parientes de los menores y las instituciones de beneficencia o de patronato de niños, podrán denunciar las transgresiones de esta ley, si se tratase de los jueces a los cuerpos encargados de acusarlos o de juzgarlos, y si se tratase de los defensores o asesores de menores, a los funcionarios con facultad para controlarlos o removerlos.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a veintinueve de septiembre de mil novecientos diez y nueve.

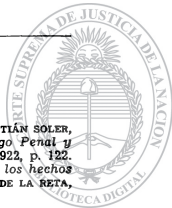
REGISTRADA BAJO EL N.º 10.903

Dirección de Justicia.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1919.

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

IRIGOYEN
J. S. Salinas.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-314 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-415. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-349. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 122. — ARTURO ACUÑA ANZORENA, *Responsabilidad de los padres por los hechos dañosos de sus hijos menores*. (*La Ley*, 20-490.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-347 y 2-220.

JURISPRUDENCIA

625. — A pesar de la absolución del padre en primera instancia —que quedó consentida— debe quitársele la patria potestad sobre una de las hijas condenada por aborto, ya que existe conveniencia en apartarlo de ella, pues habría mantenido relaciones incestuosas con aquél. (*Sup. Corte de Tuc.*, abril 5/41. — *La Ley*, 22-938.)

626. — Perdida por el padre la patria potestad por efecto de la condena por el delito de uxoricidio cometido, su indulto no lo reintegra en ella. (*Cám. Civil Primera, Cap.* — *Gaceta del Foro*, 63-459.)

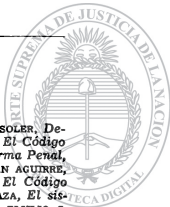
ART. 40. — *En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes, particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Títulos IV, V y VI. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 96 y 97. — Proyecto 1891, arts. 60, 61, 62, 63 y 64. — Código derogado, arts. 52, 53, 83, 84 y 88. — Ley 4189, arts. 6 y 15. — Proyecto 1906, arts. 42 y 43.

FUENTE: Proyectos 1891 y 1906 (artículos arriba citados).

PROYECTO COLI-GÓMEZ (1937)

Art. 29. — *En todos los casos de delito cometido por un menor, o cuando un menor sea víctima de delito, el tribunal podrá declarar la pérdida de la patria potestad o suspender su ejercicio y privar de la tutela o guarda a los tutores o guardadores.*



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-608. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-202, 237, 392, 422. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-352 y 379. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 485. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal 1917-20*, p. 375. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 109. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 104. — JUAN D. RIGHETTI Y FRANCISCO P. LAPLAZA, *El sistema de los artículos 40 y 41 del C. Penal. Bs. As. 1934*. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg. (3a. ed.)*, p. 100. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-50.

JURISPRUDENCIA

(Ver la del artículo 41.)

ART. 41. — A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

- 1º) *La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados;*
- 2º) *La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad (¹). El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso (²).*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Títulos IV, V y VI. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 96 y 97. — Proyecto 1891, arts. 60 al 64. — Proyecto 1906, arts. 42 y 43. — Ley 4139, arts. 6 y 15. — Código derogado, arts. 52, 53, 83, 84 y 88.

FUENTE: Proyectos 1891 y 1906 (arts. citados).

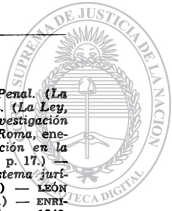


BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-47 y siguientes y página 608. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-111-206, 208 y 2-202, 237, 316, 422, 429, 438, 440. — INGENIEROS JOSÉ, *El V Congreso Internacional de Psicología (Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias afines, Buenos Aires, volumen IV, p. 348.)* — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-383. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 485. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal*, 1917-20, p. 375. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 109. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 104. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg. (3a. ed.)*, p. 100 y sgts. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, (2a. ed.), 2-175 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-50 y 2-221, 307, 341, 345. — ALEXANDER Y STAUB, *El delincuente y sus juces desde el punto de vista psicoanalítico (traducción del alemán por Goldchmit y Conde)*. Madrid, 1935. — ANDRADE MARIANO B., *Estudio de antropología criminal espiritualista*. Madrid, 1899. — CASTEJÓN F., *Tratado de la responsabilidad penal*. Madrid 1926. — BELTRÁN J. R., *La psicoanálisis al servicio de la criminología*, Buenos Aires, 1923. — INGENIEROS JOSÉ, *Criminología (clasificación de los delincuentes)*. Madrid 1913. — OXAMENDI R. A., *Crimino-Criminología (Biología criminal - Biotipología humana)*. La Habana, 1938. — PEIXOTO, *Criminología (Crimes é criminosos)*. Rio de Janeiro, 1933. — EMILIO PIZARRO CRESPO, *Psicología y Profilaxis de los Delitos. Delincuentes por autopenición*. Bs. Aires, 1939. — POLLITZ P., *Psicología del Delincuente (Traducción del alemán por V. Guerra)*. Barcelona, 1933. — PRINS A., *Criminalidad y represión (Trad. por M. Núñez de Arena)*. Madrid, 1911. — QUIRÓS C. B. DE, *Las nuevas teorías de la Criminalidad*. Madrid, 1908. — DORADO P., *La Psicología Criminal en nuestro derecho legislativo*. Madrid, 1910. — DRAGO LUIS MARÍA, *Los Hombres de Presa*. Bs. Aires, 1921. — FERÉ CH., *Degeneración y Criminalidad*. Madrid, 1903. — FERRI E., *Sociología Criminal*. Madrid, 1908. — FERRI E., *El Homicida en la Psicología, y en la Psicopatología Criminal (Estudio sobre Ferri y Notas de Mase-reau)*. Madrid, 1930. — GONZÁLEZ A., *El Problema de la Responsabilidad Penal*. Madrid, 1927. — VEYGA F. DE, *Degeneración y Degenerados (Misericordia, vicio y Delito)*. Buenos Aires, 1938. — FERRI E., *Principios de Derecho Criminal*. Madrid, 1933. — MAC DONALD A., *El Criminal tipo en algunas Formas Graves de la Criminalidad*. Madrid, 1925. — URSTEIN M., *Criminalidad y Psicosis (Estudio Forense sobre la catatonia)*. Bs. Aires, 1930. — TARDE GABRIEL, *Filosofía Penal*. — M. RUIZ FUNES, *Endocrinología y Criminalidad*. Madrid, 1929. — LUIS VERVAEK, *El Estudio de la Personalidad del Delincuente. (Revue de Droit Penal et de Criminologie. Bruselas, enero 1939, p. 22.)* — MARIO CALZIA PINTOR, *Estudio de la Personalidad del Delincuente. (La Scuola Positiva. Milán 1939 (parte 1ª), p. 75.)* — VITO BAVARO, *El Estudio de la Personalidad del Delincuente. (La Scuola Positiva. Milán, mayo-junio 1939, p. 157.)* — EMILIO C. DÍAZ, *Adecuación de la*

(1) Ley 11.752 de octubre 9 de 1933, sobre Registro Nacional de Reincidentes: "Esta ley, se tendrá como complementaria del C. Penal, a los efectos de apreciar la "peligrosidad del autor del hecho, según las previsiones de aquel Código y de poder "hacer uso de las facultades que el mismo confiere a los jueces". (Art. 7º)

(2) Dentro del sistema de nuestro Código Penal, el juez, en cada caso, deberá interiorizarse de la personalidad del delincuente para la graduación de la pena a imponer. Por ello, las disposiciones de este artículo, han sido contempladas en cada uno de los fallos citados en esta obra. La jurisprudencia que le acreditamos al artículo, es pues, a solo título informativo. En cambio, le consignamos toda la bibliografía referente al delincuente por ser el artículo básico para su apreciación.



Sanción al Delincuente en el Proyecto Argentino de Código Penal. (La Ley, 12 sec. doct., p. 1.) — LORENZO CARNELLI, *La Premeditación.* (La Ley, 4 sec. doct., p. 97.) — AUGUSTO DELFINO, *Nuevos Métodos de Investigación en el Campo de la Psicología Criminal.* (La Giustizia Penale. Roma, enero 1936 (1ª parte), p. 31) — DANTE ANGELOTTI, *La Premeditación en la Doctrina y en la Jurisprudencia.* (La Ley, 16 sec. rev. de rev., p. 17.) — MARIO DONDINA, *Personalidad Moral del Delincuente en el sistema jurídico penal Italiano.* (La Scuola Positiva Milán, 1939, p. 22.) — LEÓN LATTES, *El Delincuente inválido.* (La Ley, 19 sec. doct., p. 31.) — ENRIQUE CORDOVA, *De la Premeditación.* (Revista Penal de La Habana, 1940. Nos. 3 y 4, p. 121.) — JUAN P. RAMOS, *El Juicio Penal y el Delincuente.* (Rev. Penal Argentina, 4-73.)

BIBLIOGRAFIA SOBRE ESTADO PELIGROSO. *Proyectos de 1926 y 1928 que forman parte del Proyecto de Reformas al Código Penal de 1932, Sancionado por el Senado.* (Ver el texto en "Boletín de la Biblioteca Nacional de Criminología" número 3.) — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *El estado peligroso.* Madrid, 1922. — SEBASTIÁN SOLER, *Exposición y Crítica del Estado Peligroso.* Córdoba, 1926, y *El Elemento Político de la Fórmula del Estado Peligroso en la Legislación Argentina.* (Revista de Criminología, Psiquiatría, etc.; Buenos Aires 1927, N° 82.) — ID., *La Peligrosidad en el Código Penal.* (Revista Penal Argentina, tomo 4, p. 5.) — JOSÉ PECCO, *El Proyecto de Estado Peligroso.* (Revista Penal Argentina, t. 4.) — OSVALDO LOUDER, *Los Índices Psicológicos de la Peligrosidad.* (Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal, año 1932.) — GREGORIO BERGMANN, *Los Peritos Médicos Ante el Juicio de Peligrosidad* (Boletín de la Biblioteca Nacional de Criminología y Ciencias Afines, Buenos Aires julio de 1928.) — ID., *El Juicio Pericial y el de Peligrosidad.* (Revista Semana Médica de Buenos Aires, 1929.) — EMILIO DÍAZ, *La Seguridad Pública y el Estado Peligroso.* (Revista Penal Argentina, año 1925.) — A. R. NAPOLITANO, *El Proyecto de Estado Peligroso de 1924.* (Revista de Crim. Psiquiatría y Med. Legal. Buenos Aires, 1931.) — ISIDORO DE BENEDETTI y ROBERTO LASALA, *El Proyecto de Estado Peligroso Sin Delito de 1928.* (Revista de Crim. Psiquiatría y Med. Legal. Buenos Aires, 1931.) — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *Ver su Estudio en "El Nuevo Código Penal Argentino".* Madrid, 1928. — ALFREDO J. MOLINARIO, *La Peligrosidad Criminal como Fundamento y Medida de la Responsabilidad Penal.* (Revista de Psiquiatría y Criminología). Buenos Aires, octubre de 1938.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 17. — Serán consideradas circunstancias de mayor peligrosidad en el delincuente, cuando no hayan sido previstas como elemento constitutivo o como calificativas del delito:

- 1º La vida precedente, personal, familiar y social, disoluta, deshonesto o parasitaria.
- 2º Los antecedentes judiciales por delitos y faltas.
- 3º Las condiciones orgánicas y psíquicas anormales, aunque no constituyan afección ni traduzcan indole criminal, si han podido influir en la comisión del delito.
- 4º Haber obrado por motivos innobles o fútiles.
- 5º El tiempo, el lugar, los instrumentos y el modo de preparación, ejecución y consumación del delito; las formas de participación en el mismo; la relación familiar o social con la víctima y la situación de inferioridad en que ésta haya podido encontrarse, en cuanto tales circunstancias acusen una mayor insensibilidad moral.
- 6º Haber agravado las consecuencias del delito.
- 7º Haber observado, después del delito, una actitud agravante hacia la víctima, el perjudicado, la autoridad o las personas que hubieran acudido al lugar del hecho.
- 8º Haber cometido el delito cuando razones de cargo, profesión u otra situación particular crearan, para el autor, la obligación de una más digna conducta personal y social.



JURISPRUDENCIA

627. — La omisión del conocimiento “de visu” del reo por parte del juez, no es causa de nulidad de la sentencia. (*Cám. Fed. Capital*, marzo 12/41. — *La Ley*, 21-821.)

628. — La ebriedad parcial del prevenido puede obrar como atenuante. (*Sup. Tribunal de San Luis*, febrero 20/40. — *La Ley*, 18-280.)

9º En los delitos por culpa, el haber causado el daño en circunstancias que lo hacían muy probable y fácilmente previsible.

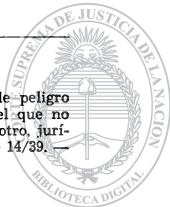
Art. 18. — Serán consideradas circunstancias de menor peligrosidad en el delincuente:

- 1º La dignidad en la vida personal, familiar y social.
- 2º El haberse distinguido por una conducta meritoria en el ejercicio de un cargo o profesión o por la realización de actos que revelen acentuados sentimientos sociales.
- 3º El haber delinquido en un estado de intoxicación transitoria, no provocada, ni previsible.
- 4º El haber obrado por la sugestión de una multitud, de una asamblea en tumulto, o en circunstancias de excitación pública, cuando la personalidad del agente no acuse las anomalías previstas en el N° 3 del artículo anterior.
- 5º Haber procurado, espontánea y diligentemente, evitar o disminuir las consecuencias del delito o el daño causado, inmediatamente después de la comisión.
- 6º La confesión del delito en forma y circunstancias que revelen remordimiento.
- 7º La miseria, cuando la naturaleza del delito y las circunstancias que lo rodearon la señalen como causa determinante.

Art. 19. — La enumeración de circunstancias de mayor o menor peligrosidad hecha en los artículos anteriores, no impedirá la consideración de otras que, fundadas en el conocimiento de la personalidad del delincuente, en la apreciación de los motivos que lo determinaron y en la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, permitan establecer el grado de la peligrosidad. La valoración de cada una de las circunstancias de mayor o menor peligrosidad será hecha en relación a la personalidad del sujeto, integralmente considerada.

Art. 20. — En razón de las circunstancias previstas en los artículos 17 y 18 de este Código y de las que puedan resultar por aplicación del artículo que antecede, el tribunal establecerá, de una manera fundada, la relación existente entre el delito cometido y las condiciones personales de su autor, para determinar:

- a) Si cometió el delito, cediendo, exclusivamente, a una ocasión especial y transitoria.
- b) Si cometió el delito en el ímpetu de una pasión social o en un estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable.
- c) Si cometió el delito en estado de alienación mental, grave anomalía psíquica, inconsciencia completa o intoxicación crónica de alcohol, drogas o estupefacios.
- d) Si la naturaleza y modalidades del delito o delitos cometidos, los motivos determinantes o las condiciones personales, demuestran su fadole criminal.
- e) Si con la comisión de dos o más delitos anteriores, no culposos, y considerados las mismas circunstancias y el género de vida llevado, demuestra haber adquirido el hábito de delinquir o su tendencia a vivir, aunque sólo sea en parte, de los provechos del delito.
- f) Si antes fué condenado, en el país o en el extranjero, por otro delito, que no sea militar o político, aunque hubiere mediado indulto o conmutación; y si la reincidencia, tenidas en cuenta las circunstancias específicas en los dos párrafos anteriores, lo presentan como un sujeto peligroso.



629. — El estado de necesidad es una situación de peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en el que no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro, jurídicamente protegidos. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 14/39. — *La Ley*, 17-856.)

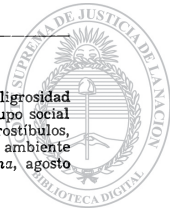
630. — En el estado de necesidad se contempla: La actualidad o inminencia del mal que amenaza; la injusticia del mal o el peligro que se trata de evitar; la imposibilidad de impedirlo por otro medio que no sea el sacrificio del bien ajeno; que tal estado no surja con la conducta intencional del agente. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 14/39. — *La Ley*, 17-856.)

631. — Si bien el artículo 41 del C. P. se refiere especialmente a “la miseria” como atenuante, esto no excluye en absoluto la posibilidad de que se ofrezcan casos excepcionales que caigan en el estado de necesidad, del artículo 34, inciso 3° del C. Penal. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 14/39. — *La Ley*, 17-856.)

632. — La ebriedad para constituir un atenuante, debe ser casual e involuntaria. Cuando ella es habitual, debe considerarse como circunstancia agravante. (*Corte Suprema*, septiembre 29/39. — *La Ley*, 16-390.)

633. — El artículo 41 del C. P., al establecer que el conocimiento directo y “de visu” de la persona del procesado, lo tomará el juez en la medida requerida para cada caso, deja así librado al criterio del magistrado, la forma de cumplimiento de esta prescripción que, indudablemente, conviene observar, pero sin que la omisión de la misma, pueda invocarse como causal de nulidad de la sentencia. (*C. C. C.*, agosto 8/39. — *La Ley*, 15-748.)

634. — Si bien no puede contarse entre los antecedentes del imputado un proceso anterior por homicidio y lesiones graves, la circunstancia de su fuga y captura después de operada la prescripción de la acción penal, debe tomarse en consideración para formar el concepto de su peligrosidad. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, abril 13/39. — *La Ley*, 16-603.)



635. — Entran especialmente en el campo de la peligrosidad pre y post delictual, los sujetos que pertenecen a ese grupo social peligroso de los holgazanes, habituados moradores de prostibulos, que viven del miserable trabajo de las prostitutas, en ambiente propicio al delito en todas sus formas. (*Corte Suprema*, agosto 1/38. — *La Ley*, 11-566.)

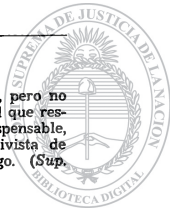
636. — Aunque la frecuencia con que acontece en la sociedad un hecho ilícito no constituye un factor de juicio para disminuir la sanción de un caso dado, no es posible substraerse en absoluto a la tolerancia que, en las prácticas comerciales, se observa con respecto a ciertas modalidades que propendan a obtener una mayor ganancia y que dificultan el criterio distintivo entre lo lícito y el delito. (*C. C. C.*, mayo 24/38. — *La Ley*, 11-467.)

637. — El juez en el procedimiento penal, fuera de la limitación a pronunciarse sobre los hechos acusados, no está obligado ni por la calificación legal hecha por el Ministerio Público ni por la cantidad de la pena solicitada por dicho funcionario: en ese sentido no falla nunca “extra petitem”. (*C. C. C.*, junio 21/38. — *La Ley*, 11-194.)

638. — Es la temibilidad del agente, su grado de peligrosidad dentro del criterio defensivo de nuestro código, lo que ha servido de pauta para la fijación de las penas y es obvio entonces, que no se conseguiría el fin social, si se dejara librada a la influencia de las leyes civiles, la interpretación criminosa de los hechos. (*Primera Instancia*, Cap. marzo 25/38. — *La Ley*, 10-128.)

639. — Revela máxima peligrosidad el reo que estrangula con insensible egoísmo al niño de la que fué su amante, ejecutando una venganza transversal. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 11/38. — *La Ley*, 11-160.)

640. — Con la supresión del artículo 6° del C. Penal anterior,



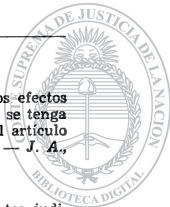
se dejó a los jueces una mayor libertad de apreciación, pero no se derogó el principio fundamental de la inimputabilidad que responde a la lógica más rigurosa y que es socialmente indispensable, máxime dentro de un sistema legal práctico y positivista de política criminal, como el que ha seguido nuestro Código. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 3/38. — *La Ley*, 11-244.)

641. — Las circunstancias acreditadas de que el encausado abandonó a su primera esposa en estado de gravidez y con una hija de escasa edad, y que al poco tiempo contrajo segundo matrimonio con una joven a la cual estaba ligado por vínculos de parentesco, demuestran inequívocamente la falta de concepto moral por parte del nombrado, condición que, de acuerdo con las reglas de los artículos 40 y 41 del Código Penal debe tenerse en cuenta para fijar la pena. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, junio 24/37. — *La Ley*, 10-560.)

642. — Debe atenuarse la pena impuesta días antes de la prescripción de la acción. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 21/36. — *J. A.*, 57-613.)

643. — El estado peligroso como índice de la mayor severidad de las penas (artículo 41 C. P.) no requiere para cada nota o detalle la plena prueba que el C. de Procedimientos Criminales exige para la condena (Arts. 438 y 495). Dicho estado o condición, puede surgir no sólo de las pruebas mismas del delito, de la forma en que éste se realizó y de los fines que el delincuente ha perseguido, sino también del medio ambiente en que él mismo vive, de su vida viciosa, de su vinculación con individuos criminales o inmorales; salvo pruebas en contrario, merecen fe los informes de la policía, propios de su carácter de institución de previsión y defensa social. (*Corte Sup.* julio 21/37. — *J. A.*, 59-27.)

644. — Debe considerarse como sujeto de particular peligrosidad, el delincuente que es un degenerado impulsivo, orgulloso, con perversiones morales, alcoholista, mujeriego, con preferencia por los elementos de la mala vida, que carece de los factores de frenación moral para sus impulsos antisociales, y que tiene el suficiente ingenio para simular estados neuro o psico-patológicos. (*Corte Suprema*, agosto 24/36. — *J. A.*, 55-392.)



645. — La prescripción de la condena anterior, a los efectos de considerar al reo como reincidente, no obsta para que se tenga en cuenta tal antecedente a los efectos estatuidos por el artículo 41 del C. Penal. (*Sup. Corte de San Luis*, mayo 23/36. — *J. A.*, 55-350.)

646. — Es improcedente el pedido de los antecedentes judiciales o policiales del querellante, solicitado por el querellado, como así también la remisión ad-effectum videndi de procesos seguidos contra aquél. (*C. C. C.*, abril 28/33. — *Fallos*, 1-45.)

647. — El sistema de individualización de la pena adoptado por el Código exige mayor energía en la represión del delito cometido por el sujeto que vive en estado peligroso. (*C. C. C.*, abril 19/33. — *Fallos*, 2-214.)

648. — Si bien en el nuevo Código Penal no se ha variado el fundamento de la responsabilidad penal, se ha introducido una variante de acuerdo con el criterio de la peligrosidad del delincuente. (*C. C. C.*, septiembre 12/24. — *Fallos*, 485.)

649. — La circunstancia de haber concurrido el procesado al lugar del hecho armado de revólver; su fuga inmediata sin tratar de remediar el daño producido, y la agresión a quien fué su protector, denotan la peligrosidad del agente. (*C. C. C.*, marzo 9/34. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-41.)

TITULO VI

TENTATIVA

ART. 42. — *El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título II; arts. 1, 6, 7, 8, 9. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 9, 10, 11. — Proyecto de 1891, art. 65. — Proyecto 1906, art. 44. — Código derogado, art. 8.



FUENTE: Redactado por la Cámara de Diputados (Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-458 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-111, 206, 208 y 2-180, 186, 196, 208, 209, 309. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-387. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-43 y sgts. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-456. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 503. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 231. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 104. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-69 y 2-109, 224, 309. — FRANCISCO CARRARA, *Teoría de la tentativa y la complicidad o sea del grado en la fuerza física del delito*. (Traducción de Romero Girón. Madrid, 1887.) — FEDERICO BENÉVOLO, *Il tentativo nella dottrina, nella legge e nella giurisprudenza*. Torino, 1887. — L. GRANATA, *La instigación al delito no aceptada, es una tentativa punible*. (Annali di Diritto e Procedura Penale. Turin, julio 1936, p. 650.) — JOSÉ PECO, *La tentativa en el Código Penal Argentino*. (La Ley, 15, sec. doct., p. 1.) — PECACH ROBERTO, *La persistencia de la tentativa criminal y la prescripción*. (J. A., 66-982.)

JURISPRUDENCIA (1)

650. — El delito de tentativa es relativo y para establecerlo, deben considerarse las cosas en concreto con relación al hecho presupuesto y al modo en que ordinariamente se ejecuta. (Cám. Apel. de Rosario, Sala Crim., noviembre 16/38. — La Ley, 13-384.)

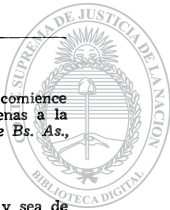
651. — Confesada y madurada la intención de matar, hay dolo determinado y el caso ha de juzgarse como tentativa de homicidio. (Sup. Corte de Tuc., abril 27/37. — Rec. Ord., Cuad. 7-106.)

652. — La tentativa es punible, aun cuando el perjuicio no se haya producido, siempre que sea evidente la intención de cometer el delito, exteriorizada por actos que se relacionen con el mismo. (Cám. Fed. La Plata, noviembre 13/36. — J. A., 56-414.)

(1) Citamos la parte doctrinaria de algunos fallos y no los casos de tentativa en particular, pues ellos van incluidos en el lugar correspondiente a la jurisprudencia de cada uno de los delitos en que es posible la tentativa.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 1º — Cuando se ha comenzado la ejecución de un delito y éste no se consuma por circunstancias fortuitas o independientes del autor, se aplicarán las sanciones conforme a lo dispuesto en el Título VI.



653. — Para que exista tentativa, es necesario que se comience la ejecución de un delito y que por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, no se lo consume. (*Sup. Corte de Bs. As.*, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)

654. — Para que el acto deje de ser preparatorio y sea de ejecución, debe tender directa e inmediatamente a la perpetración, de modo que pueda considerarse al agente como estando en acción del delito que quiere realizar. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 8/34. — *J. A.*, 48-319.)

655. — Revelada por actos exteriores la intención (*animus occidendi*) de consumir un delito determinado, valiéndose de un medio adecuado o idóneo al efecto, el procesado debe responder en relación a aquél y no en la extensión del delito y daño que en realidad perpetró. (*C. Ap. de Rosario*, abril 6/35. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-82.)

656. — La tentativa recae en los actos de ejecución, no en los simplemente preparatorios, siendo éstos, los que no se relacionan en el concepto externo con el delito, aunque esa resolución estuviera en la mente del sujeto. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 8/34. — *J. A.*, 48-319.)

657. — Para la existencia de tentativa punible se requiere, además del hecho material de haber comenzado la ejecución de un delito determinado, la concurrencia de un elemento intencional, consistente en la resolución, el propósito de consumir un delito cierto, determinado en especie. (*Sup. Corte de Bs. As.*, septiembre 20/35. — *J. A.*, 52-271.)

658. — Si la intención delictuosa se exteriorizó, es menester distinguir si se trata de actos de preparación o de ejecución. Respecto a los de preparación, existe sanción, cuando por su peligrosidad se consideran verdaderos delitos: fabricación de explosivos, asociación ilícita, conspiración, instigación, falsificación, etc.: en caso contrario, compra del arma o veneno, instrumento para la efracción, llave, ganzúa, etc., no existe sanción. (*Sup. Corte de Bs. As.*, agosto 18/33. — *J. A.*, 43-305.)



659. — La sola, simple y pura intención de cometer un hecho delictuoso no es punible, pero si lo es, el o los actos que ponen en evidencia el cumplimiento de esa intención. (*Sup. Corte de Bs. As.*, agosto 18/33. — *J. A.*, 43-305.)

660. — Para que haya tentativa punible debe probarse que el agente tenía el propósito de cometer un delito cierto, preciso y determinado, propósito que salió del fuero interno, pasó por los actos preparatorios y llegó a actos de ejecución, por medios inequívocos dirigidos a consumar el delito, el que no pudo llevarse a cabo, por causas ajenas a la voluntad del agente. (*Sup. Corte de Bs. As.*, agosto 18/33. — *J. A.*, 43-305.)

ART. 43. — *El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título II; art. 2º. — Proyecto Villagas, Ugarriza y García, arts. 13, 14, 15. — Proyecto 1891, arts. 66 y 67. — Proyecto 1906, arts. 45 y 46. — Código derogado, arts. 9 y 10.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-458. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-169, 205, 208, 209. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 283. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Arg.*, p. 11. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 104 y sgs. — RAUL ALBERTO FROSALL, *Desistimiento de la tentativa criminal y la concepción científica de Eugenio Florián*. (*La Scuola Positiva*. Milan, 1940. Nos. 5 y 6, p. 97.) — RODOLFO MOREÑO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-403. — JOSÉ PECO, *La reforma penal de 1917-20*, p. 398.

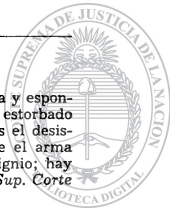
JURISPRUDENCIA

661. — Para que exista desistimiento de la tentativa, es pre-

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 8º — El desistimiento espontáneo de la tentativa no da lugar a otra sanción que la que pueda corresponder a los actos de ejecución realizados, en cuanto ellos revistan el carácter de delitos.

Art. 9º — El mandato y el acuerdo para cometer un delito determinado, cuando no son seguidos de ejecución, así como el mandato, para el mismo fin, que no sea aceptado, serán sometidos a las sanciones que correspondan, conforme a lo dispuesto en el Título VI.



ciso que la causa del abandono, sea libremente voluntaria y espontánea, no determinada por circunstancias que habrían estorbado la ejecución del propósito. No surte efectos absolutorios el desistimiento, si el reo huyó por el temor de que le fallase el arma y la presencia de extraños que podían estorbar el designio; hay en tal caso, tentativa impedida, pero no abandonada. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 27/40. — *La Ley*, 20-457.)

662. — La sola presentación al Banco del documento suscripto en blanco y dolosamente llenado, simulando un crédito inexistente, implica una tentativa de defraudación punible aun cuando mediara desistimiento impuesto por el fracaso, lo que excluye toda espontaneidad. (*Cám. Fed. La Plata*, noviembre 13/36. — *J. A.*, 56-414.)

ART. 44. — *La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad.*

Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años.

Si la pena fuese de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de diez a quince años.

Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y, podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.

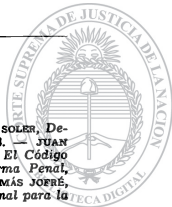
ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título II; arts. 6, 7, 8, y 9. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 12. — Proyecto 1891, art. 68. — Proyecto 1906, art. 47. — Ley 4189, art. 3. — Código derogado, art. 12.

FUENTE: Proyecto 1891, art. 68.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 10. — Cuando la tentativa fuere de un delito imposible y no correspondiere eximir de sanciones al autor, se aplicará la que corresponda conforme a lo dispuesto en el Título VI.

Art. 70. — Cuando el delito haya quedado en grado de tentativa, el tribunal impondrá, según las modalidades del hecho o de la acción realizada, la sanción establecida para el delito consumado, no pudiendo imponer el máximo. Si esta sanción fuera la de reclusión perpetua, se impondrá reclusión de diez a veinticinco años, consideradas, también, las referidas circunstancias.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-459. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-178, 188, 189, 200, 201, 202, 376, 378. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-461. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 2-413. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 516. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 389. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 110. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), ps. 104 y sgts.

JURISPRUDENCIA

663. — No puede tratarse de tentativa de delito imposible cuando el fracaso del propósito criminal se debe a la resistencia de la víctima y a las voces dadas por ésta en demanda de auxilio, atrayendo a las personas que persiguieron al acusado, originando su detención. (C. C. C., septiembre 2/38. — *La Ley*, 12-74.)

664. — El hecho de presentarse a la justicia ejecutando documentos ya pagados, no hace que el delito sea imposible, pues si el engaño ha sido bien preparado, la justicia puede ser inducida en error. (C. C. C., abril 28/25. — *Fallos*, 1-238. — *Ver voto en disidencia del Dr. Oribe*.)

665. — Si en juicio por cobro hipotecario se deduce una tercera de dominio invocando un derecho "prevalente" para oponer al acreedor, fundándose la acción en un documento sin valor, tal hecho no constituye el delito de tentativa de estafa, por no ser idóneo el medio para realizarlo. (C. C. C., mayo 5/33. — *Fallos*, 1-275.)

TITULO VII

PARTICIPACION CRIMINAL

ART. 45. — Los que tomaren parte en la ejecución del hecho

Art. 47. — Si la tentativa ha sido de un delito imposible, la sanción que correspondería al delito consumado se disminuirá en la mitad del máximo establecido para ella y podrá reducirse hasta el mínimo, según el grado de peligrosidad revelada por el agente. Si la sanción fuera la de reclusión perpetua, se impondrá reclusión por cinco a diez años.

Al autor de la tentativa de un delito imposible no se le impondrá sanción si revelare carecer de peligrosidad.

Art. 78. — En el caso de mandato o acuerdo para cometer un delito determinado, cuando no son seguidos de ejecución, se impondrá, como sanción, a los



o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Sec.; Título IV; arts. 1 y 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 16. — Proyecto 1891, art. 89. — Proyecto 1906, art. 48. — Código derogado, arts. 21 y 22. — Ley 4189, art. 4º.

FUENTE: El Proyecto de 1906, modificado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la crítica del Dr. Herrera en su obra "La reforma penal", pág. 519.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-484. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-285 y 2-215, 216, 219, 238, 245, 248, 259, 260. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-32. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-469. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 535. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 111. JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 519. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 110. — FRANCISCO CARRARA, *Teoría de la tentativa y la complicidad o sea del grado en la fuerza física del delito*. (Traducción de Romero Girón. Madrid, 1887.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-226, 339.

JURISPRUDENCIA

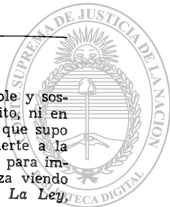
666. — Lo que el art. 45, in fine del C. P., exige, es que la instigación represente el impulso al delito y no simplemente un estímulo influyente. (C. Apel. Com. y Crim. Mendoza, mayo 22/1941. — *La Ley*, 22-859.)

667. — La instigación que habría consistido en alentar en sus propósitos al autor material del hecho, cuando éste iba en busca de la víctima para darle muerte, no encuadra en la última parte del art. 45 del C. P. (C. Apel. Com. y Crim. Mendoza, mayo 22/1941. — *La Ley*, 22-859.)

participes en el mandato o en el acuerdo, hasta la tercera parte del máximo de la establecida para el delito mandado o acordado. Si esta fuere la de reclusión perpetua, se impondrá prisión por seis a diez años. En caso de mandato no aceptado, la sanción predicha será impuesta al mandante.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 11 — Todos los que concurren, moral o materialmente, en cualquier forma, a la ejecución de un delito, serán sometidos a las sanciones estatuidas para el mismo.



668. — La actitud del coprocesado, aunque reprochable y sospechosa, no importa una participación moral en el delito, ni en grado de complicidad, si sólo puede darse por probado que supo que el autor material del homicidio pensaba darle muerte a la víctima esa noche, guardó silencio, oyó ruido, nada hizo para impedir el hecho y consumado éste, se asomó de su pieza viendo conducir el cadáver. (*Corte Suprema*, abril 1°/40. — *La Ley*, 18-383.)

669. — No existiendo concurso de acción, la participación fundada sobre el concurso moral, no puede radicarse sino sobre un acto positivo y eficiente de voluntad que adhiere al delito. En su defecto, de suposición en suposición, se llegaría a atribuirse a una voluntad perversa lo que puede ser efecto del pudor o del temor del peligro propio. (*Corte Suprema*, abril 1°/40. — *La Ley*, 18-383.)

670. — La mera presencia en el lugar del hecho aunque acto negativo, asume el carácter de complicidad cuando reúne las dos condiciones, de haber sido eficiente y de haber sido adoptada para facilitar la ejecución. (*Corte Suprema*, abril 1°/40. — *La Ley*, 18-383.)

671. — El silencio del coprocesado que puede haber sido motivado por un justo temor y su presencia en la chacra donde se cometió el homicidio, que es su domicilio, no puede interpretarse como destinados a facilitar el delito, bastando la posibilidad de que así sea para fundar la absolución, de acuerdo a la regla del artículo 13 del Código de Procedimientos Criminal. (*Corte Suprema*, abril 1°/40. — *La Ley*, 18-383.)

672. — Un partícipe, es responsable de las acciones ejecutadas por el otro, en la medida en que ellas le eran conocidas como necesarias o posibles, aun cuando no las haya directamente ejecutado. (*Cám. Apel. Rosario*, noviembre 16/38. — *La Ley*, 13-384.)

673. — Aunque no está precisada en autos la participación de cada uno de los procesados, ello no aminora la responsabilidad legal de los mismos, atenta la disposición contenida en el artículo



45 del Código Penal, si del texto de sus confesiones se desprende el designio y luego la ejecución conjunta del hecho, para cuya consumación era indispensable la concurrencia del esfuerzo de ambos procesados. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, julio 15/37. — *La Ley*, 10-840.)

674. — Es coautor el que toma parte en la ejecución del hecho. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 21/36. — *J. A.*, 57-613.)

675. — Habiéndose negado el director de un periódico a dar el nombre del autor del suelto motivo de la acusación por desacato, corresponde aplicar el artículo 45 del C. P. (*C. Fed. de la Cap.* — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-79.)

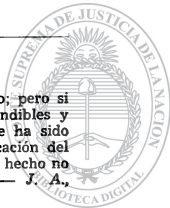
676. — La responsabilidad criminal del editor de un libro obsceno es la misma que la del autor, si conocía la obra e intervino en todos los detalles de su impresión (Arts. 45 y 28 del C. Penal). (*C. C. C.*, septiembre 1º/37. — *J. A.*, 59-970.)

677. — Siendo la cooperación de los testigos en la escritura falsa, voluntaria e imprescindible, en el modo realizado, quedan incluidos en el art. 45 del C. Penal. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 17/35. — *J. A.*, 53-520.)

678. — Si el coprocesado aportó medios coercitivos, indispensables para asegurar el delito de violación concertado, responden por igual sus partícipes, aunque no se determine estrictamente cuál fué el violador y cuál el cooperante. (*Sup. Corte Tucumán*, marzo 26/36. — *J. A.*, 54-315.)

679. — El hecho de haber destruido o tratado de destruir elementos probatorios de la infracción a la ley 4097, que prohíbe los juegos de azar, cometidos por los coprocesados, no prueba por sí solo participación en su ejecución. (*C. C. C.*, abril 2/37. — *J. A.*, 58-254.)

680. — El Presidente del Concejo Municipal que ordena a la Tesorería de la Comuna, el pago de una suma de dinero por un crédito aparente, presta al autor de la maniobra dolosa una coope-



ración sin la cual no habría podido cometerse el delito; pero si las explicaciones que da, resultan en cierto modo atendibles y existen elementos de juicio que permiten suponer que ha sido sorprendido en su buena fe, debe establecerse por aplicación del principio "in dubio pro reo", que obró con ignorancia de hecho no imputable. (Cám. Fed. La Plata, septiembre 14/36. — J. A., 55-823.)

681. — La calificación legal de un delito es la misma para cada uno de los partícipes, cualquiera que sea el grado de su participación con la única excepción que prevé el art. 48 del C. Penal. (C. C. C., abril 28/33. — Fallos, 2-212.)

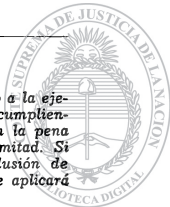
682. — La participación criminal del que proporciona el veneno a su amante, con el que ésta intoxica a su cónyuge, es la de cómplice y no de autor principal, si la misma fué quien concibió, preparó y ejecutó el crimen; si es presumible que hubiera llevado a cabo sus propósitos delictuosos por cualquier medio, obsesionada por la idea de deshacerse del marido para seguir al amante y si, para conseguirlo, le hubiera sido fácil adquirir ella misma el tóxico que a su pedido le entregó aquél. (Sup. Corte de Bs. As., septiembre 9/32. — J. A., 39-581.)

683. — La instigación a cometer un delito no es punible, si el supuesto ejecutor material no ha efectuado actos positivos que importen un comienzo de ejecución. (C. C. C., junio 1º/26. — Fallos, 2-35.)

684. — Si el partícipe en el delito de hurto fué sobornado provisionalmente y el hecho aparece "prima facie" como hurto calificado, la prescripción de la acción sólo procede cuando ha transcurrido el tiempo señalado como pena máxima para esa última calificativa. (C. C. C., junio 21/32. — Fallos, 2-239.)

685. — El que en connivencia con el fallido, simula un crédito, aunque no haya llegado a producirse perjuicio material, debe ser considerado copartícipe del delito consumado de quiebra. (C. C. C., marzo 15/27. — Fallos, 2-310.)

686. — Es coautor y no cómplice el que inmoviliza a la víctima para permitir que un tercero la lesione. (C. C. C., diciembre 24/25. — Fallos, 2-101.)



ART. 46. — Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Sec. I; Título V; artículos 1 y siguientes. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 20, 21 y 22. — Proyecto 1891, art. 70. — Proyecto 1906, art. 49. — Ley 4189, art. 4. — Código derogado, art. 32.

FUENTE: El artículo 49, del Proyecto de 1906, modificado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, de acuerdo a la crítica hecha por el Dr. Herrera en su obra "La Reforma Penal", pág. 522.

BIBLIOGRAFIA

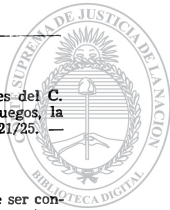
SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-215, 216, 237, 257, 258, 259, 260, 261 y 262. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-37. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 550. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 110. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-227.

JURISPRUDENCIA

687. — Los instigadores no determinantes, no quedan comprendidos en la categoría de cómplices, prevista en el art. 46 del C. P. (C. Apel. Com. y Crim. Mendoza, mayo 22/41. — *La Ley*, 22-859.)

688. — Es cómplice el amante de la mujer que se apropia la totalidad de un premio de lotería logrado mediante aporte común con un tercero, ya que en la cooperación delictuosa, cabe tanto el aporte material como el moral, quedando en grado de complicidad, si hay duda de si la instigación fué solamente influyente o si fué determinante. (Sup. Corte, Tuc., abril 29/41. — *La Ley*, 22-784.)

689. — La cooperación que requiere el artículo 46 del C. Penal, siendo de carácter moral, sólo podría involucrarse en la disposición, si la actitud del coprocesado hubiere sido adoptada con el propósito de reforzar la resolución del autor material o de facilitar la realización de sus fines. (Corte Suprema, abril 1º/40. — *La Ley*, 18-383.)



690. — Siendo aplicable a las faltas, las disposiciones del C. Penal, debe admitirse en las infracciones a la ley de juegos, la responsabilidad de los cooperadores. (C. C. C., julio 21/25. — Fallos, 2-48.)

691. — El encubridor de un delito de hurto, no puede ser condenado al pago de indemnización por el hurto, (C. C. C., septiembre 24/29. — Fallos, 2-11.)

692. — El que por precio silencia un delito, incurre en complicidad. (C. C. C., julio 26/32. — Fallos, 1-140.)

Art. 47. — Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título V; arts. 9, 10, 11 y 12. — Proyecto 1891, art. 74. — Proyecto 1906, art. 52. — Ley 4189, art. 4. — Código derogado, art. 39.

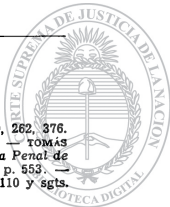
FUENTE: El artículo 52 del Proyecto 1906, modificado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, de acuerdo a la crítica hecha por el Dr. Herrera en la obra "La Reforma Penal", pág. 529.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 12. — Si se estableciere que el partícipe quiso concurrir a un delito de mayor o menor gravedad que el cometido, se aplicará la sanción que corresponda conforme a lo dispuesto en el Título VI.

Art. 79. — La sanción para el partícipe que no hubiere querido concurrir sino a un delito menor que el que se cometió, será la que corresponda al delito en que quiso participar.

La sanción para el partícipe que quiso concurrir a un delito mayor que el que se cometió, será la que corresponda a este delito, pudiendo aumentarse hasta una tercera parte del máximo de duración establecida para ella, sin que, con el aumento, pueda exceder de veinticinco años.



BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-232, 235, 236, 250, 262, 376.
— RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-44. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 119. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 405. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 553. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 110 y sgts.

JURISPRUDENCIA

693. — La cooperación consistente en haber dado noticias a los coprocesados de que el comerciante, víctima elegida, era poseedor de una importante suma de dinero, información que determinó a los mismos a cometer el robo frustrado y de cuyo producido participaría el informante, autoriza a responsabilizar a éste, solo como coautor de la tentativa de robo simple del citado comerciante, (artículo 47 del C. P.) aunque los ejecutantes en tales circunstancias hayan cometido otro robo del que fué víctima un dependiente del citado comerciante, perpetrando también un homicidio. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 1/40. — *La Ley*, 21-831.)

694. — No puede considerarse como cómplice al que ha instigado a otro a la comisión de un delito que no ha tenido comienzo. (C. C. C., marzo 2/28. — *Fallos*, 1-139.)

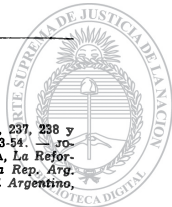
ART. 48. — *Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891; arts. 71 y 72.

FUENTE: El Proyecto 1891.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 13. — Las relaciones, circunstancias y condiciones personales no son comunicables entre los partícipes, a menos que constituyan elementos propios del delito o sirven para facilitar su ejecución. Las circunstancias calificativas de agravación tampoco son comunicables, salvo el caso de que fueran conocidas por el partícipe.



BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-97, 234, 235, 236, 237, 238 y 239. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-54. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 422. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 530. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 110 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-112, 229.

JURISPRUDENCIA

695. — La calificación legal de un delito es la misma para cada uno de los partícipes cualquiera que sea el grado de su participación, con la única excepción que prevé el artículo 48 del C. Penal. (C. C. C., abril 28/33. — Fallos, 2-212.)

ART. 49. — No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 77. — Proyecto 1906, art. 54. — Ley 4189, art. 4, inciso d).

FUENTE: El artículo 4 inciso "d" de la Ley de Reformas.

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-242 y 243. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-60. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 536. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 425. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 119. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 115. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-318 y 2-113, 229, 339, 345.

JURISPRUDENCIA

696. — El industrial dueño de un establecimiento tipográfico está comprendido en la exención de responsabilidad del artículo 49 del C. P., aunque estrictamente sean sus obreros quienes ejecutan el trabajo "material" que ordena el industrial, pues la ley



usa el término "material" por oposición a "espiritual". La cooperación que pudiera prestar para la ejecución de un delito por medio de la prensa (en el caso ultraje al pudor) es, dentro de ese concepto, solo material, ejerciendo un acto de su industria, consistente en la impresión, por medio de sus obreros, de los trabajos que se le encargan, cooperación que muchas veces puede ordenar sin leer los originales, apreciando su costo en grueso. (C. C., septiembre 1º/37. — J. A., 59-970.)

697. — Está exento de pena el grabador que por razón de su oficio y dependencia, coopera a la fabricación de una carátula comprendida en el artículo 128 del C. Penal. (C. C. C., abril 30/26. — Fallos, 2-452.)

TITULO VIII

REINCIDENCIA ⁽¹⁾

ART. 50. — *Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentenciá firme, a una pena privativa de libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.*

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que puede según la ley argentina, dar lugar a extradición.

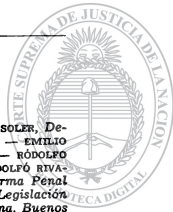
A los efectos de la reincidencia, no se tomará en cuenta los delitos militares o políticos, ni los amnistiados.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título V; art. 5. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 100, 101 y 102. — Proyecto 1891, art. 84. — Proyecto 1906, art. 55. — Código derogado, art. 84, incisos 19º y 20º. — Ley 4189, art. 15. — Ley 3335, arts. 21, 22 y 23. — Ley 1621, art. 2º.

Fuente del art. — El primer párrafo fué redactado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Los dos siguientes, por la Comisión de Códigos del Senado.

(1) Tejedor penaba la reincidencia "específica", solamente. El Código derogado, y el P. de Villegas, Ugarriza y García, penaban la "genérica" y la "específica". El P. de 1891, solamente la "genérica", como el P. de 1906 y el Código actual. La Ley de Reformas, 4189, modificó en este mismo sentido, las disposiciones del Código derogado.

El Proyecto Coll Gómez, acepta el principio de la reincidencia "genérica" y "ficta", pero no aplica sanciones mientras el reincidente no haya sido declarado peligroso. Esta peligrosidad está determinada en los incisos d), e) y f) del artículo 20 del referido Proyecto.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-526. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-153, 159 y 247 y 2-389, 431, 433 y 455. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 117. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-68 y 91. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 498. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 434. — LUIS MAGNANINI, *Bases para una Nueva Legislación de la Reincidencia y de la Delincuencia Habitual en la Argentina*. Buenos Aires, 1926. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-52 y 2-115, 234, 313. — ERNESTO QUESADA, *Comprobación de la reincidencia. (Proyecto de ley)*, Bs. As., 1909. — P. ARMENGOL y CORNET, *La reincidencia*. Barcelona, 1873. — ERNESTO BATTAGLINI, *La declaración de habitualidad en el delito e impugnación*. (Revista *Il Foro Italiano*, 1940 (2ª parte), pág. 2.

JURISPRUDENCIA

698. — La reincidencia es materia propia de la legislación sustantiva, y a ella debe recurrirse para apreciar su verdadero carácter en los casos en que la ley procesal se refiere a dicha figura jurídica. (Cám. Federal de Rosario, agosto 1º/38. — *La Ley*, 11-845.)

699. — El criterio defensorista seguido por nuestro Código Penal, lo ha conducido a afrontar el problema de la reiteración en forma muy similar al problema de la reincidencia, dictando normas comunes para ambas, como común es la peligrosidad social que representan todos los delincuentes habituales. (Sup. Corte de Bs. As., Marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

LEY 11752 DE 9 DE OCTUBRE DE 1933 SOBRE CREACION DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENTES. — "Artículo 1º. Créase el Registro Nacional de Reincidentes y Estadística Criminal y Carcelaria, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. — Artículo 2º. Todo juez o tribunal del país a quien corresponda la ejecución de la sentencia condenatoria en materia penal, enviará al Registro dentro de los cinco días de puesto el cumplimiento, un testimonio de su parte dispositiva acompañado de: a) la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del condenado; b) la fecha en que se cometió el delito; c) nombres completos y apodos; d) nacionalidad; e) fecha del nacimiento; f) profesión, oficio o medio conocido de vida; y g) condenas anteriores y penas impuestas en cada caso. — Artículo 3º. Los jueces enviarán al Registro dentro de los cinco días a contar de la fecha en que hubiere quedado ejecutoriada, testimonio del auto de prisión preventiva, acompañado de los datos enumerados en los incisos a) y f) del artículo anterior. Si el proceso hubiere terminado por sobreseimiento definitivo o por absolución, se remitirá testimonio de la parte dispositiva de esa sentencia para la anulación de la ficha correspondiente. Igual comunicación deberá hacerse en los casos de paralización de la causa que la ley autoriza o de sobreseimiento provisorio por falta de indicios bastantes para determinar a los autores, cómplices o encubridores del delito, acompañando en uno u otro caso testimonio de la resolución respectiva. — Artículo 4º. Todo juez o tribunal, al dictar el auto de prisión preventiva o antes de dictar sentencia, deberá solicitar informes al Registro sobre los datos personales del procesado, relativos a las condenas que le hubiesen sido impuestas o a los procesos pendientes, acompañando al pedido la ficha dactiloscópica



700. — Para distinguir entre reiterantes y reincidentes, lo que la ley penal ha procurado al adoptar el régimen de la unidad, es que ninguna persona se vea sometida simultáneamente a tratamientos distintos e independientes entre sí. (*Suprema Corte de Bs. As.*, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

701. — La Ley local de procedimiento penal, no puede definir la reincidencia apartándose del verdadero alcance que da al vocablo no era privativa de libertad y aunque la de este carácter le hubiera sido impuesta como subsidiaria. (*C. C. C.*, septiembre 13/1932. — *Fallos*, 2-340.)

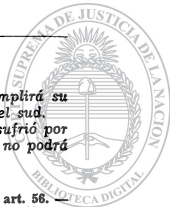
702. — No es reincidente y puede obtener libertad condicional, el penado que registra una condena anterior cuya pena principal no era privativa de libertad y aunque la de este carácter le hubiera sido impuesta como subsidiaria. (*C. C. C.*, septiembre 13/1932. — *Fallos*, 2-340.)

703. — La primera reincidencia en la ley 4097, no obsta para la excarcelación. (*C. C. C.*, noviembre 29/21. — *Fallos*, 1-368.)

ART. 51. — *El reincidente por segunda vez, condenado a pena*

"del mismo. — Artículo 5º. El Jefe del Registro remitirá al Juzgado o tribunal "requerido dentro de cinco días hábiles a contar desde la fecha en que hubiere "recibido el oficio respectivo, los datos enumerados en el artículo 2º y una copia "de los antecedentes que obrasen en su poder, relativos a las condenas anteriores "o procesos pendientes contra el prevenido. Por cada día de demora injustificada "el juez o tribunal que entiende en la causa, aplicará al Jefe del Registro, de ofi- "cio o a petición de parte, una multa de \$ 50 m/n. y le ordenará que expida "los informes solicitados. Si el Jefe del Registro omitiera cumplir esta orden "dentro de los 10 días a contar desde la fecha de la notificación del auto respec- "tivo se pasarán los antecedentes a la Justicia del Crimen de la Capital, a los "efectos del artículo 248 del Código Penal y se ordenará que otro empleado de "aquella misma repartición expida aquellos informes. — Artículo 6º. Los datos del "Registro harán plena fe en juicio para juzgar de la reincidencia, pudiendo ser "impugnados exclusivamente por error o falsedad. — Artículo 7º. Esta ley se tendrá "como complementaria del código penal a los efectos de apreciar la peligrosidad "del autor del hecho, según las previsiones de aquel código y de poder hacer uso "de las facultades que el mismo confiere a los Jueces. — Artículo 8º. El servicio "del Registro será reservado y sólo podrá suministrarse informes a solicitud de "juez o tribunal competente. — Artículo 9º. El Registro suministrará las informa- "ciones que requieran para atender sus necesidades de investigación las policías "de la Capital Federal y de las Gobernaciones Nacionales.

Los demás artículos —11, 12 y 13—, se refieren al personal que prestará servicios, a los gastos que demande mientras no se la incorpore al presupuesto, etc.).



privativa de la libertad que excediera de dos años, cumplirá su condena con reclusión en un paraje de los territorios del sud.

La pena de privación de libertad que el procesado sufrió por delito cometido antes de haber cumplido veintiún años, no podrá computársele para la agravación de la pena.

ANTECEDENTES: Proyecto de 1891, art. 86. — Proyecto 1906, art. 56. — Ley 4189, art. 11. — Tratado de Montevideo, artículos 21, 22 y 23.

FUENTE: La ley 3335 (de 19 de diciembre de 1895), sobre reincidencia según la Suprema Corte de Buenos Aires. Según el doctor Moreno, el párrafo primero fué tomado del artículo 56 del Proyecto de 1906 y el párrafo segundo pertenece a la Comisión de Códigos del Senado que se inspiró en el capítulo V, artículo 3º, del Anteproyecto Sueco.

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-415, 435, 436, 437, 438, 439, 440 y 441. — EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-327 y 525. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-101. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 210. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 511. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 126. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 117 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-53, 318 y 2-87, 99, 181, 234, 315. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-122. — C. MALAGARRIGA, *Código Penal Argentino*, 1-52.

JURISPRUDENCIA

704. — Hay dos reclusiones igualmente accesorias: la reclusión por el tiempo de una condena y la reclusión por tiempo indeterminado, luego de cumplida la última condena. La primera es aplicable tanto en el caso del artículo 51 del C. P. como en el del apartado final del artículo 52, la segunda en los cuatro incisos regidos por el acápite del art. 52. — *C. Fed. de Bahía Blanca*, septiembre 18/40. — *Rep. Jurid.*, 3-1140.)

705. — Interpretar que la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado corresponde en caso de primera condena, sería alterar el equilibrio y proporción penal, castigando con una accesoria más grave al reiterante que al reincidente por segunda vez,

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 65. — Si el delito se ha cometido por persona que revele índole criminal, establecida en la forma que dispone el artículo 20, el tribunal ordenará que el agente sea sometido a reclusión por tiempo indeterminado, no menor del máximo que la respectiva disposición establezca o no menor de seis años, si dicho máximo fuera inferior a este término. No impondrá reclusión perpetua, cuando ésta sea la sanción establecida para el delito.

es decir, al que es condenado en tercera condena. (C. Federal de Bahía Blanca, septiembre 18/40. — *Rep. Jurid.*, 3-1140.)

706. — El artículo 51 (segunda parte) del Código Penal no tiene el alcance de impedir que el delito cometido durante la minoridad incida sobre el concepto de la peligrosidad del delincuente. La prohibición de computar para agravar la pena, las condenas recaídas en la persona del procesado antes de cumplir veintiún años de edad, está limitada en la previsión legal citada, solo a la reclusión en un paraje del Sud, dispuesta para la reincidencia por segunda vez, del condenado a pena privativa de la libertad por dos años o más. (C. C. C., junio 27/39. — *La Ley*, 16-581.)

707. — Los artículos 51 y 52 del C. P., tienen distinto origen y contemplan situaciones distintas. El primero es una reproducción defectuosa de la ley 3335 y agrava las penas teniendo en cuenta el delito; el segundo tiene su origen en el artículo 11 de la ley 4189, que disponía la deportación para los reincidentes habituales, y establece una accesoria, con miras a la seguridad colectiva, teniendo en cuenta, exclusivamente al reincidente. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, febrero 25/38. — *La Ley*, 9-695.)

708. — Cuando el artículo 51 del C. P., dispone que las condenas por delitos cometidos antes de los veintiún años de edad, no se computarán para la agravación de la pena, está demostrando que podrán ser computadas para todos los demás efectos, es decir, para regir la libertad condicional, para fijar la pena correspondiente al delito, para considerarlo delincuente habitual, etc. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, febrero 25/38. — *La Ley*, 9-695.)

709. — Las condenas impuestas por delitos cometidos antes de los veintiún años de edad, no son obstáculo para la aplicación de la accesoria del artículo 52 del C. P., por cuanto la limitación fijada por el artículo 51, no se refiere a los delincuentes habituales, a quienes debe aplicarse esa medida como accesoria de la última condena. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, febrero 25/38. — *La Ley*, 9-694.)

710. — No procede imponer la pena accesoria de reclusión en





los Territorios del Sud, si las condenas anteriores se refieren a delitos cometidos antes de los veintiún años de edad. (C. C. C., junio 24/36. — J. A., 54-926.)

711. — No procede imponer la pena accesoria de reclusión en los Territorios del Sud, al reincidente en delito de hurto, si tres de las condenas anteriores, se refieren a delitos cometidos antes de los veintiún años de edad. (Cám. Fed. Bahía Blanca, mayo 7/36. — J. A., 54-733.)

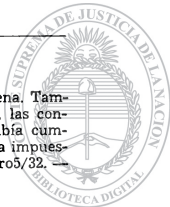
712. — No procede la pena de reclusión si se trata de un hombre joven, primario en el delito, tarado por herencia y que posiblemente aporte la influencia perniciosa del hogar afectado por las malas condiciones sanitarias en que por lo general desenvuelven su trabajo las personas en las minas, y de quien puede esperarse franca mejoría en un establecimiento penal. (Corte Suprema, febrero 5/34. (J. A., 45-199.)

713. — El artículo 51 del Código Penal, no se refiere a pena determinada y habla solo de "pena privativa de la libertad" dentro de cuyo concepto, es típica la de penitenciaría del Código derogado. (Sup. Corte de Santa Fe, abril 6/34. — J. A., 46-442.)

714. — Procede condenar al reo de hurto, atentado a la autoridad y violación de domicilio, a reclusión por tiempo indeterminado en los Territorios del Sud, si ya ha sufrido varias condenas, aún cuando tres de ellas lo hayan sido durante su menor edad. (C. C. C. — Gaceta del Foro, 73-266.)

715. — La disposición del artículo 51 del C. Penal, que excluye de su sanción a los menores de veintiún años, no es aplicable a los casos del artículo 52, que se refiere a los habituales y se aplica como medida de seguridad. (C. C. C., octubre 5/26. — Fallos 2-323.)

716. — La prescripción de la reincidencia determinada por el artículo 53 del C. P., no obsta a la aplicación de la reclusión accesoria prevista por el artículo 52, porque esta es una medida



de seguridad, que se aplica independientemente de la pena. También son computables para la aplicación de esa medida, las condenas anteriores sufridas por el reo, cuando aún no había cumplido veintiún años de edad, inclusive la que se le hubiera impuesto por primera vez, en forma condicional. (C. C. C., febrero 5/32. — Fallos, 2-326.)

717. — Al aplicarse el artículo 51 del C. P., por segunda reincidencia, debe imponerse directamente la pena de reclusión que establece dicho artículo. (C. C. C., agosto 10/26. — Fallos, 2-339.)

ART. 52. — *La reclusión en un paraje de los territorios del sud será impuesta por tiempo indeterminado y como accesoria de la última condena, cuando mediaren las siguientes circunstancias:*

- 1° *Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años;*
- 2° *Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión por más de tres años y dos de prisión;*
- 3° *Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años.*
- 4° *Cinco condenas a prisión de tres años o menores.*

Se aplicará la reclusión como accesoria de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, arts. 85 y 86. — Proyecto 1906, art. 57. — Ley 4189, art. 11.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 46. — Si el delito se ha cometido por un habitual en la comisión de delitos, en su habitualidad se establezca en la forma que dispone el artículo 20, o por un reincidente que lo sea por segunda vez, en delitos para los que esté estatuida una sanción privativa de la libertad, si se declara, en la forma y condiciones prescriptas por el artículo 20, que la reincidencia lo presenta como sujeto peligroso, el tribunal dispondrá que el agente sea sometido a reclusión por tiempo indeterminado, no menor de diez años, en un establecimiento especial, en el lugar que determine el Poder Ejecutivo. Si el máximo de la sanción que correspondiera al delito cometido fuere superior a diez años, la reclusión por tiempo indeterminado, que se imponga en virtud de este artículo, no será inferior a dicho máximo. Será perpetua cuando lo sea para el delito de que se trate.



FUENTE: El artículo 11 de la ley 4189, según la Suprema Corte de Buenos Aires. Según el doctor Moreno, el origen se encuentra en el proyecto de 1906, modificado por la Comisión de Códigos del Senado.

BIBLIOGRAFIA

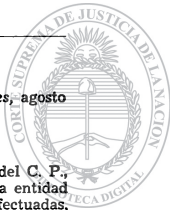
EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-531. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-376, 415, 416, 417, 420, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 459. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-104. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 119. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-116, 181, 234, 315. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-406. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 127. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-1920*, p. 452. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 511. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 563. — MANUEL RAMÍREZ, *Ushuaia, La Ergástula del Sur*. Buenos Aires, 1935. — LUIS MAGNANINI, *Bases para una nueva legislación de la reincidencia y de la delincuencia habitual en la Argentina*. Buenos Aires, 1926. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-122. — C. MALAGARRIGA, *Código Penal Argentino*, 1-52. — JUAN BERNIERI, *Sobre impugnación de la declaración de habitualidad o profesionalismo en el delito*. (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, 1939 (2ª parte), p. 74.) — MARIO CALZIA PINTOR, *Estudio de la personalidad del delincuente habitual*. (*La Scuola Positiva*. Milán, 1939, p. 75.)

JURISPRUDENCIA

718. — Al señalar las condiciones requeridas para la aplicación de la accesoria de reclusión en un paraje de los territorios del Sud, en los casos de concurso de delitos, el art. 52 del C. P. prescribe en su parte final que deberá atenderse a los "delitos juzgados", es decir, a los hechos concretos que motivaron el enjuiciamiento penal, y no a las figuras delictivas previstas en abstracto por el Código. (*Sup. Corte de la Pcia. de Bs. Aires*, agosto 12/41. — *Rep. Jurid.*, 6-2114.)

719. — El criterio general de benignidad debe presidir, en caso de duda, la interpretación de las leyes penales. Si en general, lo odioso debe restringirse, ese criterio parece inexcusable tratándose de la aplicación de una medida que, como la que prescribe el art. 52 del C. P., representa la más severa de las sanciones de la ley, y no puede por lo mismo, prodigarse. (*Sup. Corte de la Pcia. de Bs. Aires*, agosto 12/41. — *Rep. Jurid.*, 6-2114.)

720. — La grave accesoria de reclusión representa una medida de seguridad fundada en la "personalidad del delincuente" y no



en la entidad jurídica "delito". (*Sup. Corte de Bs. Aires*, agosto 12/41. — *Rep. Jurid.* 6-2114.)

721. — La accesoria del artículo 52, último párrafo del C. P., no procede, aunque concurran más de cinco hechos, si la entidad y forma de realización de las cinco subtracciones efectuadas, consideradas en forma aislada y particular, no determinarían la fijación para ninguna de ellas de una pena superior a tres años de prisión. (C. C. C., diciembre 24/40. — *La Ley*, 21-421.)

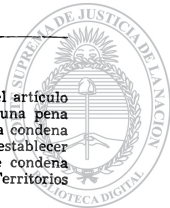
722. — La accesoria de reclusión que determina el artículo 52, incisos 3º y 4º del C. P., debe hacerse efectiva como prisión si la edad del procesado excede de 60 años. (C. C. C., diciembre 27/40. — *La Ley*, 21-241.)

723. — El primer párrafo del artículo 52 del C. P. y sus cuatro incisos se refieren al caso del reincidente. En cambio, el apartado final de dicho artículo alude a reiterantes y la reclusión accesoria es la misma prevista en el artículo 51 es decir, por el tiempo de una condena y no por tiempo indeterminado, luego de cumplida la última condena. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, septiembre 18/40. — *La Ley*, 21-67.)

724. — Hay dos reclusiones igualmente accesorias: la reclusión por tiempo indeterminado y la reclusión por el tiempo de la condena. La primera es aplicable en los cuatro incisos del artículo 52; la segunda, tanto en el caso del art. 51, como en el del apartado final del art. 52. (*Cám. Fed. de B. Blanca*, septiembre 18/40. — *Repert. Jurid.*, 3-1140.)

725. — Siendo la sanción del art. 52, una medida de seguridad, no procede acordar a quien la está sufriendo, el beneficio de la libertad condicional. (C. C. C., mayo 13/41. — *Rep. Jurid.*, 5-1698.)

726. — La accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, es una medida de seguridad y no una pena. (C. C. C., julio 12/40. — *La Ley*, 19-333.)



727. — Ni la letra ni el carácter de la disposición del artículo 52 del C. P., autorizan a concluir que la inclusión de una pena anteriormente dictada contra una misma persona, en una condena posterior, de acuerdo al artículo 58 del C. Penal, para establecer la sanción única, borra para la primera el carácter de condena computable para aplicar la accesoria de reclusión en los Territorios del Sud. (C. C. C., julio 6/39. — *La Ley*, 14-1058.)

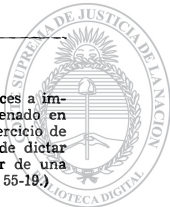
728. — El sentido de la relegación suplementaria a la que, para mayor gravedad se le llama en la ley. tal vez por un error, "reclusión", es el de la eliminación del delincuente incorregible. (Cám. Apel. de Rosario, Sala Crim., mayo 24/38. — *La Ley*, 10-829.)

729. — La medida del artículo 52, es la más grave de todo el Código Penal y no ha de suponerse entonces que el legislador la haya prodigado, alcanzando con ella los casos de reincidencia, cuando los hechos son de muy leve entidad y prolongados los plazos de buena conducta. (Cám. Apel. Rosario, Sala Crim., mayo 24/38. — *La Ley*, 10-829.)

730. — La medida de seguridad de carácter eliminatorio estatuida por el art. 52 del C. Penal, se impone por el número y la gravedad de las condenas pronunciadas contra un delincuente o en presencia del concurso real de delitos que prevé en su parte final. No se trata por tanto del régimen de la reincidencia preceptuado en la ley, por lo que no le son aplicables las previsiones concernientes a la misma. (C. C. C., octubre 25/38. — *La Ley*, 12-610.)

731. — No es óbice para la aplicación de la pena accesoria, por tiempo indeterminado, la circunstancia de que antes se fué objeto de la misma medida de previsión social. (Cám. Fed. Bahía Blanca, mayo 19/38. — *La Ley*, 12-547.)

732. — Las condenas a la pena de arresto, anteriores al actual Código Penal, recaídos en procesos seguidos a una persona, por delitos, revisten el mismo significado y valor para la aplicación de la medida de seguridad del artículo 52 del C. P., que las sancionadas con la de prisión. (C. C. C., octubre 25/38. — *La Ley*, 12-611.)



733. — El artículo 52 del C. P. que autoriza a los jueces a imponer como accesoria de la condena la reclusión del penado en establecimiento de los Territorios del Sud, importa el ejercicio de la facultad conferida al Congreso por la Constitución, de dictar un código de penas, pues tal reclusión tiene el carácter de una sanción accesoria. — *Corte Suprema*, julio 24/36. — *J. A.*, 55-19.)

734. — No procede la aplicación de oficio por el tribunal, del artículo 52 del C. Penal, cuando no media recurso acusatorio. (C. C., *Tribunal Pleno*, diciembre 13/27. — *Fallos*, 2-481.)

735. — La accesoria de reclusión prevista por el artículo 52 del C. Penal, no debe considerarse como pena de relegación y debe cumplirse en la forma prescripta por el artículo 6° del mismo código. (C. C. C., diciembre 12/24. — *Fallos*, 2-320.)

736. — La disposición del artículo 51 del C. Penal que excluye de su sanción a los menores de veintiún años, no es aplicable a los casos del artículo 52, que se refiere a los habituales y se aplica como medida de seguridad. (C. C. C., octubre 5/26. — *Fallos*, 2-323.)

737. — Las condenas sufridas por el reo antes de cumplir los dieciocho años de edad, deben computarse para la aplicación de la medida de seguridad determinada por el artículo 52 del C. Penal. (C. C. C., abril 26/27. — *Fallos*, 2-325.)

738. — La prescripción de la reincidencia determinada por el artículo 53 del C. Penal, no obsta a la aplicación de la reclusión accesoria prevista por el artículo 52, porque ésta es una medida de seguridad que se aplica independientemente de la pena. También son computables para la aplicación de esa medida, las condenas anteriores sufridas por el reo, cuando aún no había cumplido veintiún años de edad, inclusive la que se le hubiera impuesto por primera vez en forma condicional. (C. C. C., febrero 5/32. — *Fallos*, 2-326.)

739. — La prescripción de las condenas anteriores a que se refiere el art. 53 del Código Penal, no impide computarlas para



aplicar la medida de seguridad prevista por el artículo 52 del mismo Código. — (C. C. C., julio 16/26. — *Fallos*, 2-336.)

740. — Procede la revisión si el tribunal aplicó el artículo 52, en virtud de no haberse tomado en cuenta una certificación que excluía la aplicación de este artículo. (C. C. C., noviembre 28/24. — *Fallos*, 2-365.)

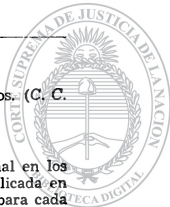
741. — Si con anterioridad a la perpetración de cuatro hechos delictuosos, como autor de los cuatro atentados contra la propiedad —un hurto y tres robos— en los que ha recaído la pena de diez años de prisión, el procesado ha sido objeto en diversas fechas de cuatro condenas a prisión, de dos hasta siete años, como reo de los delitos de hurto y robo, se trata de un delincuente que se encuentra típicamente comprendido en la sanción del artículo 52, incisos 3° y 4° del C. Penal. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, mayo 19/38. — *La Ley*, 12-546.)

742. — No mediando recurso acusatorio, el tribunal no puede aplicar la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en un paraje de los Territorios del Sud al procesado a quien se impone la cuarta condena, una de ellas por más de tres años. (C. C. C., diciembre 10/37. — *J. A.*, 60-1021.)

743. — No corresponde imponer reclusión en base a lo dispuesto por el artículo 52 inciso 4° del C. Penal, cuando tres de los cinco antecedentes que registra el imputado, se hallan prescriptos. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, mayo 24/38. — *La Ley*, 10-829.)

744. — La accesoria del artículo 52 inciso 4° del C. Penal, debe hacerse efectiva como prisión si la edad del prevenido excede del límite fijado en el artículo 7° del C. P. (C. C. C., mayo 31/1938. — *La Ley*, 10-1159.)

745. — No procede imponer la pena accesoria de reclusión en los Territorios del Sud al reincidente, si de los siete delitos que se



juzgan solo a uno le corresponde pena mayor de tres años. (C. C. C., noviembre 2/37. — J. A., 60-622.)

746. — Para la aplicación del artículo 52 del C. Penal en los casos de reiteración, debe tenerse en cuenta la pena aplicada en la sentencia y no la que fija el Código como máximo para cada delito. (C. C. C., abril 25/24. — Fallos, 2-342.)

ART. 53. — *La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente cuando hubieren transcurrido los términos señalados en el artículo 65 y otro tanto más, que nunca excederá de diez años.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título V; art. 5. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 10. — Ley 4189, art. 15, 2ª parte.

FUENTE: Redactado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-526. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-427, 431, 434, 440, 441, 442, 448 y 459. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-120. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 127. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 445. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 118 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-235.

JURISPRUDENCIA

747. — Producida la prescripción de la reincidencia, con relación a una primera condena, conforme a la regla que establece el artículo 53 del C. P. y según el cómputo que corresponde por los artículos 65 y 66 del mismo, no procede computar dicha primera condena a efecto de la aplicación de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en un paraje de los Territorios del Sud. (Cám. Fed. Bahía Blanca, octubre 9/40. — *La Ley*, 21-92.)

748. — La prescripción del artículo 53 del C. Penal, como



resulta de su propio texto, ha sido establecida al solo efecto de la apreciación de la reincidencia; en consecuencia, no es de aplicación a los efectos de imponer la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52. del mismo Código. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, febrero 25/38. — *La Ley*, 9-695.)

749. — La reincidencia múltiple es prescriptible. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, mayo 24/38. — *La Ley*, 10-829.)

750. — La manera de contar los plazos de prescripción de la reincidencia, consiste en partir de la fecha de la primera condena, y contar doblado el plazo de ésta. Si, en cambio, existe un nuevo delito, el plazo anterior vuelve a comenzar y a él se suma el que corresponde al nuevo hecho, doblado a su vez y así, sucesivamente. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, mayo 24/38. — *La Ley*, 10-829.)

751. — La manera de computar los plazos de prescripción de la reincidencia se remite totalmente al régimen de la prescripción de la pena. (*Cám. Apel. Rosario Sala Crim.*, mayo 24/38. — *La Ley*, 10-829.)

752. — La circunstancia de que el procesado haya sufrido dos condenas anteriores, no autoriza a declararlo reincidente por segunda vez a los efectos de la agravación establecida por el artículo 51 del C. P. cuando entre la fecha del segundo delito y la del hecho delictuoso que motiva la causa, ha transcurrido el término de la prescripción de la pena correspondiente al primer delito, más otro tanto. (*C. C. C.*, julio 2/39. — *La Ley*, 15-62.)

753. — No es reincidente y puede obtener su libertad condicional, el penado que registre una condena anterior cuya pena principal no era privativa de libertad y aunque la de este carácter le hubiere sido impuesta como subsidiaria. (*C. C. C.*, septiembre 13/32. — *Fallos*, 2-340.)

754. — La prescripción de la reincidencia determinada por el artículo 53 del C. Penal, no obsta a la aplicación de la reclusión



accessoria prevista por el artículo 52, porque esta es una medida de seguridad que se aplica independientemente de la pena. También son computables para la aplicación de esa medida, las condenas anteriores sufridas por el reo, cuando aún no había cumplido veintiún años de edad, inclusive la que se le hubiere impuesto por primera vez en forma condicional. (C. C. C., febrero 5/32. — *Fallos*, 2-326.)

755. — Debe ser considerado reincidente el procesado que comete un nuevo delito después de vencido el término de la condena condicional, si lo comete dentro del plazo fijado por el Código para la prescripción de reincidencia. (C. C. C., *Tribunal Pleno*, junio 5/28. — *Fallos*, 2-481.)

756. — La prescripción de las condenas anteriores a que se refiere el art. 53 del C. Penal, no impide computarlas, para aplicar la medida de seguridad prevista por el art. 52 del mismo Código. (C. C. C., julio 16/26. — *Fallos*, 2-336.)

757. — Tratándose de la ley 4097, debe ser considerado reincidente el que tuvo condena anterior por infracción a la misma, siempre que no hubieran transcurrido los términos fijados por el art. 53 del C. P. y aún cuando la pena de multa o arresto se hubiere aplicado en forma condicional. (C. C. C., enero 8/29. — *Fallos*, 2-339.)

758. — Estando prescripta la condena anterior, no debe computarse a los efectos de la excarcelación, en virtud de lo establecido por el artículo 53 del C. Penal, porque sería una incongruencia que un procesado fuera considerado reincidente para negarle la libertad bajo fianza y no lo fuera a los efectos de la ley penal. (C. C. C., *Tribunal Pleno*, agosto 24/23. — *Fallos*, 1-536.)

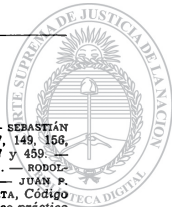
TITULO IX

CONCURSO DE DELITOS (1)

ART. 54. — Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 78. — Proyecto 1906, art. 58. — Código derogado, arts. 85 y 86.

FUENTE: El artículo 78 del Proyecto 1891.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-507 y siguientes. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-245 y 377 y 2-145, 146, 147, 149, 156, 165, 219, 271, 273, 274, 282, 283, 287, 289, 290, 291, 314, 315, 317 y 459. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 121. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-129 y 147. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-489. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-235. — SALVADOR CABALLERO, *Estudio teórico-práctico sobre el concurso de delitos*. Bs. As., 1898. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 455. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 519. — SEBASTIÁN SOLER, *Concurso de Delitos* (J. A., 66-276.) De "La Ley" (6-233) *Concurso de delitos*.

JURISPRUDENCIA

759. — La norma del artículo 54 del C. P., se reserva para los casos de menor peligrosidad, cuando el delito es uno, aunque sus consecuencias sean varias, como en el caso de la estafa con falsificación de documento, y para los casos de delito continuado. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 24/40. — *Rep. Jurid.*, 4-1264.)

760. — Si existe unidad de resolución y unidad de hecho, hay también unidad de delito. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 13/40. — *La Ley*, 20-983.)

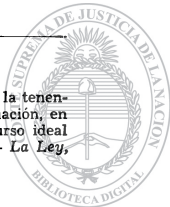
761. — Mientras que en el concurso material de delitos concurren dos hechos distintos e independientes, para la existencia de concurso ideal se requiere un solo hecho que encuadre, bajo varias sanciones penales. (*Cám. Correc. de Córdoba*, septiembre 20/1940. — *La Ley*, 20-994.)

762. — El que planea y lleva a cabo la falsificación de un medicamento con el empleo de sustancias inocuas y para venderlo engañosamente en mira de estafa, falsifica también los envases y sellos fiscales que darían la necesaria ilusión de la verdad, realiza con un solo designio criminoso, acciones sucesivas que se confunden en un solo hecho, jurídicamente inseparable. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 13/40. — *La Ley*, 20-983.)

(1) Ni el proyecto Teñedor, ni el de Villegas, Ugarriza y García, ni el Código derogado, legislaban especialmente sobre concurso de delitos. Se limitaban a sancionar la reincidencia y la reiteración, y, en general, las penas se acumulaban no pudiendo pasar del máximo legal. Fué el proyecto de 1891, el primero que trató el concurso de delitos en capítulo especial. El Proyecto de 1906, siguió la norma.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 72. — Si con un solo hecho se ha infringido más de una disposición de este Código, se aplicará la que fije sanción mayor.



763. — En el supuesto de encubrimiento derivado de la tenencia no legítima de la cosa hurtada y además de defraudación, en virtud de haber sido vendida como propia, media concurso ideal o formal y no real de delitos. (C. C. C., julio 12/40. — *La Ley*, 19-335.)

764. — Si en el momento en que el reo da la puñalada a su concubina, corre descalzo en su auxilio un agente de policía y al abrir de un puntapié la puerta del retrete donde se realizaba el hecho punible, recibe una herida cortante en el pie, no hay error subjetivo del procesado y existe concurso ideal de delitos. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 16/34. — *La Ley*, 17-57.)

765. — Corresponde la aplicación del artículo 54 del C. Penal, cuando las probanzas reunidas demuestran, sin lugar a dudas, que el encausado solo tuvo la intención de disparar el arma contra la mujer, repitiendo sus actos y produciendo la muerte de la criatura que llevaba en brazos, aquella y lesiones leves a la madre. (C. C. C., abril 4/39. — *La Ley*, 14-92.)

766. — Cuando los diversos actos, están determinados o inspirados por un sólo fin, el hecho es jurídicamente único, aunque el resultado material fuera múltiple. (C. C. C., abril 4/39 — *La Ley* 14-92).

777. — Las lesiones causadas al "poner manos en la autoridad" si bien no integran la figura delictiva del artículo 238 inc. 4° del C. Penal, tal circunstancia tampoco las reviste del carácter de un hecho independiente. Trátese, pues, de un hecho único que cae bajo la sanción de dos disposiciones penales, regidos en consecuencia, por el artículo 54 del C. P. (C. C. C., abril 14/39. — *La Ley*, 14-456.)

778. — Las expresiones injuriosas insertas en ocasión de las imputaciones de un delito de acción pública, que han sido vertidas en un mismo momento con éstas, se encuentran en concurso formal de delitos, regidos por el artículo 54 del C. Penal, como también lo están, las dos publicaciones de índole calumniosa, que aparecen completándose y que deben estimarse integrando una sola. (C. C. C., febrero 28/39. — *La Ley*, 13-666.)



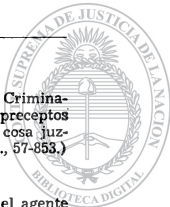
779. — Hay unidad de resolución delictuosa en el que hurta para vender lo hurtado y un sólo móvil que es la obtención de un lucro ilícito, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54 del C. Penal, procediendo su aplicación y no el artículo 55. (Cám. Fed. Bahía Blanca, abril 13/39. — *La Ley*, 16-132).

780. — No obstante existir “iter criminis” en el desarrollo de la acción delictuosa: lesiones inferidas con un cuchillo, seguidas por disparos de revólver ejecutados contra la misma agredida, legalmente, el hecho es un sólo cuando todos los actos que integran la acción imputable, se encuentran vinculados por la unidad de propósito, que fué dañar a la víctima y además de tal vinculación, se desarrollaron sin solución de continuidad suficiente como para separarlos e independizarlos, puesto que la agresión no cesó desde que se iniciara hasta que se produjeron los disparos contra la víctima. (C. C. C., dic. 30/38 — *La Ley*, 15-873).

781. — En el caso de venta de la cosa sustraída por el autor del robo o hurto, no existe concurso material de delitos porque el objetivo o propósito criminoso es uno sólo, es decir, la realización del lucro ilícito del hurto o robo. (Primera Inst., Capital, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-129).

782. — Si un jefe de oficina de Correos y Telégrafos fué procesado y condenado por malversación de caudales públicos por una suma determinada, que acusaba el déficit de valores de la repartición en el arqueo practicado, y con posterioridad se comprueba administrativamente que el condenado se había apoderado anteriormente de otra cantidad importante, no corresponde nuevo procedimiento por considerarse aquella actividad delictuosa combinada, como un solo hecho punible, no correspondiendo la aplicación de los artículos 55 ni 58 del C. Penal. — (Cám. Fed. Bahía Blanca, mayo 12/37 — *La Ley*, 9-116).

783. — Aun cuando en la malversación cometida por el encausado haya mediado pluralidad de infracciones, ellas constituyen, a los efectos de la represión, una sola, si la repetición de los diversos actos constituyen la ejecución sucesiva de una misma resolución criminal, vale decir, la comisión de un solo hecho punible. (Cám. Fed. de Bahía Blanca, mayo 12/37. — *La Ley*, 9-116.)



784. — Tanto el C. P. como el C. de Procedimientos Criminales han querido asegurar la aplicación estricta de los preceptos relativos al concurso de delitos a expensas de la propia cosa juzgada. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, febrero 16/37. — *J. A.*, 57-853.)

785. — No hay concurso de delitos si la intención del agente estuvo encaminada a una sola determinación y no aparecen completamente configuradas infracciones singularmente punibles. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 21/36. — *J. A.*, 57-613.)

786. — No existe tentativa de violación sino lesiones y abuso deshonesto en concurso formal de delitos si el reo niega toda intención de alcanzar con su acción el acceso carnal con la menor y los informes médicos no aluden a señales de violación reveladora de aquel intento, sino a un estado inflamatorio de la región vulvar y perivulvar de la víctima que está congestionada y edematosa, fluyendo por la vagina abundante pus de naturaleza gonocócica, enfermedad que también aqueja al procesado. (*C. C. C.*, diciembre 27/35. — *J. A.*, 53-244.)

787. — Un solo hecho delictuoso no es susceptible sino de una calificación legal y aunque pueda hallarse previsto en más de una disposición, no por ello pierde su unidad jurídica, ni debe dividirse dando lugar a dobles pronunciamientos, que sólo tienen en cuenta aspectos diversos del único hecho investigado. (*C. C. C.*, octubre 14/36. — *J. A.*, 56-314.)

788. — Si la ley penal, al no agravar especialmente la represión del delito de abuso deshonesto cuando se causa grave daño a la salud de la víctima, como lo dispone expresamente para la violación y el estupro, resolviendo así los casos particulares de concurso que ofrecen estas situaciones, libra la sanción a las normas generales del concurso formal o ideal de delitos. (*C. C. C.*, diciembre 27/35. — *J. A.*, 53-244.)

789. — Los delitos de atentado contra la libertad de trabajo y daños, constituyen concurso formal de delitos regidos por el artículo 54 del C. Penal si el repartidor fué obligado a descender y se le destruyó el vehículo con el fin de hacerlo plegar a la



huelga. (C. C. C., agosto 28/36. — J. A., 55-626.)

790. — Hay concurso ideal de delitos contra la libertad individual y extorsión, si el agente restringió la libertad individual de la víctima y si este delito medio fué eficaz para lograr el segundo fin propuesto. (Sup. Corte de Tucumán, agosto 10/36. — J. A., 57-613.)

791. — Encuadra en los artículos 172, 282 y 285 del C. Penal y se rige por el artículo 54 del mismo, el concurso de delitos constituido por la extracción de una suma de dinero que se encontraba depositada en un Banco, mediante un cheque extendido al nombre del titular de la cuenta con la firma falsificada por la procesada, quien había hurtado la libreta conjuntamente con otros efectos. (C. C. C., julio 3/36. — J. A., 55-262.)

792. — Existe concurso ideal de delitos si con un documento falsificado se comete una estafa. (C. C. C., junio 5/25. — Fallos, 1-152.)

793. — No hay concurrencia de hechos independientes entre la tentativa de hurto simple y la violación de domicilio cuando un reincidente es sorprendido en actitud sospechosa en morada ajena, sino un solo acto dirigido con un solo fin que encierra en realidad dos delitos y no es procedente por lo tanto, aplicar el artículo 55 sino el 54 del C. Penal, imponiendo al reo la sanción que fija pena mayor. (C. C. C., mayo 18/23. — Fallos, 1-158.)

794. — La circunstancia de que el hecho que motiva el proceso pueda caer bajo una doble sanción, no priva al damnificado por el delito más leve, del derecho de asumir el rol de querellante. (C. C. C., julio 24/35. — Fallos, 1-24.)

DELITO CONTINUADO (1)

BIBLIOGRAFIA

LORENZO CARNELLI, *La penalidad correspondiente al delito continuado (La Ley, 18-725) ¿Qué es en la doctrina, en la ley y en la jurisprudencia un delito continuo?* (Nota de J. A., 36-1615.)



JURISPRUDENCIA

795. — La reiteración de defraudaciones imputables al comisionista el que en un caso se apropia, en el carácter de tal, de sumas abonadas para el mandante y en otro retiene el pago de operaciones en las cuales él no intervino, actuando solo como co-brador, no constituye delito continuado. Aparte de no contemplarse especialmente en nuestra legislación tal clase de delitos, cada hecho reviste, en el caso, carácter autónomo. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 6/40. — *La Ley*, 21-96.)

796. — Procede considerar que se ha perpetrado un delito continuado y que, en consecuencia en sus fases sucesivas se ha violado la misma ley penal, si las publicaciones periodísticas inculminadas, han sido inspiradas por cierta unidad de intención y concretada a una campaña política con finalidad determinada. (*Cám. Fed. La Plata*, mayo 15/36. — *J. A.*, 54-368.)

797. — Los elementos constitutivos del delito continuo son tres: unidad de resolución criminal, violación de una idéntica norma penal, pluralidad de acciones. Suele exigirse también unidad del sujeto pasivo. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, octubre 27/31. — *J. A.*, 36-1315.)

798. — Para la existencia del delito continuo debe haber unidad de conciencia de delitos, es decir, no ha de haber en la mente del delincuente tantos delitos como actos, sino una sola conciencia, una resolución preestablecida a la que corresponda una única lesión jurídica, realizada por acciones diferentes. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, octubre 27/31. — *J. A.*, 36-315.)

ART. 55. — *Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al*

(1) Proyecto Coll-Gómez, art. 75: "Si con varios hechos ejecutivos de un mismo "delicto", se cometen, aún en distintos momentos, varias violaciones de la misma "disposición legal, no regirán las disposiciones sobre el concurso de delitos."



reo en tal caso tendrá como *mínimum*, el *mínimum* de la pena mayor y como *máximum*, la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del *máximum* legal de la especie de pena de que se trate.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 80. — Proyecto 1906, art. 59.

FUENTE: El artículo 80 del Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-507 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-78, 219, 283, 289, 290, 291, 314, 315, 318, 320, 321, 324, 442, 458, 459, 467 y 468. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-148. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 129. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-488. — JOSÉ PECCO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 469. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 519. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 121 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-117. — SEBASTIÁN SOLER, *Concurso de delitos*. (J. A., 66-276.) — SEBASTIÁN SOLER, *La prescripción de la acción penal en el concurso de delitos*. (J. A., 70, sec. doct., p. 3.) — GUGLIAMATTI CÉSAR, *Pluralidad de Acción y Unidad de Delito*. (La Scuola Positiva, Milán, enero-febrero 1939, p. 14.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 67. — Si mediare concurso real de delitos, el tribunal dispondrá que el agente sea sometido a reclusión por tiempo indeterminado, no menor de diez años, en los siguientes casos:

- 1º Cuando los delitos fueren dos y la sanción correspondiente a cada uno de ellos fuese la de prisión por tres a seis años.
- 2º Cuando los delitos fueren tres correspondiendo a uno de ellos prisión cuyo *máximum* sea de seis años y, a los otros, la misma sanción, por tres años o menos.
- 3º Cuando los delitos fueren cuatro o más, correspondiendo, a cada uno de ellos, prisión por tres años o menos.

Art. 68. — Si mediare concurso real de dos o más delitos a los que corresponda reclusión, no siendo a perpetuidad; o prisión por más de seis años; y en el caso de que, a alguno o algunos de los delitos corresponda reclusión, no siendo a perpetuidad, y al otro u otros prisión por más de seis años, el tribunal dispondrá que el agente sea sometido a reclusión por tiempo indeterminado, no menor de veinticinco años.

Art. 69. — En los demás casos de concurso real de delitos la aplicación de las sanciones se hará de conformidad a las siguientes normas:

- 1º Si a los diferentes hechos correspondiera una misma especie de sanción, se impondrá ésta dentro de los límites marcados por un *mínimum* que no podrá ser inferior al *mínimum* de la pena mayor, y un *máximum* que resultará de la suma de las sanciones correspondientes a los diversos hechos. Esta suma no podrá exceder de cien mil pesos moneda nacional, tratándose de multa.
- 2º Si entre los diferentes hechos hubiere alguno o algunos a los que correspondiera reclusión y otro u otros a los que correspondiera prisión por seis años o menos, se impondrá reclusión dentro de un *mínimum* y un *máximum* que se establecerá como si se tratara de sanciones de la misma especie, aplicándose, en consecuencia, la norma consignada en el párrafo precedente. La suma de las sanciones no podrá exceder de veinticinco años si se tratara de sanciones privativas de la libertad.
- 3º Si entre los diferentes hechos hubiere alguno al que correspondiera reclusión perpetua, será ésta la que se imponga.
- 4º Si entre las sanciones correspondientes a los diferentes delitos hubiere alguna o algunas privativas de la libertad y otra u otras que no lo sean, se impondrán todas.



JURISPRUDENCIA

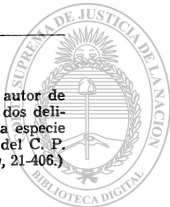
799. — El art. 55 del C. P., se refiere a la acumulación de penas y no a la de acciones. La aplicación de dicha disposición solo tiene rol en caso de condena y ha sido fijada para solucionar la aplicación de las penas pero jamás cuando se discute la extinción del derecho de acusar. (*Sup. Corte de Tuc.*, mayo 27/41. — *Rep. Jurid.*, 5-1899.)

800. — Lesionar con arma blanca a dos personas, una después de la otra, no constituye un solo hecho, sino dos hechos homogéneos independientes, porque así como han sido múltiples las consecuencias, múltiple ha sido también la acción del reo, que se ha propuesto y ha realizado, dos hechos reprimidos por la ley, que protege la integridad física de ambas personas. Se trata de un concurso real de delitos previsto por el art. 55 del C. P. (*Sup. Corte de Bs. As.*, diciembre 24/40. — *Rep. Jurid.* 4-1264.)

801. — Cuando el agente del delito de hurto penetra en un domicilio y lo realiza, la calificación legal que corresponde es la de violación de domicilio y hurto en concurso material, por cuanto se trata de dos hechos independientes que se proyectan en sendas modificaciones del mundo exterior, cada una de ellas adecuada a una fuerza moral subjetiva en el ánimo del agente. (*C. Correccional de Córdoba*, septiembre 20/40. — *Rep. Jurid.* 2-848.)

802. — La objetividad ideológica que anima la empresa delictuosa, crea simplemente una inseparabilidad accidental de las lesiones jurídicas cumplidas, y hacer en estos casos un solo delito, es desconocer los hechos, que son dos, y desconocer el derecho que es violado sucesivamente en dos de sus determinaciones. (*C. Correccional de Córdoba*, septiembre 20/40. — *Rep. Jurid.*, 2-848.)

803. — Las lesiones producidas con cuchillo a dos personas, una después de otra, que se habrían refugiado en una habitación después de discutir con el reo, no constituyen un solo hecho, sino por el contrario, dos hechos homogéneos independientes, es decir, un claro concurso de delitos regidos por el artículo 55 del C. P. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, diciembre 24/40. — *La Ley*, 21-627.)



804. — El hurto y la defraudación cometidos por el autor de aquél, al vender como propios los objetos hurtados, son dos delitos diferentes, independientes, reprimidos con una misma especie de pena, que hace de aplicación la regla del artículo 55 del C. P. (Cám. Fed. de Bahía Blanca, septiembre 18/40. — *La Ley*, 21-406.)

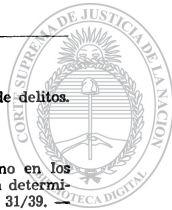
805. — A los efectos de la determinación de la pena aplicable, existe concurso material o real de delitos, cuando no obstante la conexión ocasional entre las diversas acciones delictuosas, no hay en ellas unidad objetiva y subjetiva. (Corte Suprema, marzo 1°/39. — *Fallos*, 183-136. — *Parry*, V. 27-606.)

806. — Quien penetra en forma subrepticia en morada ajena y se apodera ilegítimamente de una cosa que no le pertenece, comete los delitos de violación de domicilio y hurto simple, en concurso material. (Cám. Correc. de Córdoba, septiembre 20/40. — *La Ley*, 20-559.)

807. — Si con motivo del delito de resistencia a la autoridad, el funcionario público es objeto de una agresión con armas (art. 104 del C. Penal), automáticamente funcionarán las reglas generales del concurso, de conformidad a la norma del artículo 55 del citado código, por ser mayor la violencia que lo acompaña a la que realmente contiene el tipo de delito y de ninguna manera la disposición del artículo 238, por atender éste a la agravación de una figura legal específica y absolutamente distinta. (Cám. Correc. de Córdoba, mayo 20/40. — *La Ley*, 20-559.)

808. — No procede la libertad bajo caución si del auto de prisión preventiva, resulta que el procesado ha incurrido *prima facie*, en la comisión de los delitos de hurto y defraudación previstos y penados por los artículos 162 y 172 del C. Penal, pues según la regla del artículo 55 del mismo código, el *máximum* de la pena aplicable, excederá el límite que fija la ley 12.583. (Cám. Fed. La Plata, abril 26/40. — *La Ley*, 18-585.)

809. — Aunque la imputación calumniosa se hiciese en un mismo escrito, si se dirige contra cada uno de los querellantes en particular, atribuyéndoles además, hechos de particular interven-



ción, existe concurso material y no formal o aparente de delitos. (C. C. C., diciembre 19/39. — *La Ley*, 17-307.)

810. — La acumulación de acciones no procede sino en los casos de concurso material de delitos, a los efectos de la determinación de la pena a aplicar. (Cám. Fed. Capital, mayo 31/39. — *La Ley*, 15-298.)

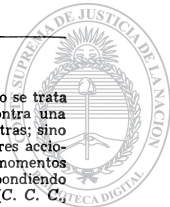
811. — Hay concurso real de delitos si se viola un domicilio en busca de la concubina y al ser increpado por el dueño de casa, el reo resuelve recién herirlo. (Sup. Corte de Tuc., septiembre 30/39. — *La Ley*, 16-956.)

812. — Hay concurso material de delitos en los hechos de hurtar una bicicleta y empeñarla luego engañosamente en el Banco Municipal de Préstamos (artículo 173 inc. 9° del C. Penal). (Sup. Corte de Tuc., diciembre 6/38. — *La Ley*, 17-418.)

813. — Las lesiones inferidas por el procesado a su esposa y a la hermana de ésta, aún cuando en un mismo lugar y tiempo, constituyen dos hechos con vida propia y distinta, si las dos víctimas han sido agredidas sucesivamente. En tal situación, hay concurso real de delitos y es aplicable el artículo 55 del C. P. (C. C. C., junio 18/35. — *J. A.*, 53-231.)

814. — Existe concurso material de delitos y no concurso formal en el homicidio doble y las lesiones graves ocasionadas a otra persona en el incidente producido con una de ellas, desde que cada delito constituye un hecho independiente realizado por una acción perfectamente individualizada, contra un sujeto pasivo diferente, con la sola conexión de provenir del mismo ejecutor. (C. C. C., abril 3/36. — *J. A.*, 54-232.)

815. — Existe concurso material de delitos, si el autor ha dirigido el ataque primero contra una persona, dándole muerte a tiros de pistola, luego contra uno de los acompañantes de la víctima haciéndole dos o tres disparos mientras lo perseguía alrededor de un camión; y por último, cuando ya se alejaba del lugar de los he-



chos, hace nuevos disparos contra una tercera persona. No se trata de una acción única, hecha en un mismo impulso, y contra una misma persona, que por desvío de la puntería alcanza a otras; sino de tres hechos ejecutados sucesivamente por medio de tres acciones completas, contra tres personas distintas, en tres momentos diferentes, aunque separados por cortos intervalos, respondiendo también cada uno de ellos a una intención diferente. (C. C. C., abril 16/37. — J. A., 58-170.)

816. — Nada obsta a la acumulación de penas, aunque uno de los delitos esté reprimido con prisión o reclusión y el otro con prisión solamente, si el tribunal sentenciador escogió de las penas paralelas correspondientes al primer delito, la de prisión. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, junio 4/40. — *La Ley*, 19-553.)

817. — Tratándose de faltas, no es aplicable el sistema de acumulación relativa de penas establecidas por el artículo 55 del C. Penal, sino la acumulación material de las penas de multa. No es aplicable la última parte del artículo 55 del C. Penal. (C. C. C., julio 31/35. — *Fallos*, 1-29.)

818. — No procede la acumulación de causas análogas seguidas contra el mismo querellado como medida "para mejor proveer". En la hipótesis de recaer sentencia condenatoria en alguna de esas causas sin observarse la regla del artículo 55, el querellado no se perjudica, pues el artículo 58 del mismo código le acuerda el derecho de pedir en su oportunidad el pronunciamiento de sentencia única. (C. C. C., agosto 16/33. — *Fallos*, 1-33.)

819. — El hecho de mediar imputación de dos o más delitos, no implica la acumulación de términos de prescripción. (C. C. C., julio 31/28. — *Fallos*, 2-231.)

820. — La acumulación de penas por distintas infracciones cometidas independientemente, no altera el término de la prescripción de cada caso. (C. C. C., marzo 23/26. — *Fallos*, 2-246.)



ART. 56. — Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará esta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión temporal, en que se aplicará reclusión perpetua.

La inhabilitación se aplicará siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1°.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 81. — Proyecto 1906, art. 61. — Código derogado, art. 85.

FUENTE: El Proyecto de 1891 (art. 81).

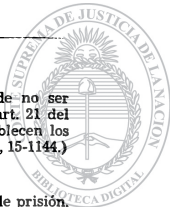
BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-513. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-318, 320, 321, 322, 324, 396 y 467. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-149. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 132. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 469. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 519. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 122. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-118. — SEBASTIÁN SOLER, *Concurso de delitos*. (J. A., 66-276.) — SALVADOR CABALLERO, *Estudio teórico-práctico sobre el concurso de delitos*. Bs. As., 1898.

JURISPRUDENCIA

821. — En los casos de concurso real de los delitos de corrupción e infracción a la ley 12331, corresponde aplicar una y otra pena, ya que cuando concurre un delito reprimido con pena privativa de la libertad, divisible, y otro sancionado con pena pecuniaria, indivisible (multa), procede la imposición de una y otra sanción, siendo posible la acumulación mediante las reglas del concurso (art. 56 C. P.), solo cuando agotado el procedimiento para lograr el pago de la multa, sin éxito, se transforma ésta en prisión. (C. C. C., septiembre 10/40. — *Rep. Jurid.* 2-572.)

822. — Cuando se trata de una condena por cohecho y otra por delito penado con multa, el absurdo jurídico de tener que imponer como pena única la de multa dado su carácter indivisible, dejando impune el delito de cohecho, lo que podría resultar de la aplicación de los arts. 27 y 58 del C. Penal en combinación con el 2° apartado del art. 56 del mismo Código, se evita intimando el juez que impuso la pena más grave, el pago de la multa, en uso de la potestad que le confieren los arts. 58 del citado Código y 557



del C. de Proced. convirtiéndola en prisión en caso de no ser aquella satisfecha, de acuerdo con lo prescripto por el art. 21 del C. P., hecho lo cual, procederá la acumulación que establecen los arts. 27 y 55 del C. P. (C. C. C., septiembre 8/39. — *La Ley*, 15-1144.)

823. — La pena de multa no puede acumularse a la de prisión, aplicando el artículo 56 del C. P., antes de transformada en prisión, siguiendo el trámite que señala el artículo 21. La sentencia única que viola dichas reglas, adolece por tanto de nulidad. (C. C., julio 25/39. — *La Ley*, 15-493.)

824. — Si las penas son de distinta naturaleza y divisibles, debe aplicarse la del delito más grave, teniendo en cuenta para graduarla, las de los delitos menos graves. (C. C. C., julio 3/31. — *Fallos*, 2-401.)

825. — A los efectos de fijar pena única en los casos de concurso material de delitos, uno de ellos reprimido por una sola pena (prisión) y el otro por penas alternativas (reclusión o prisión), si el juez elige entre éstas el tipo de sanción igual a la impuesta para el primero (prisión), es aplicable el artículo 55; en cambio, de decidirse por la otra (reclusión), estaría en juego el artículo 56 del C. Penal. (C. C. C., julio 3/24. — *Fallos*, 1-209.)

ART. 57. — *A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el artículo 5°.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 82. — Proyecto de 1906, art. 61.

FUENTE: El artículo 82 del Proyecto 1891.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

ART. 70. — *A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las sanciones se determinará en el siguiente orden: reclusión, prisión, inhabilitación y multa.*



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-515. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-322 y 371. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-150. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 132. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 469. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 123.

JURISPRUDENCIA

(Ver las de los artículos anteriores y posteriores de este mismo Título).

ART. 58. — Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya dictado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.

Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 83. — Proyecto 1906, art. 62.

FUENTE: Redactado por la Comisión Especial de Leg. Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados, en base a los Proyectos 1891 y 1906 que, a su vez, lo tomaron del art. 63 del Código Holandés y art. 76 del Código Italiano.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-514. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-322, 324 y 325. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-151 y 160. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 2-124. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 132. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 471. — RICARDO C. NÚÑEZ, *La influencia de la condenación condicional en la libertad condicional y en la unificación de penas.* (Boletín de la Fac. de Derecho y C. Sociales de Córdoba, septiembre-octubre 1939.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-285 y 2-119, 237, 316.



JURISPRUDENCIA

826. — Dictada la sentencia única, forzosamente ha de quedar incluido el tiempo de condena que debe computarse por el delito que indebidamente se juzgó por separado. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 13/39. — *La Ley*, 17-30.)

827. — Tratándose de dos delitos por lesiones leves y existiendo una condena firme de dos meses de prisión, la pena única no puede ir más allá de un año y dos meses de prisión o sea la suma de aquella pena y la máxima correspondiente al otro delito. (*Sup. Corte de Tucumán*, diciembre 13/39. — *La Ley*, 17-30.)

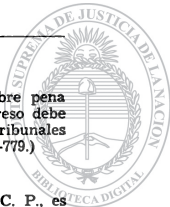
828. — Si por error o ligereza se adelanta el fallo de unos de los delitos concurrentes, la sentencia única corresponde, aunque se invoque prescripción de la pena irregularmente impuesta, pues tal prescripción es inadmisibles, si se considera que la pena prescribe en ausencia, mas no en presencia del reo restringido en su libertad —aquí en prisión preventiva por el delito restante—. Tampoco ha de hablarse de prescripción de la condena condicional por análogo motivo y por falta del período de prueba. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 13/39. — *La Ley*, 17-30.)

829. — Es nula la sentencia que aplica pena única, invocando el artículo 58 del C. P., si en el caso, por el primer delito se impuso al encausado pena de prisión condicional y por el segundo, pena de multa e inhabilitación especial y cuando la sentencia efectúa la unificación de las condenas con penas de prisión, sin haber exigido previamente el pago de la multa; máxime si también se omitió mantener la pena de inhabilitación especial. (C. C. C., septiembre 5/39. — *J. A.*, 67-947.)

830. — El reo condenado en la provincia, puede ser enviado a otra, de donde se le requiere para nuevo juzgamiento, teniendo

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 71. — Las reglas de los artículos 67, 68 y 69 se aplicarán, también, en el caso en que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar a la misma persona por otro delito cometido antes o durante el tiempo de la condena; o cuando se hubiesen dictado dos o más sentencias firmes con prescindencia de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya impuesto la sanción mayor dictar la sentencia única, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.



en cuenta lo dispuesto por el artículo 58 del C. P. sobre pena única. En caso de absolución por el nuevo delito, el preso debe ser devuelto para que cumpla la pena impuesta por los tribunales locales. (*Sup. Corte de Tuc.*, junio 27/39. — *La Ley*, 15-779.)

831. — Lo dispuesto por los artículos 27 y 58 del C. P., es aplicable al supuesto de una primera condena por cohecho dejada en suspenso y la comisión del hecho que reprime el artículo 17 de la ley 12331, antes de transcurrido el término para la prescripción de aquella pena. (C. C. C., septiembre 8/39. — *La Ley*, 15-1144.)

832. — La comisión de un nuevo delito antes de vencer el término de la pena de prisión anterior, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, hace aplicable en principio el artículo 58 del C. Penal, pero esa aplicación no corresponde cuando la segunda pena es de multa y no se halla en estado de ser convertida en prisión por no haberse observado previamente los trámites establecidos por el artículo 21 del citado Código. (C. C. C., septiembre 5/39. — *La Ley*, 16-174.)

833. — No es aplicable el artículo 58 del C. P. referente a la imposición de pena única, si no medió pedido de parte en tal sentido —como lo prescribe el segundo párrafo de dicho precepto— y no subsiste la pena menor, conpurgada por haber transcurrido el plazo de prescripción durante la prisión preventiva. (C. C. C., agosto 18/39. — *La Ley*, 15-964.)

834. — El juez que impone pena única, no se limita a aplicar sanción por el hecho último, sino que debe examinar la situación de conjunto: vigencia de la pena anterior, procedencia de la sanción única, monto final de la acumulación. Por ello, es apelable la sentencia, aunque el hecho último juzgado, no sea de consulta (artículo 690 del C. de Procedimientos de la Prov. de Tucumán) y haya consentimiento del reo. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 29/39. — *La Ley*, 15-1124.)

835. — El régimen de la unidad penal, solo puede referirse a sanciones que deban cumplirse simultáneamente o sanciones su-



cesivas que hayan de purgarse sin solución de continuidad, de modo que solo quedan excluidos de él, las penas ya agotadas por cumplimiento anterior, a la sanción subsiguiente. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

836. — El artículo 58 del C. P., extiende la regla de los artículos 55 al 57, a los reincidentes con pena anterior incumplida y al disponer que a estos últimos se les aplicarán las “reglas precedentes”, está demostrando que, es al juzgárselo por el segundo delito que deben respetarse tales normas. Es decir: que la pena debe unificarse en el acto de la nueva sentencia y no antes. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

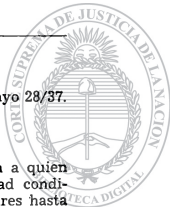
837. — La existencia de una condena anterior que se encuentra consentida, hace procedente la sentencia única a que se refiere el artículo 58 del C. P., debiendo fijarse la penalidad por composición y no por suma. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, julio 15/37. — *La Ley*, 10-527.)

838. — La disposición del artículo 58 del C. P., no puede contemplarse aisladamente sin relacionarla con los demás preceptos que se vinculan y con ella forman un sistema penal específico. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

839. — No existe oposición entre la primera parte del artículo 58 del C. P. y el Código de Procedimientos Criminales de Buenos Aires. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, marzo 25/38. — *La Ley*, 10-990.)

840. — Corresponde al juez del Crimen Provincial, la sentencia única en el supuesto del artículo 58 del C. P., sin que sea aplicable el procedimiento de revisión que legisla el artículo 311 inciso 6° del C. de Procedimientos Penales de Buenos Aires para otros supuestos. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, mayo 13/38. — *La Ley*, 11-161.)

841. — Corresponde aplicar pena única al procesado que delinquirió mientras gozaba de libertad condicional, si el tribunal que dictó la primera condena, revoca el beneficio de suspensión de la



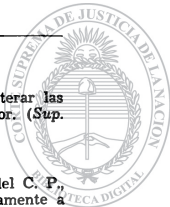
pena por haberse cometido un nuevo delito. (C. C. C., mayo 28/37. — J. A., 58-622.)

842. — No corresponde la imposición de pena única a quien delinque en la Capital Federal mientras goza de libertad condicional por un delito cometido en la Prov. de Buenos Aires hasta tanto no haya sido revocado previamente por el juez competente, el beneficio de suspensión de cumplimiento de la pena anterior. Las normas del C. P. rigen siempre que no se opongan al principio del inciso 11, artículo 67 de la Constitución Nacional, que garantiza el respeto de las jurisdicciones locales. (C. C. C., junio 11/37. — J. A., 58-937.)

843. — Para dictar la sentencia única que comprenda la pena impuesta por un delito anterior y la que corresponde al nuevo delito, el juez debe proceder a una apreciación libre del caso, fijando a su arbitrio la pena única dentro de los márgenes de imposición legal y no proceder a la suma aritmética de las penas de ambos delitos; no puede oponerse a esta solución el argumento relacionado con la cosa juzgada del delito anterior, porque el artículo 58 del C. P., velando por la efectividad de sus normas, ha instituido mediante la sentencia única, un verdadero recurso de revisión contra las sentencias firmes dictadas con violación de las reglas relativas al concurso de delitos y el recurso de revisión, implica precisamente la excepción al principio de la cosa juzgada. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, febrero 16/37. — J. A., 57-853.)

844. — No corresponde la imposición de pena única si desde la comisión del segundo delito que interrumpió la prescripción de la pena condicional impuesta al procesado en una causa anterior, ha corrido nuevamente y se cumplió el plazo de dicha condenación, extinguiéndose por ello. (C. C. C., agosto 6/37. — J. A., 59-646.)

845. — La sentencia única que se pronuncia al juzgar el segundo delito comprendiendo la pena impuesta por un delito anterior, si bien quebranta las normas relativas a la cosa juzgada por el hecho de que el juez debe apreciar el caso libremente y no efectuar la suma aritmética de las penas correspondientes, aunque esa suma no exceda del *máximum* autorizado por la ley, el quebrantamiento de la cosa juzgada no es absoluto, ya que solo se



refiere al monto de la penalidad, sin que se puedan alterar las declaraciones de hechos contemplados en el fallo anterior. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, febrero 16/37. — *J. A.*, 57-853.)

846. — La “violación” a que alude el artículo 58 del C. P., consiste simplemente en que se haya juzgado separadamente a un mismo individuo por delitos distintos cometidos por él, y en que se le haya impuesto penas aisladas que deba cumplir sucesivamente. La violación consiste en no haberse contemplado su responsabilidad en forma global, a los fines de la imposición de una pena única. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, febrero 16/37. — *J. A.*, 57-853.)

847. — La circunstancia de que la condena anterior quedara en suspenso, no implica que deba computársela en sentencia única al fallar el segundo proceso, si aquella se hallaba prescripta al cometerse el nuevo delito. (*C. C. C.*, septiembre 29/33. — *Fallos*, 1-153.)

848. — Si el procesado fué condenado condicionalmente por el segundo delito que cometió y después se le impone pena a cumplir por el primero, procede la acumulación para dictar sentencia única y en su caso, acordarle el beneficio de la condicionalidad de la condena por ambos delitos. (*C. C. C.*, octubre 4/32. — *Fallos*, 1-160.)

849. — Cuando la sentencia única dictada por el juez del crimen afecta a uno solo de varios condenados en un proceso correccional, corresponde la ejecución de la misma al juez mencionado y al de lo correccional la que se refiere a los otros condenados. (*C. C. C.*, agosto 8/34. — *Fallos*, 2-396.)

850. — Estando prescripta la pena correspondiente al delito anterior, no es procedente la aplicación de una pena única que involucre a aquel y al que motiva el proceso actual. (*C. C. C.*, marzo 9/34. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-39.)

851. — Corresponde dictar, una sola sentencia, de oficio, si



el procesado fué anteriormente condenado por otro delito por la justicia federal, cuya pena se halla cumpliendo. (C. C. C., junio 5/25. — *Fallos*, 2-397.)

852. — Si una condena de la jurisdicción criminal ha sido dejada en suspenso, pero luego el condenado sufre otra condena correccional, el juez del crimen es el que debe dictar la sentencia única prevista por el artículo 58 del Código Penal. (C. C. C., diciembre 9/25. — *Fallos*, 2-398.)

853. — No procede la paralización de un juicio en estado de sentencia, a los efectos de esperar que llegue al mismo estado, otro juicio contra el mismo procesado, para acumularlo. (C. C. C., septiembre 3/26. — *Fallos*, 2-399.)

854. — Si hubiera que dictar sentencia única por acumulación de pena correccional y criminal, es el juez del crimen quien debe hacerlo. (C. C. C., noviembre 30/38. — *Fallos*, 2-399.)

(Ver jurisprudencia del artículo 27 para los casos de unificación de penas, cuando una de ellas ha sido dictada con carácter condicional.)

TITULO X

Extinción de Acciones y de Penas (¹)

ART. 59. — *La acción penal se extinguirá:*

- 1º *Por la muerte del imputado;*
- 2º *Por la amnistía;*
- 3º *Por la prescripción;*
- 4º *Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.*

ART. 59, inciso 1º — (Ver artículo 70).

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título III; art. 17. — Proyecto 1891, art. 95. — Proyecto 1906, art. 63 inciso 1º.

FUENTE: El Proyecto de Tejedor, quien lo tomó del Código de Baviera.



ART. 59, inciso 2° — (Ver artículo 61).

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 95, inciso 2°. — Proyecto 1906, art. 63, inciso 2°.

FUENTE: Los proyectos mencionados.

ART. 59, inciso 3° — (Ver artículos 62, 63, 65 y 66.)

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 95, inciso 3°. — Proyecto 1906, art. 63, inciso 3°.

FUENTE: El art. 95, del Proyecto 1891.

ART. 59, inciso 4° — (Ver artículo 60).

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 95, inciso 4°. — Proyecto 1906, art. 63, inciso 4°.

FUENTE: El Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-448, 454, 462, 463. — RODOLFO MORENO, 3-166. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-425. — TOMÁS JOFRÉ, *El C. Penal de 1922*, p. 133. — JOSÉ PECÓ, *La Reforma Penal 1917-20*, p. 476.

ART. 60. — *La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos* ((¹), (²), (³)).

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 96. — Proyecto 1906, art. 64.

FUENTE: Los proyectos mencionados.

(1) La jurisprudencia del presente artículo, va al pie de los artículos básicos en cada caso particular. La prescripción de las acciones va en los arts. 62 y 63; la de las penas, en los arts. 65 y 66; la prescripción de las acciones y de las penas de las leyes no penales, al pie del artículo 64; la de renuncia del agraviado, en el art. 61 y la referente a amnistía en el artículo 61.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

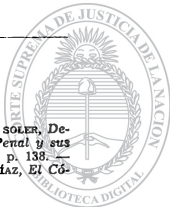
Art. 103. — La acción penal se extingue:

1° Por la muerte del imputado.

2° Por la amnistía.

3° Por la prescripción.

4° Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-461. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-178. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 138. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 490. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 123.)

855. — La renuncia no está sometida a ninguna formalidad (art. 873 del C. Civil). Por eso, si una renuncia a toda acción civil es redactada en instrumento privado y se reconoce posteriormente en juicio, ella es plenamente válida. El magistrado que entiene en el juicio penal, debe limitarse a precisar si la renuncia a la acción civil, tiene o no efectos legales. (*Sup. Trib. de San Luis*, agosto 9/41. — *Rep. Jurid.*, 6-2164.)

856. — Al padre de la víctima de un homicidio que renunció por instrumento privado a toda acción civil, se le puede oponer la excepción de falta de acción si pretende intervenir en el carácter de querellante particular. (*Sup. Trib. de San Luis*, agosto 9/41. — *Rep. Jurid.*, 6-2164.)

857. — Si el damnificado por el delito realizó transacción sobre el pago del daño con un tercero responsable civilmente, carece de acción para querellar criminalmente a los autores materiales del hecho. (C. C. C., octubre 5/34. — *Fallos*, 1-396.)

858. — La disposición del artículo 1097 del C. Civil sólo se refiere a los casos en que el agraviado pueda renunciar a la acción penal, es decir, cuando se trata de un delito de acción privada; pero en manera alguna cuando se trata de uno de acción pública. (C. C. C., octubre 5/28. — *J. A.*, 28-739.)

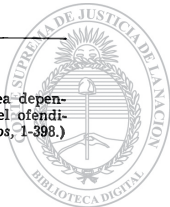
(1) Código Civil, artículo 1097: "La acción civil no se juzgará renunciada por no haber los ofendidos durante su vida intentado la acción criminal o por haber desistido de ella, ni se entenderá que renunciaron a la acción criminal por haber intentado la acción civil o por haber desistido de ella. Pero si renuncian a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se tendrá por renunciada la acción criminal."

(2) Artículo 15 del C. de Pr. Cr. en lo Cr. para la Cap. y Terr. Nac.: "La acción penal solo se extingue por la renuncia de la persona ofendida".

(3) Artículo 16 del mismo código: "La renuncia de la acción privada, no perjudica más que al renunciante y a sus sucesores".

PROYECTO COLLI-GOMEZ (1937)

Art. 104. — La renuncia de la persona agraviada sólo tendrá efecto en relación al renunciante y a sus herederos.



859. — Si el delito es de acción pública, aunque sea dependiente de instancia privada, la condonación o perdón del ofendido, no paraliza la acción. (C. C. C., marzo 25/35. — *Fallos*, 1-398.)

ART. 61. — *La amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.*

ANTECEDENTES: Constitución Nacional, art. 67, inciso 17. — Proyecto 1891, art. 97. — Proyecto 1906, art. 65.

FUENTE: El art. 67, inciso 17 de la Constitución Nacional.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-433, 455 y 463. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 477. — RÓDOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-178. — LEVASSEUR G., *L'Amnistie, son influence sur le droit disciplinaire*, Paris 1933. — P. RODRÍGUEZ VILLAR, *La Amnistia en el Derecho Argentino*, (antecedentes nacionales), Bs. As., 1932. — RENÉ TAHON, *L'Amnistie*. (*Revue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Medecine Legale*. Bruselas, enero-febrero 1940.)

JURISPRUDENCIA

860. — Ha perdido su derecho para volver a ocupar su lugar en la actividad y cobrar sus emolumentos, el militar que fué dado de baja, por delitos militares conexos con políticos y que no se presentó a reincorporarse a las filas y a tomar servicio cuando fué llamado, o por lo menos antes de dos años de cesar la causa de su alejamiento. (Ley 9675, art. 21). (*Corte Suprema*, junio 2/41. — *Rep. Jurid.*, 5-1893.)

861. — La amnistía es el olvido de un hecho delictuoso para restablecer la calma y la concordia social, que extingue la acción

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

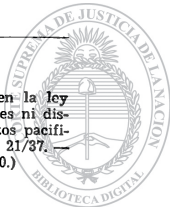
Art. 105. — La amnistía no extingue el derecho a la indemnización del daño causado por el delito.

y la pena si antes hubiera sido impuesta, y borra la criminalidad del hecho. (*Corte Suprema*, septiembre 8/37. — J. A., 59-746.)

862. — La ley, al establecer expresamente que la amnistía que sanciona es amplia, y comprende a todos los que hubieren cometido delitos políticos y militares conexos con aquéllos, sin más excepción que los delitos comunes, es decir, los calificados por la legislación común, no admite una excepción relativa a los emolumentos del procesado o penado o de su familia, en base a que la baja del mismo del ejército se decretó por su rebeldía o contumacia, no concurriendo a un tribunal que le formó proceso por delitos políticos-militares, pues la infracción procesal no puede conceptuarse más grave que la rebelión ejecutada por un militar; y sobre todo, siempre sería una infracción conexa con el delito, accesorio del mismo, no pudiendo nunca encuadrársela entre los delitos comunes que la ley menciona como excluidos de sus beneficios. (*Corte Suprema*, septiembre 8/37. — J. A., 59-746.)

863. — La ley 12.348 concede una amnistía tan amplia, que comprende a todos los infractores de las leyes de enrolamiento y servicio militar, sea cual fuere la causa de la infracción; aplicada a la sentencia que privó de la ciudadanía a quien no se enroló en tiempo, no deja subsistente ninguna de las sanciones jurídicas contenidas en la misma y coloca forzosamente al infractor en la condición de ciudadano que tenía antes de la condena, sin necesidad de que realice otra vez las diligencias para recuperar aquel estado y sin que sea óbice a ello, la circunstancia de haber desaprovechado la amnistía que le concedía la anterior ley 11.657. (*Corte Suprema*, julio 12/37. — J. A., 59-14.)

864. — La ley de amnistía 11.626, ampara al General del Ejército en situación de retiro absoluto, que fué dado de baja por habérsele declarado rebelde en la causa que se le seguía ante el correspondiente Tribunal Militar, por tentativa de sedición cometida con anterioridad a dicha ley; y que al haber sido reincorporado por el P. E., ha recuperado la situación que tenía antes de dictarse la baja. En esas condiciones, deben ser liquidados los haberes que a él o a sus familiares no les fueron abonados, y computarse intereses desde la fecha en que sea notificada la aprobación de la liquidación. (*Cám. Federal de la Capital*, abril 21/37. (*Confirmado por la Corte Suprema*). — J. A., 58-50.)



865. — La amnistía sancionada por el Congreso en la ley 11.626, debe aplicarse con toda amplitud, sin restricciones ni distinciones que desvirtúen su espíritu y los saludables efectos pacificadores que se tuvieron en vista. (*Cám. Fed. Cap.*, abril 21/37. — *Fallo confirmado por la Corte Suprema*). — *J. A.*, 58-50.)

866. — El artículo 67 inciso 17 de la Constitución Nacional, ha sido tomado al pie de la letra de las "Bases" de Alberdi sin que haya sido objeto de observaciones ni discusión en el Congreso Constituyente. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, octubre 3/35. — *J. A.*, 52-393.)

867. — De las opiniones de los tratadistas que se ocupan de la amnistía, surge de un modo preciso que ésta no tiene otro límite, que el que pudiera establecer el poder que la dicta, en cada situación particular. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, octubre 3/35. — *J. A.*, 52-393.)

868. — La facultad de conceder amnistía atribuida al Congreso por la Constitución Nacional, debe entenderse que no tiene limitación y que abarca los delitos e infracciones de cualquier especie; de no ser así, se habría hecho en nuestra carta fundamental, la salvedad de que la amnistía se refiere a los delitos de "sedición", como lo hacen las constituciones provinciales. (*Cám. Federal de Bahía Blanca*, octubre 3/35. — *J. A.*, 52-393.)

869. — Los preceptos de nuestra legislación referentes a la amnistía, son bastante restringidos; no la definen, no puntualizan sus caracteres ni la reglamentan. Esta omisión se observa también en la legislaciones extranjeras, lo que demuestra que, sin duda obedece al concepto, de que una institución de esa índole, difícilmente podría ser genéricamente limitada. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, octubre 3/35. — *J. A.*, 52-393.)

870. — La amnistía extingue la acción y la pena y borra la criminalidad del hecho. (*Corte Suprema, Fallos*, 178-377. *Parry*, V. 25-616.)

871. — Dictada una ley de amnistía, sin ninguna limitación



o salvedad, el naturalizado que fué condenado a la pérdida de la ciudadanía argentina, readquiere la calidad de ciudadano, sin que le sea menester realizar las gestiones necesarias para obtener de nuevo aquel estado. (*Corte Suprema*, 178-157. *Paírry*, V. 25-616.)

872. — La amnistía es una medida política y de carácter general, que no tiene en vista un delincuente ni un hecho determinado, comprendiendo todos los delitos de una misma especie, que puedan haberse cometido en un momento dado, o hasta cierta época. (*Corte Suprema*, septiembre 19/27. — *J. A.*, 25-1200.)

873. — La amnistía se aplica con igual amplitud de liberación y de exención penal a los procesados que a los que sufren sentencia condenatoria, toda vez que por su propia naturaleza, la amnistía borra el delito y extingue la acción y la pena. (*Corte Suprema*, agosto 3/28. — *J. A.*, 28-6.)

874. — La amnistía se aplica a los condenados y a los que no lo están todavía, reputando como inocentes a los beneficiados. (*Corte Suprema*, septiembre 19/27. — *J. A.*, 25-1200.)

ART. 62. — La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

- 1º A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;
- 2º Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;
- 3º A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
- 4º Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;



- 5° A los dos años, cuando se tratare de hecho reprimidos con multa mayor de dos mil pesos;
- 6° Al año, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de dos mil pesos o menos.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título VII, artículo 1. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 104. — Proyecto 1891, art. 98. — Proyecto 1906, art. 66. — Ley 4189, art. 16 (Primera parte). — Código derogado, art. 89.

FUENTE: Redactado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en base al Proyecto de 1906, y teniendo en cuenta la crítica del Dr. Herrera, en su obra "La Reforma Penal (págs. 595 y siguientes).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-456, 457, 458, 459. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-180. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 139. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 595. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 597. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 123. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-53 y 2-122, 238. — ALFREDO J. MOLINARIO, *Interrupción de la prescripción de la acción penal*. (Rev. de Psiquiatría y Criminología. Bs. As., set.-oct. 1940.) — SEBASTIÁN SOLER, *La prescripción de la acción penal en el concurso de delitos*. (J. A. 70, sec. doc., p. 3.) — BRUN DE VILLARET, *Traité theorique et pratique de la prescription en matiere criminelle*. Paris 1863.

JURISPRUDENCIA

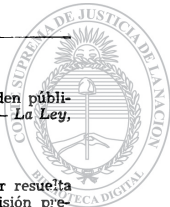
875. — La defensa de prescripción de la acción penal, debe substanciarse como previa, aunque fuera opuesta en el plenario. (C. C. C., marzo 21/41. — *La Ley*, 22-27.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 106. — La acción penal se prescribirá:

- 1° A los veinticinco años, cuando se trate de delitos para los que estuviere establecida la reclusión perpetua.
- 2° Después de transcurrido el máximo de duración de la sanción señalada para el delito, si fuere la de reclusión temporal o la de prisión.
El término de la prescripción no podrá exceder, sin embargo, de quince años, ni ser inferior a cinco años.
- 3° A los cinco años, cuando se tratare de un hecho para el cual estuviere establecida, como única sanción, la de inhabilitación.
- 4° A los cinco años, cuando se tratare de un delito para el cual estuviere establecida la multa en cantidad superior a cinco mil pesos. A los dos años, si fuere inferior a dicha suma.

Los términos precedentes se aumentarán en la mitad si el condenado hubiere revelado habitualidad, establecida en una sentencia anterior y en la forma que preceptúa el inciso e) del artículo 20, o si fuere reincidente en condiciones de peligrosidad declarada en una sentencia anterior, conforme al inciso f) del mismo artículo.



876. — La prescripción de la acción penal es de orden público y debe ser declarada de oficio. (C. C. C., abril 4/41. — *La Ley*, 22-309.)

877. — La prescripción de la acción penal debe ser resuelta conforme a la calificación contenida en el auto de prisión preventiva, aunque medie divergencia de criterio del Ministerio Fiscal acerca de dicha calificación, ya que ésta no puede ser modificada ni variada por la sola acusación, mientras no se dicte sentencia definitiva. (Cám. Fed. de Bahía Blanca, noviembre 6/40. — *La Ley*, 21-916.)

878. — Las previsiones del C. P. sobre prescripción, no son aplicables por analogía a las faltas, ya que no se puede proceder por extensión analógica con respecto a normas que restrinjan la potestad punitiva del Estado. (Cám. Correc. de Córdoba, octubre 3/40. — *La Ley*, 20-339.)

879. — Siendo la prescripción, una renuncia legislativa de parte del Estado a la potestad represiva, condicionada por el curso continuado de cierto período de tiempo, su reconocimiento por el derecho no se hace en base al inmediato interés del imputado, si no al del interés público. (Cám. Correc. de Córdoba, octubre 3/40. — *La Ley*, 20-339.)

880. — Las disposiciones del C. P. relativas a la prescripción de la acción, consideran la situación individual de cada una de las personas indicadas como partícipes de un hecho delictuoso. Y si hacen referencia a los delitos y a las penas con que éstos se hallan reprimidos, ello ocurre para fijar el plazo necesario en cada caso, a los efectos de declararla operada. (C. C. C., abril 12/40. — *La Ley*, 18-343.)

881. — La prescripción de la acción penal no puede declararse operada, si se desconoce al autor del hecho que motivó la instrucción del sumario. (C. C. C., abril 12/40. — *La Ley*, 18-343.)

882. — La acción penal no nace de la pena sino del delito;



y si bien los términos establecidos en la ley para la prescripción de la acción se fijan con referencia a la penalidad que corresponde al delito, ello no es sino el criterio o método elegido para graduar el término de la prescripción, tomando la penalidad y el tiempo o monto de la misma, como índice del exponente de la gravedad del delito pero nunca como la causa determinante de la prescripción. (Cám. Fed. de Mendoza, febrero 10/40. — *La Ley*, 18-678.)

883. — Cuando por disposición de la ley, corresponde aplicar a la vez en una misma causa varias penas de distinta naturaleza, la prescripción de la acción, debe referirse al término máximo relativo a las diversas penas aplicables, sin tener en cuenta los términos menores establecidos para las demás penas parciales en particular. (Cám. Fed. de Mendoza, febrero 10/40. — *La Ley*, 18-678.)

884. — La prescripción de la acción, debe referirse a la pena máxima que corresponda al o a los delitos materia del proceso; y si se trata de reiteración de delitos o de acumulación de penas, es la suma de éstas la que debe tenerse en cuenta y no la de cada una de las penas parciales en particular. (Corte Suprema, julio 10/40. — *Rep. Jurid.*, 6-2085.)

885. — Cuando por disposición de la ley corresponda aplicar a la vez en una misma causa, varias penas de distinta naturaleza, la prescripción de la acción debe referirse al término máximo que corresponda a las diversas penas aplicables, sin tener en cuenta los términos menores establecidos para las demás penas parciales en particular. (Corte Suprema, julio 10/40. — *Rep. Jurid.*, 6-2085.)

886. — Si la calificación legal del hecho es tal que no autoriza la prescripción para unos procesados, tampoco la autoriza para otros. (C. C. C., junio 12/40. — *Rep. Jurid.*, 3-1163.)

887. — La acción penal no puede prescribir y al mismo tiempo subsistir, según sean las penas que pueden corresponder "por un mismo delito" porque la acción no nace de la pena sino del delito. (Cám. Fed. de Mendoza, febrero 10/40. — *J. A.*, 69-783.)



888. — Declarada la extinción de la acción penal, no hay agravio posible para la defensa, que mal puede pretender un sobreseimiento ordinario. (*Sup. Corte de Tuc.*, diciembre 10/40. — *La Ley*, 20-1075.)

889. — La prescripción de las acciones y de las penas establecidas para los ciudadanos que infringen las obligaciones del enrolamiento y del servicio militar, se opera conforme a la legislación común, puesto que las leyes 4707 y 11.386, no contienen precepto alguno al respecto. (*Corte Suprema*, septiembre 27/40. — *La Ley*, 20-254.)

890. — La prescripción de la acción penal, por ser una excepción de previo y especial pronunciamiento y por su carácter de orden público, debe declararse aún de oficio. (*C. C. C.*, agosto 4/39. — *La Ley*, 15-749.)

891. — La prescripción de la acción penal es de orden público, puede ser declarada de oficio y en cualquier estado de la causa; de ahí que proceda dar curso al pedido de la prescripción formulado por quien invoca y, en principio justifica, con los documentos agregados, el carácter de esposa del procesado prófugo. (*C. C. C.*, octubre 27/39. — *La Ley*, 16-1048.)

892. — La prescripción de la acción penal cuando el hecho encuadra en una disposición legal que establece penas paralelas, debe considerarse con relación a la posibilidad de imposición de la pena más grave. (*Cám. Fed. La Plata*, mayo 12/39. — *La Ley*, 15-20.)

893. — La prescripción en materia penal, se funda en la falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito o la efectividad de una pena, por el transcurso del tiempo que la ley fija, pues se supone que han desaparecido los motivos de la reacción defensiva y que el delincuente se ha modificado y ha dejado de ser peligroso; y ello ocurre, naturalmente, cuando falta la iniciativa del proceso o cuando el agente motor del mismo demuestra despreocupación o desinterés. (*Corte Suprema*, diciembre 23/38. — *La Ley*, 13-490.)



894. — La norma general de la ley en materia de prescripción es la de correlacionar el término de ésta, con la mayor o menor gravedad de la pena. (*Sup. Corte de Bs. As.*, marzo 18/38. — *La Ley*, 10-1004.)

895. — La ausencia del procesado, no obsta a la declaración de la prescripción de la acción penal, ya que en esta materia, puede ser declarada en cualquier estado de la causa y aún de oficio. (*C. C. C.*, julio 15/38. — *La Ley*, 11-544.)

896. — El curso de la prescripción corre paralela e independientemente para cada hecho imputado, sin que puedan acumularse las posibles penas, a los efectos de computar el tiempo requerido para que aquélla se opere. (*C. C. C.*, mayo 5/37. — *J. A.*, 53-603.)

897. — La prescripción de la acción penal puede ser opuesta y debe declararse en cualquier estado del juicio. (*C. C. C.*, julio 16/37. — *J. A.*, 59-294.)

898. — Las circunstancias de haberse llamado autos para sentencia no inhibe al juez —a pesar de lo dispuesto en el artículo 493 del C. de Pr. Cr.— de admitir un escrito en el que se invoca la prescripción de la acción penal, por cuanto esa excepción no tiende a promover una discusión en el juicio, sino a ponerle término si fuese procedente, por medio de un pronunciamiento que puede dictarse aún de oficio. (*C. C. C.*, junio 18/37. — *J. A.*, 58-942.)

899. — En materia criminal, la prescripción es de orden público por lo que corresponde declararla de oficio. (*Cám. Fed. Cap.*, agosto 3/36. — *J. A.*, 55-399.)

900. — En materia criminal, la prescripción es de orden público, por lo que corresponde declararla de oficio por los jueces, aun respecto de delitos que, como el de calumnia, sólo dan lugar al ejercicio de acciones privadas. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 23/36. — *J. A.*, 56-72.)



901. — En la querella deducida contra el gerente de la sociedad, por el uso de surtidores de nafta en condiciones irregulares de funcionamiento, debe declararse prescripta la acción penal si ha transcurrido el término respectivo desde que se cometió la última infracción, estando el querellado al frente de la gerencia. (C. C. C., abril 4/36. — J. A., 54-238.)

902. — Procede examinar y decidir sobre la prescripción de la acción, aun cuando por error el encausado que consideraba firme la sentencia condenatoria, haya impetrado la prescripción de la pena sin manifestar expresamente, conformidad con la misma. (Cám. Fed. La Plata, octubre 5/36. — J. A., 56-61.)

903. — Siendo la prescripción de orden público y habiéndola declarado de oficio, no procede anular la resolución respectiva por haberse omitido oír al querellante. (C. C. C., septiembre 8/33. — Fallos, 2-243).

904. — Si el partícipe en el delito de hurto fué sobreseído provisionalmente y el hecho aparece, prima-facie, como hurto calificado, la prescripción de la acción sólo procede cuando ha transcurrido el tiempo señalado como pena máxima para esa última calificativa. (C. C. C., junio 21/32. — Fallos, 2-239.)

905. — Si el sumario terminó por sobreseimiento provisional sin establecer en forma concluyente si la quiebra era culpable o fraudulenta, a los efectos de la prescripción debe calificarse en la forma más favorable al procesado. (C. C. C., diciembre 11/31. — Fallos, 2-237.)

906. — La prescripción de la acción penal, no extingue la obligación creada al fiador por la falta de la presentación oportuna de su fiado. (C. C. C., octubre 9/31. — Fallos, 1-458.)

907. — Las disposiciones del C. Penal referentes a la prescripción de la acción y de la pena, son aplicables a las infracciones de carácter municipal. (C. C. C., agosto 31/23. — Fallos, 1-162.)



Prescripción de la acción en las multas

(En las multas de leyes especiales, ver art. 4)

908. — La prescripción de la acción penal no cambia la situación jurídica del damnificado, con relación a la cosa que le fué substraída. (C. C. C., abril 17/31. — *Fallos*, t. 1-313.)

909. — La prescripción de la acción en los casos de multa, la ha legislado el código penal con relación a esa pena y con prescindencia de la situación que se crea cuando la multa es substituída por una pena corporal. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 5/36. — *J. A.*, 56-61.)

910. — La prescripción de la pena principal de multa, comprende la complementaria de inhabilitación especial (art. 94 del C. P.) de la que es inseparable. (C. C. C., octubre 2/36. — *J. A.*, 56-302.)

911. — Dejando el artículo 116 del C. P., al arbitrio del juez la elección de la pena de multa o prisión, la prescripción de la acción sólo debe regirse por la pena más grave, que es la privativa de la libertad. (C. C. C., octubre 20/25. — *Fallos*, 2-24.)

Prescripción de la acción en los casos de pluralidad de infracciones, concurso de delitos, etc.

912. — Cuando por disposición de la ley, corresponde aplicar en una causa varias penas de distinta naturaleza simultáneamente, la prescripción de la acción debe referirse al término máximo que corresponda a las diversas penas aplicables, prescindiendo de los términos menores establecidos para las demás penas parciales en particular. (*Cám. Fed. de Mendoza*, febrero 10/40. — *J. A.*, 69-783.)



913. — La situación jurídica que crea el concurso de delitos, impide considerar aisladamente las prescripciones de la acción penal que corresponden a cada uno de los delitos. (*Sup. Corte de Bs. As.*, julio 14/39. — *J. A.*, 69-532.)

914. — Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos distintos, la acción penal se prescribe para cada uno de ellos independientemente. (*Supremo Tribunal de San Luis*, julio 25/39. — *J. A.*, 69-535.)

915. — Cuando concurren hechos independientes, a los efectos de la prescripción de la acción penal, deben sumarse las penas aplicables, consideradas en abstracto. (*C. Apel. Com. y Crim. Mendoza*, julio 22/39. — *La Ley*, 15-676.)

916. — Cuando existe concurso de delitos, no corresponde apreciar aisladamente cada delito para la fijación de la pena, ni para considerar la prescripción de la acción, sino que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 55 del C. P., corresponde apreciar el conjunto de esos delitos. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 6/38. — *La Ley*, 10-924.)

917. — La prescripción de la acción penal, debe referirse a la pena máxima que corresponde al, o a los delitos materia del proceso y si se trata de reiteración de delitos y acumulación de penas, es la suma de éstas la que debe tenerse en cuenta, y no la de cada una de las penas parciales en particular. (*Corte Suprema*, junio 15/38. — *La Ley*, 11-1.)

918. — En los casos de concurso de delitos, para que se opere la prescripción de la acción, es necesario que transcurra un tiempo igual al máximo de la pena que sanciona el conjunto de delitos, es decir, que transcurra un tiempo igual a la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos delitos de fijación en el concurso. (*Sup. Corte de Bs. As.*, mayo 6/38. — *La Ley*, 10-924.)

919. — La prescripción de la acción debe referirse a la pena



máxima que corresponde al delito o delitos materia del proceso; tratándose de reiteración de delitos y acumulación de penas, debe tenerse en cuenta la suma de éstas. (*Corte Suprema*, junio 18/37. — *J. A.*, 58-707.)

920. — Si se imputaron al acusado varios delitos cometidos contemporánea y promiscuamente, no procede declarar la prescripción de los de menor pena, mientras no estén también prescriptos los reprimidos con pena mayor, aun cuando se sobresea provisionalmente con respecto a estos últimos. (*C. C. C.*, abril 10/33. — *Fallos*, 2-241.)

Efectos de la prescripción de la acción penal

921. — Si la acción penal se halla extinguida por prescripción, el tribunal no puede en manera alguna, entrar a juzgar el hecho en sí, como tampoco la responsabilidad de los acusados, ni aún en el caso de solicitarlo los mismos. (*C. C. C.*, agosto 4/39. — *La Ley*, 15-749.)

922. — La prescripción de la acción penal, inhibe al juzgador de toda decisión que no tenga atinencia con la calificación del hecho imputado como delito a los procesados y al tiempo transcurrido desde la fecha de su comisión. (*C. C. C.*, agosto 4/39. — *La Ley*, 15-749.)

923. — La prescripción de la acción penal, impide a la justicia pronunciarse sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad de los imputados. (*C. C. C.*, septiembre 20/38. — *La Ley*, 12-46.)

924. — Las causas criminales deben reputarse concluidas a los efectos del curso de la prescripción de la acción penal, cuando el fallo final no ha sido impugnado mediante un recurso legal. La interposición de un recurso improcedente, no puede restar a la decisión, el carácter de cosa juzgada. (*Sup. Corte de Bs. As.*, 17/38. — *La Ley*, 11-756.)



Prescripción de la acción en la tentativa

925. — Para la prescripción de la acción en la tentativa, hay que tomar la pena en abstracto —hasta el máximo de su duración para la tentativa— y no en concreto con respecto a la sanción que el juzgado piensa aplicar al reo. (*Sup. Corte Tuc.*, noviembre 4/39. — *La Ley*, 17-41.)

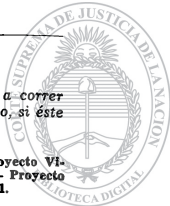
926. — La iniciación de una acción judicial con el propósito de consumar una defraudación, importa una tentativa de este delito que continúa cometiéndose mientras se sostiene dicha acción. La tentativa cesa, cuando se falla definitivamente el juicio instaurado y recién desde esa fecha empieza a correr el término de prescripción. (*C. C. C.*, octubre 3/30. — *Fallos*, 2-234.)

927. — 1º) No corresponde declarar extinguida la acción por prescripción, después de dictada sentencia definitiva por el tribunal, aun cuando el término legal para que aquélla se opere, se hubiere cumplido durante la substanciación del recurso extraordinario interpuesto ante la Corte contra aquel pronunciamiento.

2º) Dictada sentencia definitiva, aunque la prescripción se hubiere operado antes, el fallo no puede ser modificado. (*C. C. C.*, noviembre 19/29. — *Fallos*, 2-232.)

Inconstitucionalidad de ley contraria al art. 62 del C. Penal

928. — Es contrario a la Constitución Nacional (artículo 31) el artículo 936 del Código de Procedimientos Criminales de la Prov. de Entre Ríos, según el cual, ninguna causa criminal durará más de dos años, si el reo ha sido detenido y que en tal caso el juez deberá fallar condenando o absolviendo. La absolución dictada en base a este artículo, importa modificar el término de la prescripción de la acción penal establecida por el artículo 62 del código penal, que debe regir uniformemente en todo el territorio de la Nación (Artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional). (*Corte Suprema de la Nación*, junio 4/37. — *J. A.* 58-688.)



ART. 63. — La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse (1).

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título VII; art. 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 106. — Proyecto 1891, art. 100. — Proyecto 1906, art. 67. — Ley 4189, art. 16. — Código derogado, art. 91.

FUENTE: El art. 16, de la ley 4189.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-678. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-239 y 2-450, 457. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-186. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 140. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 597. — JUAN E. LOZANO, *La prescripción de la acción penal y el concurso de delitos*. (Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, julio-agosto 1926.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-122.

JURISPRUDENCIA

929. — La infracción del art. 19 de la ley 11.386 (enrolamiento) contemplada por el art. 26 de la misma ley, se prescribe al

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 107. — La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se consumó el delito y, si éste fuere permanente, en que cesó de cometerse. Si el delito fuere continuado, el término de la prescripción se contará desde la media noche del día en que se cometió la última de las violaciones a la ley penal, que lo constituyan.

La prescripción, en el caso de tentativa, comenzará a correr desde la media noche del día en que fué cometido el último acto de ejecución.

En caso de delitos que, para perfeccionarse, requieran el cumplimiento de una condición, el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que la condición se verificó.

La prescripción de la acción por el delito de quiebra comenzará a correr desde la media noche del día en que haya quedado firme el auto declarativo de la falencia.

La acción por el delito que prevé el artículo 239 se contará desde la media noche del día en que quede firme el auto declarando el concurso civil del dador.

(1) Texto del Proyecto de ley modificatoria de los artículos 63, 64, 66 y 67, sancionado por el Senado de la Nación el 18 de septiembre de 1941:

Artículo 1º — Modifícase el artículo 63 del Código Penal, en la siguiente forma:

Art. 63. — La prescripción de la acción penal empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito; si éste fuere continuado o permanente, en que cesó la continuación o permanencia; si fuere de tentativa, en que se realizó el último acto de ejecución; si la perfección requiere el cumplimiento de una condición, desde la medianoche del día en que la condición se verifique.

En los casos de quiebras o de concurso civil, desde la medianoche del día en que haya quedado firme el auto declaratorio de la falencia o del concurso.

Art. 2º — El texto del artículo 64 pasa a integrar, como segundo y último párrafo, el artículo 63, y, en su reemplazo:

Artículo 64. — La prescripción de la acción penal se interrumpe, si antes del vencimiento el procesado es condenado por otro delito de cualquier especie; también se interrumpe por los actos directos del procedimiento; por la sentencia condenatoria de primera instancia, aunque sea revocada o anulada, y si fuere absoluta por la de segunda instancia.



año por aplicación del art. 62, inciso 2° del C. P., pero el término para computar dicho plazo debe contarse desde que el infractor cesó en la infracción, esto es, desde que denunció su cambio de domicilio, ya que la misma es de las llamadas continuas. (C. Fed. de Córdoba, junio 19/40. — *Rep. Jurid.*, 1-185.)

930. — El momento consumativo del delito de *defraudación por abuso de confianza*, del artículo 172 del C. P., se produce cuando el agente dispone y se apropia de aquello que ha recibido en confianza; en el supuesto del artículo 173, inciso 2° del mismo Código, el delito se consuma por la negativa ilegítima y maliciosa de restituir a su debido tiempo, dinero, efectos, etc. que se le hayan dado en virtud de contrato que produzca la obligación de entregar o devolver. (*Sup. Tribunal de Santa Fe, en pleno*, noviembre 2/40. — *La Ley*, 20-1043).

931. — Cuando los actos enumerados en el artículo 176 del C. P. que la ley requiere para encuadrar el delito de *quiebra fraudulenta*, se llevan a cabo con posterioridad a la cesación de pagos, es el momento de ejecución de esos actos, el que señala la

Son actos directos del procedimiento, únicamente los siguientes: el auto firme dando curso a la demanda o querrela, o dictado de oficio; de comparencia a prestar declaración indagatoria de detención, arresto o prisión preventiva, aunque no pueda cumplirse por fuga u ocultación del procesado; y de reapertura de la causa sobreseída provisionalmente.

El curso de la prescripción se suspende si el ejercicio de la acción no puede empezar o proseguir sino después del desafuero del inculcado; o si fuere necesario la resolución de cuestiones previas o prejudiciales que deban ser resueltas en otro juicio; cuando la suspensión del trámite penal es impuesta por disposición especial de la ley, excepto el caso de sobresimiento provisional; y cuando deba aplicarse al procesado alguna de las medidas de seguridad establecida por el inciso 1º del artículo 34. La suspensión no podrá durar más de dos años.

Art. 3º — Modifícanse los artículos 66 y 67, en la siguiente forma:

Artículo 66. — La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoché del día en que se notifique al reo de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Cuando se haya aplicado la condena condicional, e incurrido el condenado en nuevo delito dentro del término del artículo 27, la prescripción de la pena suspendida empieza correr, de conformidad a las reglas precedentes, una vez dictada la sentencia única, y si no fuere caso de aplicación del articulo 58, desde la notificación o quebrantamiento de la nueva condena.

Todo acto de la autoridad competente, tendiente a la ejecución de la sentencia, legalmente notificada al condenado, interrumpe la prescripción de las penas de inhabilitación o multa; en las condenas a reclusión o prisión, la prescripción es interrumpida por la detención del condenado. La prescripción de cualquier pena se interrumpe si durante su curso el condenado incurre en otra condena, por otro delito de cualquier especie.

Artículo 67. — La prescripción de la acción o la pena correrá o será interrumpida o suspendida, separadamente para cada uno de los partícipes en un delito. La prescripción interrumpida comienza a partir del día de la interrupción, y siendo varios los actos interruptivos, a partir del último; pero en ningún caso, el término respectivo del artículo 62, podrá resultar prolongado en más de la mitad.

La prescripción suspendida comienza el día que cesa la causa que motivó la suspensión, o del vencimiento del plazo de dos años establecido en el artículo 64.



fecha desde la cual comienza a correr el término de la prescripción de la acción penal respectiva. (C. C. C., agosto 20/40. — *La Ley*, 19-1052.)

932. — La tentativa de extorsión por medio de cartas recibidas por el damnificado, seguidas después de un intervalo de 5 años por nuevas gestiones consistentes en amenazas por teléfono, mencionando las citadas cartas, son actividades que integran un solo hecho delictual, en grado de tentativa. No deben pues dictarse dos pronunciamientos sino uno solo; y computarse la prescripción de la acción penal, a partir del momento en que la actividad del ejecutor dejó de ejercerse. (C. C. C., junio 2/39. — *La Ley*, 14-1030.)

933. — Cuando el autor de *encubrimiento de hurto*, encuadrado en el artículo 277, inc. 3º del C. P., empeñó la bicicleta hurtada en el Banco Municipal de Préstamos, manteniéndola a su disposición hasta el día del remate realizado por dicha institución, confesando en su declaración que 15 días antes, había dado orden de que se subastara, la prescripción de la acción penal, no puede computarse sino a partir de la media noche del día de la subasta, en que tuvo lugar el procedimiento policial. (C. C. C., septiembre 12/39. — *La Ley*, 16-115.)

934. — La prescripción de la acción penal del delito de *encubrimiento de hurto*, comienza a correr recién desde la medianoche del día en que cesó la guarda de la cosa hurtada, por parte del encubridor, pues se trata de una figura delictual independiente, en su comisión, del hurto encubierto. (C. C. C., septiembre 12/39. — *La Ley*, 16-115.)

935. — La prescripción de la acción penal por el delito de *desobediencia a la autoridad*, cometido por el extranjero expulsado del país por orden del P. E., que regresa al mismo, sólo puede empezar a correr desde la fecha en que fué privado de su libertad a raíz de subsistir dicha orden. (C. C. C., mayo 26/39. — *La Ley*, 14-928.)

936. — La *defraudación del art. 173, inciso 2º del C. P.*, es un

delito instantáneo que se consuma con la apropiación 'animus domini'. Desde ese momento comienza a correr el término de la prescripción. (C. C. C., agosto 26/38. — *La Ley*, 12-231.)

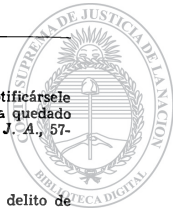
937. — La prescripción de la acción penal por el delito de *defraudación* cometido por el representante de los acreedores, en la adjudicación de bienes organizada por la ley 4156, empieza a correr desde la fecha de la presentación por el mismo del escrito y los comprobantes relativos a su gestión, que exteriorizaron el hecho de la apropiación de las sumas reclamadas, constitutiva de la figura delictuosa de que se trata. (C. C. C., marzo 7/39. — *La Ley*, 15-674.)

938. — La *defraudación* contemplada por el art. 173, inciso 2º del C. P., que consistiría en la apropiación por el querellado de una marca de comercio, que pertenecía a su patrón, en el caso de existir, se habría consumado al inscribir esa marca a su nombre, pues el Registro, conforme a la ley 3975, acredita la propiedad exclusiva de la misma. (C. C. C., agosto 26/29. — *La Ley*, 12-231.)

939. — El delito de *calumnia*, es instantáneo, y se comete al producirse la falsa imputación de un delito de acción pública; cuando la falsa imputación se formula en una denuncia, la prescripción se cuenta desde la medianoche del día de su presentación. (C. C. C., octubre 19/37. — *J. A.*, 60-251.)

940. — La prescripción de la acción penal por el delito de *malversación de caudales públicos*, se cuenta desde el momento que el martillero da a los caudales embargados o a los valores que los representan la aplicación diferente prevista por los artículos 260 y 263 del C. P. (C. C. C., julio 23/37. — *J. A.*, 59-301.)

941. — Procede la prescripción del delito de *defraudación* que habría cometido el querellado que tuvo a su cargo la iniciación y liquidación de un juicio sucesorio en virtud de un mandato otorgado por el querellante, si ha transcurrido el término de seis años requerido por los artículos 172 y 62, inciso 2º del C. P., desde que se le notificó la demanda civil que dió lugar a que fuera conde-



nado a rendir cuentas, las que no rindió, dado que al notificársele la demanda terminó el mandato, y, en esa fecha, habría quedado consumada la defraudación. (C. C. C., febrero 3/37. — J. A., 57-521.)

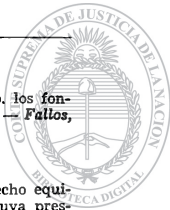
942. — Para el cómputo de la acción penal por el delito de *quiebra fraudulenta*, pueden presentarse dos supuestos: a) que los actos del fallido en fraude de sus acreedores hayan sido realizados antes de la cesación de pagos, en cuyo caso, siendo ésta la causa de la declaración de quiebra, el término de la prescripción se cuenta desde la fecha de la falencia, y b) que esos actos sean posteriores a la cesación de pagos y entonces, la prescripción corre desde el momento de la ejecución, porque recién entonces aparece cometido el delito, que ni la cesación de pagos ni la declaración de falencia por sí solos pueden configurar, si no media la ejecución de alguno de los actos que taxativamente enumera el artículo 176 del C. P. (C. C. C., abril 16/37. — J. A., 58-275.)

943. — La prescripción de la *calumnia*, originada en la falsa acusación de un delito ante la justicia, empieza a contarse desde la fecha del cargo puesto al respectivo escrito de denuncia o querella y no desde el día en que se dictó resolución definitiva en la causa. (C. C. C., septiembre 8/33. — Fallos, 2-242.)

944. — Siendo el *matrimonio ilegal* un delito instantáneo, que se consuma por el hecho de contraerlo, la prescripción corre desde el día en que se comete. (C. C. C., marzo 20/33. — Fallos, 2-240.)

945. — El término para la prescripción de la *defraudación* consistente en haberse apropiado indebidamente el acusado de una suma percibida, para aplicar a un objeto determinado y que por sentencia civil fué condenado a restituir, empieza a correr desde la fecha de aquella apropiación y no desde el pronunciamiento judicial que lo obligaba a la restitución. (C. C. C., mayo 31/32. — Fallos, 2-238.)

946. — La prescripción de la *defraudación* cometida por el síndico en perjuicio de la masa, empieza a correr desde la fecha



en que se le intimó judicialmente restituir al concurso. los fondos de propiedad del mismo. (C. C. C., diciembre 23/27. — Fallos, 2-230.)

947. — Usar o *hacer un documento falso*, es un hecho equivalente e importa un delito de carácter instantáneo, cuya prescripción empieza a correr desde la fecha en que se usó el documento siempre que se trate de una acción que se agote en un único momento.

Si la acción indicada con el documento falso se prolonga en el tiempo, el delito reviste el carácter de permanente o continuo. (C. C. C., octubre 20/31. — Fallos, 2-235.)

948. — El acto que origina el delito de *quiebra fraudulenta o culpable*, es la cesación de pagos, y en consecuencia, desde la fecha de la misma, comienza a contarse el tiempo de la prescripción. (C. C. C., julio 13/26. — Fallos, 2-227.)

ART. 64. — *La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que hubiere lugar (1).*

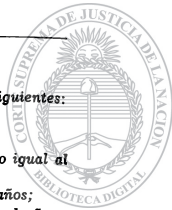
ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 105. — Proyecto 1906, art. 68.

FUENTE: El Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-678. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-433, 454, 462. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 122*, p. 144. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 123 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-122.

(1) Ver al pie del art. 63, el Proyecto de Ley modificatoria de los artículos 63/4/6/7 del C. Penal.



ART. 65. — *Las penas se prescriben en los términos siguientes:*

- 1° *La de reclusión perpetua, a los veinte años;*
- 2° *La de prisión perpetua, a los veinte años;*
- 3° *La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;*
- 4° *La de multa mayor de dos mil pesos, a los tres años;*
- 5° *La de multa que no excediere de dos mil pesos, al año.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título VII; Sección I; art. 2°. — Proyecto 1891, art. 90. Proyecto 1906, art. 69. — Código derogado, art. 90. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 105.

FUENTE: Los proyectos 1891 y 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-686. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-439, 440, 456, 467. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-190. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 145. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 484. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 613. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 123. y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-53 y 2-123.

JURISPRUDENCIA

949. — La prescripción aplicable cuando se impone un arresto por días, es la del art. 65, inciso 3° del C. P., autorizada además por el precepto que contiene el art. 4 del mismo Código. Este último que establece que las disposiciones generales del Código serán aplicables a los delitos previstos por las leyes especiales, rige también en materia contravencional. (*Juez de Instrucción Dr. Eusebio Gómez*, febrero 20/41. — *Rep. Jurid.*, 4-1474.)

950. — 1°) Si la multa fué impuesta como pena principal y el arresto como subsidiario, la prescripción debe regirse por aque-

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 112. — Las sanciones se prescriben por el transcurso de los términos que a continuación se expresan:

- 1° *La de reclusión perpetua, a los veinticinco años.*
- 2° *La de reclusión o prisión por tiempo indeterminado, a los veinticinco años.*
- 3° *Las de reclusión y prisión temporales, cuando haya corrido el doble del tiempo por el cual fueron impuestas. El tiempo para la prescripción, en este caso, no será inferior a cinco años ni excederá de veinticinco años.*
- 4° *La de multa, a los seis años, si fuera superior a cinco mil pesos. En los demás casos, a los tres años.*

Art. 113. — La internación, ya sea en un manicomio o en un establecimiento adecuado para el tratamiento y curación del delincuente, no se prescribe.



lla. 2º) Si el infractor pagaba la multa por cuotas y quebrantó esa obligación, la prescripción de la pena, comienza a correr desde la fecha fijada para el pago de la primera cuota que dejó de abonar. (C. C. C., septiembre 26/33. — Fallos, 2-249.)

951. — La pena de multa que se paga por cuotas se prescribe contándose el tiempo desde el día en que se hace efectivo el apercibimiento de aplicarse prisión por quebrantamiento de la condena. (C. C. C., agosto 19/24. — Fallos, 2-157.)

952. — A los efectos de la prescripción, el C. P. no prevé el caso de un delito con dos penas de diferente especie. (Cám. Fed. La Plata, octubre 5/36. — J. A., 56-61.)

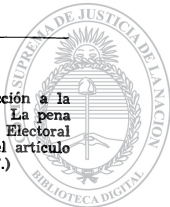
953. — Debe aceptarse la presentación del abogado defensor del reo prófugo, interponiendo la prescripción. (C. C. C., diciembre 11/25. — Fallos 2-268.)

954. — No se prescribe la pena mientras el condenado está pagando la multa por cuotas. (C. C. C., marzo 23/36. — Fallos, 2-158.)

955. — La acumulación de penas por distintas infracciones cometidas independientemente, no altera el término de la prescripción en cada caso. (C. C. C., marzo 23/26. — Fallos, 2-246.)

956. — La pena por una infracción a la ley 4097 y además el cumplimiento de la anterior dejada en suspenso por virtud del artículo 27 del C. P. por análoga infracción, solo se prescribe a los tres años, pues ha de considerarse que la pena impuesta es de cuatro mil pesos de multa. (C. C. C., febrero 25/27. — Fallos, 2-50.)

957. — En el caso de condena por varias infracciones reprimidas con pena fija, la prescripción se opera teniendo en cuenta la suma total de las multas impuestas y por consiguiente, si ese total excede de dos mil pesos moneda nacional, debe aplicarse el inciso 4º del art. 65 del C. Penal. (C. C. C., Tribunal en pleno, agosto 26/27. — Fallos, 2-480.)



958. — 1º) La prescripción de la pena por infracción a la Ley Electoral, se rige por el Código Penal vigente. 2º) La pena de arresto establecida para las infracciones a la Ley Electoral quedó substituida por la de prisión, de acuerdo con el artículo 305 del C. Penal. (C. C. C., marzo 13/28. — *Fallos*, 2-247.)

959. — Cuando se trata de prescripción de la pena, no debe decretarse sobreseimiento definitivo sino declararla extinguida. (C. C. C., marzo 25/30. — *Fallos*, 2-248.)

960. — En los casos del artículo 94 del C. Penal. la inhabilitación especial —cualquiera sea su término— se prescribe al mismo tiempo que la multa impuesta con la cual forma una sanción integral. (C. C. C., junio 25/33. — *Fallos*, 2-248.)

961. — Si la infracción de loterías clandestinas se cometió cuando regía la ley 4097 y la prescripción se alega durante la vigencia de la ley 11672, debe aplicarse aquella por ser más benigna en cuanto a la extinción de la acción, puesto que fija como pena principal una multa más reducida que la nueva ley. (C. C. C., marzo 24/33. — *Fallos*, 2-58.)

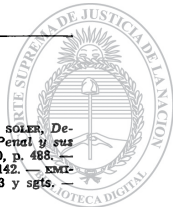
ART. 66. — *La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título VII; art. 3. — Proyecto Villagas, Ugarriza y García, art. 106. — Proyecto 1891, art. 101. — Proyecto 1906, art. 70. — Código derogado, art. 91. — Ley 4189, art. 16.

FUENTE: El artículo 101 del Proyecto de 1891.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 114. — *La prescripción de la sanción empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.*



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-466. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-191. — JOSÉ PECCO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 488. — JULIÁN AGUIRRE, *El Código Penal de la República Argentina*, p. 142. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 123 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-123.

JURISPRUDENCIA

962. — Si se ha extinguido por prescripción la pena impuesta por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la justicia debe limitarse a formular declaración en tal sentido, no correspondiendo dictar sobreseimiento definitivo, toda vez que no concurre ninguna de las causales que señalan los arts. 443 y 444 del C. de Procedimientos. (C. C. C., mayo 20/41. — *La Ley*. 22-793.)

963. — La suspensión del cumplimiento de la primera condena, producida al ponerse el condenado a disposición del juez competente de otra jurisdicción para su procesamiento por un delito cometido en ella por el que fué condenado a prisión —que se le dió por purgada con la prisión preventiva cumplida hasta la fecha— no puede ser equiparada a un quebrantamiento de la pena, pues no hay disposición legal que autorice a ello, no hallándose en consecuencia el caso de autos comprendido en la disposición del artículo 66 del C. P., la excepción de prescripción opuesta debe ser desestimada. (C. C. C., septiembre 6/40. — *La Ley*, 21-108.)

964. — No pudiéndose cumplir simultánea y paralelamente dos penas privativas de libertad, sino una después de otra, es evidente que no se prescriben acumuladas sino sucesivamente. (Cám. Apel. Rosario, Sala Crim., mayo 24/38. — *La Ley*. 10-829.)

965. — La violación por el condenado bajo el régimen de la libertad condicional, de la condición prevista en el inc. 4º del artículo 13 del C. P. reviste el mismo significado que el quebrantamiento de la condena considerado en la última parte del art. 66 del mismo, para los efectos de la prescripción de la pena, que empieza a correr desde la fecha en la cual cesó su acción delictuosa en el último de los delitos cometidos por el liberado (C. C. C., febrero 8/38. — *La Ley*, 9-599.)



966. — La prescripción de la pena se opera aunque el procesado no haya sido notificado, si lo fué el defensor. (*Sup. Corte Tucumán*, julio 7/36. — *J. A.*, 56-708.)

967. — No se ha iniciado la prescripción de la pena, si la sentencia no fué notificada al procesado ni a su defensor, quienes podían apelar ante la Corte Suprema por referirse la causa a defraudación de rentas nacionales por una suma mayor de cinco mil pesos. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 5/36. — *J. A.*, 56-61.)

968. — El término de prescripción de la pena comienza a correr desde la fecha en que el conderado se presentó a juicio, si la sentencia de segunda instancia, que era susceptible de apelación no le fué notificada ni a él ni a su defensor. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 5/36. — *J. A.*, 56-61.)

969. — La omisión de notificar la sentencia al reo, no impide que corra el término para la prescripción de la pena. (*C. C. C.*, octubre 13/33. — *Fallos*, 2-250.)

ART. 67. — *La prescripción correrá o será interrumpida separadamente para cada uno de los partícipes de un delito.*

La prescripción se interrumpe si, antes de vencido el término, comete el reo otro delito. (2)

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Título VII; art. 3 (2da. parte). — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 107 y 108. — Proyecto 1891, art. 104. — Proyecto 1906, art. 71. — Ley 4189, art. 16 (última parte). — Código derogado, arts. 92 y 93.

FUENTE: El Proyecto de 1906. (1)

(1) El Código derogado y los Proyectos anteriores. — a excepción del de 1906 —, admitían también como causa de interrupción de la prescripción todo acto directo de procedimiento judicial para la represión del delito. El Proyecto Coll-Gómez trae igual precepto (art. 109).

(2) Ver al pie del art. 63, el Proyecto de Ley modificatoria de los artículos 63|4|6|7 del C. Penal.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 114. — La prescripción de la sanción empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-430, 442, 456, 459, 460, 466. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-192. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 146. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 489. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 601. — ALFREDO J. MOLINARIO, *Interrupción de la prescripción de la acción penal*. (Revista de Psiquiatría y Criminología, Bs. As., set.-oct. 1940.) — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 123 y sgts.

JURISPRUDENCIA

970. — La imputación de un nuevo delito que según la circunstancia del expediente adjunto, por la fecha de ejecución podría, en el caso de ser condenado el procesado, interrumpir la prescripción de la acción penal de éste proceso, hace improcedente todo pronunciamiento en esta causa, hasta que haya sido resuelta la correspondiente al nuevo delito. (C. C. C., septiembre 20/40. — *La Ley*, 20-334.)

971. — Al dictarse la sentencia de primera instancia, procedía revocar el beneficio de la suspensión de la pena acordada en cuanto a otro delito cometido anteriormente, porque el cometido con posterioridad, interrumpió la prescripción del precedente. A pesar de ello, procede declarar prescripta la pena del delito cuya aplicación fué suspendida, si desde que fué cometido el segundo delito, hasta que se dicta la respectiva sentencia definitiva por la Cámara, ha transcurrido el término para que se prescriba la pena del primeramente cometido. (C. C. C., diciembre 18/36. — *J. A.*, 56-955.)

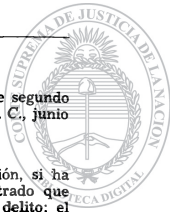
972. — 1º) La prescripción de la acción corre independientemente para cada delito y ninguna disposición legal autoriza un término distinto para que ella se opere en los casos de acumulación de penas. 2º) Cuando la prescripción se ha interrumpido por la comisión de un nuevo delito, el término para que ella empiece a

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 108. — La prescripción se suspende en caso de delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.

Art. 109. — La prescripción de la acción se interrumpe:
1º Por la comisión de otro delito.
2º Por la secuela del juicio.

Art. 110. — La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito.



correr nuevamente, debe contarse desde la fecha de ese segundo delito y no desde la sentencia que condena por él. (C. C. C., junio 9/35. — Fallos, 2-245.)

973. — Procede declarar la prescripción de la acción, si ha transcurrido el término respectivo y no se ha demostrado que haya sido interrumpido por la comisión de un nuevo delito; el sobreseimiento provisional recaído en otra causa posterior, no altera la solución, dado que cuando el término de la prescripción ha transcurrido, debe probarse la existencia del acto interruptivo y esa prueba no puede consistir en la sola circunstancia de existir una causa por otro hecho en estado de juicio abierto, pero con sobreseimiento provisional dictado después de agotada la investigación. (C. C. C., septiembre 18/36 — J. A., 55-1036.)

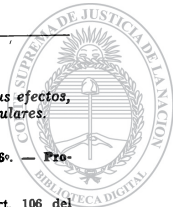
974. — Si la condena condicional por delito anterior se halla prescripta a la fecha de la sentencia condenatoria de autos sin que en el intervalo entre ambas se haya cometido un nuevo delito, no procede dictar pena única que comprenda la condena condicional. (C. C. C., octubre 19/34. — Fallos, 1-157.)

975. — Si se imputaron al acusado varios delitos cometidos contemporánea y promiscuamente, no procede declarar la prescripción de los de menor pena, mientras no estén también prescriptos los reprimidos con pena mayor, aún cuando se sobresea provisionalmente con respecto a estos últimos. (C. C. C., abril 10/33. — Fallos, 2-241.)

976. — Si durante el término de la prescripción, el procesado comete y es condenado condicionalmente por otro delito, aún cuando haya transcurrido el término del artículo 27 del C. P. debe considerarse interrumpida la prescripción del primer delito. (C. C. C., agosto 8/30. — Fallos, 2-233.)

977. — Debe ser considerado reincidente el procesado que comete un nuevo delito después de vencido el término de la condena condicional, si lo comete dentro del término fijado por el código para la prescripción de la reincidencia. (C. C. C., junio 5/28. — Fallos, 2-481.)

978. — La presentación del condenado ofreciendo reanudar el pago de las cuotas de la multa, no implica la interrupción de la prescripción. (C. C. C., mayo 4/26. — Fallos, 2-246.)



ART. 68. — El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

ANTECEDENTES: Constitución Nacional artículo 86, inciso 6°. — Proyecto 1891, art. 106. — Proyecto 1906, art. 72.

FUENTE: El artículo 72, del Proyecto 1906, tomado del art. 106 del Proyecto 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-686. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-433, 460, 463. — GERÓNIMO CORTÉS, *Vistas Fiscales*. Bs. As. 1887, 2-279. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-206. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 491. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 614. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-325 y sgts. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 126. — EMILIO BRAVO, *La gracia de indulto*. Madrid 1888. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-123. — ENRIQUE MARTÍNEZ PAZ, (hijo), *Facultad de la Legislatura de Córdoba respecto a indultos*. (Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, año 2, Nº 4.) — G. LEONE, *Prevalencia del indulto sobre la suspensión condicional de la pena*. (La Giustizia Penale. Roma, febrero 1936, (parte 2ª), p. 155.) — ERWIN O. ROSENBUCH, *Fundamento histórico y jurídico del indulto*. (La Ley, t. 3, sec. bibl., p. 12. — (Ver efectos del indulto parcial en la Prov. de Bs. As., en la Jurisprudencia del art. 13, fallo de la Cám. de Apel. de Bahía Blanca, de febrero 27 de 1940.)

JURISPRUDENCIA

979. — Si el militar condenado a la pena de prisión con la accesoría de destitución fué indultado “del tiempo que le falta a cumplir de pena”, sin que el indulto se refiriera a la destitución, corresponde declarar que el decreto posterior del P. Ejecutivo que ordenó su reincorporación, apartándose de las normas de la ley 9675 y extralimitándose en el ejercicio de sus facultades regladas por esa ley, no reúne los requisitos necesarios para reconocerle fuerza de cosa juzgada y ha podido, pues, ser revocado válidamente por el decreto impugnado. (Corte Suprema, abril 21/41. — La Ley, 22-535.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 111. — Las sanciones se extinguen:

- 2º Por el indulto, si se trata de las de reclusión, prisión, expulsión del país, inhabilitación y multa. Los tribunales, al producir el informe prescripto por el artículo 86, inciso 6º de la Constitución Nacional, expresarán cuál o cuáles de las circunstancias especificadas en el artículo 20 concurren respecto del condenado. El indulto no extingue el derecho a la indemnización del daño causado por el delito.



980. — El P. E. no puede indultar a un procesado antes de dictarse sentencia condenatoria definitiva (*Corte Suprema*, julio 15/32. — *Fallos*, 165-199.)

981. — La facultad de indultar que la Constitución Nacional da al Presidente de la Nación por el artículo 86 inc. 6º es amplísima: se refiere a las penas y también a los procesos. (*Corte Suprema*. — *Fallos*, 136-244.)

982. — No existiendo sentencia firme el P. E. carece de facultades constitucionales para indultar al procesado. (C. C. C., julio 29/32. — *Fallos*, 1-392.)

983. — Como el indulto hace desaparecer la pena pero no el delito, ni extingue las consecuencias civiles de éste, no procede el levantamiento de la inhibición general decretada contra el indultado. (*Cám. Fed. de la Capital*. — *Gaceta del Foro* 54-84.)

984. — En las solicitudes de indultos que interponen los penados, es procedente que el tribunal, a pedido del P. E., emita su opinión respecto a la conveniencia de conceder o negar la gracia solicitada. (C. C. C., *Tribunal plenc.* septiembre 18/31. — *Fallos*, 1-476.)

ART. 69. — *El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el artículo 73.*

Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 107. — Proyecto 1906, art. 73.

FUENTE: El proyecto de 1906 (art. 73).

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 111. — Las sanciones se extinguen:

- 3º Por el perdón del ofendido, cuando la condena se haya pronunciado en razón de un delito de acción privada. El perdón en favor de uno de los partícipes aprovechará a todos.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-676. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-433, 460 y 463. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-224. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 147. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 492. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 616. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 126.

JURISPRUDENCIA

(Ver la del artículo 60.)

ART. 70. — *Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de muerto.* (1)

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro II; Título III; art. 17 y, Libro I; Título VII; art. 3. — Proyecto 1891, art. 108. — Proyecto 1906, art. 72.

FUENTE: El Proyecto 1906, lo tomó del Proyecto de 1891, que se inspiró a su vez, en el Proyecto Tejedor.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-691. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-357, 390, 470, 476. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-225. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 147. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 477. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3ª ed.), p. 127.

JURISPRUDENCIA

985. — Cuando resulta que el encausado ha fallecido antes de que la Cámara dictara la sentencia aplicándole una pena de prisión, dicho pronunciamiento es írrito y no lleva en sí el sello de la cosa juzgada. Corresponde subsanar el error mediante el recurso de revisión estatuido en el artículo 551 de C. de Procedimientos Criminales. (Cám. Fed. La Plata octubre 6/39. — J. A., 68-34.)

(1) Artículo 1098 del Código Civil: "La acción por las pérdidas e intereses que nacen de un delito, puede deducirse contra los sucesores universales de los autores y cómplices, observándose, sin embargo, lo que las leyes disponen sobre aceptación de las herencias con beneficio de inventario".



TITULO XI

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

ART. 71. — *Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:*

- 1°) *Las que dependieren de instancia privada;*
- 2°) *Las acciones privadas.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 87. — Proyecto 1906, art. 75.

FUENTE: Fué tomado del Proyecto 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-669. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-445. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-231. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 148. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 491. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 127. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-124, 239.

JURISPRUDENCIA

(Ver la de los artículos 72 y 73.)

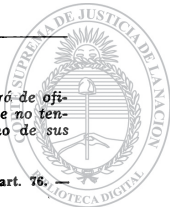
ART. 72. — *Son acciones dependientes de instancia privada, las que nacieren de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.*

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado o de su tutor, guar-

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 90. — *Las acciones que nacen del delito son públicas, dependientes de instancia privada y privadas.*

Art. 100. — *Son públicas todas las acciones que, por expresa disposición de la ley, no están reservadas, exclusivamente, al damnificado. El carácter público de las acciones no obsta al derecho de acusar que las leyes procesales reconozcan al damnificado por el delito.*



dador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 87. — Proyecto 1906, art. 76. — Código derogado, art. 141.

FUENTE: El Proyecto 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-671. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-448. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-231. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 152. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 581. — JULIO HERRERA, *La Reforma Penal*, p. 605. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 4-442. JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 213. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Argentina* (3ª ed.), p. 127 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-320 y 2-126.

JURISPRUDENCIA

986. — Si en virtud de la denuncia de violación formulada por la titulada madre de la víctima, se ha instruido sumario, y se ha substanciado el plenario, la justicia no puede dejar de pronunciar su veredicto, condenatorio o absolutorio, aunque la denunciante no esté comprendida entre las personas que enumera el artículo 72 del C. Penal. (*Cám. Ap. l. Com. y Crim. Mendoza*, julio 12/40. — *La Ley*, 19-430.)

987 — El término “guardador” contenido en el artículo 72 del C. P., debe interpretarse en sentido amplio, es decir, que no puede referirse a otra cosa que a una potestad de hecho. (*Cám. Ap. l. Com. y Crim. Mendoza*, julio 12/40. — *La Ley*, 19-430.)

988. — El acusado no puede invocar a su favor la restricción que contiene el artículo 72 del C. Penal, porque ella no se ha establecido en su beneficio, sino en beneficio de la víctima. (*Sup.*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 101. — Son acciones dependientes de instancia privadas las que nacen de los delitos de violación, estupro, rapto, y ultrajes al pudor, cuando de ellos no resultare otro delito que pueda dar lugar a la acción pública. En los casos de este artículo será indispensable la acusación o denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representante legal. Esta condición no regirá cuando el delito fuere cometido contra un menor o incapaz que no tenga padres, tutor, guardador o curador o cuando uno de éstos sea autor o partícipe.



Corte de Bs. As., septiembre 23/38. — La Ley, 13-820.)

989. — Una vez que la acción por delito contra la honestidad ha sido puesta en movimiento, por la respectiva denuncia, ya no se la puede detener y continúa, como las acciones públicas, porque entonces, ya ha desaparecido la necesidad social de la reserva. (*Sup. Corte de Bs. As., septiembre 23/38 — La Ley, 13-820.*)

990. — Para que la instrucción admita la denuncia del artículo 72 del C. P., no puede exigirse al firmante que acredite que la menor cuya tenencia por aquél no se desconce, se halla bajo su poder, en razón de vínculos de familia o de parentesco. (*Sup. Corte de Bs. As., septiembre 9/38 — La Ley, 12-96.*)

991. — La denuncia del artículo 72 del C. P. no requiere el cumplimiento de formalidades o solemnidades: basta que el padre, madre, tutor o guardador hagan manifestación de voluntad en el sentido de que el atentado sea conocido o investigado por la autoridad competente, para que la acción pública asuma su responsabilidad y sus facultades, sin reatos. (*Sup. Corte Bs. As., septiembre 9/38. — La Ley, 12-96.*)

992. — La limitación que la ley señala a los funcionarios del Ministerio Fiscal para iniciar o intervenir en el enjuiciamiento por delitos contra la honestidad, es la que el decoro de la familia crea. (*Sup. Corte Bs. As., septiembre 9/38. — La Ley, 12-96*)

993. — Debe aceptarse el procedimiento de oficio, a los fines del proceso por violación de una menor, aplicando la última parte del artículo 72 del C. P., si ha intervenido un agente de policía, que lleva a la víctima bañada en sangre, lo que supone la consumación de un delito, cuyas características se establecerán después, si no se ha podido acreditar la existencia de padres o guardadores. (*Cám. Fed. Bahía Blanca, marzo 24/38. — La Ley, 13-785.*)

994. — En el delito contra la honestidad, producida la instancia privada, ni el desistimiento de la querrela ni el perdón, pue-



den extinguir la pena o coartar el procedimiento. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 2/38. — *La Ley*, 10-741.)

995. — Si la causa ha sido promovida por denuncia del guardador de la víctima, y después ratificada por el padre de la misma, que asumió el rol de querellante, no puede alegarse la nulidad por falta de instancia privada. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 2/38. — *La Ley*, 10-741.)

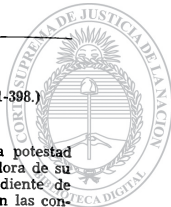
996. — El concubino, a los efectos de los artículos 119 y 122 del C. P. debe asimilarse al padrastro respecto de los hijos menores de su compañera que conviven en la casa. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, marzo 24/38. — *La Ley*, 13-785.)

997. — La circunstancia de haber sido el concubino de la madre de la menor víctima de los delitos de violación y estupro, quien denunció la comisión de éstos, no inhabilita al Ministerio Fiscal para proseguir la acción, ni al juez para condenar, tanto porque medió en el caso la ratificación de esa denuncia por la madre, cuanto por que todo lo que atañe a menores, es de orden público, particularmente, cuando están en juego, la salud física y moral de los mismos. (*Corte Suprema*, julio 8/36. — *J. A.*, 55-12.)

998. — Si se encuentra consentida la providencia que niega personería a la madre —representante legítimo en defecto del padre— para querellar por violación en nombre de su hija menor al padre de ésta, la menor directamente damnificada carece de personería para ello si no ha sido autorizada por el juez competente y provista de un curador especial (artículos 285, 61 y 397 inciso 1º del C. Civil). (*C. C. C.*, noviembre 27/36. — *J. A.*, 56-622.)

999. — Para la eficacia de la instancia privada en los delitos contra la honestidad, se requiere una intención cierta de provocar el castigo para que la acción pública se sienta efectivamente impulsada. (*Sup. Corte de Tuc.*, octubre 8/35. — *J. A.*, 52-327.)

1000. — Si el delito es de acción pública, aunque sea dependiente de instancia privada, la condonación o perdón del ofendido,



no paraliza la acción. (C. C. C., marzo 25/35. — *Fallos*, 1-398.)

1001. — Aún cuando la madre no ejerce la patria potestad en vida del padre, si de autos resulta que es la guardadora de su hija, procede admitirle la denuncia por delito dependiente de instancia privada cometido en perjuicio de la menor. En las condiciones anteriores y puesta en movimiento la acción penal, no procede el desistimiento posterior formulado por el padre. (C. C., junio 6/33. — *Fallos*, 1-21.)

1002. — La disposición del artículo 1097 del Código Civil solo se refiere a los casos en que el agraviado pueda renunciar a la acción penal, es decir, cuando se trata de un delito de acción privada; pero en manera alguna, cuando se trata de uno de acción pública. (C. C. C., octubre 5/28. — *J. A.*, 28-739.)

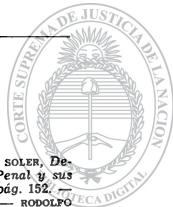
1003. — El desistimiento de la parte interesada en los delitos de acción privada, no paraliza la acción pública, ya puesta en movimiento. (C. C. C., agosto 31/28. — *Fallos*, 1-26.)

1004. — El estupro es delito que da nacimiento a la acción pública, pero debe ser promovido el sumario a instancia privada. Una averiguación anterior de la policía no desvirtúa la instancia privada que importa la declaración categórica de la madre. (C. C., septiembre 12/24. — *Fallos*, 1-364.)

ART. 73. — *Son acciones privadas las que nacen de los delitos siguientes:*

- 1º *Adulterio;*
- 2º *Calumnias e injurias;*
- 3º *Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154;*
- 4º *Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art 87, incisos 2º y 5º. — Proyecto de 1906, art. 77, incisos a), b), d) y f). — Código derogado, arts. 124, 125 y 185.



FUENTE: Los proyectos 1891 y 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-673. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-449. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-232. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, pág. 152. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, ps. 500, 504 y 505. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, ps. 586 y 592. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la República Argentina*, (3a. ed.), p. 127 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-318.

JURISPRUDENCIA

1005. — Aún estimando simplemente contradictorios los términos del artículo 73 con los del 76 del C. Penal, siempre debe aceptarse la preeminencia del primero que sanciona un concepto fundamental de la doctrina, al contrario del segundo, el cual se refiere a un aspecto formal y más bien accidental de la cuestión. (Sup. Tribunal de Santa Fe, Sala Crim., abril 18/39. — *La Ley*, 14-812.)

1006. — La reparación del daño moral y material en los delitos de acción privada debe ser reclamada en el escrito de querrela y en el de su ampliación. Si se la pide con posterioridad, a esas oportunidades, aún antes de la sentencia, procede su rechazo por no haber sido objeto del juicio. (C. C. C., octubre 19/33. — *Fallos*, 2-14.)

1007. — El juez de instrucción no puede mandar pasar una denuncia al juez correccional, de oficio, fundada en que el hecho denunciado importa injuria. (C. C. C., marzo 2/26. — *Fallos*, 1-115.)

1008. — Al Ministerio Público no le corresponde intervenir en las querellas iniciadas por el delito de competencia desleal pre-

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 102. — Son privadas las acciones que nacen de los siguientes delitos:

- 1º Incumplimiento de los deberes de asistencia en el caso del artículo 148, cuando la víctima fuese un ascendiente; y en el caso del artículo 149;
- 2º Calumnias o injurias;
- 3º Violación de secretos en el caso del artículo 108 inciso 2º;
- 4º Concurrencia desleal, previsto en el artículo 202.

La acción por calumnias o injurias podrá ser ejercitada solo por el ofendido y, después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. Las personas que pueden intentar la acción después de la muerte del ofendido, pueden, también, continuar la acción intentada por su causante.



visto por el artículo 159 del C. P. por cuanto la acción en estos casos es privada. (C. C. C., julio 17/23. — Fallos, 1-28.)

ART. 74. — *La acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.*

El cónyuge que ha consentido el adulterio o lo ha perdonado, no tiene derecho de iniciar la acción.

La muerte del cónyuge ofendido extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la pena.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Sec. II; Libro I; Título III; arts. 4 y 5. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 267. — Proyecto 1906, art. 78. — Ley 4189, art. 18. — Código derogado, arts. 124 y 125.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 1-673. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-170, 450, 451, 452, 454, 463, 465. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-245. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 153. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 504. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 586. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Argentina* (3ª ed.), p. 127 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-319.

JURISPRUDENCIA

1009. — La acción privada por delito de adulterio, sólo puede iniciarla el marido ofendido, con obligación de acusar a ambos culpables y para entablar dicha acción, debe previamente haber obtenido sentencia de divorcio por causa de adulterio. (Cám. Fed. La Plata, abril 11/32. — J. A., 37-1248.)

1010. — Si los esposos que se hallan divorciados faltan a la fidelidad conyugal, no incurrir en el delito de adulterio. (C. C. C., junio 10/24. — Fallos, 1-37.)

(Ver artículo 118.)



ART. 75. — *La acción por calumnia o injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.* ⁽¹⁾

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor sec. II^a, Libro 1, Título VII, artículo 11. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 251. — Proyecto 1891, art. 88, in fine. — Proyecto 1906, art. 79. — Código Derogado art. 141.

FUENTE: El Proyecto 1906, (artículo 79).

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-451. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-247. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código de 1922*, p. 153. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 505. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 592. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 256. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-127. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3^a ed.), p. 128.

JURISPRUDENCIA

(Ver artículos 109 y 110 del C. Penal.)

ART. 76. — *En los demás casos del artículo 73, se procederá únicamente por querrela o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.* ⁽¹⁾

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 88. — Proyecto 1906, art. 80.

FUENTE: El artículo 88 del P. 1891.

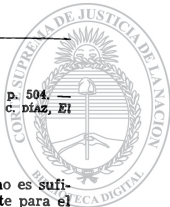
BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-452. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-247. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal*

⁽¹⁾ Artículo 1099 del Código Civil. "Si se tratase de delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como las injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto". (Ver, además, artículos 1089 y 1090 del mismo código.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Ver el art. 102 de este Proyecto al pie del artículo 73.



de 1922, p. 154. — JOSÉ FÉCO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 504. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 586. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 128.

JURISPRUDENCIA

1011. — La redacción del artículo 76 del C. Penal, no es suficiente para que admita la denuncia como medio bastante para el ejercicio de la acción privada, desde que el término “denuncia” del texto citado, ha podido ser empleado solamente por error. (*Sup. Trib. de Santa Fe Sala Crim.*, abril 18/39. — *La Ley*, 14-812.)

1012. — Aún estimando simplemente contradictorios los términos del artículo 73 del C. P. con los del 76 del mismo, siempre debe aceptarse la preeminencia del primero, que sanciona un concepto fundamental de la doctrina, al contrario del segundo, el cual se refiere a un aspecto formal y más bien accidental de la cuestión. (*Sup. Tribunal de Santa Fe, Sala Crim.*, abril 18/39. — *La Ley*, 14-812.)

1013. — Si bien el artículo 76 del C. P. admite que en las acciones privadas contempladas en el artículo 73 incisos 3º y 4º pueda procederse tanto por querrela como por denuncia del agraviado, esta última forma, solo puede mencionarse en la ley por error, pues la denuncia se prevé (artículo 155 del C. Proc. Criminales) en los delitos de acción pública. (C. C. C., septiembre 18/36. — *J. A.*, 55-1038.)

TITULO XII

SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO

ART. 77. — Para la inteligencia del texto de este código, se tendrá presente las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este código se contarán con arreglo a las disposiciones del Código Civil. (1)

La expresión “reglamentos u ordenanzas”, comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos “funcionario público” y “empleado público”,

(1) Proyecto Coll-Gómez (1937) Art. 101: (verlo al pie del art. 72.)



usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Con la palabra "mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término "capitán", (2) comprende a todo comandante de embarcación o al que le substituye.

El término "tripulación", comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 109. — Proyecto 1906, art. 82.

FUENTE: El proyecto de 1906, art. 82.

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-106, 121, 2-280, 379. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-251. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 507. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 155. — E. DÍAZ DE GUIJARRO, *Concepto de "funcionarios públicos"*. (J. A., 31-527.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-128, 240, 319. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), ps. 129 y sgts.

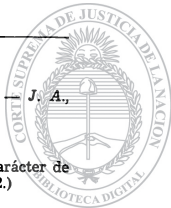
JURISPRUDENCIA

1014. — Los cadetes de seguridad de la policía, según las disposiciones del Reglamento General pertinente, tienen situación determinada en la escala jerárquica, invisten autoridad, al igual de los demás miembros de la policía de seguridad y proceden lo mismo que ellos ante hechos que demandan intervención policial; son, pues, funcionarios públicos en el sentido en que indica el artículo 77 del C. P. (C. C. C., mayo 17/38. — *La Ley*, 10-855.)

1015. — Desde la sanción del Código Penal vigente, los empleados del Banco de la Nación, deben ser considerados como empleados públicos o funcionarios públicos (art. 77) que custodian caudales de un Banco de Estado de cuya solvencia es responsable

(1) Art. 24 del Código Civil: "El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día de su "fecha".

(2) Art. 904 del Código de Comercio: "El Capitán es la persona encargada de la dirección y gobierno de un buque, mediante un salario convenido o una parte estipulada en los beneficios. El Capitán es el jefe del buque, toda la tripulación le debe obediencia, en cuanto fuere relativo al servicio del mismo".



la Nación. (Cám. Fed. Bahía Blanca, diciembre 27/34. — J. A., 49-197.)

1016. — El síndico de un concurso civil, reviste el carácter de funcionario público. (C. C. C., junio 23/33. — Fallos, 2-402.)

1017. — El guardia municipal es un funcionario público y el hecho de golpearlo con un palo, mientras ejerce sus funciones, constituye el delito de atentado con armas a la autoridad. (C. C. C., octubre 4/32. — Fallos, 1-73.)

Art. 78. — *Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de medios hipnóticos o narcóticos.*

ANTECEDENTES: Proyecto de 1906, art. 82.

FUENTE: Fué redactado por la Comisión de Códigos del Senado, como un agregado al artículo anterior.

CONCORDANCIAS: El Dr. Parry, (citado por el Dr. Moreno), concuerda este artículo, con todas las disposiciones del Código en que se pena el uso de violencia, o sea, con los artículos 87, 95, 125, 126, 142, inc. 1º, 158, 164, 166 inc. 1º, 181, incs. 1º y 3º y 180.

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-121, 256 y 2-218, 221. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-256. — TOMÁS JORRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 157. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 130.



LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS

TITULO I

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

CAPITULO I

DELITOS CONTRA LA VIDA

ART. 79. — *Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Título 1, Libro 1, art. 1. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 196 y 197. — Proyecto 1891, artículo 110. — Proyecto 1906, art. 83. — Código derogado, art. 96. — Ley 4189, art. 17, inc. 1º.

FUENTE: Redactado por la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la C. de Diputados, sobre el Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

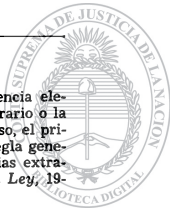
EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-33 y sgts. — JOSÉ FECO, *El Homicidio en el Código Penal Argentino*. Bs. Aires 1936. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-244, 298, 301 y 2-103, 158, 159, 196, 419. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-9 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-285, 314 y sgts. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 159. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), ps. 131 y sgts. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 150. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-30 y 2-242. — RENÉ SAVATER, *El homicidio y sus consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad civil*. (La Ley, t. 13, sec. rev. de rev., p.24.) — EMILIO MAZA RODRÍGUEZ, *El elemento subjetivo en el delito de homicidio*. La Habana 1941. (Ver, además, la bibliografía del artículo 41.)

JURISPRUDENCIA

1018. — La intención de matar se presume, cuando libremente

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 115. — No impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere una sanción distinta.



se elige el medio que, según la observación y la experiencia elementales, produce aquel efecto; queda la prueba en contrario o la inducción en contrario, cuando el sujeto toma de improviso, el primer elemento de ofensa que tiene a la mano y que por regla general no causa la muerte sin que intervengan circunstancias extraordinarias no imputables. (*Corte Sup.*, julio 5/40. — *La Ley*, 19-177.)

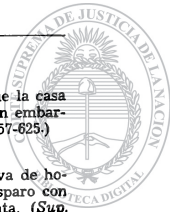
1019. — Responde de homicidio simple, quien empuña una piedra con suficiente poder vulnerable y aplica con ella un golpe directo en la nuca del ofendido, ocasionando su muerte inmediata. (*Sup. Corte de Tucumán*, diciembre 10/38. — *La Ley*, 14-241.)

1020. — El manifiesto propósito homicida es indivisible y el error sobre la identidad de la persona, no hace variar el resultado con respecto a la sanción penal. (*Sup. Corte Tucumán*, noviembre 26/38. — *La Ley*, 18-938.)

1021. — Configuran delitos conexos que hacen aplicable el artículo 54 del C. P., la actitud del procesado que efectúa un disparo de arma de fuego contra determinada persona sin hierirla, y que, al acudir otras personas al lugar, para enterarse de lo que ocurría, aquel hace un nuevo disparo contra la primera que se hizo presente dándole muerte. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, septiembre 29/38. — *La Ley*, 14-132.)

1022. — La acción de la víctima al intervenir para quitar el revólver al reo, que ya luchaba por mantenerlo, interpuso una circunstancia o causa eventual concurrente, pero la relación causal, subsiste porque el hecho de la víctima no lo quebrantó, ni produjo una relación nueva, causa única y específica del siniestro, pues la actitud del acusado provocó y volvió necesaria esa intervención de los parientes, de manera que el daño era potencialmente connatural al hecho originario y, éste se hizo dañoso por aquella intervención. (*Sup. Corte Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 11-221.)

1023. — No puede afirmarse que se empleó un medio insidioso, con el disimulo de la capacidad ofensiva, si el reo atacó de improviso, con furor y sañudamente, para incapacitar la defensa del contrario —que lo hacía objeto de continuada y enconada perse-



cución en sus bienes— pero, de frente, y a pocos pasos de la casa en que esperaban la autoridad y testigos para practicar un embargo. (*Sup. Corte de Tucumán*, noviembre 28/36. — *J. A.*, 57-625.)

1024. — Incurrir en homicidio simple y no en tentativa de homicidio doloso y homicidio culposo, quien efectúa un disparo con el fin de herir a una persona y da muerte a una distinta. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, marzo 31/36. — *J. A.*, 55-668.)

1025. — Procede calificar el hecho de homicidio simple si aún cuando aparece probado que el reo se apropió de los caballos, dinero y algunos efectos de propiedad de la víctima, no resulta de autos la certeza de que el motivo determinante del homicidio fuera el propósito de robarla. (*Cám. Fed. La Plata*, agosto 28/36. — *J. A.*, 55-822.)

1026. — Es reo de homicidio simple, el que, integrando una delegación política y dando voluntaria causa al peligro, va hasta el grupo adversario para exigir la entrega del legislador invitado y da muerte con tranquilidad y segura puntería al que quiso evitar el avance del comisario, participante de la fiesta. (*Sup. Corte de Tucumán*, diciembre 2/35. — *J. A.*, 53-535.)

1027. — Para graduar la pena por el delito de homicidio simple, debe tenerse en cuenta, que si bien el procesado tiene buenos antecedentes, concurrió armado a la entrevista con el deudor para reclamar su dinero y mató a éste porque se negó a devolverlo, sin que mediara de parte de la víctima otra actitud de provocación, lo que demuestra la peligrosidad del homicida. (*C. C. C.*, diciembre 6/35. — *J. A.*, 53-234.)

1028. — Corresponde la pena de dieciocho años de prisión y accesorias al autor de un homicidio y lesiones, aunque sea un delincuente primario de veintiocho años de edad, que ha obrado en relativo estado de ebriedad y puede haber sido influenciado por su avariosis no curada y antecedentes blenorragicos. (*Corte Sup.*, marzo 6/36. — *J. A.*, 53-542.)

1029. — La situación desventajosa de una mujer frente a un



hombre, debe ser tenida en cuenta por la justicia para medir la responsabilidad en que incurre, cuando delinque contra el hombre que ha abusado de su debilidad. (*Corte Sup.*, octubre 7/37. — *J. A.*, 56-7.)

1030. — Si la muerte se ha producido por un concurso de medios que razonablemente han podido causarla, como un garrotazo en la cabeza y la suspensión del cuerpo de la víctima en forma de producir la extrangulación, el hecho debe ser calificado de homicidio, no obstante que no haya sido intención confesada del autor el ocasionarla. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, julio 22/37. — *La Ley*, 10-468.)

1031. — Si el propósito deliberado de matar no está confesado, es preciso que esa intención positiva, resulte de circunstancias que pongan de manifiesto que la idea homicida se ha presentado claramente al espíritu del reo y que la ha preferido a la de las simples lesiones. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 6/31. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-106.)

Homicidio por "aberratio ictus" ⁽¹⁾

1032. — El homicidio cometido por "aberratio ictus" debe calificarse como homicidio simple. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, marzo 14/34. — *J. A.*, 45-459.)

1033. — El que lleva un revólver al evadirse y hace fuego, ya fuera de la cárcel, para repeler a los guardias que lo perseguían, dando muerte a una niña que ocasionalmente pasaba por allí, es reo de homicidio por aberratio ictus y abuso de armas en concurso formal. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 9/34. — *J. A.*, 46-1176.)

1034. — Si el procesado hizo fuego contra una persona y ca-

(1) **PROYECTO COLL-GOMEZ: Art. 6º** — "Si por error o por accidente se comete un delito contra persona distinta de aquella hacia la cual iba dirigida la acción o contra la cual se tenía intención de dirigirla, no se tendrán en cuenta, a los efectos de la sanción, las circunstancias calificativas de agravación que derivan de la condición de la víctima. En cambio, serán tenidas en cuenta, a los mismos efectos, las circunstancias que califiquen al delito por razón de las condiciones inherentes a la persona contra la cual iba dirigida la acción o se tenía la intención de dirigirla".



sualmente hirió a otra, solo debe considerarse que obró con dolo determinado respecto de la primera y estando probado ese dolo determinado, no puede existir al mismo tiempo el indeterminado contra la segunda persona. (C. C. C., abril 16/26. — Fallos, 1-497.)

Tentativa de homicidio

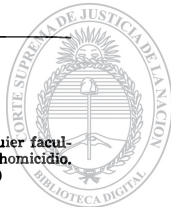
1035. — Existe tentativa de homicidio y no lesiones, si la procesada confiesa lisa y llanamente su propósito de dar muerte a la víctima y que de tener “más balas el revólver, más tiros le hubiera hecho” habiéndolos dirigido a la cabeza y siendo su deseo que muriera. (Sup. Corte de Tucumán, noviembre 25/37. — *La Ley*, 9-94.)

1036. — La circunstancia de que la procesada disparara repetidas veces el arma, no basta para la calificación de tentativa de homicidio, cuando los motivos de la conducta observada, la circunstancia en que se llevó a cabo el hecho, a raíz de una incidencia del momento, no permiten concluir que obró con el dolo que tal figura delictiva demanda. (C. C. C., diciembre 2/38. — *La Ley*, 14-280.)

1037. — Incurre en tentativa de homicidio voluntario simple y no en instigación o ayuda a cometer suicidio, el que quiere a otro con el propósito de darle muerte, aunque medie para la ejecución del hecho, el consentimiento o pedido de la víctima. (C. C. C., junio 28/32. — Fallos, 1-505.)

1038. — Confesada y madurada la intención de matar, hay dolo determinado, y el caso ha de juzgarse como tentativa de homicidio. (Sup. Corte de Tucumán, abril 27/37. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-106.)

1039. — La calificación de tentativa de homicidio, solo cabe cuando concurre como requisito esencial, el “*animus occidendi*”. Este consiste en la concatenación de actos que van desde la concepción interna hasta la realización completa del designio delictuoso. (Sup. Corte de Tuc., octubre 6/31. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7-106.)



Pruebas del homicidio — Autopsia

1040. — La autopsia priva sobre la opinión de cualquier facultativo particular que pretende desvirtuar la causa del homicidio. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 31/37. — *La Ley*, 9-257.)

1041. — Si la herida de bala en la región cráneo-facial destruyó la masa encefálica, fué aquella la causa directa de la muerte y es indiscutible la responsabilidad del reo por homicidio. (*Corte Sup. de Tucumán*, julio 31/37. — *La Ley*, 9-257.)

1042. — La autopsia solo es necesaria cuando de la percepción interior no aparezca manifiesta o inequívoca la causa de la muerte. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, mayo 20/37. — *La Ley*, 10-313.)

ART. 80. — *Se aplicará reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52:*

- 1º *Al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son;*
- 2º *Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos;*
- 3º *Al que matare a otro para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para sus cooperadores o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.*

INCISO 1º

ANTECEDENTES: **Inciso 1º.** — Proyecto Tejedor, Parte III, Libro 1, Título 1, arts. 1 y 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 201. — Ley 4189, art. 17, inciso 2º. — Proyecto 1891, art. 111, inciso 1º. — Proyecto 1906, art. 84, inciso 1º. — Código Derogado, art. 94.

FUENTE: Redactado por la Comisión especial de Legislación Penal y Carcelaria de la C. de Diputados, sobre el Proyecto de 1891.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-36. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-246 y 2-52, 53, 107, 420. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-9 y sgts. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-23. — CARLOS MALAGARRIGA, *Código Penal Argentino* (1927), 2-25. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 170. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 145. — V. MELLUSI, *Del Amor al Delito — Delincuencia por Erotomanía psico-sexual*, París 1914. — JOSÉ VALDIVIESO, *Parricidio*, Buenos Aires 1938. (*Cuadernos Forenses*, N° 19.) *El Uxoricidio por adulterio*. (Nota de La Ley, 6-468.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-131, 242. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 139.

JURISPRUDENCIA

1043. — La prueba del vínculo matrimonial entre víctima y victimario, es recaudo indispensable para el uxoricidio. (*Corte Sup.* — *Fallos*, 172-374. — *Parry V.* 24-616.)

1044. — La agravante calificativa del artículo 80 inc. 1° del C. P., exige no solamente la existencia real del vínculo, sino el conocimiento efectivo de éste por parte del agente en el momento de la comisión del delito, conocimiento incompatible con el estado de inconsciencia. (*Sup. Corte de Bs. As.*, noviembre 24/39. — *La Ley*, 17-62.)

1045. — El vínculo en línea recta, deriva de la naturaleza misma y cuando la ley penal califica el homicidio en estos casos, lo hace "substantia filiationis" por ley de naturaleza o generación.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 116. — Se impondrá reclusión perpetua al que matare a otro en alguno de los siguientes casos:

- 1º Cuando la víctima fuere su ascendiente, descendiente o cónyuge, si el delincuente conocía la existencia del vínculo;
- 2º Cuando la víctima fuere un funcionario público, un gobernante extranjero que se hallare en el país, o un representante diplomático acreditado y el delito se cometiere a consecuencia del ejercicio de sus funciones, o por odio o desprecio a la autoridad;
- 3º Cuando el delito se cometiere para preparar, facilitar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para un tercero, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al cometer el otro delito;
- 4º Cuando se cometiere por precio o promesa remuneratoria;
- 5º Cuando se cometiere con el concurso de dos o más personas;
- 6º Cuando se cometiere con alevosía o ensañamiento;
- 7º Cuando se cometiere por medio de sevicias graves; o empleando veneno u otras substancias nocivas que se hubieran dado a ingerir o a inhalar o aplicando en cualquier forma; o valiéndose de algún medio capaz de producir grandes estragos.

Si en los casos de los incisos 1º, 2º y 5º del presente artículo se estableciere menor peligrosidad en el agente, de acuerdo a lo que disponen los artículos 18 y 19, se impondrá la sanción estatuida en el artículo anterior.



Basta así la prueba de confesión, sin perjuicio de requerirse la partida correspondiente. (*Sup. Corte de Tucumán*, marzo 14/38. — *La Ley*, 11-503.)

1046. — Si el procesado ha reconocido expresamente que se encontraba casado con la víctima y separado de hecho, y de la cual habían nacido hijos durante el matrimonio, la parte acusadora no necesita traer la prueba del acto en la forma que establece la ley civil, para calificar el homicidio. (*Cám. Apel. Com. y Crim. Mendoza*, junio 30/38. — *La Ley*, 11-657.)

1047. — En materia penal, el matrimonio debe probarse conforme a las prescripciones del C. Civil, por tratarse de un contrato especial y solemne, de mutuo y libre consenso. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 14/38. — *La Ley*, 11-503.)

1048. — Excluyen la emoción violenta en el homicidio del esposo a la esposa, las circunstancias de que aquel concurriera a buscarla a la casa donde vivía con su amante, después de su fuga y su conocimiento de las relaciones de ambos. (*C. C. C.*, octubre 4/26. — *Fallos*, 1-501.)

1049. — Debe computarse la agravante del vínculo en el homicidio cometido por el bigamo en la persona de su segunda esposa, si ésta había contraído matrimonio de buena fe. (*C. C. C.*, diciembre 30/24. — *Fallos*, 1-491.)

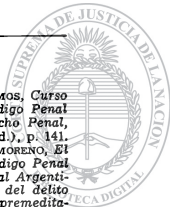
INCISO 2°

ANTECEDENTES: *I n c i s o 2º.* — Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título I, arts. 1, 2, 3, 4. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 202. — Proyecto 1891, art. 111, inc. 2º. — Proyecto 1906, art. 84 inc. 2º. — Código Derogaño, art. 95.

FUENTE: El Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-45. — SEBASTIÁN SOLER, *Dere-*



cho Penal Argentino, 1-246 y 2-52, 53, 107, 420. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 5-49. — JOSÉ PECO, *El Homicidio en el Código Penal Argentino*, (Bs. As. 1936), p. 26. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-25. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 141. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 170. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-328. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de Rep. Argentina*, p. 148. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-183. — J. C. CERDEIRAS, *Estudio Jurídico y Médico-Legal del delito de envenenamiento*, Madrid 1925. — BERNARDINO ALIMENA, *La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto ed alla legislazione comparata*. Torino 1887. — GEORGES BENOIT, *De l'empoisonnement Criminel*. Lyon 1888.

JURISPRUDENCIA

Generalidades

1050. — La individualización de una pena perpetua como la fijada en el art. 80 incisos 2° y 3° del C. P., solo puede hacerse en el sistema de las penas paralelas, por la relativa gravedad de cada una, aplicando la más o la menos severa según la personalidad del autor. (*Corte Suprema*, abril 1/40. — *La Ley*, 18-382.)

1051. — Corresponde aplicar la pena de prisión perpetua y no la de reclusión, si el autor del homicidio encuadrado en el art. 80 incisos 2° y 3° del C. P., no tiene antecedentes judiciales y ha sido hasta el día del delito un hombre de trabajo. (*Corte Suprema*, abril 1/40. — *La Ley*, 18-383.)

1052. — Constituyen circunstancias que agravan el delito, la condición de empleado público del homicida a quien su superior corrige por falta grave en el desempeño de sus servicios; su falta de satisfacción al reclamo por la pérdida de encomiendas contra-reembolso y el hecho de haber adquirido el arma que usó, tres días antes de cometer el homicidio. (*Corte Sup.*, octubre 28/36. — *J. A.*, 56-19.)

1053. — Corresponde imponer la pena de prisión y pesos cinco mil de indemnización al débil mental, menor de edad, convicto y confeso de homicidio a traición, delito hábilmente preparado, realizado y ocultado. (*Corte Suprema*, julio 15/36. — *J. A.*, 55-18.)

1054. — Como el artículo 80 del C. P. no admite atenuantes,



carece de eficacia lo alegado por la defensa sobre malos tratos de la víctima al victimario. (*Corte Suprema*, febrero 7/36. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7 bis-95.)

1055. — La circunstancia de haber cometido el homicidio bajo la presión de una sobreexcitación nerviosa determinada por su mala situación económica y por la negativa de la víctima a satisfacer su deseo sexual sin retribución, acusan en el reo una mayor peligrosidad. (*C. C. C.*, septiembre 12-24. — *Fallos*, 1-485.)

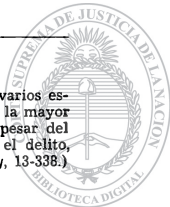
Premeditación

1056. — La premeditación, si bien no la enuncia expresamente el código vigente como circunstancia agravante del delito de homicidio, no por ello debe dejarse de tener en cuenta, ya que se halla comprendida en las previsiones del art. 41 del Código citado. (*Corte Suprema*, marzo 16/38. — *La Ley*, 9-929.)

1057. — La premeditación comprobada y la agresión de improviso, que se habría llevado a cabo al pasar la víctima frente a la habitación en que se hallaba el procesado, que le disparó varios tiros de revólver, sacando solo el brazo armado, según algunos testigos y desde afuera, según el agresor, no son circunstancias suficientes para asegurar que el hecho se perpetró con alevosía, si la herida fué causada de frente y el ataque fué precedido por la voz de "arriba las manos". (*C. C. C.*, octubre 18/38. — *La Ley*, 13-388.)

1058. — El medio de ejecución del homicidio, que si no llegó a constituir alevosía aseguró la consumación, disminuyendo la potencia de la defensa privada y la premeditación existente, revelan la mayor gravedad del hecho, a los efectos de la graduación de la pena. (*C. C. C.*, octubre 18/38. — *La Ley*, 13-388.)

1059. — La premeditación es el designio formado de antemano de cometer el delito cuando el pensamiento no está obscurecido por ningún impulso apasionado. (*Corte Suprema*, marzo 16/38. — *La Ley*, 9-929.)



1060. — La deliberación premeditada que atraviesa varios estados de conciencia antes de traducirse en acción, revela la mayor peligrosidad del agente, sobre quien no han actuado a pesar del tiempo transcurrido, las razones que, para no cometer el delito, actúan normalmente. (C. C. C., octubre 18/38. — *La Ley*, 13-338.)

1061. — Si el reo esperó a que la víctima se durmiera para darle muerte, el homicidio debe ser calificado de alevoso y premeditado. (C. C. C., marzo 16/26. — *Fallos*, 1-497.)

1062. — No hay premeditación, si el procesado, a raíz de un incidente con la víctima del homicidio, fué a buscar un cuchillo a su domicilio situado a pocos metros y luego cometió el hecho. (C. C. C., octubre 13/25. — *Fallos*, 1-495.)

Alevosía

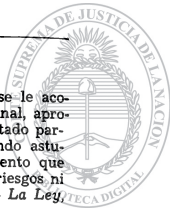
1063. — Existe alevosía, cuando en la comisión del delito se procede en forma insidiosa, tomando a la víctima desprevenida e indefensa. (*Corte Suprema*, octubre 16/39. — *Fallos*, 185-28. — *Parry V.* 27-583.)

1064. — La alevosía no requiere para su existencia, el concurso de la premeditación. (*Corte Suprema*, octubre 16/39. — *Fallos*, 185-28. — *Parry V.* 27-583.)

1065. — El concepto "alevosía" viene del derecho español y encierra los dos aspectos del ocultamiento material y moral. (*Corte Suprema*, octubre 16/39. — *La Ley*, 16-447.)

1066. — La alevosía existe fuera de la premeditación aún cuando pueda requerirse una cierta deliberación. (C. C. C., abril 12/38. — *La Ley*, 10-444.)

1067. — Para declarar la existencia de la alevosía, no bastan lo inesperado del ataque ni la advertencia de la víctima o que



ésta se encuentre indefensa o parezca estarlo cuando se le acomete; es necesario que el reo realice su propósito criminal, aprovechando de una manera oculta, insidiosa o felona, el estado particular de la víctima, que le impida defenderse, poniendo astucia, engaño, celada, traición o cualquier otro procedimiento que conduzca al mismo fin y que en ambas, el reo actúe sin riesgos ni peligros para él. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 16/39. — *La Ley*, 15-847.)

1068. — La alevosía no requiere para su existencia el concurso de la premeditación. Alevosía y premeditación, son dos circunstancias independientes, sobre cuya mayor o menor gravedad podrá discreparse, pero la segunda, no es un elemento integrante de la primera. (*Corte Suprema*, julio 14/39. — *La Ley*, 15-457.)

1069. — Existe alevosía, si el autor ha esperado el momento oportuno para obrar sin peligros, por encontrarse la víctima en una actitud que le impedía toda defensa. (*Corte Suprema*, marzo 16/38. — *La Ley*, 9-929.)

1070. — Existe alevosía si el procesado, con engaños llevó a la víctima del homicidio, primero a la casa en que se proveyó del arma y después al lugar solitario donde la ultimó y fué encontrado el cadáver. (*Corte Suprema*, octubre 16/39. — *La Ley*, 16-447.)

1071. — Existe alevosía, siempre que en la comisión del delito se procede en forma insidiosa, a traición, tomando a la víctima desprevenida e indefensa, asegurando así el éxito del propósito por la disminución de la capacidad de defensa. (*Corte Suprema*, octubre 16/39. — *La Ley*, 16-447.)

1072. — Existe alevosía, aún cuando el prevenido hubiese sido amenazado de muerte por su víctima con anterioridad y la tenencia del arma obedeciera a un propósito defensivo, si en el momento de cometer el homicidio, el agresor asume actitudes que en la doctrina penal, —ya que el código no la define—, configuran aquella calificación. (*C. C. C.*, abril 12/38. — *La Ley*, 10-444.)



1073. — No hay alevosía aún cuando el agente obrara con saña, si ésta no se aplicó con sangre fría, con perversidad reflexiva, sino bajo la influencia del alcohol y de los celos, obsesionado por la pasión y en circunstancia ocasionales. (*Sup. Corte Tucumán*, junio 11/38. — *La Ley*, 11-160.)

1074. — Hay alevosía si el uxoricida premeditó su crimen y esperando el momento propicio, en la obscuridad de la noche, penetró en la habitación donde se hallaba su esposa, acostada y dormida y después de asestarle los golpes mortales, la viste y la conduce envuelta al lugar donde fué encontrada sin vida. (*Corte Suprema*, marzo 16/38. — *La Ley*, 9-929.)

1075. — El concepto de la alevosía nace de los medios empleados, del modo y forma de la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgos para la persona del agente; riesgo proveniente de la defensa que pudiera oponer el ofendido. (*Sup. Corte de Tucumán*, noviembre 28/36. — *J. A.*, 57-625.)

Ensañamiento y sevicias graves.

(Bibliografía: “*El ensañamiento y la sevicia*”, por Lorenzo Carnelli, *La Ley*, 16-899.)

1076. — La agravación del homicidio por sevicia o ensañamiento se produce, en general, cuando en el agente, además de poderse discernir una clara voluntad tendiente a causar la muerte, existe el propósito de causarla de determinada manera que aumente el mal y el sufrimiento de la víctima. El fundamento de la agravación, está precisamente, en ese desdoblamiento de la voluntad. (*Cám. Apel. de Rosario*, octubre 20/39. — *La Ley*, 16-899.)

1077. — La agravación de sevicias parece corresponder al caso en el cual, para llegar a la muerte, que el agente se propone, se emplean medios conocidos y deliberadamente crueles en los cuales el delincuente se complace. A diferencia del ensañamiento, en la sevicia, la crueldad del medio aparece gradualmente desplegada hasta llegar a la muerte, en la que el proceso termina; en el en-



sañamiento, el mayor daño, se produce cuando ésta ya no está en condiciones de defenderse. (Cám. Apel. Rosario, octubre 20/39. — *La Ley*, 16-899.)

1078. — No existe sevicia cuando la procesada sin proponerse claramente otra cosa que castigar a la menor víctima del hecho, le ha causado la muerte por la extraordinaria brutalidad de los medios empleados; pero sin que pueda discernirse claramente la doble objetividad referida al fin y al medio —causar la muerte y causarla de determinada manera que aumente el mal y el sufrimiento de la víctima— que es el verdadero fundamento de la agravante. (Cám. Apel. Rosario, octubre 20/39. — *La Ley*, 16-900.)

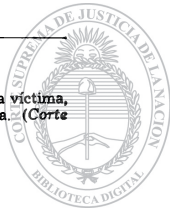
1079. — Las sevicias se refieren a agresiones producidas por excesiva crueldad y a ultrajes y malos tratamientos: es el tormento diario, repetido y continuado, que revela al autor, como un sujeto particularmente peligroso. (Corte Sup. Tucumán, mayo 27/1939. — *La Ley*, 15-314.)

1080. — La calificación de ensañamiento no depende únicamente del número de lesiones inferidas, desde que ella consiste en los actos destinados a aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, o el mal, causando otros innecesarios para la ejecución del delito. (C. C. C., diciembre 30/38. — *La Ley*, 15-874.)

1081. — No existe ensañamiento en el homicidio perpetrado, como calificante de éste, aunque existan innumerables garrotazos en el cuerpo de la víctima, si éste proceder señala la evolución preliminar del delito para facilitar la consumación y, desde luego, entra dentro del concepto del mismo. (Cám. Fed. Bahía Blanca, julio 15/37. — *La Ley*, 10-840.)

1082. — No hubo ensañamiento si la acción homicida fué rápida, tormentosa y de efectos inmediatos. (Corte Sup., agosto 14/1936. — *J. A.*, 55-386.)

1083. — El ensañamiento no surge del número y gravedad de las heridas que el victimario hiciere a su víctima, sino de las sevi-



cias con que actúa el homicida, prolongando la agonía de la víctima, para gozar bestialmente con el lento dolor de la misma. (Corte Suprema, agosto 14/36. — J. A., 55-386.)

Perversidad brutal

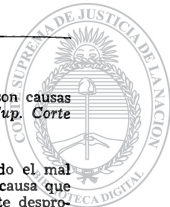
1084. — Surgiendo del hecho criminoso la fría e implacable decisión de matar sin causa alguna, el medio empleado y la forma original de cometerlo, ya que lo fué en dos etapas, provocando a la víctima al par que un sufrimiento excesivo, una lenta agonía, hacen que el delito encuadre dentro de la calificación de homicidio por perversidad brutal y ensañamiento. (Cám. Fed. La Plata, mayo 6/40. — *Rep. Jurid. Homicidio*, 3-1180.)

1085. — Corresponde la calificación de homicidio por perversidad brutal y ensañamiento, si de las declaraciones de los procesados surge la fría decisión de matar, sin causa alguna ya que no se puede atribuir a los mismos, un estado vengativo o enemistad o animosidad para con la víctima, pues si bien existió entre ellos una incidencia previa, la misma había terminado cuando decidieron cometer el hecho, empleando el fuego, para lo cual previamente condujeron a la víctima a un galpón rociándola con kerosene y prendiéndole fuego, para repetir la operación más tarde, dejándolo, sólo cuando ante su inmovilidad lo creyeron muerto. (Cám. Fed. La Plata, mayo 6/40. — *La Ley*, 18-1009.)

1086. — La perversidad brutal se caracteriza por la falta de móvil que impulsa a obrar; es el hecho sin causa, o por una causa tan fútil y extravagante, que en realidad, no la constituye y que solo puede explicarse por odio a la humanidad. (Sup. Corte de Tucumán, agosto 27/39. — *La Ley*, 15-314.)

1087. — El impulso de perversidad brutal, se presenta cuando el crimen se dirige contra una persona determinada sin causa que lo explique. (Sup. Corte de Bs. As., mayo 23/39. — *La Ley*, 14-1126.)

1088. — El móvil de venganza y la ira despertados en el con-



cupino al oír a la mujer la confirmación de su falta, son causas determinantes que excluyen la perversidad brutal. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 27/39. — *La Ley*, 15-314.)

1089. — Hay impulso de perversidad brutal, cuando el mal causado, carece de motivos determinantes o cuando la causa que ha inducido al agente a delinquir, es desmesuradamente desproporcionada con el daño producido; cuando se mata por matar, por perversidad no humana, sino brutal. (*Corte Suprema*, marzo 16/38. — *La Ley*, 9-929.)

1090. — El uxoricida obró por impulso de perversidad brutal, si no tuvo con su esposa incidente grave alguno, ni ofensa que vengar sino por el contrario, manifiesta que solo tuvo rencillas familiares sin importancia, propias de todo matrimonio y que no abrigaba, sospechas acerca de la fidelidad de aquélla. (*Corte Suprema*, marzo 16/38. — *La Ley*, 9-930.)

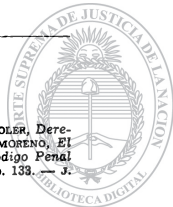
1091. — No debe confundirse el impulso depravado del agente o la ejecución cruel, torpe y brutal del hecho, con el impulso de perversidad brutal, homicidio sin móvil o causa fútil, que no concurre tampoco si el reo obró en evidente estado de embriaguez y con un móvil determinado de venganza. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 11/38. — *La Ley*, 11-160.)

1092. — La circunstancia calificativa de perversidad brutal, solo procede cuando el delincuente obra con estúpida ferocidad, por el placer del mal o tormento ajeno, por indiferencia absoluta respecto a las consecuencias inmediatas del acto que realiza, sin motivos que puedan fundar una explicación lógica del hecho criminal; no es suficiente que el motivo sea nimio y el delito desproporcionado a la causa. (*Corte Suprema*, agosto 14/36. — *J. A.*, 55-386.)

INCISO 3°

ANTECEDENTES: **I n c i s o 3°.** — *Ley 4189*, art. 17, inc. 3°. — *Proyecto 1891*, art. 111, inc. 4°. — *Proyecto 1906*, art. 84, inc. 3°. — *Proyecto Coll-Gómez (1937)*: art. 116, inciso 3°.

FUENTE DEL INCISO: El Proyecto 1906, inspirado en el Proyecto 1891.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-81. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-246, y 2-52, 53, 107, 420. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-328. — TÓMAS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 170. — RODOLFO MORENO, *La Ley Penal Argentina*, p. 133. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-136.

JURISPRUDENCIA

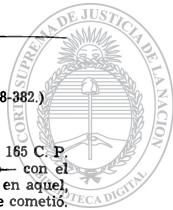
1093. — La aplicación del artículo 80, inciso 3° del C. P., no se altera porque el agente desista del delito-fin después de cometido el homicidio. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 1/40. — *La Ley*, 21-831.)

1094. — La aplicación del artículo 80, inciso 3° del C. P., está reservada para aquellos casos en que, juzgados los hechos a través de su objetividad, pueda reputarse probado que el propósito homicida fué elaborado y adoptado antes de iniciar el delito-fin, es decir, para aquellos casos en que la idea homicida aparezca pre-deliberada y anterior a los actos de robo. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 1/40. — *La Ley*, 21-831.)

1095. — El inciso 3° del artículo 80 del C. P., contempla diversas situaciones que, aunque equivalentes a los fines de la sanción penal, no pueden ser confundidos entre sí cuando se trata de calificar o caracterizar un hecho determinado. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 1/40. — *La Ley*, 21-830.)

1096. — Cuando el delito cometido por el menor encuadra en el artículo 80 inc. 3° del C. P. corresponde aplicar la reclusión de 15 a 20 años, en mérito a lo dispuesto por los artículos 37 inc. b y 44 del citado código, pues no procede en el caso una disminución de penas por razón de la edad, dado que este factor por disposición legal es calificativo, y no puede ser tomado en consideración dos veces, respecto de la misma finalidad. (*Cám. Fed. La Plata*, mayo 20/40. — *La Ley*, 19-94.)

1097. — Existe homicidio calificado si la víctima socia de ambos acusados, fué muerta mientras dormía y el móvil del delito fué la apropiación de los bienes que tenía en el lugar explotado



por la sociedad. (*Corte Suprema*, abril 1/40. — *La Ley*, 18-382.)

1098. — No debe confundirse el supuesto del artículo 165 C. P. —homicidio resultante con motivo u ocasión de un robo— con el homicidio calificado del artículo 80 inc. 3° del C. P. pues en aquel, la muerte proviene de las circunstancias en que el robo se cometió. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 11/39. — *La Ley*, 15-619.)

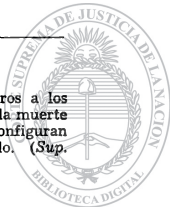
1099. — En el homicidio para robar u ocultar el robo, la disposición penal tiene en mira el índice de peligrosidad específica del criminal, perfectamente definida en su intención y resultados, ya que el ladrón es un asesino en potencia, que defiende lo robado o su impunidad, con ideas personalísimas sobre el concepto de defensa propia. (*Sup. Corte Tucumán*, julio 11/39. — *La Ley*, 15-619.)

1100. — Es indiferente en el homicidio calificado (art. 80 inc. 3°) la consumación del delito-fin, pues la calificación tiene en cuenta la temibilidad o perversidad del reo. (*Sup. Corte de Tucumán*, sep. 9/39. — *La Ley*, 16-612.)

1101. — Para agravar o calificar el homicidio, nuestro código penal, no sigue el sistema de la concomitancia, simultaneidad o relación cronológica de los hechos, sino el de su correlación causal: homicidio como medio para asegurar el provecho o para obtener la impunidad. (*Sup. Corte de Tucumán*, sep. 9/39. — *La Ley*, 16-612.)

1102. — Si se trata de un asalto para robar, ocurriendo la muerte consiguiente de la víctima, sea que la intención fuera la de matar para preparar o facilitar el robo o para consumarlo, el hecho se ofrece único e inseparable, no pudiendo apreciárselo bajo aspectos sucesivos para concluir que la intención de dar la muerte, surgió durante la ejecución y no fué preexistente. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 11/39. — *La Ley*, 15-619.)

1103. — Si consumado le hurto de un objeto, el delincuente fué interrumpido en sus intentos de atentár contra la propiedad



cuando se disponía a abrir un ropero, agrediendo a tiros a los dueños de casa para cubrir su retirada, lo que determinó la muerte de uno de ellos, concurren dos acciones distintas que configuran el delito de homicidio calificado y no de robo calificado. (Sup. Corte de Tucumán, sept. 9/39. — *La Ley*, 16-612.)

1104. — Son coparticipes de homicidio calificado todos los que concurriesen consciente y voluntariamente al asalto, sin que sea necesario un concierto y resolución anterior bastando que sea simultáneo.. (Sup. Corte de Tucumán, julio 11/39. — *La Ley*, 15-619.)

ART. 81. — 1°) *Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno a tres años:*

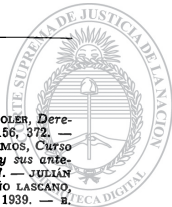
- a) *Al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable;*
 - b) *Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjera la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.*
- 2°) *Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas en la letra a) del inciso 1° de este artículo.*

ARTICULO 81, INCISO 1° a)

(EMOCION VIOLENTA)

ANTECEDENTES: Proyecto 1906, art. 85. — Código derogado, art. 83, inciso 4° y arts. 81 y 97. — Ley 4189, art. 17, inciso 4° b).

FUENTE: Redactado por la Comisión de Códigos del Senado, teniendo en cuenta el Proyecto de 1906.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-85. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-246, 286, 289, 329 y 2-107, 108, 111, 156, 372. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, 445. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 5-74. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-354. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 177. — JULIAN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 115. — R. PATIÑO LASCANO, *La emoción violenta en el Código Penal Argentino*, Córdoba 1939. — B. GARCIA TORRES, *La emoción violenta en el nuevo Código Penal argentino*. (Fallos del autor) Bs. Aires, 1926. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-68 y 2-323. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 147.

JURISPRUDENCIA

1105. — No cabe invocar emoción violenta excusable, cuando el reo mata a su amante, bailarina de cabaret y por celos, en la misma casa de bailes, no ignorando aquél en ningún momento la actividad de la víctima. (*Sup. Corte Tuc.*, marzo 31/41. — *La Ley*, 22-738.)

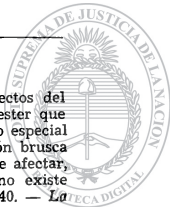
1106. — No es dable exigir a un individuo golpeado gratuitamente en diversas partes del cuerpo, con los efectos de tal castigo, la misma reflexión del que contempla hechos pasados, sin el peligro del momento y con el ánimo aquietado. El homicidio cometido bajo las circunstancias expresadas en primer término, se atenúa por mediar emoción violenta excusable. (*Sup. Corte de Tucumán*, octubre 26/40. — *La Ley*, 21-874.)

1107. — No puede invocarse emoción violenta en el sentido de la ley penal, aunque la víctima haya insultado a su victimario, al producirse el choque entre los automóviles que ambos guiaban, si a raíz de ello, el procesado descendió de su vehículo y armado de revólver fué al encuentro de su contrincante, con quien mantuvo una discusión violenta, haciendo el disparo mortal recién cuando este último advirtiendo que el procesado se encontraba armado fué también en busca de su arma. (*Sup. Tribunal de Córdoba*, julio 19/40. — *La Ley*, 19-657.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 117. — En los casos previstos en el artículo 115 y en el inciso 1º del artículo 116, se impondrá prisión por uno a seis años:

- 1º Al que cometiere el delito en estado de emoción violenta que las circunstancias hicieren excusable;
- 2º Al que lo cometiere movido por un sentimiento de piedad ante el dolor físico de la víctima, si fuera intolerable, y las circunstancias evidenciaren la inutilidad de todo auxilio para salvar la vida del sufriente;
- 3º Al que cometiere el delito con las modalidades que prevé el artículo 4º en su segundo párrafo.



1108. — Para que exista emoción violenta a los efectos del artículo 81 inciso 1° letra (a) del código penal, es menester que el autor haya cometido el hecho, en virtud de un estado especial de sus sentidos, al cual hubiera llegado por la impresión brusca y profunda de un suceso inesperado. Impresión que debe afectar, la conciencia de un hombre, en estado normal, que no existe tratándose de un ebrio. (*Primera Inst. Jujuy*, junio 22/40. — *La Ley*, 19-364.)

1109. — Cuando el hecho ha sido ejecutado bajo la impresión del miedo ante un peligro grave e inminente, debe admitirse que el agente ha obrado en estado de emoción violenta. (*Corte Suprema. Fallos*, 178-251. — *Parry V.* 25-624.)

1110. — No media emoción violenta que haga excusable el homicidio y las lesiones inferidas, si éstas se cometieron en estado de ebriedad (lo que excluye la normalidad del sujeto) con conocimiento de la conducta sospechosa de la concubina occisa y sabiendo que su madre —víctima de las lesiones— pretendía hacer cesar el concubinato, todo lo cual demuestra que el suceso, no fué imprevisto por el agente; quedando descartada, además, la existencia de una pasión que respondiera a una causa social. (*Primera Inst. Jujuy*, junio 22/40. — *La Ley*, 19-364.)

1111. — Para que pueda invocarse la atenuante de emoción violenta en el homicidio, es necesario que concurren las siguientes circunstancias: a) causa: motivos morales nobles. b) crisis afectivas: emoción brusca violenta y c) reacción: agresión inmediata. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, febrero 14/40. — *La Ley*, 18-73.)

1112. — No puede invocarse emoción violenta aun dando por cierto que la procesada dió muerte a su concubino porque trataba de inducirlo a que ejerciera en su beneficio la prostitución, si resulta de autos que tal actitud no la tomó de sorpresa puesto que, según propia confesión, hacía tres meses que aquél le había hecho tal proposición y venía insistiendo sobre el particular; y además que tampoco había sido influenciada por el temor, pues conociendo los propósitos de la víctima por la carta que el día anterior había dirigido a la madre de aquélla, pudo perfectamente solicitar el amparo de la autoridad para evitar cualquier tenta-



tiva o violencia de parte de su concubino. (Cám. Apel. Rosario, Sala Crim., febr. 14/40. — *La Ley*, 18-73.)

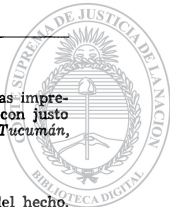
1113. — No puede rechazarse la emoción violenta, en un hombre bueno, trabajador, jefe solícito de su hogar que mata a su esposa ante el espectáculo de infidelidad; tampoco falta el carácter ético por las circunstancias de que dejara adrede llegar a su casa al sobrino sospechado y expulsado de ella; otra vez lo había amenazado sin éxito y es explicable que deseara tener pruebas claras de su traición para separarse de la madre de sus hijos; pero la crudeza del bochornoso episodio debió perturbarle en grado máximo. (Corte Sup., dic., 6/39. — *La Ley*, 17-364.)

1114. — No cabe invocar legítima defensa ni emoción violenta en el homicidio del ladrón nocturno sorprendido y contra quien se hace un disparo de revólver cuando ya corría dándose a la fuga. (Sup. Corte de Tucumán, oct. 7/39. — *La Ley*, 16-1000.)

1115. — El agente de policía que hiere por exagerado temor, al presunto autor de un desorden, mientras éste estaba en cama sin ofrecer resistencia, no puede alegar la excusa de emoción violenta, dado que el policía —que supuso la intención de la víctima de sacar armas— debe mantenerse sereno, según se desprende de los reglamentos de la institución y además, no media conmoción sorpresiva por un hecho, inesperado, que prive del control inhibitorio. (Sup. Corte de Tucumán, sept. 23/39. — *La Ley*, 18-922.)

1116. — No se perjudica la emoción violenta aunque el reo provisto de arma, fuera en busca de su concubina, hallándola de noche, en el campo, en brazos de otros que atentaban deshonestamente contra ella, debiendo considerarse que la ira inicial, no fué el motivo determinante de la acción, la cual sobrevino recién, repentina e irreparable, ante el justo dolor por el cuadro extraordinario que se ofreciera a la ya perturbada mente del procesado. (Sup. Corte de Tucumán, marzo 4/39. — *La Ley*, 15-1206.)

1117. — El estado de emoción violenta excusable, debe ser provocado por la víctima y por hechos graves capaces de alterar



el ánimo de un hombre normal, o bien por circunstancias imprevisitas que puedan influir para que una persona pierda con justo motivo el dominio de sus facultades. (*Sup. Corte de Tucumán*, marzo 4/39. — *La Ley*, 15-1205.)

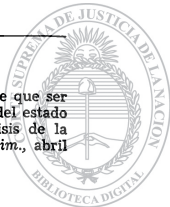
1118. — El estado de gravidez de la protagonista del hecho, no puede bastar para justificar el estado de emoción violenta que alega, sino se comprueba la concurrencia de los extremos exigidos por la ley. No puede asignarse carácter patológico a la emoción violenta sufrida por la acusada, por el mero hecho de hallarse grávida. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, sept. 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

1119. — El relato confesorio de la procesada que no sólo explica con minuciosidad todos los detalles del hecho y aún su estado de ánimo en el momento de su comisión, sino que refiere adecuadamente sus causas mediatas e inmediatas, en encadenamiento lógico y sus actitudes posteriores al delito, demuestra que no ha existido la "amnesia" típica de la emoción violenta patológica ni permite hablar de inconsciencia transitoria. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, sept. 23/38. — *La Ley*, 13-727.)

1120. — Si se acepta que hubo emoción violenta, queda excluída la exigencia del pleno discernimiento que habría sido necesario para pedir auxilio. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-751.)

1121. — Si la actitud injuriente de la víctima no era esperada por la procesada que concurrió a la cita movida por impulsos sentimentales, no excluye la emoción violenta excusable, las circunstancias de haber concurrido armada de revólver. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-751.)

1122. — El motivo ético por excelencia —requisito primordial de la emoción violenta excusable— es en una mujer virgen, la defensa de su honestidad seriamente comprometida por la actitud del novio que la cita frente a una casa de hospedaje de mala fama, a la que pretende introducirla mediante la fuerza, sumando a ésta otras injurias verbales ante su negativa. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-751.)



1123. — La emoción, no excusa por sí, sino que tiene que ser excusada. Para buscar la excusa no debe partirse pues, del estado emocional, sino llegarse a él, comenzando por el análisis de la situación objetiva. (*Cám. Apel. Rosario, Sala en lo Crim.*, abril 27/38. — *La Ley*, 10-727.)

1124. — En la figura del estado emocional, la excusa de la ley no es un homenaje al hecho de estar emocionado, conmovido o agitado, sino que lo que tiene poder de atenuación son las circunstancias motivantes. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, abril 27/38. — *La Ley*, 10-727.)

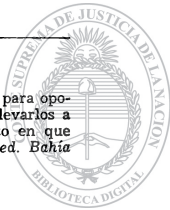
1125. — La ley no excusa al que se encuentra en circunstancia que determine una emoción, sino al que es llevado al estado subjetivo de emoción, por circunstancias que lo hagan excusable. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, abril 27/38. — *La Ley*, 10-727.)

1126. — La emoción violenta que contempla el artículo 81, inciso 1° del C. P. es un estado agravado de excitación psíquica que se caracteriza por la intensidad y gravedad. (*Sup. Corte de Tucumán*, nov. 25/37. — *La Ley*, 9-94.)

1127. — El delito no fué perpetrado en estado de emoción violenta en el concepto de la ley penal, cuando según la propia confesión de la procesada, su conciencia, fué invadida lentamente por un conjunto de celos, que formaron un estado emocional crónico, prolongado e intelectualizado que la inclinó a la ejecución del hecho. (*Sup. Corte de Tucumán*, nov. 25/37. — *La Ley*, 9-94.)

1128. — La reflexión y la emoción violenta, se excluyen porque esta última estalla en forma súbita provocando un impulso en el que la voluntad actúa tardíamente. (*Sup. Corte Tucumán*, julio 31/37. — *La Ley*, 9-257.)

1129. — Comete homicidio en estado de emoción violenta comprendido en el artículo 81, inc. 1°, letra (a) del C. P., el que da muerte al concubino de su esposa, dominado por un rapto



de dolor e ira, de vergüenza, de temor por la impotencia para oponerse al designo de la víctima de sacarle sus hijos y llevarlos a donde vivía en concubinato con aquélla y en momento en que los niños preguntaban por la madre ausente. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, junio 3/37. — *La Ley*, 9-711.)

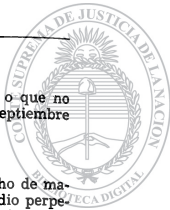
1130. — No concurren los requisitos de la emoción violenta excusable, si el procesado con su actitud molesta originó la agresión del damnificado, a la que contestó aquél con un golpe que le ocasionó la lesión. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, julio 29/37. — *La Ley*, 10-802.)

1131. — Para calificar el homicidio como cometido en estado de emoción violenta, se requieren motivos éticos y una reacción adecuada a toda conciencia normal. Ese atenuante no ampara a quien, impulsivamente mata para vengar actos de violencia sufridos varias horas antes y para castigar la risa despectiva, que dice, advirtió en la víctima. (*C. C. C.*, abril 16/37. — *J. A.*, 58-270.)

1132. — No ha obrado en un estado de emoción violenta ni lo ampara la causal de inimputabilidad prevista en el artículo 34 inciso 1º del *C. P.*, el uxoricida que ha buscado calculada y voluntariamente, sorprender a su esposa en algún acto de infidelidad para darle muerte, permaneciendo al acecho armado de un revólver, pues esas circunstancias quitan espontaneidad al acto y desvirtúan el pretendido arrebató emocional que dice haber sufrido al encontrar a su esposa besándose con un vecino por lo que “casi llegó a perder el conocimiento” máxime si recuerda con precisión y detalladamente, cada una de las faces anteriores, concomitantes y posteriores a esa acción, demostrando plena conciencia y dominio de sus actos. (*C. C. C.*, abril 7/37. — *J. A.*, 58-256.)

1133. — No es causal de inimputabilidad, la falta de freno ante el impulso ciego de matar, que acomete a una persona, ni encuadra en el estado de emoción violenta que las circunstancias hicieran excusables. (*C. C. C.*, noviembre 13/36. — *J. A.*, 56-603.)

1134. — Para que exista homicidio por justo dolor, es necesario que haya sorpresa, es decir, que el matador no haya sabido



antes del hecho, las causas que originaron su reacción, o que no haya motivo para saberlas. (*Sup. Tribunal de Jujuy*, septiembre 12/36. — *J. A.*, 60-317.)

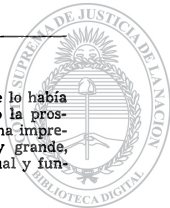
1135. — El código penal actual no reconoce el derecho de matar y encaja en la emoción violenta excusable el homicidio perpetrado por el cónyuge que sorprende a su consorte en flagrante adulterio. (*Sup. Corte de Tucumán*, diciembre 5/36. — *J. A.*, 57-627.)

1136. — El homicidio encuadra en el artículo 81, inc. 1º del C. P., si el agente obró intensamente perturbado por las amenazas anteriores de la víctima y su presentación en la casa del homicida, armado de una pistola, pretendiendo hacerse justicia por sí mismo e imponer por coacción o temor una solución que la ley le negaba: el desalojo inmediato por el victimario de una chacra para cuya explotación habían celebrado un contrato de aparcería. (*Corte Suprema*, diciembre 3/37. — *J. A.*, 60-720.)

1137. — El hecho de conversar en voz baja víctima y victimario, excluye el estado de ánimo propio de la increpación y de la injuria y, en todo caso, privaría a ésta de la publicidad y de la ira que son los rasgos que producen la irritación necesaria para admitir la emoción violenta que invoca el homicida. (*Corte Suprema*, octubre 28/36. — *J. A.*, 56-19.)

1138. — La emoción violenta que el C. P. acepta como atenuante calificativa, —artículo 81, inciso 1º letra a)— consiste en un estado psicopatológico de duración breve, de producción generalmente instantánea, y que no siempre es posible apreciar y graduar por parte de quienes observan al autor del hecho; anubla la clara conciencia y perturba la voluntad normal del mismo; pero en cada persona, según su temperamento y educación, las reacciones y manifestaciones externas son diversas. (*Corte Suprema*, mayo 19/1937. — *J. A.*, 58-349.)

1139. — Corresponde aceptar que el uxoricidio ha sido cometido en estado de emoción violenta, si el victimario es un hombre honrado, trabajador, de buenas costumbres, de conducta intacha-



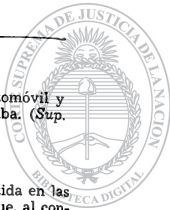
ble, y cometió el crimen al enterarse que su esposa —que lo había abandonado a él y al hijo de ambos— estaba ejerciendo la prostitución en un lenocinio público, lo cual debió causarle una impresión muy intensa, un dolor agudo, una vergüenza muy grande, con la consiguiente perturbación de su equilibrio espiritual y funcional. (*Corte Suprema*, mayo 19/37. — *J. A.*, 58-349.)

1140. — Probado que la víctima había mentado públicamente supuestas relaciones carnales con la esposa del homicida, es admisible la emoción experimentada por el agente por tal injuria. No debe buscarse proporcionalidad matemática entre el hecho provocante y el delito cometido, porque no se trate de una justificación. (*C. Ap. de Rosario*, noviembre 30/35. — *Rec. Ord.*, *Cuad.* 7 bis-97.)

1141. — No puede invocar el estado de emoción violenta quien no obró ante una actitud inesperada de la víctima, sino movido por ánimo de venganza a raíz de cuestiones que se habían suscitado frecuentemente, y si, además, consumó el delito atrayendo a la víctima a una emboscada. (*Corte Suprema*, octubre 7/36. — *J. A.*, 56-7.)

1142. — El “extraño” impulso invocado por el homicida que conocía con anterioridad la inconducta de la víctima y que hace estallar, el hecho sin importancia de la revelación de una nueva incorrección del occiso, no ha obedecido a los móviles éticos que mueven ordinariamente a una conciencia normal, requerido por el artículo 81 inciso 1° del C. P., para que la emoción violenta excuse el homicidio. (*C. C. C.*, noviembre 16/36. — *J. A.*, 56-603.)

1143. — Si con anterioridad al hecho, el homicida había oído rumores respecto a las relaciones íntimas de su hija con la víctima y con un mes de anticipación la esposa de ésta le manifestó que había confirmado sus sospechas por haber encontrado una carta y una fotografía que la hija del procesado le había dirigido a su esposo en cuya oportunidad el encausado interrogó a su hija, acerca de esas relaciones, sin obtener una contestación negativa, no puede decirse que el homicidio lo haya cometido mediando la sorpresa que caracteriza la emoción violenta por el hecho de que momentos antes le dijera la víctima que las hijas suyas nunca llegarían a ser tan prostitutas como las del procesado. Máxime si la reacción no fué inmediata sino que se produjo cuando se separaba



de la víctima, luego de haber terminado el viaje en automóvil y en circunstancias en que ésta había descendido y se retiraba. (*Sup. Trib. de Jujuy*, septiembre 12/36. — *J. A.*, 60-317.)

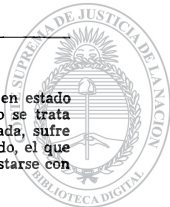
1144. — Debe desecharse la posibilidad teórica admitida en las pericias médicas, acerca del estado de inconsciencia en que, al consumar el homicidio pudo haber obrado el agente, si resulta categóricamente negada por la prueba objetiva de autos, que evidencia que no ha existido la amnesia consecutiva que condiciona el estado de inconsciencia por emoción patológica pues el homicida en su indagatoria describe con prolijidad y minuciosamente los antecedentes, actos y circunstancias que precedieron al hecho y conserva el recuerdo cierto y preciso de las acciones cumplidas, concomitantes al hecho y posteriores a él con excepción de detalles meramente circunstanciales. (*C. C. C.*, noviembre 13/36. — *J. A.*, 56-603.)

1145. — La prolija descripción de los antecedentes, palabras y actos incluidas en la indagatoria del acusado referentes a la consumación del homicidio, demuestra la ausencia del “raptus emocional” que conmueve la personalidad hasta confundir o borrar el recuerdo de las acciones ejecutadas bajo su imperio. (*C. C. C.*, agosto 31/34. — *Fallos*, 1-512.)

1146. — Si el homicida sabía y admitía que su concubina mantuviera relaciones sexuales con otro hombre, no es admisible que su delito haya obedecido a móviles éticos capaces de producirle un estado de emoción violenta, al confirmarle aquella el mantenimiento de esas relaciones. (*C. C. C.*, agosto 31/34. — *Fallos*, 1-512.)

1147. — 1°) Cabe la calificativa de homicidio por emoción violenta en un menor de catorce años que no obstante su temperamento no emotivo, reacciona violentamente llegando hasta ese delito, al descubrir a la hermana en acceso carnal en el lecho del padre y con el amigo a quien la familia había amparado en momentos de necesidad.

2°) La circunstancia de que el procesado no sea de una constitución emotiva o hiperemotiva, no es suficiente para descartar el estado emocional en el homicidio que se le imputa. (*C. C. C.*, diciembre 9/32. — *Fallos*, 1-507.)



1148. — Debe aceptarse que la acusada se hallaba en estado de emoción violenta al dar muerte a su esposo, cuando se trata de una menor de edad, que lleva breve tiempo de casada, sufre malos tratos y vejaciones y tiene repugnancia a su marido, el que la golpea en el momento del hecho porque se niega a acostarse con él. (C. C. C., septiembre 9/24. — Fallos, 1-483.)

ARTICULO 81, INCISO 1°, b)

(HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL)

ANTECEDENTES: Ver los del inciso a).

FUENTE: El art. 112 inciso 4º del Proyecto 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-92. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-246, 286, 289, 329 y 2-107, 108, 111, 156, 372. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-355. — O. GONZALEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-9 y sgts. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 177. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-68 y 2-323. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 151. — LUIS JIMENEZ DE ASÚA, *El delito preterintencional*. (*La Ley*, 22-163.)

JURISPRUDENCIA

1149. — El problema de la concausa difiere del de la preterintención. En el primero, una causa ajena a la acción del sujeto, contribuye al resultado, y en el segundo, el resultado de la acción orientadora hacia un hecho, supera la intención, es decir, no hay coincidencia entre el propósito y el resultado; y en el cual, aparte de la intención, juega un papel predominante el medio empleado, por el que se suele llegar a establecer el ánimo con que se obró. (*Sup. Corte Tucumán*, agosto 17/40. — *La Ley*, 22-190.)

1150. — El art. 81 inc. 1º letra b) del C. P., condiciona la preterintención con un juicio "ex-ante" de normalidad o experiencia. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

1151. — El Código argentino, no contiene reglas sobre la causalidad ni referencia a la concausa, lo que da margen a la inter-



pretación judicial para expedirse en forma que no esté reñida con la dogmática. El art. 81, inc. 1° letra b), que califica el homicidio preterintencional valiéndose de la teoría de la adecuación, sería una puerta de acceso para esa corriente. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

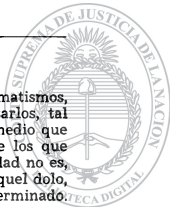
1152. — La controversia de la concausa, sigue substanciándose cuando no puede hablarse de homicidio preterintencional y a falta de reglas que terminen con la vacilación de los jueces. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

1153. — Para que la preterintencionalidad pueda apreciarse dentro de nuestra legislación, requiérense dos elementos básicos: que se haya querido producir un daño en el cuerpo o en la salud, con el que se llegó a la muerte y que el arma empleada no pueda razonablemente producir el mal causado. (*Sup. Corte Tucumán*, agosto 17/40. — *La Ley*, 22-190.)

1154. — No existe racionalidad del medio empleado que permita calificar al homicidio de preterintencional, si el reo, hombre fuerte, detenido por ebriedad, mientras se alojaba en la cuadra de la comisaría golpeó violenta y repetidamente —reiteración de actos lesivos con dolo indeterminado— en la caja torácica a un anciano casi inválido que compartía la celda por igual causa. (*Sup. Corte Tucumán*, octubre 5/40. — *La Ley*, 22-121.)

1155. — La calificación que corresponde, es la prevista por el art. 81, inc. 1° letra b) del C. P., si de los elementos de prueba que obran en autos, correlacionados, además, con las comprobaciones de la autopsia, se desprende que las violencias del procesado sobre la víctima, revistieron en su entender carácter correctivo, si bien fueron desproporcionadas y francamente delictuosas; pero no el de acciones cumplidas con voluntad de ocasionar la muerte, como demanda, para su realidad en el terreno legal, el dolo directo, sea este determinado o indeterminado. (C. C. C., abril 30/40. — *La Ley*, 22-163.)

1156. — No basta para atribuir dolo directo en el autor de la muerte de un menor objeto de castigos excesivos y violentos, la



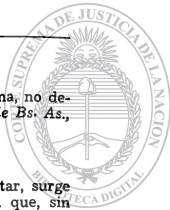
posibilidad de prever la ulterior gravedad de los traumatismos, cuando no existe plena prueba de la voluntad de causarlos, tal como resultan en el actor: más aún, cuando emplea un medio que por las huellas dejadas, no permite concluir que fué de los que ordinariamente originan el fatal resultado; dicha posibilidad no es, en manera alguna suficiente para atribuirle al ejecutor aquel dolo, ni en la especie llamada determinado, ni en la del indeterminado. (C. C. C., abril 30/40. — *La Ley*, 22-164.)

1157. — No concurre ninguno de los elementos del homicidio preterintencional, si el acusado no expresa en su indagatoria qué propósito le guió, y solo narra la pelea en que se produjo el hecho: si se registra en su contra una condena anterior por homicidio y el número de golpes y el lugar al que los dirigiera —la cabeza— excluyen el dolo eventual característico de dicha figura penal para colocarlo en el dolo indeterminado. Tampoco concurre el requisito básico de que el arma empleada no pudo razonablemente producir el mal causado, si ha hecho uso de un cuchillo aunque no llegara al cuerpo de la víctima. (*Sup. Corte Tucumán*, agosto 17/40. *La Ley*, 22-190.)

1158. — No es aplicable el artículo 81, inciso 1° apartado b) del C. P. aunque la víctima que sufrió una intensa conmoción al ser golpeado retrocediera cayendo a un río, produciéndose allí su muerte inmediata por ingestión de poca cantidad de agua debido a su paralización orgánica, si el arma empleada —daga de 45 cts. de largo y lomo grueso— la región afectada, (parietal) y la fuerza del golpe asestado, califican de eficiente el medio empleado por el victimario, pues era razonable presumir que un fortísimo “hachazo” en esa región y con esa arma le produciría la muerte, quizá por el solo efecto de la conmoción cerebral aludida. (*Corte Suprema*, julio 5/40. — *La Ley*, 19-177.)

1159. — Cuando el instrumento empleado en la comisión del delito es susceptible de producir el resultado más grave, debe éste serle imputado al autor, salvo que no resulte plenamente demostrado que quiso y pudo graduar el acto para llegar solamente al resultado menor. (*Corte Suprema*, julio 5/40 — *La Ley*, 19-177.)

1160. — La calificación de homicidio preterintencional depende enteramente de la apreciación de un hecho: si el medio emplea-



do por el homicida para producir la muerte de su víctima, no debía razonablemente, ocasionar tal muerte. (*Sup. Corte de Bs. As.*, abril 9/40. — *La Ley*, 18-937.)

1161. — El propósito homicida, la intención de matar, surge indudablemente de la conducta tenaz de la procesada que, sin motivos, castigó inmoderadamente a la hijita de siete años de edad, al punto de producirle heridas de escasa o relativa importancia, con objetos diversos, las que causaron en el organismo de la niña los procesos infecciosos y distintas enfermedades y disturbios fisiológicos; no le procuró alimentación ni asistencia, lo que la llevó a un estado grave de desnutrición, todo lo cual produjo su muerte por septicemia o inanición. (*Sup. Corte de Bs. As.*, abril 9/40. — *La Ley*, 18-937.)

1162. — No puede sostenerse que el homicidio cometido por la procesada, deba encuadrarse en el artículo 81, inciso 1°, letra b) del C. P., afirmando que el medio empleado para castigar a la menor era inadecuado para producirle la muerte, si se trataba de un palo de amasar de 975 ms. de longitud, 53 de espesor y de un peso de 1750 gramos, manejado por una persona en la plenitud de su vigor físico, a impulso de la ira, para descargar golpes contra una criatura endeble y de corta edad. (*Cám. Apel. Rosario*, octubre 20/39. — *La Ley*, 16-899.)

1163. — Corresponde la calificación de homicidio preterintencional, toda vez que necesariamente el golpe aplicado a la víctima, con un saco pijama, ha debido ser sumamente violento, para que el destornillador contenido en uno de sus bolsillos, produjera la profunda herida punzante que determinó su muerte; y en esas condiciones, si se tiene presente que esta prenda de vestir tenía botones y que el golpe se aplicaba a un menor de corta edad, es evidente la existencia de dolo en el ejecutor, en el sentido de que su acción estaba animada por el propósito de causar un daño en el cuerpo de la víctima aunque no de darle muerte atento al medio empleado. (*C. C. C.*, noviembre 7/39. — *La Ley*, 16-1020.)

1164. — La muerte causada por una bocha arrojada por un muchacho de 18 años, “de lejos” contra un hombre de 36 años, en quien supone un agresor, debe considerarse homicidio preterinten-



cional, desde que tal resultado no puede considerarse el ordinario sino el excepcional, producido por una circunstancia especial que el acusado no previó. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-795.)

1165. — Si la acción del reo ha creado todas las condiciones para la secuela morbosa, que bien pudo calcular, dado el medio elegido y la manera de obrar, hay homicidio simple y no preterintencional. (*Sup. Corte Tucumán*, diciembre 10/38. — *La Ley*, 14-241.)

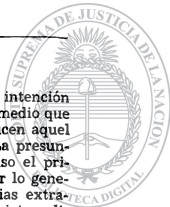
1166. — El homicidio simple puede cometerse con dolo determinado o indeterminado, mientras el homicidio preterintencional requiere forzosamente que el dolo sea indirecto o eventual. (*Sup. Corte Tucumán*, diciembre 10/38. — *La Ley*, 14-241.)

1167. — El propósito del agente, para que pueda caracterizar el homicidio preterintencional, debe surgir de todas las circunstancias que rodean al hecho, una de las cuales es el medio empleado en el mismo. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-795.)

1168. — El beneficio de la preterintención, se excluye si el medio empleado, es razonablemente capaz de producir la muerte. (*Sup. Corte de Tucumán*, diciembre 10/38. — *La Ley*, 14-241.)

1169. — El homicidio preterintencional, admite dos grados de infracción con pena doble y sucesiva —prisión y reclusión— que no pueden obedecer a otro motivo que a las circunstancias de mayor o menor peligrosidad que se observaren en el autor del delito. (*Sup. Corte Tucumán*, septiembre 2/38. — *La Ley*, 12-613.)

1170. — El medio empleado en el homicidio preterintencional debe apreciarse no solo en su consistencia o poder vulnerable, valorando exclusivamente sus cualidades intrínsecas, sino también atendiendo a la forma como fué usado, a la persona que lo usó y a la que resultó víctima del hecho. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-795.)



1171. — Para que haya homicidio, es indispensable la intención de matar; ésta se presume cuando se elige libremente un medio que según la observación y la experiencia elementales, producen aquel efecto: el balazo, la puñalada, el veneno, la infección. La presunción contraria, surge cuando el sujeto toma de improviso el primer elemento de ofensa que encuentra a mano y que, por lo general, no causa la muerte, sin el concurso de consecuencias extraordinarias no imputables, máxime, si el autor no es un sujeto peligroso por sus antecedentes, sus condiciones morales y su constitución físico-psíquica. En tales condiciones, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte, el caso encuadra en el artículo 81, inciso 1° apartado b) del C. P. (*Corte Suprema*, junio 28/37. — *J. A.*, 58-736.)

1172. — No existe homicidio “preter-intentione”, a pesar de que el instrumento empleado —cortaplumas— no sea en realidad arma de ataque, si por su características es de aquellos que dirigidos a las partes vitales del organismo —como el hipocondrio— constituye un medio con el cual lógica y razonablemente podía obtenerse un resultado fatal. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, mayo 20/37. — *La Ley*, 9-127.)

1173. — No puede calificarse de preterintencional el homicidio causado por un violento golpe a la cabeza de la víctima, aplicado con un sifón de soda, instrumento que por su pesadez y dureza puede “razonablemente” producir la muerte. (*C. C. C.*, diciembre 21/1934. — *Fallos*, 1-514.)

CONCAUSAS EN EL HOMICIDIO

BIBLIOGRAFIA

LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *Nuevas reflexiones sobre la causalidad en materia penal*. (*La Ley* 22-1.) — SEBASTIÁN SOLER, *Acción y causalidad*. (*La Ley*, 22, sec. doct., p. 4.) — FRANCESCO ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padua 1934. — MARIO SACERDOTE, *La concausa en el homicidio*. (*La Ley*, 18, sec. doct., p. 180.) — NERIO ROJAS y HERNÁN D. GONZÁLEZ, *Lesión de arma de fuego y muerte por gangrena gaseosa — Causalidad*, (*Anales de Medicina legal*, Bs. As., nov.-dic. 1940, p. 535.) — A. SANDULLI, *Rapporto di causalità e concorso di cause*. (*La Giustizia Penale*, 1932, fasc. 5-6-7.) — G. MONTALBANO, *Il rapporto di causalità materiale nel Codice*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 5º — Las causas preexistentes, simultáneas o sobrevinientes que guarden una relación directa con el delito, no excluyen la relación entre éste y su resultado.



Penale. (La Scuola Positiva. Milán, marzo-abril 1932, p. 120.) — G. GUARNERI, In difesa della causalità adeguata. (Annali di Diritto e Procedura Penale, 1935, p. 609. — MARCELLO FINZI, Rapporto di causalità e concorso di cause nel Codice Penale Italiano. (Rivista Italiana di Diritto Penale, 1936, N° 5.) — LUIS JIMENEZ DE ASÚA, La relación de causalidad y la responsabilidad criminal. (La Ley, 16-823.)

JURISPRUDENCIA

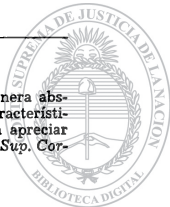
1174. — Para la concurrencia de concausa preexistente fundada en la debilidad arterial, indicada en la autopsia, es indispensable que el trauma, por sí solo, no hubiera sido capaz de producir la hemorragia mortal, cosa que en el caso no ha ocurrido, puesto que, como lo señala el informe médico, el golpe fué apto para producir la hemorragia capilar y suficiente para romper una arteria cerebral. (*Sup. Corte Tucumán, agosto 17/40. — La Ley, 22-190.*)

1175. — Existe causalidad adecuada en las relaciones causales que todavía corresponden a una recta experiencia, aunque ellas sean relativamente raras (muerte por descuido de la herida o por cura inhábil). (*Sup. Corte Tucumán, mayo 16/40. — La Ley, 22-2.*)

1176. — Si se trata de infecciones sobrevenidas, que muchas veces convierten en mortal la herida, habrá excepciones, pero no en grado de sostener que la puñalada que se infiere en pelea, con representación del resultado posible no deba estar a cargo del reo en sus consecuencias patogénicas, de tipo más o menos corriente. (*Sup. Corte de Tucumán, mayo 16/40. — La Ley, 22-2.*)

1177. — Para que el factor agregado (en el caso infección sobrevenida a la víctima) pueda reputarse suficiente, es decir, que asuma la serie causal, es preciso distinguir entre causa, condición y ocasión, pues solo aquella —específicamente idónea— es la que tiene capacidad para producir el resultado, mientras las últimas, o contribuyen a facilitar su curso, o sirven de coincidencia favorable. (*Sup. Corte Tucumán, mayo 16/40. — La Ley, 22-2.*)

1178. — No puede prescindir el perito de la ilustración de los factores concurrentes, ya que se llegaría a un juicio equivocado en medida mayor o menor, de la patogénesis o de la calidad misma del evento mortal, ofendiéndose normas generales de objetividad



y de precisión científica. No cabe decir entonces, en manera abstracta, que el caso es poco común, con olvido de sus características, puesto que son estas las que han de guiarnos para apreciar la regularidad de su curso o su carácter extraordinario. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-2.)

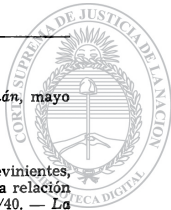
1179. — Debe condenarse por homicidio simple y no por lesión leve al que en riña de ebrios, tira una puñalada con ardor, para dar en cualquier parte del cuerpo, así la más vulnerable, acertando en la región del codo, sitio de flexión y de vasos arteriales superficiales que dió lugar a una infección sobreaguda y muerte por septicemia a los 14 días; sin que valga como concausa el haber sido la víctima dada de alta en el hospital a su pedido, anticipadamente, ni la sospecha de tratamiento inadecuado ulterior. Tampoco tiene tal carácter la supuesta predisposición hemofílica, que de todos modos, simplemente habría servido de coincidencia favorable para traer la consecuencia funesta debida a la acción del agente. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-3.)

1180. — A los efectos de la responsabilidad, no nos podemos contentar con el proceso causal contemplado mecánicamente, sino que es preciso un juicio de causalidad en el significado humano y jurídico. De la causalidad material deriva pues, la causalidad jurídica y según ésta, que se funda en principios dictados por el derecho, se estima la responsabilidad penal. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-2.)

1181. — Los preceptos legales que están adoptando los códigos, tienen aplicación práctica en la concurrencia de causas para establecer si, a pesar de la permanencia de la relación natural, ha de excluirse el nexo por pérdida de valor jurídico. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

1182. — La teoría de la causalidad adecuada, ofrece la base necesaria para aclarar y determinar el concepto de peligro, asociando el elemento objetivo del delito a la personalidad del autor, reveladora de su peligrosidad. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

1183. — No se responde de la concausa independientemente del



hecho que no se ha podido prever. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

1184. — Las causas preexistentes, simultáneas o sobrevinientes, que guardan relación directa con el delito, no excluyen la relación entre éste y el resultado. *Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-2.)

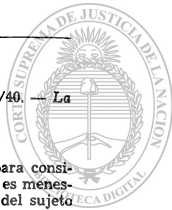
1185. — Solo el concurso de causas excepcionales excluye la relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado. En tal caso, si el hecho cometido constituye de por sí un delito, se aplica la pena establecida para éste. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-2.)

1186. — El dolo indeterminado tiende indiferentemente hacia el daño menor o mayor y da lugar a una responsabilidad conforme al daño que se ha causado. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-2.)

1187. — La jurisprudencia de la *Sup. Corte de Tuc.*, se encamina hacia la doctrina de la causalidad adecuada y a la nueva orientación doctrinaria en la especie, que excluye como influyente cualquier concausa preexistente, simultánea o sobreviniente, que guarde relación directa con el delito. (*Sup. Corte Tucumán*, agosto 17/40. — *La Ley*, 22-190.)

1188. — La causalidad psíquica no se confunde con la material u objetiva, pues mientras esta establece la simple relación natural en la producción de los acontecimientos, aquella se relaciona con la voluntad que anima los actos que conducen a tales efectos. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-1.)

1189. — Para la aplicación práctica de la causalidad adecuada, debe formarse un juicio de posibilidad en el que ha de compararse el curso causal realmente desarrollado, con el que debía esperarse según un juicio razonable. Para comprobar esto último, el juez debe retrotraerse al tiempo en que se realizó el hecho (la llama-



da prognosis posterior). (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 16/40. — *La Ley*, 22-2.)

1190. — La falta de medios de curación no basta para considerar el hecho como homicidio concausal, pues para ello es menester que el medio empleado no pueda causar la muerte del sujeto sin el concurso de circunstancias externas y extraordinarias no imputables y cuando el medio empleado no deba racionalmente determinar la muerte. (*Cám. Fed. La Plata*, mayo 6/40. — *La Ley*, 18-1009.)

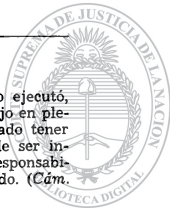
1191. — Si un tratamiento adecuado hubiera podido influir en la lesión, ello no vale para poder determinar una concausa, desde el punto de vista legal, pero debe ser considerado para graduar la pena a imponerse al acusado. (*Sup. Corte Tucumán*, septiembre 18/37. — *La Ley*, 9-225.)

1192. — No cabe invocar concausas directamente relacionadas con el delito; así, el debilitamiento cardíaco que a lo sumo, habría servido para facilitar la obra suficientemente destructora del agente. (*Sup. Corte de Tucumán*, diciembre 10/38. — *La Ley*, 14-241.)

1193. — Si la acción del reo creó todas las condiciones para la secuela morbosa, deben ser a cargo del mismo, todas las consecuencias del hecho. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 18/37. — *La Ley*, 9-224.)

1194. — La mala asistencia hospitalaria o la omisión de un tratamiento adecuado, no debe estimarse como un acontecimiento fortuito o circunstancia excepcional, si las consecuencias mortales de la fractura del esternón, guardan íntima e inmediata dependencia con la acción del reo. (*Sup. Corte Tucumán*, septiembre 18/37. — *La Ley*, 9-224.)

1195. — Aun cuando el deceso de la víctima hubiese sido determinado por falta de una asistencia inmediata, el autor del hecho debe responder de las consecuencias inmediatas del mismo, inclu-



sive de los derivados del lugar y condiciones en que lo ejecutó, cuando éstas han sido previsibles; si el atentado se produjo en pleno descampado, lejos de los centros en los cuales es dado tener cuidados médicos oportunos; tal circunstancia, no puede ser invocada por el autor como factor de atenuación de la responsabilidad que le compete por el acto delictivo que ha perpetrado. (Cám. Fed. Bahía Blanca, junio 24/37. — *La Ley*, 9-859.)

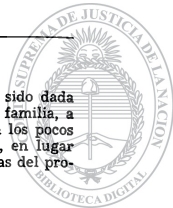
1196. — Existe homicidio si ha mediado un íntimo nexo de causalidad entre la lesión causada con cortaplumas por el procesado en el hipocondrio izquierdo de la víctima y el deceso de ésta. (Cám. Fed. Bahía Blanca, mayo 20/37. — *La Ley*, 9-127.)

1197. — Para la admisión de la concausa, es preciso que la circunstancia sobreviniente sea extraña a las contingencias comunes del evento, y que medie falta de relación entre el acto y la enfermedad consecutiva, una desproporción anormal entre la acción del agente y las causas de la muerte. (Sup. Corte Tucumán, septiembre 18/37. — *La Ley*, 9-224.)

1198. — Responde por homicidio, quien produce a la víctima una fractura completa del esternón, seguida de una pleuresía de origen traumático. (Sup. Corte de Tucumán, septiembre 18/37. — *La Ley*, 9-225.)

1199. — Para que exista plena responsabilidad, es menester que medie relación de causalidad entre la lesión y su resultado. Las concausas sobrevinientes e independientes de la evolución habitual de la herida, atenúan la responsabilidad del reo, en relación al daño causado. (Sup. Corte de San Juan, septiembre 5/40. — *La Ley*, 20-936.)

1200. — Las heridas que han lesionado un poco el peritoneo, solo autorizan a responsabilizar al procesado como autor del delito de lesiones graves, cuando, si bien el lesionado falleció de peritonitis, no ha podido establecerse si esa enfermedad, fué consecuencia directa de la lesión recibida, dado que no se atendió en un establecimiento oficial ni se le practicó la autopsia. (Sup. Corte de San Juan, septiembre 5/40. — *La Ley*, 20-936.)



1201. — Las circunstancias de que la víctima haya sido dada de alta, en el hospital donde se asistía, a pedido de su familia, a fin de trasladarla a su provincia natal, donde falleció a los pocos días, no autoriza a calificar el delito como de lesiones, en lugar de homicidio que resulta probado por diversas constancias del proceso. (*Cám. Fed. Capital*, mayo 4/34. — *J. A.*, 49-14.)

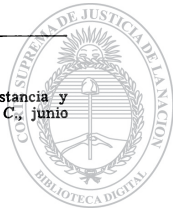
1202. — Para que la concausa sobreviniente sea un motivo de atenuación de la pena, debe ser independiente del heridor y no tratarse de una evolución más o menos normal de la herida; esa independencia no debe entenderse absoluta sino relativa; no debe confundirse la causa última de la muerte en el sentido médico, con la causa de la muerte en el sentido jurídico. (*Sup. Corte Tucumán*, feb. 21/35. — *J. A.*, 49-745.)

1203. — Ha de condenarse por lesiones y no por homicidio, si la relación de causalidad entre las lesiones de cráneo en vías de cicatrización y la septicemia mortal, se interrumpe al producirse escoriaciones fistulosas en la nalga y piernas por la prolongada permanencia en cama, siendo tales escoriaciones la causa inmediata de la infección que determinó el fallecimiento. (*Sup. Corte Tucumán*, feb. 21/35. — *J. A.*, 49-747.)

1204. — El autor de lesiones debe ser declarado culpable de homicidio, si la muerte sobreviniente fuera una consecuencia directa de su acción, y no de los accidentes que pudieran derivar de una causa extraña. (*C. C. C.*, marzo 13/25. — *Fallos*, 1-494.)

1205. — Procede condenar al acusado por homicidio simple, aun cuando en el informe de los médicos de los tribunales se manifieste terminantemente que la herida de bala inferida por aquél no es lo que ha provocado el fallecimiento de la víctima, si surge lo contrario de la historia clínica llevada en el hospital donde se atendió aquélla. (*C. C. C.*, marzo 10/33. — *Fallos*, 1-508.)

1206. — Si el juez correccional condenó al acusado por lesiones y durante la substanciación de la apelación de la sentencia fallece la víctima del delito, a consecuencia de aquellas lesiones,



corresponde anular el pronunciamiento de primera instancia y remitir las actuaciones al juez de instrucción. (C. C. C., junio 28/21. — Fallos, 2-99.)

ARTICULO 81, INCISO 2º

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título I, arts. 1, 2 y 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 208, 209 y 210. — Proyecto 1891, arts. 122, inciso 2º. — Ley 4189, art. 17, Capítulo I, Inciso 4º. — Código derogado, arts. 100 y 101.

FUENTE: (1).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-99. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*. (Ver inciso anterior.) — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-355 y 375. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 177. — A. TARDIEU, *Estudio Médico-legal sobre el infanticidio*. Barcelona 1883. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 161. — R. BALESTRINI, *Aborto, infanticidio, ed sposizione di infanti*. Torino 1898. — G. SUÁREZ PEÑALVER, *Homicidio simple, auxilio al suicidio — Homicidio por razón de honor*. (Rev. Penal de La Habana, julio-sept. 1941, p. 294.)

JURISPRUDENCIA

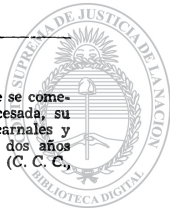
1207. — Aunque la procesada por infanticidio reconozca ser autora del hecho, si no se han acumulado en el sumario suficientes elementos demostrativo de la existencia del cuerpo del delito, ante la duda de si el hijo nació o no con vida, por aplicación del artículo 13 del C. Pr. Penales, procede la absolución. (Cám. Fed. Bahía Blanca, dic. 27/34. — J. A., 49-198.)

1208. — Producido el infanticidio dentro del término de

(1) El proyecto del Dr. Tejedor, como el Proyecto de Villegas, Ugarriza y García, el Proyecto de 1891 y el Código derogado, siguiendo al Código de Baviera y al Código Penal Español de 1822, exigía para configurar el infanticidio, que el recién nacido tuviese menos de tres días de vida, so pena de considerar el caso como homicidio simple. El artículo del código vigente, nació en la Comisión de Códigos del Senado que modifica el Proyecto de la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la C. Diputados, que copiaba el precepto del Proyecto de 1906.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 118. — Se impondrá prisión por uno a seis años, a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras dure su estado puerperal; y a los padres, hermanos, marido e hijos que cometieren el mismo delito obediendo a idéntico móvil, si se encontraren en las circunstancias previstas en el inciso 1º del artículo anterior.



influencia del estado puerperal y teniendo en cuenta que se cometió para ocultar el deshonor, dada la edad de la procesada, su estado de soltera, la clandestinidad de las relaciones carnales y la ocultación del embarazo, corresponde condenarla a dos años de prisión, dejando en suspenso la aplicación de la pena. (C. C. C., *Gaceta del Foro*, 52-396.)

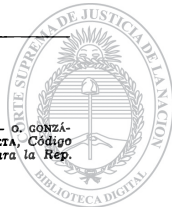
1209. — Pudiendo afirmarse que la muerte de la criatura se produjo por asfixia al caer de cabeza en el inodoro sobre el cual la madre estaba sentada cuando se hizo el parto y no por obra de ésta al tratar de hacerla pasar por el conducto conjuntamente con la sangre que había perdido y lo que pretendió hacer cuando notó sin vida a la criatura, debe absolvérsela del delito de infanticidio, y, como no está penada la decapitación y mutilación de un cadáver, debe ponerse en libertad a la acusada. (C. C. C., *Gaceta del Foro*, 82-103.)

1210. — Para que la muerte de un recién nacido sea calificada de infanticidio, se requieren dos condiciones: a) que se cometa para ocultar la deshonor y b) que lo sea durante el nacimiento o en el estado puerperal. La primera, resulta del estado de soltera, clandestinidad de relaciones carnales y ocultamiento del embarazo, por la madre autora del delito. Estado puerperal, es el conjunto de condiciones en que se encuentra la mujer hasta la vuelta a su estado anterior al embarazo. (C. C. C., julio 22/24. — *Fallos*, 1-481.)

ART. 82. — *Cuando en el caso del inc. 1º del art. 80 concurriere algunas de las circunstancias del inciso 1º del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 113. — Proyecto 1906, art. 86. — Ley 4189, art. 17, inciso 5º.

FUENTE: El artículo 113 del Proyecto 1891.



BIBLIOGRAFIA

RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-363. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-9 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-134. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 163.

JURISPRUDENCIA

1211. — La madre que mata a su hijo en el momento de nacer, comete el homicidio calificado del artículo 80 inciso 1º del C. P. y no infanticidio, si la comisión del mismo no tuvo por finalidad la ocultación de su deshonra, pero concurriendo en el caso la emoción violenta emergente del estado puerperal que contempla el artículo 82 del mismo código para establecer una pena graduable, teniendo en cuenta las particularidades del hecho, debe condenársela de acuerdo al mismo al mínimum de la pena que él establece, atento a la falta de educación y la situación de miseria de la procesada. (*Corte Suprema, Gaceta del Foro*, 64-421.)

1212. — Si no medió la intención de producir la muerte, pero ésta se produjo por la gravedad de la sevicias aplicadas a la víctima a golpes de puño y puntapiés, el homicidio debe calificarse de preterintencional. Si en esas condiciones el autor del delito es el padre da la víctima, debe aplicarse el artículo 82 relacionado con el 81 del C. Penal. (*C. C. C.*, julio 31/23. — *Fallos*, 1-480.)

ART.. 83 — *Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título I, arts. 1, 2 y 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 216. — Código Tejedor, (para la Prov. de Buenos Aires), art. 220. — Ley 4189, art. 17, inciso 6º, Capítulo I. — Proyecto 1891, art. 114. — Proyecto 1906, art. 87.

FUENTE: (1).



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-122. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-328 y 2-168, 169. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-393. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 181. — RODOLFO MORENO, *La Ley Penal Argentina*, p. 143. — FERRI E., *Homicidio-suicidio*, (Trad. de Concha Pena, Madrid 1934.) — S. GARCÍA PINTOS, *Consideraciones biológicas y jurídicas sobre suicidio, eutanasia, aborto, embarazo y cardiopatías*. Montevideo 1935. — HERNÁN CORTÉS, *El suicidio en la doctrina y en la legislación*. (La Ley, 6, sec. rev. de rev., p. 3. — RUIZ FUNES, *El suicidio y el homicidio en España*. (La Ley, 4, sec. rev. de rev., p. 2.) — C. PÉREZ COMPAC, *La eutanasia y sus problemas afines*. (La Ley, 2, sec. doct., p. 35.) — LUIS A. BOUZA, *El homicidio por piedad y el nuevo Código Penal uruguayo*. Montevideo 1935. — A. LICURZI, *El derecho de matar*. (De la eutanasia a la pena de muerte) Córdoba 1934. — ALTAVILLA, *El suicidio*. Nápoles 1932. — PÉRSICO, *Il diritto di morire*. Roma 1895. — SICARDS y SALVADÓ, *El suicidio jurídicamente considerado*. Barcelona 1902. — BURKEIM, *Le suicide, étude de sociologie*, Paris 1930. — DOUAY, *Le suicide ou la morte volontaire*, Paris 1870. — BAYET, *Le suicide et le moral*, Paris 1922. — F. ÁLVAREZ ARENAS, *Cuestiones filosófico-político-legales sobre el suicidio y el duelo*. Madrid 1859. — ROYO VILLANOVA y MORALES R., *El derecho a morir sin dolor*. (El problema de la eutanasia.) Madrid 1929. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-185, 321.) — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 165.)

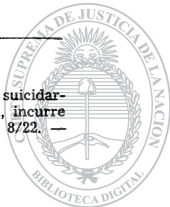
JURISPRUDENCIA

1213. — El suicidio, en principio y como acto voluntario, reprobado por la ley positiva, moral y religiosa, no es fuente de derechos y sólo puede ser considerado, como prueba de un desequilibrio mental que quita al acto su carácter consciente. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 18/40. — *La Ley*, 18-804.)

1214. — Un traumatismo puede asumir formas nerviosas, golpes morales o alteraciones psíquicas que lleven al suicidio. (*Sup. Corte Tucumán*, mayo 18/40. — *La Ley*, 18-804.)

1215. — Incurren en tentativa de homicidio simple y no en instigación o ayuda a cometer suicidio, el que hiere a otro con el propósito de darle muerte, aunque medie para la ejecución del hecho, el consentimiento o pedido de la víctima. (C. C. C., junio 28/32. — *Fallos*, 1-505.)

(1) El proyecto del Dr. Tejedor, siguiendo al Código Sardo, castigaba al suicida declarando nulas sus últimas disposiciones. Si no moría, lo internaba por uno a tres años en un establecimiento especial. Castigaba también al que ayudaba a cometerlo. El Proyecto de 1891 y el de Villegas, Ugarriza y García, castigaban solamente al que ayudara o instigara a cometerlo. El Proyecto 1906, penaba al ayudante o instigador, solamente en el caso en que el suicidio se consumara. El artículo del código vigente tiene su fuente en el despacho de la Comisión de Códigos del Senado, que modificó el proyecto de la Comisión Especial de la C. Diputados, cuyo artículo análogo seguía al proyecto de 1906.



1216. — El que proporciona a otro los medios para suicidarse, aun cuando intente también quitarse la propia vida, incurre en el delito de instigación al suicidio. (C. C. C., sept. 8/22. — Fallos, 2-420.)

ART. 84. — *Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Título III, Libro I, arts. 1, 2, 3, 4 y 5. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 37 y 38. — Proyecto 1891, art. 115. — Proyecto 1906, art. 88. — Código derogado, arts. 15, 16 y 17.

FUENTE: El P. 1906, modificado por la Comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-116. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-92 y 372. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-395. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, p. 266. — RODOLFO RIVAROLA, *Exposición y Crítica del C. P. de la Rep. Argentina*, 1-402. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 17. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 182. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-185. — CHAUVEAU - HELIE, *Theorie du Code Penal*, Paris 1877, 4-113. — R. GARRAUD, *Precis du droit Criminel*. Paris 1909, 5-2. — E. SALOMÓN, *La Faute Civile et la Faute Penal dans l'homicide et les coupes et blessures par imprudence*. Paris 1918. — A. ANGEOLINI, *De los Delitos Culposos*. Barcelona, 1905. — EBERMAYER, *Responsabilidad civil y criminal del médico*. Barcelona 1921. — H. Y L. MAZEAUD, *Responsabilidad de los Médicos*, (*Revue Trimestrielle de Droit Civil*, Paris 1938, p. 187.) — LORENZO CARNELLI, *La Responsabilidad sin Culpa en el Derecho Penal*. (*La Ley*, 4-93.) — ALFREDO DE MARSICO, *Culpa por inobservancia de las leyes y el delito aberrante*, (*Annale di Diritto e Procedura Penale*), Turin, abril 1940, p. 237. — A. PEYTEL, *La responsabilité medical, des medecins et des chirurgien*. Paris 1935. — CH. NICOLLE, *Responsabilité de la medicine*. Paris, 1936. — P. BROUARDEL, *La responsabilité medicale*. Paris, 1898. — P. BROUARDEL, *L'exercice de la medicine et le charlatanisme*. Paris 1899.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 121. Se impondrá prisión de dos a seis años, al que determine a otro al suicidio, le afirme en su propósito de llevarlo a cabo o le ayude, en cualquier forma, a realizarlo, si el suicidio es consumado o intentado.

(Sobre eutanasia ver el artículo 117 inciso 2º del Proyecto Coll-Gómez al pie del artículo 81.)



JURISPRUDENCIA

1217. — El concurso de la imprudencia manifiesta de la víctima del delito de homicidio culposo, atenúa la responsabilidad penal y civil del autor del hecho. (*Sup. Corte de San Juan*, agosto 20/40. — *La Ley*, 20-936).

1218. — Es evidente la culpa de la enfermera que, advertida de la sensación extraña que producía la bebida suministrada a los primeros enfermos que la ingirieron, en total desacuerdo con lo que era lógicamente previsible, dada la naturaleza presunta de aquélla (purgante) no extremó las precauciones suspendiendo la administración de la misma, procurando cerciorarse firmemente si no había mediado un error en la elección del frasco y aún en la preparación del contenido, lo que hubiera traducido una actitud cautelosa y prudente que habría permitido evitar que el efecto tóxico mortal o no, alcanzara a sus pacientes. Incurrir, por tanto, en homicidio culposo y daños en la salud (artículos 84 y 94 del C. P.) en concurso ideal de delitos. (*Cám. Fed. Rosario*, octubre 16/40. — *La Ley*, 20-745.)

1219. — La estudiante de farmacia, que en su calidad de practicante de un hospital, encargada de la preparación de ciertas recetas simples, ha incurrido en negligencia al preparar una bebida, la cual resultó contener una sal tóxica que ocasionó la muerte de dos personas y serios trastornos en la salud de otras, no puede quedar exenta de responsabilidad en virtud de su condición de estudiante, si bien ello la coloca en una situación especial a los efectos de definir y graduar su culpa. No era farmacéutica, de modo que no le alcanzan las penalidades propias de los profesionales que incurren en impericia en su arte o profesión pero ejercía su cargo, aunque era ad-honorem, otorgado en virtud de sus cualidades de estudiante para que hiciera práctica profesional y atendiendo presumiblemente a la confianza que inspirarían sus cualidades en punto a prudencia, atención y comprensión de lo delicado de sus funciones. (*Cám. Federal Rosario*, octubre 16/40. — *La Ley*, 20-745).

1220. — El sentido jurídico de "causa" es el mismo para todos

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 120. — Se impondrá prisión de uno a tres años o inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, al que, por culpa, causare la muerte de una persona.



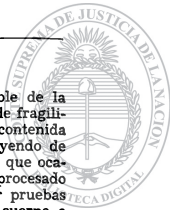
los delitos dolosos o culposos, cualquiera sea el bien jurídico tutelado, sin limitación a determinados artículos del C. P. (C. C. C., sept. 26/39. — *La Ley*, 16-103.)

1221. — Para que la inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo produzca responsabilidad penal por culpa o imprudencia para el conductor de un automóvil que lesiona o mata a un tercero, es necesario que esa inobservancia o falta de cumplimiento de sus deberes, debidamente comprobada, tenga, no una equívoca relación causal con el evento, sino que ella sea su condición generadora, inmediata, principal y directa. (C. C. C., mayo 9/39. — *La Ley*, 14-649.)

1222. — Los extremos del delito culposo son: una imprudencia, negligencia, impericia en arte o profesión, inobservancia de reglamento o deberes, y un evento letal o muerte que deriva de aquel hecho, o sea, una relación de causalidad entre ambos elementos extrínsecos e intrínsecos, vínculos de causa a efecto, entre el suceso contingente y la muerte, entre el hecho voluntario y el evento mortífero; contribución moral que requiere la intención y la resolución de hacer o no hacer la cosa que ocasionó la muerte, es decir, que el agente quiso la causa y no el efecto, quiso el hecho pero no la muerte que fué su consecuencia. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 11-221.)

1223. — No es imputable el homicidio accidental, consecutivo a un "match de box", autorizado por la Municipalidad, si su desarrollo fué normal y no aparece una notoria torpeza imputable a título de dolo o de simple culpa. (*Sup. Corte de Tucumán*, febrero 15/38. — *La Ley*, 10-313.)

1224. — La responsabilidad penal del capataz de la obra por el delito de homicidio por imprudencia resulta manifiesta, si ordenó colocar una grampa a ocho metros de altura en la escalera que debían usar los obreros de la obra vecina, uno de los cuales resultó muerto a consecuencia de la caída producida por el desprendimiento de la grampa que cedió por hallarse recién colocada sin haber tomado ninguna precaución para prevenir al capataz de la obra vecina el peligro que significaba usar dicha escalera, por la razón apuntada. (C. C. C., noviembre 4/38. — *La Ley*, 13-528.)



1225. — Incurrir en imprudencia que lo hace pasible de la sanción del art. 84 del C. P. el que conociendo el estado de fragilidad orgánica de una niña de doce años le arroja el agua contenida en un lebrillo mientras ella descalza, lavaba el piso, cayendo de espalda y pegando con la cabeza a la altura del zócalo lo que ocasionó la muerte por shock traumático. La conducta del procesado no configura homicidio preterintencional por no mediar pruebas suficientes de que se propusiera causar un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. (C. C. C., diciembre 7/37. — J. A., 60-1008.)

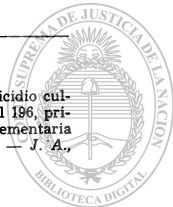
1226. — La culpa penal implica una falta de cuidado o diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del hecho propio. (Sup. Corte de Tucumán, noviembre 11/37. — La Ley, 9-207.)

1227. — Hay homicidio culposo si el conductor del auto, estaba ebrio e hizo una brusca maniobra para pasar a otro coche, perdiendo el control de la marcha y subiendo a la vereda, donde apretó a la víctima. (Sup. Corte de Tucumán, noviembre 11/37. — La Ley, 9-207.)

1228. — La culpa es la no previsión del resultado previsible en el momento en que tuvo lugar la manifestación de voluntad; siendo previsible el resultado cuando el autor había podido y debido preverlo. (Sup. Corte de Tucumán, julio 2/36. — La Ley, 11-705.)

1229. — Responde por culpa o imprudencia, el motorman que advirtiendo el juego peligroso de dos niños en una platavanda central y en actitud de lanzarse a la calle, se limita a dar toques de campana, sin aminorar la velocidad del tranvía, destrozando así, al más pequeño que cruzó corriendo. (Sup. Corte de Tucumán, julio 2/36. — La Ley, 11-705.)

1230. — El médico debe ser independiente en el ejercicio de su arte y no responde por la eventualidad de la muerte. Pero es responsable por impericia y falta grave de diagnóstico, tratamiento u operación. (Sup. Corte de Tucumán, junio 2/36. — J. A., 56-702.)



1231. — El artículo 84 del C. P. que reprime el homicidio culposo, es más severo en cuanto a la pena impuesta que el 196, primera parte, puesto que aquel contiene también la complementaria de inhabilitación. (*Cám. Federal La Plata*, abril 13/36. — *J. A.*, 54-68.)

ART. 85. — *El que causare un aborto será reprimido:*

- 1°) *Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;*
- 2°) *Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.*

INCISO 1°

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título I, art. 2°. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 211. — Proyecto 1891, art. 116, inc. 1°. — Proyecto 1906, art. 89, inc. 1°. — Código derogado, art. 102, inciso 2°. — Ley 4189, art. 17, inc. 7°.

FUENTE: El Proyecto 1891, art. 116.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-131. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-407 y 411. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 184. — JUAN P. RAMOS, *Curso de Derecho Penal*, 5-123. — D. ALBINI, *L'aborto criminoso*. Roma 1898. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-186. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 167. — A. TARDIEU, *Etude medico-*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 123. — Se impondrá prisión de seis a doce años, al que causare un aborto, si el delito se cometiere sin consentimiento de la mujer. El máximo de la sanción se elevará hasta la mitad, si a consecuencia del hecho sobreviniere la muerte de la mujer o a ésta se le causaren lesiones de las previstas en el artículo 129.

Si hubiere mediado el consentimiento de la mujer, se impondrá prisión de uno a cuatro años. El máximo de la sanción se elevará hasta la mitad, si a consecuencia del hecho sobreviniere la muerte de la mujer o a ésta se le causaren lesiones de las previstas en el artículo 129.



legale sur l'avortement. Paris 1940. — TOMASO NAPOLITANO, L'aborto nelle legge penale sovietica. (La Scuola Positiva, 1934, p. 12.) — TEJERA D. V., El aborto Criminal, La Habana 1938. — R. BALESTRINI, Aborto, infanticidio ed sposizione di infanti. Torino 1888. — E. CUELLO CALÓN, Cuestiones Penales relativas al aborto, Barcelona 1931. — BECERRO DE BENGUA, El Aborto Criminal y La Ley. Montevideo 1922. — S. GARCÍA PINTOS, El Respeto a la vida. (Suicidio, eutanasia, aborto, embarazo y cardiopatías.) Montevideo 1935. — NERIO ROJAS, El Aborto. (Rev. de Criminología, N° 100, p. 385.) — JUAN LUIS FERRAROTTI, La Investigación del aborto criminal desde el punto de vista médico. (J. A., 7-238.) — DOMINGO MILLILLO, El aborto consentido y el agravante del número de las personas. (La Scuola Positiva. Milán 1939, p. 380.)

JURISPRUDENCIA

1232. — El aborto se consuma con la interrupción dolosa del proceso fisiológico normal de la gestación, sin que sea condición para su realidad jurídica, que esa interrupción se exteriorice con la expulsión violenta del feto del útero materno. Su figura se define y se integra con la concurrencia de la interrupción provocada del embarazo, seguida de la muerte del feto. (C. C. C., abril 28/39. — *La Ley*, 14-535.)

1233. — La perforación de la matriz es un signo demostrativo del aborto provocado. (C. C. C., abril 25/24. — *J. A.*, 12-614.)

1234. — La presencia de placenta o solamente de restos placentarios, basta para justificar la existencia del aborto. (C. C. C., abril 25/24. — *J. A.*, 12-614.)

1235. — La sola retención placentaria y la circunstancia de no haberse encontrado en el aparato digestivo rastro de gastritis o gastro enteritis, no caracteriza el aborto como criminal. (Cám. Apel. de Santa Fe, agosto 1/21. — *J. A.*, 7-238.)

INCISO 2°

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Parte II, Libro I, Título I, Capítulo V, art. 1. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 211. — Proyecto 1891, art. 116, inc. 2°. — Proyecto 1906, art. 89, inc. 2°. — Código derogado, art. 102, inc. 3°. — Ley 4189, art. 17, inc. 7°.

FUENTE: El 116, inc. 2° del Proyecto 1891.



BIBLIOGRAFIA

(Ver la del Inciso 1º y RODOLFO MORENO, ob. cit., 3-411.)

JURISPRUDENCIA

1236. — Si la prueba de autos acredita plenamente que la procesada facilitó a la propia víctima, el instrumento con la cual ésta provocó el aborto, a consecuencia del cual sobrevino la muerte, sabiendo el destino que se le iba a dar, procede tenerla como coautora del delito previsto en el art. 85., inciso 2º del C. P., en los términos del artículo 45 del mismo. (Cám. Apel. de Azul, abril 17/34. — J. A., 46-434.)

ART. 86. — *Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.*

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

- 1º) *Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;*
- 2º) *Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.*

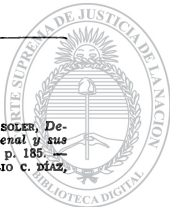
ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título I, art. 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 214. — Proyecto 1891, art. 117. — Proyecto 1906, art. 90. — Ley 4189, art. 17, inc. 8º. — Código derogado, artículo 105.

FUENTE: (Ver art. 34, inc. 3º).

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 124. — Además de las sanciones establecidas en el artículo anterior, se impondrá inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, no pudiendo exceder de veinte años, a los médicos, parteras, farmacéuticos o enfermeras que participen en el delito.

Art. 125. — No dará lugar a sanción alguna el aborto que practique un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer o de su representante legal, cuando el embarazo proviene de una violación.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-145. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-372. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-416. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 185. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-325. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), ps. 171 y sgts.

ART. 87. — *Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Parte II, Libro I, Título I, art. 2º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 212. — Proyecto 1891, art. 118. — Proyecto 1906, art. 91. — Código derogado, art. 103.

FUENTE: El art. 91, del Proyecto 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-143. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-94, 107, 162, 163. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 187. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-423. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-322. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 172.

JURISPRUDENCIA

1237. — La víctima del accidente de tráfico que abortó a consecuencia del hecho, no puede reclamar indemnización por la pérdida del hijo que había concebido, si no tenía vida cuando fué separado del seno materno. En tal situación, no se le puede considerar como persona, ni puede, por lo tanto, atribuirsele valor económico alguno. Por consiguiente, solo puede reclamar los gastos originados por la enfermedad. (*Cám. Civil Primera de la Capital*, octubre 5/37. — *J. A.*, 60-90.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 126. — Se impondrá multa de quinientos a dos mil pesos moneda nacional, al que causare aborto por culpa, si el embarazo de la mujer fuere visible o le constare.



1238. — La pérdida abortiva del feto, a consecuencia del accidente de tráfico, como persona por nacer, no es indemnizable por carecer de valor económico. (Cám. Civil. Primera, agosto 25/37. — *Gaceta del Foro*, 130-188.)

ART. 88. — *Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, y Parte I, art. 1. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 213. — Proyecto 1891, art. 119. — Proyecto 1906, art. 92. — Código derogado, art. 104. — *Ley 4189*, art. 17, inc. 9°.

FUENTE: El art. 119, del Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

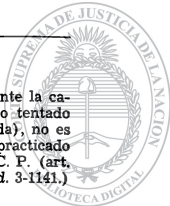
EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-150 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-169. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 3-425. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 187. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-187. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 172. — MANUEL GOLDSTRAJ, *Represión del Aborto Intencional — Fracaso de la Legislación Represiva del aborto.* (J. A., 36, sec. doct., p. 22.)

JURISPRUDENCIA

1239. — El informe médico que precisa múltiples y antiguos desgarros del himen, totalmente cicatrizados; la vagina con secreciones, con características de loquios y el cuello uterino discretamente dilatado; las mamas con marcada tumefacción y abundante secreción láctea; y en la región abdominal algunos "vergetures", son índices concluyentes para sostener la existencia de un estado de gravedad y aborto posterior. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 5/41. — *Rep. Jurid.* 4-1621.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 122. — Se impondrá prisión por uno a cuatro años, a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. Cuando el hecho respondiera al propósito de ocultar su deshonor, la sanción será prisión de seis meses a dos años. A la simple tentativa de la mujer no corresponde sanción alguna.



1240. — Si bien los hechos indagados hacen procedente la calificación legal de tentativa de delito imposible (aborto tentado por una mujer que no se comprueba haya estado grávida), no es de aplicación el art. 44 del C. P., ya que el propio aborto practicado por la mujer no es punible por disposición expresa del C. P. (art. 88, último apartado). (C. C. C., junio 21/40. — *Rep. Jurid.* 3-1141.)

1241. — El aborto requiere la comprobación de la preñez, los signos demostrativos de la expulsión violenta del feto, la época del embarazo, las causas que determinaron el hecho, etc. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 15/41. — *La Ley*, 22-938.)

1242. — El aborto puede ocasionarse en cualquier momento de la gestación, por la destrucción de su proceso fisiológico. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 15/41. — *La Ley*, 22-938.)

1243. — Los numerosos datos del embarazo y del hecho mismo, logrado con medios violentos, prueban la existencia del aborto provocado. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 15/41. — *La Ley*, 22-938.)

CAPITULO II

LESIONES

ART. 89. — *Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.*

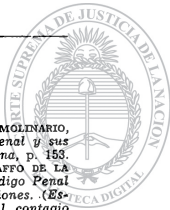
ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor. Libro I, Parte II, Sección I, Título II, art. 1º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 228. — Proyecto 1891, art. 120. — Proyecto 1906, art. 93. — Código derogado, art. 120. — Ley 4189, Capítulo 2º, art. 17, inc. 1º.

FUENTE: El art. 120 del Proyecto de 1891, inspirado en el Código Italiano (art. 372).

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 127. — *Se impondrá prisión de tres meses a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño para el que no se establezca otra sanción en este Código.*

La lesión producida sin uso de arma, que no ocasionare otra consecuencia que la de incapacitar a la víctima para sus ocupaciones habituales por un término que no exceda de tres días y que cure espontáneamente, en el mismo término, no está sometida a sanción.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-152. — ALFREDO J. MOLINARIO, *El Delito de Lesiones*, p. 5. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes* 4-619. — RODOLFO MÓREZO, *La Ley Penal Argentina*, p. 153. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 188. — J. C. RAFFO DE LA BETA, *Código Penal Argentino*, 2-242. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3a. ed.), ps. 172 y sgts. — NERIO ROJAS, *Lesiones*. (Estudio Médico-legal) Bs. Aires 1934. — LORENZO CARNELLI, *El contagio venéreo como delito de lesiones*. (*La Ley*, 8-819.)

JURISPRUDENCIA

1244. — Los términos claros y genéricos del artículo 89 del C. P. y sus antecedentes legislativos, explican que cualquier daño en el cuerpo y la salud aunque sea de poca entidad, cae bajo la sanción del mismo. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, mayo 20/40. — *La Ley*, 18-1032.)

1245. — La acción del procesado al insultar y empujar simultáneamente a dos de sus obreros causándoles daño, implica la perpetración de delito de lesiones en concurso real. (*Cám. Apel. Rosario, Sala Crim.*, mayo 20/40. — *La Ley*, 18-1032.)

1246. — Las simples contusiones curables por acción fisiológica o cuidados higiénicos no son las lesiones que castiga el Código Penal en su artículo 89 y constituyen desórdenes que caen en la esfera policial o injurias de hecho reprimibles por acción privada. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, diciembre 14/39. — *La Ley*, 18-585.)

1247. — La acción intencional del que proponiéndose herir a una persona hiere a otra, constituye el caso de "aberratio ictus". (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, mayo 1/39. — *La Ley*, 16-656.)

1248. — No es aceptable como concausa la prolongación de la incapacidad para el trabajo debida a un absceso, por la inyección prescrita como tratamiento dada la relación directa que guarda con el delito. (*Sup. Corte Tucumán*, marzo 4/34. — *La Ley*, 15-1123.)

1249. — Si el procesado persiguió a su hijo menor de diez años



de edad y al no poder alcanzarlo le arrojó deliberadamente un ladrillo, lesionándolo, el medio adoptado y la forma de obrar excluyen el propósito correctivo, debiendo calificarse el hecho como delito doloso de carácter común. (C. C. C., junio 10/38. — *La Ley*, 10-1163.)

1250. — No puede imputarse al procesado el delito de lesiones, graves ni leves, por el estado de fragilidad o debilidad orgánica en que se encontraba la víctima —una niña de doce años— que le había sido entregada por la madre para que la ocupara en quehaceres domésticos, a quien el inculpado maltrataba continuamente, abusando de sus pocas energías para trabajar y no alimentándola suficientemente, si según el informe médico, la anemia pudo provenir de factores internos, como trastorno del metabolismo glandular o desmetabolismo, o de las dos causas a la vez fuera de la hipocalimentación o malas condiciones higiénicas de vida. (C. C. C., diciembre 7/37. — *J. A.*, 60-1008.)

1251. — Procede calificar de leves las lesiones, aún cuando el informe pericial expedido cincuenta días después del hecho, establezca que una de ellas curará en un mes, si no especifica que la inutilización para el trabajo durará ese término. (*Cám. Federal La Plata*, junio 4/37. — *J. A.*, 58-772.)

1252. — La intención de dañar, el móvil torpe, la incapacidad para el trabajo, la comprobación del daño, son tenidos en cuenta por la jurisprudencia para castigar como lesiones, los excesos de corrección aplicados por una persona a otra que le está sometida. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 7/37. — *J. A.*, 57-605.)

1253. — Corresponde la calificación de lesiones leves, si la herida fué leve, aunque después empeorara y presentara signos de gravedad, si ello se debió a que la víctima no fué atendida u operada de inmediato, omisión no imputable al autor del delito. (*Sup. Trib. de San Luis*, julio 16-36. — *J. A.*, 57-601.)

1254. — Configura el delito de lesiones el contagio de enfermedad venérea. (C. C. C., diciembre 27/35. — *J. A.*, 53-246). (*Ver artículo 202 y ley de profilaxis social*.)



1255. — El autor de lesiones debe ser declarado culpable de homicidio si la muerte sobreviniente fué una consecuencia directa de su acción y no de los accidentes que pudieran derivar de una causa extraña. (C. C. C., marzo 13/25. — Fallos, 1-494.)

1256. — Consiste el delito de lesiones en la solución de continuidad causada en el cuerpo humano con efusión de sangre y en las violencias que sin efusión de sangre, ocasionan un dolor físico incluyéndose asimismo las perturbaciones producidas en la mente de una persona por la obra dolosa o culposa de otra. (C. C. C., julio 5/32. — Fallos, 2-106.)

ART. 90. — *Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte I, Libro I, Título II, art. 9. — Proyecto 1891, art. 121. — Proyecto 1906, art. 94. — Ley 4189, art. 17, Cap. 2º, inciso 2º. — Código derogado, art. 119, inciso 3º y 120, inciso 1º.

FUENTE: El proyecto de 1891, inspirado en el Código Italiano.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-162. — ALFREDO J. MOLINARIO, *El Delito de lesiones*, ps. 14 y 19. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-20. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 190. JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 189. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-187. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 175. — ARTURO AMEGHINO, *Peligro de*

PROYECTO COLLI-GOMEZ (1937)

Art. 128. — *Se impondrá prisión de dos a seis años, si la lesión produce alguna de las siguientes consecuencias:*

- 1º *Si determinare la incapacidad de la víctima para dedicarse a sus ocupaciones habituales por más de cuarenta días;*
- 2º *Si produjere la debilitación permanente de un sentido, de un miembro o de una función;*
- 3º *Si se dejare una señal en el rostro.*

Vida. (Apéndice de "El Código Penal de 1922" de Jofré.) — CLARA CAMPO-AMOR, Indemnización por daños que afectan la estética femenina. (Jurisprudencia Suiza. — J. A., 64, sec. doct., p. 25.)

JURISPRUDENCIA

Deformación de rostro

1257. — El arreglo facial posible, no aminora el grado de la lesión, pues la ley prescinde de que el lesionado pueda recuperar sus condiciones, por hábiles operaciones de cirugía. (Sup. Corte de Tucumán, julio 27/40. — *La Ley*, 20-163.)

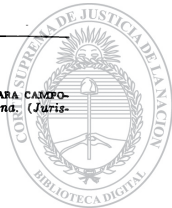
1258. — La deformación permanente del rostro, debe ser tal, que inspire horror, compasión o desagrado; la ley no ha querido agravar la pena por la cicatriz o la marca que las lesiones dejan en el rostro, sino que ha exigido la deformación. (Cám. Apel. Azul, agosto 6/35. — J. A., 52-277.)

1259. — El concepto de deformación del rostro es completamente relativo; los jueces deben apreciar en cada caso si existe o no, a cuyo efecto deben ver a la víctima. (Cám. Apel. Azul, agosto 6/35. — J. A., 52-277.)

1260. — Un ojo vaciado o extirpado, causa desagrado, cualquiera sea el sexo o edad de la persona; por consiguiente, debe considerarse que tal hecho es una deformación permanente del rostro, aunque no se lo haya apreciado con relación a la víctima de las lesiones. (Cám. Apel. Azul, agosto 6/35. — J. A., 52-277.)

1261. — Para que la herida encuadre en lo que el nuevo C. P. entiende por deformación del rostro, basta que produzca una "alteración permanente en las facciones" sin que sea necesario que ella cause compasión, horror o desagrado como se interpretaba anteriormente. (*Primera Inst. Capital, Gaceta del Foro*, 61-286.)

1262. — Para que exista deformación del rostro no es necesario que ella alcance el grado de desfiguración mayor o el de una mutilación repugnante. Basta el perjuicio en la armonía del rostro,





cuando la marca no se limita a una simple cicatriz lineal en forma que no atraiga la atención de los demás. (C. C. C., julio 28/33. — Fallos, 2-107.)

Debilitación permanente de la salud, etc.

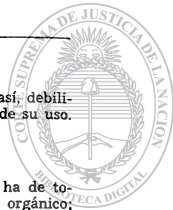
1263. — Mediando abuso de armas —delito de naturaleza intencional y por lo tanto imputable— y lesiones graves causadas a un tercero, debe aceptarse solo la existencia de este último delito por ser única la intención y la acción. (Cám. Fed. La Plata, junio 23/39. — *La Ley*, 17-296.)

1264. — Aún cuando los peritos médicos califiquen de grave la lesión inferida a la víctima de violación, debe considerarse como leve si no afirman de una manera categórica que la menor damnificada sufriera a consecuencia de la lesión, un debilitamiento permanente de la función genital. (Cám. Fed. Bahía Blanca, abril 13/39. — *La Ley*, 16-225.)

1265. — La sola opinión facultativa sobre peligro de vida sin que esté basado en hecho cierto, no basta para que jurídicamente pueda hablarse de tal agravación. (Sup. Corte Tucumán, mayo 27/37. — *La Ley*, 15-314.)

1266. — En lenguaje jurídico el término “órgano” se emplea, no en el sentido anatómico sino en el funcional; y “órgano” en materia de lesiones, es el conjunto de tejidos o de órganos de menor importancia que actúan simultáneamente en el ejercicio de una función determinada. (Sup. Corte de Tucumán, julio 7/38. — *La Ley*, 11-662.)

1267. — Para la calificación del delito de lesiones, la incapacidad funcional de una mano, no puede considerarse pérdida del miembro ni del uso del miembro que es el brazo correspondiente, incluyendo la mano misma, aún cuando sea incuestionable que el empleo de ésta reviste la mayor importancia en el desenvolvimiento de las actividades humanas y la supresión de la función de “aprehensión” inherente, origina trastornos considerables al extre-



mo de reducir en casi su totalidad la del miembro. Hay así, debilitamiento permanente del miembro por pérdida de él o de su uso. (C. C. C., septiembre 13/38. — *La Ley*, 12-905.)

1268. — El debilitamiento permanente de la salud ha de tomarse como la amenaza constante de un desequilibrio orgánico; sin que deba confundirse debilitamiento con enfermedad. En aquel, no hay como en ésta, una crisis pasajera o mortal, sino un estado consecuente al daño que, sin alterar el funcionamiento del organismo, lo predispone permanentemente a la enfermedad o a la fatiga. (*Sup. Corte Tucumán*, julio 7/38. — *La Ley*, 11-662.)

1269. — La posibilidad de que el lesionado pueda substituir por otros artificiales los dientes perdidos, no tiene influencia para la calificación del delito de lesiones, porque la ley prescinde de que recupere sus condiciones, mediante recursos de prótesis dentaria, como en otras clases de lesiones, por una hábil operación quirúrgica. (C. C. C., diciembre 2/38. — *La Ley*, 24-295.)

1270. — La pérdida de un incisivo y un canino a consecuencia del golpe inferido, en una persona de 38 años de edad, a quien faltaban dos incisivos, acentúa la disminución que ya presentaba en su función masticatoria, hasta provocar un debilitamiento considerable del órgano de la masticación, que encuadra el hecho en las previsiones del art. 90 del C. P. (C. C. C., diciembre 2/38. — *La Ley*, 14-295.)

1271. — Si la víctima sufrió la fractura de los huesos de la nariz y una desviación del tabique con déficit funcional respiratorio de carácter permanente, ha de considerarse una lesión grave por debilitamiento permanente del órgano respiratorio y no un debilitamiento permanente de la salud. (*Sup. Corte Tucumán*, julio 7/38. — *La Ley*, 11-662.)

1272. — Conforme a la doctrina, fundada en las enseñanzas de la medicina legal, a los efectos de precisar el verdadero carácter de las lesiones, desde el punto de vista de los artículos 90 y 91 del C. P., ha de entenderse como enfermedad, una verdadera entidad patológica, con evolución bien definida y, por debilitamiento, la



disminución de la capacidad funcional una vez terminado el proceso patológico. (C. C. C., diciembre 2/38. — *La Ley*, 14-280.)

1273. — Los trastornos psíquicos derivados de la lesión sufrida por la víctima en la región ténporo-parietal, que los peritos describen: "disminución de la actividad mental y trastornos de la "memoria de fijación, con cierto grado de inestabilidad psicomotriz, fácil fatiga de la atención voluntaria, descenso en su capacidad crítica", apreciados en orden a las disposiciones de los artículos 90 y 91 del C. P., y desde que, según la propia manifestación del lesionado "actualmente no puede escribir como antes y debe dictar su trabajo" importa debilitamiento fundamental y debe encuadrarse en las previsiones del artículo 90 mencionado. (C. C. C., diciembre 2/38. — *La Ley*, 14-280.)

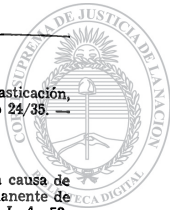
1274. — El debilitamiento de la memoria ocasionado por golpe en el cráneo, importa una debilitación y no una enfermedad mental. (C. C. C., diciembre 2/38. — *La Ley*, 14-280.)

1275. — El artículo 90 al especificar los casos en que debe calificarse de graves a las lesiones sufridas por la víctima, no se refiere al tiempo que demande su curación sino a la inutilización para el trabajo por más de un mes. (*Cám. Fed. La Plata*, junio 4/37. — *J. A.*, 58-772.)

1276. — Aunque la gravedad de las lesiones inferidas por el golpe de puño, pueda hacer pensar en exceso en la defensa, es indudable que el resultado ha excedido a las previsiones del acusado. (C. C. C., abril 6/36. — *J. A.*, 54-240.)

1277. — La lesión en un brazo, producida por un disparo de arma de fuego, que incapacitó para todo trabajo a la víctima durante cuarenta días y le ha originado una incapacidad parcial y permanente, encuadra en la calificación legal de lesiones que prevé el art. 90 del C. P. sin que el hecho de haberse usado arma de fuego, permitan encuadrarla también en el art. 104. (C. C. C., marzo 2/36. — *J. A.*, 57-826.)

1278. — La caída del incisivo medio superior derecho, no im-



porta la debilitación permanente del órgano de la masticación, en orden al art. 90 del C. P. (*Cám. Fed. La Plata*, junio 24/35. — *J. A.*, 51-63.)

1279. — La extracción del globo ocular practicada a causa de herida de bala inferida, comporta el debilitamiento permanente de un órgano o sentido. (*Cám. Apel. Azul*, agosto 6/35. — *J. A.*, 52-277.)

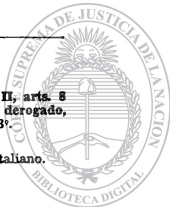
1280. — Debe calificarse de lesión grave la pérdida de cuatro dientes porque ello debilita en forma permanente el órgano de la masticación. (*C. C. C.*, diciembre 1/33. — *Fallos*, 2-109.)

1281. — La pérdida de un incisivo no importa la debilitación permanente del órgano de la masticación ni una deformación permanente del rostro. (*C. C. C.*, diciembre 21/28. — *Fallos*, 2-103.)

1282. — Para que exista el delito de lesiones especificado en el art. 90 del C. P. no es necesario que la inutilización para el trabajo sea absoluta. Basta que, en general, y dentro de los límites razonables, importe falta de aptitud para el libre movimiento o empleo del cuerpo con un fin económico. (*C. C. C.*, abril 20/26. — *Fallos*, 2-102.)

1283. — La pérdida de un ojo importa debilitación permanente y no pérdida del sentido de la vista. (*C. C. C.*, mayo 18/23. — *Fallos*, 2-100.)

ART. 91. — *Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.*



ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título II, arts. 8 y 9. — Proyecto 1891, art. 122. — Proyecto 1906, art. 9. — Código derogado, art. 119, incisos 1º, 2º y 3º. — Ley 4189, art. 17, Cap. 2º, inciso 3º.

FUENTE: Proyecto 1891 y ley 4189, inspirados en el Código Italiano.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-164. — ALFREDO J. MOLINARIO, *El Delito de Lesiones*, ps. 19 y sgts. y 91 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-449. — TOMÁS JOFRÉ, *Lesiones Graves*. (Apéndice de su obra "El Código Penal de 1922", p. 377.) — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-187. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 176. — DE ARLT, *Des blessures de l'oeil, considérés au point de vue pratique et médecin-légal*. Viena 1887. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-40. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 193.

JURISPRUDENCIA

1284. — Es lesión gravísima la que afecta la médula espinal con paresia sucesiva, lo que importa una enfermedad cierta o probablemente incurable. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 23/39. — *La Ley*, 18-922.)

1285. — La ley penal se refiere a los inutilizados para el trabajo, siendo de notar que ese término implica mayor gravedad que "incapacidad"; el incapaz, puede hacer algo útil, el inútil, nada. (*Sup. Tribunal de San Luis*, abril 21/38. — *La Ley*, 10-591.)

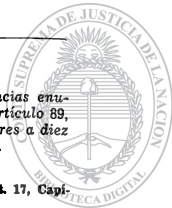
Pérdida de la capacidad de engendrar

1286. — Si las lesiones causadas a la víctima, han producido según el informe médico la incapacidad de engendrar, la extensión del daño debe considerarse teniendo en cuenta la edad de la víctima —29 años— que queda enfermo, con trastornos sensitivo-motores. (C. C. C., *Gaceta del Foro*, 69-36.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 129. — Se impondrá prisión de tres a diez años, si la lesión produjere alguna de las siguientes consecuencias:

- 1º Si determinare la incapacidad permanente de la víctima para dedicarse a sus ocupaciones habituales.
- 2º Si determinare una enfermedad cierta o probablemente incurable.
- 3º Si ocasionare la pérdida de un sentido, de un miembro o de la capacidad para una función;
- 4º Si produjere una deformación permanente del rostro.



ART. 92. — Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91 de tres a quince años.

ANTECEDENTES: Proyecto de 1891, art. 123. — Ley 4189, art. 17, Capítulo 2, inciso 4º. — Proyecto de 1906, art. 96.

FUENTE: Proyecto 1891, inspirado en el Código Italiano.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-166. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-49. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 194. — RODOLFO MORENO, *La Ley Penal Argentina*, p. 154. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 177.

JURISPRUDENCIA

1287. — Si el procesado después de exigir y obtener de la víctima la entrega del dinero que tenía en la caja de su negocio, apuntándole con un revólver le hace un disparo, causándole una herida, el hecho encuadra en el art. 92 del C. P. en función de los artículos 90 y 80 inciso 3º del mismo, conforme a la regla del artículo 54 de dicho código, toda vez que la lesión inferida, lo fué para procurarse —el autor del robo— la impunidad de su delito y no constituye un resultado ocasional o accidental del robo, como lo requiere el artículo 166, inciso 1º del código citado. (C. C., noviembre 8/38. — *La Ley*, 13-369.)

1288. — El acto de oprimir el cuello de la víctima con el pañuelo que ésta llevaba hasta dejarla semi-asfixiada, hecho cometido por el padre, en estado de ebriedad, en la persona del hijo, a raíz de un altercado, que cesó por la intervención de una tercera persona, constituye por sí solo el delito de lesiones previstos por los artículos 89 y 92 del C. P., pero no autoriza a concluir que se halla ejecutado con el propósito de darle muerte. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, septiembre 20/35. — *J. A.*, 52-271.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 130. — Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 116, el máximo de duración de la sanción establecida en los artículos anteriores se aumentará en la mitad. Si en los casos de los incisos 1º y 2º del artículo 116, se estableciere una menor peligrosidad en el agente, conforme a los artículos 18 y 19, no registrá la agravación estatuida en el presente artículo.



ART. 93. — Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1° letra a) del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.

ANTECEDENTES: Ley 4189, art. 17, Capítulo 2°, inciso 5°. — Proyecto 1906, art. 97.

FUENTE: El artículo citado del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-152 y sgts. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 154. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-51. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-148. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 177.

JURISPRUDENCIA

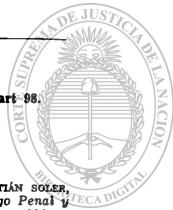
1289. — El artículo 93 del C. P. no considera los casos de lesiones calificadas por el vínculo de parentesco. (C. C. C., junio 18/35. — J. A., 53-231.)

1290. — El artículo 82, relativo al homicidio calificado por el vínculo de parentesco existente entre el autor y la víctima, no tiene correlativo, tratándose de lesiones. Las condiciones particulares en que una persona puede haberse encontrado al cometer uno de esos delitos, habrán de estimarse para determinar la sanción dentro de los límites establecidos por el artículo 92 de dicho código. (C. C. C., junio 18/35. — J. A., 53-231.)

ART. 94. — *Sufrirá la pena de doscientos a mil pesos de multa e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

ART. 131. — Si concurrieren las circunstancias previstas en los incisos 1° y 3° del artículo 117, se impondrá prisión de uno a seis meses, si la lesión fuera la prevista en el artículo 127; y siendo de las previstas en los artículos 128 y 129, se impondrá prisión por uno a tres años.



ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 124. — Proyecto 1906, art. 98.

FUENTE: El artículo 124, del Proyecto 1891.

BIBLIOGRAFIA

ALFREDO J. MOLINARIO, *El Delito de Lesiones*, p. 57. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Arg.*, 2-94 y 372. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-51. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 194. — GARRAUD R., *Traité théorique et pratique de droit penal français*, Paris 1902, 5-2. — E. SALOMÓN, *La faute civile et la faute penale dans l'homicide et les coupes et blessures par imprudence*, Paris 1918. — A. ANGEOLINI, *De los Delitos Culposos*, Barcelona 1905. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep Arg.* (3ª ed.), p. 181. — ALBERTO G. SPOTA, *La Responsabilidad presumida en materia de cuasi delitos*. (*La Ley*, 15 sec. rev. de rev., p. 2.) — TANCREDO GALIMBERTI, *La continuación en las contravenciones y en los delitos culposos*. (*La Scuola Positiva*. Milán, abril 1940, p. 70.) — ALFREDO DE MARSICO, *Culpa por inobservancia de las leyes y el delito aberrante*. (*Annali di Diritto e Procedura Penale*. Torino, abril 1940, p. 237.) — LORENZO CARNELLI, *Delitos Deportivos*. (*La Ley*, 4-699.) — LORENZO CARNELLI, *La responsabilidad sin culpa en el Derecho Penal*. (*La Ley*, 4-993.) — JEAN HEMARD, *El consentimiento de la víctima en el delito de lesiones*. (*Revue Critique de Legisl. et Jurisp.* Paris, mayo-junio 1939.)

JURISPRUDENCIA

1291. — En materia de causalidad, para declarar punible un hecho por culpa o imprudencia, es necesario que el autor haya podido prever el resultado del acto voluntario y que ese resultado sea previsible normalmente. (C. C. C., febrero 21/41. — *La Ley*, 22-40.)

1292. — En materia de delitos culposos, no se admite compensación de culpas. (C. C. C., octubre 8/40. — *La Ley*, 20-399.)

1293. — Procede la aplicación del artículo 94 del C. P. con referencia al conductor del camión culpable del choque que desvió de su ruta al ómnibus en que viajaban los pasajeros que resultaron lesionados al incrustarse el último vehículo contra un árbol, pues hay un nexo de causalidad ininterrumpido entre el choque inicial y el subsiguiente contra el árbol. (C. C. C., octubre 8/40. — *La Ley*, 20-399.)

1294. — En el supuesto del artículo 94, no procede la inhabili-

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 133. — Se impondrá multa de quinientos a dos mil pesos o inhabilitación especial, en su caso, por uno a cuatro años, al que causare lesiones por culpa.



tación especial si el autor del hecho conducía un vehículo de tracción a sangre, por no tratarse de una profesión que exija idoneidad o conocimientos técnicos especiales. (C. C. C., julio 30/40. — *La Ley*, 19-618.)

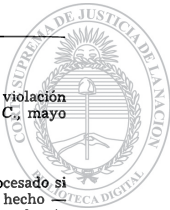
1295. — La sola circunstancia de que el procesado, al émbestir a la víctima, circulara en bicicleta por la vereda, es suficiente para encuadrar su responsabilidad en la disposición del artículo 94 del C. P. (C. C. C., junio 7/40. — *La Ley*, 18-1093.)

1296. — El sentido jurídico de “causa” es el mismo para todos los delitos, dolosos o culposos, cualquiera sea el bien jurídico tutelado, sin limitación a determinados artículos del C. Penal. (C. C. C., septiembre 26/39. — *La Ley*, 16-103.)

1297. — Cuando se produce un accidente de tránsito, se hace imprescindible determinar si el conductor violó alguna ordenanza sobre la materia y si esa transgresión fué la causa determinante del hecho que produjo lesiones a la víctima; si así fuese, debería condenarse al infractor porque su acción u omisión se encuentra prevista y penada por el artículo 94 del C. Penal, cuando se refiere a la inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. (C. C. C., marzo 12/40. — *La Ley*, 17-867.)

1298. — La culpa del chófer del ómnibus causante del accidente que motiva el proceso por lesiones (art. 94 C. P.) resulta de haber violado abiertamente la ordenanza 10.606 de la Municipalidad de la Capital, en cuanto establece que los conductores que deben cruzar una calle cederán el paso a los vehículos que aparezcan a su derecha y los que deben cruzar una avenida darán preferencia a los vehículos que la transiten. (C. C. C., marzo 12/40. — *La Ley*, 17-867.)

1299. — Cuando el conductor de un automóvil para evitar el choque con otro vehículo que se le cruzó en el camino, violando las ordenanzas de tránsito, y en forma normalmente imprevisible realiza una rápida maniobra a consecuencia de la cual y por hallarse la calle mojada por la lluvia, embistió a un peatón, causándole lesiones, la culpa que determina la existencia del delito



del artículo 94, del C. P., es imputable a quien, con la violación aludida lo determinó a realizar dicha maniobra. (C. C. C., mayo 19/39. — *La Ley*, 14-898.)

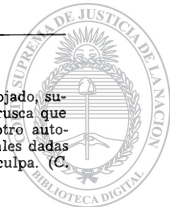
1300. — Corresponde sobreseer definitivamente al procesado si de la prueba no resulta que en caso de ser el autor del hecho — circunstancia por él negada— haya podido obrar con imprudencia que lo haga criminalmente responsable, puesto que según las declaraciones de los testigos, la velocidad que animaba al coche que conducía no era excesiva y el descenso de la víctima desde el tranvía se produjo de manera inopinada e imprevisible para el conductor del automóvil ya que en ese preciso instante acababa aquélla de descender. (C. C. C., sep. 19/39. — *La Ley*, 16-823.)

1301. — Es voluntaria, a los efectos de la aplicación del artículo 94 del C. P. la violación de la Ordenanza Municipal, que obliga a los conductores de vehículos a acatar las indicaciones de los agentes que dirigen el tránsito en los cruces de las calles, pues la lluvia, la obscuridad y el error de interpretación de la señal dada que invoca el procesado no puede excusarla. (C. C. C., mayo 19/39. — *La Ley*, 14-898.)

1302. — La inobservancia de los reglamentos de tráfico, derivada de conducir el automóvil casi sobre la línea demarcatoria de la doble mano y a una velocidad mayor que la permitida, no autoriza a responsabilizar por culpa o imprudencia al automovilista, desde el punto de vista penal, cuando la conducta temeraria de la víctima, ha sido causa del accidente. (C. C. C., mayo 9/39. — *La Ley*, 14-649.)

1303. — Para que la inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, produzca responsabilidad penal por culpa o imprudencia para el conductor de un automóvil que lesiona o mata a un tercero, es necesario que esa inobservancia o falta de cumplimiento de sus deberes, debidamente comprobada, tenga, no una equívoca relación causal con el evento, sino que ella sea su condición generadora, inmediata, principal y directa. (C. C. C., mayo 9/39. — *La Ley*, 14-649.)

1304. — El conductor del vehículo que arrolló a la víctima por



haber patinado las ruedas del mismo en el pavimento mojado, subiéndose a la vereda, a consecuencia de una maniobra brusca que se vió precisado a realizar para evitar el choque con otro automóvil que se cruzo en el camino, desobedeciendo las señales dadas por el agente que dirigía el tráfico, no ha incurrido en culpa. (C. C. C., mayo 19/39. — *La Ley*, 14-898.)

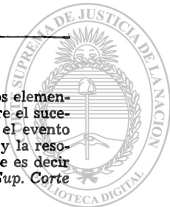
1035. — Para que el delito sea culposo, es preciso que no exista el propósito criminoso o dolo en la acción; debe estar exento de cualquier forma de dolo, sea para obtener un resultado propuesto, sea para producir un resultado no tenido en mira. (Cám. Fed. Bahía Blanca, mayo 31/39. — *La Ley*, 16-656.)

1306. — La violación de las Ordenanzas Municipales que rigen la circulación de los vehículos, determina para los infractores las consiguientes responsabilidades penales, en el caso de producirse lesiones en el cuerpo o en la salud de quienes crucen las calzadas, siendo incuestionable que esa violación implica para sus autores, en principio, haber obrado culposamente. (C. C. C., septiembre 30/38. — *La Ley*, 12-429.)

1307. — Comete delito por culpa o imprudencia, el conductor del automóvil que marchando de contramano embistió a un peatón que cruzaba la calzada sin advertir la proximidad de aquel, por estar atento a la circulación de vehículos en sentido opuesto que era la dirección regular y ordinaria del tráfico, que conocía por hallarse domiciliado en las proximidades. (C. C. C., septiembre 30/38. — *La Ley*, 12-429.)

1308. — El Código vigente, en punto a la calidad o grado de la intención (culpa o dolo) no ha señalado regla alguna de carácter subjetivo, ateniéndose exclusivamente a los aspectos materiales del caso, en cuanto revelen imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia del reglamento. (Sup. Corte de Bs. As., junio 3/38. — *La Ley*, 11-244.)

1309. — Los extremos del delito culposo son: una imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión, inobservancia de reglamentos o deberes y un evento letal o muerte que deriva de



aquel hecho, o sea una relación de causalidad entre ambos elementos extrínseco e intrínseco, vínculo de causa a efecto, entre el suceso contingente y la muerte, entre el hecho voluntario y el evento mortífero; contribución moral que requiere la intención y la resolución de hacer o no hacer la cosa que ocasionó la muerte es decir que el agente, quiso el hecho pero no su consecuencia. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 11-221.)

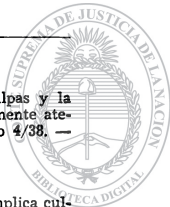
1310. — La lesión curable en ocho días, producida por el padre, al castigar con un cinturón de cuero a su hijo menor de siete años de edad con fines correctivos, debe calificarse como lesión causada excediéndose en el ejercicio de un derecho, encuadradas en lo dispuesto en los artículos 34, inciso 4° y 35 del Código Penal, en relación a los efectos de la pena, con el artículo 94 del mismo Código. (*C. C. C.*, junio 10/38. — *La Ley*, 10-1161.)

1311. — El artículo 94 del C. P. requiere que las lesiones sean consecuencia inmediata y directa de la acción culposa del agente; no basta que haya dado ocasión o puesto una condición en la producción del hecho, ni la consideración de que, procediendo de otro modo, a pesar de la conducta de la víctima, el daño no se habría producido o no tendría la importancia que tuvo. (*C. C. C.*, mayo 20/38. — *La Ley*, 10-881.)

1312. — No existe responsabilidad penal, si la víctima intentó cruzar corriendo la calzada, pasando por frente a un vehículo detenido y presentándose de improviso ante el conducido por el procesado, que aplicó los frenos, pero no pudo evitar golpearla, aún cuando este vehículo marchara a una velocidad mayor que la permitida. (*C. C. C.*, mayo 20/38. — *La Ley*, 10-882.)

1313. — El riesgo creado por el hecho de poner en movimiento un vehículo automotor, no basta —al menos en nuestra legislación positiva— para determinar consecuencias penales, mientras no se acredita que concurren imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. (*C. C. C.*, julio 19/38. — *La Ley*, 11-414.)

1314. — Aún apreciando la intervención del padre como imprudente o temeraria, no desaparece la responsabilidad del acusado,



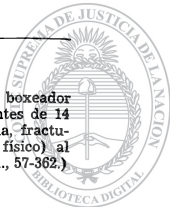
porque en materia penal, no hay compensación de culpas y la concurrencia de la ajena, no excluye la propia y únicamente atenua la responsabilidad. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 11-221.)

1315. — La no revisión médica de los púgiles, no implica culpa penal, si el procesado bien pudo creer que su contrario era apto para la lucha por haber realizado ya numerosas peleas en su categoría, lo que alejaba toda previsión normal hacia una consecuencia dañosa extraordinaria. (*Sup. Corte de Tucumán*, febrero 15/38. — *La Ley*, 10-813.)

1316. — Las violencias practicadas en un match "sportivo" escapan al C. P., a condición de que ellas no rebasen los límites autorizados por las reglas habituales del deporte y no degeneren en actos de salvajismo y brutalidad, porque el estado admite la legitimidad del fin perseguido por los participantes y su consentimiento recíproco interviene para aceptar desde ya las vías de hecho que el juego implica; de allí, que no es punible quien las infrinja dentro de los límites fijados para la regularidad de las competiciones mismas. (*Sup. Corte Tucumán*, febrero 15/38. — *La Ley*, 10-813.)

1317. — El daño producido por la quemadura del cabello con una máquina eléctrica de ondular, no reviste el carácter necesario para constituir el delito de lesiones ya que sólo se trata de un daño estético transitorio, sin otra consecuencia de carácter médico-legal, que no ha originado dolor físico ni perturbaciones en la salud. (*C. C. C.*, mayo 21/37. — *J. A.*, 58-610.)

1318. — Si bien el rabino no ha tenido la intención de producir con la circuncisión un daño en el cuerpo o en la salud del niño de tres meses y el acto en sí no lo constituía, la hemorragia subsiguiente y que provoca síntomas de anemia en el paciente, es una consecuencia directa y exclusiva del acto realizado por el rabino y configura el daño que requiere el artículo 89. Pero, descartada la intención de producirlo y no siendo posible tampoco afirmar que el rabino obrara sin la pericia y diligencia que el caso reclamaba (art. 94) corresponde su absolución. (*C. C. C.*, octubre 1/37. — *J. A.*, 60-243.)



1319. — No es responsable de lesiones culposas el boxeador que realizando práctica de entrenamiento calzando guantes de 14 onzas y sin transgredir disposición reglamentaria alguna, fractura una costilla a su contendor (de mayor peso y vigor físico) al aplicarle un golpe al cuerpo. (*Cám. Fed. La Plata*, — *J. A.*, 57-362.)

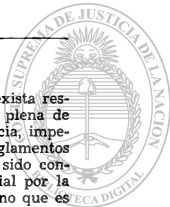
1320. — No procede aplicar la pena complementaria de inhabilitación especial, al autor de lesiones por imprudencia inferidas mediante el uso, para hacer una broma, de un revólver que el procesado creía descargado. La inhabilitación especial presupone que la imprudencia, negligencia o impericia causante de la lesión, lo sea en el arte o profesión del imprudente, negligente o inexperto, o por inobservancia de los reglamentos o incumplimientos de los deberes de su cargo, pues la única finalidad y sentido jurídico de esa sanción, es la prohibición temporal del ejercicio de ese arte, profesión o cargo. (*C. C. C.*, noviembre 19/37. — *J. A.*, 60-630.)

1321. — La culpa penal implica una falta de cuidado o diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del hecho propio. (*Sup. Corte de Tucumán*, noviembre 11/37. — *La Ley*, 9-207.)

1322. — La culpa es la no previsión del resultado previsible en el momento que tuvo lugar la manifestación de voluntad; siendo previsible el resultado, cuando el autor hubiera podido y debido preverlo. (*Sup. Corte Tucumán*, julio 2/36. — *La Ley*, 11-705.)

1323. — El temperamento nervioso y excitable de un automovilista, no es ni siquiera un atenuante de pena, porque no deben conducir automóviles las personas que no tienen sobre sus nervios el dominio necesario para gobernarlo y guiar la máquina, que es una fuerza sometida a su voluntad. (*Cám. Apel. de Dolores*, agosto 27/35. — *J. A.*, 53-454.)

1324. — Admitir que el temperamento nervioso y excitable de un automovilista sea un atenuante, importaría colocar al que no es idóneo, al que no tiene las aptitudes necesarias, en mejores condiciones que al que lo es. (*Cám. Apel. Dolores*, agosto 27/35. — *J. A.*, 53-454.)



1325. — El artículo 94 del C. P. requiere para que exista responsabilidad en el autor de la lesión, la comprobación plena de la relación de causalidad entre la imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión o inobservancias de los reglamentos y la consecuencia dañosa; no basta que el hecho haya sido condicionado por alguna de esas circunstancias y en especial por la inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo, sino que es indispensable que lo acaecido reconozca por causal originaria uno de los supuestos enumerados. (C. C. C., abril 17/36. — *J. A.*, 54-234.)

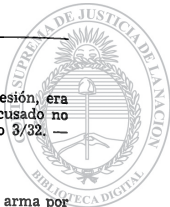
1326. — Si la marcha del vehículo a contramano no ha sido la causa del accidente, desde que se encuentra probado que la víctima, después de ascender a la vereda volvió de inmediato sin reparar en el tráfico, el hecho ha sido originado por su exclusiva imprudencia y no por la inobservancia de los reglamentos de tráfico por parte del conductor del vehículo. (C. C. C., abril 17/36. — *J. A.*, 54-243.)

1327. — Existe jurídicamente absoluta igualdad entre el concepto de lesión culposa de nuestra legislación penal y el antiguo concepto de delito o cuasi delito civil en razón de lesiones inferidas por culpa, imprudencia, impericia o negligencia. (*Cám. Apel. Civil y Minas de Mendoza*, agosto 22/35. — *La Ley*, 10-313.)

1328. — La prescripción de la pena principal de multa, comprende la complementaria de inhabilitación especial (art. 94 del C. P.) de la que es inseparable. (C. C. C., octubre 2/36. — *J. A.*, 56-302.)

1329. — Hay preterintención y no culpa en las lesiones que se producen al caer la víctima, golpeándose en el suelo, a causa de un empujón dado por el victimario que reñía con ella. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 7/34. — *J. A.*, 46-1174.)

1330. — En los casos del artículo 94 del C. P. la inhabilitación especial —cualquiera sea su término— se prescribe al mismo tiempo que la multa impuesta, con la cual forma una sanción integral. (C. C. C., julio 25/33. — *Fallos*, 2-248.)



1331. — Si la tintura para el cabello que causó la lesión, era un producto de venta en plaza y de uso corriente, el acusado no cometió delito al aplicarla a la víctima. (C. C. C., junio 3/32. — *Fallos*, 2-105.)

1332. — Es culposa y no dolosa la lesión inferida con arma por un ebrio consuetudinario que obró en estado de inconsciencia. (C. C. C., julio 4/24. — *Fallos*, 1-194.)

1333. — Está exenta de pena la persona que manejando un automóvil sufre un ataque de epilepsia que le hace perder el control del vehículo causándole lesiones a otra. (C. C. C., noviembre 6/23. — *Fallos*, 2-110.)

1334. — No procede la retención del registro del chófer procesado por lesiones por imprudencia. (C. C. C., febrero 19/24. — *Fallos*, 2-111.)

1335. — La justicia correccional es competente para el conocimiento de delitos reprimidos con penas de inhabilitación como complementarias, siempre que lo sean por razón de la pena principal. (C. C. C., agosto 8/22. — *Fallos*, 2-19.)

CAPITULO III

HOMICIDIO O LESIONES EN RIÑA

ART 95. — *Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Capítulo I, artículos 6, 7, 8 y 9. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 200. — Código



derogado, art. 121. — Ley 4189, art. 17, Capítulo 2º, inciso 6º. — Proyecto 1891, art. 125. — Proyecto 1906, art. 99.

FUENTE: El Proyecto 1906 (artículo 99.)

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-199. — SEBASTIAN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-162. — ALFREDO J. MOLINARIO, *El Delito de Lesiones*, p. 71. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-53 y 55. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 195. — JULIÁN AGUI-885, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 156. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-188 y 2-242. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 183.

JURISPRUDENCIA

1336. — Demostrado que el homicida es un tanto afecto al alcohol, de carácter alterable y que el día del suceso había bebido con exceso y debiendo admitirse que entre víctimas y victimarios —todos ebrios— se suscitaron discusiones, así como que la reacción de aquel fué rápida y determinada por un pánico indescriptible: si bien no cabe aceptar que haya obrado en legítima defensa, en la duda debe aceptarse la perturbación consecutiva a la emoción violenta y condenarlo a seis años de reclusión y demás accesorias por el triple homicidio de que fué autor. (*Corte Suprema*, agosto 12/36. — J. A., 55-374.)

1337. — La riña no es un simple altercado sino un cambio de hechos hostiles, una acción. Si solo una parte acciona sobre la otra, existe agresión y si el agredido reacciona y repele el ataque hay defensa. Para que exista riña, es preciso que los ataques sean mutuos y no pueda decirse que uno agredió y otro se limitó a repeler la agresión. (*Cám. Apel. 2º Turno de Corrientes*, noviembre 29/35. — J. A., 52-631.)

ART. 96. — Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de cuatro a ciento veinte días de prisión.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 119. — Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas resultare la muerte de alguna, sin que conste quien la ocasionó, se impondrá prisión por dos a seis años a todos los que ejercieron violencia sobre la víctima.



ANTECEDENTES: Ver los del artículo anterior.

FUENTE: El artículo 99, 2ª parte, del Proyecto 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-199. — SEBASTIAN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-378. — ALFREDO J. MOLINARIO, *El Delito de Lesiones*, p. 77. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-61. TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 197. — JULIAN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 191. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-242. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 183 y sgts.

JURISPRUDENCIA

1338. — La actitud agresiva que importa el haber rodeado entre tres al ofendido "sin darle tiempo a tomar medida alguna" confirmada por la relación de ella con la puñalada que se infiere de inmediato como consecuencia del propósito que inspiró en los tres ese acto de acometimiento, de rodeo, para conseguir la finalidad de herir, configura la violencia prevista por los artículos 95 y 96 del C. P., en cuanto tiene por autor del hecho a todos los que la ejercieron. (C. C. C., junio 27/39, *La Ley*, 16-555).

1339. — Las lesiones inferidas por dos personas a una tercera en un riña entre ellas, encuadran en los artículos 96 y 89 (lesiones simples) si no han puesto en peligro la vida del ofendido ni le han incapacitado por más de 30 días para el trabajo y cuando la lesión que le interesó el nervio facial ha evolucionado favorablemente, sin que se advierta la existencia de parálisis ni deformación de rostro, según la pericia ordenada para mejor proveer. (C. C. C., junio 10/38. — *J. A.*, 62-840).

1340. — Probado que las procesadas participaron en una riña de las que resultaron con lesiones leves algunas de ellas, corresponde aplicar a todas un mes de prisión en forma condicional. (C. C. C., abril 7/36. — *J. A.*, 54-241).

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 132. — Cuando en riña o agresión en la que tomaren parte más de dos personas resultaren lesiones de las determinadas en los artículos 128 y 129, sin que conste quien o quienes las causaron, se impondrá prisión de uno a cuatro años a todos los que ejercieron violencia sobre la víctima. Si la lesión fuera de las previstas en el artículo 127, la sanción será la de prisión de uno a seis meses.



CAPITULO IV

DUELO (1)

ART. 97. — Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

- 1° Con prisión de uno a seis meses, al que no infiriere lesión a su adversario, o sólo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89.
- 2° Con prisión de uno a cuatro años, al que causare la muerte de su adversario o le infiriere lesión de las determinadas en los artículos 90 y 91.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Título I, artículo 2°, Capítulo VII, Libro I, sección II. — Código derogado, art. 108. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 217 y 218. — Proyecto de 1906, art. 100.

FUENTE: Artículo 100 del Proyecto de 1906.

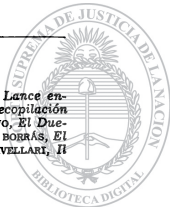
BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2 -204. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-330. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-63 y 101. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-53. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 198. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 177. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-189 243 y 2-327. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 186. — CÉSAR VIALE, *Jurisprudencia Caballeresca Ar-*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 136. — Se impondrá prisión por uno a seis meses o multa de quinientos a dos mil pesos, a los que se batieren en duelo con la intervención de padrinos que arreglen las condiciones del desafío, si no resultare lesión y, en caso de resultar, si ella fuere la prevista en el artículo 127.

(1) Hemos revisado prolijamente la jurisprudencia, sin encontrar un solo caso de duelo, ya que el que anotamos en el artículo siguiente se refiere al duelo irregular. Otro tanto ha ocurrido al Dr. Rodolfo Moreno, quien trae un interesantísimo estudio sobre el tema, en su obra "El Código Penal y sus antecedentes" (tomo 4, pág. 63). Carlos A. Escribano, autor de un estudio prolijo sobre el duelo (La Ley, t. 7, sec. doct., pág. 14), no ha tenido mejor suerte en la búsqueda de jurisprudencia. Por ello, podemos decir, que, desde que imperaron en nuestro país las leyes de Partidas, (P. VII, títulos 3 y 4) como posteriormente, bajo la Pragmática de Felipe II sobre duelos, seguida por la Pragmática de Fernando IV (1757), no se encuentra un solo caso de condena por tal causa. Tampoco hay memoria de castigo alguno por este delito durante los primeros años de vida independiente a pesar de que el 11 de marzo de 1812 se dictó un bando penando el juego, la portación de armas y el duelo; el 4 de julio de 1816 se dicta un decreto castigando el duelo —a propósito de uno que había tenido lugar entre comerciantes ingleses— y el 30 de diciembre de 1814 el Director Posadas, ante la sensación causada en la población por el duelo entre Mackenna y uno de los hermanos Carreras (personajes chilenos) dictó un bando castigando en adelante a los que se batieren y a sus padrinos, con la pena de muerte.



gentina de los últimos 35 años, Bs. Aires, 1937. — J. CABINANA, *Lance entre Caballeros*, Madrid 1900. — IÑIGUEZ, *Ofensas y Desafíos*, (recopilación de leyes que rigen en duelo), Madrid 1890. — CARLOS A. ESCRIBANO, *El Duelo en la Legislación Penal*, (La Ley, 7, sec. doct., p. 14.) — JOSÉ BORRÁS, *El duelo: Estudio histórico-crítico* (folleto) Madrid 1888. — G. CRIVELLARI, *Il duello nella dottrina é nella giurisprudenza*, Torino 1884.

ART. 98. — Los que se batieren, sin intervención de padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

- 1° El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida;
- 2° El que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones;
- 3° El que no causare lesiones, con prisión de un mes a un año.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Sección I, Capítulo VII, art. 5°. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 223. — Proyecto 1891, art. 126. — Proyecto de 1906, art. 101. — Código derogado, art. 109.

FUENTE: El artículo 101 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-234. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-104. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-53. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 198. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 178. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 186 y sgts.

JURISPRUDENCIA

1341. — El que, aceptando un desafío hiere de muerte a su adversario, comete un homicidio simple. (Cám. Apel. de Rosario, abril 24/26. — J. A., 19-1096.)

1342. — La aceptación del desafío por el acusado, no basta para hacer desaparecer la provocación de la víctima para el acto. (Fallo citado en nota.) — (J. A., 19-1096.)



1343. — En los casos de desafío irregular, no puede invocarse la legítima defensa, si se aceptó aquél. (Fallo citado en nota.) — J. A., 19-1096.)

ART. 99. — El que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo y el que desacreditare públicamente a otro por no desafiarse o por rehusar un desafío, serán reprimidos:

- 1º Con multa de doscientos a mil pesos, si el duelo no se realizare o si realizándose, no se produjere muerte ni lesiones o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 89;
- 2º Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en los artículos 90 y 91.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Sección I, Título I, Capítulo VII, art. 3º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 219 y 220. — Proyecto 1891, art. 127. — Proyecto 1906, art. 102. — Código derogado, artículo 110.

FUENTE: Los Proyectos de 1891 y 1906 (arts. citados).

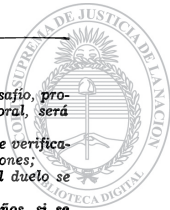
BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-204. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-189, 2-151, 168, 169, y 250. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-105. — TOMÁS JOFRÉ, *Código Penal de 1922*, p. 198. — JULIÁN AGUIRRE, *El Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 179. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-53. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3º ed.), p. 186 y sgts.

Ver la Bibliografía y nota del artículo 97.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 137. — Se impondrá prisión de uno a seis años, al que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo o le desacreditare públicamente por no desafiarse o por rehusar un desafío, si el duelo se realizare, ocasionando la muerte de uno de los combatientes o una lesión de las determinadas en los artículos 128 y 129. Si el duelo no se realizare, o, realizándose, se causare la lesión prevista en el artículo 127, se impondrá prisión de uno a tres años o multa de quinientos a tres mil pesos.



ART. 100. — *El que provocare o diere causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido:*

- 1° *Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verificare o si efectuándose, no resultare muerte ni lesiones;*
- 2° *Con reclusión o prisión de tres a diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones;*
- 3° *Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Sección I, Título I, Capítulo VII, art. 6°. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 224, inciso 1°. — Proyecto 1891, art. 128. — Proyecto 1906, art. 103. — Código derogado, artículo 111.

FUENTE: El artículo 103 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-204. — SDBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-296 y 2-151 y 169. RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-106. TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 200. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 180. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-53. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-134. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3° ed.), p. 186 y sigs.

(Ver Bibliografía y nota del artículo 97).

ART. 101. — *El combatiente que faltare, en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:*

- 1° *Con reclusión o prisión de tres a diez años, si causare lesiones a su adversario;*
- 2° *Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Sección I, Título I, Capítulo VII, art. 6°. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 224, inciso

PROYECTO COLI-GÓMEZ (1937)

Art. 138. — Se impondrá la sanción correspondiente al delito que resultare como consecuencia del duelo, al que lo provocó o dió causa para que se verificara, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral.

Si el duelo no se verificara o si, realizándose, no se causare la muerte ni lesiones, se impondrá prisión por uno a tres años.



2º. — Código derogado, art. 112. — Proyecto 1891, art. 129. — Proyecto de 1906, art. 104.

FUENTE: El artículo 104 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-204 y sigts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-296 y 2-151 y 169. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-107. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 200. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 180. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-53. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-134. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 186 y sigts.

ART. 102. — Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Sección I, Título I, Capítulo VII, artículo 4. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 221. — Proyecto 1891, art. 130. — Proyecto 1906, art. 105. — Código derogado, art. 116.

FUENTE: El art. 105 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-204. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-296 y 2-151 y 169. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-108. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 200. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 186 y sigts.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 39. — Se impondrá la sanción correspondiente al delito que resultare como consecuencia del duelo, al combatiente que infringiere, en daño de su adversario, las condiciones ajustadas por los padrinos. Se impondrá de uno a tres años de prisión, si no se causare la muerte, ni lesiones.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 140. — Se impondrá la sanción correspondiente al delito que resultare como consecuencia del duelo, al padrino que usare cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo. Si no resultare la muerte, ni lesiones, se lo impondrá prisión por uno a tres años.



ART. 103. — *Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos a mil pesos.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Sección I, Título I, Capítulo VII, art. 4º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 221. — Proyecto 1891, art. 131. — Proyecto 1906, art. 106. — Código derogado, art. 117.

FUENTE: El artículo 106 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-204 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-296 y 2-151 y 159. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-109. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 182. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 201. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-53. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 186 y sgts..

(Ver Bibliografía y nota del art. 97).

CAPITULO V

ABUSO DE ARMAS

ART. 104. — *Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin hierirla.*

Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponde pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Será reprimida con prisión de quince días a seis meses, la ayresión con toda arma, aunque no se causare herida.

ANTECEDENTES: Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 207. — Código derogado, art. 99. — Proyecto 1891, art. 132. — Proyecto 1906, art. 107. — Ley 4189, art. 17, Capítulo 2º, inciso 6º.

FUENTE: El primer párrafo fué tomado del P. del Dr. Moreno, inspirado en el P. de 1906. — El segundo párrafo fué redactado por la Comisión de Códigos del Senado.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 141. — Se impondrá prisión por una seis años, a los padrinos que concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales que de ellas hubiere de resultar la muerte, si, efectivamente, ocurriese. Si no ocurriese la muerte se impondrá a los padrinos que, en tales condiciones concertaron el duelo, multa de quinientos a dos mil pesos.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-236 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-159. — JIMENEZ DE ASUA, *El Nuevo Código Penal Argentino y los recientes proyectos complementarios, ante las modernas direcciones del derecho penal*. (Madrid 1928), p. 251 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-115. — TOMÁS JOFFÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 202. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 158. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-30, 107 y 2-246. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 189. — ALFREDO J. MOLINARIO, *El delito de abuso de armas*, (*Jurídicas y Sociales*, Bs. As., 1938, N° 2-72). — LORENZO CARNELLI, *El disparo de armas de fuego en la legislación argentina*. (*La Ley*, 15-874).

JURISPRUDENCIA

1344. — Los términos del artículo 104, al referirse a “toda arma” son comprensivos de cualquier objeto capaz de dañar la persona física. (*Cám. Apel. de Bahía Blanca*, febrero 27/40. — *La Ley*, 18-223.)

1345. — El hecho de arrojar un vaso de material duro y propio para golpear o herir, es constitutivo del delito del artículo 104 del C. P. (*Cám. Apel. Bahía Blanca*, febrero 27/40. — *La Ley*, 18-223.)

1346. — Mediando abuso de armas —delito de naturaleza intencional, y por lo tanto, imputable— y lesiones graves causadas a un tercero, debe aceptarse sólo la existencia de este último delito por ser única la intención y la acción. (*Cám. Fed. La Plata*, junio 23/39. — *La Ley*, 17-296.)

1347. — La calificación que corresponde, es la de abuso de armas, aunque por la intromisión de otras personas, se haya impedido que el proyectil hiriera a la persona contra quien iba dirigido, lesionando en cambio, levemente a un tercero. (*C. C. C.*, sep. 20/38. — *La Ley*, 12-33.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 134. — Se impondrá prisión de uno a tres años, al que dispare un arma de fuego contra una persona, sin hierirla, o causándole, sólo, la lesión prevista en el artículo 127.

Si concurriera alguna de las circunstancias del artículo 116, el máximo de la sanción se aumentará hasta seis años. Si concurriera la circunstancia del inciso 1º del artículo 117, la sanción será de seis meses a un año de prisión.



1348. — El delito de agresión con arma previsto por el artículo 104 del C. P. en su último apartado, requiere que haya acometimiento por parte de quien la esgrime. No basta la simple exhibición del arma. (C. C. C., julio 8/38. — *La Ley*, 11-337).

1349. — Corresponde calificar el delito como de abuso de armas, aun cuando el tiempo total de curación de las heridas causadas por disparo de revólver haya durado más de 30 días, si no se desprende que los lesionados hayan estado inutilizados por más de ese tiempo para el trabajo en general, que es evidentemente al que se refiere la ley, (*Sup. Tribunal de San Luis*, abril 21/38. — *La Ley*, 10-591).

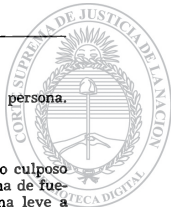
1350. — El artículo 54 del C. P. no funciona, ni debe referirse la calificación al artículo 89 del mismo, cuando se trata del supuesto expresamente previsto y resuelto por el artículo 104, segundo párrafo del código citado. (C. C. C., set. 20/38. — *La Ley*, 12-33).

1351. — Existe concurso del delito de lesiones con el de abuso de armas, regido por el artículo 54 del C. P., si el acusado agredió sorpresivamente de atrás a la víctima, abrazándola y descargándole acto continuo una serie de golpes con un cuchillo, causándole numerosas lesiones y al ser socorrida aquélla de inmediato por un vecino, (quien a pesar de que no cesara la agresión logró entrarla a su habitación), junto a cuya puerta el victimario continuó la agresión y efectuó contra ella dos disparos de arma de fuego, que no dieron en el blanco, después de lo cual intentó suicidarse. (C. C. C., dic. 30/38. — *La Ley*, 15-874).

1352. — No constituye delito de abuso de armas, el empleo de un arma de fuego sin dirigirla contra persona determinada de modo que ella no importe colocar al agredido en situación de peligro. (C. C. C., abril 22/32. — *J. A.*, 37-1519).

1353. — El delito a que se refiere el artículo 104 del C. P., atiende el peligro real corrido por la persona, y en defecto de toda otra intención que no sea la de disparar el arma. (C. C. C., junio 16/33. — *J. A.*, 42-892).

1354. — Los elementos del delito de disparo de arma de fuego,



son: el disparo intencional y su dirección contra una persona. (C. C. C., junio 16/33. — Fallos, 1-221).

1355. — Un acto doloso no puede engendrar un delito culposos y por lo tanto, el que al disparar intencionalmente un arma de fuego contra una persona, hiere accidentalmente y en forma leve a un tercero ajeno al hecho, no incurre en lesiones por culpa sino en abuso de arma. (C. C. C., mayo 6/32. — Fallos, 1-504).

1356. — La amenaza de muerte seguida de la exhibición de un arma de fuego, no constituye delito si no va acompañada de agresión caracterizada por el acometimiento. (C. C. C., mayo 21/26. — Fallos, 1-7).

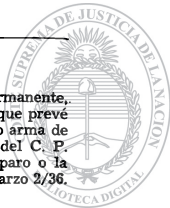
1357. — En el abuso de armas se contemplan todos aquellos casos en que no puede establecerse con firmeza la intención del que hace fuego. (Sup. Corte de Tuc., oct. 6/1931. — (Rec. Ord. Cuad., 7-106).

1358. — La agresión con un arma de fuego aunque no se efectúe disparo, constituye el delito de agresión "con toda arma" encuadrada en el artículo 104, tercer apartado del C. P. (C. C. C., julio 13/26. — Fallos, 1-39).

1359. — Si los disparos de arma de fuego lesionaron a dos personas y no está probado que ellos fueran dirigidos distintamente contra una y después contra la otra, no existe reiteración de delitos. (C. C. C., mayo 29/23. — Fallos, 2-341).

1360. — La agresión con arma a un agente, a causa del ejercicio anterior de sus funciones, que no importe exigirle la ejecución u omisión de un acto o una desobediencia, es desacato y agresión con arma, debiendo fijarse la pena con arreglo al artículo 54 del C. P. (C. C. C., marzo 13/23. — Fallos, 1-247).

1361. — La lesión en un brazo, producida por un disparo de arma de fuego, que incapacitó para todo trabajo a la víctima duran-



te 40 días y le ha originado una incapacidad parcial y permanente, encuadra únicamente en la calificación legal de lesiones que prevé el artículo 90 del C. P., sin que el hecho de haberse usado arma de fuego, permita encuadrarla también en el artículo 104 del C. P. El delito previsto por este artículo, requiere el solo disparo o la producción de una lesión leve con ese medio. (C. C. C., marzo 2/36. — J. A., 57-826).

ART. 105. — *Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 80 y 81, inciso 1º, letra a), la pena se aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 133. — Proyecto 1906, art. 108. — Ley 4189, art. 17, Capítulo 2º, inciso 6º.

FUENTE: El artículo 108 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-236 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-159. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-118. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 204. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-31, 311 y 2-246. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3ª ed.), p. 194.

CAPITULO VI

Abandono de personas

ART. 106. — *Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que abandonare a un menor de diez años u otra persona incapaz por causa de enfermedad, a quien deba mantener o cuidar.*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 135. — Se impondrá prisión de dos a seis meses, al que agrediere a una persona con cualquier clase de armas.

Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 116, el máximo de la sanción se elevará hasta un año. Si mediare la circunstancia prevista en el inciso 1º del artículo 117, se impondrá prisión de uno a tres meses.



La pena será de reclusión o prisión de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz.

La reclusión o prisión será de tres a diez años, si ocurriere la muerte.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título VI, Capítulo III, art. 1º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 305. — Proyecto, 1891, art. 134. — Proyecto 1906, art. 109. — Código derogado, arts. 162 y 163.

FUENTE: El artículo 109 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-248. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-296 y 2-107. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-123 y 127. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 195. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-58. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 231. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 205. — J. DELHEZ, *L'Abandon de famille en droit penal français*. (Paris 1931). — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-193. — LUIS GRANATA, *A propósito de la omisión del auxilio* (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, Turin 1939, p. 252). — JOSÉ GUARNERI, *El delito de omisión de socorro*, (*La Scuola Positiva*, Milán 1930, Nos. 1-2, p. 26).

JURISPRUDENCIA

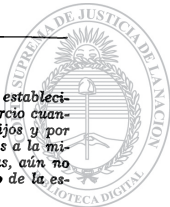
1362. — La falta de cuidado y asistencia a una persona mayor de edad enferma, no constituye el delito de abandono de personas. (C. C. C., oct. 10/24. — Fallos, 1-1).

1363. — La falta de cuidado y asistencia a la concubina, no importa cometer el delito de abandono de persona. Podría constituir tentativa de homicidio, si se hubieran omitido los cuidados con el deliberado propósito de causar la muerte, o delito de homicidio por culpa, si la muerte se hubiese producido por esa omisión, sin entrar en las previsiones del autor. (C. C. C., octubre 10/24. — J. A., 14-607).

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 142. — Se impondrá prisión de uno a tres años, al que abandonare a un menor de menos de doce años u otra persona incapaz por causa de enfermedad o ancianidad, a quien deba mantener o cuidar. Se impondrá prisión de tres o seis años si, a consecuencia del abandono, sobrevinieren lesiones de las previstas en los artículos 128 y 129, y reclusión o prisión, de seis a doce años, si sobreviniere la muerte.

Art. 143. — Se impondrá prisión de uno a tres años, al que prive a un menor de doce años o a un incapaz por causa de enfermedad o ancianidad, que tuviere a su cargo, de los alimentos o cuidados que necesite, al punto de comprometer su salud.



ART. 107. — *El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge. Serán disminuídos a la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días, aún no inscripto en el registro civil para salvar el honor propio o de la esposa, madre, hija o hermana.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 135. — Proyecto 1906, art. 110.

FUENTE: El artículo 110 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-252. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-296. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-130. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 205. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-58. — R. BALESTRINI, *Aborto, infanticidio ed sposizione di infanti*. Torino 1888. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 196.

1364. — El abandono de un niño de pocos días, hijo de la concubina del procesado, con el fin de que falleciera, debe considerarse como homicidio simple. (*Corte Suprema*, febrero 22/33. — J. A., 41-21).

1365. — El abandono que coloca al sujeto pasivo en una situación particularmente peligrosa con el objeto de dañarlo, debe apreciarse por sus consecuencias o por la intención. (*Corte Suprema*, febrero 22/33. — J. A., 41-20).

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 115. — El máximo de las sanciones establecidas en los artículos anteriores se aumentará en la mitad, si el delito fuere cometido por los ascendientes contra sus descendientes o por éstos contra aquéllos, o por el cónyuge.

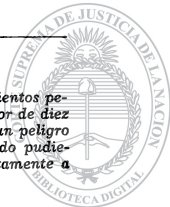
Art. 116. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, cuando el abandono o exposición fuere de un menor de tres días, si obediéiere al móvil de ocultar la deshonra de la esposa, madre, hija o hermana. Si sobreviniere la muerte del abandonado o lesiones de las previstas en los artículos 128 y 129, el máximo de la sanción se elevará a cuatro años.

Art. 147. — Se impondrá multa de cien a quinientos pesos al que entregare a otro un menor de menos de diez y ocho años para tenerlo bajo su guarda permanente y al que lo recibiere en ese concepto, sin poner el hecho en conocimiento de la autoridad.

Art. 118. — Se impondrá multa de cien a dos mil pesos, al padre, o madre, tutor o guardador que se sustraiga al cumplimiento de sus deberes de asistencia para con el menor de menos de diez y ocho años que se encuentre bajo su patria potestad, tutela o guarda.

La misma sanción se impondrá al curador que no prestare asistencia al incapaz; y al descendiente que no cumpliera la obligación de prestar alimentos a su ascendiente, aunque no mediare sentencia que lo condene a ello.

Art. 149. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al marido que, aun sin mediar sentencia que lo condene a ello, se sustraiga a sus deberes de asistencia a la mujer, si ésta se hallare en la indigencia o sin más recursos que los indispensables, provenientes de su trabajo personal.



ART. 108. — *Será reprimido con multa de cien a quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Parte II, Libro I, Título VI, Capítulo III, art. 5º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 309. — Proyecto 1891, art. 136. — Proyecto 1906, art. 111.

FUENTE: El artículo 136 del Proyecto de 1891, que seguía al Código Italiano (art. 389.)

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-254 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-291. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-131. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 206. o. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-58. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 198 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-194. — JOSÉ GUARNERI, *El delito de omisión de socorro*, (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, Turin 1939, p. 252). — LUIS GRANATA, *A propósito de la omisión del auxilio* (*La Scuola Positiva*, Milán 1930. Nos. 1 y 2. p. 26.

TITULO II

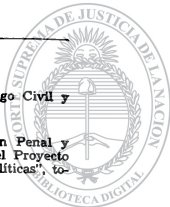
Delitos contra el honor

ART. 109. — *La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Parte I, Título VII, art. 7º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García art. 247. — Proyecto 1891, art. 137. — Proyecto 1906, art. 116. — Código derogado, arts. 177 y 178. — Ley 4189, art. 21, inciso "a".

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 144. — Se impondrá multa de cien a quinientos pesos, al que, encontrando perdido o desamparado a un menor de menos de doce años, o a una persona incapaz, desvalida o amenazada de un peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal; o cuando no solicitare el concurso de la autoridad o de otras personas.



CONCORDANCIAS: Art. 75 del C. P. — Art. 1090 del Código Civil y artículos 495 y 496 del Cód. de Proc. Crim.

FUENTE: Redactado por la Comisión Especial de Legislación Penal y Carcelaria de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta el Proyecto 1891 y el estudio del Dr. Rivarola en la "Rev. de Ciencias Políticas", tomo 3-484.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-263, 271, 311 y sgts. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-189 y 240. — RÓDOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-135 y 151 y sgts. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-63 y sgts. — RÓDOLFO RIVAROLA, *Exposición y Crítica del Código Penal*, 2-260. — JUAN P. RAMOS, *Los delitos contra el honor*, Bs. Aires, 1939. — JOSÉ PECO, *Delitos contra el honor*, Bs. Aires, 1936. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-74 y 2-247. — EUGENIO FLORIÁN, *Ingiuria e diffamazione. Sistema dei delitto contro l'onore secondo il codice penale Italiano*. Milán, 1939. J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, (Madrid 1888), 3-169. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 201. — RÓDOLFO RIVAROLA, *Delitos contra el honor*, (Revista Argentina de Ciencias Políticas, 3-484). — CARLOS J. ZAVALA RODRÍGUEZ, *Responsabilidad por acusación calumniosa*, (J. A., 43, sec. jurispr. extr., p. 12). — ROBERTO PECACH, *Responsabilidad civil por denuncias o querellas precipitadas o imprudentes*, (J. A., 65-110). — ALFREDO SANDALLI, *Calumnia impune* (Rivista Penale, Roma, 1939, fasc. XVIII). — MASSIMO PUNZO, *La Calumnia y el funcionario defacto*, (La Scuola Positiva, Milán mayo-junio 1939). — I. H., *La indemnización del daño moral en la acción civil de daños causados por los delitos de calumnia e injuria*, (La Ley, 11-1190). — LEONARDO A. COLOMBO, *Reparación del daño moral en los delitos de calumnias e injurias*, (La Ley, 21-875).

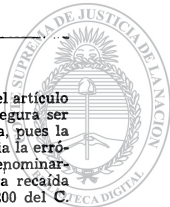
JURISPRUDENCIA

1366. — La imputación hecha a un general de la Nación de haber guardado "silencio culpable cuando se infligían a otros generales y jefes de nuestro ejército torturas y penas corporales infamantes", no configura el delito de calumnia, si no se expresa en la querella que, para el mismo, existiese obligación legal de denunciarlo a la autoridad correspondiente. (C. C. C., nov. 25/40. — La Ley, 20-981).

1367. — Si los hechos que dan motivo a la imputación que se reputa calumniosa, no contienen los elementos esenciales de ninguna figura delictiva, el atribuir los mismos calificándolos erróneamente como delito, no configura el de calumnia, puesto que aun falsamente atribuidos no serían capaces de mover la acción pública. (C. C. C., nov. 28/39. — La Ley, 18-3).

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 151. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, o multa de quinientos a dos mil pesos, al que imputare a otro, falsamente, haber cometido un delito que dé lugar a acción pública.



1368. — La imputación expresa del delito previsto en el artículo 168 del C. P., hecha en un escrito, que el querellante asegura ser falsa, basta para aceptar la substanciación de la querella, pues la jurisprudencia que ha declarado que no constituye calumnia la errónea calificación de un hecho, equivocando su alcance al denominarlo, ha sido sentada al conocer de la existencia definitiva recaída en la querella y en oportunidad de aplicar el artículo 200 del C. de Procedimientos Criminales. (C. C. C., set. 8/39. — *La Ley*, 15-1143).

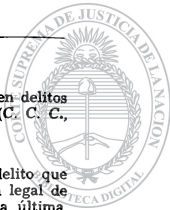
1369. — La imputación del delito de ejercicio ilegal de la medicina, en caso de haber sido falsa, revestiría el carácter de injuria y no de calumnia, por la que también se querella al funcionario público, que elevó el informe, desde que era concreta y se refería a un delito de acción pública y además se había dejado constancia en un solo acto, como es el informe aludido. (C. C. C., mayo 19/39. — *La Ley*, 14-808.)

1370. — El artículo periodístico que expresa que el querellante "tiene por costumbre la elaboración de vinos a base de química, en donde los ácidos, el metabisulfito, los derivados de la anilina, el yeso etc., son sus elementos indispensables en el laboratorio que posee" y agrega el calificativo de "envenenador público" al decir que recurre a un líquido nocivo y perjudicial para la salud pública, le atribuye actos que constituyen la figura delictiva del artículo 200 del C. P., y configura el delito de calumnia. (C. C. C., febrero 28/39. — *La Ley*, 13-666.)

1371. — El delito de calumnia es formal y su comisión surge únicamente de la violación de la ley. (*Sup. Corte de Tucumán*, mayo 23/39. — *La Ley*, 15-281.)

1372. — La denuncia de un hecho delictivo concreto no puede importar una injuria, sino una calumnia. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, junio 24/37. — *La Ley*, 9-683.)

1373. — Incurrir en el delito de calumnia el autor de la publicación periodística en la cual imputaba al querellante la comisión de una tentativa de asesinato y la colocación de un poderosa bomba



en un negocio, dado que los hechos imputados constituyen delitos de acción pública y el querellado no los ha probado. (C. C. C., octubre 14/36. — *J. A.*, 56-311.)

1374. — Reiteradas las falsas imputaciones de un delito que dé lugar a la acción pública, corresponde la calificación legal de calumnia, en concurso material de delitos, pudiendo la última, interrumpir la prescripción de la acción relativa a la anterior. C. C. C., junio 28/35. — *Fallos*, 1-106.)

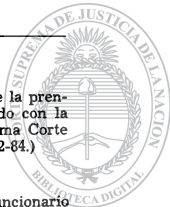
1375. — No procede la desestimación de la querella por calumnias si se funda la resolución en que no se ha demostrado el conocimiento de la falsedad del hecho por el querellado, desde que esa circunstancia debe acreditarse en el juicio. (C. C. C., dic. 13/33. — *Fallos*, 1-99.)

1376. — No incurre en el delito de calumnia el que al contestar un pliego de posiciones hace referencias a actividades delictuosas del querellante, manifestando conocerlas por dichos de un tercero, al que individualiza con precisión (C. C. C., dic. 22/33. — *Fallos*, 1-100.)

1377. — No procede desestimar una querella por calumnia vertida en un juicio, fundándose en que el escrito o acta original donde constaba el delito, fué testada íntegramente por el juez de la causa, tanto más, si la querella acompaña un testimonio de dicho escrito o acta expedido en forma legal. (C. C. C., feb. 10/33. — *Fallos*, 1-305.)

1378. — El medio empleado para difundir la calumnia —teléfono o telégrafo, carta, etc.—, no es atributivo de jurisdicción. (C. C. C., mayo 23/33. — *Fallos*, 2-89.)

1379. — Si la querella se deduce en base a cartas abiertas publicadas en un mismo diario en fechas diferentes y es evidente la relación de esas cartas desde que trata las mismas cuestiones, debe considerárselas integrando un solo todo y tratándose así de un hecho único, integrado por varios actos, formular una única calificación legal. (C. C. C., oct. 19/33. — *Fallos*, 1-104.)



1380. — El delito de calumnia cometido por medio de la prensa, es de competencia de la justicia ordinaria, de acuerdo con la jurisprudencia constante de este tribunal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (C. C. C., dic. 3/32. — *Fallos*, 2-84.)

1381. — La calumnia cometida en perjuicio de un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones, no puede implicar el delito de desacato. (C. C. C., julio 5/32. — *Fallos*, 1-97.)

1382. — La imputación ante la justicia de un hecho cierto, pero erróneamente calificado de delictuoso por el denunciante, no puede originar el delito de calumnia. (C. C. C., dic. 15/31. — *Fallos*, 1-95.)

1383. — No constituye calumnia imputar falsamente a un miembro de directorio de sociedad particular, haber cobrado comisiones en provecho personal, beneficiándose indebidamente con el cargo, pues este hecho no importa un delito de acción pública. (C. C. C., julio 4/30. — *Fallos*, 1-94.)

1384. — La falsa imputación de una falta —en el caso, infracción a la ley de juegos— no constituye calumnia por no ser la imputación de un delito. No existe calumnia en la imputación de un hecho indeterminado. (C. C. C., julio 16/26. — *Fallos*, 1-89.)

1385. — No procede fundar la desestimación de una querrella por calumnia, contra el Intendente Municipal en los artículos 71 y 72 de la ley 1260. Una ley no puede crear más inmunidades que las que contiene la Constitución Nacional. (C. C. C., junio 25/26. *Fallos*, 1-88.)

1386. — La falsa imputación de haber “coimeado” hecha contra un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones, constituye el delito de calumnia. (C. C. C., sept. 16/25. — *Fallos*, 1-86.)

1387. — Procede el rechazo de la querrella por calumnia cuando ella se funda en un juicio criminal que se está substanciado contra el querellante. (C. C. C., dic. 19/24. — *Fallos*, 1-84.)



1388. — Es procedente el pedido de la planilla de antecedentes del querrellado solicitada por el querellante en el juicio de calumnia. (C. C. C., junio 10/24. — *Fallos*, 1-44.)

1389. — No puede originar el delito de calumnia una acusación desestimada por el juez en virtud de no constituir delito los hechos que la motivaban. (C. C. C., sept. 9/24. — *Fallos*, 1-101.)

1390. — Formado el proceso por calumnias contra un diputado, y llamado autos, deben pasar las actuaciones a la Cámara de Diputados, a los efectos del artículo 62 de la Constitución Nacional. (C. C. C., julio 17/23. — *Fallos*, 1-317.)

1391. — La falsedad en anotaciones de libros de comercio, cuando ella únicamente contribuyó a imputar un delito a un tercero, sólo puede importar la cooperación en un delito de calumnia. (C. C. C., sept. 28/23. — *Fallos*, 1-413.)

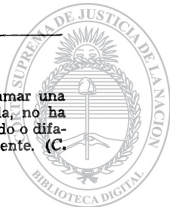
1392. — Una sociedad comercial no puede querellar por calumnias o injurias. Sólo sus miembros pueden hacerlo por sí o por mandatario, pues ellos son los particularmente ofendidos. (C. C. C., dic. 13/21. — *Fallos*, 1-81.)

ACUSACION CALUMNIOSA ANTE LA JUSTICIA ⁽¹⁾

1393. — Es indemnizable el daño moral emergente de delitos de calumnia e injuria (El doctor Fernández Valdez, vota en disidencia sosteniendo: no corresponde indemnizar el daño moral en tales delitos atento lo dispuesto por el artículo 1089 del C. Civil que no ha sido reformado por el artículo 29 del C. P.) (*Corte Suprema*, dic. 11/40. — *La Ley*, 21-875.) (*Doctrina de la Cámara Crim. y Correc. de Córdoba*.)

(1) Artículo 1089 del Código Civil: "Si el delito fuere de calumnia o injuria de cualquier especie, el ofendido solo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria si probare que por la calumnia o la injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación".

(1) Artículo 1090 del Código Civil: "Si el delito fuere de acusación calumniosa, el delincuente, además de la indemnización del artículo anterior, pagará al ofendido todo lo que hubiere gastado en su defensa y todas las ganancias que dejó de tener por motivo de la acusación calumniosa; sin perjuicio de las



1394. — El acusado, sólo podrá tener derecho a reclamar una indemnización, cuando la acusación criminal desestimada, no ha sido declarada calumniosa, si el acusado lo hubiese injuriado o difamado por otro medio que no fuere el del propio expediente. (C. Civil Segunda, Cap., dic. 17/40. — *La Ley*, 21-269).

1395. — Para que la acusación revista el carácter de calumniosa y pueda servir de base a una reclamación por daños y perjuicios, es necesario, en principio, que haya sido expresamente calificada en ese carácter por la justicia del crimen. (C. Civil 2da. Cap., dic. 17/40. — *La Ley*, 21-269.)

1396. — La falsedad de la imputación, no basta para que una acusación pueda considerarse calumniosa, ya se trate de querella, ya de simple denuncia; es necesario, además que el querellante o denunciante haya obrado sin razón ni fundamento alguno y con el pleno conocimiento de la inocencia del acusado. (Cám. Civil 2da. Cap., dic. 17/40. — *La Ley*, 21-269.)

1397. — Cuando el juicio criminal terminó con un sobreseimiento, es la jurisdicción civil la única que en tales circunstancias puede calificar el carácter calumnioso o no, de la acusación, teniendo en cuenta los elementos de juicio que resulten, tanto de la querella criminal como de la prueba rendida en el juicio civil. (Cám. Civil 2da. Cap., dic. 17/40. — *La Ley*, 21-269.)

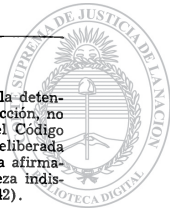
1398. — Si tratándose de acusación calumniosa, la ley establece que el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por la calumnia le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, con mayor razón debe procederse con criterio restrictivo y concreto, cuando sólo media cuasi delito. (Cám. Civil 1ra. Cap., nov. 20/40. — *La Ley*, 21-42.)

"multas o penas que el derecho criminal estableciere, tanto sobre el delito de éste artículo como sobre los demás de este capítulo".

(1) Artículo 495 del C. de Proc. Crim. (regla 4a. inciso 4o): "La calificación legal de los hechos probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los procesados, o las personas sujetas a ellas, a quienes se hubieren oído en la causa y la que corresponda a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas y a la declaración de QUERRELLA CALUMNIOSA".

(1) Art. 496 del C. de Proc. Crim.: "La sentencia resolverá igualmente: "...Inc. 3o, la calificación del carácter de la acusación, declarándola calumniosa, si "lo hubiere pedido el acusado".

(Puntos que debe el juez consignar en párrafos separados en la sentencia.)



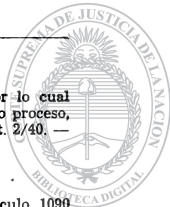
1399. — La denuncia ante la policía, que determinó la detención del actor y luego la intervención del juez de instrucción, no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 1090 del Código Civil, cuando no puede atribuirse al denunciante la deliberada y maliciosa intención de dañar al denunciado mediante la afirmación de una falsedad, sino de haber procedido con ligereza indisculpable. (*Cám. Civil 1ra. Cap.*, nov. 20/40. — *La Ley*, 21-42).

1400. — El denunciante no puede ser declarado civilmente responsable de la denuncia a la cual no se dió curso, cuando resulta que había tenido justificado motivo para sospechar de los procedimientos del denunciado —su agente viajero— y no se prueba que la denuncia fuere divulgada por aquél. (*Suprema Corte de Bs. Aires*, dic. 24/40. — *La Ley*, 21-647.)

1401. — El denunciante, si bien no cometió delito ni del derecho civil ni del derecho criminal al hacer la denuncia ante la policía —que determinó la detención del denunciado y la intervención del juez de instrucción— pues no hubo sobre el particular pronunciamiento alguno en la justicia del crimen, ha incurrido en cambio, en un acto ilícito, al proceder con ligereza indisculpable que acarrea la obligación de reparar el perjuicio consiguiente. (*Cám. Civil 1ra. de la Cap.*, nov. 20/40. — *La Ley*, 21-42.)

1402. — La publicación por algunos periódicos de la noticia sobre el pronunciamiento acerca del alcance del secreto del sumario dictada por la justicia criminal en la querella promovida imprudentemente, no puede responsabilizar al querellante, cuando esa publicidad ha sido evidentemente determinada sólo por el interés jurisprudencial de la decisión, que por lo mismo, no puede ser atribuida a empeño del citado querellante. (*Cám. Civil 2da. Cap.*, dic. 17/40. — *La Ley*, 21-269.)

1403. — La denuncia criminal de defraudación, no puede acarrear responsabilidad alguna de orden civil al comitente, cuando las constancias del proceso, demuestran que éste no ha obrado con malicia, ni con dolo, sino por lo contrario, que la actuación del comisionista dió fundados motivos para que tomase esa determinación. Tan es así, que el juez de la querella expresa en la sentencia, que, ante la situación de duda que los hechos le pro-



vocan, debe estar a lo más favorable al encausado, por lo cual dispone el sobreseimiento definitivo. Y además, en dicho proceso, se dictó la prisión preventiva. (Cám. Civil 1ra. Cap., sept. 2/40. — *La Ley*, 19-1058.)

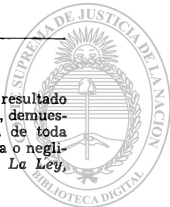
1404. — La responsabilidad sancionada por el artículo 1090 del código civil no supone indispensablemente la declaración del carácter de calumniosa de la acusación por parte de la justicia del crimen, ante la cual fué hecha. Esto es particularmente claro cuando en la causa criminal sólo ha habido sobreseimiento provisional o definitivo. (Cám. Civil 1ra. Cap., marzo 27/40. — *La Ley*, 18-14.)

1405. — Cuando no media pronunciamiento expreso de la justicia del crimen sobre calificación de la acusación, la justicia civil está en plena libertad para calificarla. (Cám. Civil 1ra. Cap., marzo 27/40. — *La Ley*, 18-14.)

1406. — Para que la acusación se califique de calumniosa, se requiere que haya sido hecha con la convicción o con la conciencia de que se imputaba la comisión de un delito inexistente y con el propósito de causar un daño a la acusada. (Cám. Civil 1ra. Cap., marzo 27/40. — *La Ley*, 18-14.)

1407. — Para que exista dolo en la denuncia de un delito, es preciso que medien las circunstancias conjuntas siguientes: 1º) que exista propósito deliberado de parte del denunciante, de perjudicar al denunciado; 2º) que el denunciante sepa que el hecho imputado en la denuncia, no es cierto. (Cám. Apel. Rosario, Sala III, mayo 17/40. — *La Ley*, 18-770.)

1408. — Conforme a la doctrina en que se inspiran los artículos 1067 última parte y 1071 del Código Civil, sólo se responde de la denuncia hecha a la ligera, sin verificación suficiente, temerariamente. Fuera de tales hipótesis, la denuncia constituye el ejercicio de un derecho. Se está en el campo de la cooperación permitida a los particulares para la represión del delito. (Cám. Apel. Rosario, Sala III, mayo 17/40. — *La Ley*, 18-771.)



1409. — La sola circunstancia de que no obstante el resultado del proceso, las costas no fueron impuestas al denunciante, demuestran que la denuncia no debe considerarse desprovista de toda razón legal y, por lo tanto, aquél no ha incurrido en culpa o negligencia. (*Cám. Ap. de Rosario, Sala III, mayo 17/40. — La Ley, 18-771.*)

1410. — No es indispensable la calificación previa de calumniosa de la denuncia, para el ejercicio de la acción civil por indemnización de los daños y perjuicios. (*Cám. Civil 1ra. de la Cap., agosto 1/38*). — *La Ley, 11-587. — Idem. julio 12/39. — La Ley, 14-1040 — Cám. Civil 2da. Cap., junio 30/39. — La Ley, 15-202.*)

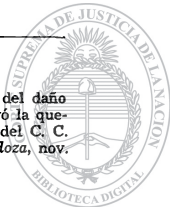
1411. — La declaración de calumniosa de la acusación en la jurisdicción criminal, a los efectos de que pueda ser admitida la acción civil de indemnización, no es requisito necesario en el caso de haber dictado sobreseimiento definitivo. (*Cám. Civil 2da. Cap., junio 30/39. — La Ley, 15-202.*)

1412. — A los efectos de la indemnización que el artículo 1090 del Código Civil acuerda por el delito de acusación calumniosa, se requiere que la denuncia o la querella hayan sido calificadas como tal por la justicia del crimen, cuando el juicio criminal ha terminado por sentencia, vale decir, cuando la causa ha sido llevada a plenario; pero en los casos de existir sólo un sobreseimiento definitivo, es la justicia civil la única que puede hacerlo. (*Cám. Civil 2da. Cap., sept. 28/39. — La Ley, 16-249.*)

1413. — No cabe la acción autorizada por el artículo 1090 del Código Civil cuando a raíz de la acusación misma se dictó sobreseimiento provisional. Pero ello no obsta a que la acción resarcitoria sea viable de conformidad con la disposición del artículo 1109 ⁽¹⁾ del C. Civil. (*Cám. Civil 1ra. Cap., sept. 7/38. — La Ley, 11-1190.*)

1414. — La absolución en el proceso por calumnia, no es obs-

(1) Art. 1109 del C. Civil: "Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del "derecho civil".



táculo al ejercicio de la acción civil por indemnización del daño causado por la denuncia criminal desestimada que motivó la querrela por calumnia, si se funda, no en el artículo 1090 del C. C. sino en el 1109 del Código Civil. (Cám. Apel. Civ. Mendoza, nov. 14/38. — *La Ley*, 12-1041.)

1415. — Cuando la querrela ha terminado por sobreseimiento definitivo, la calificación del carácter de la acusación a los efectos de la demanda de daños y perjuicios, puede ser hecha por la jurisdicción civil. (Cám. Civil 2da. Cap., abril 6/38. — *La Ley*, 10-161.)

1416. — Es dentro del juicio civil que corresponde determinar si la conducta del denunciante, es calumniosa, o acusa una ligereza indisculpable a los efectos de la acción civil por indemnización de los daños y perjuicios sufridos. (Cám. Civil 1ra. Cap., agosto 1/38. — *La Ley*, 11-587.)

1417. — La acusación criminal terminada por sobreseimiento provisional obliga a reparar los daños y perjuicios causados, cuando resulta de autos que los hechos en que se basa la denuncia si bien exactos, no han sido analizados cuidadosa y prudentemente por el denunciante y el derecho invocado tampoco ha sido examinado con prudencia. (Cám. Civil 1ra. Cap., junio 12/39. — *La Ley*, 14-1040.)

1418. — La demostración de que el denunciante ha obrado con evidente ligereza al fundar la denuncia del delito de tentativa de extorsión en la que recayó sobreseimiento definitivo con la declaración del art. 437 del C. de Proc. Criminal, basta para que prospere la acción civil por indemnización de daño sufrido por el denunciado. (Cám. Civil 1ra. de la Cap., agosto 1/38. — *La Ley*, 11-587.)

1419. — La ligereza o negligencia con que ha obrado el denunciante al formular la denuncia criminal desestimada, basta para determinar su obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados al denunciado. (Cám. Apel. Civil y Minas, Mendoza, nov. 14/38. — *La Ley*, 12-1041.)



1420. — La circunstancia de que la denuncia criminal se haya basado en hechos exactos, no obsta para admitir la responsabilidad civil del denunciante, si ha procedido con culpa o negligencia o con ligereza. (*Cám Civil 1ra. Cap.*, junio 12/39. — *La Ley*, 14-1040.)

1421. — La demanda de daños y perjuicios fundada en una querrela desestimada, no puede prosperar, si el autor que no sufrió prisión preventiva, no acredita la existencia de los perjuicios invocados y nada ha concretado o aportado a los autos que pudiera autorizar la indemnización en concepto de daño moral. (*Cám. Civil 2da. Cap.*, abril 6/38. — *La Ley*, 10-161.)

Procedimiento en los delitos de calumnia e injurias

1422. — Corresponde exclusivamente a los jueces de sentencia, el conocimiento de las querellas por calumnias. (*C. C. C.*, en *pleno*, noviembre 12/40. — *Rep. Jurid.*, 3-1145.)

1423. — El procedimiento especial estatuido en el Código de Pro. Crim. para los delitos de calumnia e injurias, excluye la instrucción del sumario y el sistema inquisitivo y secreto. (*C. C. C.*, nov. 28/39. — *La Ley*, 18-8.)

(1) Teniendo en cuenta la configuración de este delito que tiene una tramitación especial dentro del Código de Procedimientos Criminales, damos a continuación las disposiciones de forma respectivas. La síntesis doctrinaria de los fallos que se refieren a su modalidad especial dentro del procedimiento, se transcriben por igual razón:

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN LO CRIMINAL Procedimiento en los delitos de calumnia e injurias

Art. 591. — "No se dará curso a querrela alguna por calumnia o injuria sin convocar previamente al acusado y acusador a un comparendo de conciliación.

Art. 592. — "En caso de que el acusado no concurriese a la citación, se seguirá la causa por los trámites legales. Si no compareciere el querellante sin justa causa, "se le tendrá por desistido con costas".

Art. 593. — "Cuando la querrela se dedujese por injuria o calumnia, inferida "en juicio, deberá acompañarse un testimonio del escrito o acta en que se hubiere "vertido, expedido por orden del Juez que conociere de la causa".

Art. 594. — "La querrela por injuria o calumnia escrita o impresa es impropia "cedente si no se acompaña el instrumento que las contenga".

Art. 595. — "En cualquier estado del juicio en que el acusado ofreciera "tratación de una manera pública de la calumnia o injuria que ha dado lugar a "la acusación, se sobreseerá en la causa, debiendo satisfacerse por el mismo todas "las costas originadas".



1424. — En los juicios por calumnia e injurias es procedente la substanciación de excepciones en forma de artículo de previo y especial pronunciamiento, antes de realizarse el comparendo de conciliación. (*Decisión del tribunal en pleno, por unanimidad*). (C. C. C., dic. 31/37. — J. A., 60-1041.)

1425. — Los juicios por calumnias deben ser substanciados originariamente ante el juez de sentencia, con prescindencia de toda intervención de la justicia de instrucción. (C. C. C., junio 19/36. — J. A., 54-921.)

1426. — En la querella por calumnia es innecesaria la investigación sumarial para determinar la persona imputada, por cuanto debe ser designada en la presentación de la querella, para que pueda ser convocada al comparendo que ordena el artículo 591 del C. Proc. Crim. (C. C. C., junio 19/36. — J. A., 54-921.)

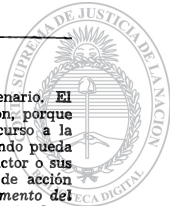
1427. — La substanciación del juicio por calumnias incumbe al juez de sentencia y es innecesaria la investigación que con criterio propio realiza el juez instructor, por cuanto el interés social no es primordial en este delito y nada impide a las partes aportar, con la libertad, garantía y amplitud reconocidos por la ley, la prueba que estimen útil a sus intereses en el juicio público y con el debido contralor. (C. C. C., junio 19/36. — J. A., 54-921.)

1428. — En la querella por calumnias, es innecesaria la investigación sumarial para establecer la responsabilidad penal, por cuanto el artículo 468 del Cód. Proc. Criminales, establece que, "en todos los casos incumbe a la acusación la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado" (C. C. C., junio 19/36. — J. A., 54-921.)

1429. — En los juicios por calumnias e injurias, las excepciones dilatorias pueden deducirse antes del comparendo de conciliación y deben substanciarse y resolverse en la forma dispuesta por el apartado 2° del artículo 456 del C. Proc. Criminales, pues

"El sobreseimiento en este caso no extingue la acción civil".

Art. 596. — "En las causas de calumnia o injuria no se decretará nunca la "detención o prisión preventiva del procesado, salvo el caso en que hubiere motivos fundados para presumir que trata de ausentarse del país".



en estos juicios, se aplican las reglas procesales del plenario. El artículo 591 del código citado, no obsta a esa resolución, porque la substanciación de las excepciones, no importa dar curso a la querella sino paralizarla a fin de evitar que el comparendo pueda celebrarse ante un juez incompetente o no teniendo el actor o sus representantes personería o careciendo el querellante de acción o mediando cosa juzgada, etc. (*Tribunal Pleno; Fundamento del voto del doctor Pessagno al que se adhirieron todos los miembros del tribunal*). (C. C. C., dic. 31/37. — J. A., 60-1041.)

1430. — En el juicio por calumnias procede la compulsa por peritos de los libros de comercio del querellante, pedida por el querellado, siempre que esa compulsa se refiera a puntos concretos que exclusivamente tiendan a acreditar la ejecución de los hechos imputados. (C. C. C., sept. 4/35. — *Fallos*, 2-129.)

1431. — Sólo comete delito de calumnia quien imputa a otro, falsamente la comisión de actos que, en sí, configuran un delito que da lugar a la acción pública. (C. C. C., oct. 19/33. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7, bis, - 10.)

1432. — El delito de calumnia es formal, por cuyo motivo no se requiere la prueba de que la especie afecte en mayor o menor grado el honor del imputado. C. C. C., julio 5/1933. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7, bis - 39.)

1433. — El delito de calumnia requiere la falsa imputación de un hecho que dé lugar a la acción pública. El carácter de la acción pertinente no depende de la calificación o mención de un artículo del Código que hagan las personas que imputaron el hecho, sino de la verdadera condición del mismo, como también debe la falsedad referirse a la materialidad y no a las denominaciones que se le dieran. (C. C. C., junio 30/1933. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7, bis - 2.)

1434. — El juicio especial por calumnia e injurias debe iniciarse directamente ante el juez de sentencia y no ante el de instrucción. (C. C. C., nov. 20/34. — *Fallos*, 1-397.)



con referencia a una cuestión de carácter exclusivamente universitario, no pueden ser consideradas como injuriosas por el otro antagonista. (C. C. C., nov. 13/39. — *La Ley*, 17-412.)

1475. — La rigurosa observancia de las normas impuestas por la cortesía, no es dable exigirla entre personas que no mantienen relaciones cordiales; de ello, pues no puede desprenderse el "animus injuriandi". (C. C. C., mayo 23/39. — *La Ley*, 14-810.)

1476. — No existe "animus injuriandi" cuando la querellada, como testigo de un sumario administrativo, se limitó a dar informes sobre un hecho de su conocimiento, que, por otra parte, concuerda en lo substancial con el dicho de la mayoría de los testigos del sumario. (C. C. C., mayo 23/39. — *La Ley*, 14-809.)

1477. — No existe injuria si los querellados, componentes de un cuadro de football, sólo se limitaron a denunciar ante las autoridades de la institución, que el querellante, socio de la misma, les ofreció una suma de dinero, para que contribuyeran a que el cuadro que ellos integraban perdiera un determinado "match", sin emplear en su denuncia lenguaje inmoderado ni darle una publicidad innecesaria. (C. C. C., marzo 7/39. — *La Ley*, 14-223.)

1478. — No hay injuria allí donde el propósito es la defensa de un interés legítimo cualquiera, privado o público; allí donde la persona o los intereses son tocados por necesidad, de paso, incidentalmente, secundariamente. (Cám. Civil 1ra. Cap., agosto 29/38. — *La Ley*, 12-233.)

1479. — La circunstancia de que quien actuó como jurado en el juicio sobre indemnización de daños por plagio, haya manifestado, dirigiendo su mirada al querellante que "esta acción es temeraria y es necesario del mismo modo que proteger la propiedad intelectual; perseguir la industria del plagio" no basta para tener por acreditado el dolo especial, que caracteriza la injuria. (C. C. C., marzo 18/38. — *La Ley*, 10-77.)

1480. — No importa delitos de injurias la apreciación o el



juicio vertido sobre la conducta de una persona o los procedimientos por ella utilizados, en relación con el interés público, cuando las observaciones se hacen de un modo impersonal, sin descender al agravio directo o a la torpeza de expresión. (*Cám. 2da. Apel. de Mercedes*, mayo 19/36. — *J. A.*, 55-335.)

1481. — No constituye injuria la imputación de profesar religiones o pertenecer a tendencias políticas cuyo ejercicio no prohíben las leyes del país. (*C. C. C.*, marzo 28/33. — *Fallos*, 2-33.)

PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE INJURIAS

(Ver artículos 591 a 596 del C. de Proc. Criminales)

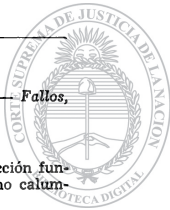
1482. — El querellado por injurias sólo puede comparecer al juicio personalmente o por medio de defensor letrado, no pudiendo, por lo tanto, hacerse representar por apoderado. (*C. C. C.*, feb. 25/35. — *Fallos*, 2-295.)

1483. — Corresponde a la justicia ordinaria de la Capital, el conocimiento de los delitos de injurias cometidos por medio de cartas cerradas, dirigidas a personas domiciliadas en la misma, desde lugares situados fuera de ella. (*C. C. C.*, *Tribunal en pleno*, diciembre 13/35. — *Fallos*, 2-478.)

1484. — Las declaraciones de los menores de 18 años que sólo pueden ser tomadas como simples indicaciones y al sólo objeto de la indagación sumaria, no son pertinentes en un juicio por delito de injuria en que no se instruye sumario. (*C. C. C.*, noviembre 15/33. — *Fallos*, 2-435.)

1485. — No puede obligarse al querellado por injurias a reconocer los documentos privados en que se funda la querella. (*C. C. C.*, feb. 26/32. — *Fallos*, 2-31.)

1486. — El juez no puede archivar las actuaciones (en querella por calumnia e injurias) en mérito a las explicaciones dadas por el acusado; ellas deben ser apreciadas en la sentencia, cuando lle-



que la oportunidad de dictarla. (C. C. C., marzo 4/26. — Fallos, 2-25.)

1487. — No procede la excepción de falta de jurisdicción fundada en que el delito que se acusa, no sería injuria, sino calumnia. (C. C. C., julio 18/24. — Fallos, 1-383.)

1488. — Incurre en el delito de injuria el testigo que, apartándose de la pregunta o agregando algo innecesario, se expresa en forma injuriosa para un tercero. (C. C. C., julio 19/29. — Fallos, 2-431.)

ART. 111. — *El acusado de injuria sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:*

- 1° *Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual;*
- 2° *Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal;*
- 3° *Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.*

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 139. — Proyecto 1916, art. 114.

FUENTE: El Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ *Tratado de Derecho Penal*, 2-387. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-171. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 212. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*. (Madrid 1888), 3-196. — O. GONZÁLEZ RÓURA, *Derecho Penal*, 3-63 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-75, 195. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Argentina*, p. 204.

PROYECTO COLL-GOMÈZ (1937)

Art. 154. — En los casos de injurias, sea la prevista en el artículo 150 o sea que ésta revista el carácter de difamación, no será admitida la prueba de la verdad de la imputación sino cuando ella haya tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual.



INCISO 1°

JURISPRUDENCIA

1489. — El interés a que se refiere el artículo 111, inciso 1° del C. P., es el de la sociedad política que forman los ciudadanos todos y no el interés particular de las personas o de un grupo de personas, derivado de relaciones privadas. (C. C. C., agosto 23/38. — *La Ley*, 11-994.)

1490. — La “exceptio veritatis”, no es admisible, salvo en los casos taxativamente determinados en el artículo 111 del C. P.; fuera de estos supuestos, sólo puede admitirse la prueba de la existencia o no, de la intención de deshonorar. (C. C. C., marzo 7/39. — *La Ley*, 15-223.)

1491. — El interés público que la ley protege en el inciso 1° del artículo 111 del C. P., es el que se refiere a la sociedad política de que forman parte todos los ciudadanos, no al simple interés de una sociedad particular, aunque tenga muchos socios. (C. C. C., abril 23/29. — *Fallos*, 2-28.)

1492. — Tratándose de justificar la falta de “animus injuriandi” puede el querellado hacer prueba en ese sentido. (C. C. C., sept. 21/23. — *Fallos*, 2-22.)

1493. — Si el acusado es escribano público y se le querella por haber imputado al escribano adscripto a su registro, hechos relativos a sus funciones, procede la admisión de la prueba ofrecida por aquél. (C. C. C., nov. 21/24. — *Fallos*, 2-23.)

INCISO 2°

1494. — La ley protege el honor y el decoro ajenos y es suficiente que éstos resulten vulnerados sin otro propósito que el “animus injuriandi”, para que el juzgador aprecie el delito, sin necesidad de saber si es cierta o es falsa la ausencia de moralidad que se imputa al agraviado. Diciendo la verdad, también se puede difamar. (C. C. C., abril 21/39. — *La Ley*, 14-509.)



1495. — No es admisible la prueba de la verdad ofrecida por el querellante si el hecho atribuido al ofendido dió lugar a un proceso terminado con sentencia condenatoria. (C. C. C., agosto 16/27. — Fallos, 2-26.)

INCISO 3º

1496. — Si el querellante no se opone a la prueba de la verdad de las imputaciones injuriosas, el querellado, para quedar exento de pena, debe probar que las palabras o medios empleados responden a móviles legítimos. Cuando el querellado —quien alega que sus imputaciones no estuvieron animadas por el dolo especial del delito de injurias, sino por el deseo de aportar la prueba de hechos exactos y útiles a la defensa de sus intereses en un juicio civil en el que el querellante no era parte —renunció expresamente en el proceso a producir prueba, y además perdió por negligencia el derecho a producirla en el juicio civil—, procede decidir que al imputar al querellante la comisión de delitos de acción privada, ha cometido el de injuria. (C. C. C., mayo 14/37. — J. A., 58-607.)

1497. — La prueba de los hechos en que se funda la acusación por injurias, es admisible en cuanto se refiere a las partes, pero no en lo referente a la vida privada de terceros ajenos al juicio. (C. C. C., sept. 24/26. — Fallos, 2-26.)

ART. 112. — *El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del minimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título VII, art. 9. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 249. — Proyecto 1891, art.

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 158. — No habrá lugar a la prosecución de la causa por los delitos previstos en los artículos anteriores:

- 2º Si tratándose de calumnias o injurias encubiertas o equívocas, el acusado diera explicaciones satisfactorias antes de contestar la querrela o en el momento de hacerlo.



140. — Proyecto 1906, art. 112. — Código derogado, art. 183.

FUENTE: El artículo 140 del Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-397 y 412. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-63 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-177. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 213. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, (Madrid 1888), 3-200. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3ª ed.), p. 205.

JURISPRUDENCIA

1498. — La imputación del delito público, vaga, imprecisa y sin perfecta claridad, configura la calumnia encubierta prevista por el art. 112 del C. P. (*Sup. Corte de Tucumán*, nov. 5/35. — *J. A.*, 53-532.)

1499. — Hay calumnia encubierta cuando se dice de un legislador que “se abraza con el enemigo y que éste le insinúa perspectivas de arreglo satisfactorio para sus bienes”; pues si no se afirma de una manera determinada que hubo tratos de aceptación por parte de aquél y en el sentido del delito de cohecho, se deja, en cambio, la sospecha de que así fuera. (*Sup. Corte de Tucumán*, nov. 5/35. — *J. A.*, 53-532.)

1500. — Si la persona está claramente sindicada en la publicación delictuosa, aunque se oculte su nombre y apellido, la calumnia o injuria es manifiesta y no encubierta o equívoca. (*C. C. C.*, mayo 14/26. — *Fallos*, 1-102.)

1501. — Las injurias proferidas contra funcionarios públicos a causa del ejercicio de sus funciones, si aluden a los que actuaban en los hechos motivo de la publicación incriminada, deben considerarse manifiestas y no equívocas o encubiertas y constituyen desacato (art. 244 del C. P.). Tales injurias vertidas en las publicaciones calumniosas, no importan un hecho independiente, sino que integran el de calumnia en concurso formal de delitos y aunque constituyen delito de acción pública, son regidas por el artículo 54 del C. P., no obstante el carácter especial del juicio de calumnia. (*C. C. C.*, junio 28/35. — *Fallos*, 1-106.)



ART. 113. — El que publicare o reproducere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.

ANTECEDENTES: Ley 4189, art. 21, inciso "d". — Proyecto 1891, art. 144. — Proyecto 1906, art. 113.

FUENTE: El artículo indicado, de la Ley 4189.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-380 y 398. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-183. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal de la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 204. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 213. — P. FABREGUETTES, *Traité des délits politiques et des infractions par la parole, l'écriture et la presse*. Paris 1901, GEORGES BARBIER, *Code expliqué de la presse. Délits de publications*. Paris 1887. — EDUARDO L. BIDAÚ, *Los delitos de imprenta*, (Conferencias) Bs. As., 1886. — OSVALDO M. PIÑERO, *Delitos de imprenta*. Bs. Aires 1889. — GIAN PIERO BORELLI, *La responsabilidad en los delitos cometidos por medio de la imprenta* (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, Turin, mayo 1939, p. 388). — J. IRURETA GOYENA, *Sanción de los delitos de difamación e injuria cometidos por medio de la prensa*, (*Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, Montevideo, oct. 1937, p. 102). — JUAN P. RAMOS, *Los delitos contra el honor*, Bs. As. 1939.

(Ver además la del artículo siguiente y la del artículo 244.)

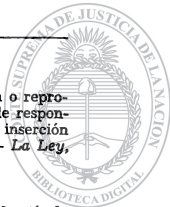
JURISPRUDENCIA

1502. — Corresponde declarar nulo todo lo actuado en la querrela por injurias que se dicen cometidas en un folleto que la querellante había publicado, leído a personas de su amistad y presentado en forma de escrito ante otro juez, si se ha dado curso a la querrela mediante los llamados testimonios de dicho libelo, que no aparecen autenticados. (C. C. C., agosto 2/40. — *La Ley*, 19-681.)

1503. — La condición de director, que el imputado reviste, del órgano periodístico en el que se insertaron las publicaciones incriminadas, basta para establecer su responsabilidad penal, sin que obste a ello las excusas invocadas de haberse ausentado de la capital y haber sido sorprendido por dichas publicaciones, no habiéndolas autorizado, si no existe prueba de que no revistiera la calidad expresada, en tal oportunidad. (C. C. C., feb. 28/39. — *La Ley*, 13-666.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 153. — Se impondrán las sanciones establecidas en los artículos 150 y 151 al que, por cualquier medio, difundiere la injuria o calumnia inferida por otro.



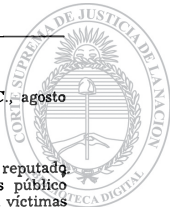
1504. — El director del periódico en que se publican o reproducen las injurias inferidas por otro, no queda exento de responsabilidad penal por el hecho de que no haya conocido la inserción de las injurias en ese periódico. (C. C. C., dic. 27/38. — *La Ley*, 17-752.)

1505. — El director del periódico en que se publicó el artículo injurioso escrito por otro, no es de las personas a que se refiere el artículo 49 del C. P., que tiene en cuenta a las personas que prestan su cooperación material necesaria para la publicación como linotipistas, cajistas, impresores, etc. (C. C. C., dic. 27/38. — *La Ley*, 17-752.)

1506. — Si bien basta la reproducción de imputaciones calumniosas hechas por otro, para que quien las reproduzca sea responsable como si fuera el autor, tratándose de una información de carácter periodístico, ella debe aparecer animada del dolo especial que para su existencia requieren los delitos contra el honor. Ese dolo especial, no surge de la publicación en un diario con títulos destacados de un escrito en el que se formulan cargos contra un magistrado, máxime si en la misma página se insertan otras noticias al respecto lo que evidencia que se ha perseguido sólo un fin de información. (C. C. C., abril 9/37. — *J. A.*, 58-267.)

1507. — No configura el delito de calumnia del artículo 113 del C. P., la reproducción en un artículo de un diario, con fines de información periodística de actualidad, de párrafos de una nota en la cual se formulaban cargos contra un magistrado, si esa reproducción no aparece animada del dolo especial que se requiere para configurar la calumnia, pues el artículo 113 sólo supone y reprime una forma particular de la realización de ese delito. (C. C. C., dic. 14/37. — *J. A.*, 60-1023.)

1508. — Prueban que el querellado por las publicaciones injuriosas era director del diario y no solamente director político: la carta por él dirigida al empresario de un teatro haciéndole saber la próxima aparición del periódico, el nombre de la persona que desempeñaría la jefatura de la sección teatral y pidiéndole el envío de programas y precios de las localidades; la que ha dirigido a un ferrocarril, el administrador del diario, solicitando un pasaje y mencionando al querellado como director del diario; y



el testimonio corroborante de varias personas. (C. C. C., agosto 21/36. — J. A., 55-617.)

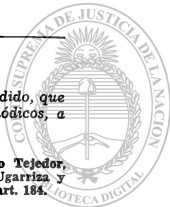
1509. — No es aceptable que el artículo periodístico reputado injurioso haya sido publicado para defender el interés público actual de substraer a los jubilados de la usura de que son víctimas al descontar sus haberes por el atraso en el pago, si de él surge que se ha perseguido el propósito de combatir la candidatura del querellante para representar a los jubilados y pensionistas, negándole honestidad en la vida pública y en la privada por haberse atribuido falsamente la paternidad de una reforma de la ley de jubilaciones sin mencionar el interés de los jubilados ante la usura; aparte de que, para la existencia de un interés público es necesario que se trate del interés de la sociedad política formada por todos los habitantes. (C. C. C., agosto 21/36. — J. A., 55-619.)

1510. — La ausencia temporal del editor responsable, podrá tener las consecuencias señaladas en la ley de imprenta, pero no lo hace responsable del delito de desacato que se cometa, ya que el código penal no menciona en el artículo 113 al director ni al propietario del diario sino simplemente al autor del hecho conceptualizado desacato. (Cám. Fed. de Rosario, nov. 14/35. — J. A., 53-590.)

1511. — El hecho de que un artículo calumnioso haya sido escrito por un tercero, no exime de responsabilidad al director del periódico que publica el suelto incriminado. (C. C. C., dic. 18/28. — Fallos, 1-93.)

1512. — Aunque se pruebe que fué un tercero el autor del suelto incriminado, es responsable el director de la publicación. (C. C. C., dic. 21/28. — Fallos, 2-28.)

ART. 114. — Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente



código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

ANTECEDENTES: Constitución Nacional, art. 32. — Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título VII, art. 10. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 250. — Proyecto 1891, art. 142. — Código derogado, art. 184.

FUENTE: Proyecto del Dr. Moreno, inspirado en el Proyecto Tejedor.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GOMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-399. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-169. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-184. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 214. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 204. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 2-220 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-197 y 2-339. — CARLOS ENRIQUE ZÁRATE, *Ley de imprenta - doctrina y jurisprudencia nacional*, (La Ley, 9-sec. bibl., p. 14). — SALVATORE DE CICCIO, *Sobre competencia por territorio en el delito de difamación por medio de la imprenta*, (Il Foro Italiano, Roma 1938, 2ª parte, p. 323). — LORENZO CARNELLI, *Responsabilidad por delito de imprenta en el código uruguayo de instrucción criminal*, (La Ley, sec. jur. extr. p. 22). — LORENZO CARNELLI, *El delito de imprenta como infracción autónoma*, (La Ley 3, sec. doct 228). — J. IRURETA GOYENA, *Sanción de los delitos de difamación e injuria cometidos por medio de la prensa*, (Rev. de Derecho, Jurisp. y Adm., Montevideo, oct. 1937, p. 102).

(Ver discusión del proyecto de ley de imprenta presentado por el senador Sánchez Sorondo en "Diario de Sesiones de la C. de Senadores de la Nación", Año 1934, págs. 1052 y sgts.).

JURISPRUDENCIA

El Código Penal ante la facultad de las provincias de legislar sobre delitos de imprenta.

1513. — La ley de imprenta de Córdoba no exime de responsabilidad al director de la publicación en que aparece el artículo incriminado, en caso de presentación del autor del mismo, cuando se trata de los delitos de calumnia e injurias cometidos contra particulares. (*Doctrina de la Cámara Crim. y Correcc. de Córdoba*. — Corte Suprema, dic. 11/40. — La Ley, 21-871.)

1514. — La represión de los delitos cometidos por medio de la prensa está reservada en las provincias a sus propias legislaturas

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 156. — Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital de la República y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código.



y en la capital y Territorios Nacionales al Congreso. — (*Corte Suprema, Fallos*, 155-57. — *Parry V.*, 20-687).

1515. — El artículo 32 de la Constitución Nacional, al disponer que no se dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta, no ha querido amparar la impunidad de los delitos cometidos por medio de la prensa, sino reservar su represión, en las provincias, a sus propias legislaturas y al Congreso en la Capital Federal y Territorios Nacionales. (*Corte Suprema*, diciembre 27/37. — *La Ley*, 9-313.)

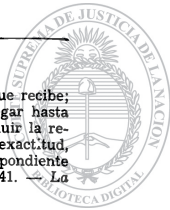
1516. — La prohibición de legislar sobre imprenta, se refiere puramente a los hechos o delitos comprendidos dentro del fuero ordinario o común de cada provincia, respecto de los cuales el Congreso no podría hacerlos —siendo éste el sentido de la frase “jurisdicción federal” usada por el art. 32 de la Constitución— sin comprender, empero, los delitos cometidos por medio de la prensa, en violación de leyes nacionales que tienden a asegurar, contra la violencia, la existencia del poder central y el ejercicio de sus poderes constitucionales. La competencia, en estos casos, debe declararse en favor de la justicia federal. (*Corte Suprema*, diciembre 27/37. — *La Ley*, 9-269. — *Idem*, diciembre 6/35. — *J. A.*, 52-673.)

1517. — La acusación por delito de desacato a los magistrados judiciales, que aparece cometido por medio de la prensa, y no está previsto en la ley provincial número 984, no puede juzgarse y debe sobreseerse al imputado. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, julio 27/37. — *La Ley*, 9-1004.)

1518. — Las leyes locales, dictadas por las legislaturas provinciales o por el Congreso para la Capital y Territorios Nacionales, son las que deben reglamentar el ejercicio de la libertad de imprenta, determinando las sanciones con que se reprimirán sus abusos y los tribunales competentes para aplicarlas. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, julio 27/37. — *La Ley*, 9-1004.)

Artículo 114 in fine.

1519. — No puede desconocerse el derecho que asiste a todo



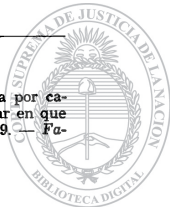
periódico para publicar y comentar las informaciones que recibe; pero este derecho de información general, no puede llegar hasta la publicación de noticias susceptibles de rozar o disminuir la reputación de las personas, si luego de comprobada la inexactitud, la dirección del diario se niega a dar cabida a la correspondiente rectificación. (C. Civil Segunda de la Cap., marzo 31/41. — *La Ley*, 22-292.)

1520. — Es facultad de los periódicos aceptar o negar la rectificación de noticias e informaciones infundadas aparecidas en los mismos, pero en este último supuesto, contraen la obligación de reparar los perjuicios sufridos por terceros en razón de la negativa y de la lesión injusta que causan de este modo a los derechos ajenos. (C. Civil Segunda de la Cap., marzo 31/41. — *La Ley*, 22-292.)

1521. — Si bien es cierto que la prensa, por sus propios fines, que en la actualidad son en gran parte de interés general, tiene una misión fiscalizadora, amparada por una presunción "juris tantum" de buena fe y de sana intención, no lo es menos que esa actividad tiene límites en las normas que reprimen la difamación; es decir, la prensa no goza de ninguna impunidad por sus publicaciones, cuando éstas lesionan la moral pública o la reputación privada. (C. C. C., abril 21/39. — *La Ley*, 14-510.)

1522. — Comete el delito de injurias el autor de las publicaciones periodísticas en las que imputaba al querellante "actitudes desleales", "traiciones" a otros comerciantes del gremio y la pretensión de querer reducir a sus colegas empleando huelguistas, dado que con dichas imputaciones, se desacreditaba deliberadamente al querellante, estando manifiesto, por consiguiente, el ánimo de injuriar. (C. C. C., octubre 14/36. — *J. A.*, 56-311.)

1523. — La publicación de la sentencia condenatoria por calumnia o injurias, vertidas en publicación periodística o la satisfacción dada por el querellado al retractarse, debe ordenarse en el mismo periódico con el mismo tipo de letra y en la misma página en que aquéllas fueron vertidas. Si el querellado, por causas ajenas a su voluntad, no puede cumplir esa disposición, no procede ordenarle que publique por su cuenta la sentencia o retractación en otro periódico. (C. C. C., junio 4/35. — *Fallos*, 2-363.)



1524. — La publicación de la sentencia condenatoria por calumnia o injurias debe hacerse en el mismo diario y lugar en que se hizo la imputación delictuosa. (C. C. C., junio 5/29. — Fallos, 1-107.)

ART. 115. — *Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 143. — Proyecto 1906, art. 119. — Ley 4189, art. 21, inciso "e".

FUENTE: El Proyecto de 1917, inspirado en el Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal* 2-383. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-169. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-193. — TOMÁS JOFRÉ, *Código Penal de 1922*, p. 220. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 204 y sgts.

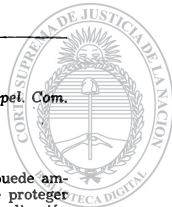
JURISPRUDENCIA

1525. — La íntima conexión entre las calumnias y las injurias vertidas en un solo escrito, deben contemplarse de acuerdo a las reglas establecidas para los casos de concurso ideal de delitos. (*Cámara Apelación Com. y Crim. de Mendoza*, agosto 7/40. — *La Ley*, 19-609.)

1526. — Cuando las ofensas, vertidas en un escrito judicial, se refieren a un tercero —aunque lo llamemos auxiliar de la justicia— además de las correcciones disciplinarias que puede aplicar el juez al injuriante, queda al injuriado el derecho de promover la

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 159. — No constituyen delito las injurias proferidas en juicio por los litigantes en sus escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales, si no se dieron a la publicidad.



acción y hacer aplicar las disposiciones legales. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, agosto 7/40. — *La Ley*, 19-610.)

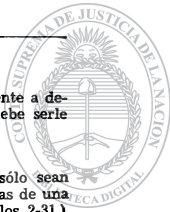
1527. — El propósito de defender o defenderse, no puede ampliar el derecho de injuriar a terceros. La necesidad de proteger la libertad de defensa (art. 115 C. P.), requiere para su aplicación que se refiera a las partes en litigio y exista entre lo dicho y el proceso, una relación directa con la materia que se debate. (*Cámara Apel. Com. y Crim. Mendoza*, agosto 7/40. — *La Ley*, 19-609.)

1528. — El artículo 115 del C. P., sólo se refiere a las injurias vertidas por los litigantes ante los tribunales en sus escritos e informes, que se infieren los unos a los otros ante el magistrado. (*C. C. C.*, set. 10/37. — *La Ley*, 9-643.)

1529. — Si el querellante no reviste la calidad de parte en el juicio civil, no es de aplicación el artículo 115 del C. P., según el cual las injurias proferidas en juicio quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. (*C. C. C.*, mayo 14/37. — *J. A.*, 58-607.)

1530. — El artículo 115 del C. P., al establecer que ciertas injurias quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes, se refiere a las proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en sus escritos o informes, pero no a las calumnias en que se incurriese en igual forma. Por lo tanto, corresponde dar curso a la querella si ésta se funda también en haberse atribuido al querellante el delito de falso testimonio. (*C. C. C.*, julio 21/37. — *J. A.*, 59-298.)

1531. — No es aplicable el artículo 115 del C. P., que corrige disciplinariamente las injurias vertidas en juicio, cuando ellas van dirigidas contra un magistrado a causa del ejercicio de sus funciones, pues tal hecho no importa el delito de injurias sino el de desacato que está sometido a otros principios. (*C. C. C.*, octubre 3/33. — *Fallos*, 1-154.)



1532. — La prueba ofrecida por el querellado, tendiente a demostrar que sólo ha obrado con “animus defendendi”, debe serle admitida. (C. C. C., marzo 15/32. — *Fallos*, 2-32).

1533. — Las injurias vertidas en juicio, para que sólo sean susceptibles de corrección disciplinaria, deben ser dirigidas de una a otra parte y no a terceros. — (C. C. C., julio 29/30. — *Fallos*, 2-31.)

1534. — 1º) Incurrir en el delito de injuria el testigo que, apartándose de la pregunta o agregando algo innecesario, se expresa en forma injuriosa para un tercero.

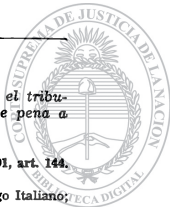
2º) La circunstancia de que el juez que interroga al testigo, no lo corrija disciplinariamente por los términos injuriosos vertidos en su declaración respecto a un tercero, no impide a éste querellarlo por injurias. — (C. C. C., julio 19/29. — *Fallos*, 2-431.)

1535. — El abogado patrocinante en una querella calumniosa, no puede ser responsabilizado por la falsa imputación de un delito, si en el escrito de querella se limita a reseñar un hecho cuya falsedad subjetiva sólo el patrocinado puede conocer. (C. C. C., mayo 28/26. — *Fallos*, 1-86.)

1536. — Hallándose amparados los legisladores nacionales por las inmunidades parlamentarias previstas en la constitución, no procede imponerles correcciones disciplinarias, fundadas en la irrespetuosidad de escritos presentados a la justicia. (C. C. C., mayo 19/25. — *Fallos*, 1-319.)

1537. — Las injurias contenidas en los escritos presentados en juicio, son susceptibles de simple corrección disciplinaria y no constitutivas de delito. (C. C. C., set. 9/24. — *Fallos*, 1-101.)

1538. — El abogado defensor tiene por su carácter amplia libertad para analizar las constancias del juicio y deducir de ellas las consecuencias que crea lógicas y favorables a su defendido y, si las imputaciones dirigidas en el escrito de defensa contra otro, son sugeridas por la necesidad de la defensa misma, no hay delito de calumnia, aunque el escrito se publique. — (C. C. C., agosto 8/22. — *Fallos*, 1-82.)



ART. 116. — Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

ANTECEDENTES: Ley 4189, art. 21, inciso "e". — Proyecto 1891, art. 144.

FUENTE: El Proyecto de 1891 (artículo 144) lo tomó del Código Italiano; y la ley 4189, lo incorporó al Código derogado.

BIBLIOGRAFIA

RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-196. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-190 y 2-169. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 221. — JOSÉ PECO, *Injurias recíprocas*, (*La Ley*, 3 - sec. doc. p. 116). — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-197. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 204 y sgts.

JURISPRUDENCIA

1539. — Para la compensación de injurias recíprocas, no es necesaria ni la similitud de las injurias, ni que sean verbales, escritas o reales. Aun tratándose de injurias disímiles la exención de pena es admisible, siempre que pueda estimarse por el aqulitamiento de las circunstancias que las rodean, que aquéllas se eliminan. (C. C. C., nov. 5/40. — *La Ley*, 20-651.)

1540. — Existe la reciprocidad injuriosa que hace aplicable el artículo 116 del C. P., si a las palabras "usted es un mal nacido", proferidas por el querellante, el querellado contesta de inmediato abofeteándolo. (C. C. C., nov. 5/40. — *La Ley*, 20-651.)

1541. — En el caso de injurias recíprocas, a los efectos del artículo 116 del C. P., no importa que el querellado no haya acusado, porque en nuestro derecho no se admite contraquerella y, por otra parte, la reciprocidad se relaciona con las injurias proferidas y no con el ejercicio de las acciones. (C. C. C., nov. 5/40. — *La Ley*, 20-651.)

1542. — En el caso de injurias recíprocas, son factores que habilitan al tribunal para ejercer la potestad discrecional que la ley le confiere a los efectos de declarar al querellado exento de

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 157. — Cuando las injurias fueran recíprocas, no corresponderá sanción para ninguna de las partes si, a juicio del tribunal, mediare equivalencia.



pena, la categoría social de éste y del querellante, la irreconciliable enemistad que lo separa, el vínculo de parentesco que los une (cuñados) y el lugar público (secretaría de juzgado), donde las injurias se exteriorizaron. (C. C. C., nov. 5/40. — *La Ley*, 20-641.)

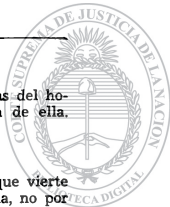
1543. — Nuestras leyes no admiten la contra-querella por injurias, ni es menester deducirla para compensar injurias, si procede aplicar el artículo 116 del C. P. (C. C. C., agosto 23/38. — *La Ley*, 11-994.)

1544. — Cuando existen injurias recíprocas, aunque no se haya interpuesto querella por ambas partes, el tribunal puede establecer que existe compensación entre las mismas, y declarar exento de pena por esta causa al querellado, sin costas al querellante. (C. C. C., agosto 1/39. — *La Ley*, 15-754.)

1545. — Cuando los calificativos injuriosos “malevo”, “compadre”, los ha aplicado el querellado al formular una queja en la empresa ferroviaria, contra el guarda con quien había tenido, momentos antes, un incidente y como reacción a la injuria inferida por éste al tomarlo del brazo y “tironearlo” para llevarlo ante el jefe de estación, por haberse negado a exhibir su pasaje, procede la aplicación del artículo 116 del C. P. que autoriza la exención de pena. (C. C. C., agosto 1/39. — *La Ley*, 15-754.)

1546. — 1º) Las manifestaciones contenidas en un folleto publicado por la persona que fué retada a duelo y descalificada por los padrinos de su adversario, expresando que la opinión pública dirá qué autoridad moral tienen los padrinos para juzgarlo, cuando pesa sobre uno de ellos “el desprestigio y el repudio más absoluto”, encierra el propósito deliberado de agraviar y constituye delito de injuria.

2º) La descalificación del adversario pronunciada por los padrinos de duelo en la carta dirigida al ahijado y la expresión de que la conducta de éste encuadraba en las normas del honor por haber rehuído el contrario toda forma de reparación y encontrarse agotados los recursos para llevarlo al terreno del honor, constituyen manifestaciones injuriosas, por cuanto la descalificación no obedecía a una exigencia del representado y la expre-



sión de que la conducta de éste encuadra en las normas del honor, significa que la del contrario se encuentra fuera de ella. (C. C. C., agosto 28/36. — J. A., 55-623.)

1547. — No es penalmente responsable la persona que vierte injurias contestando a otras injurias emitidas contra ella, no por ausencia de "animus injuriandi" sino por existir compensación, aun cuando aquéllas fueran más grave. (C. C. C., junio 27/30. — Fallos, 2-29.)

1548. — El juez puede admitir en la sentencia la compensación de las injurias, sin necesidad de que las proferidas por el querellante hayan sido acusadas. (C. C. C., junio 26/34. — Fallos, 2-34.)

ART. 117. — *El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedará exento de pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.* (1)

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título VII, art. 12, inc. 3º y Sección I, Capítulo III, art. 6º — Código derogado, art. 186, inciso 3º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 252. — Proyecto 1891, art. 145.

FUENTE: Proyecto Tejedor, arts. citados.

BIBLIOGRAFIA

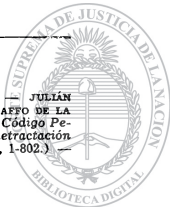
EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 2-408. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-169. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917* - 20,

(1) En las Leyes de Partidas, (Ley 2ª, Título 3º, Libro 4º) la retractación debía hacerse ante el juez diciéndolo el injuriador que "mintió" en cuanto dijo contra el injuriado. Esto era lo que entonces se llamaba "cantar la palinodia".

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 158. — No habrá lugar a la prosecución de la causa por los delitos previstos en los artículos anteriores:

1º Si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.



p. 491. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 221. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 258. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-75 y 2-248. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 204 y sgts. — TOMÁS JOFRÉ, *Retractación de la injuria o calumnia inferidas a funcionario público* (J. A., 1-802.) — RODOLFO MUÑOZ, *El Código Penal y sus antecedentes*, 4-201.

JURISPRUDENCIA

1549. — Ni el reconocimiento de la honorabilidad del querellante, hecho por el querellado en el comparendo de conciliación, ni el retiro de los términos injuriosos de la publicación inculpada, aceptado por el primero "dándose por satisfecho de las explicaciones dadas", revisten el carácter de una retractación en el sentido de la ley. En tal situación, la manifestación del querellante de aceptar y satisfacerse con tales explicaciones, sólo sirve como renuncia de la acción autorizada por el art. 59, inc. 4º del C. P., siendo por lo tanto las costas a su cargo. (C. C. C., marzo 7/41. — *La Ley*, 42-22.)

1550. — El art. 117 del C. P., autoriza la retractación hasta el momento que el querellante acuse o al contestar la acusación, actos que en el procedimiento correccional deben cumplirse en la audiencia del art. 575 del C. de Pr. Cr., pues sólo interpretadas así, tienen significación jurídica real y no teórica, en el juicio por injurias o calumnias las palabras "antes de contestar la querrela o en el acto de hacerlo". (C. C. C., agosto 18/39. — *La Ley* 16-354.)

1551. — El artículo 117 del C. P., prevalece sobre cualquier disposición que en contrario puedan tener las leyes procesales por legislar sobre materia indiscutiblemente propia. (C. C. C., agosto 18-39. — *La Ley*, 16-354.)

1552. — Los efectos de la retractación de la calumnia o de la injuria en la oportunidad en que es admisible, se encuentran determinados y fijados por la ley penal en función de interés público y social que aquélla tutela; ninguna expresión de voluntad de las partes puede, pues, limitarlos, alterarlos o modificarlos. (C. C. C., agosto 18/39. — *La Ley*, 16-354.)

1553. — No existe retractación en la querrela por calumnias



cuando el acusado, si bien manifiesta que se retracta ampliamente, agrega a continuación que su única intención era recuperar los durmientes, explicación que importa no reconocer que los hechos imputados eran falsos. — (C. C. C., octubre 11/38. — *La Ley*, 12-241.)

1554. — No basta la simple manifestación de retractarse: es indispensable, además, el reconocimiento claro y preciso de que se mintió al hacer las imputaciones. (C. C. C., octubre 11/38. — *La Ley*, 12-241.)

1555. — No procede la demanda por daños y perjuicios que persigue la indemnización del daño moral contra el querellado por injurias, demanda entablada después de la retractación formulada por éste en el juicio criminal, la cual fué aceptada por el juzgado sobreseyendo en la causa con el alcance del art. 595 del C. Proc. Criminales, dado que no ha existido una sentencia criminal condenatoria pronunciada en la oportunidad y con las formalidades de los artículos 494, 495 y 496 del Cód. Proc. Criminales. (*Cám. Civil 1a. de la Capital*, diciembre 14/37. — *J. A.*, 60-813.)

1556. — El artículo 117 del Código Penal, que exime de pena al querellado por calumnia que se retracta públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo, tiende a evitar que el querellado aumente el perjuicio al agraviado, manteniendo la imputación para retractarse después de tramitada la causa. (C. C. C., junio 19/36. — *J. A.*, 54-921.)

1557. — La disposición de la ley de imprenta de Jujuy, que autoriza a los funcionarios públicos de la provincia para no iniciar la querella o desistirla si se produce una retractación o satisfacción pública del autor de la publicación, no es aplicable cuando se trata de un funcionario nacional, dado que el artículo 117 del C. P. no admite la retractación de las injurias cometidas contra esos funcionarios. (*Sup. Trib. de Jujuy*, junio 6/36. — *J. A.*, 56-676.)

1558. — Si la causa por injurias fué sobreseída definitiva-



mente por aplicación del art. 595 del C. de Proc. Criminales (retractación), no procede condenar al querellado a indemnizar el daño moral. (C. C. C., agosto 21/34. — *Fallos*, 2-15.)

1559. — No procede admitir como retractación la manifestación del querellado negando haber pronunciado las palabras injuriosas, aunque agregue, que en caso de haberlas pronunciado, se retracta ampliamente de ellas. Para que proceda, el injuriador debe expresar claramente que mintió en cuanto dijo contra el injuriado, reconociendo sin reparos el hecho que éste le atribuye. (C. C. C., mayo 17/35. — *Fallos*, 2-362.)

1560. — En el delito de calumnia contra un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones, no es admisible la retractación del acusado. (C. C. C., marzo 29/32. — *Fallos* 1-96.)

1561. — En la calumnia cometida en perjuicio de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones, no debe en ningún caso admitirse la retractación del acusado. (C. C. C., julio 5/32. — *Fallos*, 1-97.)

1562. — Para que se admita la retractación, ésta debe ser amplia y categórica, de suerte que importe el reconocimiento franco de la falsedad de la imputación. (C. C. C., febrero 14/30. — *Fallos*, 1-103.)

1563. — Para que la retractación surta sus efectos, debe ser categórica desdiciéndose el acusado de sus manifestaciones reputadas injuriosas. (C. C. C., diciembre 11/23. — *Fallos*, 2-360.)

1564. — No debe admitirse como retractación la promesa de rectificar la publicación incriminada. Se requiere para ello que el inculcado reconozca que faltó a la verdad en cuanto dijo contra el injuriado o calumniado. (C. C. C., mayo 15/23. — *Fallos*, 2-359.)

1565. — Si el querellado expresa que se retracta de sus dichos



pero al mismo tiempo hace afirmaciones que importan ratificar las manifestaciones inculminadas, no debe tenerse por retractado. (C. C. C., diciembre 4/25. — Fallos 2-361).

1566. — El sobreseimiento en materia de injurias, determinado por la retractación, no excluye la acción civil para reclamar los daños y perjuicios sufridos. (Cám. Civil Primera de la Capital, setiembre 19/22. — J. A., 9-416.)

TITULO III

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

CAPITULO I

ADULTERIO ⁽¹⁾

ART. 118. — *Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:*

- 1° *La mujer que cometiere adulterio;*
- 2° *El codeincuente de la mujer;*
- 3° *El marido, cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal;*
- 4° *La manceba del marido.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, arts. 1 al 6. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 262 a 268. — Código derogado, arts. 122 a 125. — Ley 4189, art. 18. — Proyecto 1906, art. 120.

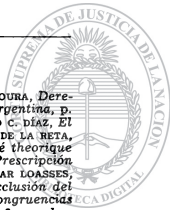
CONCORDANCIAS: Ley de Matrimonio Civil, arts. 50 y 67, inciso 1°. — Código Civil, art. 1104 (Cuestión prejudicial). — Código Penal, arts. 69 y 74.

FUENTE: El artículo 120 del Proyecto de 1906.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-18. — RODOLFO RIVAROLA, *Expo-*

(1) Tejedor, Villegas, Ugarriza y García, el Código derogado y el Proyecto de 1906, penaban el adulterio, sobre todo el de la mujer; el adulterio del marido se penaba únicamente en el caso de tener manceba ostensiblemente. El Proyecto de 1891 no penaba el adulterio de ninguno de los cónyuges. Tampoco está inculminado como delito en el Proyecto Coll-Gómez, de 1937.



sición y crítica del Código Penal, 2-121 y sgts. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-95. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 192. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 222. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 207. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-31, 197 y 2-249. — R. GARRAUD, *Traité theorique et pratique du droit penal français*, 5-139. — EUSEBIO GÓMEZ, *Prescripción de la acción de adulterio* (*Rev. Penal Argentina*, 1-257). — CÉSAR LOASSES, *Los casos de no punibilidad del adulterio, no son causas de exclusión del delito*, (*La Ley*, 14 - sec. rev. de rev.), p. 11. — JOSÉ PECO, *Incongruencias del Código Penal en los delitos contrala honestidad*, (*La Ley*, 6 sec. doc. p. 105). — MARIO MANFREDINI, *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, Delitti contro la famiglia*, Milán 1932, p. 282. — ANSELMO CRISAFULLI, *La desincriminación del adulterio* (*Rev. de Psiquiatría y Criminología*, Bs. As., julio-agosto 1940).

JURISPRUDENCIA

1567. — Habiendo transcurrido más de un año desde que se decretó el divorcio de los esposos y no pudiendo el delito de adulterio cometerse hallándose éstos divorciados, aunque la esposa acusada haya continuado haciendo vida común con su cómplice, debe declararse prescripta la acción penal. (C. C. C., *Gaceta del Foro*, 51-128.)

1568. — Carece de validez el segundo matrimonio celebrado en Montevideo por un cónyuge allí divorciado de un primero contraído en la Argentina y así la convivencia que realicen aquellos contrayentes, puede fundar la causal de adulterio. (*Primera Instancia de la Capital, Gaceta del Foro*, 59-369.)

1569. — No hay otras cuestiones prejudiciales que las que la ley prevé expresamente. Validez o nulidad de matrimonio, declaración de quiebra y divorcio por adulterio, en este delito. (*Cám. Federal de la Capital, Gaceta del Foro*, 51-231.)

1570. — El concubito con mujer casada mayor de 15 años, con el consentimiento de ésta, sólo puede encuadrar en la figura delictiva del adulterio. (*Cám. Federal de La Plata*, abril 11/32. — J. A., 37-1248.)

1571. — Si los esposos que se hallan divorciados faltan a la fidelidad conyugal, no incurrn en el delito de adulterio. (C. C. C., junio 10/24. — *Fallos*, 1-37.)



CAPITULO II

VIOLACION Y ESTUPRO

ART. 119. — *Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:*

- 1° *Cuando la víctima fuere menor de doce años;*
- 2° *Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando, por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiese resistir;*
- 3° *Cuando se usare de fuerza o intimidación.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, arts. 1 y 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 269 y 270. — Proyecto 1891, art. 146. — Proyecto 1906, art. 121. — Ley 4189, art. 19. — Código derogado, art. 127.

FUENTE: Modificaciones hechas por el Dr. Moreno al Proyecto de 1906, teniendo en cuenta, en cuanto a la graduación de la pena, la ley 9143.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-75. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-149 y 162. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 208. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-103. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-231 y 238. — C. SALVAGNO CAMPOS, *Los delitos sexuales*, Montevideo, 1934. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 200. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 226. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-201 y 2-249. — GUSMAO CH. DE, *Dos crimes sexuales*, Río de Janeiro, 1934. — F. J. CASTRO VIVEIROS, *Os delitos contra a honra da mulher*, Río de Janeiro, 1930. — JOSÉ PECO, *El delito de violación* (*La Ley*, 5, sec. doc., p. 42). — BENJAMÍN COELHO DE OLIVEIRA, *La acción privada y pública en el delito de violación*, (*Revista de Derecho Público y Privado*, Montevideo, agosto 1940), p. 76. — (*Sobre ejercicio de la acción penal ver artículos 71, inciso 1º y 72*).

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 169. — *Se impondrá reclusión o prisión de diez a diez y ocho años, al que tenga acceso carnal con otro en los casos siguientes:*

- 1º *Cuando mediare violencia o intimidación;*
- 2º *Cuando la víctima fuere no mayor de catorce años;*
- 3º *Cuando la víctima tuviere menos de diez y seis años y el autor fuere ascendiente, tutor, guardador o persona a quien el menor le hubiere sido confiado para su educación o instrucción profesional, para su custodia o para cualquier trabajo a realizar bajo su autoridad o dependencia;*
- 4º *Cuando la víctima padeciere alienación mental o se encontrare, por cualquier causa, en estado de inconsciencia; o si, por inferioridad psíquica o física, no pudiese resistir.*



1572. — Siendo la finalidad manifiesta del autor del delito la cópula, y el hecho consumado el coito vestibular, con traumatismo en el órgano de la paciente, o quizás el coito no consumado ni aún en esas condiciones, pero sí intentado, el caso encuadra en los arts. 42, 44 y 119, inc. 3° del C. Penal. El empleo de violencia es de por sí calificativo y entonces la violencia, ejercida en una menor de 10 años, es una circunstancia agravante. (C. Fed. de Bahía Blanca, julio 16/41. — *Rep. Jurid.*, 6-2179).

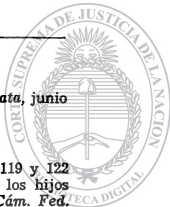
1573. — Para que el delito de violación previsto en el artículo 119, inc. 1° del C. P., quede consumado, no es indispensable la existencia de una cópula perfecta; basta que se haya tenido acceso carnal consistente en un "coito vulgar" con una menor de 12 años. (*Sup. Corte de Bs. As.*, octubre 17/39. — *La Ley*, 16-395.)

1574. — Para la consumación del delito de violación del artículo 119, inciso 1°, del C. P., basta que haya prueba de acceso carnal o sea aproximación o corrupción sexual, introducción del miembro viril en los órganos genitales de la menor. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, julio 14/39. — *La Ley*, 10-741.)

1575. — Para que se realice la violación, no es preciso la introducción completa del miembro en la vagina, sino superficial, un acceso incompleto y hasta imperfecto, por lo que puede subsistir el delito aún sin desfloración. (*Sup. Corte de Tucumán*, julio 11/39. — *La Ley*, 15-818.)

1576. — La sodomía violenta entra en el supuesto de violación del artículo 119 del C. P. (*Sup. Corte de Tucumán*, marzo 21/39. — *La Ley*, 15-1032.)

1577. — La enunciación de la fecha del nacimiento tenida en la respectiva partida, no puede tenerse en cuenta para acreditar la edad de la víctima a los efectos de la calificación del delito, como de violación, (artículo 119, inciso 1° C. P.) cuando el padre de la menor y denunciante del hecho, dice "motu proprio" que ésta ha nacido en otra fecha y distinto lugar que el indicado en la partida, manifestación corroborada por la hija, y sobre todo, por



el dictamen médico que obra en autos.. (Cám. Fed. La Plata, junio 9/39. — *La Ley*, 17-295.)

1578. — El concubino a los efectos de los artículos 119 y 122 del C. P., debe ser asimilado al padrastro respecto de los hijos menores de su compañera, que conviven en la casa. (Cám. Fed. Bahía Blanca, marzo 20/38. — *La Ley*, 13-785.)

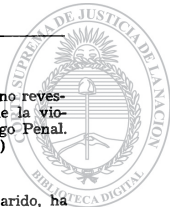
1579. — Hay prueba presuncional suficiente de violación si la menor ofendida concurre sana a casa del procesado y allí sufre una fuerte hemorragia con desgarró en sus órganos genitales, no imputables a otro que a aquel a quien sindica la víctima, a lo que se añade la demora en comunicar lo ocurrido y las manchas de sangre en la salida de baño que usó el agente entonces, como también su temperamento notoriamente sensual. (Sup. Corte de Tucumán, abril 2/38. — *La Ley*, 10-741.)

1580. — La falta de comprobación de rastros materiales en el cuerpo de la mujer víctima de violación carnal, no implica la existencia del cuerpo del delito, atentas las circunstancias en que se cometió y el número de personas que intervinieron, cuya acción no tenía por qué haber dejado rastros necesarios. (Cám. Fed. Bahía Blanca, junio 3/37. — *La Ley*, 9-723.)

1581. — Los artículos 122 y 124 del C. P., al establecer un tratamiento especial más severo cuando la fuerza ejercida en perjuicio del sujeto pasivo tenga consecuencias de mayor importancia, significa, a contrario sensu, que cuando esas consecuencias no se producen, queda la acción comprendida en las previsiones del artículo 119 del C. P. (C. C. C., septiembre 17/40. — *La Ley*, 20-847.)

1582. — El aprovechamiento en común de una menor conocida como deshonesto y de apetencia sexual, no constituye violación, si no hay datos de intimidación o violencia, ni hubo pedido posible de auxilio. (Sup. Corte de Tucumán, agosto 6/40. — *La Ley*, 20-940.)

1583. — Entre el delito sexual y las lesiones producidas con



motivo de la cópula, existe concurso legal y no ideal; al no revestir cierta gravedad, éstas constituyen la materialidad de la violencia a que se refiere el artículo 119 inciso 3° del Código Penal. (Cám. Fed. Bahía Blanca, abril 13/39. — *La Ley*, 16-225.)

1584. — Si la privación de la libertad contra el marido, ha sido momentánea y un medio de consumación del delito mayor que respondió a la misma resolución criminal de la obtención de la cópula con la esposa de aquél, no existen delitos concurrentes, sino uno solo. (Artículo 54 del C. P.) (Cám. Fed. Bahía Blanca, junio 3/37. — *La Ley*, 9-723.)

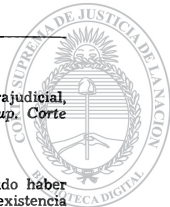
1585. — La ley, al referirse al acceso carnal como uno de los requisitos del delito de violación, no entiende por tal, la perfección del acto fisiológico. (Sup. Corte de Buenos Aires, agosto 22/23. — *J. A.*, 43-307.)

1586. — La circunstancia de no haberse producido la introducción del pene en la cavidad anal, impide considerar consumada la violación, pero no obsta a que se considere producida la tentativa de violación. (Sup. Corte de Buenos Aires, agosto 18/33. — *J. A.*, 43-305.)

1587. — No es necesaria la "seminatio intra vas" para caracterizar el delito de violación. (Sup. Corte de Bs. Aires, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)

1588. — Probada por la pericia médica la desfloración, la existencia del delito de violación y la persona de su autor, pueden acreditarse por presunciones. (Sup. Corte de Bs. Aires, junio 7/32. — *J. A.*, 38-860.)

1589. — En el delito de violación, lo que la ley castiga, es el hecho de hacerse sufrir a una persona de uno u otro sexo, contra su voluntad expresa, la aproximación sexual, requiriéndose para la concurrencia del delito, la conjunción carnal como finalidad y la violencia como medio para alcanzarla. (Cám. Fed. de Bahía Blanca, abril 7/32. — *J. A.*, 37-1267.)



1590. — El testimonio de la víctima y la confesión extrajudicial, constituyen presunciones en el delito de violación. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, junio 7/32. — *J. A.*, 38-860.)

1591. — La simple opinión médico legal de que pudo haber existido un coito vestibular, entraña una duda sobre la existencia de la aproximación sexual que caracteriza la violación, aún cuando fisiológicamente no se hubiera consumado la cópula. (*Cám. Fed. La Plata*, julio 8/32. — *J. A.*, 38-966.)

1592. — Prueban la inexistencia del delito de violación, la confesión indivisible del acusado que sostiene ser la menor quien provocó el hecho, la circunstancia de que la denuncia se haga once meses después de producido el supuesto delito y la vida íntima con la menor en su propio domicilio, con el consentimiento de los padres que retienen los sueldos del procesado. (*Cám. Fed. La Plata*, abril 18/32. — *J. A.*, 37-1250.)

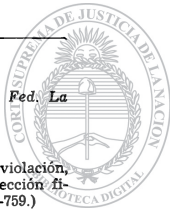
1593. — Para que exista el delito de violación, es necesaria la consumación del acceso carnal. (*C. C. C.*, marzo 15/32. — *J. A.*, 37-1128.)

1594. — Es suficiente para que exista el delito de violación, el acceso carnal, aunque el hecho no haya llegado a su perfección. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, junio 7/32. — *J. A.*, 38-858.)

1595. — El delito de violación se consuma con el acceso carnal, sin necesidad de que ése acto llegue a generar una cópula completa o productiva de determinados efectos. (*Cám. Fed. La Plata*, julio 4/32. — *J. A.*, 38-963.)

1596. — Existe violación si la finalidad es yacer con la víctima, cuando existe y se realiza el propósito de la conjunción de sexos. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)

1597. — La edad de la víctima es calificativa en el delito de violación y ella debe ser comprobada en la forma legal indispensable, no siendo suficiente a tal efecto la declaración de la madre



ni el peritaje que la calcula aproximadamente. (*Cám. Fed. La Plata*, julio 2/30. — *J. A.*, 33-775.)

1598. — El concubito que caracteriza el delito de violación, existe legalmente aún cuando aquel acto no tenga perfección fisiológica. (*Corte Suprema*, noviembre 22/39. — *J. A.*, 31-759.)

1599. — La existencia de la violación en los delitos de violación, no puede inferirse del hecho de la honestidad de la víctima ni de sus manifestaciones a un testigo. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, diciembre 10/29. — *J. A.*, 32-516.)

Tentativa

1600. — Concebida la idea del acceso carnal, consumados todos los actos para lograr ese propósito, existe un evidente comienzo de ejecución del delito de violación, que al no formalizarse por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo, configuran la tentativa del mismo. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 11/40. — *Rep. Juríd.*, 2-660.)

1601. — Cuando el autor de una tentativa de violación correspondiente al artículo 119 inciso 3º del C. P., en el mismo tiempo y lugar lesiona levemente a la víctima, las lesiones se consideran involucradas en el requisito "fuerza" establecido en el texto legal. (*C. C. C.*, septiembre 17/40. — *J. A.*, 71-800.)

1602. — Existe tentativa de violación, si el procesado, con el propósito de cohabitar con la víctima, se dirigió al domicilio de ésta y al no conseguir que le abriera la puerta a la que llamara, se introdujo en la habitación violentando la cocina y cortando un biombo y al huir la víctima, la persigue, para desistirse de su propósito, al notar que aquella golpeaba en casa de un vecino. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 11/40. — *La Ley*, 20-347.)

1603. — El hecho de no haber existido contacto carnal, no puede alejar la calificación que corresponde de tentativa de viola-



ción cuando concurren todos los factores que la complementan. (Cám. Fed. La Plata, octubre 11/40. — *La Ley*, 20-347.)

1604. — En el delito de violación, cabe tanto la tentativa como la diferencia teórica y sutil entre tentativa y violación frustrada. (Sup. Corte de Buenos Aires, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)

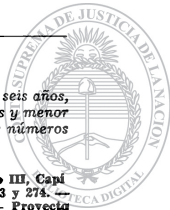
1605. — La tentativa de violación no está supeditada a que el acto fisiológico se consume o no, sino a circunstancias exteriores ajenas al delito que impidieron la consumación que se comenzó a ejecutar. (Sup. Corte de Buenos Aires, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)

1606. — Existe tentativa de violación si la intención confesada del acusado era violar a la víctima mediante los actos cometidos contra ella, no pudiendo consumarse la violación por causas ajenas a la voluntad del mismo. (Sup. Corte de Bs. Aires, agosto 18/33. — *J. A.*, 43-305.)

1607. — Corresponde calificar el hecho de tentativa de violación si la integridad del himen aleja la posibilidad del acceso carnal con la menor; solo puede admitirse que ésta ha sido objeto de contacto deshonesto. (C. C. C., marzo 15/32. — *J. A.*, 37-1128.)

1608. — Existe tentativa, si se efectúan actos de ejecución que revelan la intención de cometer una violación y el agente es impedido de consumarla por factor ajeno a su voluntad, sea porque la víctima gritase y acudiesen personas en su auxilio, sea por resistencia de la misma, etc. (Sup. Corte de Buenos Aires, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)

1609. — Si la tentativa de violación no puede consumarse por la condición física de la víctima o del victimario, existe el delito frustrado. (Sup. Corte de Buenos Aires, agosto 22/33. — *J. A.*, 43-307.)



ART. 120. — *Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, Capítulo III, art. 1º — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 273 y 274. — Código derogado, art. 130. — Ley 4189, art. 19, inciso "b". — Proyecto 1891, art. 147. — Proyecto 1906, art. 122.

FUENTE: El Proyecto de 1916, que tuvo en cuenta la ley de reformas 4189 (art. 19, inciso "b").

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-75. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-190 y 204. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-246. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922* p. 228. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 203. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 203. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-105 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-202 y 2-134. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 212.

JURISPRUDENCIA

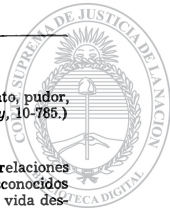
1610. — La denuncia del padre, de la vida en concubinato que hacía su hija menor de edad, agregada a las manifestaciones formuladas por ésta en el curso de la investigación en el sentido de que con anterioridad a sus relaciones íntimas con su actual concubino, las tuvo con otro hombre a quién designa, no puede servir de base al proceso por violación seguido contra éste último. (*Cám. Fed. La Plata*, junio 9/39. — *La Ley*, 17-295.)

1611. — La ley excluye al varón del delito de estupro, reservándolo únicamente para la mujer honesta, comprendida entre los doce y catorce años. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 10-1118.)

1612. — La ley no habla de la virginidad física de la menor ofendida para que exista el delito de estupro, sino de una honestidad.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 164. — *Se impondrá prisión de uno a seis años, al que tuviere acceso carnal con una mujer honesta, mayor de catorce años y de menos de diez y seis, aunque preste su consentimiento.*



tividad, debiéndose considerar ésta, bajo el concepto de recato, pudor, castidad. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 23/38. — *La Ley*, 10-785.)

1613. — La aceptación de la menor de continuar las relaciones sexuales con el procesado, donde dormían terceros desconocidos para ella, la forma impúdica en que narra los hechos y la vida desordenada y sin vigilancia que hacía por lugares públicos, descartan el requisito de honestidad, exigido por la ley para la existencia del delito de estupro. (*Sup. Corte de Tucumán*, abril 23/38. — *La Ley*, 10-785.)

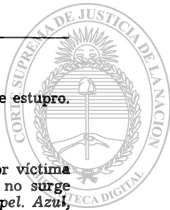
1614. — La desfloración requiere como condición esencial que la víctima sea mujer honesta, mayor de doce años y menor de quince. Resultando de autos que la víctima no se comportaba honestamente, no debe pensarse a quien tuvo acceso carnal con la menor de 14 años de edad. (*C. C. C.*, septiembre 17/37. — *Rec. Ord.*, *Cuad. 7bis-131*.)

1615. — El delito de estupro requiere como condición esencial que la víctima sea mujer honesta y esa condición, falta en la menor de catorce años que, manteniendo relaciones amorosas con una persona, acepta sin mayor inconveniente y por promesa remuneratoria las que le propone el procesado, a quien antes del acto sexual le hace indicaciones de precaverse para evitar posibles consecuencias del mismo. Menor, a la que se le imputan relaciones con otros hombres y cuya desfloración era por lo menos anterior en siete días, al hecho que motiva el proceso, comprobándosele además posteriormente, signos de uso deshonesto recientes. (*C. C. C.*, septiembre 17/37. — *J. A.*, 59-987.)

1616. — No hay delito de estupro cuando existan dudas respecto de la honestidad de la víctima. (*Cám. Federal La Plata*, junio 26/31. — *J. A.*, 35-1199.)

1617. — El acceso carnal con una mujer mayor de quince años no constituye estupro. (*Cám. Fed. La Plata*, septiembre 25/31. — *J. A.*, 36-912.)

1618. — La desfloración de menores de doce a trece años de



edad, aunque no mediare violencia, configura el delito de estupro. (C. C. C., septiembre 19/33. — *Rec. Ord., Cuad. 7bis-46.*)

1619. — Debe considerarse mujer honesta a la menor víctima del delito de estupro, si de las constancias sumariales no surge ningún elemento de juicio de que no lo fuera. (*Cám. Apel. Azul*, julio 24/31. — *J. A.*, 36-376.)

1620. — Para que exista delito de estupro es condición indispensable que la víctima sea mujer honesta. (*Cám. Fed. de la Cap.*, octubre 27/30. — *J. A.*, 34-363.)

1621. — No debe considerarse mujer honesta a la menor de catorce años que con toda liberalidad frecuente hombres hasta el punto de provocar escándalos. (*Cám. Federal, La Plata*, octubre 27/30. — *J. A.*, 34-363.)

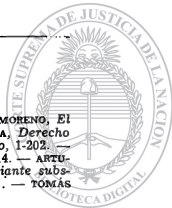
1622. — El padre, reo del delito de estupro de su hija menor de edad, debe justificar la deshonestidad de la víctima en la época en que tuvo acceso carnal con ella. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, noviembre 15/29. — *J. A.*, 31-954.)

1623. — El estupro es delito que da nacimiento a la acción pública, pero debe ser promovido el sumario a instancia privada. Una averiguación anterior de la policía no desvirtúa la instancia privada que importa la declaración categórica de la madre. (C. C. C., septiembre 12/24. — *Fallos*, 1-364.)

ART. 121. — *Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.*

ANTECEDENTES: Ley 4189, art. 19, inciso "c". — Proyecto 1891, art. 148. — Proyecto 1906, art. 123.

FUENTE: El Proyecto de 1891 (art. 148).



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-110. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-252. — O. GÓNZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-105. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-202. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 214. — ARTURO SANTORO, *Violencia carnal y actos de libidine violenta mediante sustitución de persona* (La Scuola Positiva, Milán, Nov.-Dic. 1939). — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 299.

ART. 122. — *La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando en los casos del art. 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de aquélla o con el concurso de dos o más personas.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, art. 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 285, Código derogado, art. 131. — Ley 4189, art. 19, inciso "d". — Proyecto 1891, art. 149. — Proyecto 1906, art. 124. — Proyecto Coll-Gómez (1937): art. 160. (Verlo al pie del art. 119).

FUENTE: El Proyecto 1891 (art. 149).

Proyecto Coll-Gómez (1937): Art. 160 (verlo al pie del art. 119).

BIBLIOGRAFIA

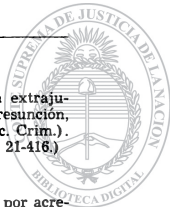
EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-113. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-245 y 2-107. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-253. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 239. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-202. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 208.

JURISPRUDENCIA

1624. — Confesadas, aunque extrajudicialmente las relaciones incestuosas existe presunción —ante las circunstancias de hecho— de que los hechos ocurridos han constituido violación, pero no

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 162. — Se impondrá prisión de tres a diez años, al que tuviere acceso carnal con una mujer, mediante engaño consistente en sustituirse a otra persona.



existiendo confesión judicial de esos hechos y siendo la extrajudicial una presunción no puede extraerse de ello otra presunción, sin violar una regla legal (art. 385 inciso 7° del C. de Proc. Crim.). (Cámara Federal Bahía Blanca, agosto 8/40. — *La Ley*, 21-416.)

1625. — La confesión del procesado, basta para tener por acreditada la paternidad, en materia penal (a efecto de la aplicación del art. 122) cuando no hay motivos para dudar de su exactitud, máxime cuando ese reconocimiento aparece ratificado por la víctima y su madre. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, septiembre 29/39. — *La Ley*, 16-531.)

1626. — Incurrir en violación calificada quién ofende a una chica de ocho años y le transmite una blenorragia, sin que sea necesario que el agente haya obrado con intención directa en el contagio de la enfermedad, porque ésta no es más que el resultado de su acción dolosa en el delito principal. (*Sup. Corte de Tucumán*, septiembre 17/38. — *La Ley*, 13-90.)

1627. — El concubino, a los efectos de los artículos 119 y 122 del C. P., debe ser asimilado al padrastro respecto de los hijos menores de su compañera que conviven en la casa. (*Cám. Fed. Bahía Blanca*, marzo 24/38. — *La Ley*, 13-785.)

1628. — Procede la absolución del procesado por el delito de violación en la persona de su hija de quince años cumplidos, aunque se encuentre probado que realizara el acceso carnal, si no está acreditado que mediara violencia, habiendo informado los médicos de los tribunales, que no existen señales que la hagan presumir. No puede deducirse la existencia de intimidación por el ascendiente natural del padre sobre su hija, por el respeto y obediencia que inspira, dado que el artículo 122 del C. P. lo contempla como agravante calificativa; si la ley hubiese admitido que ese parentesco constituye intimidación, no lo habría incluido como agravante, ya que la misma circunstancia vendría a funcionar como elemento constitutivo del delito y agravante a un tiempo. (*C. C. C.*, febrero 12/37. — *J. A.*, 57-522.)

1629. — Corresponde tener por probada la intimidación, a fin de calificar de violación el delito, con la declaración de dos hijas del procesado que manifiestan haber accedido a las exigencias de



éste por temor a sus amenazas de muerte, la declaración del procesado de que "quizá por el respeto que le tenía no se opusieron a hacer vida marital con él" y las amenazas proferidas contra la esposa para asegurarse su silencio. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, mayo 3/24. — *J. A.*, 46-517.)

1630. — Al fijar el monto de la pena que corresponde al procesado por delito de violación de dos de sus hijas y abuso deshonesto con otra hija, corresponde tener en cuenta la reiteración en que incurrió en el delito y la falta de taras psíquicas que le impidieran tener plena conciencia del acto y sus consecuencias. (*Cám. Federal de Bahía Blanca*, mayo 3/34. — *J. A.*, 46-517.)

1631. — Procede calificar el hecho de violación con grave daño para la salud de las víctimas e imponer a su autor quince años de prisión, si éste mantuvo contacto carnal con dos menores de cuatro y seis años respectivamente, trasmitiéndoles una afección venérea. (*Cám. Apel. de Bahía Blanca*, mayo 31/32. — *J. A.*, 38-542.)

ART. 123. — *Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años, cuando en el caso del art. 120, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, art. 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 285. — Código derogado, art. 131. — Ley 4189, art. 19, inciso "e". — Proyecto 1891, art. 150. — Proyecto 1906, art. 125.

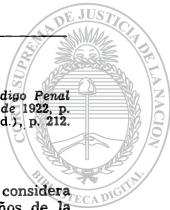
FUENTE: Proyecto del Dr. Moreno, inspirado en el Proyecto de 1891 y en cuanto a la pena, la Ley 4189.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-137. — RODOLFO MORENO, *El*

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 161. — Se impondrá reclusión o prisión de diez y ocho a veinticinco años, si en los casos del artículo anterior, y a consecuencia del hecho, resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las previstas en los artículos 128 y 129; o si el hecho se realizare con el concurso de dos o más personas.



Código Penal y sus Antecedentes, 4-258. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 206. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 231. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3ª ed.), p. 212.

JURISPRUDENCIA

1632. — A los efectos del artículo 123 del C. P. se considera al concubino, como encargado de la guarda de los niños de la mujer con la cual vive. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 2/36. — *J. A.*, 56-343.)

1633. — Cometido el estupro con la agravante de parentesco por afinidad, con una menor, hijastra del acusado, le es aplicable lo dispuesto en el art. 123 del C. Penal. (*C. C. C.* — *Gaceta del Foro*, 48-376.)

1634. — La circunstancia de que la menor víctima del delito de violación fuera cuñada del procesado, en cuya casa vivía, aumenta la responsabilidad de éste por ser guardador de la misma. (*Sup. Corte de Bs. As.*, junio 7/32. — *J. A.*, 38-860.)

ART. 124. — *Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los arts. 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II., Libro I, Título III. Capítulo II, art. 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 271. — Código derogado, art. 128, inciso 2º. — Ley 4189, art. 19, inciso "e". — Proyecto de 1891, art. 151. — Proyecto 1906, art. 125. — Proyecto Coll-Gómez (1937): art. 161. (Verlo al pie del art. 123).

FUENTE: El Proyecto de 1906 (art. 125).

BIBLIOGRAFIA

SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-107. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-259. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 200. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 231. — J. C. RAFFO DE LA RETA *Código Penal Argentino*, 2-134. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, p. 212.



CAPITULO III

CORRUPCION Y ULTRAJES AL PUDOR

ART. 125. — El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediere el consentimiento de la víctima, será castigado:

- 1º Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años;
- 2º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si la víctima fuere mayor de doce años y menor de diez y ocho;
- 3º Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor de diez y ocho años y menor de veintidós.

Cualesquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión desde diez a quince años, cuando mediere engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda o que hiciera con ella vida marital.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, Capítulo III, art. 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 276. — Código derogado, art. 132. — Ley 4189, art. 19, incisos "g" y "h". — Ley 9143 (Ley Palacios), art. 1. — Proyecto 1891, art. 154. — Proyecto 1906, art. 127.

FUENTE: El Proyecto de 1917, inspirado en la Ley Palacios, y el proyecto de represión de la trata de blancas del diputado Dr. Angel M. Giménez. (Ver Ley de Profilaxis Social, número 12.331.)

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-139. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-162. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 216. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-110. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-261, y 281 y sgts. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la Rep. Argentina*, p. 206. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-32, 203 y 2-250. — TOMÁS JOFFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 231. — E. R. AFTALIÓN, *Prostitución, prozenetismo y delito. - Estudio crítico de la jurisprudencia de los artículos 15 y 17 de la ley 12.331*, Bs. Aires, 1940. (La Ley, 18, sec. doc., p. 99). — M. A. BODR, *L'influence du consentement de la victime sur la responsabilité pénale*. Paris 1928. — RODOLFO MORENO, *¿Qué es satisfacer deseos propios en los delitos de corrupción?* (La Ley, 10-1118). — RODOLFO RIVAROLA, *¿Qué es satisfacer el deseo propio en el delito de corrupción?* (La Ley, 10-1121). — P. DI VICO, *El delito de corrupción*, (Annali di Diritto e Procedura Penale, Turín, 1936, p. 389). — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *La prostitución y el delito. Tipicidad e interpretación de la ley 12.331*, (La Ley, 20- sec. doc. p. 1).

Nota de la Le Ley. — La prueba del delito de corrupción, (innovaciones de la Legislación Uruguaya), 6-498.



JURISPRUDENCIA

1635. — El delito que habría cometido el procesado al facilitar su habitación, para que él, como sus amigos, fornicaran por precio con la procesada, es el del artículo 125 del C. P., dada la presunta edad de la misma y lo que expone en su declaración. Corresponde pues, declarar nula de oficio la sentencia del juez de lo correccional que lo condenó por infracción al artículo 17 de la Ley 12.331, en razón de que dicho juez es incompetente para el conocimiento de aquel delito; por lo que resulta haberse violado en el procedimiento seguido ante él y en la resolución condenatoria, formas senciales que atañen a la jurisdicción. (C. C. C., diciembre 3/40. — *La Ley*, 21-745.)

1636. — La relación incestuosa no constituye por sí sola, corrupción. Por corrupción en el concepto legal, no se entiende la depravación resultante del vínculo entre víctima y agente, sino la depravación que trasciende de esa circunstancia que rebaja la moral sexual de la víctima con relación a todas las personas. (Cám. Federal de Bahía Blanca, agosto 28/40. — *La Ley*, 21-416.)

1637. — Corrompe el que, para lograr el fin, prepara la anulación de la resistencia moral de la víctima, por actos previos que la predisponen para admitir la satisfacción que se persigue y que cuando ya está la víctima corrompida, consuma su propósito de satisfacer deseos propios, aprovechando la situación creada de

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 169. — Se impondrá prisión de uno a seis años, al que, para satisfacer deseos propios, promoviere o facilitare la corrupción de un menor de menos de diez y ocho años, realizando actos sexuales, diversos de la cópula normal, si la víctima fuere mujer; o actos sexuales, de cualquier naturaleza, si fuere varón; o induciendo a la víctima, de uno u otro sexo, a efectuar esos actos por sí misma o con el propio autor, o con un tercero, o para que un tercero los presencie.

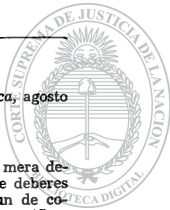
Se impondrá prisión de uno a tres años, si la víctima fuere un menor de más de diez y ocho años.

Si el autor se encontrare en alguna de las situaciones previstas en el artículo 160, inciso 3º, se impondrá reclusión de seis a diez años.

Art. 170. — Al que, con cualquier propósito, para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de un menor, induciéndolo a realizar actos sexuales con un tercero, se le impondrá:

- 1º Reclusión o prisión de diez a diez y ocho años, si la víctima fuere un menor de menos de catorce años;
- 2º Prisión de tres a seis años, si la víctima fuere un menor mayor de catorce años y de menos de diez y ocho;
- 3º Prisión de uno a tres años, si la víctima fuere un menor mayor de diez y ocho años.

Art. 171. — Se impondrá reclusión o prisión de diez a diez y ocho años, si en los casos de los incisos 2º y 3º del artículo anterior, mediare engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad o cualquier otro medio coercitivo; si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor, guardador o persona a quien el menor le hubiere sido conflujo para su educación, instrucción profesional, o para cualquier trabajo a realizarse bajo su autoridad o dependencia; o si, siendo la víctima una menor, hiciera con ella vida marital.



anulación de reatos morales. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, agosto 28/40. — *La Ley*, 21-416.)

1638. — El delito de corrupción no se configura por mera debilidad o abandono de los padres, por simple omisión de deberes morales, sino que requiere la realización de actos —aun de comisión por omisión— tendientes a la degradación de la hija. (*Sup. Corte de Tucumán*, agosto 6/40. — *La Ley*, 20-253.)

1639. — El acceso carnal tenido por el procesado con sus hijas, menores de 22 años, reiteradas veces, constituye delito de corrupción. (*Suprema Corte de Buenos Aires*, abril 31/40. — *La Ley*, 18-869.)

1640. — El consentimiento de las víctimas no modifica la responsabilidad penal del autor del delito de corrupción, ascendiente de las menores ultrajadas. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, abril 30/40. *Ley*, 18-869.)

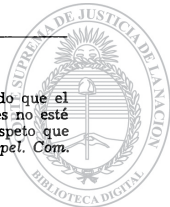
/

1641. — Para la configuración del delito de corrupción, no es indispensable que el agente obre con “ánimo de lucro” cuando ha tratado de satisfacer deseos propios o ajenos. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, abril 30/40. — *La Ley*, 18-869.)

1642. — El delito de corrupción previsto por el artículo 125 del C. P. se configura cuando el agente promueve o facilita la corrupción de un menor de edad para satisfacer deseos propios, aunque no haya mediado un intermediario o “lenón”. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, abril 23/40. — *La Ley*, 18-867.)

1643. — Los actos de pederastía activa, cometidos en la persona de un menor de trece a catorce años de edad, configuran el delito de corrupción que reprime el artículo 125, inciso 2° del C. P. (*Suprema Corte de Buenos Aires*, abril 23/40. — *La Ley*, 18-867.)

1644. — El delito de corrupción de menores de edad es extraño



a la iniciación de los mismos en la vida sexual, bastando que el ambiente en que transcurra la existencia de los menores no esté de acuerdo con las elementales nociones de pudor y respeto que ninguna persona está autorizada a desconocer. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, julio 22/39. — *La Ley*, 15-676.)

1645. — El delito de corrupción de menor de edad se comete aún cuando la víctima sea una mujer iniciada ya con anterioridad en la vida licenciosa, pero cuya corrupción o prostitución se facilita al obtener el corruptor el consentimiento de la víctima, colaborando con ella no sólo al cohabitar con la misma sino también al proporcionarle medios idóneos para que no cese de prostituirse. (*Cámara Apelación Com. y Crim. de Mendoza*, julio 22/39. — *La Ley*, 15-676.)

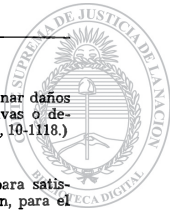
1646. — El delito de corrupción es formal; no requiere para su perfección el logro de los menguados propósitos. Basta que el culpable haya hecho lo posible de su parte, aunque la corrupción o la prostitución no se produzca; es suficiente que promueva, impulse, facilite o incite, para que la línea de protección establecida por la ley haya sido salvada. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, julio 22/39. — *La Ley*, 15-676.)

1647. — El delito de corrupción empieza y concluye a un mismo tiempo, quedando de tal suerte equiparadas la tentativa y la consumación. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, julio 22/39. — *La Ley*, 15-677.)

1648. — La relación sexual normal —aun entre padre e hija— no es considerada por la ley como acto corruptor en el sentido del artículo 125 del C. P. (*Superior Tribunal de Entre Ríos*, julio 28/39. — *La Ley*, 16-726.)

1649. — El artículo 125 del C. P. reprime el proxenetismo, pero no otras hipótesis. (*Sup. Corte de Bs. Aires*, setiembre 9/38. — *La Ley*, 12-96.)

1650. — La corrupción no consiste en una modificación orgá-



nica sino en una alteración psíquica susceptible de ocasionar daños físicos, debido a prácticas lujuriosas prematuras, excesivas o depravadas. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 10-1118.)

1651. — El sólo acto carnal por seducción simple para satisfacer deseos propios, no configura el delito de corrupción, para el que se requiere un conjunto de actos obscenos, tendientes a excitar los sentidos y pervertir a la víctima para obtener con facilidad y prontitud el fin buscado. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 10-1118.)

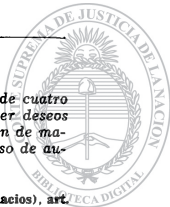
1652. — Debe absolverse al que tuvo contacto carnal voluntario con un menor de doce años, si no aparece que, para satisfacer el propio deseo, se realizaron actos previos de libertinaje o de perversión sexual. (*Suprema Corte de Tucumán*, junio 4/38. — *La Ley*, 10-1118.)

1653. — La corrupción tiene grados y quien la estimula y facilita el empeoramiento de la condición moral de otro, incurre en la infracción delictuosa penada por el artículo 125 del C. P. (*Corte Suprema*, abril 13/1936. — *Rec. Ord.*, Cuad. 7 bis, 80.)

1654. — Comete delito de corrupción de menores el pederasta pasivo que se hace poseer por éstos. (C. C. C., diciembre 27/35. — *J. A.*, 53-246.)

1655. — Los abusos deshonestos por seducción y para satisfacer deseos propios con menores de edad, están comprendidos entre los actos de corrupción que prevé y reprime el artículo 125 del C. Penal. (C. C. C., Tribunal pleno, junio 25/26. — *Fallos*, 1-534.)

1656. — El artículo 125, destinado a legislar sobre menores de edad, no debe interpretarse como que ha comprendido en su último apartado el caso de la víctima mayor de edad, que se legisla en el artículo 126; al decir, en dicho apartado, "cualquiera que fuese la edad de la víctima", ha entendido referirse siempre a la víctima menor de edad. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 11/25. — *J. A.*, 53-830.)



ART. 126. — Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que, con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.

ANTECEDENTES: Ley 4189, art. 19, inciso "f". — Ley 9143 (Palacios), art. 1º, inciso "g" in fine. — Ley 12331, art. 17.

FUENTE: La misma del anterior.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal* 3-170. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-162. — JORGE EDUARDO COLL *La acción pública y el derecho penal*, (Buenos Aires, 1918) p. 413 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-289. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 233. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 216.

BIBLIOGRAFIA SOBRE LA LEY 12331

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-187 y 5-115. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *La prostitución y el delito - Tipificación e interpretación de la Ley 12331*. (La Ley, 20, sec. doc., p. 1). — E. R. AFTALIÓN, *Prostitución, proxenetismo y delito, - Estudio crítico de la jurisprudencia de los artículos 15 y 17 de la Ley 12331*, Buenos Aires, 1940. — LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, *Prostitución y casa de tolerancia*, (La Ley, 20-188.) — CARLOS COSSIO, *Confrontación de los diversos contenidos que se han propuesto como verdaderos para la ley 12331*, (La Ley, 20, sec. doc. 176).

JURISPRUDENCIA

1657. — No es punible el hecho incriminado al procesado de promover o facilitar en su provecho, la prostitución de su madre, si no media engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.

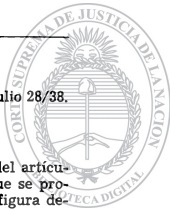
PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 172. — Se impondrá reclusión o prisión de seis a doce años, al que, con cualquier propósito, para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción; o si el autor es marido de la víctima o hace con ella vida marital.

Art. 173. — Se impondrá prisión de tres a seis años, al que se beneficie de la prostitución ajena, procurándose el lucro directamente de la persona que la ejerce o por intermedio de un tercero; o bien participando en la propiedad o administración de un tenorio.

Art. 174. — Se impondrá reclusión o prisión de diez a diez y ocho años, al que promoviere o facilitare la entrada de una mujer al territorio argentino a fin de que ejerza la prostitución. La misma sanción se impondrá al que promueva o facilite la salida del país, de una mujer, para que ejerza la prostitución en el extranjero.

El máximo de la sanción será de veinticinco años, si la víctima fuere menor de edad o si mediare engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad o cualquiera otro medio de coerción; o si el autor fuere el marido de la víctima o hiciere con ella vida marital.



lesquiera otro medio de coerción. (Cám. Apel. del Azul, julio 28/38. — *La Ley*, 12-620.)

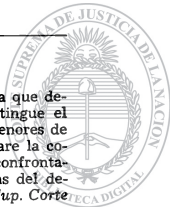
1658. — Para que se considere consumado el delito del artículo 126 del C. P., no es necesario que se alcance el fin que se propuso el autor, esto es, corromper o prostituir, porque la figura delictiva aludida consiste, en nuestro código, en promover la corrupción o prostitución, vale decir, de acuerdo al significado de “promover”; “adelantar una cosa procurando su logro”. (C. C. C., julio 25/39. — *La Ley*, 15-538.)

1659. — La calificación que corresponde al delito cometido por el procesado que, con el propósito de obligar a su concubina a cohabitar por dinero con otros hombres, le concierta una entrevista con un desconocido, citándolo a su domicilio, sin que en esta entrevista llegara a consumarse el acto carnal, por lo cual, al no volver el visitante varios días después, la castigó causándole lesiones, es la prevista en el artículo 126 del C. P., en concurso formal con el de lesiones, realizado como medio para alcanzar el propósito que guiaba al autor, rigiendo en el caso también los artículos 54 y 89 del citado código. (C. C. C., julio 25/39. — *La Ley*, 15-538.)

1660. — Para constituir el delito del art. 126 del C. P., basta la prueba de que el consentimiento de la mujer mayor de edad ha sido viciado por una influencia ajena que, obrando en su libre albedrío, impulse o facilite su corrupción o prostitución. También se incurre en el mismo delito cuando se obliga a la mujer, con medios coercitivos, a continuar ejerciendo la prostitución. (Sup. Corte de Tucumán, abril 25/36. — *J. A.*, 54-317.)

1661. — El caso de corrupción o prostitución mediante engaño, violencia, etc., que prevé el último apartado del artículo 125, se repite en el 126 cuando la víctima es mayor de edad; pero mientras en el primero las circunstancias enumeradas son agravantes calificativas del delito, en el artículo 126 son una condición del delito, con penalidad más atenuada. (Sup. Corte de Buenos Aires, octubre 11/35. — *J. A.*, 53-830.)

1662. — La mayor o menor edad de la víctima en el delito de



corrupción constituye una cuestión de capital importancia que debe ser planteada en la sentencia, desde que la ley distingue el caso del que promoviére o facilitare la prostitución de menores de edad (art. 125), de aquel en que se promoviére o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad (art. 126); confrontados ambos artículos, se observa que ni las características del delito ni la penalidad son las mismas en uno y otro caso. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 11/35. — *J. A.*, 53-830.)

1663. — El artículo 125, destinado a legislar sobre menores de edad, no debe interpretarse como que ha comprendido en su último apartado el caso de la víctima mayor de edad, que se legisla en el artículo 126; al decir en dicho apartado: "cualquiera que fuese la edad de la víctima", ha entendido referirse siempre a la víctima menor de edad, contemplando las circunstancias agravantes de engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción y las de ser el autor ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de la educación o guarda de la víctima, o hacer con ella vida marital. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, octubre 11/35. — *J. A.*, 53-830.)

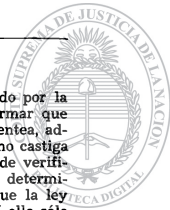
Sobre ley de profilaxis social

1664. — El simple ejercicio de la prostitución por una mujer, en forma individual e independiente, en un local, no cae bajo la represión de la ley 12.331. (*Sup. Corte de Tuc.*, marzo 15/41. — *Rep. Jurídico*, 4-1697.)

1665. — El simple ejercicio de la prostitución por la mujer, en forma individual e independiente, en un local, configura la infracción prevista y reprimida por el art. 17 de la ley 12331. (*C. C. C.*, en pleno, marzo 27/40. — *Rep. Jurid.*, 1-33.)

1666. — No incurre en infracción al artículo 17 de la ley 12331, la mujer que ejerce la prostitución, si no sostiene, regentea o administra la habitación donde se consuman los actos. (*C. C. C.*, diciembre 3/40. — *Rep. Jurid.*, 4-1697.)

1667. — Para algún tribunal pleno, por ajustada mayoría, la



ley castiga el simple ejercicio de la prostitución efectuado por la mujer en su propia casa. Es una herejía gramatical afirmar que tal hecho, con esa modalidad, significa que la mujer regentea, administra o sostiene una casa de tolerancia. La ley 12331 no castiga el simple ejercicio de la prostitución. Este comercio ha de verificarse en alguna parte. Ya habitualmente en algún sitio determinado, ya en los que cada ocasión pueda señalarle. Lo que la ley persigue es la tercera infame y el burdel denigrante. Y ello sólo en cuanto escapan al alcance de los arts. 125 y 126 del C. Penal. (Sup. Tribunal de Entre Ríos, julio 17/40. — Rep. Jurid., 2-557.)

1668. — Aun concediendo que la ley de profilaxis social haya querido terminar con esa suerte de lenocinio unipersonal dirigido por la propia prostituta, no es propio llamar así a la morada de la mujer, que sirve primordialmente como tal, a ella y a los suyos, que antes de lugar que sirve para comercio de su cuerpo —hecho inmoral pero no delictivo—, es el techo propio, la casa para vivir. No es delictivo, en consecuencia, el ejercicio de la prostitución, unipersonal e independientemente en la casa en que se vive. (Sup. Trib. de Entre Ríos, julio 17/40. — Rep. Jurid., 2-557.)

ART. 127. — *Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso carnal.*

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

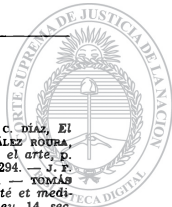
ANTECEDENTES: Ley 4189, art. 19, inciso "f". — Proyecto 1891, art. 152. — Proyecto 1906, art. 130.

FUENTE: El Proyecto de 1891, art. 152, tomado del art. 333 del Código Italiano.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 163. — *Se impondrá reclusión o prisión por seis a diez años, al que, por los medios o en las circunstancias establecidas en el artículo 160 sometiere a la víctima a actos sexuales distintos del acceso carnal o hiciera que ella los realice.*

Si a consecuencia del hecho resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las previstas en los artículos 128 y 129; o si el hecho se realizare por dos o más personas, el máximo de la sanción se elevará a veinticinco años.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-215. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3^a ed.), p. 223. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-119. — JOSÉ INGENIEROS, *La psicopatología en el arte*, p. 139. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-294. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, (Madrid 1888), 3-128. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 234. — P. CHAVIGNY, *Sexualité et médecine legale*, Paris 1939. — JOSÉ PECO, *Abuso deshonesto*, (*La Ley*, 14, sec. doc, p. 95). — MARIO D'ANNIELLO, *Injurias y actos de libidine violenta*, (*Annali di Diritto e Procedura Penale*. Turin 1939 (2^a parte) p. 63.

(Ver además la bibliografía del art. 125.)

JURISPRUDENCIA

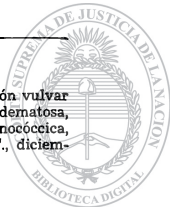
1169. — La corrupción de la víctima sólo permite la aplicación de esta disposición legal y no de la más grave del artículo 125 del mismo código. (C. C. C., Set. 5/39. — *La Ley*, 16-153.)

1670. — Los actos lascivos, inmorales y repugnantes cometidos por el procesado en la persona de una menor que contaba menos de doce años de edad, para satisfacer deseos propios, configuran el delito de ultraje al pudor y no el de corrupción, que sólo se vincula a la prostitución y al lenón. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, Set. 9/38. — *La Ley*, 12-96.)

1671. — El contagio venéreo en el abuso deshonesto, no encuadra en el artículo 202 del C. P., sino en el 127 en función del 119 inciso 1^o y en concurso ideal con el 89, debiendo aplicarse la regla del 54. (*Cámara Fed. de Bahía Blanca*, mayo 5/38. — *La Ley*, 12-292.)

1672. — La ley penal, al no agravar especialmente la represión del delito de abuso deshonesto, cuando se causa grave daño a la salud de la víctima, —como lo dispone expresamente para la violación y el estupro, resolviendo así los casos particulares de concurso que ofrecen estas situaciones—, libra la sanción a las normas generales del concurso formal o ideal de delitos. (C. C. C., diciembre 27/35. — *J. A.*, 53-244.)

1673. — No existe tentativa de violación sino lesiones y abuso deshonesto en concurso formal de delitos, si el reo niega toda intención de alcanzar con su acción el acceso carnal con la menor y los informes médicos no aluden a señales de violación reveladores



de aquel intento, sino a un estado inflamatorio de la región vulvar y perivulvar de la víctima, que está congestionada y edematosa, fluyendo por la vagina abundante pus de naturaleza gonocócica, enfermedad que también aqueja al procesado. (C. C. C., diciembre 27/35. — J. A., 53-244.)

1674. — Con el abuso deshonesto sólo se busca el simple desahogo de la sensualidad por otra vía que la de la cópula que no se verifica. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, mayo 26/35. — J. A., 49-681.)

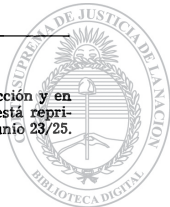
1675. — El delito de violación supone el “acceso carnal”, frase que considerada clara y castizamente, lleva a no considerar como tales los actos de molicie, los torpes desahogos, mientras no importen unión sexual, conjunción, penetración normal o anormal. Producido el coito, pero vulvar solamente, habrá abuso deshonesto y no violación. (C. Ap. de Rosario, diciembre de 1935. — *Rec. Ord.*, cuaderno 7 bis-96.)

1676. — Existe sólo el abuso si no se ha perseguido el fin de prostituir o depravar a la víctima, sino el de satisfacer el deseo sexual mediante actos libidinosos que no han llegado al acceso carnal. (*Sup. Corte de Buenos Aires*, marzo 26/35. — J. A., 49-681.)

1677. — El acto único y aislado de hacerse tocar el miembro viril por una menor de doce años, importa el delito de abuso deshonesto y no el de corrupción. (C. C. C., diciembre 21/34. — *Fallos*, 1-10.)

1678. — No corresponde calificar el hecho de tentativa de violación si la integridad del himen aleja la posibilidad del acceso carnal con la menor; sólo puede admitirse que ésta ha sido objeto de contacto deshonesto. (C. C. C., marzo 15/32. — J. A., 37-1128.)

1679. — Los abusos deshonestos con seducción y para satisfacer deseos propios con menores de edad, están comprendidos entre los actos de corrupción que prevé y reprime el artículo 125 del C. Penal. (C. C. C., Tribunal en pleno, junio 25/26. — *Fallos*, t. 1-534.)



1680. — El abuso deshonesto ejercido mediante seducción y en privado con un menor de edad mayor de doce años, no está reprimido por el Código Penal. (C. C. C., Tribunal en pleno, junio 23/25. — Fallos, t. 1-534.)

ART. 128. — *Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que publicare, fabricare o reproducere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular.*

ANTECEDENTES: Ley Nº 816, arts. 36, 97, inciso 3º y 141, inciso 1º. — Proyecto 1906, art. 133.

FUENTE: La Ley de Correos Nº 816, arts. citados y el Proyecto de 1906, artículo 133, tomado del Código Italiano (art. 339).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-228. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-242. — TOMÁS JOFRE, *El Código Penal de 1922*, p. 235. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-293. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, (Madrid 1888), 3-482. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 225.

JURISPRUDENCIA

1681. — En el delito de ultraje al pudor, el error no puede ser alegado, cuando el procesado se encargaba personalmente de preparar intercalaciones de películas con escenas obscenas. (C. C., julio 17/41. — *Rep. Jurid.*, 4-2002.)

1682. — Para la configuración del delito de ultraje al pudor, no se requiere un dolo especial: basta que haya conciencia de la criminalidad del acto, de la propia acción, y que, sin embargo, se haya obrado. (C. C. C., julio 17/41. — *Rep. Jurid.*, 4-2002.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 168. — Se impondrá prisión de tres meses a dos años o multa de cien a mil pesos, al que publicare, fabricare o reproducere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y al que los expusiere, distribuyere o hiciere circular.

Se impondrá prisión de uno a tres años, si el delito fuere cometido con fines de lucro o mediante transmisiones de radiotelefonía o en espectáculos teatrales o cinematográficos.



1683. — Encuadra en el artículo 128 y no en el 129 del C. Penal, la exhibición de películas cinematográficas, pues no altera la calificación del hecho la circunstancia de que la exposición de imágenes se haga en condiciones tales que produzca en el espectador la sensación del movimiento. (C. C. C., julio 17/41. — *Repositorio Jurídico*, 4-2002.)

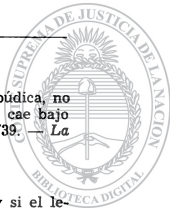
1684. — Procede condenar a prisión al administrador del espectáculo y al operador que pasaba cintas obscenas; no así al empresario de teatro que no intervenía en los programas, ni a la empleada que arreglaba las cintas, ya que el trabajo efectuado no basta para probar que conocían la naturaleza de las mismas ni el fin delictuoso a que se destinaban. (C. C. C., julio 25/41. — *Rep. Jurid.*, 6-2089.)

1685. — La obscenidad no es sinónimo de inmoralidad; lo obsceno está más allá de lo deshonesto, pues agrega a la deshonestidad, la licencia impúdica. El concepto propio de lo obsceno, es lo inundo y lúbrico; es, como se ha dicho, la pompa de la deshonestidad. (C. C. C., abril 14/39. — *La Ley*, 14-373.)

1686. — El libro incriminado no puede considerarse obsceno, pese al medio que describe y a las crudezas que contiene, cuando la descripción del ambiente es objetiva, y las escenas de sensualismo que relata, —episódicas en el libro— no le dan el carácter de obra obscena, desviándola del fin propuesto por el autor de fustigar el vicio y la depravación moral que atribuye a los protagonistas del mismo. (C. C. C., setiembre 20/38. — *La Ley*, 12-46.)

1687. — La obscenidad en los libros, escritos, imágenes u objetos es elemento constitutivo del delito del artículo 128 del C. P., quedando en consecuencia, fuera del alcance de la ley penal, todo lo que no sea groseramente impúdico, torpe lascivo, o lúbrico, aún cuando sea inmoral. (C. C. C., abril 14/39. — *La Ley*, 14-373.)

1688. — La revista, que si bien por sus escritos, figuras, dibujos y avisos, mucho más que humorística o picaresca, es licenciosa, torpe y dañosa a las buenas costumbres, pero sin que de su



lectura pueda deducirse que sea lúbrica, lujuriosa o impúdica, no alcanzando sus crudezas a calificarse como obscenas, no cae bajo la sanción del artículo 128 del C. P. (C. C. C., abril 14/39. — *La Ley*, 14-373.)

1689. — La ley penal, es de aplicación restrictiva, y si el legislador ha empleado el término "obsceno" en el artículo 128 del C. P., no es permitido al juzgador ampliarlo so pretexto de tutelar la moral y las buenas costumbres, que tienen su amparo en la jurisdicción administrativo - municipal. (C.C.C., abril 14/39. — *La Ley*, 14-373.)

1690. — La responsabilidad criminal del editor de un libro obsceno, es la misma que la del autor, si conocía la obra e intervino en todos los detalles de su impresión, arts. 45 y 128 C. P.). (C. C. C., setiembre 1/37. — *J. A.*, 59-970.)

1691. — El industrial dueño de un establecimiento tipográfico, está comprendido en la exención del artículo 49 del C. P., aunque estrictamente sean sus obreros quienes ejecutan el trabajo material que ordena el industrial, pues la ley usa el término "material" por oposición a "espiritual". La cooperación que pudiera prestar para la ejecución por medio de la prensa (en el caso ultraje al pudor) es, dentro de ese concepto, solo material, ejerciendo un acto de su industria consistente en la impresión, por medio de sus obreros, de los trabajos que se le encargan, operación que muchas veces puede ordenar sin leer los originales, apreciando su costo en grueso. (C. C. C., setiembre 1/37. — *J. A.*, 59-970.)

1692. — Comete el delito de ultraje al pudor el autor de un libro en el que las obscenidades vertidas no se justifican por razonables exigencias de orden literario o sanos propósitos de crítica social o institucional, y que al constituir simplemente diatribas contra todo lo que la sociedad argentina venera o respeta, revela intención única y deliberada, de herir los sentimientos del pudor público medio, que es lo que la ley protege. (C. C. C., setiembre 1/37. — *J. A.*, 59-970.)

1693. — Aunque lastime el pudor, no es punible la obra literaria que con finalidad artística descriptiva, contenga obscenida-



des limitadas estrictamente a la necesidad del tema: el elemento obsceno es entonces absorbido por un propósito legítimo o artístico. (C. C. C., setiembre 1/37. — J. A., 59-970.)

1694. — El autor de las ilustraciones —dibujos de tendencia izquierdistas que en sí no son obscenos— de un libro que se reputa ofensivo al pudor, es punible por la cooperación prestada para la ejecución del hecho (art. 46 C. P.) si por haber leído algunos capítulos de la obra, para hacer los dibujos, estaba enterado de la índole del libelo, y sabía que iba a ser publicado. (C. C. C., setiembre 1/37. — J. A., 59-970.)

1695. — La represión de la obscenidad que establece el artículo 128 del C. P., no comprende lo que no sea groseramente impúdico y torpe, aún cuando no sea moral. (C. C. C., abril 12/32. — J. A., 37-1509.)

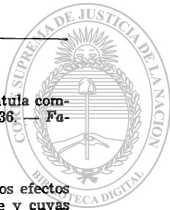
1696. — Es de carácter restringido el término “obsceno” a que se refiere el artículo 128 del C. P. y no puede ampliarse bajo un pretendido estudio del “sentimiento del pudor de nuestra sociedad, desde su origen hasta el presente”. (C. C. C., abril 12/32. — J. A., 37-1509.)

1697. — Una revista de género ligero y libre que contiene erudezas de dudoso buen gusto, si no alcanza a la obscenidad que pervierte, no cae bajo la sanción penal que reprime el ultraje al pudor. (C. C. C., abril 12/32. — J. A., 37-1509.)

1698. — No encuadra en el artículo 128 del C. P. un “film” que puede calificarse de libre y hasta inmoral, pero que en su conjunto no es obsceno. (C. C. C., marzo 2/36. — Fallos, 2-451.)

1699. — El acto aislado de exhibir tarjetas pornográficas a una menor de 11 años, no constituye delito. (C. C. C., diciembre 9/27. — Fallos, 2-453.)

1700. — Está exento de pena el grabador que por razón de su



oficio y dependencia, coopera a la fabricación de una carátula comprendida en el artículo 128 del C. P. (C. C. C., abril 30/36. — Fallos, 2-452.)

1701. — No puede ser considerada como obscena a los efectos de la represión penal, una revista ligera de género libre y cuyas crudezas ni pervierten ni excitan pasiones ni provocan malos instintos. (C. C. C., setiembre 2/24. — Fallos 2-450.)

1702. — El relato de episodios licenciosos aún cuando parezcan excesivos, no bastan por sí solo para calificar de obsceno al libro que los contiene, si de la finalidad ideológica del mismo, del género de la obra con relación a esos episodios, de la forma sincera de la expresión artística y de la propia posición del autor en las letras o en el arte, surge sin dificultad que se trata de una obra de ciencia, de estudio o de poesía. (C. C. C., mayo 15/23. — Fallos, 2-446.)

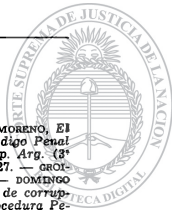
1703. — El artículo 128 del C. P. quiere proteger el pudor público y las buenas costumbres, defendiéndolo contra las excitaciones a las pasiones sexuales, a la lujuria y de las ideas de libertinaje que provocan los bajos instintos y los apetitos groseros. Una novela que tiene como único propósito describir escenas de bajo y crudo sensualismo, adquiere el carácter de un libro obsceno, de los previstos en la citada disposición y en consecuencia, los que lo hagan circular son pasibles de pena. (C. C. C., agosto 3/23. — Fallos, 2-449.)

ART. 129. — *Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos, el que en sitio público ejecutare o hiciere ejecutar por otro exhibiciones obscenas.*

La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieran lugar en sitio privado, pero expuesto a que sean vistos involuntariamente por terceros.

ANTECEDENTES: Proyecto de 1906, art. 134.

FUENTE: Proyecto de 1906, art. 134, tomado del Código Italiano (art. 338.)



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-240. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-299. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 236. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 226. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, 3-127. — GROSZARD Y GÓMEZ DE LA SERNA, *El Código Penal de 1870*, 5-113. — DOMINGO CORTESANI, *Procedimiento de oficio contra la libertad sexual y de corrupción de menores en un lugar público.* (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, Turin, julio 1939, p. 594).

JURISPRUDENCIA

1704. — Configura el delito de exhibiciones obscenas, la exhibición del miembro viril a una menor de edad, debiendo computarse como agravante la circunstancia de haberse cometido el hecho en pleno día y a la salida de las alumnas de una escuela. (C. C. C., junio 18/37. — *Rec. Ord. Cuad.* 7 bis-109.)

1705. — Para la existencia del delito previsto por el artículo 129 del C. P., es necesario que haya una exhibición, es decir, que se presente o se ponga de manifiesto algo, y que lo exhibido sea obsceno, quedando excluidos los gestos, las actitudes y las palabras. (C. C. C., agosto 9/32. — *Fallos*, 2-454.)

1706. — Si los actos de abuso deshonesto (con un mayor de doce años) se ejercen en público o en privado, pero expuestos a ser vistos por terceros, constituyen el delito de exhibiciones obscenas reprimidos con pena de multa. (C. C. C., Tribunal Pleno, junio 23/25. — *Fallos*, 1-534.)

CAPITULO IV

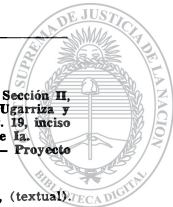
RAPTO

ART. 130. — *Sufrirá prisión de uno a cuatro años, el que con miras deshonestas sustrajere o retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude.*

La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

ART. 167. — *Se impondrá prisión de tres meses a dos años, al que, en sitio público o abierto y expuesto al público, cometa actos obscenos.*



ANTECEDENTES: Primer Párrafo. — Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, Capítulo IV, art. 1. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 278. — Código derogado, art. 136. — Ley 4189, art. 19, inciso "i". — Proyecto 1891, art. 156. — Proyecto 1906, art. 135, Parte Ia. Segundo Párrafo. — Código derogado, art. 133. — Proyecto 1891, art. 157. — Proyecto 1906, art. 135 "in fine".

FUENTE: El artículo 135, segunda parte, del Proyecto de 1906, (textual).

BIBLIOGRAFIA

BUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-248. — SEBASTIÁN SOLER *Derecho Penal Argentino*, 1-239 y 2-162. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 228. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-120. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-301 y 305. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 208. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-205. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 236. D. V. TEJERA, *El Rapto*, Madrid 1928. — TOMÁS JOFRÉ, *Para la existencia del delito de rapto, el delincuente debe tener miras deshonestas.* (J. A., 21-1055). — E. DÍAZ DE GUJARRO, *Delito de rapto.*, (J. A., 21-1055).

JURISPRUDENCIA

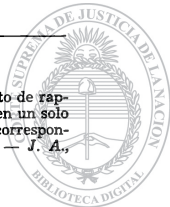
1707. — Si el procesado sacó a la damnificada de su domicilio, valido de abuso de confianza y la condujo en su automóvil a un lugar oscuro y apartado, donde se habían ocultado sus coprocesados, con el propósito de violarla, de lo cual desistieron ante la enérgica resistencia de la víctima que profirió fuertes gritos, existe delito consumado de rapto y no tentativa, ni menos desistimiento voluntario. (Cám. Fed. de Bahía Blanca, setiembre 11/40. — *La Ley*, 21-914.)

1708. — Para que exista el delito de rapto previsto por el artículo 130 del C. P., no es necesario que la víctima sea mujer honesta, pues ésta, aun careciendo de dicha cualidad, puede disponer libremente de sus relaciones sexuales, implicando delito las que se le exigieran o determinaran contra su voluntad. (C. C. C., julio 27/34. — *Fallos*, 2-316.)

1709. — Para la existencia del delito de rapto, es esencial la concurrencia de miras deshonestas. (Cám. Apel. del Azul., junio 7/32. — J. A., 38-1329.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 165. — Se impondrá prisión de dos a seis años, al que, con miras deshonestas, raptare a una persona o la privare de su libertad, empleando violencia, intimidación o engaño.



1710. — La interdependencia manifiesta entre el delito de rapto y el de violación, determina la necesidad de juzgarlos en un solo juicio a base del delito mayor con los agravantes que corresponden al delito menor. (*Corte Suprema*, diciembre 14/31. — *J. A.*, 37-16.)

ART. 131. — *Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.*

El culpable será reprimido con prisión de dos a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, Capítulo IV, art. 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 277 a 281. — Código derogado, art. 134 y 135. — Ley 4189, art. 19, inciso "i". — Proyecto 1891, art. 158. — Proyecto 1906, art. 136.

FUENTE: El Proyecto 1906 (art. 136), tomado del art. 158 del Proyecto 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-248. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-239 y 2-162. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-307. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 237. O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-120. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 228-9.

JURISPRUDENCIA

1711. — No es admisible que el rapto de la menor fuera con miras deshonestas, si el traslado del procesado a otra localidad fué consecuencia natural y continuada del concubinato en que vivían y éste expresó desde el primer momento su deseo de casarse con dicha menor. (*Cám. Apel. de Azul*, julio 7/32. — *J. A.*, 38-1329.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 168. — Se impondrá prisión de tres a diez años, si la víctima del delito previsto en el artículo anterior fuera una mujer casada o un menor no mayor de catorce años, si el menor tuviere más de catorce años y menos de diez y seis, habiendo prestado su consentimiento, se impondrá prisión de uno a tres años.



CAPITULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES

ART. 132. — *En los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituída a casa de sus padres o a otro lugar seguro.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, Capítulo V, art. 2º. — Código derogado, art. 142. — Proyecto 1891, art. 161. — Proyecto 1906, art. 137.

FUENTE: El Proyecto Tejedor, arts. citados. El agregado "abuso deshonesto" lo hizo la Comisión de Códigos del Senado.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-254. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-169. — JOSÉ PECO, *La Reforma Penal de 1917-20*, p. 490. — JULIAN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 212. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 238. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-123. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3º ed.), p. 233. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-205, 206.

JURISPRUDENCIA

1712. — La resolución correspondiente al pedido que se formula conforme al artículo 132 del C. P., debe ser dictada por la justicia en lo criminal sin dar intervención a otras jurisdicciones pues ello importaría crear de hecho una cuestión prejudicial, no establecida por la ley. (C. C. C., octubre 31/39. — *La Ley*, 16-716).

1713. — El consentimiento de la ofendida al ofrecimiento de contraer matrimonio formulado por el autor del hecho, a los fines de la aplicación del artículo 132 del C. P., no puede darse, ni puede ser pedido si aquella, según la pericia médica, es una alienada, demente en el sentido jurídico y su afección mental reviste la forma de imbecilidad, aún cuando la demencia no haya sido declarada en juicio. (C. C. C., octubre 31/39. — *La Ley*, 16-716).

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 175. — En los casos de violación, ultraje al pudor, estupro y rapto, si el autor se casare con la ofendida, el matrimonio extingue la acción y la sanción, aun para los demás partícipes en el delito.



ART. 133. — *Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título III, Capítulo V, art. 4. — Código derogado, art. 142. — Proyecto 1891, art. 162. — Proyecto 1906, art. 138.

Proyecto 1906, art. 138. — Proyecto Coll-Gómez: artículo 175. Verlo al pie del art. anterior).

FUENTE: El artículo 162 del Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-255. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 2-262. — O. GONZÁLEZ ROURA *Derecho Penal*, 3-127. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.*, (3ª ed.), p. 233. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-206. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 213. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-313. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 239. — J. F. PACHECO *El Código Penal Concordado*, (Madrid 1888), 3-160.

TITULO IV

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

CAPITULO I

MATRIMONIOS ILEGALES

ART. 134. — *Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeran matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.*

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título IV, arts. 1, 2 y 3. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, arts. 200 y 201. — Código derogado, arts. 143 y 145. — Ley 4189, art. 19, inciso "j" Nro. 1. — Proyecto 1891, art. 163. — Proyecto 1906, art. 139.

FUENTE: El artículo 139 del Proyecto de 1906.

CONCORDANCIAS: La Ley de Matrimonio Civil, arts. 9 y 84 (Código Civil arts. 166 y 241) ⁽¹⁾ — Sobre Cuestión Prejudicial, art. 1104 del C. Civil ⁽²⁾.



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-267, 274 y 280. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal Argentino*, 1-239. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 234. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-132. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-319. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 239. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-76. — Sobre cuestión prejudicial ver art. 1104 C. Civil y Eusebio Gómez obra citada, t. 1-280. — Sobre matrimonios contraídos en el extranjero, ver E. Gómez, obra citada, t. 1, Nos. 79 y 80. — LORENZO CARNELLI, *¿Es un delito instantáneo la bigamia?* (*La Ley*, 10-560). — ALFREDO B. DE SILVEYRA, *El casamiento nulo no exceptúa al culpable por la acción penal por el delito de violación, salvo prescripción*, (*La Ley*, 6, sec. rev. de rev., p. 1). — CARLOS ALBERTO LAZCANO, *Bigamia por segundo matrimonio en el extranjero*, (*J. A.*, 63-303). — DONATO GABRIELLI, *Si es configurable la tentativa de bigamia en el caso de matrimonio canónico, no transcripto por causas independientes de la voluntad del culpable*, (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, Turin, Enero 1940, p. 1). — ALBERTO PERONACCI, *Sobre el delito de bigamia, con particular referencia a la cuestión de la tentativa punible*. (*Annali di Diritto e Procedura Penale*, Turin, Diciembre 1940., p. 920).

JURISPRUDENCIA

1714. — Para que el delito de bigamia pueda considerarse consumado deben concurrir el elemento intencional y el elemento material. (*Cám. Federal de Bahía Blanca*, diciembre 21/38. — *La Ley*, 15-853.)

1715. — La falta de dolo hace desaparecer el delito de bigamia. (*Cám. Fed. de Bahía Blanca*, diciembre 21/38. — *La Ley*, 15-853.)

1716. — El delito del artículo 134 del C. P., consumado mediante un segundo matrimonio contraído en el extranjero por ar-

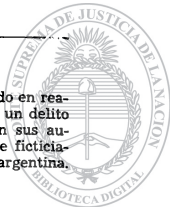
(1) Artículo 166 Código Civil: "Son impedimentos para el matrimonio... Incl- "so 5º: el matrimonio anterior mientras subsista".

(1) Artículo 241 Código Civil: "Es absolutamente nulo el matrimonio celebra- do con algunos de los impedimentos establecidos en los incisos 1º, 2º, 5º y 6º del artículo 166, y su nulidad puede ser demandada por el cónyuge que ignoró la "existencia del impedimento y por los que hubieran podido oponerse a la celebra- "ción del matrimonio".

(2) Artículo 1164 Código Civil: "Si la acción criminal dependiese de cuestiones "prejudiciales cuya decisión compete exclusivamente al juicio civil, no habrá con- "denación en el juicio criminal, antes que la sentencia civil hubiese pasado en cosa "juzgada. Las cuestiones prejudiciales serán únicamente las siguientes: 1º las que "versaren sobre la validez o nulidad de los matrimonios; 2º las que versaren sobre "la calificación de las quebras de los comerciantes".

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 176. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años, a los que contrajeran matrimonio, conociendo, ambos, la existencia de impedimento que causare su nul- dad absoluta.



gentinos domiciliados en nuestro país, se entiende cometido en realidad, en el territorio de la Nación, ya que se trataría de un delito a distancia que se comete en la República donde están sus autores, donde éstos realizan todos sus actos prolongándose ficticiamente hacia el extranjero solo para defraudar la ley argentina. (C. C. C., julio 5/38. — *La Ley*, 11-260.)

1717. — Existe delito de matrimonio ilegal si se trata de un divorcio y un segundo matrimonio realizado en el extranjero en fraude de la ley argentina, por argentinos, domiciliados y residentes en la Argentina que se sometieron ficticiamente a una jurisdicción extranjera sin poder invocar para tal sometimiento, ni su nacionalidad, ni su residencia, ni su domicilio ni su simple estada en ese país a título de viajeros. (C. C. C., julio 5/38. — *La Ley*, 11-260.)

1718. — Si alguno de los esposos contrae nuevas nupcias sin haberse disuelto las anteriores de acuerdo con la ley nacional, sea cual fuere el lugar en que lo haga, viola los preceptos que son de orden público y se hace pasible de las sanciones establecidas para asegurar su observancia. (C. C. C., julio 5/38. — *La Ley*, 11-260.)

1719. — La justicia argentina debe conocer en el delito de bigamia, aunque el segundo matrimonio se haya celebrado en el extranjero, si los delinquentes se radicaron después en territorio de la nación. (C. C. C., *Gaceta del Foro*, 76-189.)

1720. — No incurre en el delito de matrimonio ilegal el cónyuge casado en Buenos Aires y divorciado en Montevideo, por el acto de contraer nuevo vínculo matrimonial en esta última Ciudad. (C. C. C., julio 1/32. — *Fallos*, 2-145.)

1721. — Siendo el matrimonio ilegal un delito instantáneo que se consuma por el hecho de contraerlo, la prescripción corre desde el día en que se comete. (C. C. C., marzo 20/33. — *Fallos*, 2-240.)

1722. — En el delito de matrimonio ilegal por segundo matrimonio realizado en el extranjero, es de aplicación la ley argentina



y por lo tanto, corresponde a la jurisdicción de los tribunales nacionales. (C. C. C., Tribunal Pleno, agosto 28/28. — Fallos, 2-479.)

1723. — El doble matrimonio, constituye presunción de bigamia y la acción de nulidad, no impide el procesamiento, sino que difiere la condenación. (Corte Suprema. — Fallos, 138-274.)

1724. — El artículo 7 de la Ley 2393 de matrimonio, tiende a la defensa de la indisolubilidad del vínculo, que para la ley argentina es principio de orden público, sea que el segundo matrimonio se proyecte fuera o dentro de la república. (Cám. Civil Primera de la Capital, setiembre 12/32. — J. A., 39-372.)

1725. — La circunstancia de que la ley argentina prohíba casarse en la República a los cónyuges de un primer matrimonio celebrado en ella y disuelto en el extranjero no invalida el matrimonio celebrado también en el extranjero, con arreglo a las leyes del lugar en que se contrae. (C. C. C., julio 1/32. — J. A. 38-1237.)

1726. — Los Estados signatarios del Tratado de Montevideo, no están obligados a reconocer el matrimonio contraído con violación del impedimento de subsistencia de un matrimonio anterior, no disuelto legalmente. (Cám. Civil Primera de la Capital, setiembre 12/32. — J. A., 39-372.)

1727. — La disposición del artículo 13, letra "d" del Tratado de Montevideo según la cual la ley del domicilio matrimonial rige la disolución del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en que se celebró, está subordinado al artículo cuatro del protocolo adicional del Congreso Sud Americano que excluye la aplicación en unos de los Estados signatarios, de las leyes de los demás Estados que sean contrarias a sus instituciones de orden público. (C. C. C., julio 1/32. — J. A., 38-1237.)

Cuestión prejudicial ⁽¹⁾

1728. — Si la nulidad de matrimonio como cuestión prejudicial,

(1) En el Proyecto Coll-Gómez, en el caso de delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio, la prescripción de la acción se suspende y recién sigue su curso al terminarse la cuestión prejudicial (ver art. 108 del citado Proyecto).



no consta que se haya planteado en la jurisdicción civil, ni tampoco se alega seriamente sobre lo mismo en lo criminal, no puede ser tomada en cuenta como excepción en el juicio por bigamia. (*Sup. Corte de Tucumán*, junio 17/38. — *La Ley*, 11-346.)

1729. — Para que la acción civil de nulidad del primer matrimonio constituya una cuestión prejudicial en el proceso por bigamia, es necesario que se trate de una demanda seria y no de una maniobra en procura de burlar el procedimiento criminal. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, octubre 6/38. — *La Ley*, 12-651.)

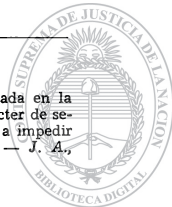
1730. — No existe otra cuestión prejudicial que la de nulidad de matrimonio en caso de bigamia y no corresponde hacer en esta materia, interpretaciones extensivas. (*C. C. C.*, octubre 31/39. — *La Ley*, 16-716.)

1731. — Si el acusado de bigamia dice que el matrimonio anterior es nulo y se defiende con esa alegación, pero no dice que haya entablado la demanda correspondiente ante la justicia civil, el tribunal de lo criminal no tiene por qué suspender la substanciación de la causa porque no hay contienda prejudicial. (*Cám. Com. y Crim. de Mendoza*, octubre 6/38. — *La Ley*, 12-651.)

1732. — No existe cuestión prejudicial en el proceso por bigamia si en manera alguna se ha alegado la nulidad del primer matrimonio en la forma de artículo previo. (*Cám. Apel. Com. y Crim. de Mendoza*, octubre 6/38. — *La Ley*, 12-651.)

1733. — La acción de nulidad del primer matrimonio, desprovista de seriedad y que importa una maniobra tendiente a burlar el procesamiento del querellado, no puede impedir la condena de éste por bigamia. (*C. C. C.*, noviembre 7/24. — *J. A.*, 14-938.)

1734. — Las cuestiones prejudiciales están expresamente determinadas en la ley y no es posible extender el número de ellas. (*Cám. Apel. de Azul*, octubre 28/34. — *J. A.*, 14-666.)



1735. — Para que sea admisible la excepción fundada en la existencia de una cuestión prejudicial, debe revestir carácter de seriedad y no aparecer como un simple pretexto dirigido a impedir o demorar la causa criminal. (C. C. C., marzo 2/26. — J. A., 19-539.)

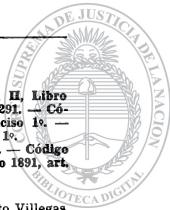
1736. — No hay otras cuestiones prejudiciales que las que la ley prevé expresamente: validez o nulidad del matrimonio, declaración de quiebra y divorcio por adulterio en este delito; la sobre filiación, en consecuencia, no es prejudicial. (Cám. Fed. Cap., Gaceta del Foro, 51-231.)

1737. — Si bien la nulidad del primer matrimonio en los delitos de matrimonio ilegal es una cuestión prejudicial que solo puede ser resuelta por la jurisdicción civil, no procede la suspensión del juicio criminal, si existe cosa juzgada al respecto. (C. C. C., Gaceta del Foro, 48-31).

1738. — 1º) No puede iniciarse la acción criminal por matrimonio ilegal, hallándose pendiente la cuestión prejudicial de nulidad del primer matrimonio, que sólo puede ser resuelta por la jurisdicción civil.

2º) Para suspender la acción criminal iniciada con posterioridad al planteamiento de la cuestión prejudicial de nulidad del primer matrimonio, debe oponerse esa cuestión por el acusado, en la forma y oportunidad establecidas para las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y el juez, al resolver su procedencia, debe paralizar la secuela del juicio, hasta que la jurisdicción civil se pronuncie sobre la nulidad alegada. (C. C. C., Tribunal en pleno, agosto 7/23. — Fallos, 2-479.)

-
- ART. 135.** — *Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:*
- 1º *el que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;*
 - 2º *el que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.*



ANTECEDENTES: Inciso 1º — Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título IV, art. 6. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 291. — Código derogado, arts. 145 y 149. — Proyecto 1891, art. 163, inciso 1º. — Proyecto 1906, inciso 1º, art. 140. — Ley 4189, art. 19, inciso "j" 1º. Inciso 2º. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 291. — Código derogado, art. 144. — Ley 4189, art. 195, inciso "j" 2º. — Proyecto 1891, art. 163, inciso 2º. — Proyecto 1906, art. 140, inciso 2º.

FUENTE: Inciso 1º; Proyectos 1891 y 1906. — Inciso 2º; Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 291.

CONCORDANCIAS: Cód. Civil arts. 166, 241 al 263 y 1104.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-275 y 286 y sgts. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-333 y sgts. — JULIAN AGUIRRE, *Código Penal de la Republica Argentina*, p. 219. — TOMÁS JOFRE EL Código Penal de 1922, p. 240. — RODOLFO MORENO, *La Ley Penal Argentina*, p. 176. — O. GONZALEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-132. — EMILIO C. DIAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 234. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-76.

JURISPRUDENCIA

1739. — Las aseveraciones del querellado por matrimonio ilegal de que la querellante conocía su estado anterior de casado y que por lo tanto se trataría del delito previsto en el artículo 134, cuya acción habría quedado prescripta por el transcurso del término fijado por el artículo 62, inciso 2º del mismo código, no quedan fehacientemente demostradas si entre las partes y los testigos existen discrepancias que requieren para la calificación legal del delito el control y la dilucidación en el juicio público y contradictorio del plenario, en cuyo caso no cabe hacer lugar al sobreseimiento. (C. C. C., octubre 11/38. — J. A., 65-523.)

1740. — Procede absolver a la procesada por el delito de bigamia, si no se demuestra por ningún indicio que se haya casado como se le imputa una vez y en cuanto a la otra, sólo ha sido individualizada por las impresiones digitales. (C. C. C., diciembre 2/30. — J. A., 34-1376.)

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 177. — Se impondrá prisión de dos a seis años al que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, oculta esta circunstancia al otro contrayente.

Art. 182. — Se impondrá prisión de dos a seis años al que, engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.



1741. — Debe computarse la agravante del vínculo en el homicidio cometido por el bigamo en la persona de su segunda esposa, si ésta había contraído matrimonio de buena fe. (C. C. C., diciembre 30/24. — Fallos 1-491.)

1742. — Cuando la acción de nulidad del primer matrimonio, importa una maniobra para burlar la acción de la justicia, no puede invocársela como previa a la condenación ni impedir que ésta se pronuncie. (C. C. C., noviembre 7/24. — Fallos, 2-144.)

ART. 136. — *El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores; sufrirá, en su caso, la pena que en ellos se determina.*

Si lo autorizase sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial por seis meses a dos años.

Sufrirá multa de cien a mil pesos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título IV, art. 5. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 292. — Código derogado, art. 147. — Ley 4189, art. 19, inciso "k". — Proyecto 1891, arts. 164 y 165. — Proyecto 1906, art. 141. — Ley 1565, art. 63.

FUENTE: El artículo 141 del Proyecto de 1906.

CONCORDANCIAS: Ley de matrimonio civil, artículos 106, 107, 108 y 110 (1).

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 178. — Se impondrá, según el caso, la sanción establecida en el artículo 176 o la que estatuye el artículo anterior, al oficial público que autorizare un matrimonio de los comprendidos en dichos artículos, si conocía la existencia del impedimento. Se le impondrá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Art. 179. — Se impondrá multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial por uno a dos años, al oficial público que autorizare un matrimonio existiendo impedimento que cause su nulidad absoluta, aunque ignore la existencia de tal impedimento, si su ignorancia proviene de culpa.

Art. 180. — Se impondrá multa de cien a mil pesos, al oficial público que, fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, autorice un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

(1) Ley de matrimonio civil, Art. 106. — "En la Capital de la República y territorios nacionales, desempeñarán las funciones que esta ley encomienda a los oficiales públicos, los jefes de las secciones del Registro del estado civil; las mismas funciones serán desempeñadas en las provincias donde hubiere Registro del estado civil, por los encargados de llevarlo, y donde no los hubiere, por la autoridad judicial del distrito".

Artículo 107. — "Será castigado con prisión de uno a tres meses, con pérdida



BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-287. — SEBASTIÁN SOLER, *Derecho Penal*, Argentino, 2-94 y 372. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-337. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 218. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-132. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.) p. 235.

ART. 137. — *En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber (1) que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.*

ANTECEDENTES: Proyecto 1891, art. 165. — Proyecto 1906, art. 142. — Ley 4189, art. 19, inciso "k" in fine.

FUENTE: El artículo 165, apartado 2º del Proyecto de 1891.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-289. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-341. — TOMÁS JOFRÉ, *El Código Penal de 1922*, p. 241. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-132. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 239.

CAPITULO II

SUPRESION O SUPOSICION DEL ESTADO CIVIL

ART. 138. — *Se aplicará prisión de seis meses a dos años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro, con el propósito de causar perjuicio.*

(1) Artículo 127 del Código Civil. — "Son menores impúberes los que aún no tuviesen la edad de catorce años cumplidos y adultos los que fuesen de esta edad hasta los veintidós años cumplidos."

(1) Artículo 107 del Código Civil. — "Será castigado con prisión de uno a tres meses con pérdida del oficio, el oficial público que casare a un menor sin el consentimiento de sus padres, tutores o curadores o del judicial en su defecto, y con prisión de uno a dos años y con multa de cien a quinientos pesos, aquel que celebre un matrimonio sabiendo que existe impedimento que puede ser causa de la nulidad del acto."

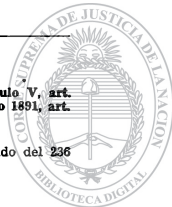
PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 181. — Se impondrá multa de cien a mil pesos, al representante legal de un menor impúber que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.

"del oficio, el oficial público que casare a un menor sin el consentimiento de sus padres, tutores o curadores o del judicial en su defecto, y con prisión de uno a dos años y con multa de cien a quinientos pesos aquel que celebre un matrimonio sabiendo que existe un impedimento que puede ser causa de la nulidad del acto."

Artículo 108. — "Incurrirá en la multa de cien a quinientos pesos el oficial del Registro Civil que contravenga cualquiera de las otras disposiciones de la presente ley."

Artículo 110. — "Los ministros, pastores y sacerdotes de cualquier religión o



ANTECEDENTES: Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título V, art. 4. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 298. — Proyecto 1891, art. 155. — Proyecto 1906, art. 143. — Código derogado, art. 153.

FUENTE: El artículo 155 del Proyecto de 1891, que fué tomado del 236 del Código Holandés.

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-292. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-346. — RODOLFO RIVAROLA, *Derecho Penal Argentino*, 2-404. — JULIÁN AGUIRRE, *Código Penal de la República Argentina*, p. 221. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-149. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 248. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 1-32, 143 y 2-250.

JURISPRUDENCIA

1743. — El hecho imputado al procesado consiste en haber reconocido falsamente como hija suya a una menor en el acto de que instruye la partida del Registro Civil agregada, aún cuando pueda encuadrar en los artículos 138 y 292, in fine del C. P., es uno solo, constituyendo una unidad juridico-penal, de modo que no procede sobreseer en lo que se refiere a una sola de las posibles calificaciones legales, mientras que el proceso sigue su curso respecto de la otra que pudiera corresponderle. (C. C. C., marzo 14/41. — *La Ley*, 22-65.)

1744. — La adulteración de un pasaporte mediante la substitución de la fotografía de su dueño por la del procesado, si bien importa falsificación de instrumento público, no configura el delito de suposición de estado civil, porque esa adulteración, no ha hecho incierto, ni alterado ni suprimido el estado civil del titular del documento, desde que el estado civil solo se acredita en la forma establecida por el Código Civil. (C. C. C., abril 16/37. — *J. A.*, 58-277.)

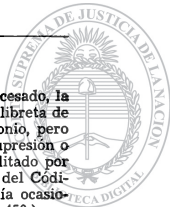
1745. — La cédula de identidad es un simple documento policial destinado a probar la identidad individual de las personas, no su estado civil ni su situación de familia. (*Cám. Fed. La Plata*, octubre 30/36. — *J. A.*, 56-73.)

PROYECTO COLL-GÓMEZ (1937)

Art. 183. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro, con el propósito de causar perjuicio.

"secta, que procedieran a la celebración de un matrimonio religioso sin tener a la vista el acta de la celebración del matrimonio, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por el artículo 147 del código penal y si desempeñasen oficios públicos, serán separados de él."

(Ver ley de Registro Civil en los Territorios Nacionales N° 3703 y 3989).



1746. — Si para obtener la entrega de un menor procesado, la acusada declaró falsamente ser la madre exhibiendo una “libreta de familia” adulterada, incurre en el delito de falso testimonio, pero no en el de falsificación de documento público, ni el de supresión o suposición de estado civil, pues éste sólo puede ser acreditado por los medios y en la forma establecidas por la ley, (art. 80 del Código Civil) y además la adulteración de la libreta no podía ocasionar perjuicio en el caso. (C. C. C., nov. 2/34. — Fallos, 1-450.)

1747.— 1° - No incurre en el delito de suposición de estado civil, el que obtiene una cédula de identidad, falseando la verdad en cuanto al estado civil de la persona identificada;

2° - Únicamente por los medios y en la forma establecida por el Código Civil, se prueba el estado civil y no por la cédula policial de identidad, que no tiene más fin que identificar a las personas. (C. C. C., set. 23/32. — Fallos, 2-423).

1748. — Inscribir en el Registro Civil como hijo propio a quien no lo es, significa cometer los delitos de suposición de estado civil, y falsificación de documentos públicos. (C. C. C., Nov. 17-1933. — Rec. Ord. Cuad. 7 bis-29).

ART. 139. — *Se impondrá prisión de uno a cuatro años:*

- 1° *A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le corresponden y al médico o partera que cooperare a la ejecución del delito;*
- 2° *Al que por medio de exposición, de ocultación o de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterar o suprimiere el estado civil de un menor de diez años.*

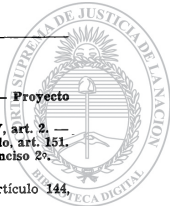
ANTECEDENTES: Inciso 1°. — Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título V, art. 1. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 295. —

PROYECTO COLL-GOMEZ (1937)

Art. 184. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan.

Al médico o partera que participare en este delito se le impondrá, además de la sanción establecida, la inhabilitación especial por doble tiempo al de la condena.

Art. 185. — Se impondrá prisión de dos a seis años, al que, por medio de exposición, ocultación u otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterar o suprimiere el estado civil de un menor de menos de doce años.



Código derogado, art. 150. — Proyecto 1891, art. 16, inciso 1º. — Proyecto 1906, art. 144, inciso 1º.

I n c i s o 2º. — Proyecto Tejedor, Sección II, Libro I, Título V, art. 2. — Proyecto Villegas, Ugarriza y García, art. 296. — Código derogado, art. 151. — Proyecto 1891, art. 167, inciso 2º. — Proyecto 1906, art. 144, inciso 2º.

FUENTE: Del inciso 1º: Proyecto Tejedor; del inciso 2º, el artículo 144, inciso 2º, del Proyecto de 1906 .

CONCORDANCIAS: Código Civil, arts. 65, 66 y 67 (1).

BIBLIOGRAFIA

EUSEBIO CÓMEZ, *Tratado de Derecho Penal*, 3-292. — RODOLFO MORENO, *El Código Penal y sus Antecedentes*, 4-350 y sgts. — JULIÁN AGUIRRE, *El Código Penal de 1922*, p. 220. — J. F. PACHECO, *El Código Penal Concordado*, 3-210. — EMILIO C. DÍAZ, *El Código Penal para la Rep. Arg.* (3ª ed.), p. 241. — O. GONZÁLEZ ROURA, *Derecho Penal*, 3-149 y sgts. — J. C. RAFFO DE LA RETA, *Código Penal Argentino*, 2-251.

JURISPRUDENCIA

1749. — La mujer que hace insertar declaraciones falsas en una partida del Registro Civil respecto al nombre de un niño que le había sido confiado para su crianza, atribuyéndose también falsamente su maternidad, comete los delitos de falsedad ideológica en instrumento público, (art. 293) y alteración del estado civil (art. 139) y la pena debe graduarse dentro de la fijada para el delito de pena mayor (art. 54 código citado). (C C. C., noviembre 30/37. — J. A., 60-635).

1750. — Comprobado que la procesada en complicidad con la partera simuló un embarazo y parto, e inscribió como suyo al niño que se le había dado a criar, procede condenarla lo mismo que a su

Artículo 65 del Código Civil: "Se tendrá por reconocido el embarazo de la madre, por la simple declaración de ella o del marido o de otras partes interesadas".

Artículo 66 del Código Civil: "Son partes interesadas para este fin: 1º Los parientes en general del no nacido y todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuera concebido en tiempo propio; 2º Los acreedores de la herencia; 3º El Ministerio de Menores".

Art. 67 del Código Civil: "Las partes interesadas aunque teman suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo, sin embargo, el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la filiación del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del nacimiento".



cómplice, a dos años de prisión, pena que debe quedar en suspenso de acuerdo a los artículos 26 y 27 del C. P. (C. C. C., *Gaceta del Foro*, 58-201).

1751. — Tratándose del delito de supresión y suposición del estado civil, la cuestión sobre filiación no es prejudicial. (C. C. C., julio 15/2. — *Fallos*, 1-382).

1752. — Cuando en una partida de nacimiento se hace constar una declaración falsa sobre el estado civil, debe aplicarse la penalidad correspondiente al delito de falsedad, por ser más grave que el de suposición del estado civil. (C. C. C., *Nov.* 30-23. — *Fallos*, 1-414).

**Este libro se terminó de
imprimir en Mayo de
1942, en los talleres
gráficos "La Mundial"
Sarmiento 3149. Bs. As.**

